

9.625

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO



Handwritten signature

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA
SECRETARIA GENERAL
Ley 1437/2011

DESPACHO N° 003

MAGISTRADO:
DR. MARIBEL MENDOZA JIMÉNEZ

PRIMERA INSTANCIA

Accionante: OBRESAN

Accionado: NACIÓN – MINISTERIO DE
JUSTICIA Y OTROS

65991

REPARACIÓN DIRECTA

CUADERNO No. 2

RADICACIÓN: 47-001-2333-000-2014-00241-00

569

CUARTO: CONDÉNASE a la Universidad del Magdalena al pago de la suma de **DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS** (\$17.565.510,72), por haber incurrido en mora en el pago de la totalidad del valor del contrato.

QUINTO: CONDÉNASE a la Universidad del Magdalena al pago de la suma de **DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVENTA Y CINCO PESOS** (\$244.419.095,00), por concepto de mayor permanencia en obra, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este laudo.

SEXTO: Las anteriores sumas de dinero serán pagadas a la sociedad **J.P.G. & CIA S.A., GERMAN VILLANUEVA CALDERON y RICARDO LUIS CANABAL GUZMAN**, integrantes de la **UNION TEMPORAL OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA -OBRESAN-**; y causarán intereses comerciales moratorios a partir del día siguiente de la fecha de ejecutoria del laudo.

SEPTIMO: CONDÉNASE a la Universidad del Magdalena al pago de la suma de **SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS** (\$62.511.880,00), por concepto de costas del proceso.

OCTAVO: CONDÉNASE a la Universidad del Magdalena al pago de la suma de **VEINTISEIS MILLONES DE PESOS** (\$26.000.000,00), por concepto de Agencias en Derecho, a favor de la parte Convocante.

NOVENO: Niéganse las demás pretensiones de la demanda.

DECIMO: Para el cumplimiento de la sentencia expídanse copias con destino a las partes según las previsiones del artículo 115 del C.P.C. y con la observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del decreto 359 de 22 de febrero de 1995.

DECIMO PRIMERO: En firme este Laudo, protocolícese por el Presidente del Tribunal en una Notaria de esta ciudad, de conformidad con el artículo 159 del decreto 1818 de 1998, con cargo al rubro de protocolizaciones, efecto para el cual se previene a las partes sobre la obligación de cubrir lo que faltare, si la suma decretada y recibida para este fin resultare insuficiente o si resultare mayor se devolverá lo pertinente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.


DIANA BOVEA MENDINUETA

Presidente


JUAN A. POLO FIGUEROA

Arbitro


MIGUEL POLO CAMPO

Arbitro


GUILLERMO ANTONIO DE LOS RIOS BERMUDEZ

Secretario

Santa Marta, D. T. C. H.,

Doctores

DIANA PATRICIA BOVEA MENDINUETA – PRESIDENTA

JUAN ALBERTO POLO FIGUEROA

MIGUEL ÁNGEL POLO CAMPO

Árbitros

GULLERMO ANTONIS DE LOS RÍOS BERMÚDEZ

Secretario

TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO UNIÓN TEMPORAL OBRESÁN Y OTROS

CONTRA UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA

CENTRO DE ARBITRAJE, CONCILIACIÓN Y AMIGABLE COMPOSICIÓN

CÁMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA

Avenida El Libertador No. 13 – 94, Piso 2

Tel.: (5) 4319682, Fax: 4214777

Ciudad.

REFERENCIA: TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO DE UNIÓN TEMPORAL OBRESAN - OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA -, J.P.G. & CIA S.A., GERMÁN VILLANUEVA CALDERÓN Y RICARDO LUIS CANABAL GUZMÁN CONTRA LA UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA.

ASUNTO: SOLICITUD ADICIÓN O COMPLEMENTACIÓN LAUDO ARBITRAL.

Respetados doctores:

GABRIEL FRANCISCO GONZÁLEZ BARRAZA, en mi condición de apoderado judicial reconocido de **CADA UNO DE LOS MIEMBROS** de la **UNIÓN TEMPORAL OBRESÁN – OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA**, y dentro del término legal, me permito solicitar a ustedes, con el respeto acostumbrado, la **ADICIÓN o COMPLEMENTACIÓN** del **LAUDO ARBITRAL** proferido el pasado 22 de agosto de 2011, con el fin de precaver cualquier circunstancia que condujere a su anulación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 160 del Decreto 1818 de 1998 (Art. 36 Decreto 2279 de 1989) y 307, 308 y 311 del C. P. C., así:

De lo dispuesto en el artículo 307 del C. P. C. se extrae que la condena debe ser integral, es decir, contener el pago de frutos, intereses, perjuicios u otra cosa semejante, lo cual es tan perentorio que, incluso, faculta al juez de segunda instancia (en los casos en que ésta proceda, claro está) a que extienda "la condena en concreto omitida total o parcialmente por el inferior, o para extender la condena en concreto hasta la fecha de la sentencia de segunda instancia, aun cuando la parte beneficiada con ella no hubiere apelado".

En consecuencia, el artículo 308 del señalado código otorga a la parte favorecida con la sentencia la posibilidad de solicitar el pronunciamiento de la sentencia complementaria, como en efecto se hace a través de este memorial.

En el mismo sentido, el artículo 311 dispone que "cuando la sentencia omita la resolución de cualquiera de los extremos de la litis, o de cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de sentencia complementaria, dentro del término de ejecución, de oficio o a solicitud de parte presentada dentro del mismo término...".

Con fundamento en los mencionados artículos del C. P. C., el artículo 160 del Decreto 1818 de 1998 (Art. 36 del Decreto 2279 de 1989) permite que el laudo arbitral sea sujeto de la posibilidad de adicionarse o complementarse, por oficio o a petición de parte.

Es así como procedo a solicitar que se adicione la CONDENA impuesta en lo siguiente:

1. La pretensión OCTAVA de la demanda correspondió a lo siguiente: "Que se actualice el valor de la condena a la fecha del pronunciamiento del respectivo Laudo Arbitral, con base en la variación del índice de precios al consumidor, para el periodo comprendido entre la fecha en que se presentó el desequilibrio y la fecha en que se produzca el pago efectivo de la condena".

Si bien en el Laudo se dice en el numeral NOVENO de su parte resolutive que se niegan las demás pretensiones de la demanda, lo cierto es que en la parte motiva no se hace referencia alguna a las pretensiones OCTAVA (ACTUALIZACIÓN) y NOVENA (INTERESES), lo que para todos los efectos equivaldría a que se dejaron de decidir aspectos relacionados con la litis, pues es claro que un requisito esencial de toda decisión judicial es su motivación, luego al no existir ésta es como si sobre ese aspecto sin motivación o fundamento no se hubiere decidido.

No sobra aclarar que la suma de \$244.419.095,00 a la que se condenó a la UNIVERSIDAD por concepto de mayor permanencia en obra, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva, y que corresponde exactamente al cálculo hecho por el perito contable en su dictamen, NO contiene la actualización respectiva.

Tampoco sobra mencionar que la única suma que fue objeto de actualización, pero hasta cierto momento, fue la correspondiente a las obras no legalizadas, sin que se señalara la razón por la cual sobre esta suma sí procede la actualización y sobre las otras no.

Por todo lo anterior, pido a ustedes complementar la sentencia para decidir sobre la actualización de las condenas impuestas.

2. En el mismo sentido de lo argumentado en el punto anterior, me permito citar a ~~estas~~ el contenido de la pretensión **NOVENA**, así: "**NOVENA**: Que como consecuencia de las anteriores declaraciones y sobre todas ellas se condene a **LA UNIVERSIDAD** a pagar a favor de **LOS CONVOCANTES** los intereses comerciales y moratorios a la máxima tasa legal permitida conforme lo dispuesto en el Código de Comercio en su artículo 884, vigente al momento en que se efectúe el pago, sobre el valor histórico actualizado, hasta la fecha en que se haga efectivo el pago".

Siendo, al igual que la pretensión **OCTAVA**, un aspecto esencial del conflicto trabado ante el H. Tribunal de Arbitramento, y un derecho fundamentado claramente en el artículo 307, ya citado, del C. P. C., debió haberse decidido en el laudo, indicando las razones o fundamentos por los cuales se negaba, si ese hubiera sido el querer de los árbitros.

A este respecto, vale decir que la única suma a la que se le calcularon intereses fue sobre la mora en el pago de la totalidad del valor del contrato, suma que corresponde exclusivamente a lo calculado por el perito contable en su dictamen para la mora en el pago de las facturas por avance de obra (pues los intereses de mora de todas las sumas de dinero por la que se condenó a la **UNIVERSIDAD**, superan grandemente el guarismo de \$17.565.510,72), pero dicho cálculo corresponde hasta cierta época, como señalaré más adelante.

De tal manera que, al no haberse referido a este aspecto en específico, es decir condenar en intereses sobre todos los montos a los que se condene a la **UNIVERSIDAD**, solicito sea adicionado el laudo para proceder a la condena en intereses de conformidad con lo solicitado en **PRETENSIÓN NOVENA** la demanda.

3. En el numeral **TERCERO** de la parte resolutive del Laudo, se condenó a la **UNIVERSIDAD** "al pago indexado de la suma de **SESENTA Y SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS (\$67.192.800,00)**, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este laudo" por concepto de obras pendientes por legalizar, pero resulta que el cálculo corresponde a la valoración hecha en el dictamen del perito contable, el cual tiene fecha de **28 DE FEBRERO DE 2011**, lo que quiere decir que el cálculo de la indexación o actualización por este concepto **NO** incluye el lapso comprendido entre la presentación del dictamen y la fecha del Laudo.

Por esta razón, solicito que se adicione el laudo para actualizar el monto de la condena por este concepto hasta la fecha del mismo, como manda la ley y de conformidad con lo pedido en la demanda.

4. En el numeral **CUARTO** de la parte resolutive del Laudo, se condenó a la **UNIVERSIDAD** "al pago de la suma de **DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS**

SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS (\$17.565.510,72), por haber incurrido en mora en el pago de la totalidad del valor del contrato", no obstante, este cálculo fue hecho hasta el día 28 de FEBRERO DE 2011, fecha del dictamen pericial contable, pero no hasta el día de ejecutoria del Laudo Arbitral, que es lo que corresponde según la ley y lo pedido en la demanda.

Por esta razón, solicito se apliquen los intereses por este concepto hasta la fecha del Laudo.

Así las cosas, por ser procedente y ajustado a la ley y al Derecho, solicito se proceda a ADICIONAR o COMPLEMENTAR el Laudo de 22 de agosto de 2011 de conformidad con lo solicitado en el presente escrito.

Atentamente,

GABRIEL FRANCISCO GONZÁLEZ BARRAZA
C. C. No. 12.609.489
T. P. No. 41.964 Minjusticia

ACTA No. 27

REF: TRIBUNAL DE ARBITRAMIENTO DE J.P.G. & CIA S.A., GERMÁN VILLANUEVA CALDERÓN y RICARDO LUIS CANABAL GUZMAN, INTEGRANTES DE LA UNIÓN TEMPORAL OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA -OBRESAN- con la UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA.

En Santa Marta, a los treinta y uno (31) días del mes de Agosto del año dos mil once (2011), siendo las ocho de la mañana (8:00 a.m.), en el Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Santa Marta, se reunieron por derecho propio los árbitros **DIANA PATRICIA BOVEA MENDINUETA**, quien Preside, **JUAN ALBERTO POLO FIGUEROA**, arbitro, **MIGUEL ANGEL POLO CAMPO**, arbitro, y **GUILLERMO DE LOS RIOS BERMUDEZ**, Secretario.

Acto seguido el Secretario informa que el día 29 de Agosto de 2011, el Apoderado Judicial de los Convocantes, presentó escrito mediante el cual pretende que se adicione o complemente el laudo de fecha el 22 de Agosto de 2011, proferido en el trámite arbitral de la referencia. Así mismo, indica que la Convocada a través de memorial presentado el 29 de Agosto de la presente anualidad, interpuso Recurso de Anulación del Laudo antes mencionado.

Debido a lo anterior, el Tribunal de Arbitramento profiere el siguiente Auto.

AUTO No. 1

En atención a que la parte demandante mediante su apoderado solicita en el término establecido en el artículo 160 del Decreto 1818 de 1998, la adición o complementación del laudo, este Tribunal de Arbitramento, procederá a señalar fecha y hora para decidir dicha solicitud.

En relación al Recurso de Anulación interpuesto en el término de Ley por la parte Convocada, se le dará el trámite correspondiente una vez se resuelva la solicitud de adición o complementación del laudo, requerida por la parte Convocante.

En consecuencia este Tribunal de Arbitramento,

RESUELVE:

PRIMERO: Señálese el día 7 de Septiembre de 2011, a las 4:30 p.m., para correr traslado a la parte demandada, de la solicitud de adición o complementación del Laudo Arbitral proferido el 22 de Agosto de 2011.

SEGUNDO: Por secretaria infórmese a las partes lo ordenado en este Auto.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE:

No habiendo otro asunto que tratar se finaliza la presente audiencia, para constancia se firma, por quienes asistieron.


DIANA RIVERA MENDINUETA
Presidente


JUAN POLO FIGUEROA
Arbitro


MIGUEL POLO CAMPO
Arbitro


GUILLERMO ANTONIS DE LOS RIOS BERMUDEZ
Secretario

Santa Marta, 5 de Septiembre de 2011.

Doctor

GABRIEL GONZALEZ BARRAZA.

E.

S.

M.

REFERENCIA: TRIBUNAL DE ARBITRAMIENTO DE GERMAN VILLANUEVA CALDERON Y OTROS CON LA UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA.

Mediante el presente escrito concuro ante usted, muy comedidamente, para hacerle entrega de la copia del acta N° 27 de fecha 31 de agosto de 2011 y para informarle que el tribunal señalo día 7 de septiembre de 2011 a la 4:30 p.m., para realizar audiencia en la cual se correrá traslado a la parte demandada de la solicitud de adición y complementación del laudo.

ANEXO: Copia del Acta Número 27 de fecha 31 de agosto de 2011.

Atentamente



GUILLERMO DE LOS RÍOS BERMUDES

Secretario Del Tribunal de Arbitramento.



Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición

ACTA No. 28

REF: TRIBUNAL DE ARBITRAMIENTO DE J.P.G. & CIA S.A., GERMÁN VILLANUEVA CALDERÓN y RICARDO LUIS CANABAL GUZMAN, INTEGRANTES DE LA UNION TEMPORAL OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA -OBRASAN- con UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA.

En Santa Marta, a los siete (7) días del mes de Septiembre del año dos mil once (2011), siendo las cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.), en el Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Santa Marta sede del Tribunal, se reunieron los árbitros **DIANA PATRICIA BOVEA MENDINUETA**, quien Preside, **JUAN ALBERTO POLO FIGUEROA**, arbitro, **MIGUEL ANGEL POLO CAMPO**, arbitro, y **GUILLERMO DE LOS RIOS BERMUDEZ**, Secretario, de conformidad con el Auto No. 1 del Acta No. 27 de fecha 31 de Agosto de 2011, a efectos de correr traslado en audiencia de la solicitud de adición o complementación del laudo arbitral, traslado que se surtirá durante el término de la misma audiencia.

Se deja constancia que se hizo presente en representación de la parte convocante, el Doctor **GABRIEL FRANCISCO GONZÁLEZ BARRAZA**.

El Tribunal en pleno, con su respectivo Secretario, procede a dar inicio a la audiencia.

Acto seguido, el Tribunal profiere el siguiente Auto.

AUTO No. 1

Debido a que la parte convocada y el Ministerio Público no se hicieron presentes a la audiencia, estando debidamente notificadas, se da por surtida la presente diligencia; por consiguiente este Tribunal procede a señalar fecha para decidir sobre dicha solicitud.

En mérito de lo anterior, este Tribunal,

Avenida del Libertador No. 13-94
Teléfonos: 4230828 - 4232852 Ext. 131 y 127 - 4319682
Fax: (095) 4214777
Santa Marta D.T. - Colombia

www.ccsml.org.co



Certificado IC 2146 - 1

RESUELVE:

PRIMERO: Señalase como fecha para la decisión que en derecho corresponda en relación a la solicitud de adición o complementación del Laudo Arbitral, incoada por la parte convocante, el día catorce (14) de Septiembre de 2011, a la hora de las 5:00 p.m.

SEGUNDO: Autorízese para que por secretaria se comuniquen de esta decisión a la parte convocada y al Ministerio Público.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE:

La presente decisión queda notificada en estrado.

Se deja constancia que las partes no interpusieron recursos alguno contra el presente auto.

No habiendo otro asunto que tratar se finaliza la presente audiencia, para constancia se firma, por quienes intervinieron.


DIANA BOYA MENDINUETA
Presidente


JUAN POLO FIGUEROA
Arbitro


MIGUEL POLO CAMPO
Arbitro


GABRIEL SÁNCHEZ ESTRAZA
Apoderado Convocante


GUILLERMO ANTONIO DE LOS RÍOS BERMÚDEZ
Secretario



Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición

ACTA No. 29

REF: TRIBUNAL DE ARBITRAMIENTO DE J.P.G. & CIA S.A., GERMÁN VILLANUEVA CALDERÓN y RICARDO LUIS CANABAL GUZMAN, INTEGRANTES DE LA UNION TEMPORAL OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA -OBRESAN- con UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA.

En Santa Marta, a los catorce (14) días del mes de Septiembre del año dos mil once (2011), siendo las cinco de la tarde (5:00 p.m.), procede el Tribunal de Arbitramento conformado por los árbitros **DIANA PATRICIA BOVEA MENDINUETA**, quien Preside, **JUAN ALBERTO POLO FIGUEROA**, arbitro, **MIGUEL ANGEL POLO CAMPO**, arbitro, de conformidad con el Auto No. 1 del Acta No. 28 de fecha 7 de Septiembre del 2011, a pronunciarse en torno a la solicitud de la Adición o complementación del Laudo que puso fin al presente proceso arbitral, solicitado por la parte demandante el día 29 de Agosto de 2011, el cual resolvió:

PRIMERO: DECLÁRESE no probadas las excepciones de caducidad y pago de lo no debido, propuestas por la parte convocada.

SEGUNDO: DECLÁRESE sin fundamento la objeción por error grave presentada por la parte convocante, contra el dictamen pericial contable de fecha 28 de febrero de 2011, emitido por el Contador Público **ROBERTO ROBLES CASTAÑEDA**.

TERCERO: CONDÉNASE a la Universidad del Magdalena por concepto de obras pendientes por legalizar, al pago indexado de la suma de **SESENTA Y SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS (\$67.192.800,00)**, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este laudo.

CUARTO: CONDÉNASE a la Universidad del Magdalena al pago de la suma de **DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS (\$17.565.510,72)**, por haber incurrido en mora en el pago de la totalidad del valor del contrato.

Avenida del Libertador No. 13-94
Teléfonos: 4230828 - 4232652 Ext. 131 y 127 - 4319682
Fax: (095) 4214777
Santa Marta D.T. - Colombia

www.ccsm.org.co



VIGILADO Ministerio del Interior y de Justicia

QUINTO: CONDÉNASE a la Universidad del Magdalena al pago de la suma de **DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVENTA Y CINCO PESOS** (\$244.419.095,00), por concepto de mayor permanencia en obra, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este laudo.

SEXTO: Las anteriores sumas de dinero serán pagadas a la sociedad **J.P.G. & CIA S.A., GERMAN VILLANUEVA CALDERON y RICARDO LUIS CANABAL GUZMAN**, integrantes de la **UNION TEMPORAL OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA -OBRESAN-**; y causarán intereses comerciales moratorios a partir del día siguiente de la fecha de ejecutoria del laudo.

SEPTIMO: CONDÉNASE a la Universidad del Magdalena al pago de la suma de **SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS** (\$62.511.880,00), por concepto de costas del proceso.

OCTAVO: CONDÉNASE a la Universidad del Magdalena al pago de la suma de **VEINTISEIS MILLONES DE PESOS** (\$26.000.000,00), por concepto de Agencias en Derecho, a favor de la parte Convocante.

NOVENO: Para el cumplimiento de la sentencia expídanse copias con destino a las partes según las previsiones del artículo 115 del C.P.C. y con la observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del decreto 359 de 22 de febrero de 1995.

DECIMO: En firme este Laudo, protocolícese por el Presidente del Tribunal en una Notaria de esta ciudad, de conformidad con el artículo 159 del decreto 1818 de 1998, con cargo al rubro de protocolizaciones, efecto para el cual se previene a las partes sobre la obligación de cubrir lo que faltare, si la suma decretada y recibida para este fin resultare insuficiente o si resultare mayor se devolverá lo pertinente."

PARA RESOLVER SE CONSIDERA:

Encuentra el Tribunal que el Laudo Arbitral podrá ser aclarado, corregido y complementado de oficio o a solicitud de las partes a voces del artículo 36 del Decreto 2279 de 1989, mediante escrito presentado ante el Presidente del Tribunal de Arbitramento dentro de los cinco (5) días siguientes a la expedición del mismo, en los casos y en las condiciones establecidas en el Código de Procedimiento Civil.

El Laudo arbitral fue proferido el 22 de Agosto del año 2011. Se tiene entonces, que las partes podían solicitar, su aclaración y/o modificación hasta el día 30 del mismo mes y año, situación que se cumplió a cabalidad en el subjuice, puesto que el memorial contentivo de la solicitud, fue presentado a la Presidenta del Tribunal el día 29 de Agosto de 2011.

Mediante Audiencia privada del 31 de Agosto de 2011, el Tribunal de Arbitramento señaló el día 7 de Septiembre de 2011, a las 4:30 p.m., para correr traslado a la parte demandada de la solicitud de adición o complementación del Laudo Arbitral. La audiencia privada se notificó personalmente a las partes del proceso. El día 7 de Septiembre de 2011, se realizó la audiencia pero la parte convocada no se hizo presente, razón por la cual no recorrió el traslado en audiencia de la solicitud de adición o complementación del Laudo Arbitral.

Una vez surtido el trámite procesal correspondiente, se procedió a señalar como fecha para resolver la solicitud de adición o complementación del Laudo Arbitral. En consecuencia procede el Tribunal de Arbitramento debidamente competente a resolver lo que en derecho corresponda en consideración a la solicitud de adición o complementación del laudo arbitral de fecha 22 de Agosto de 2011 impetrado por la parte convocante.

Alega el recurrente y se apoya en lo normado en el artículo 307 del Código de Procedimiento Civil, en el sentido que la condena debe ser integral, conteniendo en su sentir, el pago de frutos, intereses, perjuicios u otra cosa semejante. Inclusive afirma que la condena en concreto, se extienda hasta la fecha de la sentencia de segunda instancia, aún cuando la parte beneficiaria con ella no hubiera apelado en caso de que la segunda instancia proceda, cuando el inferior ómita total o parcialmente la condena en concreto.

En ese orden, se aplica el artículo 308 del Código de Procedimiento Civil que a la letra dice: *"Si no se hiciere en la sentencia la condena en concreto, la parte favorecida podrá solicitar dentro del término de su ejecutoria, que se pronuncie sentencia complementaria, caso en el cual el juez aplicara la segunda parte del inciso 1º del artículo 307..."*.

Ahora bien, al analizar los argumentos expuestos por los demandantes en su solicitud de adición o complementación del Laudo, este Tribunal considera, que no le asiste razón al apoderado de I.P.G. & CIA S.A., **GERMÁN VILLANUEVA CALDERÓN** y **RICARDO LUIS CANABAL GUZMAN, INTEGRANTES DE LA UNION TEMPORAL OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA -OBRESAN-**, de tal manera que este Tribunal procederá a impartir decisión en el sentido de confirmar el Laudo

cuya adición o complementación se solicita, conforme a las consideraciones que pasaremos a exponer a continuación:

Sustenta su petición el apoderado de los convocantes en el hecho que el Tribunal no se pronunció sobre las pretensiones Octava y Novena de la demanda, que se debe actualizar el monto de la condena impuesta en el numeral tercero de la parte resolutive del laudo, y que se apliquen los intereses a la condena establecida en el numeral cuarto de la parte resolutive del laudo hasta la fecha del mismo.

Para este tribunal, bajo ninguna consideración puede sustentarse el haber dejado de pronunciarse sobre los extremos de la litis. Las pretensiones octava y novena, referentes a la actualización de las condenas y a la de los intereses, ha sido resuelta en la medida en que las mismas fueron decididas y debidamente motivadas; por lo que yerra el apoderado de los convocantes ya que en el laudo las diferentes pretensiones fueron objeto de actualización, a otra se le calcularon intereses moratorios y de acuerdo al numeral Sexto de la parte resolutive del laudo, sobre la sumas de dinero reconocidas a favor de la convocante se estableció que causarían intereses comerciales moratorios a partir del día siguiente de la fecha de ejecutoria del laudo.

La suma de **DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVENTA Y CINCO PESOS** (\$244.419.095,00), contenida como condena en el laudo por concepto de mayor permanencia en obra, corresponde a la suma considerada como perjuicios probados y por lo tanto no habrá lugar a la actualización que se pretende, solo generará los intereses del que habla el numeral Sexto de la parte resolutive del Laudo.

En lo relativo a las obras no legalizadas, este Tribunal considera que si corresponde su actualización, precisamente por cuanto no fueron canceladas en la oportunidad debida y fueron realizadas por el demandante y recibidas por la demandada sin que se procediera a su legalización y pago oportuno.

La condena por concepto de obras por legalizar, se estuvo a lo probado en el proceso, y el Tribunal reconoció al convocante el valor estipulado en el Acta de Liquidación definitiva del contrato No. 0146 de 2005 de fecha 30 de enero de 2008, debidamente actualizado a la fecha de proferimiento del laudo, para lo cual aplicó la formula aceptada por el Consejo de Estado.

Por lo expuesto no habrá lugar a producir adición o complementación y así se consignará en el parte resolutive.

De conformidad con la mora causada por el no pago del valor total del contrato en el tiempo debido, se determinó en el Laudo el valor a pagar solo por la mora, en el entendido que dicho valor fue sufragado en su totalidad por la demandada pero fuera del término previsto, esa cifra fue determina pericialmente. Por lo tanto sobre ese valor, correspondiente a mora, solo le son aplicables intereses posteriores a la fecha del laudo y hasta su pago como se dice en el numeral Sexto del mismo.

Igualmente, se explica que el artículo 307 del Código de Procedimiento Civil, sienta como regla general que las condenas a que haya lugar, esto es, por constituir objeto del pedimento y establecerlo la Ley, deben hacerse por cantidades determinadas, como en efecto ha ocurrido en este asunto, y por aparecer establecida; es decir, de las condenas a que hace referencia la parte resolutive del laudo cuestionado, aparecen las pruebas que conducen a la decisión tomada.

Por lo expuesto, el Tribunal de Arbitramento, se abstendrá de adicionar o complementar el Laudo Arbitral, de fecha 22 de Agosto de 2011.

De otra parte, como viene previsto en el Auto No. 1 del Acta No. 27 del 31 de Agosto de 2011, se dispondrá lo pertinente a la tramitación del recurso de anulación interpuesto por la parte convocada.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal de Arbitramento, constituido en audiencia,

RESUELVE:

PRIMERO.- No adicionar o complementar el Laudo Arbitral de fecha Agosto 22 del año 2011, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

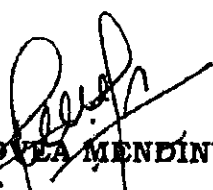
SEGUNDO: Por secretaria dispóngase lo correspondiente al trámite del recurso de anulación interpuesto por la parte convocada.

TERCERO: El presente auto queda notificado en estrado.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE:

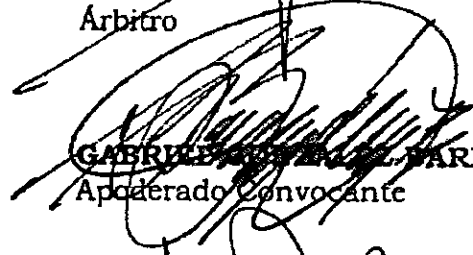
Se deja constancia que las partes no interpusieron recursos alguno contra el presente auto.

No habiendo otro asunto que tratar se finaliza la presente audiencia, para constancia se firma, por quienes intervinieron.


DIANA BOYLA MENDINUETA
Presidente


JUAN POLO FIGUEROA
Arbitro


MIGUEL POLO CAMPO
Arbitro


GABRIEL GONZALEZ BARRAZA
Apoderado Convocante


CARLOS EUGENIO BECERRA BARONA
Apoderado Convocante


IVETH CASTAÑO DUARTE.
Apoderado Convocante


GUILLERMO ANTONIS DE LOS RIOS BERMUDEZ.
Secretario

DIANA PATRICIA BOVEA MENDINUETA
ABOGADA TITULADA UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA
ESPECIALISTA EN DERECHO PUBLICO UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COLOMBIA

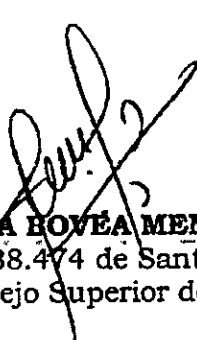
Santa Marta D.T.C.H., Agosto 16 de 2012.

Doctor
GABRIEL GONZÁLEZ BARRAZA
Apoderado
J.P.G. & CIA S.A. y otros.
Ciudad

Apreciado Doctor.

Muy respetuosamente me dirijo a Usted, a fin de solicitarle se sirva suministrarme el número de cuenta en donde se debe realizar la consignación del veinticinco por ciento (25%) de los honorarios recibidos como árbitro dentro del proceso arbitral promovido por J.P.G. & CIA S.A., y Otros, contra la Universidad del Magdalena, y el cincuenta por ciento (50%) de los gastos para la protocolización del laudo arbitral, los cuales fueron cancelados por sus poderdantes.

Con todo respeto, atentamente.


DIANA PATRICIA BOVEA MENDINUETA
C.C. No. 57.438.474 de Santa Marta
T.P. No. 90.265 Consejo Superior de la Judicatura

Santa Marta, D. T. C. H., 16 de agosto de 2012

Doctor
ÇÉSAR RIASCOS NOGUERA
DIRECTOR CÁMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA

Doctora
BIBIANA M. OVALLE DE ANDREIS
DIRECTORA CENTRO DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
CÁMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA
 Avenida del Libertador No. 13 – 94
 Teléfonos: 423 0828
 Fax: 421 4777
 Ciudad.

[Handwritten signature]
 Cámara de Comercio
 Santa Marta
 17/8/12

Asunto: SOLICITUD DE NUEVA CONVOCATORIA TRIBUNAL DE ARBITRAMIENTO DE UNIÓN TEMPORAL OBRESAN - OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA -, J.P.G. & CIA S.A., GERMÁN VILLANUEVA CALDERÓN Y RICARDO LUIS CABANAL GUZMÁN CONTRA LA UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA.

Respetados Drs del Tribunal. DIANA PATRICIA BOVEA MENDINUETA, JUAN ALBERTO POLO FIGUEROA y MIGUEL ÁNGEL POLO CAMPO

GABRIEL FRANCISCO GONZÁLEZ BARRAZA, mayor de edad, domiciliado y residenciado en la ciudad de Santa Marta, D. T. C. H., identificado civil y profesionalmente como aparece al pie de mi firma, apoderado reconocido de la **UNIÓN TEMPORAL OBRESÁN - OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA Y DE CADA UNO DE SUS MIEMBROS**, teniendo en cuenta que el H. Consejo de Estado declaró la anulación del Laudo Arbitral proferido por el Tribunal de Arbitramento, convocado para dirimir las diferencias surgidas en el Contrato de Obra No. 0146 de 2005 celebrado entre mis poderdantes y la **UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA**, por encontrarse probada la causal consistente en "haberse proferido el laudo después del vencimiento del término fijado para el proceso arbitral o su prórroga" y con fundamento, además, en que el pasado 14 de agosto del presente año fui notificado, por el Centro de Conciliación y Arbitraje de esta cámara de comercio, de dicha providencia y de la remisión hecha por el H. Consejo de Estado del expediente respectivo, me permito solicitar a ustedes, con el fin de precaver cualquier responsabilidad de la Cámara de Comercio de Santa Marta por la denegación de justicia que el error producido por los árbitros implicá para nosotros, se sirvan **ORDENAR LA CONVOCATORIA DE UN NUEVO**

[Handwritten signature]
 Cámara de Comercio
 Santa Marta
 17/8/12

TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO en el cual se conserven las pruebas válidamente practicadas y las actuaciones que no hubieren sido afectadas con la anulación, es decir, todas aquellas llevadas a cabo hasta el día 24 de abril de 2011, que fue la fecha en que según los cálculos de la sentencia del H. Consejo de Estado venció el término del Tribunal de Arbitramento.

De conformidad con lo dispuesto en el inciso 4º del artículo 165 del Decreto 18118 de 1998 (correspondiente al artículo 129 de la Ley 446 de 1998 que modificó el artículo 40 del Decreto 2279 de 1989) los árbitros NO tendrán derecho a la segunda mitad de sus honorarios, por lo que solicito que con dichos montos se sufraguen los costos del nuevo tribunal de arbitramento que se convoque de conformidad con la presente solicitud.

Es importante tener en cuenta que la demanda fue instaurada antes del vencimiento del término de caducidad de la acción, por lo que a estas alturas, si no se accede al remedio pedido en este escrito, mis poderdantes quedarían sin la posibilidad de que se les administre pronta y cumplida justicia, toda vez que NO tendrían posibilidad de accionar nuevamente ante la jurisdicción por una eventual caducidad de la acción, básicamente por un hecho que escapa a sus fuerzas, toda vez que la anulación se produjo por un evidente error en que incurrieron los árbitros, situación que no puede ser trasladada al Convocante.

Agradezco su debida atención.

Atentamente,


GABRIEL FRANCISCO GONZALEZ BARRAZA
C. C. No. 12605489
T. P. No. 41.864 Minjusticia


012



Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición

24- 029324

Santa Marta, **22 AGO. 2012**

Doctor
GABRIEL FRANCISCO GONZALEZ BARRAZA
E.S.M.

Ref: Solicitud Dr. Gabriel Francisco González Barraza.

Respetado Doctor:

El día diecisiete (17) de Agosto de dos mil doce (2012) se recibió la solicitud de la referencia radicada bajo el No. 23902, esta Dirección procede a manifestar:

1. Los Centros de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición son entidades que coadyuvan a la administración de justicia y prestan los recursos logísticos, físicos, técnicos y financieros necesarios para el desarrollo de los trámites arbitrales. Es en últimas un administrador y prestador de servicios, y su rol es operativo más no jurisdiccional.

2. De conformidad con la Sentencia C. 1038 de 2002 cumplimos una función de apoyo y trámite.

3. En ejercicio de la función de apoyo y trámite conforme a la Sentencia Constitucional no está autorizado el Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición de esta entidad para ordenar la convocatoria de un nuevo Tribunal de Arbitramento, por ser esta solicitud improcedente e ilegal al carecer el Centro de facultad jurisdiccional, habida cuenta que son los interesados los llamados a presentar una nueva solicitud de convocatoria por tratarse de una justicia rogada la cual deberá estar conforme con lo preceptuado en el artículo 127 del Decreto 1818 de 1998 que a su letra dice:

"La solicitud de convocatoria deberá reunir todos los requisitos exigidos por la ley para la demanda y se dirigirá al centro de arbitraje indicado en el numeral 1° del artículo 15 de este decreto. (Decreto 2651 de 1991, artículo 13)".

Avenida del Libertador No. 13-94
Teléfonos: 4230828 - 4232652 Ext. 131 y 127 - 4319682
Fax: (095) 4214777
Santa Marta, D.T.C.H. - Colombia



Certificado SC 2100 - 1

VIGILADO Ministerio de Justicia y del Derecho

Así mismo deberá cumplir con el pago de los gastos iniciales conforme lo establece el artículo 11 del Decreto 4089 de 2007 que reza:

"GASTOS INICIALES. Con la presentación de cualquier convocatoria a Tribunal de arbitramento, la parte convocante deberá cancelar a favor del Centro, los siguientes valores:

Si es un trámite de menor cuantía el equivalente a un salario mínimo mensual vigente. (1 SMMV).

Si es un trámite de mayor cuantía o de cuantía indeterminada, el equivalente a dos salarios mínimos mensuales vigentes (2 SMMLV).


Estos valores se imputarán a los gastos administrativos que decreta el Tribunal. En los casos donde el tribunal no pueda asumir sus funciones se reembolsarán dichos recursos".

No obstante las anteriores precisiones en aras de hacer llegar la solicitud a los distintos destinatarios este Centro dio el traslado de su solicitud a los Doctores: **DIANA BOVEA MENDINUETA, JUAN ALBERTO POLO FIGUEROA y MIGUEL ANGEL POLO CAMPO**, para su conocimiento y fines pertinentes. Anexo copia de las remisiones del traslado.

Se advierte que el solicitante no suministró su dirección de notificación judicial.

En el suministro de cualquier información adicional estaré presta a colaborarle gustosamente.

Atentamente,


Bibiana M. Ovalle De Andreis
Directora Centro de Arbitraje, Conciliación
Y Amigable Composición

Anexo: Lo anunciado
Bibiana O. /32-24-20



Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición

24- 029323

Santa Marta, 22 AGO. 2012

Doctora
DIANA BOVEA MENDINUETA
Calle 10 No. 11 A- 12
Centro Comercial La Coquera
Santa Marta.

Ref: Solicitud Dr. Gabriel Franciscó González Barraza.


Respetada Doctora:

El día diecisiete (17) de Agosto de dos mil doce (2012) se recibió la solicitud de la referencia radicada bajo el No. 23902.

Esta Dirección procede a enviarle mediante esta comunicación el traslado de la misma para lo de su competencia.

En el suministro de cualquier información adicional estaré presta a colaborarle gustosamente.

Atentamente,


Bibiana M. Ovalle De Andreis
Directora Centro de Arbitraje, Conciliación
Y Amigable Composición

C.C. Dr. Gabriel Francisco González Barraza


Anexo: Lo anunciado
Bibiana O/32-24-20

Avenida del Libertador No. 13-94
Teléfonos: 4230828 - 4232652 Ext. 131 y 127 - 4319682
Fax: (095) 4214777
Santa Marta, D.T.C.H. - Colombia



Comunicado SC 2500 - 1

VIGILADO Ministerio de Justicia y del Derecho



Cámara de Comercio
SANTA MARTA

Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición

24- 029323

Santa Marta, 22 AGO. 2012

Doctor

JUAN ALBERTO POLO FIGUEROA

Carrera 1 No. 22-58 – Oficina 903

Edificio Bahía Centro

Santa Marta.

Ref: Solicitud Dr. Gabriel Francisco González Barraza.

Respetado Doctor:

El día diecisiete (17) de Agosto de dos mil doce (2012) se recibió la solicitud de la referencia radicada bajo el No. 23902.

Esta Dirección procede a enviarle mediante esta comunicación el traslado de la misma para lo de su competencia.

En el suministro de cualquier información adicional estaré presta a colaborarle gustosamente.

Atentamente,



Bibiana M. Ovalle De Andreis

Directora Centro de Arbitraje, Conciliación
Y Amigable Composición

C.C. Dr. Gabriel Francisco González Barraza

Anexo: Lo anunciado
Bibiana O/32-24-20

Avenida del Libertador No. 13-94
Teléfonos: 4230828 - 4232652 Ext. 131 y 127 - 4319682
Fax: (095) 4214777
Santa Marta, D.T.C.H. - Colombia



Certificado SC 2100 - 1

VIGILADO Ministerio de Justicia y del Dere



Cámara de Comercio
SANTA MARTA

Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición

24- 029323

Santa Marta, 22 AGO. 2012

Doctor

MIGUEL ANGEL POLO CAMPO

Carrera 5 No. 18-32 -- Oficina 301

Edificio Zapatoca

Santa Marta.

Ref: Solicitud Dr. Gabriel Francisco González Barraza.


Respetado Doctor:

El día diecisiete (17) de Agosto de dos mil doce (2012) se recibió la solicitud de la referencia radicada bajo el No. 23902.

Esta Dirección procede a enviarle mediante esta comunicación el traslado de la misma para lo de su competencia.

En el suministro de cualquier información adicional estaré presta a colaborarle gustosamente.

Atentamente,



Bibiana M. Ovalle De Andreis

Directora Centro de Arbitraje, Conciliación
Y Amigable Composición

C.C. Dr. Gabriel Francisco González Barraza

Anexo: Lo anunciado
Bibiana O/32-24-20

Avenida del Libertador No. 13-94
Teléfonos: 4230828 - 4232652 Ext. 131 y 127 - 4319682
Fax: (095) 4214777
Santa Marta, D.T.C.H. - Colombia



Continente SC 2390 - 1

VIGILADO Ministerio de Justicia y del Derecho

24- 029361

Santa Marta, 27 AGO. 2012

Doctora
DIANA BOVEA MENDINUETA
Presidenta Tribunal de Arbitramento
Calle 10 No. 11 A - 12
Centro Comercial La Coquera
Santa Marta.

Ref: Expediente No. 110010328006201100064 01 - (42218)
Actor: J.P.G. & CIA S. A. y otros - Miembros de la Unión Temporal "Obresan"

Respetada Doctora:

El Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Tercera, a través de su Secretaria, Doctora Paola Andrea Pérez Banguera, mediante oficio No. C-12 - 413 - D., radicado en esta entidad el día primero (1) de agosto del presente año bajo el No. 23823, remitió el expediente de la referencia.


El mencionado expediente consta de nueve (9) cuadernos los cuales contienen un total de 2833 folios útiles.

Por lo anterior esta dirección envía el expediente antes referenciado para lo de su competencia.

Agradezco informe oportunamente la Notaría y el número de la Escritura Pública de protocolización del expediente, para nuestro conocimiento y fines pertinentes.

En el suministro de cualquier información adicional estaré presta a colaborarle gustosamente.

Atentamente,


BIBIANA M. OVALLE DE ANDREIS
Directora Centro de Arbitraje, Conciliación
Y Amigable Composición

Anexo: Lo Anunciado
Bibiana O/32-24-20

*Recibi Diana Bovea
Fecha: Agosto 27-2012.*

VIGILADO Ministerio de Justicia y del Derecho

Santa Marta, D. T. C. H., 3 de septiembre de 2012

Doctor
CÉSAR RIASCOS NOGUERA
DIRECTOR CÁMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA

Doctora
BIBIANA M. OVALLE DE ANDREIS
DIRECTORA CENTRO DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
CÁMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA
Avenida del Libertador No. 13 - 94
Teléfonos: 423 0828
Fax: 421 4777
Ciudad.

Asunto: RESPUESTA A SU COMUNICACIÓN No. 24-029324 DE 22 DE AGOSTO DE 2012 Y REITERACIÓN DE SOLICITUD DE NUEVA CONVOCATORIA TRIBUNAL DE ARBITRAMIENTO DE UNIÓN TEMPORAL OBRESAN - OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA -, J.P.G. & CIA S.A., GERMÁN VILLANUEVA CALDERÓN Y RICARDO LUIS CABANAL GUZMÁN CONTRA LA UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA.

Respetados Drs. Riascos y Ovalle:

GABRIEL FRANCISCO GONZÁLEZ BARRAZA, mayor de edad, domiciliado y residenciado en la ciudad de Santa Marta, D. T. C. H., identificado civil y profesionalmente como aparece al pie de mi firma, apoderado reconocido de la **UNIÓN TEMPORAL OBRESÁN - OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA Y DE CADA UNO DE SUS MIEMBROS**, en respuesta a su comunicación del asunto me permito manifestar que, en todo caso, así el Tribunal de Arbitramento cuyo laudo arbitral fue anulado por el H. Consejo de Estado por extemporáneo fuera legal, en los términos del artículo 116 del Decreto 1818 de 1998, ello no implica que no se hubiere llevado a cabo a través del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio, quien es la que está legal y reglamentariamente habilitada para llevar a cabo los mencionados medios alternativos de solución de conflictos y, en virtud de ello, para tener su listado oficial de árbitros que en este caso fueron sorteados, seleccionados y posesionados por este centro, lo que implica que tanto ellos como el centro se hacen responsables por los actos u omisiones en que hubieren podido incurrir en el cumplimiento de la función de administrar justicia transitoriamente por habilitación constitucional y legal.

[Handwritten signature and date]
03/09/2012

No obstante lo anterior, como se desprende de mi anterior solicitud, la intención es que se eviten perjuicios a la convocante a través de la convocatoria de **UN NUEVO TRIBUNAL DE ARBITRAMIENTO, PERO CON EL FIN ÚNICO Y PRIMORDIAL DE QUE CONTINÚE EL TRÁMITE DESDE LO ACTUADO HASTA EL DÍA 24 DE ABRIL DE 2011 Y SE PRONUNCIE UN NUEVO LAUDO, RAZÓN POR LA CUAL NO ESTAMOS ANTE EL TÍPICO CASO EN EL QUE SE HACE UNA SOLICITUD DE CONVOCATORIA DESDE CERO**, pero aún así me permitiré citar nuevamente, en el presente escrito, el contenido de la demanda que fue tenida en cuenta por los árbitros durante el fallido proceso arbitral, cuyo laudo fue anulado por el H. Consejo de Estado.

CON RESPECTO A LOS ÁRBITROS, NUESTRA SOLICITUD SE ENCAMINA A QUE SEAN SORTEADOS UNOS NUEVOS QUE RETOMEN EL PROCESO Y LO LLEVEN A FELIZ TÉRMINO.

EN CUANTO A LOS COSTOS ADMINISTRATIVOS, ESTARÍAMOS EN DISPOSICIÓN DE CANCELARLOS, NO OBSTANTE, SOLICITAMOS QUE PRIMERO SE UTILICEN LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES EL 50% DE LOS HONORARIOS DE LOS ÁRBITROS, QUE DEBERÁN DEVOLVER A LAS PARTES, PARA CUBRIR DICHOS GASTOS ADMINISTRATIVOS INICIALES, PUES USTED ENTENDERÁ QUE NO ES JUSTO QUE PRODUCIÉNDOSE UN EVIDENTE ERROR JUDICIAL Y DEBIENDO LOS ÁRBITROS REINTERGAR LA MITAD DE SUS HONORARIOS, SE NOS EXIJA SUFRAGAR NUEVAMENTE LOS COSTOS DE UNOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, CUANDO LO QUE SE PIDE ES LA RETOMA DEL TRÁMITE ARBITRAL DESDE LA FECHA EN QUE SE PRODUJO LA EXTEMPORÁNEIDAD DEL INICIAL TRIBUNAL DE ARBITRAMIENTO.

COMO VERÁ USTED, ESTO SE ACOMPASA CON LOS PRIMADOS CONSTITUCIONALES DE ACCESO A LA JUSTICIA, CON EL PROPÓSITO DE OBTENER PRONTA Y CUMPLIDA JUSTICIA Y ES PRECISAMENTE CUMPLIDA JUSTICIA LO QUE DEMANDAMOS EN ESTE MOMENTO ANTE EL JUEZ NATURAL DEL CONTRATO, ES DECIR, UN TRIBUNAL DE ARBITRAMIENTO.

Así las cosas, A CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBE EL TEXTO DE LA DEMANDA QUE SIRVIÓ DE BASE AL TRÁMITE ARBITRAL FALLIDO, COMO HABÍA SIDO ANUNCIADO ATRÁS, SIN APORTAR NUEVAMENTE LAS PRUEBAS Y ANEXOS CORRESPONDIENTES POR RAZONES DE ECONOMÍA, PUES ESTOS REPOSAN EN EL CENTRO DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE QUE USTED DIRIGE:

"GABRIEL FRANCISCO GONZÁLEZ BARRAZA, mayor de edad, domiciliado y residenciado en la ciudad de Santa Marta, D. T. C. H., identificado civil y

profesionalmente como aparece al pie de mi firma, actuando de conformidad con la sustitución del poder que me hiciera el Dr. **JAIRO ALBERTO BARROS ACOSTA**, en calidad de apoderado judicial de **JUAN PABLO GONZÁLEZ**, actuando como Gerente y Representante Legal de **J.P.G. & CIA. S.A.**, **GERMAN VILLANUEVA CALDERÓN Y RICARDO LUIS CANABAL GUZMÁN**, miembros de la **UNIÓN TEMPORAL OBRESÁN - OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA**, constituida mediante documento privado del 15 de noviembre de 2005 suscrito en la ciudad de Barranquilla, **Y DE CADA UNO DE SUS MIEMBROS: J.P.G. & CIA S.A.**, sociedad colombiana, constituida mediante Escritura Pública No.50 de la Notaría única de Santo Tomas del 28 de enero de 1993, inscrita el 25 de febrero de 1993 bajo el No. 48.547 del libro respectivo de la Cámara de Comercio de Barranquilla, **GERMÁN VILLANUEVA CALDERÓN**, mayor de edad, domiciliado en Santa Marta, D. T. C. H., identificado con la cédula de ciudadanía No. 12.547.660 expedida en Santa Marta **Y RICARDO LUIS CANABAL GUZMÁN**, mayor de edad, domiciliado en Santa Marta, D. T. C. H., identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.872.383 expedida en Montería, en adelante conjuntamente denominados **LOS CONVOCANTES**; según poder debidamente otorgado por el Representante Legal de la **UNIÓN TEMPORAL OBRESÁN - OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA** y por cada uno de sus miembros, el cual, junto con la respectiva sustitución, acompaña la presente demanda; mediante el presente escrito solicito la convocatoria de un Tribunal de Arbitramento para que conozca y falle la presente demanda que interpongo en contra de la **UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA**, en adelante **LA UNIVERSIDAD** o **LA CONVOCADA**, ente autónomo universitario del orden departamental, creado por Ordenanza No. 5 de 1957, con domicilio en la ciudad de Santa Marta, D. T. C. H, representada legalmente por **RUTHBER ANTONIO ESCORCIA CABALLERO** o por quien haga sus veces; para que previo los trámites legales del **PROCESO ARBITRAL** y en ejercicio de lo dispuesto por la cláusula compromisoria del "**CONTRATO DE OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO B DE SALONES SUSCRITO ENTRE UNIÓN TEMPORAL OBRESAN - OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA Y LA UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA**" No. 0146, celebrado entre las partes el día 30 de diciembre del 2005, mediante laudo arbitral que haga tránsito a cosa juzgada, se provean favorablemente las siguientes:

PRETENSIONES:

PRIMERA: Que se declare que entre la **UNIÓN TEMPORAL OBRESÁN - OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA** y la **UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA** se celebró el "**CONTRATO DE OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO B DE SALONES SUSCRITO ENTRE UNIÓN TEMPORAL OBRESAN - OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA Y LA UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA**" No. 0146 del 30 de diciembre del 2005.

SEGUNDA: Que se declare que durante la ejecución del contrato se produjo el **DESEQUILIBRIO ECONÓMICO** del mismo, en detrimento de **LOS CONVOCANTES**, por causas atribuibles a **LA CONVOCADA**, tales como la mayor permanencia en obra; la entrega y aprobación tardía de los diseños; la suspensión reiterada de las actividades; las mayores cantidades de obra por las modificaciones extemporáneas realizadas en el diseño del proyecto, que implicaron la adición, supresión y cambios en la obra; los reajustes a los precios del contrato; el atraso en el pago de las facturas por avance de obra y los costos financieros en que incurrió el contratista al asumir con sus propios recursos la solución a las cargas económicas adicionales del contrato.

TERCERA: Que como consecuencia de la anterior declaración y con el propósito de restablecer el equilibrio económico al contratista se condene a **LA CONVOCADA** al pago, a favor de **LOS CONVOCANTES**, de la suma de **OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SIETE PESOS (\$872.235.707) M/L.**, o la que resulte probada, la cual corresponde a los siguientes conceptos:

- a) Por concepto de **MAYOR PERMANENCIA EN OBRA** ocasionada por la imposibilidad de ejecutar la obra en las condiciones de modo, tiempo y características inicialmente contratadas, la suma de **SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS (\$688.513.584.00) M/L.**, o la que resulte probada.
- b) Por concepto de **MAYOR VALOR LOS ÍTEM DE CUBIERTA Y PUENTES DE ACERO**, debido a las variaciones de los diseños durante la ejecución de las obras, las cuales superaron las cantidades ofertadas y contratadas, la suma de **CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO VEINTITRES PESOS (\$146.722.123.00) M/L.**, o la que resulte probada.
- c) Por concepto de **REMONTAJE DE LA CUBIERTA DE ACERO** del edificio, la suma de **TREINTA Y SIETE MILLONES DE PESOS (\$37.000.000.00) M/L.**, o la que resulte probada.

CUARTA: Que se ordene a **LA CONVOCADA** pagar a favor de **LOS CONVOCANTES** la suma de **CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON 10 CENTAVOS (\$49.842.248,10) M/L.**, por concepto de **"VALOR OBRAS SIN LEGALIZAR A FAVOR DEL CONTRATISTA"**, la cual fue reconocida por **LA UNIVERSIDAD** en el Acta de Liquidación, pero aún no ha sido cancelada.

QUINTA: Que se condene a **LA CONVOCADA** a pagar a **LOS CONVOCANTES** la suma de **TREINTA MILLONES DE PESOS (\$30.000.000.00) M/L.**, o la que resulte probada, por concepto de intereses moratorios por la mora en el pago de la

facturas por concepto de avances de obra, correspondientes a la máxima tasa legal permitida conforme lo establece el Código de Comercio.

SEXTA: Que se condene a **LA UNIVERSIDAD** a pagar a **LOS CONVOCANTES** la suma de **CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL PESOS (\$41.926.000.00) M/L.**, por concepto de la utilidad contractual dejada de recibir, debido a que por las circunstancias de la ejecución contractual el contratista no solo tuvo pérdidas sino que dejó de recibir la utilidad a que tenía derecho.

SÉPTIMA: Que se condene a **LA UNIVERSIDAD** a pagar a **LOS CONVOCANTES** la suma de **CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS (\$150.000.000.00) M/L.**, o la que resulte probada, por concepto de perjuicios sufridos al atender la vía gubernativa, presentando los recursos correspondientes en contra de las resoluciones No. 269 del 27 de abril del 2007 y 291 del 15 de mayo del 2007, por medio de las cuales se impusieron unas multas y se declaró la caducidad del Contrato de Obras No. 0146 del 30 de diciembre del 2005, respectivamente, las que a la postre fueron revocadas por **LA UNIVERSIDAD**, con fundamento, entre otros, en que "20.18. - Debido a la demora de la Universidad del Magdalena en entregar esos planos, como los de otros motivos atrás señalados, se suscribieron contratos adicionales... En conclusión, se desprende que esos planos, diseños de la estructura metálica de rampa y puentes, necesariamente alteraron el programa de trabajo o cronograma... Observamos aquí que el incumplimiento de la Universidad generó una razonable imposibilidad de cumplir..."; cargas que **EL CONTRATISTA** no estaba obligado a soportar, defendiéndose de medidas que fueron revocadas tardíamente por **LA UNIVERSIDAD**.

OCTAVA: Que se actualice el valor de la condena a la fecha del pronunciamiento del respectivo Laudo Arbitral, con base en la variación del Índice de precios al consumidor, para el periodo comprendido entre la fecha en que se presentó el desequilibrio y la fecha en que se produzca el pago efectivo de la condena.

NOVENA: Que como consecuencia de las anteriores declaraciones y sobre todas ellas se condene a **LA UNIVERSIDAD** a pagar a favor de **LOS CONVOCANTES** los intereses comerciales y moratorios a la máxima tasa legal permitida conforme lo dispuesto en el Código de Comercio en su artículo 884, vigente al momento en que se efectúe el pago, sobre el valor histórico actualizado, hasta la fecha en que se haga efectivo el pago.

DÉCIMA: Que en el caso de que **LA UNIVERSIDAD** no diere cumplimiento inmediato al correspondiente Laudo Arbitral, se le condene al pago de los intereses comerciales y moratorios sobre el monto de la cantidad líquida de la condena, hasta su cancelación, de conformidad con el artículo 177 del C. C. A.

DÉCIMA PRIMERA: Que se condene a **LA UNIVERSIDAD** a pagar a favor de **LOS CONVOCANTES** las costas y las agencias en derecho que ocasione el presente proceso arbitral.

HECHOS:

1. La **UNIÓN TEMPORAL OBRESÁN - OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA** y la **UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA** celebraron el "**CONTRATO DE OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO B DE SALONES SUSCRITO ENTRE UNIÓN TEMPORAL OBRESAN - OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA Y LA UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA**" No. 0146 del 30 de diciembre del 2005, cuyo **OBJETO**, según lo dispuesto en la **CLÁUSULA TERCERA** del mismo, consistió en: "... la construcción del edificio "B" de salones, en los términos, condiciones, plazos y estipulaciones que se prescriben en el presente documento, así como en los términos de referencia, y la propuesta presentada por el contratista el 18 de Noviembre de 2005 y los documentos anexos de acuerdo con las especificaciones técnicas y los valores unitarios expresados en la propuesta presentada, la cual para todos los efectos legales forman parte integral del presente contrato".

2. Según lo pactado en la **CLÁUSULA SÉPTIMA** "el VALOR TOTAL del presente contrato para todos los efectos legales y fiscales es de DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES CINTO OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS CON NOVENTA CENTAVOS M/C (\$2'653'182.803.90)".

3. De acuerdo con la **CLÁUSULA NOVENA** "el término de duración del presente contrato será de doscientos cuarenta (240) días calendario a partir de la entrega del anticipo y de la suscripción del acta de iniciación de la obra".

4. El contrato sufrió sucesivas modificaciones, a través de los otrosí No. 1 al 5, para ampliar el plazo contractual, el plazo empezó a correr el día 6 de marzo del 2006 en que se firmó el Acta de Inicio y la obra fue recibida finalmente por **LA UNIVERSIDAD** el día 30 de septiembre de 2007, incluso por fuera de la última modificación realizada a través del Otrosí No. 5, por causas atribuibles (tanto las modificaciones al plazo contractual, como el recibo final tardío de las obras) enteramente a **LA UNIVERSIDAD**, como fehacientemente lo reconocen la **Resolución No. 622 del 17 de diciembre del 2007**, expedida por Rector (e) de **LA UNIVERSIDAD** y "por medio de la cual se desata un recurso de reposición y se revoca una resolución de declaratoria de caducidad del Contrato Nro. 0146 de 2005"; la **Resolución No. 623 del 17 de diciembre del 2007**, de la Rectoría, "por medio de la cual se revoca una resolución que declara la configuración de un siniestro que afecta el amparo de una garantía de cumplimiento" y la **Resolución No. 621 del 17 de diciembre del 2007**, también expedida por el Rector (e), "por medio de la cual se desata un recurso de reposición y se revoca una resolución de imposición de multa a un Contratista".

5. En el considerando No. 20 de la mencionada **Resolución No. 622 del 17 de diciembre del 2007** LA UNIVERSIDAD reconoce que: "20.- Respecto a las obras materia del incumplimiento del contratista originario de la declaratoria de caducidad del contrato de Obras Nro. 0146-2005, cual es el atraso de la estructura metálica de rampas y puentes y otras obras, tenemos: 20.1).- Hubo demoras en entregar los planos correspondientes a la estructura de rampa y puente, como se verá más adelante en una serie de documentos como actas... 20.2) .- Hubo cambio en la estructura de rampa de concreto reforzado a estructura metálica, tal como se acredita en varios documentos, entre éstos el Oficio UTI-032-07 para Rectoría, de fecha Julio 10 de 2006, donde se desprende demora de la Universidad en entregar esos planos, los cuales habían sido requeridos desde marzo de 2006... 20.3).- Acta de suspensión de frente de obra Nro. 3, de fecha Febrero 23 de 2007, referente al retraso en la instalación del cielo raso, dado que la instalación de la ductería del aire acondicionado y decanaturas no se había iniciado a esa fecha, obra a cargo de otro contratista diferente a la Unión Temporal, y solamente éstas obras relacionadas con el aire acondicionado se contrataron a principios del 2007 y sólo hasta el 24 de abril de 2007 se iniciaron esos trabajos... 20.4.- Acta de suspensión de frente de obra Nro. 1, de fecha Enero 20 de 2007, referente a las actividades de la estructura metálica de cubierta, puentes y rampas. Suspensión que se extendió hasta Febrero 8 de 2007-12-10... 20.11.- El Interventor mediante escrito de fecha 9 de septiembre de 2006., que debido al retardo de la Universidad en entregar los diseños definitivos de la estructura metálica, le ha sido imposible fundir las vigas aéreas como la viga canal y reitera que el atraso no es por causa imputable a él como contratista... 20.15.- Las actividades de cielo raso Dry Wall se suspendieron mediante Acta Nro. 04-2007, por cuanto la instalación de aires acondicionado (contratista diferente a Obresán) fueron iniciados el día 26 de marzo de 2007 y solo hasta el día 24 de abril de 2007 se concluyó el primer salón. Actividad reiniciada en Abril 25 de 2007, según acta de reinicio y ahí se señala que dicha actividad se terminaría el 15 de mayo de 2007, es decir, el mismo día de expedición de la resolución de caducidad, la cual es motivo de impugnación... 20.18.- Debido a la demora de la Universidad del Magdalena en entregar esos planos, diseños, como de los otros motivos atrás señalados, se suscribieron Contratos Adicionales ampliando el plazo de ejecución del contrato inicial, y en lo referente a las estructuras metálicas, éstas se cambiaron de concreto a metálicas, como se lee en los adicionales que los mismos obedecieron a: la necesidad de efectuar el cambio de la estructura de rampas de concreto reforzado a estructuras metalizadas, por lo cual se requería el rediseño. Adición Nro. 01 de fecha Octubre 27 de 2006, plazo que se amplió en 21 días calendario... En conclusión, se desprende que esos planos, diseños de la estructura metálica de rampa y puentes, necesariamente alteraron el programa de trabajo o cronograma donde se tuviera de manera aproximada el plazo dentro del cual el contratista debía ejecutar el frente correspondiente a esas actividades, es decir, construir la estructura metálica de puentes y rampas".

De esta forma, LA UNIVERSIDAD reconoció que la afectación del plazo contractual y, por ende, la mayor permanencia se debió a causas atribuibles a ella, como la entrega tardía de los diseños constructivos, lo cual era su obligación, según el numeral 2 de la CLÁUSULA CUARTA del contrato.

6. En la página 11 de la **Resolución No. 622 del 17 de diciembre del 2007** LA UNIVERSIDAD reconoce su propia culpa en la afectación del plazo contractual, por incumplimientos de sus obligaciones, cuando afirma que: "Observamos aquí que el incumplimiento de la Universidad generó una razonable imposibilidad de cumplir, donde es principio universal de derecho que a lo imposible nadie está obligado. No basta, pues, que se registre un incumplimiento cualquiera, para que el contratista deje de cumplir con sus deberes jurídicos, la Administración debe cumplir primero los suyos, de ahí que si la universidad estaba en la obligación de entregar oportunamente los planos y diseños de las obras objeto del incumplimiento parcial del contratista no lo hizo después de varios meses de haberse iniciado la ejecución del contrato (Marzo 6 de 2006), así como otras circunstancias anotadas en esta parte considerativa como era el cambio de estructuras de concreta a metálicas, cambios de los pisos de adoquines porque los que estaban instalando no tenían las medidas y especificaciones, retraso del contratista diferente a Obresán en la entrega de la instalación de los aires acondicionados, y otras más que se citan en esta resolución, cómo pretender que bajo esas circunstancias reiterativas de incumplimiento de la Universidad, si se le exija cumplimiento al Contratista y se sancione con una declaratoria de caducidad del Contrato de Obras Nro. 0146-2005 A este extremo no se puede llegar, máximo como se dijo atrás, que la Universidad venía incurriendo en una serie de incumplimientos de sus obligaciones contractuales, más aún, demorando injustificadamente la entrega de diseños, de la localización definitiva para la ubicación y distribución de los puntos eléctricos de los auditorios, aulas, torreón, oficinas de decanaturas y direcciones de programas, tan sólo éstos a menos de un mes de declararse la caducidad todavía no se habían entregados y otras conductas que implicaban que el proyecto tal como venía por esos incumplimientos de la Universidad no se iban a cumplir, circunstancia ésta que ya había vislumbrado el mismo Director de Interventoría en el oficio relacionado en el Numeral 20.16 de esta parte considerativa,. Aquí hay que tener presente los principios de buena fe y de justicia y equidad, por cuanto esos incumplimientos de la Universidad antes citados, implicaba necesariamente que el proyecto sufriera retrasos, máxime que la misma Interventoría en documentos escrito ya lo había previsto y de ahí que se suscribieran los Contratos adicionales, donde el plazo de ejecución inicial del contrato 0146-07 se ampliara. Estamos frente a un abuso del derecho de la Universidad que si bien es cierto que tiene por ley el control y dirección de los contratos que suscribe, también es cierto que ella es la que debe dar ejemplo de cumplimiento y mal haría; como lo hizo al proferir la resolución aquí recurrida, aprovecharse de su propia culpa, desconociendo principio del derecho civil que "a nadie le es permitido aprovecharse de su propia culpa".

7. En la parte final de la parte considerativa de la **Resolución No. 622 del 17 de diciembre del 2007** LA UNIVERSIDAD reconoce su incumplimiento cuando afirma que "como consecuencia de lo expuesto en esta parte considerativa, por haberse violado el debido proceso y por consiguiente el derecho de defensa, además aplicando el principio de equidad (que es uno de los principios generales del derecho), a que hace alusión el Artículo 13 del Acuerdo 019 de Abril 25 de 2002 del Consejo Superior de la Universidad del Magdalena (Estatuto de Contratación), el cual es aceptado por la ciencia del Derecho, precisamente por cuanto en el presente caso, además de que la Universidad hizo abuso de su derecho y de su posición dominante (en su calidad de Administración Contratante) para superar la situación de injusticia en que incurrió al proferir la resolución aquí recurrida, aplicando de manera inflexible y estricta la ley, en el caso de marras la Universidad no obró con justicia frente a sus reiterados incumplimiento que verdaderamente desencadenaron el incumplimiento de Obresán para lo cual es preciso recordar para este caso la famosa frase de Bonnetcase que "el derecho puede encontrarse en contradicción con la ley", donde precisamente hay que decir que el derecho no es otra cosa que la noción de equidad, debido a que no hay que separar el derecho de la ley, de aquí que tal principio de equidad se tenga como fuente del derecho y sea uno de los principios generales del mismo".

8. Debido a los incumplimientos de LA UNIVERSIDAD en la entrega de los diseños de algunos aspectos de la obra, como los de las rampas y puentes y la estructura metálica de la cubierta del edificio, fue necesario suspender algunos frentes de obra, lo cual tuvo incidencia en la ejecución del contrato de acuerdo con el cronograma aprobado, afectando, en consecuencia, el plazo contractual.

9. LA UNIVERSIDAD realizó variadas y sucesivas modificaciones en los diseños de las estructuras metálicas de las rampas, puentes y cubierta, a pesar de que se demoró en la entrega inicial de estos diseños, los cuales debieron estar listos al momento de iniciar la ejecución de las obras, es decir, el 6 de marzo del 2006.

10. Dados los continuos y reiterados cambios en los diseños de las rampas, puentes y cubierta metálica, fue necesario desmontar una primera cubierta instalada, para luego volver a montar otra cubierta, de acuerdo con los cambios de diseños realizados por LA UNIVERSIDAD.

11. LA UNIVERSIDAD demoró la instalación de los aires acondicionados, los cuales se habían contratado a otro contratista, hecho que afectó la normal ejecución de los demás trabajos a cargo de LOS CONVOCANTES.

12. LA UNIVERSIDAD expidió la Resolución No. 0269 del 27 de abril del 2007, por medio de la cual impuso unas multas a LOS CONVOCANTES.

13. Posteriormente expidió la Resolución No. 0291 del 15 de mayo del 2007, por medio de la cual declaró la caducidad del contrato y el siniestro de incumplimiento.

14. Extemporáneamente, mucho después del plazo legal, LA UNIVERSIDAD resolvió los recursos interpuestos por EL CONTRATISTA en contra de las resoluciones mencionadas en los hechos 11 y 12 de la presente demanda, decidiendo la revocatoria de las mismas, respectivamente a través de la **Resolución No. 622, la Resolución No. 623 y la Resolución No. 621, todas del 17 de diciembre del 2007.**

15. La vacilación de LA UNIVERSIDAD en resolver los recursos en contra de las mencionadas resoluciones, originó que se demorara en recibir la obra terminada, pese a los continuos requerimientos del CONTRATISTA, hecho que finalmente se produjo el día 30 de septiembre del 2007.

16. LA UNIVERSIDAD canceló tardíamente facturas por avance parcial de obra, hecho que afectó el flujo de caja de LOS CONVOCANTES para la debida ejecución del contrato, obligándolos a buscar créditos en el sistema financiero.

17. Durante la ejecución de los trabajos LA CONVOCADA ordenó a LOS CONVOCANTES la realización de obras no previstas inicialmente y de mayores cantidades de obras a través del Otrosí No. 3, lo que tuvo incidencia en la afectación del plazo contractual.

18. LA UNIVERSIDAD ordenó al CONTRATISTA la ejecución de nuevas y mayores cantidades de obra, como consta en las comunicaciones UTI-040 del 23 de agosto del 2007 y UTI-043 del 14 de septiembre del 2007, cuando ya había declarado la caducidad del contrato, las cuales no fueron debidamente legalizadas por LA UNIVERSIDAD. De este hecho también se da cuenta en el Acta de Liquidación del contrato.

19. Pese a lo anterior, LA UNIVERSIDAD, aún habiendo reconocido que ordenó tales obras no ha cancelado el valor correspondiente a \$49.842.248,10, pese a haberlo reconocido también en audiencia de conciliación celebrada en la ciudad de Santa Marta.

20. EL CONTRATISTA a más de haber tenido pérdidas durante la ejecución del contrato, no obtuvo la utilidad esperada.

21. El contrato fue liquidado mediante Acta de Liquidación suscrita por las partes el día 30 de enero del 2008, en la cual el CONTRATISTA dejó salvedades, con el fin de no declarar a paz y salvo a LA UNIVERSIDAD y de abrir la posibilidad a demandar a la misma.

FUNDAMENTOS DE DERECHO DE LAS PRETENSIONES:

Artículos 95, numeral 1º del inciso 3º de la Constitución Política; 1496 y 1497 del Código Civil.

Artículos 3º, numeral 3º de DERECHOS DE LA UNIVERSIDAD, numeral 3º de DEBERES DE LA UNIVERSIDAD, 4º, numeral 1º de DERECHOS DEL CONTRATISTA de la Resolución No. 432 del 2004, "por medio de la cual se reglamenta el Estatuto de Contratación de la Universidad del Magdalena", por medio del cual LA UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA en ejercicio de su autonomía, estableció en sus normas internas de contratación la figura y el principio del restablecimiento económico de los contratos que celebre, como un deber y derecho de la Universidad y un derecho de los contratistas.

Además de lo anterior, fundamenta en derecho esta demanda la CLÁUSULA CUARTA del Contrato de Obra No. 0146 del 30 de diciembre del 2005.

PRUEBAS Y ANEXOS:

A. PRUEBAS DOCUMENTALES:

Con el fin de que se hagan valer dentro del proceso aporlo las siguientes pruebas:

1. Original del Certificado de Existencia y Representación Legal de la sociedad **J.P.G & CIA S.A.**
2. Copia del Contrato de Obra No. 0146 del 30 de diciembre del 2005, celebrado entre **LA UNIÓN TEMPORAL OBRESAN - OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA** y **LA UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA**
3. Copia del Pliego de Condiciones
4. Copia de la oferta presentada por **LA UNIÓN TEMPORAL OBRESAN**
5. Copia del Acta de Conciliación de la Procuraduría
6. Copia de las comunicaciones de fecha 1º de octubre del 2008 - "CONSTANCIA DE ENTREGA FINAL DE OBRA CONTRATO DE OBRAS No. 0146 DE DICIEMBRE 30 DE 2005", mediante el cual el Representante Legal de la **UNIÓN TEMPORAL OBRESAN** requirió a **LA UNIVERSIDAD** para que recibiera la obra terminada.
7. Copia del "Acta de Inspección del estado de las obras del Edificio Ciénaga Grande correspondiente al Contrato de Obras Número 0146 de diciembre 30 de 2005" suscrita entre la **UNIÓN TEMPORAL OBRESAN** y **LA UNIVERSIDAD**
8. Copia de la Resolución No. 432 del 2004, "por medio de la cual se reglamenta el Estatuto de Contratación de la Universidad del Magdalena", en treinta y siete (37) folios.
9. Copia del Acuerdo No. 19 de 2002, "por medio del cual se adopta el estatuto de contratación de la Universidad del Magdalena"

10. Copia autenticada de la Resolución No. 622 del 17 de diciembre de 2007, "por medio de la cual se desata un recurso de reposición y se revoca una resolución de declaratoria de caducidad del Contrato Nro. 0146 de 2005"
11. Copia autenticada de la Resolución 623 del 17 de diciembre de 2007, "por medio de la cual se revoca una resolución que declara la configuración de un siniestro que afecta el amparo de una garantía de cumplimiento"
12. Copia autenticada de la Resolución No. 621 del 17 de diciembre de 2007, "por medio de la cual se desata un recurso de reposición y se revoca una resolución de imposición de multa a un contratista".
13. Copia autenticada de la Comunicación Interna UTI-027-07 del 25 de mayo de 2007 de la Unidad Técnica de Interventoría.
14. Copia autenticada de la Comunicación Interna UTI-020-07 del 26 de abril de 2007.
15. Copia autenticada de la Comunicación Interna UTI-017-07 del 13 de abril de 2007.
16. Copia autenticada de la Comunicación Interna UTI-016-07 del 9 de abril de 2007.
17. Copia autenticada de la Comunicación Interna UTI-014-07 del 27 de marzo de 2007.
18. Copia autenticada de la Comunicación Interna UTI-012-07 del 28 de febrero de 2007.
19. Copia autenticada del Informe No. 4 de la Unidad Técnica de Interventoría – UTI sobre el Contrato de Obras No. 000146 de 2005.
20. Copia autenticada de la Comunicación Interna UTI-010-07 del 23 de febrero de 2007.
21. Copia autenticada de la Comunicación Interna UTI-009-07 del 16 de abril de 2007.
22. Copia autenticada de la Comunicación Interna UTI-007-07 del 1º de febrero de 2007.
23. Copia autenticada de la Comunicación Interna UTI-005-07 del 29 de enero de 2007.
24. Copia autenticada de la Comunicación Interna UTI-004-07 del 29 de enero de 2007.
25. Copia autenticada de la Comunicación Interna UTI-001-07 del 17 de enero de 2007.
26. Copia autenticada de la Comunicación Interna UTI-056-06 del 16 de noviembre de 2006 dirigida al Ing. Isaac Pertuz.
27. Copia autenticada de la Comunicación Interna UTI-056-06 del 10 de noviembre de 2006 dirigida a la Rectora (e) Dra. Carmen Yadira Romero Ávila.
28. Copia autenticada de la Comunicación Interna UTI-055-06 del 12 de octubre de 2006.
29. Copia autenticada de la Comunicación Interna UTI-054-06 del 20 de octubre de 2006.

30. Copia autenticada de la Comunicación Interna UTI-052-06 del 6 de octubre de 2006.
31. Copia autenticada de la Comunicación Interna UTI-050-06 del 25 de septiembre de 2006.
32. Copia autenticada de la Comunicación Interna UTI-049-06 del 18 de septiembre de 2006.
33. Copia autenticada de la Comunicación Interna UTI-048-06 del 15 de septiembre de 2006.
34. Copia autenticada de la Comunicación Interna UTI-046-06 del 11 de septiembre de 2006.
35. Copia autenticada de la Comunicación Interna UTI-045-06 del 8 de septiembre de 2006.
36. Copia autenticada de la Comunicación Interna UTI-044-06 del 8 de septiembre de 2006.
37. Copia autenticada de la Comunicación Interna UTI-043-06 del 13 de septiembre de 2006.
38. Copia autenticada de la Comunicación Interna UTI-042-06 del 1º de septiembre de 2006.
39. Copia autenticada de la Comunicación Interna UTI-040-06 del 23 de agosto de 2006.
40. Copia autenticada de la Comunicación Interna UTI-039-06 del 23 de agosto de 2006.
41. Copia autenticada de la Comunicación Interna UTI-037-06 del 31 de julio de 2006.
42. Copia autenticada de la Comunicación Interna UTI-032-06 del 10 de julio de 2006.
43. Copia autenticada de la Comunicación Interna UTI-027-06 del 2 de junio de 2006.
44. Copia autenticada de la Comunicación Interna UTI-025-06 del 29 de mayo de 2006.
45. Copia autenticada de la Comunicación Interna UTI-023-06 del 15 de mayo de 2006.
46. Copia autenticada de la Comunicación Interna UTI-021-06 del 10 de mayo de 2006.
47. Copia autenticada de la Comunicación CS-IT-032 del 19 de abril de 2006 de la UTI dirigida al Ing. Hans Van Heyl Cleves.
48. Copia autenticada de la Comunicación CS-IT-031 del 19 de abril de 2006 dirigida al Ing. Isaac Pertuz.
49. Copia autenticada de la Comunicación CS-IT-029 del 6 de abril de 2006 dirigida al Ing. Hans Van Heyl.
50. Copia autenticada de la Comunicación CS-IT-028 del 6 de abril de 2006 dirigida al Ing. Isaac Pertuz.
51. Copia autenticada de la Comunicación CS-IT-024 del 28 de marzo de 2006.
52. Copia autenticada de la Comunicación CS-IT-016 del 21 de marzo de 2006.
53. Copia autenticada de la Comunicación CS-IT-015 del 3 de marzo de 2006.

54. Copia autenticada de la Comunicación CS-IT-009 del 23 de febrero de 2006.
55. Copia autenticada de la Comunicación CS-IT-008 del 21 de febrero de 2006 dirigida al Sr. Efraín Olivos.
56. Copia autenticada de la Comunicación CS-IT-006 del 21 de febrero de 2006 dirigida al Ing. Pablo Vera.
57. Copia autenticada del Oficio No. 00002465 del 15 de febrero de 2006 dirigida al Ing. Pablo Vera.
58. Copia autenticada de la Comunicación CS-IT-004 del 20 de febrero de 2006.
59. Copia autenticada de la Comunicación CS-IT-003 del 16 de febrero de 2006.
60. Copia autenticada del Acta del Comité No. 22.
61. Copia autenticada del Acta del Comité No. 21.
62. Copia autenticada del Acta del Comité No. 19.
63. Copia autenticada del Acta del Comité No. 18.
64. Copia autenticada del Acta del Comité No. 17.
65. Copia autenticada del Acta del Comité No. 16.
66. Copia autenticada del Acta del Comité No. 15.
67. Copia autenticada del Acta del Comité No. 2.
68. Copia autenticada del Acta del Comité No. 14.
69. Copia autenticada del Acta de Acuerdo del 17 de febrero de 2006.
70. Copia autenticada del Acta del Comité No. 13.
71. Copia autenticada del Acta del Comité No. 12.
72. Copia autenticada del Acta del Comité No. 11.
73. Copia autenticada del Acta del Comité No. 10.
74. Copia autenticada del Acta del Comité No. 9.
75. Copia autenticada del Acta del Comité No. 8.
76. Copia autenticada del Acta del Comité No. 7.
77. Copia autenticada del Acta del Comité No. 6.
78. Copia autenticada del Acta del Comité No. 5.
79. Copia autenticada del Acta del Comité No. 4.
80. Copia autenticada del Acta del Comité No. 3.
81. Copia autenticada del Acta del Comité No. 1.
82. Copia autenticada del Acta de Inicio de Obra del 6 de marzo de 2006.
83. Copia autenticada del Acta Trazado de Ejes del 1º de marzo de 2006.
84. Copia autenticada del Acta de Obra del 20 de febrero de 2006.
85. Copia autenticada del Acta de Entrega del Lote del 14 de febrero de 2006.
86. Copia autenticada del Acta de Empalme del 9 de febrero de 2006.
87. Copia autenticada de la Carta del 15 de mayo de 2007 de Construagro S. en C. dirigida al Dr. William Renán como Secretario General.
88. Copia autenticada de la Comunicación de la Oficina Asesora de Planta Física No. OAF-038-07 del 23 de abril de 2007, dirigida al Rector Juan Carlos Dib Diazgranados.

89. Copia autenticada del Acta de Reinicio de Frente de Obra No. 2 del 16 de febrero de 2007.
90. Copia autenticada del Acta de Suspensión de Frente de Obra No. 2.
91. Copia autenticada de la Comunicación del 6 de febrero del 2007 de estudio y concepto jurídico con respecto al Oficio OAF-010-07 sobre la solicitud de autorización de expedición de CDP.
92. Copia autenticada del Oficio MC-49-06 del 27 de diciembre de 2006 (originalmente mal fechado; debido a que se se puso 27/12/2007 cuando realmente se expidió en el año 2006) en el que el Ing. Han Van Heyl hizo entrega de la memoria de cálculo y diseño estructural.
93. Copia autenticada del Oficio del 19 de septiembre de 2006 por el cual el Ing. Hans Van Heyl entregó los diseños de estructura metálica (detalles complementarios).
94. Copia autenticada del Oficio de la Vicerrectoría de Investigación No. VDI-761-06 del 14 de septiembre de 2006.
95. Copia autenticada del Oficio VDI-762-06 del 14 de septiembre de 2006.
96. Copia autenticada del Oficio VDI-505-06 del 8 de agosto de 2006.
97. Copia autenticada del Oficio OAF-008-06 del 22 de mayo de 2006.
98. Copia de los Otrosí No. 1 al 5.
99. Original de la Comunicación del 6 de julio del 2006 del Contratista a la Universidad.
100. Original de la Comunicación del 9 de septiembre del 2006 del Contratista a la Universidad.
101. Original de la Comunicación del 7 de noviembre del 2006 del Contratista a la Universidad.
102. Original de la Comunicación del 7 de febrero del 2007 del Contratista a la Universidad.
103. Original de la Comunicación del 12 de marzo del 2007 del Contratista a la Universidad.
104. Original de la Comunicación del 15 de mayo del 2007 del Contratista a la Universidad.
105. Los soportes contables en TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO (385) folios, contenidos en el Anexo 2.
106. Original de la modificación en los diseños a la cubierta realizada por LA UNIVERSIDAD el 12 de febrero del 2007.
107. Original de la carta del 24 de octubre del 2006 enviada a la Unión Temporal por CONSTRUAGRO S. en C., subcontratista de la Unión Temporal para la fabricación y montaje de las estructuras metálicas.
108. Acta de Entrega Final de Obras suscrita entre el subcontratista CONSTRUAGRO S. en C. y la Unión Temporal el día 22 de junio del 2007.
109. Copia de la comunicación No. UTI-024-06 del 15 de septiembre de 2006 de la Unidad Técnica de Interventoría de la Universidad del Magdalena, dirigida al Contratista.

110. Copia de la comunicación No. UTI-029- 06 del 30 de octubre de 2006 de la Unidad Técnica de Interventoría de la Universidad del Magdalena dirigida al Contratista.
111. Copia de la comunicación No. UTI-032- 06 del 11 de diciembre de 2006 de la Unidad Técnica de Interventoría de la Universidad del Magdalena dirigida al Contratista y de sus dos (2) anexos.
112. Copia de la comunicación No. UTI-033- 07 del 27 de enero de 2007 de la Unidad Técnica de Interventoría de la Universidad del Magdalena dirigida al Contratista.
113. Copia de la comunicación No. UTI-02- 07 del 12 de febrero de 2007 de la Unidad Técnica de Interventoría de la Universidad del Magdalena dirigida al Contratista.
114. Copia de la comunicación No. UTI-08- 07 del 29 de marzo de 2007 de la Unidad Técnica de Interventoría de la Universidad del Magdalena dirigida al Contratista y de su anexo.
115. Copia de la comunicación No. UTI-010- 07 del 31 de marzo de 2007 de la Unidad Técnica de Interventoría de la Universidad del Magdalena dirigida al Contratista.

B. PRUEBAS PERICIALES:

Solicito se ordene la práctica de sendos peritajes técnico y contable, realizados por perito con amplia experiencia en construcción de obras similares y en contaduría, respectivamente, con el fin de que determinen;

- a. La mayor cantidad de acero de la cubierta y las rampas con respecto a lo solicitado en el Pliego de Condiciones y a lo ofertado y lo finalmente construido, de conformidad con los diseños entregados y sus modificaciones.
- b. La corroboración de los valores presentados en las pretensiones de la presente demanda, así como la determinación en los documentos contables de la UNIÓN TEMPORAL OBRESÁN si hubo o no pérdidas y la determinación de su cuantía; así como la de los demás perjuicios sufridos y la cuantificación de la utilidad dejada de percibir.

En su oportunidad se presentarán los respectivos cuestionarios para ser absueltos por los peritos designados.

C. Las que de oficio a bien tenga decretar el Tribunal.

- ANEXOS:

1. Poder debidamente otorgado por los intergrantes de la **UNIÓN TEMPORAL OBRESÁN – OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA** al **Dr. JAIRO ALBERTO BARROS ACOSTA**.
2. **Sustitución del poder del Dr. JAIRO ALBERTO BARROS ACOSTA en el suscrito.**
3. Las pruebas documentales aportadas, en DOS (2) ANEXOS DE PRUEBAS.
4. Las copias de la demanda y sus anexos.

CUANTÍA:

Las pretensiones de la demanda ascienden a la suma de **MIL OCHOCIENTOS MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS (\$1.827.303.919.00) M/L.**, discriminada así: a) **MIL SESENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS SIETE PESOS (\$1.064.161.707.00) M/L.** por las pretensiones Tercera a Séptima; b) **SETECIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS (\$763.142.212) M/L.**, por concepto de intereses calculados hasta la fecha de presentación de la demanda, es decir, el día 30 de enero de 2010; por lo que se trata de un proceso de mayor cuantía, de conformidad con lo establecido en el artículo 123 del Decreto No. 1818 de 1998 (Artículo 12 del Decreto 2651 de 1991).

COMPETENCIA:

El Tribunal de Arbitramento es competente de conformidad con lo establecido en la Cláusula Compromisoria, contenida en la **CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA** del contrato, en el que las partes acordaron la solución de diferencias a través de tribunal de arbitramento.

1. El tenor literal de la **CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA** del señalado contrato es: "cualquier diferencia relacionada con la ejecución de este contrato asociada a aspectos técnicos será resuelta a través de amigables componedores de acuerdo con los procedimientos establecidos en el Decreto 2279 de 1989, la Ley 23 de 1991, el Decreto 2651 de 1991, la Ley 446 de 1998, el Decreto 1818 de 1998, y reglamentación similar, que serán seleccionados de común acuerdo por las partes. La amigable composición tendrá lugar en las instalaciones de la Universidad del Magdalena. Cada parte podrá acudir a este mecanismo, mediante previo aviso a la otra parte. El procedimiento de la amigable composición se regirá por las siguientes reglas: las partes podrán presentar sus alegatos y documentos que los sustenten en términos de diez (10) días hábiles contados desde la fecha de aviso de la contraparte. Los amigables componedores a su vez tendrán plazo máximo

de veinte (20) días hábiles para resolver las disputas por escrito, los cuales se contarán a partir del día siguiente del término previsto en la parte anterior. Los alegatos deberán contener: una explicación de los fundamentos técnicos y contractuales que sustenten la posición de la respectiva parte. Las peticiones que haga la respectiva parte a los amigables componedores para resolver las diferencias. Cada parte deberá cooperar en la realización de cualquier investigación que los amigables componedores efectúen relacionada con la disputa en cuestión. Las decisiones adoptadas por los amigables componedores como resultado de la amigable composición tendrán fuerza vinculante para las partes de acuerdo con la ley. Los gastos que ocasionen la intervención de los amigables componedores serán cubiertos por la parte que resulte vencida. Cualquier divergencia que surja entre las partes como ocasión, celebración, ejecución o liquidación de este contrato, no sea posible solucionar amigablemente, serán dirimidos por un tribunal de arbitramento de conformidad con las disposiciones antes citadas. Las disputas relacionadas con la aplicación y los efectos de las cláusulas de caducidad, terminación unilateral no podrán ser sometidas a arbitramento. La intervención de los amigables componedores o tribunal de arbitramento no suspenderá la ejecución del contrato salvo que aquellos aspectos cuya ejecución dependa necesariamente de la solución de la controversia". (Subrayado fuera de texto).

2. De conformidad con lo acordado por las partes, es claro que la amigable composición se pactó única y exclusivamente para resolver cualquier diferencia **sobre aspectos técnicos** durante o relacionada con la ejecución, mientras que el arbitraje se acordó para resolver "cualquier divergencia que surja entre las partes como ocasión, celebración, ejecución o liquidación de este contrato, no sea posible solucionar amigablemente, serán dirimidos por un tribunal de arbitramento de conformidad con las disposiciones antes citadas". El hecho de que diga que no sea posible resolver amigablemente no implica que antes, y como requisito indispensable, deba agotarse la amigable composición, pues habrá asuntos, como el que nos ocupa, que no se circunscriben a aspectos técnicos de la ejecución del contrato. Más bien quiso decirse que las partes, antes de acudir al arbitraje deberían intentar solucionar amigablemente sus diferencias, fórmula que se utiliza en la mayoría de los contratos, pudiendo acudir a la solución directa o a la conciliación, por ejemplo, pero esta disposición ni expresa, ni implícitamente dice que no se podrá acudir al arbitraje si antes no se busca una solución amigable o si antes no se utiliza la figura de la amigable composición.

3. De la misma forma en que la jurisprudencia abundantemente ha reconocido que las partes renuncian a la cláusula compromisoria cuando una de ellas acude a la jurisdicción estatal, de igual manera debería entenderse que si una de las partes acude al arbitraje, implica que renunció a la posibilidad de buscar acuerdo directo con la contraparte, sin que ello inhiba su derecho constitucional de acceder a que se le administre justicia, a través de particulares investidos transitoriamente de

tan significativa función estatal, en virtud de lo dispuesto en los artículos 116 y 229 de la Constitución Política.

4. En todo caso, en el asunto que nos ocupa las partes agotaron previamente una vía amigable, en la medida en que acudieron en conciliación a buscar solución a parte de sus divergencias, sin que fuere posible, como consta en los hechos y pruebas de la demanda presentada con la solicitud de convocatoria de un tribunal de arbitramento, con lo que se entendería cumplida la parte del pacto, en el sentido de acudir al tribunal de arbitramento cuando no fuere posible solucionar amigablemente sus diferencias.

5. De lo que sí estamos conscientes es de las deficiencias de la cláusula compromisoria, pues no se señalan algunos elementos importantes de la misma, como la definición de si el arbitraje será independiente, institucional o legal; de si será en derecho, técnico o en equidad, pero las mismas normas legales (Arts. 115, 116 y 118 del Decreto 1818 de 1998) resuelven el problema, pues, como ustedes saben, a falta de expresión sobre estos aspectos se entiende que el arbitraje será en derecho y legal.

Aún con estas deficiencias, y apelando a la naturaleza de pacto "en virtud del cual los contratantes acuerdan someter las eventuales diferencias que puedan surgir con ocasión del mismo, a la decisión de un tribunal arbitral" y a la autonomía de la cláusula (Art. 118 Decreto 1818 de 1998), reiteramos nuestra solicitud de iniciar y adelantar los trámites del proceso arbitral solicitado, pues las partes tendrán la ocasión, durante el trámite prearbitral, de modificar de común acuerdo la cláusula compromisoria, de ser necesario.

6. Ahora bien, aun cuando en la cláusula compromisoria no se acordó cuál centro de arbitraje asumiría la competencia, como ustedes saben, corresponde al del domicilio del demandado, como lo dispone el Num. 1º del Art. 129 del Decreto 1818 de 1998, que es la ciudad de Santa Marta, D. T. C. H., por lo que hemos acudido a ustedes.

NOTIFICACIONES:

EL DEMANDANTE:

Recibe notificaciones personales en la calle 11 No.1c-23 Ed. Posihueica, Oficina 309, teléfonos: 421 46 76 – 421 40 70, de esta ciudad.

LA UNIVERSIDAD:

*Recibe notificaciones personales en la Carrera 32 No. 22 – 08, Sector San Pedro
Aleandrino, en el Edificio Administrativo del Campus Universitario, teléfono: 430 12
92, de esta ciudad.*

Agradezco su debida atención.

Atentamente,



GABRIEL FRANCISCO GONZÁLEZ BARRAZA

C. C. No. 12.609.489

T. P. No. 41.964 Minjusticia

615

DIANA PATRICIA BOVEA MENDINUETA
ABOGADA TITULADA UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA
ESPECIALISTA EN DERECHO PÚBLICO UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COLOMBIA

Santa Marta D.T.C.H., Septiembre 03 de 2012.

Doctor
GABRIEL GONZÁLEZ BARRAZA
Apoderado
J.P.G. & CIA S.A. y otros.
Ciudad

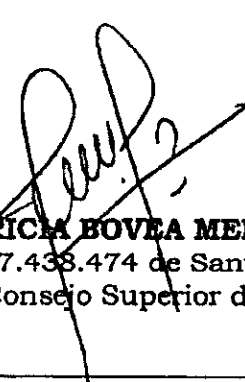
Respetado Doctor.

En atención a su solicitud de fecha 16 de Agosto de 2012, en donde solicita la convocatoria de un tribunal arbitral entre los integrantes de la Unión Temporal OBRESAN contra la Universidad del Magdalena, me permito manifestarle lo siguiente:

De conformidad con los numerales 3 y 4 del artículo 167 del Decreto 1818 de 1998, nuestras obligaciones como árbitros cesaron con la interposición del recurso de anulación. Lo que me corresponde como Presidente que fui del Tribunal es la protocolización del expediente, lo cual ya se está tramitando en la Notaria Cuarta del círculo de Santa Marta.

Le reitero la solicitud fechada 16 de Agosto de 2012, la cual se encuentra debidamente recibida, en el sentido de suministrarme el número de la cuenta bancaria en donde debo consignar el cincuenta por ciento (50%) de los honorarios que sus poderdantes me cancelaron como árbitro.

Con todo respeto, atentamente.


DIANA PATRICIA BOVEA MENDINUETA
C.C. No. 57.438.474 de Santa Marta
T.P. No. 90.265 Consejo Superior de la Judicatura

Calle 10 No.11a-12, tels. 095-4217114-4233443, Santa Marta D.T.C.H.

DIANA PATRICIA BOVEA MENDINUETA
ABOGADA TITULADA UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA
ESPECIALISTA EN DERECHO PUBLICO UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COLOMBIA

Santa Marta D.T.C.H., Septiembre 11 de 2012.

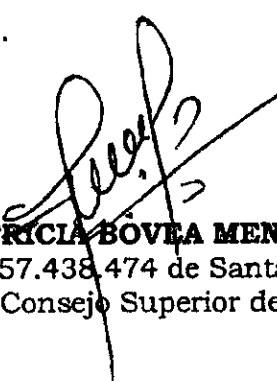
Doctor
GABRIEL GONZÁLEZ BARRAZA
Apoderado
J.P.G. & CIA S.A. y otros.
Ciudad

Apreciado Doctor.

Muy respetuosamente me dirijo a Usted, a fin de manifestarle que el expediente del proceso arbitral promovido por J.P.G. & CIA S.A., y Otros, contra la Universidad del Magdalena, fue protocolizado mediante Escritura Pública No.850 de Septiembre 11 de 2012, en la Notaria Cuarta del Círculo de Santa Marta.

De otra parte, le reitero la solicitud de suministrarme el número de cuenta en donde debo realizar la consignación del veinticinco por ciento (25%) de los honorarios recibidos como árbitro, y el excedente de los gastos de protocolización del laudo arbitral, los cuales fueron cancelados por sus poderdantes.

Con todo respeto, atentamente.


DIANA PATRICIA BOVEA MENDINUETA
C.C. No. 57.438.474 de Santa Marta
T.P. No. 90.265 Consejo Superior de la Judicatura



24- 029507

Santa Marta, **12 SET. 2012**

Doctor
GABRIEL FRANCISCO GONZALEZ BARRAZA
 Santa Marta

Ref: Solicitud Dr. Gabriel Francisco González Barraza.

Respetado Doctor:

El día tres (3) de Septiembre de dos mil doce (2012), se recibió la solicitud de la referencia radicada bajo el No. 23978, relacionada con el sorteo de unos nuevos árbitros, la retoma del proceso y los costos administrativos, como la solicitud está dirigida tanto al Presidente Ejecutivo como a la Directora del Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición de esta entidad, procedemos a unificar la respuesta dado que la posición de ambos funcionarios es exactamente la misma y en ese orden expresamos:

1. Los Centros de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición son entidades que coadyuvan a la administración de justicia y prestan los recursos logísticos, físicos, técnicos y financieros necesarios para el desarrollo de los trámites arbitrales. Es en últimas un administrador y prestador de servicios, y su rol es operativo más no jurisdiccional conforme a la Sentencia C. 1038 de 2002.
2. Sobre el particular la Corte Constitucional en la Sentencia antes referenciada sostuvo:

"Así, las funciones judiciales que se atribuyen a particulares deben ser conferidas de manera expresa, pues su carácter excepcional así lo exige. Tal conclusión se complementa perfectamente con el elemento de la voluntad de las partes, que deciden no sólo acudir a la justicia arbitral, sino quiénes serán los árbitros."

En ese sentido, la voluntad de las partes activa tanto la jurisdicción arbitral como las competencias y atribuciones de las personas que obrarán como árbitros. Lo contrario, es decir, admitir que funcionarios que no han sido habilitados por la voluntad de las partes puedan ejercer una labor judicial de carácter excepcional, sería ir en contra no sólo el espíritu de la normatividad en materia de arbitramento -basada en la voluntad de las partes- sino también contrariar la Constitución, que establece claramente que se trata de una situación excepcional cuya interpretación debe ser restrictiva.

Admitir una interpretación contraria desconocería el tenor del artículo 116 de la Carta, según el cual los particulares sólo habilitan a los árbitros, no al centro de arbitraje ni a otros funcionarios para el ejercicio de una función tan delicada como la de administrar justicia. En ese orden de ideas, mal podría la ley hacer obligatoria la intervención de personas o entidades no autorizadas por las partes para intervenir en el procedimiento. Es menester entonces reconocer el peso del principio de habilitación al momento de conferir facultades judiciales a los particulares, sin que ello implique negar la importancia de las labores de apoyo y trámite, que pueden ejercer los centros de arbitraje. Sólo así puede ser evitada una participación extraña en el desarrollo de un procedimiento de carácter excepcional que opera basado en la habilitación dada por la voluntad de las partes que acuden al mecanismo. Con base en los fundamentos anteriores, esta Corte encuentra que el cargo del actor es acertado, pues los centros de arbitramento no pueden ser habilitados por la ley para tomar decisiones judiciales indisolublemente ligadas a la suerte del proceso arbitral. Dichas decisiones sólo pueden ser tomadas por los árbitros habilitados por las partes (CP art. 116), sin perjuicio de que la ley pueda conferir a dichos centros labores de apoyo al proceso arbitral, o el desarrollo de ciertas funciones en materia de conciliación”.

3. En esas mismas circunstancias con relación al trámite de designación de árbitros, el artículo 119 numeral 4 de la ley 446 de 1.998 establece lo siguiente:

“4. En caso de no aceptación o si las partes no han nombrado, el Centro las citará a audiencia para que éstas hagan la designación total o parcial de los árbitros. El Centro hará las designaciones que no hagan las partes”. (La negrilla es nuestra).

La mencionada norma fue objeto de acusación ante la Corte Constitucional y en la Sentencia C. Ibídem se lee:

“En efecto, los apartes acusados establecían una regla supletiva de la voluntad de las partes, a fin de evitar que en esos eventos el tribunal no pudiera ser instalado, y conferían entonces al centro la atribución de realizar las designaciones que no hubieran sido efectuadas por las partes o por el tercero delegado, incluso si las propias partes no habían delegado de manera directa o indirecta en el centro esa función”.

Al respecto la Corte Constitucional resolvió que sólo puede hacer el Centro de Arbitraje las designaciones si las partes lo han autorizado previa y expresamente, en ejercicio del principio de habilitación contenido en el artículo 116 de la C.P.

4. Ante el Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición de esta entidad se presentó una solicitud de convocatoria de tribunal de arbitramento por parte de J.P.G. & CIA S.A., GERMAN VILLANUEVA CALDERON y OTRO - MIEMBROS DE LA UNIÓN TEMPORAL OBRESAN - OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA, convocando a la UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA, el día primero (1) de febrero de dos mil diez (2010).

5. En el contrato de obras No. 000146 de fecha 30 de diciembre de 2005 suscrito entre LA UNIÓN TEMPORAL OBRESAN - OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA y la UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA, se pactó en la cláusula decima octava que a su letra dice:

"CLAUSULA COMPROMISORIA: *Cualquier diferencia relacionada con la ejecución de este contrato asociada a aspectos técnicos será resuelta a través de amigables componedores de acuerdo con los procedimientos establecidos en el Decreto 2279 de 1989, la Ley 23 de 1991, el Decreto 2651 de 1991, la Ley 446 de 1998, el Decreto 1818 de 1998, y reglamentación similar, que serán seleccionados de común acuerdo por las partes. La amigable composición tendrá lugar en las instalaciones de la Universidad del Magdalena. Cada parte podrá acudir a este mecanismo, mediante aviso previo a la otra parte. El procedimiento de la amigable composición se regirá por las siguientes reglas: las partes deberán presentar sus alegatos y documentos que los sustenten en términos de diez (10) días hábiles contados desde la fecha de aviso de la contraparte. Los amigables componedores a su vez tendrán plazo máximo de veinte (20) días hábiles para resolver las disputas por escrito, los cuales se contarán a partir del día siguiente del término previsto en la parte anterior. Los alegatos deberán contener: Una explicación de los fundamentos técnicos y contractuales que sustenten la posición de la respectiva parte. Las peticiones que haga la respectiva parte a los amigables componedores para resolver las diferencias. Cada parte deberá cooperar en la realización de cualquier investigación que los amigables componedores efectúen relacionada con la disputa en cuestión. Las decisiones adoptadas por los amigables componedores como resultado de la amigable composición tendrán fuerza vinculante para las partes de acuerdo con la ley. Los gastos que ocasionen la intervención de los amigables componedores serán cubiertos por la parte que resulte vencida. Cualquier divergencia que surja entre las partes como ocasión de la celebración, ejecución o liquidación de este contrato, no sea posible solucionar amigablemente, serán dirimidos por un tribunal de arbitramento de conformidad con las disposiciones antes citadas. Las disputas relacionadas con la aplicación y los efectos de las cláusulas de caducidad, terminación unilateral e interpretación unilateral y modificación unilateral no podrán ser sometidas a árbitramente. La intervención de los amigables componedores o tribunal de arbitramento no suspenderá la ejecución del contrato salvo que aquellos aspectos cuya ejecución dependa necesariamente de la solución de la controversia".*

6. La designación de los árbitros es una función de carácter judicial y sólo la puede ejercer el Centro de Arbitraje, en los casos de habilitación de acuerdo con lo antes expresado. Revisada la cláusula compromisoria transcrita en el punto No. 5, lo procedente era que las partes designaran conjuntamente los tres (3) árbitros que dirimirán dicha controversia, conforme lo establece el artículo 122 del decreto 1818 de 1998 que reza:

"ARTICULO 122. ARBITROS. Las partes conjuntamente nombrarán y determinarán el número de árbitros, o delegarán tal labor en un tercero, total o parcialmente. En todo caso el número de árbitros será siempre impar. Si nada se dice a este respecto los árbitros serán tres (3), salvo en las cuestiones de menor cuantía en cuyo caso el árbitro será uno solo.

Cuando se trate de arbitraje en derecho, las partes deberán comparecer al proceso arbitral por medio de abogado inscrito, a menos que se trate de asuntos exceptuados por la ley. (Artículo 118 de la Ley 446 de 1998 que modifica el artículo 7o. del Decreto 2279 de 1989)".

7. En ejercicio de la labor de apoyo y trámite en el proceso arbitral de **J.P.G. & CIA S.A., GERMAN VILLANUEVA CALDERON y OTRO - MIEMBROS DE LA UNION TEMPORAL OBRESAN - OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA** contra la **UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA**, en su debida oportunidad el Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición de esta entidad procedió a citar a las partes suscriptoras de la cláusula compromisoria a la audiencia de designación de árbitros varias veces aplazadas por solicitud de parte; para que conjuntamente de conformidad con el artículo 122 del decreto 1818 de 1998 designaran quienes dirimirán sus controversias como consta en las copias simples de las citaciones radicadas bajo los Nos. 023026, 023025, 023027, 023131, 023132, 023297, 023296, 023420, 023419, 023421, 023489, 023488, 023490, 023592, 023593 y 023594, que le anexo.

8. En la audiencia de designación de árbitros de fecha veinticuatro (24) de mayo de dos mil diez (2010), las partes conjuntamente designaron como árbitros para dirimir sus controversias a los doctores: **DIANA PATRICIA BOVEA MENDINUETA, ROSA GARCIA DE POLO y MIGUEL ANGEL POLO CAMPO**. Anexo copia simple del acta de la mencionada audiencia.

9. En ejercicio de la misma labor de apoyo y trámite, el Centro de Arbitraje les comunicó la designación como árbitros. Los Doctores Bovca Mendinueta y Polo Campo dentro de la oportunidad legal manifestaron su aceptación. La Doctora Rosa García de Polo comunicó la imposibilidad de aceptar por lo cual se citó nuevamente para que las partes conjuntamente designaran un nuevo árbitro en su reemplazo; audiencia que se adelantó el día ocho (8) de julio de dos mil diez (2010), designando en la misma al Doctor **JUAN ALBERTO POLO FIGUEROA** como principal y Suplente al Doctor **CAMILO DAVID HOYOS**, anexo copia simple del acta. Comunicándole la designación al Doctor Polo Figueroa, quien aceptó el cargo dentro de la oportunidad legal.
10. Así las cosas, el tribunal de arbitramento que dirimiría las controversias entre **J.P.G. & CIA S.A., GERMAN VILLANUEVA CALDERON y OTRO - MIEMBROS DE LA UNION TEMPORAL OBRESAN - OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA** contra la **UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA**, quedó conformado por designación conjunta de las partes acorde con el artículo 122 del decreto 1818 de 1998 por los Doctores: **DIANA BOVEA MENDINUETA, MIGUEL ANGEL POLO CAMPO y JUAN ALBERTO POLO FIGUEROA**. En ese sentido aclaramos que los árbitros no fueron sorteados ni seleccionados por el Centro como erradamente manifiesta en su escrito.
11. Como puede advertirse, al no existir incidencia alguna del Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición de esta entidad, respecto a la designación de los árbitros en el mencionado trámite arbitral, es totalmente improcedente e ilegal la solicitud de sorteo de nuevos árbitros para retomar el señalado proceso, al carecer el Centro de facultad jurisdiccional y por ende de habilitación. Admitir una interpretación contraria desconocería el tenor del artículo 116 de la Carta Política y de la Sentencia de la Corte Constitucional.
12. Así mismo, los miembros de la lista de árbitros responden por sus actuaciones en el ejercicio de sus funciones como tal, lo cual está previsto en el artículo séptimo del reglamento interno del Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición que a su letra dice:

"ARTICULO 7. El Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Santa Marta, sin perjuicio de la obligación de mantener mecanismos eficaces y seguros para la óptima prestación de sus servicios, no asume responsabilidad por actuaciones personales de los conciliadores, árbitros, secretarios de tribunales de arbitraje y amigables componedores, quienes responderán por hechos o actos suyos cuando haya lugar".

13. El Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Tercera, a través de su Secretaria, Doctora Paola Andrea Pérez Banguera, mediante oficio No. C-12 - 413 - D., radicado en esta entidad el día primero (1) de agosto del presente año bajo el No. 23823, remitió el expediente No.110010326000201100064 01 - (42218) - Actor: J.P.G.& CIA S. A. y otros - Miembros de la Unión Temporal "Obresan" el cual consta de nueve (9) cuadernos los cuales contienen un total de 2833 folios útiles.

14. La Alta Corporación mediante providencia proferida el día veinticinco (25) de abril de dos mil doce (2012) resolvió el recurso de anulación interpuesto en el trámite arbitral - Actor: J.P.G. & CIA S. A. y otros - Miembros de la Unión Temporal "Obresan", decretando la nulidad del laudo arbitral de fecha veintidós (22) de agosto de dos mil once (2011).

15. Conforme con el artículo 159 del decreto 1818 de 1998 en firme el fallo de la Alta Corporación procede la protocolización del expediente en la Notaría del Círculo que corresponda al lugar en donde funcionó el tribunal.

16. El Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición de esta entidad remitió a la Presidente del Tribunal Doctora **DIANA BOVEA MENDINUETA**, mediante oficio radicado el día veintisiete (27) de agosto de dos mil doce (2012) bajo el No. 029361, el expediente No.110010326000201100064 01 - (42218) - Actor: J.P.G.& CIA S. A. y otros - Miembros de la Unión Temporal "Obresan" el cual consta de nueve (9) cuadernos los cuales contienen un total de 2833 folios útiles, para lo de su competencia. Así las cosas en el Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición no reposa el expediente el cual contiene los anexos y pruebas. Adjunto copia simple del mencionado oficio con la constancia de su recibido.

17. El artículo 6 del C.P.C. establece:

"ARTÍCULO 6o. OBSERVANCIA DE NORMAS PROCESALES. <Artículo modificado por el artículo 2 de la Ley 794 de 2003. El nuevo texto es el siguiente:> Las normas procesales son de derecho público y orden público y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento, y en ningún caso, podrán ser derogadas, modificadas o sustituidas por los funcionarios o particulares, salvo autorización expresa de la ley.

Las estipulaciones que contradigan lo dispuesto en este artículo, se tendrán por no escritas."

Las normas que regulan el procedimiento arbitral son de derecho público y orden público y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento.

18. El artículo 168 inciso 2 del decreto 1818 de 1998 establece:

"Los árbitros y el secretario no tendrán derecho a la segunda mitad de sus honorarios cuando el tribunal cese en sus funciones por expiración del término fijado para el proceso o el de su prórroga, sin haberse expedido al laudo (Artículo 44 Decreto 2279 de 1989)".

Efectivamente en el trámite arbitral de J.P.G. & CIA S.A., GERMAN VILLANUEVA CALDERON y OTRO – MIEMBROS DE LA UNION TEMPORAL OBRESAN – OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA contra la UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA, los árbitros no tienen derecho a la segunda mitad de su honorarios por la anulación del laudo arbitral por la causal 5 contenida en el artículo 163 del decreto 1818 de 1998, es decir, haberse proferido el laudo después del vencimiento del término fijado para el proceso arbitral o su prórroga. El Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Tercera mediante providencia proferida el día veinticinco (25) de abril de dos mil doce (2012), anuló el laudo arbitral de fecha veintidós (22) de agosto de dos mil once (2011) por la causal enunciada.

Sin embargo, no es procedente acceder a la solicitud de que se utilicen esos recursos para cubrir los gastos administrativos iniciales. Lo anterior por ser las normas arbitrales de orden público, por lo que no se permite modificar el procedimiento por parte del particular.

19. La solicitud de retoma del proceso desde la fecha en que se produjo la extemporaneidad es improcedente e ilegal conforme a las normas vigentes para los trámites arbitrales que son de derecho público y orden público y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento. En este caso en firme la providencia de la Alta Corporación el Presidente del Tribunal protocolizará el expediente en la Notaría del Círculo que corresponda al lugar en donde funcionó el tribunal.

20. Reiteramos que el Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición de esta entidad carece de función jurisdiccional, son los interesados los llamados a presentar una nueva solicitud de convocatoria por tratarse de una justicia rogada la cual deberá estar conforme con lo preceptuado en el artículo 127 del Decreto 1818 de 1998 que a su letra dice:

"La solicitud de convocatoria deberá reunir todos los requisitos exigidos por la ley para la demanda y se dirigirá al centro de arbitraje indicado en el numeral 1º del artículo 15 de este decreto. (Decreto 2651 de 1991, artículo 13)".

Así mismo deberá cumplir con el pago de los gastos iniciales conforme lo establece el artículo 11 del Decreto 4089 de 2007 que reza:

"GASTOS INICIALES. Con la presentación de cualquier convocatoria a Tribunal de arbitramento, la parte convocante deberá cancelar a favor del Centro, los siguientes valores:

Si es un trámite de menor cuantía el equivalente a un salario mínimo mensual vigente. (1 SMMV).

Si es un trámite de mayor cuantía o de cuantía indeterminada, el equivalente a dos salarios mínimos mensuales vigentes (2 SMMLV).

Estos valores se imputarán a los gastos administrativos que decreta el Tribunal. En los casos donde el tribunal no pueda asumir sus funciones se reembolsarán dichos recursos".

21. El solicitante transcribe la demanda arbitral que sirvió de base al trámite arbitral fallido y la misma contiene como dirección de notificación judicial, calle 11 No. 1C – 23 – Oficina 309 Edificio Posihueica. Sin embargo, el día tres (3) de agosto de dos mil doce (2012), conforme a la información que reposa en nuestros archivos se intentó notificársele en esa dirección la comunicación radicada en esta entidad el día dos (2) de agosto de dos mil doce (2012) bajo el

No. 029155 y no fue posible por cuanto se nos manifestó que ahí no funcionaban las oficinas del destinatario.

Por lo anterior se advierte nuevamente que el solicitante no aportó su actual dirección de notificación judicial.

ANEXOS:

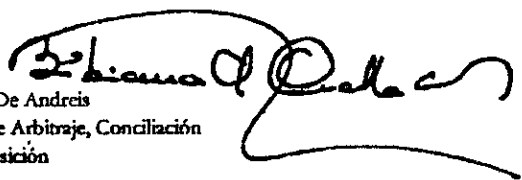
1. Copia simple de las citaciones radicadas bajo los No. 023026, 023025, 023027, 023131, 023132, 023297, 023296, 023420, 023419, 023421, 023489, 023488, 023490, 023592, 023593 y 023594. (16 folios).
2. Copia simple del acta de audiencia de designación de fecha veinticuatro (24) de mayo de dos mil diez (2010). (3 folios).
3. Copia simple del acta de audiencia de designación de fecha ocho (8) de julio de dos mil diez (2010). (3 folios).
4. Copia simple del oficio radicado el día veintisiete (27) de agosto de dos mil doce (2012) bajo el No. 029361. (1 folio).

En el suministro de cualquier información adicional estaré presto a colaborarle gustosamente.

Atentamente,


CESAR M. RIASCOS NOGUERA
Presidente Ejecutivo

Anexo: Lo anunciado
Bibiana O. /32-24-20

Preparó y Aprobó: 
Bibiana M. Ovalle De Andreis
Directora Centro de Arbitraje, Conciliación
y Amigable Composición

DIANA PATRICIA BOVEA MENDINUETA
ABOGADA TITULADA UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA
ESPECIALISTA EN DERECHO PUBLICO UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COLOMBIA

Santa Marta D.T.C.H., Octubre 09 de 2012.

Doctor
GERMÁN VILLANUEVA CALDERON
Ciudad

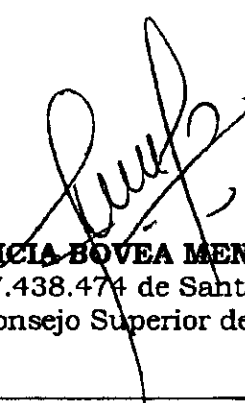
Apreciado Doctor.

Muy respetuosamente me dirijo a Usted, a fin de hacer entrega de los siguientes cheques de gerencia:

- 1) Cheque de gerencia No. 3968059 de fecha Octubre 08 de 2012 del Banco de Bogotá a su nombre, por valor de **OCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS** (\$8.268.135,00). Este pago fue realizado por Diana Bovea Mendinueta.
- 2) Cheque de gerencia No. 69601-1 de fecha Agosto 23 de 2012, del Banco DAVIVIENDA a su nombre por valor de **SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS** (\$6.852.389,00). Este pago fue realizado por Juan Polo Figueróa.

Los anteriores cheques de gerencia obedecen al pago del cincuenta por ciento (50%) del valor de los honorarios de árbitros que recibimos el Dr. Juan Polo Figueróa y yo, de parte de los miembros de la Unión Temporal OBRESAM. El excedente del valor entregado por mí, corresponde al cincuenta por ciento (50%), del saldo de la protocolización del expediente en la Notaria Cuarta del Círculo de Santa Marta.

Con todo respeto, atentamente.


DIANA PATRICIA BOVEA MENDINUETA
C.C. No. 57.438.474 de Santa Marta
T.P. No. 90.265 Consejo Superior de la Judicatura


Calle 10 No.11a-12, tels. 095-4217114-4233443, Santa Marta D.T.C.H.



DAVIVIENDA CHEQUE DE GERENCIA

Cheque No. **69601-1** 51

Año 2012 Mes 08 Día 23

\$ 6,852,389.00

Chequera: 550040002731

Páguese a: **GERMAN VILLANUEVA CALDERON**

Seis Millones Ochocientos Cincuenta y Dos Mil Trescientos Ochenta y Seis pesos con 0/100 M/C

54/2012 - Pagado al Ingreso en Títulos

***** Pesos M/C *****

\$6,852,389 CON 00 CTS

PARA CONCORDAR CON EL EMISOR
EN EL CASO DE CANCELACION DEL CHEQUE

[Firma]

Firma(s) Autorizada(s)

2# 00000005109500608629310696011

Banco de Bogotá

221 - C.C. Buenavista
Av. Libertador CC Buenavista Lc. 6A - Santa Marta
CICHE No. 221-7777-4

Cheque de Gerencia No. **3968059** 01

Año 2012 Mes 10 Día 08

\$ 8,268,135.00

Páguese a: **GERMAN VILLANUEVA CALDERON**

Ocho Millones Doscientos Sesenta y Ocho Mil Ciento Treinta y Cinco pesos

00/100**

PAGUESE AL PRIMER BENEFICIARIO

3968059

Banco de Bogotá

8,268,135.00*



Firma(s)

6# 0001000010221777743968059

628

Tribunal Administrativo del Magdalena
Secretaría General
Ley 1437 de 2011

RADICACIÓN: N° 47-001-2333-002-2014-0241-00.
Actor: Luis Alejandro Corzo Mantilla
Demandado: Ministerio de Justicia y otros
Medio de Control: Reparación Directa

PASO AL DESPACHO

Del H. Magistrado Dr. Edgar Vásquez Contreras, hoy 4 de agosto de 2014 el expediente de la referencia, informándole que se encuentra pendiente para decidir sobre su admisión.

Consta de un (1) cuaderno principal con 628 folios útiles incluyendo el presente con ocho (8) traslados. Así mismo se le informa que no aportó Cds.

Sírvase proveerlo que estime pertinente.

Atentamente,


Jaime Ortiz Romero
Secretario



**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA**

Santa Marta, diecinueve (19) de agosto de dos mil catorce (2014)

MAGISTRADO PONENTE: EDGAR ALEXI VASQUEZ CONTRERAS

RADICACIÓN: 47-001-2333-003-2014-000241-00
ACTOR: Luis Alejandro Corzo Mantilla.
DEMANDADO: Ministerio de Justicia y del Derecho y otros.
MEDIO DE CONTROL: Reparación Directa

**SISTEMA DE ORALIDAD
-Ley 1437 de 2011 -**

Decide el Despacho sobre la admisión de la demanda presentada por Luis Alejandro Corzo Mantilla y otros contra el Ministerio de Justicia y del Derecho y otros, en ejercicio del medio de control de Reparación Directa.

CONSIDERACIONES

a) Ausencia de prueba de existencia y representación legal de las personas jurídicas de derecho privado.

El numeral 4o del artículo 166 de la Ley 1437 de 2011 establece que con la demanda deberá acompañarse "prueba de la existencia y representación en el caso de las personas jurídicas de derecho privado."

En el caso sub-examine el señor JUAN PABLO GONZALEZ ROSALES manifiesta ser el Gerente y Representante Legal de la empresa J.P.G & CIA S.A., sin aportar el certificado de existencia y representación legal correspondiente.

Este documento es indispensable para la individualización de los integrantes de la misma, en aras de establecer quienes tienen capacidad para ser parte y para comparecer en este proceso judicial.

b) Escrito de la demanda y de sus anexos en medio magnético.

Se advierte que la parte accionante no allegó con el escrito de demanda copia de ésta en medio magnético ni de sus anexos, por lo que se le requiere para que allegue la copia solicitada.

c) Constancia de notificación y ejecutoria de la providencia de 25 de abril de 2012 del Consejo de Estado que decidió decretar la nulidad del laudo arbitral proferido el 22 de agosto de 2011 dentro del proceso arbitral promovido por J.P.G. & CIA S.A., Germán Villanueva Calderón y Ricardo Luis Canabal Guzmán, integrante de la Unión Temporal Obras Especiales de Santa Marta contra la Universidad del Magdalena, documento necesario para establecer el término de caducidad del medio de control y la oportunidad de la presentación de la demanda.

De acuerdo con lo anterior y atendiendo lo dispuesto en el artículo 170 del C.P.A.C.A¹., no es posible dar curso a la presente demanda, hasta tanto la parte actora proceda a corregir los defectos anotados.

En mérito de lo expuesto este Despacho,

RESUELVE

PRIMERO: INADMITIR la presente demanda y ordenar que en el término de diez (10) días contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia, la demandante:

a) Aporte el certificado de existencia y representación legal correspondiente a la empresa JPG & CIA S.A.

b) Allegue copia de la demanda y de sus anexos en medio magnético, con el fin de realizar las notificaciones correspondientes.

¹ **Artículo 170. Inadmisión de la demanda.** Se inadmitirá la demanda que carezca de los requisitos señalados en la ley por auto susceptible de reposición, en el que se expondrán sus defectos, para que el demandante los corrija en el plazo de diez (10) días. Si no lo hiciere se rechazará la demanda.

c) Aporte constancia de notificación y ejecutoria de la providencia de 25 de abril de 2012 del Consejo de Estado que decidió decretar la nulidad del laudo arbitral proferido el 22 de agosto de 2011 dentro del proceso arbitral promovido por J.P.G. & CIA S.A., Germán Villanueva Calderón y Ricardo Luis Canabal Guzmán, integrante de la Unión Temporal Obras Especiales de Santa Marta contra la Universidad del Magdalena.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente providencia por estado electrónico, como lo indica el artículo 201 del C.P.A.C.A.

TERCERO: Reconocer personería al abogado Luis Alejandro Corzo Mantilla, identificado con la C.C. No. 88.213.988 de Cúcuta y T.P. No. 101.576 del C. S. de la J. como apoderado de los señores Juan Pablo González Rosales representante de JPG & CIA S.A., German Villanueva Claderon y Ricardo Luis Canabal Guzmán

CUARTO: De la presente decisión, déjese constancia en el sistema gestión siglo XXI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

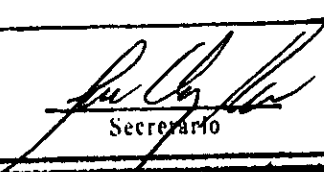


EDGAR ALEXI VÁSQUEZ CONTRERAS
Magistrado

TRIBUNAL CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA
SECRETARIA GENERAL

NOTIFICACIÓN POR ESTADO ELECTRÓNICO
CERTIFICACION

El auto anterior se notificó POR ANOTACIÓN EN
ESTADOS ELECTRONICOS No 026 Hoy 21-08-2014


Secretario

Notificaciones Tribunal 03 Administrativo del Magdalena

De: Notificaciones Tribunal 03 Administrativo del Magdalena
<tadmin03mgd@notificacionesrj.gov.co>
Enviado el: jueves, 21 de agosto de 2014 03:48 p.m.
Para: 'alejocorman@gmail.com'
Asunto: auto inadmite demanda radicado 2014-241
Datos adjuntos: 2014-241.pdf

Señores:
Apoderados dentro del medio de control

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 201 inciso 3° del CPACA por medio del presente mensaje de datos COMUNICO a usted (ES) que dentro de medio de control **REPARACIÓN DIRECTA** formulada por **LUIS ALEJANDRO CORZO MANTILLA** contra **MINISTERIO DE JUSTICIA Y OTROS** identificado con el No. de Rad. 47-001-2333-003-**2014-00241-00**, se profirió providencia de fecha **19 DE AGOSTO de 2014** por medio de la cual se ordena **INADMITIR LA DEMANDA**, notificada por estado electrónico No. 26 de fecha 21 de agosto de 2014.

Para tal efecto puede consultar el estado electrónico en la página web:
<http://www.ramajudicial.gov.co/cs/j/publicaciones/ce/seccion/400/1456/5059/Estados-electronicos>.

Atentamente,

JUAN JOSE MEJIA RIVEROS
Notificador

AVISO IMPORTANTE: Esta dirección de correo electrónico tadmin03mgd@notificacionesrj.gov.co es de uso único y exclusivo de envío de notificaciones, todo mensaje que se reciba no será leído y automáticamente se eliminará de nuestros servidores, apreciado usuario si tiene alguna solicitud por favor comuníquese a la siguiente línea telefónica: 4213901 o envíenos un correo electrónico a la siguiente dirección: tadtvo03mag@cendoj.ramajudicial.gov.co

632

Notificaciones Tribunal 03 Administrativo del Magdalena

De: Microsoft Outlook
<MicrosoftExchange329e71ec88ae4615bbc36ab6ce41109e@etbcsj.onmicrosoft.com>
Enviado el: jueves, 21 de agosto de 2014 03:50 p.m.
Para: tadmin03mgd@notificacionesrj.gov.co
Asunto: Retransmitido: auto inadmite demanda radicado 2014-241
Datos adjuntos: details.txt; Datos adjuntos sin título 00005.txt

Se completó la entrega a estos destinatarios o grupos, pero el servidor de destino no envió información de notificación de entrega:

alejocorman@gmail.com

Asunto: auto inadmite demanda radicado 2014-241



4282

**PROCURADURIA 155 JUDICIAL II ADMINISTRATIVA
SANTA MARTA - MAGDALENA**

Santa Marta, cinco (5) de septiembre de dos mil catorce (2014).


Doctor
EDGAR ALEXI VASQUEZ CONTRERAS
MAGISTRADA PONENTE.
Tribunal Administrativo del Magdalena
Santa Marta – Magdalena.

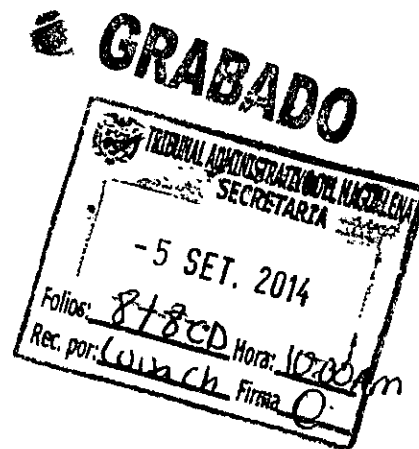
Expediente: 47-001-2333-000-2014-00241-00
Demandante: JUAN PABLO GONZALEZ Y OTRO.
Demandado: NACIÓN MINISTERIO DE JUSTICIA Y OTROS
Medio de Control: REPARACIÓN DIRECTA

Respetuosamente llego a su Despacho con el fin de remitir memorial allegado a mi Despacho dirigido al proceso de la referencia, lo anterior para que el señor magistrado ponente resuelva lo de su competencia.

Anexo memorial con 8 folios y 8 CD.

Con respeto,


BIBIANA CECILIA ORLANDO GOMEZ
Procuradora 155 Judicial II Administrativo.
Agente del Ministerio Público.



Señores

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA

Att. Dr. Edgar Alexi Vasquez Contreras

Magistrado Ponente

E. S. D.

Medio de Control	Reparación Directa
Radicado	47-001-2333-003-2014-00421-00 291
Demandante	German Villanueva Calderón y Otros
Demandado	Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho y Otros

Luis Alejandro Corzo Mantilla, mayor de edad y vecino de esta ciudad, identificado con CC N° 88.213.988 de Cúcuta, abogado en ejercicio, portador de la Tarjeta Profesional N° 101.576 del C. S. de la J., actuando en calidad de apoderado judicial de los Demandantes, conforme al poder otorgado, me dirijo a su Honorable Despacho con el objeto de dar cumplimiento a lo ordenado en el auto de fecha 19 de Agosto de 2014 notificado por estado a los 21 días de los mismos.

Con gran respeto hacia el Despacho y dentro del término de ley, subsano los defectos fácticos de los cuales adolece la acción de la referencia, de la siguiente manera:

- **Ausencia de prueba de existencia y Representación legal de las Personas Jurídicas de Derecho privado:**

Toda vez que por error involuntario con la formulación del presente Medio de Control no se allego el certificado de Existencia y Representación legal de la Sociedad J.P.G. & CIA S.A., me permito allegar el mismo, debidamente expedido por la Cámara de Comercio, en donde se puede observar que mi Poderdante el Sr. Juan Pablo González Rosales, ostenta la calidad de Gerente y Representante Legal de la empresa, razón por la cual esta facultado para otorgar poder y obrar en representación de la misma.

- **Escrito de la Demanda y sus Anexos en medio magnético:**

En cuanto al literal b) de la providencia en mención, me permito allegar en medio magnético (8 CD's) la respectiva copia del escrito contentivo de la Demanda (Documento de Word), al igual que los anexos de la misma (Documentos en Pdf), para que se surtan los traslados a los demandados.

- **Constancia de Notificación y Ejecutoria de la providencia de 25 de abril de 2012 del Consejo de Estado:**

Aduce el Despacho que para efectos de establecer el término de caducidad del medio de Control y la oportunidad de la presentación de la demanda, es necesario aportar la respectiva Constancia de Notificación y Ejecutoria de la providencia de 25 de abril de 2012 elevada por el Consejo de Estado.

El artículo 166 del CPACA, al tenor del Numeral 1° establece la obligación de acompañar con la demanda la copia del acto acusado, con las constancias de publicación, comunicación, notificación o ejecución, según el caso.

Es preciso indicar que el Juez de manera oficiosa, previo a entrar a estudiar de fondo el asunto, puede requerir previamente para que se allegue el acto acusado, lo anterior, con el fin de garantizar el derecho constitucional fundamental al acceso a la administración de justicia.

El Juez en pro de garantizar los derechos debe requerir a la entidad pertinente, y no tomar una medida tan drástica, toda vez que se comprende que dicha exigencia es de carácter meramente formal sin que a su amparo sea posible coartar el derecho a una tutela judicial efectiva.

El Juez en consecuencia debe obrar de manera garantista, pues esta instituido para proteger los Derechos de los Ciudadanos, y si concibe el Despacho que los documentos que obran en el expediente no cumplen el requisito conforme la normatividad, esta en la obligación de garantizar el acceso efectivo a la administración de justicia, y en consecuencia solicitar previamente a la Entidad los Actos Administrativos y las constancias de notificación de los mismos.

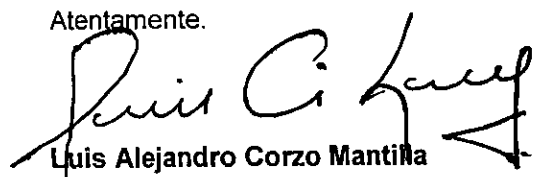
Empero lo anterior se procedió a elevar solicitud al Consejo de Estado Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, por medio de la cual se solicita la expedición de la providencia en mención, al igual que la Constancia de notificación y ejecutoria de la misma, la cual me permito allegar a su Despacho, para su conocimiento.

Finalmente y pese a que el Despacho en la Providencia de fecha 19 de agosto de 2014, no hace alusión al respecto, me permito allegar Poder otorgado por los Actores dirigido al Tribunal Administrativo de Oralidad del Magdalena, por medio del cual se me faculta para interponer el Medio de Control de la Referencia, máxime que el poder que obra en el expediente estaba dirigido a la Procuraduría Delegada para Asuntos Administrativos y tenía por objeto tramitar la Audiencia de Conciliación.

En los anteriores términos, dejo subsanado los defectos de los cuales adolecía la Demanda de la referencia, conforme lo ordenado por su despacho mediante providencia.

Agradezco su vocación de servicio en la administración de justicia

Atentamente.


Luis Alejandro Corzo Mantilla
CC N° 88.213.988 de Cúcuta.
TP N° 101.576 del C. S. de la J.

Procuraduría No. 155 Judicial II en
Asuntos Administrativos de Santa Marta

Fecha: 2 Septiembre 2014

Hora: 3:20 p.m.

Recibido por: Cristina Cabrales L.

Anexo: 8 Cd's.

Anexo. Lo enunciado.


Señores

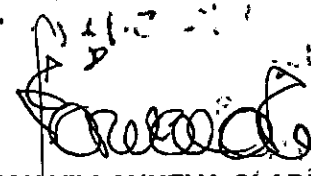
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL MAGDALENA
JUZGADOS ADMINISTRATIVOS
E. S. D.

JUAN PABLO GONZALEZ ROSALES, mayor de edad, identificado con la CC N° 8.708.745 de Barranquilla, quien obra en calidad de Gerente y Representante Legal de **J.P.G. & CIA S.A.**, Sociedad Colombiana, constituida mediante Escritura Pública N° 50 del 28 de Enero de 1993 de la Notaria Única de Santo Tomás, inscrita el 25 de febrero de 1993 bajo el N° 48.547 del libro respectivo de la Cámara de Comercio de Barranquilla; **GERMAN VILLANUEVA CLADERON**, igualmente mayor de edad e identificado con la Cédula de Ciudadanía N° 12.547.660 expedida en Santa Marta y **RICARDO LUIS CANABAL GUZMAN**, igualmente mayor de edad e identificado con la Cédula de Ciudadanía N° 6.872.383 expedida en Montería; integrantes todas de la **UNIÓN TEMPORAL OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA - OBRESAN**, constituida mediante documento privado del 15 de Noviembre de 2005, por medio del presente documento conferimos poder Ampio y Suficiente en cuanto a Derecho hubiere lugar al Dr. **Luis Alejandro Corzo Mantilla**, identificado con la Cédula de Ciudadanía N° 88.213.988 de Cúcuta, de profesión Abogado y portador de la Tarjeta profesional N° 101.576 del Consejo Superior de la Judicatura, para que en mi nombre y representación presente Demanda Contenciosa de Reparación Directa, de conformidad con el artículo 140 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en contra de la **NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR - MINISTERIO DE JUSTICIA - CAMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA - CENTRO DE ARBITRAJE, CONCILIACIÓN Y AMIGABLE COMPOSICIÓN - UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA - DIANA BOVEA MENDIQUETA, MIGUEL ANGEL POLO CAMPO y JUAN ALBERTO POLO FIGUEROA** (En calidad de Árbitros del Tribunal de Arbitramento), con ocasión de la Falla en el ejercicio de la Función Jurisdiccional por Particulares, acaecida en la expedición del Laudo Arbitral de fecha 22 de agosto de 2011 por el Tribunal de Arbitramento de **J.P.G. & CIA S.A.**, **GERMAN VILLANUEVA CLADERON** y **RICARDO LUIS CANABAL GUZMAN**, **INTEGRANTES DE LA UNIÓN TEMPORAL OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA - OBRESAN**, **CON UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA**

Nuestro apoderado queda ampliamente facultado, en especial por lo estipulado en el artículo 70 del CPC, y para sustituir, reasumir, desistir, recurrir, recibir sumas de dinero, transigir, conciliar y en especial para asistirme si fuera el caso en la Audiencia de la Ley 640 de 2001, al igual que para las consignadas en las demás normas complementarias, de igual forma para cobrar ejecutivamente las condenas que se interpongan, etc, y para con este mismo poder formular solicitud ante la Entidad o Entidades que deban efectuar el pago para el reconocimiento de la obligación, presentar la cuenta de cobro, recibir y hacer efectivo los cheques por los cuales se cancelaren las sumas reconocidas por la respectiva Providencia.


Poderdante


JUAN PABLO GONZALEZ ROSALES
CC N° 8.708.745 de Barranquilla
Representante Legal de J.P.G. & CIA S.A.
Societario Integrante de UT OBRESAN


GERMAN VILLANUEVA CLADERON
CC N° 12.547.660 de Santa Marta
Integrante UT OBRESAN


RICARDO LUIS CANABAL GUZMAN
CC N° 6.872.383 de Montería
Integrante UT OBRESAN

Acepto



Luis Alejandro Corzo Mantilla
CC N° 88.213.988 de Cúcuta
TF N° 101.576 del C. S. De la J.

30 JUL. 2014

NOTARIA CUARTA DEL CIRCULO DE BARRANQUILLA
DILIGENCIA DE PRESENTACIÓN PERSONAL Y RECONOCIMIENTO

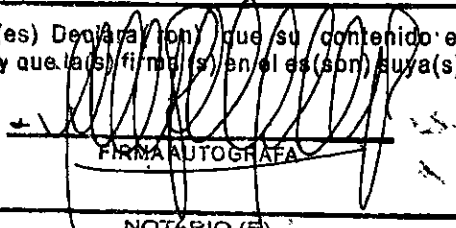
El suscrito Notario (E) Certifica que este escrito fue presentado personalmente por:

NOTARIA 4 BARRANQUILLA
Autenticaciones



Fecha: 30/07/2014 GONZALEZ ROSALES JUAN PABLO Hora: 15:23
Doc No: 8.706.745

Quien(es) Declararon que su contenido es cierto y que la(s) firma(s) en el es (son) suya(s)


FIRMA AUTOGRAFA

NOTARIO (E)

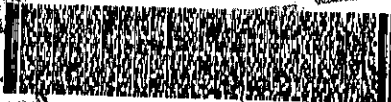
NOTARIA CUARTA
DEL CIRCULO DE BARRANQUILLA
DAVID ALEJANDRO ARCE GUTIERREZ
NOTARIO ENCARGADO

30 JUL. 2014

NOTARIA CUARTA DEL CIRCULO DE BARRANQUILLA
DILIGENCIA DE PRESENTACIÓN PERSONAL Y RECONOCIMIENTO

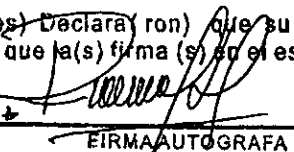
El suscrito Notario (E) Certifica que este escrito fue presentado personalmente por:

NOTARIA 4 BARRANQUILLA
Autenticaciones



Fecha: 30/07/2014 VASABAL GUZMAN RICARDO LUIS Hora: 15:23
Doc No: 8.872.383


Quien(es) Declararon que su contenido es cierto y que la(s) firma(s) en el es (son) suya(s)



FIRMA AUTOGRAFA

NOTARIO (E)

NOTARIA CUARTA
DEL CIRCULO DE BARRANQUILLA
DAVID ALEJANDRO ARCE GUTIERREZ
NOTARIO ENCARGADO


LA SUSCRITA NOTARIA 24 ENCARGADA DE BOGOTÁ, CERTIFICA QUE ESTE ESCRITO FUE PRESENTADO PERSONALMENTE POR




IDENTIFICADO CON  No 12.541.660

DE Sta Marta Y MANIFESTO QUE SU CONTENIDO ES CIERTO Y QUE LA FIRMA PUESTA EN EL ES SUYA

FECHA: 29 AGO 2014


HUELLA



NOTARIA 24

GLADIA ANDREA ARIZAGA GOMEZ
NOTARIA VENTICUATRO ENCARGADA DE BOGOTÁ D.C.

Número de operación: 01SCA0825034 Fecha: 20140825 Hora: 115228 Pagina : 1

CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O DE INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.

"EN DICIEMBRE DE ESTE AÑO SE ELEGIRÁ JUNTA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE COMERCIO. LAS INSCRIPCIONES DE CANDIDATOS DEBEN HACERSE DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE. LAS MODIFICACIONES DE LAS LISTAS PUEDEN EFECTUARSE HASTA EL ULTIMO DIA HABIL DE OCTUBRE. PARA INFORMACION DETALLADA DIRIGIRSE A LA SEDE ADUANA O COMUNICARSE AL SIGUIENTE TELEFONO: 3303756."-----

EL SUSCRITO SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA, CON FUNDAMENTO EN LAS INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL:

C E R T I F I C A

Que por Escritura Pública No. 50 del 28 de Enero de 1993, otorgada en la Notaria Unica de Santo Tomas, inscrito(as) en esta Cámara de Comercio, el 25 de Febrero de 1993 bajo el No. 48,547 del libro respectivo, fue constituida la sociedad-----
limitada denominada JUAN PABLO GONZALEZ & COMPANIA LTDA. -----

C E R T I F I C A

Que por Escritura Pública No. 1,326 del 05 de Sep/bre de 1997, otorgada en la Notaria Unica de Santo Tomas, inscrito(as) en esta Cámara de Comercio, el 02 de Dic/bre de 1997 bajo el No. 72,722 del libro respectivo, la sociedad antes mencionada-----
cambio de razon social, por la denominacion J.P.G. & CIA.LIMITADA -

C E R T I F I C A

Que por Escritura Pública No. 415 del 12 de Febrero de 2003, otorgada en la Notaria 10. de Barranquilla, inscrito(as) en esta Cámara de Comercio, el 20 de Marzo de 2003 bajo el No. 103,950 del libro respectivo, la sociedad antes mencionada-----
se transformo en sociedad anonima denominada J.P.G. & CIA S.A. ----

C E R T I F I C A

Que dicha sociedad ha sido reformada por las siguientes escrituras y/o documentos privados:

Numero	aaaa/mm/dd	Notaria	No. Insc o Reg	aaaa/mm/dd
1,532	1995/10/19	Notaria Unica de Santo Tomas	61,026	1995/10/24
207	1998/02/11	Notaria 9a. de Barranquilla	73,929	1998/02/19
294	1999/01/29	Notaria 10a. de Barranquilla	80,340	1999/04/09
1,200	1999/04/20	Notaria 10o de Barranquilla	80,681	1999/04/26
570	1999/05/26	Notaria Unica de Santo Tomas	82,635	1999/08/23
2,152	2002/07/10	Notaria 10. de Barranquilla	100,002	2002/07/29
415	2003/02/12	Notaria 10. de Barranquilla	103,950	2003/03/20
525	2003/05/17	Notaria Unica de Santo Tomas	105,041	2003/05/21
1,445	2003/06/05	Notaria 10. de Barranquilla	105,472	2003/06/13
2,107	2004/10/30	Notaria 9. de Barranquilla	114,235	2004/11/05
2,196	2004/11/16	Notaria 9. de Barranquilla	114,452	2004/11/19
1,157	2006/03/02	Notaria 5 a. de Barranquilla	122,898	2006/03/03
6,307	2010/10/15	Notaria 5a. de Barranquilla	163,433	2010/10/21

C E R T I F I C A

Que de acuerdo con la(s) escritura(s) o el(los) documento(s) arriba

Número de operación:01SCA0825034 Fecha: 20140825 Hora: 115228 Pagina : 2

CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA

citado(s), la sociedad se rige por las siguientes disposiciones:

DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

J.P.G. & CIA S.A.-----

DOMICILIO PRINCIPAL: Barranquilla.

NIT No: 800.193.032-5.

MATRICULA MERCANTIL: 167,973.

C E R T I F I C A

Direccion Comercial:

CL 77 B No 57 - 141 OF 301 en Barranquilla.

Email Comercial:

casamatriz@jpgciasa.com

Pagina

Web:

www.jpgciasa.com

Telefono: 3686701.

Direccion Judicial:

CL 77 B No 57 - 141 OF 301 en Barranquilla.

Email Notificacion

Judicial:

casamatriz@jpgciasa.com

Pagina

Web:

www.jpgciasa.com

Telefono: 3686701.

C E R T I F I C A

DURACION: Que la sociedad no se halla disuelta y su término de
duración se fijó hasta el
28 de Enero de 2050.

C E R T I F I C A

OBJETO SOCIAL: El objeto social de la compania consiste en la prestacion de servicios profesionales y la ejecucion de obras relacionadas con la arquitectura y la ingenieria, la explotacion de la construccion en todas sus manifestaciones coomo construccion de viviendas para la venta, bien sean casas de habitacion unifamiliares, conjuntos residenciales o edificios familiares para la venta de pisos o apartamentos; desarrollar planes de urbanizaciones, viviendas poulares y planes de proiedad horizontal; la construccion, senalizacion, iluminacion y arborizacion de vias; el suministro de redes electricas y telefonicas; la construccion y el montaje de muelles y terminales de transporte; los montajes mecanicos y electricos; el dragado o remocion de sedimentos; la prestacion de servicios de consultorio en todas sus manifestaciones; la produccion de concretos; la adquisicion de inmuebles a titulo oneroso con destino a parcelarlos, urbanizarlos, construirlos, mejorarlos, darlos o recibirlos en arrendamiento, enajenarlos, pignorarlos y/o hipotecarlos; la exploracion y explotacion de minas en general, lo mismo que el beneficio, transformacion, importacion, exportacion y comercializacion de minerales; comprar y vender materiales para la construccion y decoracion, bienes muebles e inmuebles, dar en venta inmuebles, convertir inmuebles en propiedad horizontal, compra, venta y alquiler de maquinarias y equipos para la construccion y

Número de operación: 01SCA0825034 Fecha: 20140825 Hora: 115228 Pagina : 3

CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA

decoracion; importacion y exportacion de maquinarias y equipos para trabajo pesado y toda clase de vehiculos, materiales para la construccion y decoracion en general; celebrar toda clase de contratos relativos al transporte aereo, maritimo, fluvial y terrestre, tales como comprar, vender, dar y recibir en arrendamiento, importar y exportar naves y equipos de transporte, instalar, tener, operar plantas de lavado de carbon de coquizacion del mismo, de fundicion y refinacion de metales preciosos, la sociedad podra dedicarse a la prestacion de servicios de aseo, recoleccion de desechos, recicljes de basura, obras sanitarias y en general todolo relacionado con este ramo, la sociedad podra intervenir y/o participar en otras sociedades ya establecidas o que en el futuro se establezcan, pudiendose fusionarse con ellas, sean o no de objeto analogo o complementario; la sociedad podra disenar, construir, mejorar, conservar y operar carretras mediante le sistema de concesion; tambien podra la sociedad intervenir en toda clase de negociaciones de valores bursatiles. Para el cumplimiento de sus actividades podra adquirir, conservar, enajenar, y gravar toda clase de bienes raices y muebles que sean necesarios para el logro de sus fines sociales, girar, emitir, aceptar, garantizar, negociar, endosar, cobrar, y protestar cheques, letras de cambio, obligaciones, ordenes de pago, libranzas, pagares, cartas de porte, facturas cambiarias de compraventa y demas titulos valores y documentos de credito, tomar y dar dinero a titulo de prestamo, con garantias especificas o sin ellas, suscribir acciones o adquirir interes social en otras companias que tengan fines similares, bien sea como accionista fundadora o no, fusionarse con ella o incorporarse en ellas, o absorbiendolas. Adquirir, enajenar y gravar acciones o derechos en otras empresas. En forma genral podra celebrar y/o ejecutar en su propio nombre o por cuenta de terceros, en participacion con ellos toda clase de actos y contratos de caracter civil o comercial ya sea con entidades publicas o particulares nacionales y/o extranjeras y llevar a cabo toda clase de negocios que tengan relacion directa con el objeto que la sociedad se propone desarrollar, todo con el fin de proporcionarse renta de trabajo. Queda prohibido a la sociedad comprometer su responsabilidad y garantizar con sus bienes al cumplimiento de obligaciones distintas de las suyas propias.-----

C E R T I F I C A

CAPITAL	Nro Acciones	Valor Acción
Autorizado		
\$*****1,139,697,000	*****1,139,697	*****1,000
Suscrito		
\$*****1,139,697,000	*****1,139,697	*****1,000
Pagado		
\$*****1,139,697,000	*****1,139,697	*****1,000

C E R T I F I C A

ADMINISTRACION: Son funciones de la Junta entre otras: Establecer agencias y dependencias en cualquier lugar del pais o del exterior. No requieren de autorizacion para actuar el representante legal, el gerente, ni el suplente del gerente requieran autorizacion en aquellas actuaciones en los cuales la ley exija su autorizacion. Actuaran de manera ilimitada en relacion con la cuantia de los actos o contratos a suscribir el nombre de la compania, ante entidades finan

Número de operación:01SCA0825034 Fecha: 20140825 Hora: 115228 Pagina : 4

CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA

cieras y demas organismos. La representacion legal de la sociedad y la gestion de los negocios sociales estaran a cargo del gerente, con juntamente con un suplente, quien lo reemplazara en sus faltas absolutas o temporales. Son funciones del gerente entre otras. Constituir, para propositos concretos, los apoderados especiales que juzgue necesarios para representar a la sociedad judicial o extrajudicialmente.-----

C E R T I F I C A

Que por Escritura Pública No. 415 del 12 de Febrero de 2003, otorgada en la Notaria 10. de Barranquilla cuya parte pertinente se inscribió en esta Cámara de Comercio, el 20 de Marzo de 2003 bajo el No. 103,950 del libro respectivo, fueron hechos los siguientes nombramientos:

CLASE: JUNTA DIRECTIVA

Principales

1. Gonzalez Rosales Juan Pablo	CC.*****8,708,745
2. Rumie Mejia Vanessa	CC.*****32,680,928
3. SIN ACEPTACION	*****

C E R T I F I C A

Que por Escritura Pública No. 50 del 28 de Enero de 1993, otorgada en la Notaria Unica de Santo Tomas cuya parte pertinente se inscribió en esta Cámara de Comercio, el 25 de Febrero de 1993 bajo el No. 48,547 del libro respectivo, fueron hechos los siguientes nombramientos:

Cargo/Nombre	Identificación
Gerente.	
Gonzalez Rosales Juan Pablo	CC.*****8708745

C E R T I F I C A

Que según Acta No. 27 del 17 de Nov/bre de 2010 correspondiente a la Junta Directiva en Barranquilla, de la sociedad: J.P.G. & CIA S.A. cuya parte pertinente se inscribió en esta Cámara de Comercio, el 23 de Nov/bre de 2010 bajo el No. 164,214 del libro respectivo, fueron hechos los siguientes nombramientos:

Cargo/Nombre	Identificación
Suplente del Gerente	
Silva Clemow Pedro Guillermo	CC.*****73573617

C E R T I F I C A

Que según Acta No. 28 del 16 de Sep/bre de 2011 correspondiente a la Asamblea de Accionistas en Barranquilla, de la sociedad: J.P.G. & CIA S.A. cuya parte pertinente se inscribió en esta Cámara de Comercio, el 27 de Sep/bre de 2011 bajo el No. 173,905 del libro

Número de operación: 01SCA0825034 Fecha: 20140825 Hora: 115228 Pagina : 5

CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA

respectivo, fueron hechos los siguientes nombramientos:

Cargo/Nombre	Identificación
Revisor Fiscal	
García Castillo Maribel	CC.*****32,772,042

C E R T I F I C A

Que entre los asociados existe pactada clausula de arbitraje para la solución de controversias.

C E R T I F I C A

Que en esta Cámara de Comercio no aparecen inscripciones posteriores de documentos referentes a reforma, disolución, liquidación o nombramientos de representantes legales de la expresada sociedad.

C E R T I F I C A

Que su última Renovación fue el: 31 de Marzo de 2014.

La información sobre embargos de establecimiento se suministra en Certificados de Matrícula, la de contratos sujetos a registro, en Certificados Especiales.

C E R T I F I C A

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso y de la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de Registro aquí certificados quedan en firme Diez (10) días hábiles después de la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos.





CAMARA
DE COMERCIO DE
CUCUTA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA
SECRETARÍA GENERAL
Ley 1437 de 2011

83

RADICACIÓN: N° 47-001-2333-002-2014-0241-00.
DEMANDANTE: Luis Corzo Mantilla
DEMANDADO: Ministerio de Defensa y otros
MEDIO DE CONTROL: N y R del derecho

P A S O A L D E S P A C H O

Del Magistrado Edgar Vásquez Contreras, hoy 12 de septiembre de 2014 el expediente de la referencia, informándole que el término de 10 días para que el actor subsanara los yerros cometidos ha fenecido, y el apoderado del demandante presentó escrito visible a folios 634-640.

Lo anterior consta de un (1) cuaderno principal con 641 folios útiles incluyendo el presente y 8 Cd.

Sírvase proveer lo que estime pertinente

Atentamente,


JAIME ORTIZ ROMERO
Secretario

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA
SECRETARÍA GENERAL

RADICACIÓN: N° 47-001-2333-003-2014-00241-00
DEMANDANTE: GERMAN VILLANUEVA CALDERON Y OTROS
DEMANDADO: NACIÓN-MINISTERIO DE JUSTICIA Y OTROS
ACCIÓN: REPARACIÓN DIRECTA

P A S O A L D E S P A C H O

Del Dr. Edgar Alexi Vásquez Contreras hoy 16 de septiembre del 2014, memorial suscrito por el apoderado de los demandantes por medio del cual constancia de ejecutoria y notificación del laudo arbitral.

Lo anterior consta de 3 folios útiles incluyendo el presente.

Sírvase proveer lo que estime pertinente.

Atentamente,


Karen Lizeth Reales Blanco
Escribiente

Señores.
Tribunal Administrativo de Magdalena
Att. Edgar Alexi Vázquez Contreras
Magistrado Ponente.
E.S.D


Medio de Control: Reparación Directa.
Radicado: 2014-0421 241.
Demandante: German Villanueva Calderón y Otros.
Demandado: Nación- Ministerio de Justicia y Otros.

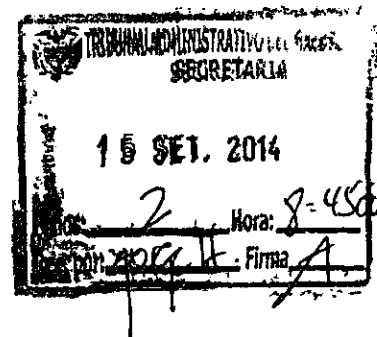
De manera respetuosa, me permito allegar a su honorable despacho; constancia de Notificación y Ejecutoria de la Sentencia que decretó la nulidad del Laudo Arbitral, conforme a lo ordenado en el Auto de fecha 19 de Agosto de 2014 y Notificada el 21 del mismo mes de su despacho.

La presente la allego con el fin de prestar colaboración, economía e impulso procesal al expediente de la referencia, puesto que inicialmente se había solicitado a través del despacho.

Agradeciendo su vocación de servicio.

Se suscribe.


Luis Alejandro Corzo Mantilla
CC N° 88.213.988 de Cúcuta
TP N° 101.576 del C S de la J.





CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA

C-2014-0091

La suscrita Secretaria de la Sección, en atención al escrito recibido por correspondencia el día 3 de septiembre de 2014, y de conformidad con el artículo 116 del Código de Procedimiento Civil modificado por el artículo 8 de la ley 1395 de 2010,

CERTIFICA:

Que el día 25 de abril 2012, el Consejo de Estado – Sección Tercera Subsección C, con ponencia del Dr. JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA profirió sentencia ordenando ***“DECRETAR LA NULIDAD del laudo arbitral proferido el 22 de agosto de 2011 dentro del proceso arbitral promovido por J. P. G. & CIA S. A., GERMAN VILLANUEVA CALDERON y RICARDO LUIS CANABAL GUZMAN, INTEGRANTES DE LA UNION TEMPORAL OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA “OBRESAN” contra la UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA, por haberse proferido el laudo después del vencimiento del término fijado para la duración del arbitramento”***, el cual fue notificado por edicto el día 3 de mayo de 2012 y su ejecutoria corrió entre el 8 y el 10 del mismo año.

Anexo fiel copia de la sentencia en mención, tomada del copiador de providencias.

Se expide en Bogotá D.C., a los cuatro (4) días del mes de septiembre de dos mil catorce (2014), dirigido al Dr. Luis Alejandro Corzo Mantilla.

Con toda atención,


MARÍA ISABEL FEULET GUERRERO
Secretaria

MIFG/cgq

645

REPÚBLICA DE COLOMBIA

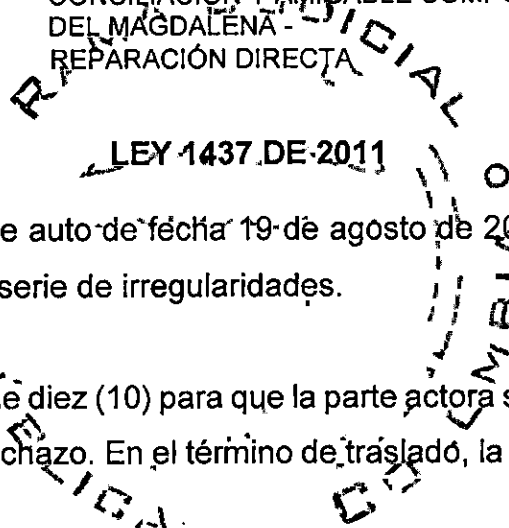


RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA

Santa Marta, veintitrés (23) de septiembre de dos mil catorce (2014)

MAGISTRADO PONENTE: DR. EDGAR ALEXI VASQUEZ CONTRERAS

RADICACION: N° 47-001-2333-003-2014-00241-00
DEMANDANTE: UNION TEMPORAL OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA (OBRESAN)
DEMANDADO: NACIÓN MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO-CAMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA - CENTRO DE ARBITRAJE, CONCILIACION Y AMIGABLE COMPOSICION - UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA -
ACCIÓN: REPARACIÓN DIRECTA



Este Despacho mediante auto de fecha 19 de agosto de 2014, decidió inadmitir la demanda, al existir una serie de irregularidades.

Se concedió el término de diez (10) para que la parte actora subsanará la deficiencia advertida, so pena de rechazo. En el término de traslado, la parte interesada aporta memorial de corrección.

Una vez revisada la demanda y sus anexos, el Tribunal encuentra procedente admitir la demanda, puesto que se cumplieron los presupuestos y requisitos para su presentación de conformidad con la Ley 1437 de 2011.

En virtud de lo anterior se

DISPONE:

1. Admitir de la demanda por el medio de control de reparación directa promovida por la UNION TEMPORAL OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA en contra de LA NACIÓN – MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO – CAMARA DE COMERCIO – CENTRO DE ARBITRAJE, CONCILIACION Y AMIGABLE COMPOSICION Y UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA.

2. Notifíquese personalmente al MINISTRO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO, conforme lo dispone el artículo 199 del C.P.A.C.A., modificado por el artículo 612

RADICACIÓN: 47-001-2333-003-2014-00241-00
ACTOR: UNION TEMPORAL OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA - OBRESAN
DEMANDADO: NACIÓN – MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO Y OTROS
MEDIO DE CONTROL: REPARACION DIRECTA

del C.G.P. Envíese por Secretaría, copia virtual de la presente providencia y de la demanda.

3. Notifíquese personalmente al PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA CAMARA DE COMERCIO – CENTRO DE ARBITRAJE, CONCILIACIÓN Y AMIGABLE COMPOSICIÓN, conforme lo dispone el artículo 199 del C.P.A.C.A., modificado por el artículo 612 del C.G.P. Envíese por Secretaría, copia virtual de la presente providencia y de la demanda.

4. Notifíquese personalmente al RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA, conforme lo dispone el artículo 199 del C.P.A.C.A., modificado por el artículo 612 del C.G.P. Envíese por Secretaría, copia virtual de la presente providencia y de la demanda.

5. Notifíquese personalmente al Agente del Ministerio Público, Procurador Delegado ante esta Corporación, conforme lo dispone el artículo 199 del C.P.A.C.A., modificado por el artículo 612 del C.G.P. Envíese por Secretaría, copia virtual de la presente providencia y de la demanda.

6. Notifíquese personalmente a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, conforme lo dispone el artículo 199 del C.P.A.C.A., modificado por el artículo 612 del C.G.P. Envíese por Secretaría, copia virtual de la presente providencia y de la demanda.

7. Notifíquese por estado electrónico a la parte demandante de conformidad con el artículo 201 del C.P.A.C.A.

8. Póngase a disposición de las entidades notificadas y de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en la Secretaría de la Corporación, copia de la demanda y sus anexos.

9. Remítase inmediatamente por servicio postal autorizado, copia física de la demanda, sus anexos y el auto admisorio de la demanda, a las entidades notificadas.

10. En virtud del numeral 4 del artículo 171 del C.P.A.C.A., la parte demandante deberá **consignar** dentro de los 5 días siguientes a la notificación de este proveído,

RADICACIÓN: 47-001-2333-003-2014-00241-00
ACTOR: UNION TEMPORAL OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA - OBRESAN
DEMANDADO: NACIÓN - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO Y OTROS
MEDIO DE CONTROL: REPARACION DIRECTA

646

la suma de OCHENTA MIL PESOS (\$80.000) para gastos ordinarios del proceso.
De existir remanente a la finalización del proceso se devolverá al interesado.

La suma deberá ser consignada en el número de cuenta 44210200101-2 Banco Agrario, a nombre del Tribunal Administrativo del Magdalena convenio 11278, indicando el número de radicación del proceso.

Se advierte a la parte demandante que de no acreditar el pago de la suma estipulada, se entenderá desistida la demanda en los términos del artículo 178 del C.P.A.C.A.

11. Otórguese el término de treinta (30) días, contados a partir del vencimiento del término contenido en el artículo 199 del C.P.A.C.A., modificado por el artículo 612 del C.G.P. para que la parte demandada, el Ministerio Público, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y los sujetos que tengan interés directo en las resultas del proceso, contesten la demanda, propongan excepciones, soliciten pruebas, llamen en garantía y/o presenten demanda de reconvención. Artículo 172 del C.P.A.C.A.

12. Requiérase a la parte demandada para que con la contestación de la demanda, remita al plenario los antecedentes administrativos de la actuación objeto del proceso y que se encuentren en su poder, so pena que el funcionario encargado se constituya en falta disciplinaria gravísima sancionable de conformidad con lo consagrado en el parágrafo 1 del artículo 175 del C.P.A.C.A.

Alléguese copia virtual de la contestación de la demanda, atendiendo los principios de colaboración, economía procesal y celeridad.

13. Requiérase a la entidad demandada para que inste al Comité de Conciliación a estudiar la viabilidad de conciliar en el presente proceso, previa la fecha de celebración de la audiencia inicial, de conformidad con lo establecido en el numeral 8 del artículo 180 de C.P.A.C.A.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EDGAR ALEXI VASQUEZ CONTRERAS

Magistrado

TRIBUNAL CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA
SECRETARIA GENERAL

NOTIFICACIÓN POR ESTADO ELECTRÓNICO
CERTIFICACIÓN

El auto anterior se notificó POR ANOTACIÓN EN
ESTADOS ELECTRONICOS No. 044 Hoy 24-08-2014


Secretario

647

Notificaciones Tribunal 03 Administrativo del Magdalena

De: Notificaciones Tribunal 03 Administrativo del Magdalena
<tadmin03mgd@notificacionesrj.gov.co>
Enviado el: miércoles, 24 de septiembre de 2014 11:58 a.m.
Para: alejocorman@gmail.com
Asunto: AUTO ADMITE DEMANDA
Datos adjuntos: 2014-241.pdf

Señores:
Apoderados dentro del medio de control

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 201 inciso 3° del CPACA por medio del presente mensaje de datos COMUNICO a usted (ES) que dentro de medio de control **REPARACION DIRECTA** formulada por **UNION TEMPORAL DE OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA** contra **NACIÓN – MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO – CAMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA – CENTRO DE ARBITRAJE CONCILIACION Y AMIGABLE COMPOSICION – UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA** identificado con el No. de Rad. 47-001-2333-003-2014-00241-00, se profirió providencia de fecha **23 de septiembre de 2014** por medio de la cual se ordena **ADMITIR LA DEMANDA**, notificada por estado electrónico No. **44 de fecha 24 de septiembre de 2014**.

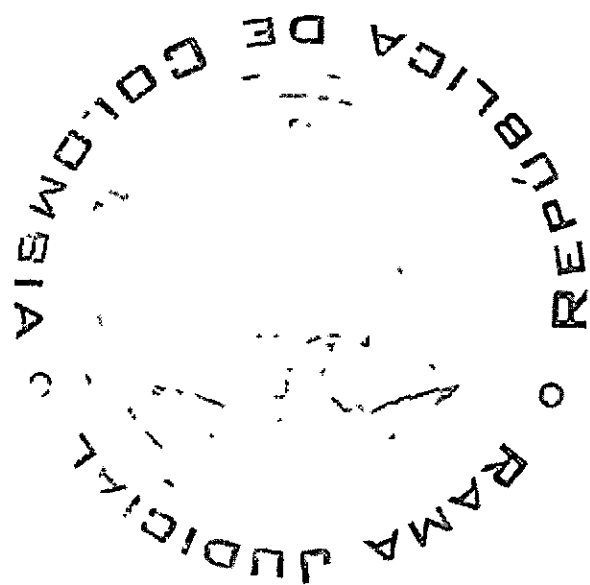
Para tal efecto puede consultar el estado electrónico en la página web:
<http://www.ramajudicial.gov.co/csj/publicaciones/ce/seccion/400/1456/5059/Estados-electronicos>.

Atentamente,

JUAN JOSE MEJIA RIVEROS

AVISO IMPORTANTE: Esta dirección de correo electrónico tadmin03mgd@notificacionesrj.gov.co es de uso único y exclusivo de envío de notificaciones, todo mensaje que se reciba no será leído y automáticamente se eliminará de nuestros servidores, apreciado usuario si tiene alguna solicitud por favor comuníquese a la siguiente línea telefónica: 4213901 o envíenos un correo electrónico a la siguiente dirección: tadtvo03mag@cendoj.ramajudicial.gov.co

*Consejo Superior
de la Judicatura*



Notificaciones Tribunal 03 Administrativo del Magdalena

648

De: Microsoft Outlook
<MicrosoftExchange329e71ec88ae4615bbc36ab6ce41109e@etbcsj.onmicrosoft.com>
Enviado el: miércoles, 24 de septiembre de 2014 12:00 p.m.
Para: tadmin03mgd@notificacionesrj.gov.co
Asunto: Retransmitido: AUTO ADMITE DEMANDA
Datos adjuntos: details.txt; Datos adjuntos sin título 00058.txt

Se completó la entrega a estos destinatarios o grupos, pero el servidor de destino no envió información de notificación de entrega:

alejocorman@gmail.com

Asunto: AUTO ADMITE DEMANDA

Comité Superior
de la Inspección

REPUBLICA DE CUBA

RAMA LEGAL

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA**DR. EDGAR ALEXI VASQUEZ CONTRERAS****Magistrado Ponente.****E. S. D.**

Radicado	N°47-001-2333-003-2014-00241-00
Demandante	Unión Temporal Obras Especiales de Santa Marta OBRESAN.
Demandado	NACIÓN MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO- CAMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA- CENTRO DE ARBITRAJE, CONCILIACIÓN Y AMIGABLE COMPOISICIÓN- UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA.
Acción	Resolución Directa.

Referencia: Consignación de Gastos Procesales.

De manera respetuosa, según el auto expedido en Santa Marta de fecha 23 de septiembre de 2014 en el numeral 10 establece que en virtud del numeral 4 del artículo 171 del C.P.A.C.A., la parte demandada consignara la suma de OCHENTA MIL PESOS \$80.000) para gastos ordinarios del proceso, los cuales fueron consignados el día 02 de octubre de 2014, numero de operación 97606725 a la cuenta del Banco Agrario de Colombia.

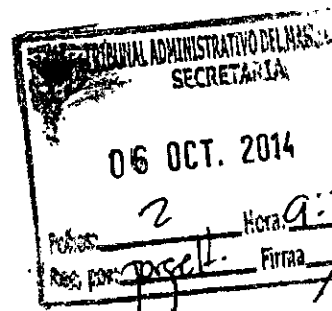
Agradezco su vocación servicio en la Administración de Justicia.

Atentamente.


Luis Alejandro Corzo Mantilla

CC N° 88.213.988 de Cúcuta

T.P. N° 101.576 del C. S. De la J.



Notificaciones Tribunal 03 Administrativo del Magdalena

De: Notificaciones Tribunal 03 Administrativo del Magdalena
<tadmin03mgd@notificacionesrj.gov.co>
Enviado el: jueves, 22 de enero de 2015 05:46 p.m.
Para: agencia nacional derecho (procesos@defensajuridica.gov.co)
Asunto: NOTIFICACIÓN DEREPARACIÓ DIRECTA RADICADO 2014-241
Datos adjuntos: 2014-241.pdf; demanda_reparacion_directa.doc

Señor:

DIRECTOR DE LA AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO

E. S. D

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 199 del C.P.A.C.A., modificado por el artículo 612 del C.G.P. por medio del presente mensaje de datos **NOTIFICO PERSONALMENTE** a usted el **proveído de fecha 23 de septiembre de 2014** por medio del cual el Tribunal Administrativo del Magdalena admite el medio de control de **REPARACIÓN DIRECTA** formulado por **UNIÓN TEMPORAL OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA** contra **MINISTERIO DE JUSTICIA- CÁMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA –UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA** identificado con el No. de Rad. 47-001-2333-003-**2014-00241-00**.

Para tal efecto, se adjunta demanda y auto admisorio

Igualmente, es pertinente indicar que a través del servicio postal autorizado se enviará copia física de la demanda, de sus anexos y del auto admisorio de la demanda.

Se le recuerda que cuenta con el **término de treinta (30) días** contados a partir del vencimiento término contenido en el artículo 199 del C.P.A.C.A. modificado por el artículo 612 del C.G.P. para que conteste la demanda, proponga excepciones, solicite pruebas, llame en garantía y/o presente demanda de reconvención.

Así mismo, se le **REQUIERE** para que con la **CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA** allegue al plenario el expediente administrativo que contenga los antecedentes de la actuación objeto del proceso y que se encuentran en su poder, so pena de que el funcionario encargado se constituya en falta disciplinaria sancionable de conformidad a lo dispuesto en el parágrafo 1° del artículo 175 del C.P.A.C.A. **La contestación de la demanda para la adecuada implementación de las tecnologías de información y comunicación deberá allegarse en copia física y magnética.**

Aunado a lo anterior, se requiere a la parte demandada para que inste al Comité de Conciliación a estudiar la viabilidad de conciliar en el presente proceso, previo a la fecha de celebración de la audiencia inicial de conformidad con lo indicado en el numeral 8° del artículo 180 del C.P.A.C.A.

Para el seguimiento del presente proceso puede consultar el estado electrónico en el siguiente link <http://www.ramajudicial.gov.co/csjs/publicaciones/ce/seccion/400/1456/5059/Estados-electronicos>

Atentamente,

JAIME ORTIZ ROMERO
Secretario General

AVISO IMPORTANTE: Esta dirección de correo electrónico tadmin03mgd@notificacionesrj.gov.co es de uso único y exclusivo de envío de notificaciones, todo mensaje que se reciba no será leído y automáticamente se eliminará de nuestros servidores, apreciado usuario si tiene alguna solicitud por favor comuníquese a la siguiente línea telefónica: 4213901 o envíenos un correo electrónico a la siguiente dirección: tadtvo03mag@cendoj.ramajudicial.gov.co

Notificaciones Tribunal 03 Administrativo del Magdalena

De: Notificaciones Tribunal 03 Administrativo del Magdalena
<tadmin03mgd@notificacionesrj.gov.co>
Enviado el: jueves, 22 de enero de 2015 05:46 p.m.
Para: universidad del magdalena (notificacionjudicial@unimagdalena.edu.co)
Asunto: NOTIFICACIÓN DEREPARACIÓN DIRECTA RADICADO 2014-241
Datos adjuntos: 2014-241.pdf; demanda_reparacion_directa.doc

Señor:
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA

E. S. D

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 199 del C.P.A.C.A., modificado por el artículo 612 del C.G.P. por medio del presente mensaje de datos **NOTIFICO PERSONALMENTE** a usted el **proveído de fecha 23 de septiembre de 2014** por medio del cual el Tribunal Administrativo del Magdalena admite el medio de control de **REPARACIÓN DIRECTA** formulado por **UNIÓN TEMPORAL OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA** contra **MINISTERIO DE JUSTICIA- CÁMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA –UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA** identificado con el No. de Rad. 47-001-2333-003-**2014-00241-00**.

Para tal efecto, se adjunta demanda y auto admisorio

Igualmente, es pertinente indicar que a través del servicio postal autorizado se enviará copia física de la demanda, de sus anexos y del auto admisorio de la demanda.

Se le recuerda que cuenta con el **término de treinta (30) días** contados a partir del vencimiento término contenido en el artículo 199 del C.P.A.C.A. modificado por el artículo 612 del C.G.P. para que conteste la demanda, proponga excepciones, solicite pruebas, llame en garantía y/o presente demanda de reconvención.

Así mismo, se le **REQUIERE** para que con la **CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA** allegue al plenario el expediente administrativo que contenga los antecedentes de la actuación objeto del proceso y que se encuentran en su poder, so pena de que el funcionario encargado se constituya en falta disciplinaria sancionable de conformidad a lo dispuesto en el parágrafo 1° del artículo 175 del C.P.A.C.A. **La contestación de la demanda para la adecuada implementación de las tecnologías de información y comunicación deberá allegarse en copia física y magnética.**

Aunado a lo anterior, se requiere a la parte demandada para que inste al Comité de Conciliación a estudiar la viabilidad de conciliar en el presente proceso, previo a la fecha de celebración de la audiencia inicial de conformidad con lo indicado en el numeral 8° del artículo 180 del C.P.A.C.A.

Para el seguimiento del presente proceso puede consultar el estado electrónico en el siguiente link <http://www.ramajudicial.gov.co/csjs/publicaciones/ce/seccion/400/1456/5059/Estados-electronicos>

Atentamente,

JAIME ORTIZ ROMERO
Secretario General

AVISO IMPORTANTE: Esta dirección de correo electrónico tadmin03mgd@notificacionesrj.gov.co es de uso único y exclusivo de envío de notificaciones, todo mensaje que se reciba no será leído y automáticamente se eliminará de nuestros servidores, apreciado usuario si tiene alguna solicitud por favor comuníquese a la siguiente línea telefónica: 4213901 o envíenos un correo electrónico a la siguiente dirección: tadtvo03mag@cendoj.ramajudicial.gov.co

Notificaciones Tribunal 03 Administrativo del Magdalena

655

De: Notificaciones Tribunal 03 Administrativo del Magdalena
<tadmin03mgd@notificacionesrj.gov.co>
Enviado el: jueves, 22 de enero de 2015 05:46 p.m.
Para: 'presidencia@ccsm.org.co'; 'secretariajuridica@ccsm.org.co'
Asunto: NOTIFICACIÓN DEREPARACIÓ DIRECTA RADICADO 2014-241
Datos adjuntos: 2014-241.pdf; demanda_reparacion_directa.doc

Señor:

PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA

E. S. D

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 199 del C.P.A.C.A., modificado por el artículo 612 del C.G.P. por medio del presente mensaje de datos **NOTIFICO PERSONALMENTE** a usted el **proveído de fecha 23 de septiembre de 2014** por medio del cual el Tribunal Administrativo del Magdalena admite el medio de control de **REPARACIÓN DIRECTA** formulado por **UNIÓN TEMPORAL OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA** contra **MINISTERIO DE JUSTICIA- CÁMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA –UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA** identificado con el No. de Rad. 47-001-2333-003-**2014-00241-00**.

Para tal efecto, se adjunta demanda y auto admisorio

Igualmente, es pertinente indicar que a través del servicio postal autorizado se enviará copia física de la demanda, de sus anexos y del autq admisorio de la demanda.

Se le recuerda que cuenta con el **término de treinta (30) días** contados a partir del vencimiento término contenido en el artículo 199 del C.P.A.C.A. modificado por el artículo 612 del C.G.P. para que conteste la demanda, proponga excepciones, solicite pruebas, llame en garantía y/o presente demanda de reconvención.

Así mismo, se le **REQUIERE** para que con la **CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA** allegue al plenario el expediente administrativo que contenga los antecedentes de la actuación objeto del proceso y que se encuentran en su poder, so pena de que el funcionario encargado se constituya en falta disciplinaria sancionable de conformidad a lo dispuesto en el parágrafo 1° del artículo 175 del C.P.A.C.A. **La contestación de la demanda para la adecuada implementación de las tecnologías de información y comunicación deberá allegarse en copia física y magnética.**

Aunado a lo anterior, se requiere a la parte demandada para que inste al Comité de Conciliación a estudiar la viabilidad de conciliar en el presente proceso, previo a la fecha de celebración de la audiencia inicial de conformidad con lo indicado en el numeral 8° del artículo 180 del C.P.A.C.A.

Para el seguimiento del presente proceso puede consultar el estado electrónico en el siguiente link <http://www.ramajudicial.gov.co/csj/publicaciones/ce/seccion/400/1456/5059/Estados-electronicos>

Atentamente,

JAIME ORTIZ ROMERO
Secretario General

AVISO IMPORTANTE: Esta dirección de correo electrónico tadmin03mgd@notificacionesrj.gov.co es de uso único y exclusivo de envío de notificaciones, todo mensaje que se reciba no será leído y automáticamente se eliminará de nuestros servidores, apreciado usuario si tiene alguna solicitud por favor comuníquese a la siguiente línea telefónica: 4213901 o envíenos un correo electrónico a la siguiente dirección: tadtvo03mag@cendoj.ramajudicial.gov.co

Notificaciones Tribunal 03 Administrativo del Magdalena

De: Notificaciones Tribunal 03 Administrativo del Magdalena
<tadmin03mgd@notificacionesrj.gov.co>
Enviado el: jueves, 22 de enero de 2015 05:46 p.m.
Para: procuraduria (procjudadm155@procuraduria.gov.co)
Asunto: NOTIFICACIÓN DEREPARACIÓ DIRECTA RADICADO 2014-241
Datos adjuntos: 2014-241.pdf; demanda_reparacion_directa.doc

Señor:

PROCURADOR DELEGADO ANTE ESTA CORPORACIÓN

E. S. D

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 199 del C.P.A.C.A., modificado por el artículo 612 del C.G.P. por medio del presente mensaje de datos **NOTIFICO PERSONALMENTE** a usted el **proveído de fecha 23 de septiembre de 2014** por medio del cual el Tribunal Administrativo del Magdalena admite el medio de control de **REPARACIÓN DIRECTA**, formulado por **UNIÓN TEMPORAL OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA** contra **MINISTERIO DE JUSTICIA- CÁMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA –UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA** identificado con el No. de Rad. 47-001-2333-003-**2014-00241-00**.

Para tal efecto, se adjunta demanda y auto admisorio

Igualmente, es pertinente indicar que a través del servicio postal autorizado se enviará copia física de la demanda, de sus anexos y del auto admisorio de la demanda.

Se le recuerda que cuenta con el **término de treinta (30) días** contados a partir del vencimiento término contenido en el artículo 199 del C.P.A.C.A. modificado por el artículo 612 del C.G.P. para que conteste la demanda, proponga excepciones, solicite pruebas, llame en garantía y/o presente demanda de reconvención.

Así mismo, se le **REQUIERE** para que con la **CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA** allegue al plenario el **expediente administrativo que contenga los antecedentes de la actuación objeto del proceso y que se encuentran en su poder, so pena de que el funcionario encargado se constituya en falta disciplinaria sancionable** de conformidad a lo dispuesto en el parágrafo 1° del artículo 175 del C.P.A.C.A. **La contestación de la demanda para la adecuada implementación de las tecnologías de información y comunicación deberá allegarse en copia física y magnética.**

Aunado a lo anterior, se requiere a la parte demandada para que inste al Comité de Conciliación a estudiar la viabilidad de conciliar en el presente proceso, previo a la fecha de celebración de la audiencia inicial de conformidad con lo indicado en el numeral 8° del artículo 180 del C.P.A.C.A.

Para el seguimiento del presente proceso puede consultar el estado electrónico en el siguiente link <http://www.ramajudicial.gov.co/csj/publicaciones/ce/seccion/400/1456/5059/Estados-electronicos>

Atentamente,

JAIME ORTIZ ROMERO
Secretario General

AVISO IMPORTANTE: Esta dirección de correo electrónico tadmin03mgd@notificacionesrj.gov.co es de uso único y exclusivo de envío de notificaciones, todo mensaje que se reciba no será leído y automáticamente se eliminará de nuestros servidores, apreciado usuario si tiene alguna solicitud por favor comuníquese a la siguiente línea telefónica: 4213901 o envíenos un correo electrónico a la siguiente dirección: tadtvo03mag@cendoj.ramajudicial.gov.co

Notificaciones Tribunal 03 Administrativo del Magdalena

De: Notificaciones Tribunal 03 Administrativo del Magdalena
<tadmin03mgd@notificacionesrj.gov.co>
Enviado el: jueves, 22 de enero de 2015 05:49 p.m.
Para: 'notificaciones.judiciales@minjusticia.gov.co'
Asunto: NOTIFICACIÓN DEREPARACIÓ DIRECTA RADICADO 2014-241
Datos adjuntos: 2014-241.pdf; demanda_reparacion_directa.doc

Señor:
MINISTRO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

E. S. D

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 199 del C.P.A.C.A., modificado por el artículo 612 del C.G.P. por medio del presente mensaje de datos **NOTIFICO PERSONALMENTE** a usted el **proveído de fecha 23 de septiembre de 2014** por medio del cual el Tribunal Administrativo del Magdalena admite el medio de control de **REPARACIÓN DIRECTA** formulado por **UNIÓN TEMPORAL OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA** contra **MINISTERIO DE JUSTICIA- CÁMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA –UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA** identificado con el No. de Rad. 47-001-2333-003-**2014-00241-00**.

Para tal efecto, se adjunta demanda y auto admisorio

Igualmente, es pertinente indicar que a través del servicio postal autorizado se enviará copia física de la demanda, de sus anexos y del auto admisorio de la demanda.

Se le recuerda que cuenta con el **término de treinta (30) días** contados a partir del vencimiento término contenido en el artículo 199 del C.P.A.C.A. modificado por el artículo 612 del C.G.P. para que conteste la demanda, proponga excepciones, solicite pruebas, llame en garantía y/o presente demanda de reconvención.

Así mismo, se le **REQUIERE** para que con la **CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA** allegue al plenario el **expediente administrativo que contenga los antecedentes de la actuación objeto del proceso y que se encuentran en su poder, so pena de que el funcionario encargado se constituya en falta disciplinaria sancionable** de conformidad a lo dispuesto en el parágrafo 1° del artículo 175 del C.P.A.C.A. **La contestación de la demanda para la adecuada implementación de las tecnologías de información y comunicación deberá allegarse en copia física y magnética.**

Aunado a lo anterior, se requiere a la parte demandada para que inste al Comité de Conciliación a estudiar la viabilidad de conciliar en el presente proceso, previo a la fecha de celebración de la audiencia inicial de conformidad con lo indicado en el numeral 8° del artículo 180 del C.P.A.C.A.

Para el seguimiento del presente proceso puede consultar el estado electrónico en el siguiente link **<http://www.ramajudicial.gov.co/csjs/publicaciones/ce/seccion/400/1456/5059/Estados-electronicos>**

Atentamente,

JAIME ORTIZ ROMERO
Secretario General

AVISO IMPORTANTE: Esta dirección de correo electrónico tadmin03mgd@notificacionesrj.gov.co es de uso único y exclusivo de envío de notificaciones, todo mensaje que se reciba no será leído y automáticamente se eliminará de nuestros servidores, apreciado usuario si tiene alguna solicitud por favor comuníquese a la siguiente línea telefónica: 4213901 o envíenos un correo electrónico a la siguiente dirección: tadtvo03mag@cendoj.ramajudicial.gov.co

Notificaciones Tribunal 03 Administrativo del Magdalena

De: Microsoft Outlook
<MicrosoftExchange329e71ec88ae4615bbc36ab6ce41109e@etbcsj.onmicrosoft.com>
Enviado el: jueves, 22 de enero de 2015 05:49 p.m.
Para: tadmin03mgd@notificacionesrj.gov.co
Asunto: Retransmitido: NOTIFICACIÓN DEREPARACIÓ DIRECTA RADICADO 2014-241
Datos adjuntos: details.txt; Datos adjuntos sin título 00319.txt

Se completó la entrega a estos destinatarios o grupos, pero el servidor de destino no envió información de notificación de entrega:

notificaciones.judiciales@minjusticia.gov.co

Asunto: NOTIFICACIÓN DEREPARACIÓ DIRECTA RADICADO 2014-241

Notificaciones Tribunal 03 Administrativo del Magdalena

De: Microsoft Outlook
<MicrosoftExchange329e71ec88ae4615bbc36ab6ce41109e@etbcsj.onmicrosoft.com>
Enviado el: jueves, 22 de enero de 2015 05:48 p.m.
Para: tadmin03mgd@notificacionesrj.gov.co
Asunto: Retransmitido: NOTIFICACIÓN DEREPARACIÓ DIRECTA RADICADO 2014-241
Datos adjuntos: details.txt; Datos adjuntos sin título 00326.txt

Se completó la entrega a estos destinatarios o grupos, pero el servidor de destino no envió información de notificación de entrega:

procuraduria (procjudadm155@procuraduria.gov.co)

Asunto: NOTIFICACIÓN DEREPARACIÓ DIRECTA RADICADO 2014-241

Notificaciones Tribunal 03 Administrativo del Magdalena

De: postmaster@unimagdalena.edu.co
Enviado el: jueves, 22 de enero de 2015 05:47 p.m.
Para: tadmin03mgd@notificacionesrj.gov.co
Asunto: Entregado: NOTIFICACIÓN DEREPARACIÓ DIRECTA RADICADO 2014-241
Datos adjuntos: details.txt; Datos adjuntos sin título 00333.txt

El mensaje se entregó a los siguientes destinatarios:

universidad del magdalena (notificacionjudicial@unimagdalena.edu.co)

Asunto: NOTIFICACIÓN DEREPARACIÓ DIRECTA RADICADO 2014-241

Notificaciones Tribunal 03 Administrativo del Magdalena

De: Mail Delivery System <MAILER-DAEMON@mail.dialnet.net.co>
Enviado el: jueves, 22 de enero de 2015 05:46 p.m.
Para: tadmin03mgd@notificacionesrj.gov.co
Asunto: Successful Mail Delivery Report
Datos adjuntos: details.txt; Message Headers.txt

This is the mail system at host mail.dialnet.net.co.

Your message was successfully delivered to the destination(s) listed below. If the message was delivered to mailbox you will receive no further notifications. Otherwise you may still receive notifications of mail delivery errors from other systems.

The mail system

<presidencia@ccsm.org.co>: delivery via mail.dialnet.net.co[186.1.161.4]:7025:
250 2.1.5 Delivery OK

<secretariajuridica@ccsm.org.co>: delivery via
mail.dialnet.net.co[186.1.161.4]:7025: 250 2.1.5 Delivery OK

Notificaciones Tribunal 03 Administrativo del Magdalena

665

De: Procesos <procesos@defensajuridica.gov.co>
Enviado el: jueves, 22 de enero de 2015 05:46 p.m.
Para: Notificaciones Tribunal 03 Administrativo del Magdalena
Asunto: RE: NOTIFICACIÓN DEREPARACIÓ DIRECTA RADICADO 2014-241
Datos adjuntos: image001.jpg; image002.png

Bogotá, D.C.

Respetado (a) Doctor (a)

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado le informa que su comunicación fue recibida.

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en cumplimiento a los preceptos legales contenidos en las leyes 1437 de 2011 y 1564 de 2012, y la Carta Circular 00007 del 25 de Julio de 2013, relacionados con la notificación electrónica de recepción y gestión de documentos de procesos judiciales en contra de entidades del Orden Nacional informa:

I. La notificación a la que se hace referencia cumple con la finalidad de una comunicación, mediante la cual la Agencia conoce de las demandas contra entidades públicas donde se encuentren involucrados los intereses litigiosos de la Nación y, registrada la información en el Sistema Único e Información de la Actividad Litigiosa del Estado, para determinar en qué proceso debe intervenir con base en lo criterios establecidos, cuando lo considere pertinente o lo disponga en el Consejo Directivo de la Entidad.

II. Para incorporar la información pertinente al Sistema Único e Información de la Actividad Litigiosa del Estado es necesario que se alleguen **únicamente** los documentos enunciados en el Art. 612 del Código General del Proceso, por lo tanto, la Agencia revisará dentro de los siguientes veinte (20) días que la notificación los contenga. Finalizado el anterior término sin pronunciamiento alguno por parte de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, la notificación se entenderá recibida en debida forma.

Con el ánimo de facilitar la gestión y garantizar los principios de celeridad y economía procesal, les informamos que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en cumplimiento de los preceptos legales contenidos en las leyes 1437 de 2011 y 1564 de 2012 relacionados con la notificación personal, implementó el buzón judicial exclusivo para notificaciones de demanda donde una entidad pública sea parte, al cual podrán acceder a través de la página www.defensajuridica.gov.co en el módulo "Destacados" seleccionar "Formularios Electrónicos"

y posteriormente "Procesos contra entidades públicas" o también podrá acceder por la dirección electrónica: <http://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/buzon-y-envio-de-informacion/Paginas/procesos-contras-entidades-publicas.aspx>, a efectos de recibir de forma exclusiva las notificaciones de las demandadas de las que trata el artículo 612 de la ley 1564 de 2012, así como los mandamientos de pago en contra de las Entidades Públicas del Orden Nacional, diferentes a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Es importante señalar que éste módulo es de uso exclusivo de los despachos judiciales.

Lo anterior sin menoscabar el cabal cumplimiento de los requerimientos legales del artículo 612 del Código General del proceso y demás normas concordantes.

Cordialmente,

Dirección de Gestión de la Información

Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

PBX. 255 8955 Ext. 430

Bogotá - Colombia, Carrera 7 No. 75-66



Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del
Estado

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

667

Notificaciones Tribunal 03 Administrativo del Magdalena

De: postmaster@defensajuridica.gov.co
Enviado el: jueves, 22 de enero de 2015 05:46 p.m.
Para: tadmin03mgd@notificacionesrj.gov.co
Asunto: Entregado: NOTIFICACIÓN DEREPARACIÓ DIRECTA RADICADO 2014-241
Datos adjuntos: details.txt; Datos adjuntos sin título 00343.txt

El mensaje se entregó a los siguientes destinatarios:

agencia nacional derecho (procesos@defensajuridica.gov.co)

Asunto: NOTIFICACIÓN DEREPARACIÓ DIRECTA RADICADO 2014-241

REPÚBLICA DE COLOMBIA



668

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA
SECRETARIA GENERAL
SISTEMA DE ORALIDAD - LEY 1437 DE 2011 -

Señor:

Representante Legal

AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO

Calle 70 No. 4 - 60

Bogotá D.C.

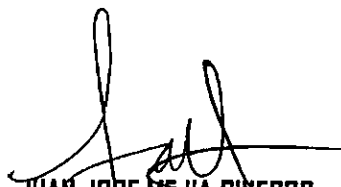
E. S. D.

Cordial saludo,

Por medio de la presente comunicación me permito enviarle copia de la demanda y sus anexos que corresponden al medio de control de reparación directa interpuesto por **UNION TEMPORAL OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA** contra **MINISTERIO DE JUSTICIA - CAMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA - UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA** identificado con el No. de Rad. 47-001-2333-003-2014-00241-00.

Lo anterior en virtud de lo dispuesto en el artículo 199 del C.P.A.C.A., modificado por el artículo 612 del C.G.P.

Atentamente,


JUAN JOSE MEJIA RIVEROS
Notificador

7 BFI
27 ENE.



**TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA
SECRETARIA GENERAL
SISTEMA DE ORALIDAD - LEY 1437 DE 2011 -**

Señor:

RUTHBER ESCORCÍA CABALLERO

Rector de la Universidad del Magdalena

Carrera 32 No. 22-08 Sector San Pedro Alejandrino

Cordial saludo,

Por medio de la presente comunicación me permito enviarle copia de la demanda y sus anexos que corresponden al medio de control de reparación directa interpuesto por **UNION TEMPORAL OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA** contra **MINISTERIO DE JUSTICIA - CAMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA - UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA** identificado con el No. de Rad. 47-001-2333-003-2014-00241-00.

Lo anterior en virtud de lo dispuesto en el artículo 199 del C.P.A.C.A., modificado por el artículo 612 del C.G.P.

Atentamente,


JUAN JOSE MEJIA RIVEROS
Notificador

P1341
27 ENE.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

690



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA
SECRETARIA GENERAL
SISTEMA DE ORALIDAD - LEY 1437 DE 2011 -

Señor:

MINISTRO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

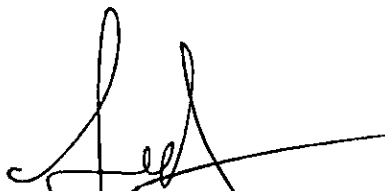
Carrera 9, No. 12C - 10
E. S. D.

Cordial saludo,

Por medio de la presente comunicación me permito enviarle copia de la demanda y sus anexos que corresponden al medio de control de reparación directa interpuesto por **UNION TEMPORAL OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA** contra **MINISTERIO DE JUSTICIA - CAMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA - UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA** identificado con el No. de Rad. 47-001-2333-003-2014-00241-00.

Lo anterior en virtud de lo dispuesto en el artículo 199 del C.P.A.C.A., modificado por el artículo 612 del C.G.P.

Atentamente,



JUAN JOSE MEJIA RIVEROS
Notificador

P1341

27 ENE.



**TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA
SECRETARIA GENERAL
SISTEMA DE ORALIDAD – LEY 1437 DE 2011 -**

Señor:

PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA

Avenida del Libertador # 13-94,

E. S. D.

Cordial saludo,

Por medio de la presente comunicación me permito enviarle copia de la demanda y sus anexos que corresponden al medio de control de reparación directa interpuesto por **UNION TEMPORAL OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA** contra **MINISTERIO DE JUSTICIA – CAMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA – UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA** identificado con el No. de Rad. 47-001-2333-003-2014-00241-00.

Lo anterior en virtud de lo dispuesto en el artículo 199 del C.P.A.C.A., modificado por el artículo 612 del C.G.P.

Atentamente,



JUAN JOSE MEJIA RIVEROS
Notificador

P1341
27 ene.



**TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA
SECRETARIA GENERAL
SISTEMA DE ORALIDAD - LEY 1437 DE 2011 -**

Señor:

PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA

Avenida del Libertador # 13-94,

E. S. D.

Cordial saludo,

Por medio de la presente comunicación me permito enviarle copia de la demanda y sus anexos que corresponden al medio de control de reparación directa interpuesto por **UNION TEMPORAL OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA** contra **MINISTERIO DE JUSTICIA - CAMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA - UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA** identificado con el No. de Rad. 47-001-2333-003-2014-00241-00.

Lo anterior en virtud de lo dispuesto en el artículo 199 del C.P.A.C.A., modificado por el artículo 612 del C.G.P.

Atentamente,


JUAN JOSE MEJIA RIVEROS
Notificador

Recibi.

27-01-2015.

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA
SECRETARIA GENERAL
SISTEMA DE ORALIDAD – LEY 1437 DE 2011 -

Señor:

PROCURADOR DELEGADO ANTE ESTA CORPORACIÓN


E. S. D.

Cordial saludo,

Por medio de la presente comunicación me permito enviarle copia de la demanda y sus anexos que corresponden al medio de control de reparación directa interpuesto por **UNION TEMPORAL OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA** contra **MINISTERIO DE JUSTICIA – CAMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA – UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA** identificado con el No. de Rad. 47-001-2333-003-2014-00241-00.

Lo anterior en virtud de lo dispuesto en el artículo 199 del C.P.A.C.A., modificado por el artículo 612 del C.G.P.

Atentamente,



JUAN JOSE MEJIA RIVEROS
Notificador

Proc. 155
673.

27-01-15
Borromeo

0344 624
Santa Marta, 27 de enero de 2015

Doctor

EDGAR ALEXI VASQUEZ CONTRERAS

Magistrado

Tribunal Administrativo del Magdalena

E.S.M.

Ref: Recurso de reposición. Radicada No. 47-001-2333-003-2014-000241-00

ALFONSO LUIS LASTRA FUSCALDO, mayor de edad, vecino de esta ciudad e identificado con la cédula de ciudadanía No. 85.473.397 expedida en Santa Marta y T.P. No. 88.098 del C.S. de la J., actuando en mi doble calidad de representante legal y apoderado de la **CAMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA PARA EL MAGDALENA**, calidad que se acredita con el certificado de representación legal expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio, estando dentro del término legal, conforme con lo preceptuado por el artículo 242 de la ley 1437 de 2011, que reza:

ARTÍCULO 242. REPOSICIÓN. *“Salvo norma legal en contrario, el recurso de reposición procede contra los autos que no sean susceptibles de apelación o de súplica. En cuanto a su oportunidad y trámite se aplicará lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil.”*

Teniendo en cuenta que el auto que admite la demanda no es un auto apelable, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 243 ibídem, debe precisarse que contra el mismo procede el recurso de reposición, y para determinar su procedencia y oportunidad deben aplicarse las normas contenidas en el Código General del Proceso, según lo dispuesto por el Consejo de Estado, para esta Jurisdicción desde enero de 2014, que al respecto establece:

“Artículo 318.- Procedencia y oportunidades. *Salvo norma en contrario, el recurso de reposición procede contra los autos que dicte el juez, contra los del magistrado sustanciador no susceptibles de súplica y contra los de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, para que se reformen o revoquen.*

El recurso de reposición no procede contra los autos que resuelvan un recurso de apelación, una súplica o una queja.

628

*El recurso deberá interponerse con expresión de las razones que lo sustenten, en forma verbal inmediatamente se pronuncie el auto. **Cuando el auto se pronuncie fuera de audiencia el recurso deberá interponerse por escrito dentro de los tres (3) días siguientes al de la notificación del auto.***

El auto que decide la reposición no es susceptible de ningún recurso, salvo que contenga puntos no decididos en el anterior, caso en el cual podrán interponerse los recursos pertinentes respecto de los puntos nuevos.

Los autos que dicten las salas de decisión no tienen reposición; podrá pedirse su aclaración o complementación, dentro del término de su ejecutoria.

Parágrafo.

*Cuando el recurrente impugne una providencia judicial mediante un recurso improcedente, el juez deberá tramitar la impugnación por las reglas del recurso que resultare procedente, siempre que haya sido interpuesto oportunamente". **(La negrilla es nuestra).***

Así las cosas, revisado el expediente, que contiene la Acción de Reparación Directa, de los Señores **J.P.G. & CIA S.A.S., GERMAN VILLANUEVA CALDERON y RICARDO LUIS CANABAL GUZMAN**, miembros de la **UNION TEMPORAL OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA – OBRESAN** contra **NACION –MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO - CAMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA – CENTRO DE ARBITRAJE, CONCILIACIÓN Y AMIGABLE COMPOSICIÓN - UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA – DIANA BOVEA MENDINUETA, MIGUEL ANGEL POLO CAMPO y JUAN ALBERTO POLO FIGUEROA**, interpongo recurso de reposición contra el auto de fecha veintitrés (23) de septiembre de dos mil catorce (2014), notificado el día jueves veintidós (22) de enero de dos mil quince (2015), a través del cual, resolvió admitir la demanda por el medio de control de reparación directa promovida por los actores antes mencionados, por las siguientes consideraciones:

CONSIDERACIONES DEL RECURSO DE REPOSICION

1. La acción de reparación directa fue radicada el día treinta y uno (31) de julio de dos mil catorce (2014).
2. Mediante auto de fecha diecinueve (19) de agosto de dos mil catorce (2014), el Despacho a su cargo, decidió la inadmisión de la demanda por el medio de control de reparación directa, radicada bajo el No. 47-001-2333-003-

2014-000241-00, indicando las consideraciones en la mencionada providencia.

3. La decisión contenida en el numeral segundo (2) de este escrito, fue notificada por estado No. 026 del día jueves veintiuno (21) de agosto de dos mil catorce (2014), corriendo el término para subsanar desde el veintidós (22) de agosto al cuatro (4) de septiembre de dos mil catorce (2014).

4. A folio 633 del expediente, aparece oficio de fecha cinco (5) de septiembre de dos mil catorce (2014), radicado el día cinco (5) de septiembre de dos mil catorce (2014), remitido por la Doctora **BIBIANA CECILIA ORLANDO GOMEZ**, Procuradora 155 Judicial II Administrativo – Agente del Ministerio Público, al Doctor **EDGAR ALEXI VASQUEZ CONTRERAS** – Magistrado Ponente, mediante el cual allega al expediente, el escrito mediante el cual, el apoderado judicial de la parte demandante, subsana la demanda, un día después de vencido el término para subsanar la demanda.

Ahora bien, los escritos o memoriales en el proceso deben presentarse en la Secretaría del Tribunal al que pertenece el Magistrado Ponente y no en ninguna otra oficina o entidad, lo cual no subsana el hecho de hacerse. Por lo tanto, el escrito presentado en la Procuraduría No. 155 Judicial II en Asuntos Administrativos de Santa Marta, como consta a folio 635 del expediente, antes de la fecha de su vencimiento es como si no hubiese sido presentado. Es más, era deber de la funcionaria de dicho Despacho no recibir el escrito por no ser el Despacho judicial competente y quien tenía el conocimiento del proceso.

5. No obstante, para la fecha y hora en que fue radicado el escrito del apoderado de la parte demandante ante la Procuraduría No. 155 Judicial II en Asuntos Administrativos de Santa Marta, esto es, (2) de septiembre de dos mil catorce (2014) a la hora de las 5:20 P.M, la Secretaría ante los Tribunales Administrativos, se encontraba abierta, razón por la cual no existe justificación alguna para que el apoderado de la parte demandante incurriera en la falencia de radicar el escrito de subsanación de la demanda en una entidad diferente a la Secretaría del Tribunal.

6. El hecho de haber prestado sus servicios la Secretaría General del Tribunal Administrativo del Magdalena, conforme a lo expuesto en el numeral 5 de este documento, evidencia que el demandante al haber radicado la subsanación de la demanda por el medio de control de reparación directa, ante la Procuraduría No. 155 Judicial II en Asuntos Administrativos de Santa Marta, la subsanación no se surtió, se entiende por no presentada, no produce efectos y por lo tanto, siendo consecuentes entonces con lo expuesto, no se cumplió con los requisitos contenidos en los artículos 162 y 166 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

672

Así las cosas, en el presente caso, el accionante no cumplió con la subsanación de la demanda dentro del término legal establecido, ante la autoridad jurisdiccional competente.

Por lo tanto, se entiende que no cumplió con lo ordenado en el auto de fecha diecinueve (19) de agosto de dos mil catorce (2014), a través del cual, el Despacho a su cargo, decidió la inadmisión de la demanda por el medio de control de reparación directa, radicada bajo el No. 47-001-2333-003-2014-000241-00.

FUNDAMENTO JURIDICO

Artículo 242. de la ley 1437 de 2011 - Reposición: "Salvo norma legal en contrario, el recurso de reposición procede contra los autos que no sean susceptibles de apelación o de súplica. En cuanto a su oportunidad y trámite se aplicará lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil."

Artículo 318 de la ley 1564 de 2012 - Procedencia y oportunidades: "Salvo norma en contrario, el recurso de reposición procede contra los autos que dicte el juez, contra los del magistrado sustanciador no susceptibles de súplica y contra los de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, para que se reformen o revoquen."

El recurso de reposición no procede contra los autos que resuelvan un recurso de apelación, una súplica o una queja.

El recurso deberá interponerse con expresión de las razones que lo sustenten, en forma verbal inmediatamente se pronuncie el auto. Cuando el auto se pronuncie fuera de audiencia el recurso deberá interponerse por escrito dentro de los tres (3) días siguientes al de la notificación del auto.

El auto que decide la reposición no es susceptible de ningún recurso, salvo que contenga puntos no decididos en el anterior, caso en el cual podrán interponerse los recursos pertinentes respecto de los puntos nuevos.

Los autos que dicten las salas de decisión no tienen reposición; podrá pedirse su aclaración o complementación, dentro del término de su ejecutoria.

Parágrafo.

Cuando el recurrente impugne una providencia judicial mediante un recurso improcedente, el juez deberá tramitar la impugnación por las reglas del recurso que resultare procedente, siempre que haya sido interpuesto oportunamente".

678

Artículo 29 C.P: "El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso".

PETICION

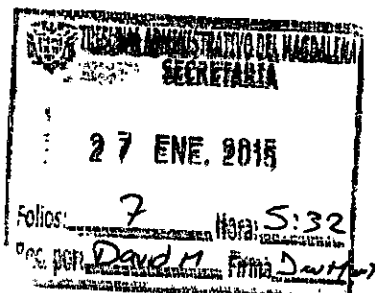
Por todo lo expuesto, solicito respetuosamente, se reponga el auto admisorio de la demanda y en consecuencia, se ordene el rechazo de la misma, por no haberse subsanado la demanda, a fin de no incurrir en la violación del debido proceso.

Recibo notificaciones judiciales: Avenida del Libertador No. 13-94 en la ciudad de Santa Marta y en el correo electrónico: alastra.dirjur@ccsm.org.co

Anexo: Certificación expedida por la Secretaría General ante el Tribunal Administrativo del Magdalena, Certificado de Representación Legal expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio y dos copias para lo de su competencia.


ALFONSO LUIS LASTRA FUSCALDO
C.C. 85.473.397 de Santa Marta.
T.P. 88.098 Consejo Superior de la Judicatura

Anexo: Lo anunciado



LA SECRETARIA GENERAL, AD - HOC

CERTIFICA:

QUE DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL GRUPO DE CAMARAS DE COMERCIO DE LA DELEGATURA DE PROTECCIÓN DE LA COMPETENCIA, SE TIENE:

QUE LA CÁMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA ES UNA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO, CREADA MEDIANTE DECRETO 421 DEL 7 DE DICIEMBRE DE 1931.

QUE DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO NÚMERO 1592 DEL 30 DE JULIO DE 2013, EXPEDIDO POR EL MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO, SE DECRETÓ EL CAMBIO DE NOMBRE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA POR EL MAGDALENA, POR EL DE CAMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA PARA EL MAGDALENA.

QUE EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA POR EL MAGDALENA ES EL PRESIDENTE EJECUTIVO Y SU SUPLENTE.

QUE MEDIANTE ACTA N° 439 DEL 11 DE MAYO DE 2012 APROBADA CON ACTA N° 440 DEL 5 DE JUNIO DE 2012, DESIGNÓ AL DOCTOR CESAR MIGUEL RIASCOS NOGUERA IDENTIFICADO CON LA C.C. 79.285.498 DE BOGOTÁ COMO PRESIDENTE EJECUTIVO- REPRESENTANTE LEGAL.

QUE MEDIANTE ACTA 448 DEL 29 DE ENERO DE 2013 APROBADA POR LA COMISIÓN DESIGNADA PARA DICHO EFECTO, ELIGIÓ A ALFONSO LUIS LASTRA FUSCALDO IDENTIFICADO CON LA C.C. 85.473.397 DE SANTA MARTA COMO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.

SE EXPIDE EN BOGOTÁ, D.C. A LOS VEITICUATRO (24) DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS CATORCE (2014).


GUIOMAR PATRICIA GIL ARDILA

Elaboró: Leonardo C

Al contestar favor indique el número de radicación consignado en el sticker

Sede Centro: Cámara
Sede CAN: Tr. 40A
Fax: 350 52 20 - 38
Call Center: 5
Web: www.sic.gov
Bogotá

LA SECRETARIA GENERAL, AD - HOC

CERTIFICA:

QUE DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL GRUPO DE CAMARAS DE COMERCIO DE LA DELEGATURA DE PROTECCIÓN DE LA COMPETENCIA, SE TIENE:

QUE LA CÁMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA ES UNA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO, CREADA MEDIANTE DECRETO 421 DEL 7 DE DICIEMBRE DE 1931.

QUE DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO NÚMERO 1592 DEL 30 DE JULIO DE 2013, EXPEDIDO POR EL MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO, SE DECRETÓ EL CAMBIO DE NOMBRE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA POR EL MAGDALENA, POR EL DE CAMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA PARA EL MAGDALENA.

QUE EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA POR EL MAGDALENA ES EL PRESIDENTE EJECUTIVO Y SU SUPLENTE.

QUE MEDIANTE ACTA N° 439 DEL 11 DE MAYO DE 2012 APROBADA CON ACTA N° 440 DEL 5 DE JUNIO DE 2012, DESIGNÓ AL DOCTOR CESAR MIGUEL RIASCOS NOGUERA IDENTIFICADO CON LA C.C. 79.285.498 DE BOGOTÁ COMO PRESIDENTE EJECUTIVO- REPRESENTANTE LEGAL.

QUE MEDIANTE ACTA 448 DEL 29 DE ENERO DE 2013 APROBADA POR LA COMISIÓN DESIGNADA PARA DICHO EFECTO, ELIGIÓ A ALFONSO LUIS LASTRA FUSCALDO IDENTIFICADO CON LA C.C. 85.473.397 DE SANTA MARTA COMO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL

SE EXPIDE EN BOGOTÁ, D.C. A LOS VEINTISIETE (27) DIAS DEL MES DE ENERO DE DOS MIL QUINCE (2015).


GUIOMAR PATRICIA GIL ARDILA

Elaboró: Patricia C.

Al contestar favor indique el número de radicación consignado en el sticker

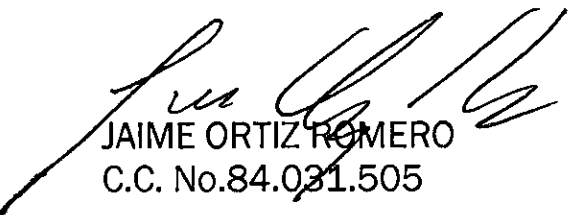
Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 PBX: 3 82 08 40
Fax: 350 52 20 - 382 26 95. Línea 9800-910 165
Call Center 523 11 31 Bogotá D.C.
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA
Secretaría General

Doctor
ALFONSO LUIS LASTRA FUSCALDO
Representante Suplente
Camara de Comercio Santa Marta
E. S. D.

En atención a sus solicitud formulada en la fecha ante esta Secretaria me permito informarle que con motivo del cese de actividades promovido por la ASOCIACION NACIONAL DE SERVIDORES JUDICIALES- ASONAL-, donde se impedía el acceso a las dependencias donde funciona este Tribunal, los términos judiciales sólo quedaron interrumpidos desde el día nueve (9) de octubre de 2014, hasta el día doce (12) de diciembre de dos mil catorce (2014).

Lo anterior indica que el término señalado por usted en su solicitud no se encuentra incluido en este lapso.



JAIME ORTIZ ROMERO
C.C. No.84.031.505

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA
SECRETARIA GENERAL

INCLUSION EN LISTA TRASLADO DE RECURSO DE REPOSICION
ART. 242 No. 2 C.P.A.C.A.

RAD.	Asunto	Demandante	Demandado	Fecha Fijacion	Vence	MP
2014-00241	REPARACION DIRECTA	UNION TEMPORAL OBRAS ESPECIALES DE STA MARTA -OBRESAN-	NACION-MINISTERIO DE JUSTICIA-CAMARA DE COMERCIO DE STA MARTA-CENTRO DE ARBITRAJE	29/1/2015	3/02/2015	EVC

CONSTANCIA:

Hoy, veintinueve (29) de enero de 2015 a las ocho de la mañana (8:00.a.m.), se fija la presente lista en lugar visible de la secretaria de la corporación, por el término legal de un día (1), y se corre traslado por TRES (3) días, tal como dispone el artículo 242 del C.P.A.C.A en concordancia con el artículo 10 C. G. del P.

Jaime Ortíz Romero
Secretario

682

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA
SECRETARÍA GENERAL
Ley 1437 de 2011

83

RADICACIÓN: N° 47-001-2333-002-2014-0241-00.
DEMANDANTE: OBRESAN
DEMANDADO: Ministerio de Defensa y otros
MEDIO DE CONTROL: Reparación Directa

P A S O A L D E S P A C H O

Del Magistrado Edgar Vásquez Contreras, hoy 9 de marzo de 2015 el expediente de la referencia, informándole que el apoderado de la Cámara de Comercio interpuso recurso de reposición contra el auto que admitió la demanda.

Lo anterior consta de un (1) cuaderno principal con 682 folios útiles incluyendo el presente y 8 Cd.

Sírvase proveer lo que estime pertinente

Atentamente,


JAIME ORTIZ ROMERO
Secretario

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA
SECRETARÍA GENERAL
Ley 1437 de 2011

RADICACIÓN: N° 47-001-2333-003-2014-00241-00.
DEMANDANTE: Obresan
DEMANDADO: Nación- Min Justicia y otros.
MEDIO DE CONTROL: Reparación Directa

PASO AL DESPACHO

Del Magistrado Edgar Vásquez Contreras, hoy 07 de abril de 2015, el presente memorial informándole que la accionada respondió la demanda.

Anexo 1 cuaderno con 129 folios y un Cd's.

Sírvase proveer lo que estime pertinente.

Atentamente,


MARLIN JARABA VILARDY
Escribiente

Santa Marta, Marzo de 2015.

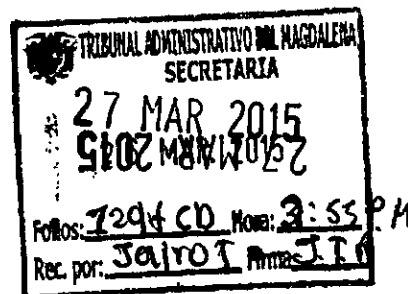
Doctor

EDGAR ALEXI VASQUEZ CONTRERAS

Magistrado

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA

E. S. D.



Referencia: Contestación de la demanda

Radicado: 47-001-2333-003-2014-000241-00

Accionante: Unión Temporal Obras Especiales de Santa Marta (OBRESAN)

Demandado: Nación – Ministerio de Justicia – Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición de la Cámara de Comercio y Universidad Del Magdalena

Medio de Control: Reparación Directa

MANUEL VIVES NOGUERA, varón, mayor, vecino de esta ciudad, domiciliado en la carrera 1 A # 27 – 46 Apartamento 7, identificado con la cédula de ciudadanía numero 84.454.719 expedida en Santa Marta y la Tarjeta Profesional número 169.144 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando como apoderado de la Cámara de Comercio de Santa Marta Para el Magdalena, conforme al poder que anexo, me dirijo a usted con el fin de contestar la demanda en los siguientes términos:

A LAS PRETENSIONES:

Sea lo primero manifestar que las pretensiones de la demanda denominas por el actor como "DECLARACIONES Y CONDENAS" no se encuentran enumeradas, así mismo haremos una serie de observaciones al respecto de este acápite, pero no sin antes manifestar nuestra oposición a todas y cada una de las pretensiones que contra la Cámara de Comercio de Santa Marta Para el Magdalena pudieren surgir de este medio de control.

1. Nos oponemos a esta pretensión, en cuanto a que no hay forma de establecer responsabilidad a cargo de la Cámara de Comercio de Santa Marta Para el Magdalena, pues como demostraremos más adelante no es posible establecer un vinculo o lo que es lo mismo un Nexo Causal entre el hecho y el daño frente a mi representada, pues esta no tiene funciones jurisdiccionales como quiere hacer ver el demandante.
2. A falta de lo mencionado en el numeral anterior, surge la imposibilidad de la consecuencia de declaración de responsabilidad pretendida, a título de

condena y consecuentemente, tampoco habrá responsabilidad de mi prohijada frente a los hechos u omisiones del presente medio de control.

Por lo antes dicho, se hace improcedente el pago de Daño Emergente y Lucro Cesante, sin embargo, miente el demandante al manifestar que el Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena recibió **TREINTA MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA** (\$30.957.240) Pesos M/L, correspondientes según él al cincuenta por ciento (50%), por concepto de Gastos de Funcionamiento del Tribunal de Arbitramento, por el contrario, la suma que decretó el Tribunal de Arbitramento, mediante Acta No. 4 de fecha ocho (8) de septiembre de dos mil diez (2010), fue **TRECE MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/L** (\$13.704.779), como consta a folio 232 de la demanda. Lo anterior denota mala fe de parte de la demandante al perseguir y relacionar en la demanda como pretensión un valor mayor al real, de acuerdo a lo preceptuado por el Artículo 79 numeral 6 que a su letra dice:

"Artículo 79 – Temeridad o Mala Fe Se presume que ha existido temeridad o mala fe en los siguientes casos:

(...) 6. Cuando se hagan transcripciones o citas deliberadamente inexactas."

3. La solicitud de indexación solo procederá en caso de que se declare responsabilidad de los demandados y solo frente a aquellos quienes se declaren responsables. En todo caso el Artículo 192 de la ley 1437 de 2011 no hace referencia alguna a la indexación o lo que es lo mismo no se refiere en absoluto a la actualización del valor adquisitivo de dinero, limitándose a manifestar que sólo se generan intereses moratorios a partir de la fecha de ejecutoria de la sentencia para nuestro caso, pero sólo respecto de los condenados.
4. Como hemos dicho tales afirmaciones son consecuencia de establecer responsabilidad frente a los hechos y demostrando los elementos de responsabilidad en la demanda.
5. Nos oponemos a esta pretensión por cuanto no hay propiamente un perjuicio moral y en caso de haberlo debe demostrarse, de lo cual a la fecha no obra prueba alguna en el expediente.
6. Es evidente que los fallos judiciales deberán ser cumplidos en caso de haber una condena como también se habrán de cumplir en caso de que no la haya.

A LOS HECHOS U OMISIONES:

1. Nos atenemos a lo que se pruebe.
2. Nos atenemos a lo que se pruebe. En todo caso el hecho no es relevante para establecer responsabilidad frente a mi cliente Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena.
3. No me consta. En todo caso el hecho nada tiene que ver con mi cliente.
4. No me consta. Nada tiene que ver el hecho con la posible responsabilidad de mi cliente.
5. No me consta y nada tiene que ver con la posible responsabilidad de la Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena.
6. Nuevamente no me consta y de este hecho no hay forma posible que derive responsabilidad para la Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena.
7. El hecho es cierto, los hoy demandantes solicitaron el primero (1) de febrero de dos mil diez (2010) que se integrara Tribunal de Arbitramento a fin de dirimir un conflicto con la Universidad del Magdalena. Si bien el hecho es cierto, de él no deriva responsabilidad a mi cliente.
8. El hecho es cierto, el ocho (8) de febrero de dos mil diez (2010), se le requirieron documentos y aclaraciones para complementar la solicitud de convocatoria de Tribunal de Arbitramento. De este hecho tampoco deriva responsabilidad alguna.
9. El hecho es cierto. Nuevamente de este hecho no hay posibilidad de establecer responsabilidad de mi defendido.
10. El hecho es cierto, el día veintisiete (27) de abril de dos mil diez (2010), debía surtirse audiencia de designación de árbitros. Mas de este hecho no deriva responsabilidad alguna para mi cliente.
11. El hecho es cierto, la fecha fijada para la mencionada audiencia de designación de árbitros, se reprogramó para el día doce (12) de mayo de dos mil diez (2010). Este hecho no atribuye responsabilidad a mi cliente.
12. El hecho es cierto y se programó como nueva fecha para la audiencia de designación de árbitros el día veinticuatro (24) de mayo de dos mil diez (2010). Como en casos anteriores, el hecho no atribuye responsabilidad a mi cliente.

13. El hecho es cierto, se celebró la audiencia de designación de árbitros y es cierto que de los tres (3) árbitros designados conjuntamente por las partes fueron los Doctores: **DIANA PATRICIA BOVEA MENDINUETA, ROSA GARCIA DE POLO y MIGUEL ANGEL POLO CAMPO.** La Doctora **ROSA GARCIA DE POLO**, no aceptó la designación.
14. Es cierto, que se citó a una nueva audiencia de designación el día veintitrés (23) de junio de dos mil diez (2010), con la finalidad de que las partes eligieran un nuevo árbitro, en reemplazo de la Doctora **ROSA GARCIA DE POLO**, audiencia que no se pudo celebrar, fijándose como nueva fecha el día ocho (8) de julio de dos mil diez (2010), pero no hay responsabilidad de mi cliente en este hecho.
15. Es cierto, pero no hay responsabilidad de mi cliente en este hecho. A pesar de lo anterior, la parte demandante OMITE manifestar que quienes seleccionaron a los Árbitros fueron las partes y NO la CAMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA PARA EL MAGDALENA – CENTRO DE ARBITRAJE, CONCILIACIÓN Y AMIGABLE COMPOSICIÓN, otra razón más para poner en duda el principio de buena fe procesal. En todo caso, como veremos el demandante pretende con el hecho presente atribuir parte de la responsabilidad de la demanda a la Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena, sin embargo, veremos que ello no ha de ser así.
16. El hecho es cierto. Nótese que la demanda arbitral fue mal presentada por parte de los hoy demandantes.
17. Es cierto, pero no atribuye responsabilidad en forma alguna a mi poderdante.
18. Es cierto y no atribuye responsabilidad a mi cliente.
19. Es cierto. No hay responsabilidad derivada de este hecho a mi cliente.
20. El hecho es cierto, efectivamente el tribunal de arbitramento decretó los gastos y honorarios mediante Auto No. 4, los honorarios de los árbitros, honorarios del Secretario, gastos de funcionamiento y administración del Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición, gastos de protocolización del laudo, gastos de funcionamiento y administración del Tribunal de Arbitramento, I.V.A. de honorarios Secretario e I.V.A. gastos de funcionamiento y administración del Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición. Los gastos del Centro, corresponden al pago por concepto del apoyo y trámite en los Tribunales de Arbitramento, función ésta exclusivamente administrativa, distinta a la función jurisdiccional en cabeza de los árbitros.

21. Es cierto, y no deriva responsabilidad de ello para mi cliente.
22. Es cierto, la primera audiencia se celebró el catorce (14) de octubre de dos mil diez (2010).
23. Es cierto. Sin embargo, debe quedar claro la distinción entre la Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena y el Tribunal de Arbitramento, sobre lo cual nos referiremos más adelante. En todo caso como veremos este hecho, no atribuye responsabilidad a la Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena.
24. Es cierto y nos reiteramos en lo manifestado para el hecho anterior.
25. Es cierto, las partes solicitaron la suspensión del tribunal por un término de diez (10) días. Es la segunda vez que hay una dilación en el proceso atribuible a la hoy demandante.
26. Es cierto y nos reiteramos en lo manifestado para el hecho 23.
27. Es cierto y nos reiteramos en lo manifestado para el hecho 23. Si bien es cierto, con este hecho la parte demandante pretende atribuir responsabilidad a la Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena, tal responsabilidad no existe por cuanto se refiere a un presunto error jurisdiccional y no administrativo, no atribuible a la Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena, como entidad promotora del Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición, quien cumple una función de apoyo y trámite en los Tribunales de Arbitramento.
28. Es cierto y nos reiteramos en lo manifestado para el hecho 23.
29. El hecho es parcialmente cierto, nos reiteramos en lo manifestado para el hecho 23. Sin embargo, se precisa que el acta corresponde a la No. 14 y no como lo indica el actor al referirse al acta No. 13, lo cual se desprende de la verificación que el suscrito hizo, al examinar la Escritura Pública No. 850 del once (11) de Septiembre de dos mil doce (2012), de la Notaria Cuarta del Círculo de Santa Marta, a folios 292 y 293 del libro H, mediante la cual se protocolizó el expediente del trámite arbitral.
30. El hecho es parcialmente cierto y nos reiteramos en lo manifestado para el hecho 23. Sin embargo, se precisa que el mencionado dictamen pericial contable, se rindió ante el Tribunal de Arbitramento el día primero (1) de marzo de dos mil once (2011) y no como lo indica el actor al referirse que el mismo se rindió el día veintiocho (28) de febrero de dos mil once (2011), lo cual se desprende de la verificación que el suscrito hizo, al examinar la Escritura Pública No. 850 del once (11) de Septiembre de dos mil doce (2012), de la Notaria Cuarta del Círculo de

Santa Marta, a folios 299 a 310, mediante la cual se protocolizó el expediente del trámite arbitral.

31. El hecho es cierto y nos reiteramos en lo manifestado para el hecho 23.
32. Es cierto. Nuevamente la hoy demandante, solicitó actos que demandaron la dilatación del proceso arbitral.
33. Es cierto y nos reiteramos en lo manifestado para el hecho 23.
34. El hecho es cierto y nos reiteramos en lo manifestado para el hecho 23.
35. El hecho es cierto y nos reiteramos en lo manifestado para el hecho 23.
36. El hecho es cierto y nos reiteramos en lo manifestado para el hecho 23.
37. El hecho es cierto y nos reiteramos en lo manifestado para el hecho 23.
38. Es hecho es cierto. Una vez más, la hoy demandante, solicitó al tribunal de arbitramento, una actuación que demanda tiempo de éste, al objetar el dictamen pericial contable por error grave, y como se observa en el hecho 42 la solicitud no fue procedente. Sin embargo, precisamos que la mencionada solicitud fue presentada ante el Tribunal de Arbitramento el veintinueve (29) de marzo del año dos mil once (2011) y no como lo indica el actor al referirse que la mismo se formuló el día veinticinco (25) de marzo de dos mil once (2011), lo cual se desprende de la verificación que el suscrito hizo, al examinar la Escritura Pública No. 850 del once (11) de Septiembre de dos mil doce (2012), de la Notaria Cuarta del Círculo de Santa Marta, a folios 109 a 113 del libro I, mediante la cual se protocolizó el expediente del trámite arbitral.
39. El hecho es cierto y nos reiteramos en lo manifestado para el hecho 23.
40. El hecho es cierto y nos reiteramos en lo manifestado para el hecho 23. Sin embargo, se precisa que el mencionado memorial fue recibido por el Secretario del Tribunal el primero (1) de abril de dos mil once (2011).
41. El hecho es cierto y nos reiteramos en lo manifestado para el hecho 23.
42. El hecho es cierto. Ya nos referimos al respecto con ocasión al hecho 38.
43. El hecho es cierto y nos reiteramos en lo manifestado para el hecho 23.
44. El hecho es cierto. Si bien es cierto que ahora aduce la parte demandante que se amplió el termino de duración del tribunal de arbitramento por parte de éste y se suspendió el mismo, casi con sorpresa en el hecho 44,

no es menos cierto, que cuando era convocante dentro del expediente que ahora relaciona como hecho, jamás hizo relación a ello, por el contrario guardó silencio frente a esta circunstancia, como consintiendo en ella. Y una vez terminado el proceso, impetra el presente medio de control de reparación directa contra todos y cada uno de quienes pudieron formar parte de la actuación procesal o por fuera de ella, pareciera que la parte demandante quisiera revivir términos de una acción ya concluida y perdida de su parte frente a la Universidad del Magdalena, lo cual por su puesto violenta de manera agreste los principios de non bis in idem, res iudicata y seguridad jurídica, y lo esconde tras el manto de la presente demanda.

En todo caso, es cierto que contra el Auto No. 01 del trece (13) de abril de dos mil once (2011), era procedente el recurso de reposición e incluso una objeción, con el fin de asegurar el éxito del arbitramento, sin embargo, reinó el silencio. Así las cosas, resta por decir que además de la culpa que invade al actor, la Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena – Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición, no ejerce la función jurisdiccional, como quiera que hemos dicho, razón por la cual habremos de proponer además de las excepciones mencionadas, la de falta de legitimación en la causa por pasiva, ya que las funciones de mi defendido son eminentemente logísticas y administrativas.

45. El hecho es cierto y nos reiteramos en lo manifestado para el hecho 23.
46. Es cierto. Una vez más el convocante hoy demandante trunca el proceso arbitral al hacer tacha al testigo, lo cual como veremos en el hecho siguiente no prosperó. Nuevamente, pareciere que el convocante no quisiera darle celeridad al proceso.
47. Es cierto. Nos atenemos a lo manifestado en el hecho anterior.
48. Es cierto y nos reiteramos en lo manifestado para el hecho 23.
49. No es un hecho es una reproducción, es cierto.
50. No es un hecho es una reproducción, es cierto
51. No es un hecho es una reproducción, es cierto
52. No es un hecho es una reproducción, es cierto
53. Es cierto. No genera responsabilidad para mi cliente.
54. Es cierto. No genera responsabilidad para mi cliente.

55. Es cierto. No genera responsabilidad para mi cliente.
56. Es cierto. No genera responsabilidad para mi cliente.
57. No es totalmente cierto, por cuanto el Presidente del Tribunal de Arbitramento de J.P.G. & CIA S.A., **GERMAN VILLANUEVA CALDERÓN Y RICARDO LUIS CANABAL GUZMÁN**, integrantes de la **UNIÓN TEMPORAL OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA – OBRESAN** contra la **UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA**, no es el Presidente del Tribunal de Arbitramento del Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición, cargo que no existe. Efectivamente, la Doctora **DIANA PATRICIA BOVEA MENDINUETA**, en su condición de Presidenta del Tribunal de Arbitramento de J.P.G. & CIA S.A., **GERMAN VILLANUEVA CALDERÓN Y RICARDO LUIS CANABAL GUZMÁN**, integrantes de la **UNIÓN TEMPORAL OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA – OBRESAN** contra la **UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA**, y en cumplimiento del artículo 159 del Decreto 1818 de mil novecientos noventa y ocho (1998), aplicable a éste tribunal de arbitramento, por no ser procedente para el mismo, el artículo 47 de la Ley 1563 de dos mil doce (2012), al ser un proceso arbitral que se promovió antes de la entrada en vigencia de la mencionada Ley, protocolizó el expediente del trámite arbitral antes referenciado, en la Notaria Cuarta del Círculo de Santa Marta, quedando ésta contenida en la Escritura Pública No. 850 de septiembre once (11) de dos mil doce (2012), por esta razón en la Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena, no reposa el expediente.
58. No me consta, que se pruebe. En todo caso no genera responsabilidad para mi cliente.
59. No es un hecho es una reproducción, es cierto.
60. No es un hecho es una reproducción, es cierto. Es diáfano que la parte demandante, pretende lograr el éxito que no pudo lograr como consecuencia de lo ocurrido en el proceso arbitral y subsanar con este medio de control lo que paso en aquel, que ya ha hecho tránsito a cosa juzgada, que era un derecho incierto y del cual no obtuvo declaración, entonces no está llamado a prosperar en este caso, por cuanto lo que se reclama es lo incierto de un derecho incierto, para que se declare por una acción que debió ser diligente en primer término y en todo caso que se impetró de manera inadecuada, pues el medio de control debió ser una reparación directa y en subsidio una actio in rem verso (Acción de restitución), por cuanto lo pretendido no debió ser declarar una falla jurisdiccional, sino por el contrario el enriquecimiento sin causa de una entidad pública, en detrimento del patrimonio de los accionados.

61. Nos atenemos a lo que se pruebe.
62. No es cierto que se presentó el día dieciséis (16) de agosto de dos mil doce (2012) una nueva solicitud. En la Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena, se radicó el día diecisiete (17) de agosto de dos mil doce (2012), bajo el número 23902, un documento que pretendía algo muy diferente, tal como se le manifestó al solicitante (Convocante, hoy demandante) en calenda veintidós (22) de agosto de dos mil doce (2012), mediante oficio, para que se tuviese como una nueva solicitud de convocatoria de tribunal de arbitramento, debió reunir los requisitos contenidos en el artículo 127 del Decreto 1818 de 1998, lo cual nunca sucedió, pues el solicitante pretendía que se reactivara un tribunal de arbitramento, que había cesado en sus funciones y que había expedido un laudo arbitral que hacia tránsito a cosa juzgada. (Anexamos copia de la solicitud y de su respuesta.)
63. No es cierto, como quiera que se le manifestó en los términos de la respuesta de fecha doce (12) de septiembre de dos mil doce (2012), pues pretendía el actor revivir un proceso ya concluido y pasar por alto el efecto del laudo arbitral, de la anulación del mismo y de la protocolización de éste, pues el asunto había sido objeto de controversia ya definida. Actuar de otra manera por parte de la Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena, habría implicado modificar normas públicas o pasarlas por alto, lo cual por su puesto SI es ilegal y habría dado lugar a responsabilidad (En este caso para el particular, Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena), pero el obedecimiento de la norma no puede generar responsabilidad al particular, pues el régimen de responsabilidad del Estado sólo aplica para los órganos que lo componen y no como se pretende en este caso a una entidad privada, no siendo posible aplicar daño especial.
64. Es cierto, no genera responsabilidad para mi cliente.
65. Es cierto, no genera responsabilidad para mi cliente.
66. Es cierto, no genera responsabilidad para mi cliente.
67. Es cierto, no genera responsabilidad para mi cliente.
68. Es cierto, no genera responsabilidad para mi cliente.
69. Nos atenemos a lo que se pruebe, no genera responsabilidad para mi cliente.

CONSIDERACIONES

Sea lo primero manifestar frente al libelo denominado por el demandante como "concepto de violación" que ello es pertinente para las acciones de nulidad, sin embargo, daremos por entendido que es ello el sustento de la demanda de responsabilidad y que al respecto yerra el actor al intentar sustentar que mi defendida la Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena, tiene algún tipo de Responsabilidad en los hechos de esta demanda, pues como hemos dicho antes, en ésta el demandante se equivoca al expresar:

"La Cámara de Comercio de santa Marta fue constituida en 1931, creada mediante Decreto 421 de la Gobernación del Magdalena y Decreto 2288 de 1943 del Ejecutivo Nacional, posteriormente se implemento el Servicio del Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición, conforme la Resolución expedida por el ministerio del Interior y Justicia, razón por la cual, transitoriamente es investida de la Función de Administrar Justicia, como aconteció en nuestro caso particular".

A lo anterior debemos decir que el intento por vincular a la Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena, ha de ser infructuoso, pues bien es sabido y lo demostraremos, que La Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena, a través de su Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición, NO ADMINISTRA JUSTICIA, NI ESTA INVESTIDA TEMPORAL O TOTALMENTE DE ESA FUNCIÓN, razón por la cual no es dable solicitar que se vincule al proceso y mucho menos es posible atribuirle responsabilidad por tales hechos, pues como queda claro nunca ha estado dotada de administrar justicia, la ley no le ha conferido tal función razón por la cual nunca ha administrado justicia y nunca lo hará.

Según el actor es la Cámara de Comercio / Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición, quien administra justicia, lo cual no es cierto, pues tal función no ha sido conferida por la ley ni por otra norma jurídica. Al respecto y en contra de lo manifestado por el demandante, la Resolución 1128 de 16 de mayo de 1993 del Ministerio de Justicia en su parte resolutive manifiesta:

"Artículo 1: Autorizar el funcionamiento del centro de Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Santa Marta de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia."

Lo anterior de ninguna manera traslada funciones jurisdiccionales al Centro de Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena, si así fuere ello carecería de constitucionalidad y la acción estaría mal escogida, pues el medio de control habría de ser el de nulidad por inconstitucionalidad. Respecto de las funciones jurisdiccionales encomendadas transitoriamente a los particulares ha manifestado la H. Corte Constitucional en Sentencia C-1038 de 2002:

"...Así, las funciones judiciales que se atribuyen a particulares deben ser conferidas de manera expresa, pues su carácter excepcional así lo exige. Tal conclusión se complementa perfectamente con el elemento de la voluntad de las partes, que deciden no sólo acudir a la justicia arbitral, sino quiénes serán los árbitros. En ese sentido, la voluntad de las partes activa tanto la jurisdicción arbitral como las competencias y atribuciones de las personas que obrarán como árbitros. Lo contrario, es decir, admitir que funcionarios que no han sido habilitados por la voluntad de las partes puedan ejercer una labor judicial de carácter excepcional, sería ir en contra no sólo el espíritu de la normatividad en materia de arbitramento - basada en la voluntad de las partes - sino también contrariar la Constitución, que establece claramente que se trata de una situación excepcional cuya interpretación debe ser restrictiva.

Admitir una interpretación contraria desconocería el tenor del artículo 116 de la Carta, según el cual los particulares sólo habilitan a los árbitros, no al centro de arbitraje ni a otros funcionarios para el ejercicio de una función tan delicada como la de administrar justicia. En ese orden de ideas, mal podría la ley hacer obligatoria la intervención de personas o entidades no autorizadas por las partes para intervenir en el procedimiento. Es menester entonces reconocer el peso del principio de habilitación al momento de conferir facultades judiciales a los particulares, sin que ello implique negar la importancia de las labores de apoyo y trámite, que pueden ejercer los centros de arbitraje. Sólo así puede ser evitada una participación extraña en el desarrollo de un procedimiento de carácter excepcional que opera basado en la habilitación dada por la voluntad de las partes que acuden al mecanismo. Con base en los fundamentos anteriores, esta Corte encuentra que el cargo del actor es acertado, pues los centros de arbitramento no pueden ser habilitados por la ley para tomar decisiones judiciales indisolublemente ligadas a la suerte del proceso arbitral. Dichas decisiones sólo pueden ser tomadas por los árbitros habilitados por las partes (CP art. 116), sin perjuicio de que la ley pueda conferir a dichos centros labores de apoyo al proceso arbitral, o el desarrollo de ciertas funciones en materia de conciliación..."

Visto lo anterior, es claro, como hemos dicho antes, que las labores realizadas por mi defendido JAMAS fueron JURISDICCIONALES, fueron tal como se pudo ver en la cita anterior "labores de apoyo y trámite" que no son jurisdiccionales y por tal razón desatiende el demandante la necesidad de no vincular a la Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena a este medio de control sin existir razón para ello. Tal circunstancia ya se le había advertido en por lo menos dos oportunidades y razón por la cual el acto de vincularnos a la demanda constituye un acto temerario que ha de dar lugar a condena en costas y agencias en derecho.

Dicho lo anterior, no es menos cierto que se ha garantizado el principio de habilitación como queda claro con solo observar los hechos de la demanda, pues cabe advertir la diligencia de la entidad que represento, en la medida en que se realizaron innumerables actos materiales para la designación de árbitros por las partes, así pues que mediante citaciones radicadas bajo los números 023026, 023025, 023027, 023131, 023132, 023297, 023296, 023420, 023419, 023421, 023489, 023488, 023490, 023592, 023593, y 023594, se le convocó a las partes a la designación de árbitros, razón por la cual no es admisible ahora negar este principio y querer atribuir responsabilidad a mi cliente a sabiendas el demandante que no le asiste razón para con mi prohijada.

Lo anterior, en cumplimiento de la voluntad contractual, contenida en el contrato de obras No. 000146 de fecha 30 de diciembre de 2005, en la **CLAUSULA DECIMA OCTAVA** que a su letra dice:

"CLAUSULA COMPROMISORIA: *Cualquier diferencia relacionada con la ejecución de este contrato asociada a aspectos técnicos será resuelta a través de amigables componedores de acuerdo con los procedimientos establecidos en el Decreto 2279 de 1989, la Ley 23 de 1991, el Decreto 2651 de 1991, la Ley 446 de 1998, el Decreto 1818 de 1998, y reglamentación similar, que serán seleccionados de común acuerdo por las partes. La amigable composición tendrá lugar en las instalaciones de la Universidad del Magdalena. Cada parte podrá acudir a este mecanismo, mediante aviso previo a la otra parte. El procedimiento de la amigable composición se regirá por las siguientes reglas: las partes deberán presentar sus alegatos y documentos que los sustenten en términos de diez (10) días hábiles contados desde la fecha de aviso de la contraparte. Los amigables componedores a su vez tendrán plazo máximo de veinte (20) días hábiles para resolver las disputas por escrito, los cuales se contarán a partir del día siguiente del término previsto en la parte anterior. Los alegatos deberán contener: Una explicación de los fundamentos técnicos y contractuales que sustenten la posición de la respectiva parte. Las peticiones que haga la respectiva parte a los amigables componedores para resolver las diferencias. Cada parte deberá cooperar en la realización de cualquier investigación que los amigables componedores efectúen relacionada con la disputa en cuestión. Las decisiones adoptadas por los amigables componedores como resultado de la amigable composición tendrán fuerza vinculante para las partes de acuerdo con la ley. Los gastos que ocasionen la intervención de los amigables componedores serán cubiertos por la parte que resulte vencida. Cualquier divergencia que surja entre las partes como ocasión de la celebración, ejecución o liquidación de este contrato, no sea posible solucionar amigablemente, serán dirimidos por un tribunal de arbitramento de conformidad con las disposiciones antes citadas. Las disputas relacionadas con la aplicación y los efectos de las cláusulas de caducidad, terminación unilateral e interpretación unilateral y modificación unilateral no podrán ser sometidas a arbitramento. La intervención de los amigables componedores o tribunal de arbitramento no suspenderá la ejecución del contrato salvo que aquellos aspectos cuya ejecución dependa necesariamente de la solución de la controversia".*

En armonía con el inciso 1 del artículo 122 del Decreto 1818 de 1998, que rezaba:

"Árbitros. Las partes conjuntamente nombrarán y determinarán el número de árbitros, o delegarán tal labor en un tercero, total o parcialmente. En todo caso el número de árbitros será siempre impar. Si nada se dice a este respecto los árbitros serán tres (3), salvo en las cuestiones de menor cuantía en cuyo caso el árbitro será uno solo."

Por las consideraciones expuestas, la Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena / Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición, ejerció su función de apoyo y trámite durante todo el proceso arbitral ajustado a las normas legales y reglamentarias. Así las cosas, no hay responsabilidad para los particulares, cuando éstos han cumplido la ley, como habíamos manifestado antes y en todo caso la Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena realizó todos los actos que le correspondían de manera que su diligencia no da lugar a que de ahí derive responsabilidad.

Dicho lo anterior, cabe citar lo manifestado en el artículo 7 del Reglamento interno del Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena, vigente para la época en que se tramitó el proceso arbitral:

"Artículo 7: El Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Santa Marta, sin perjuicio de la obligación de mantener mecanismos eficaces y seguros para la optima prestación de sus servicios, no asume responsabilidad por actuaciones personales de los conciliadores, árbitros, secretarios de tribunales de arbitraje y amigables componedores, quienes responderán por hechos o actos suyos cuando haya lugar."

Como queda claro, las reglas para la posible responsabilidad de cualquier HECHO surgido en ejercicio de la función jurisdiccional a cargo de los árbitros, no puede recaer sobre la Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena / Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición, tal como lo manifiesta el precitado artículo 7 del Reglamento interno del Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena, sin que a la fecha su contenido sustancial haya variado.

Valga anotar que las Cámaras de Comercio son entidades de derecho privado, que en algunos casos muy específicos, desempeñan una función pública, como lo es el registro. Sin embargo, las Cámaras de Comercio, no tienen atribuidas funciones jurisdiccionales de manera temporal o definitiva, como lo he mencionado a lo largo del presente escrito.

Como se aprecia, las consideraciones expuestas, ameritan que se declaren probadas las excepciones que propondré y por ello frente a la Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena, no ha de prosperar la demanda por las múltiples razones enunciadas aquí.

FUNDAMENTOS DE DERECHO.

Artículo 116 de la Constitución

Ley 446 de 1998

Decreto 1818 de 1998

Reglamento Interno del Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición de la cámara de Comercio de Santa Marta.

Nota: La Ley 1563 de 2012, Nuevo Régimen en materia de Arbitramento no aplicó para el trámite arbitral de J.P.G. & CIA S.A., GERMAN VILLANUEVA CALDERÓN Y RICARDO LUIS CANABAL GUZMÁN, integrantes de la UNIÓN TEMPORAL OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA – OBRESAN contra la

UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA, por ser anterior, a la entrada en vigencia de la nueva Ley.

EXCEPCIONES.

Nos permitimos proponer las siguientes excepciones:

Previas:

1. INEPTA DEMANDA Y/O INDEBIDA ESCOGENCIA DE LA ACCIÓN.

La presente demanda es inepta o indebidamente escogida por cuanto los requisitos de la misma no se encuentran presentes, persigue una restitución y debiendo haberse presentado el presente medio de control no se presentó la acción de restitución (actio in rem verso) pues es claro y a todas luces visible que la administración de justicia dio por culminado un conflicto que se suscitó entre dos partes, el cual ahora mal pretende revivir el demandante, más no lo hizo como era debido presentando la actio in rem verso para pedir el resarcimiento por el enriquecimiento que pudo haber tenido la Universidad del Magdalena, por obras realizadas de parte del actor enriqueciendo el patrimonio de la mencionada entidad y en detrimento del patrimonio de la UT OBRESAN.

Igualmente, debemos manifestar a este respecto, que la demanda es inepta por cuando a pesar de haberse ordenado su corrección por parte del Tribunal Administrativo del Magdalena en un término de diez (10) días, la corrección se hizo por fuera del término ahí establecido y se presentó en una entidad diferente a la que debió presentarse, así las cosas el auto admisorio de la demanda no debió emitirse y por el contrario debió rechazarse la demanda. La presente demanda fue presentada el día treinta y uno (31) de julio de dos mil catorce (2014), sin embargo, el diecinueve (19) de agosto del mismo año, el Tribunal Administrativo del Magdalena mediante auto INADMITIÓ la demanda de la referencia (47-001-2333-003-2014-000241-00), y previó que fuera corregida dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación del auto, el cual se notificó mediante estado No. 26 del día jueves veintiuno (21) de Agosto de dos mil catorce (2014), corriendo el término para subsanar desde el veintidós (22) de agosto hasta el cuatro (4) de septiembre de dos mil catorce (2014). A folio 633 del expediente, aparece oficio de fecha cinco (5) de septiembre de dos mil catorce (2014), radicado el día cinco (5) de septiembre de dos mil catorce (2014), remitido por la Dra. **BIBIANA CECILIA ORLANDO GOMEZ**, Procuradora 155 Judicial II Administrativo – Agente del Ministerio Público, al Doctor **EDGAR ALEXI VASQUEZ CONTRERAS** – Magistrado Ponente, mediante el cual allega al expediente, el escrito a través del cual, el apoderado judicial de la parte

demandante, subsana la demanda, un día después de vencido el término para subsanar la demanda. Es decir, el actor al subsanar la demanda hizo algo absolutamente atípico, presentó la corrección de la demanda ante la Procuradora y ésta la remitió al Tribunal Administrativo, sin embargo, la remisión fue recibida el cinco (5) de septiembre de dos mil catorce (2014), un día después de vencido el término para hacerlo, por ello la demanda es inepta. No es aceptable presentar la demanda en un despacho que no es el correcto, admitir tal cosa desnaturaliza el procedimiento y viola el debido proceso, mucho menos si la recepción del documento se hace en el Tribunal Administrativo por fuera del término conferido para realizar la subsanación o corrección de la demanda, por ello no debe tenerse en cuenta la corrección y prosperar la excepción propuesta. Al tener como no presentada la subsanación de la demanda ha de entenderse que esta es inepta por falta de los requisitos exigidos ya sea por la ley o por operador judicial y razón por la cual no debe prosperar la misma. Es de anotar que si bien los documentos pendientes por entregar a los despachos judiciales durante la cesación de actividades de la rama judicial pueden presentarse ante el Ministerio Público, no es menos cierto que para la fecha de presentación de la subsanación la rama judicial funcionaba en condiciones normales, por lo cual ello no sirve de excusa y seguir con el presente medio de control violenta el debido proceso constitucional.

2. COSA JUZGADA.

Es evidente que lo pretendido por el demandante es lo mismo que pretendió en el Tribunal de Arbitramento, sin embargo, modificó los hechos para camuflar unos a los que les había operado la cosa juzgada para revivir términos y poner en consideración del operador judicial el mismo conflicto, para lo anterior basta dar un vistazo a las pretensiones, caso en el cual podrá constatarse que son las mismas. Así pues, que si bien el laudo arbitral tiene efectos de cosa juzgada y si bien es cierto se declaró la nulidad del mismo, por parte de un despacho judicial, el conflicto está ya definido, razón por la cual no ha de ser objeto de controversia judicial aquí, mucho menos frente a mi cliente.

3. FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA

La falta de legitimación en la causa por pasiva es tal vez la más evidente de las excepciones, pues a lo largo de los hechos mostramos que no hay lugar a establecer responsabilidad de la Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena / Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición, toda vez que se ha confundido la función jurisdiccional que se le atribuye a los árbitros (Los cuales fueron designados por las partes de manera conjunta – Artículo 122 del Decreto 1818 de 1998), con la función de apoyo y trámite, es decir, netamente administrativa, que brinda la Cámara de Comercio, sobre lo cual ya nos

hemos referido de manera amplia y suficiente en las consideraciones, sin embargo, lo hacemos nuevamente. Lo anterior, le fue manifestado al demandante en reiteradas oportunidades de manera expresa y por escrito como sucedió en las respuestas a que se hace relación en lo manifestado para los hechos 62 y 63. A pesar de ello la parte actora intenta ahora que se establezca responsabilidad de esta entidad privada, razón por la cual de prosperar las excepciones solicitamos condena en costas y agencias en derecho para el demandante por haber sido temerario. Como quiera que se observa en jurisprudencia de la H. Corte Constitucional que hemos citado no ha de proceder la presente demanda contra mi defendida por cuanto no está ni ha estado investida de función jurisdiccional de manera alguna y solo se limita a las funciones enunciadas, las cuales desempeñó con diligencia, no pudiendo entonces derivarse responsabilidad alguna para mi defendida y en todo caso no siendo posible ser demandada frente a los hechos de la demanda por no guardar relación con los mismos.

4. FALTA DE COMPETENCIA.

La responsabilidad de las entidades privadas no es de competencia de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, a no ser que se trate de una entidad privada que preste un servicio público, sin embargo, en esos casos para que la entidad privada sea susceptible de objeto de responsabilidad bajo el régimen de responsabilidad del Estado deberá haber una relación entre los hechos y la función pública que preste ésta entidad. Si bien es cierto la Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena presta servicios públicos, no es cierto que en este caso lo haya hecho, pues como hemos mencionado las funciones del Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena, nada tienen que ver con funciones públicas por cuanto como hemos mencionado éstas son de apoyo y trámite, en el sentido de organizar y dirigir el Centro, más no tienen un carácter público sino por el contrario son funciones del resorte del derecho privado. Diferente sucede con la función de los árbitros que si es una función Pública o con la función de registro mercantil, pero en todo caso para los hechos objeto de demanda, no se ha realizado función pública alguna.

5. CADUCIDAD

En cuanto a la caducidad de la acción, es menester manifestar que si bien es cierto el demandante la sustenta en unos términos que parecieren ser adecuados, tal cosa no es así, pues obsérvese que el demandante siempre relaciona como hecho causante del daño el laudo arbitral, y habrá de distinguirse entre el hecho que genera el daño y aquellos que no. Pues entonces no serán constitutivos del perjuicio (Daño), a pesar de ello el demandante sostiene que es precisamente la ampliación del

termino de funcionamiento del Tribunal de Arbitramento, o en su defecto el laudo, aquél momento en que se le causa el daño y consecuentemente da lugar a la anulación. Así las cosas, el hecho que causa el daño es la ampliación del término o la anulación del laudo, este último caso por parte del H. Consejo de Estado y del cual el actor no se refiere en absoluto dando a entender que el hecho y momento exacto para la causación del perjuicio es la ampliación del periodo de funcionamiento del Tribunal de Arbitramento y/o el laudo arbitral en sí mismo, de ahí, que si el laudo se profirió, el veintidós (22) de agosto de dos mil once (2011), el término para que no operara la caducidad era sólo hasta el veintitrés (23) de agosto de dos mil trece (2013) y ni aún suspendiendo los términos de caducidad con la conciliación prejudicial es viable que se haya presentado ésta, hasta el treinta y uno (31) de julio de dos mil catorce (2014), por lo que al momento de presentar la acción ésta había caducado. Adviértase que el actor, no presentó como causal de anulación del laudo arbitral, la contenida, en el numeral 5 del artículo 163 del Decreto 1818 de 1998, esto es, haberse proferido el laudo después del vencimiento del término fijado para el proceso arbitral o su prórroga, por lo que pareciere que ahora alega su propia culpa, lo cual en derecho administrativo no es posible.

De Fondo:

6. CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA.

Como se expuso, anteriormente en este documento al momento de analizar individualmente los hechos, especialmente lo manifestado para los hechos 16, 25, 32, 38, 44 y 46, y con atención especial a lo manifestado para el hecho 44, se puede derivar que los constantes y reiterados requerimientos (la mayoría infructuosos) de la parte convocante (hoy demandante) dilataron el normal desenvolvimiento del Tribunal de Arbitramento y dieron lugar a la necesidad de ampliar el término. Así pues, que no hubo interposición de recursos frente a la decisión del Tribunal de Arbitramento de ampliar el término de funcionamiento del mismo, razón por la cual las continuas dilaciones se derivan en una culpa exclusiva de la víctima y en todo caso como manifestamos, se alega la propia culpa del demandante, que no es admisible para esta demanda. Por lo que no ha de prosperar y debe darse por probada la excepción aquí propuesta.

7. HECHO DE UN TERCERO.

Como bien se aprecia mai haría el despacho en condenar a la Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena, cuando las labores de ésta se limitan y circunscriben al ejercicio de la función de apoyo y trámite, no teniendo funciones jurisdiccionales. Así las cosas pudo haber sido

responsable cualquier otra persona pero NO mi cliente en la medida en que de los hechos no se hace posible derivar responsabilidad para ésta.

8. CARENIA DE LOS ELEMENTOS DE RESPONSABILIDAD.

Si bien es cierto narra el actor unos hechos que pueden ser acciones u omisiones, el concepto de violación no es claro, no hay ninguna tendencia a establecer un nexo causal entre el hecho y el daño (Perjuicio). No está claramente demostrado el perjuicio en la medida en que reclama derechos que no son ciertos, sino, por el contrario meras expectativas, y en todo caso la culpa no está probada, debiendo probarla por haber propuesto como régimen de responsabilidad, falla en el servicio, razón por la cual la demanda no está llamada a prosperar.

Genéricas:

9. Las demás que el juez considere.

Solicito se ordene la notificación de la demanda a los Señores Árbitros del Tribunal de Arbitramento de J.P.G. & CIA S.A., **GERMAN VILLANUEVA CALDERÓN Y RICARDO LUIS CANABAL GUZMÁN**, integrantes de la **UNIÓN TEMPORAL OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA – OBRESAN** con la **UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA**, Doctores, **JUAN ALBERTO POLO FIGUEROA, MIGUEL ANGEL POLO CAMPO y DIANA PATRICIA BOVEA MENDINUETA**. Lo anterior teniendo en cuenta que en el auto de fecha veintitrés (23) de septiembre de dos mil catorce (2014), al momento de admitir la demanda y ordenar las notificaciones, no se dispuso la notificación de los mencionados miembros del Tribunal de Arbitramento, quienes son demandados conforme a la demanda instaurada por el medio de control de reparación directa que obra en el expediente. Se precisa que la dirección de notificación judicial de la Doctora **DIANA PATRICIA BOVEA MENDINUETA** es Calle 10 No. 11 A – 12 Centro Comercial La Coquera, en la ciudad de Santa Marta. Obsérvese que los mencionados, acudieron o se notificaron para conciliación prejudicial Administrativa, razón por la cual han de ser sujetos procesales en esta demanda.

En el archivo del Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena, sólo reposan copias de las actuaciones que conforme a la ley vigente para la fecha de la solicitud de Convocatoria de Tribunal de Arbitramento, reglamento del Centro y a los procedimientos del Sistema de Gestión de la Calidad, se deben conservar, de las cuales nos permitimos anexarle copia simple. El expediente que contiene todas las actuaciones del Tribunal de Arbitramento de J.P.G. & CIA S.A., **GERMAN VILLANUEVA CALDERÓN Y RICARDO LUIS CANABAL GUZMÁN**, integrantes de la **UNIÓN TEMPORAL OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA – OBRESAN** con la **UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA**, se encuentra

protocolizado mediante Escritura Pública No. 850 de fecha once (11) de septiembre de dos mil doce (2012), de la Notaria Cuarta de Círculo de Santa Marta, lo anterior fue comunicado por quien fungía como Presidenta del Tribunal de Arbitramento, Doctora **DIANA PATRICIA BOVEA MENDINUETA**, mediante oficio radicado en esta entidad el día doce (12) de septiembre de dos mil doce (2012), bajo el número 24035.

NOTA: La presentación de la contestación de la demanda no implica de manera alguna la renuncia del recurso de reposición interpuesto contra el auto admisorio de la demanda.

PRUEBAS:

1. Copia de los recibos de pago por concepto del servicio de arbitraje de fecha primero (1) de febrero de dos mil diez (2010) y veinticinco (25) de octubre de dos mil diez (2010).
2. Copia del acta No. 4 de fecha ocho (8) de septiembre de dos mil diez (2010).
3. Copia de la carta de fecha dieciséis (16) de Agosto de dos mil doce (2012), radicada en esta entidad el día diecisiete (17) de agosto de dos mil doce (2012), bajo el número 23902.
4. Copia de la respuesta de fecha veintidós (22) de Agosto de dos mil doce (2012), con la constancia de recibo.
5. Copia de la solicitud de fecha tres (3) de Septiembre de dos mil doce (2012).
6. Copia de la respuesta de fecha doce (12) de Septiembre de dos mil doce (2012).
7. Copia de la resolución No. 1128 de de fecha dieciséis (16) de mayo de mil novecientos noventa y tres (1993) del Ministerio de Justicia.
8. Copia del oficio radicado en esta entidad el día doce (12) de septiembre de dos mil doce (2012), bajo el número 24035.
9. Copia de la citaciones radicadas bajo los números: 023025, 023026, 023027, 023131, 023132, 023297, 023296, 023419, 023420, 023421, 023488, 023489, 023490, 023592, 023593, y 023594.
10. Copia de los documentos que obran en el archivo del Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena.
11. Certificación del artículo 7 del Reglamento Interno del Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición de la cámara de Comercio de Santa Marta.

ANEXOS:

1. Anexo a este documento está el poder debidamente conferido a mi favor y su anexo.
2. Anexo los documentos relacionados en el acápite de pruebas.

NOTIFICACIONES:

La parte demandada, Camara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena, las recibirá en la dirección de correo electrónico: camarasm@ccsm.org.co y en la Avenida del Libertador 13 - 94 de la ciudad de Santa Marta. Su apoderado en el correo electrónico mvivesnoguera@hotmail.com o en la carrera 1 A Número 27 - 46 apartamento 7 de la ciudad de Santa Marta.

Agradezco de antemano su amable colaboración.

Atentamente,



MANUEL VIVES NOGUERA
CC 84.454.719 de Santa Marta
TP 169.144 del C.S. de la Judicatura

684

Ref.: Poder – Acción de Reparación Directa - J.P.G. & CIA S.A.S., GERMAN VILLANUEVA CALDERON y RICARDO LUIS CANABAL GUZMAN, miembros de la UNION TEMPORAL OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA – OBRESAN contra NACION – MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO - CAMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA – CENTRO DE ARBITRAJE, CONCILIACION Y AMIGABLE COMPOSICION - UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA – DIANA BOVEA MENDINUETA, MIGUEL ANGEL POLO CAMPO y JUAN ALBERTO POLO FIGUEROA - radicada bajo el No. 47-001-2333-003-2014-000241-00.

Mí apoderado queda facultado para tramitar, desistir, sustituir, recibir, interponer recursos y demás facultades propias del cargo que tiendan a la defensa de la Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena.

Del Señor Magistrado,

CESAR MIGUEL RIASCOS NOGUERA
C.C. No. 79.285.498 expedida en Bogotá.

MANUEL VIVES NOGUERA
C.C. No. 84.454.719 expedida en Santa Marta
T.P. No. 169.144 del C.S. de la J.

NOTARÍA SEGUNDA DEL CÍRCULO DE SANTA MARTA
DILIGENCIA DE PRESENTACIÓN PERSONAL

El anterior escrito fue presentado personalmente por:

RIASCOS NOGUERA CÉSAR MIGUEL

Identificado con: C.C. 39285498

Y Tarjeta Profesional No. MP


Santa Marta 05/03/2018

Hora: 10:36:55 a.m.

ukd7m6k75m5yh5nm

ANDRÉS FABIAN LÓPEZ PEÑALOZA
NOTARIO

YWSOIH290NGMZHS



www.notariadigitalmex.com

Esta autenticación puede ser verificada mediante el lector de código QR o en la página web www.notariaenlinea.com

www.information.gov.uk



886

Av. Libertador 13-94 PBX:42388280
 011 51.790.160-9

FLIP: 13-94
 EANTICOR: 13-94
 NOFA: 13-94
 USURF: 13-94

PLA: 13-94
 PLU: 13-94
 FORMA DE PAGO: 13-94
 RESORTE: 13-94

SOL: 13-94
 TPA: 13-94
 LOCAL: 13-94

Ex. Libertador 13-94 PHA-4230825

NY 391,760. 160-9

TRABAJAMOS POR EL DESARROLLO REGIONAL

File #44: 2016/10/25 OPERAC.: 010421025038

REC'D NO. 6000888945

DATA: 19-07-2006 PAGINA 1 DE 1

Indicator of Quality

ROSA M HERNANDEZ DE DIANA PATRICIA - PRESID

REF ID: A6657439474 BUE:

FORM OF PAGE 1 OF 1 PRIVATE

100-443717-1

RONALD

VALERIE

CONFIDENTIAL 500 100: PETSOS \$A 12,474,778

24 THE PUBLIC LIFE OF JOHN F. KENNEDY 2,027, 854

Find. Factoria

ACTA No. 4

REF: TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO DE J.P.G. & CIA S.A., GERMÁN VILLANUEVA CALDERÓN y RICARDO LUIS CANABAL GUZMAN, INTEGRANTES DE LA UNION TEMPORAL OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA -OBRESAN- con la UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA.

En Santa Marta, a los ocho (8) días del mes de Septiembre del año dos mil diez (2.010), siendo las cuatro de la tarde (4:00 p.m.), en el Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Santa Marta, se dio continuación a la Audiencia de Instalación del Tribunal de Arbitramento que dirimirá las diferencias surgidas entre: J.P.G. & CIA S.A., GERMÁN VILLANUEVA CALDERÓN y RICARDO LUIS CANABAL GUZMAN, INTEGRANTES DE LA UNION TEMPORAL OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA -OBRESAN- con UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA.

Se hicieron presentes DIANA PATRICIA BOVEA MENDINUETA, quien Preside, JUAN ALBERTO POLO FIGUEROA, arbitro, MIGUEL ANGEL POLO CAMPO, arbitro, GUILLERMO DE LOS RIOS, Secretario; y los Doctores GABRIEL FRANCISCO GONZÁLEZ BARRAZA, apoderado de J.P.G. & CIA S.A., GERMÁN VILLANUEVA CALDERÓN y RICARDO LUIS CANABAL GUZMAN, INTEGRANTES DE LA UNION TEMPORAL OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA -OBRESAN-, y el Doctor CARLOS EUGENIO BECERRA VARONA, apoderado especial de la UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA.

El Secretario informa que el Dr. CARLOS EUGENIO BECERRA VARONA, apoderado de la parte demandada, el día 31 de Agosto de 2010, dentro del término legal conferido para ello, describió el traslado, contestando la demanda y presentando excepciones.

Acto seguido, el Tribunal profiere el siguiente Auto.

AUTO No. 1:

Habiendo presentado la parte demandada excepciones de mérito dentro del término legal, este Tribunal,

RESUELVE:

PRIMERO: Por Secretaria córrasele traslado a la parte demandante de las excepciones de mérito propuestas por la parte demandada.

SEGUNDO: El término de traslado es de cinco (5) días, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 399 del Código de Procedimiento Civil.

Notifíquese y Cúmplase.

Se deja constancia que las partes no interpusieron recurso.

El Secretario del Tribunal procede a correrle traslado a la parte convocante de las excepciones de mérito presentadas por la parte convocada, mediante constancia secretarial que se anexa al expediente.

Acto seguido, el suscrito Secretario informa al Tribunal que se surtió el trámite ordenado en el auto que antecede.

En este estado de la diligencia el Tribunal procede a dictar el siguiente auto:

AUTO No. 2:

Por tratarse de un Tribunal Legal, para efectos de determinar los honorarios y gastos de funcionamiento del mismo, debe darse aplicación a lo dispuesto en el artículo 12 de Decreto 4089 de 2007, en consecuencia y dado a que la parte accionante estimó la cuantía del litigio en **MIL OCHOCIENTOS MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS** (\$1.827.303.919.00), el Tribunal:

RESUELVE:

PRIMERO: Fijar los honorarios y gastos de funcionamiento del Tribunal.

SEGUNDO: Se fijan las siguientes sumas por conceptos de: (I) honorarios de los árbitros; (II) honorarios del Secretario; (III) gastos de funcionamiento y administración del Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Santa Marta; (IV) gastos de protocolización del laudo arbitral; y (V) gastos de funcionamiento y administración del Tribunal

Número	Concepto	Valor
I	Honorario por árbitros (Sin IVA)	\$27.409.558,00.
II	Honorarios para el secretario (Sin IVA)	\$13.704.779,00.
III	Gastos de Funcionamiento y Administración del Centro de Arbitraje Cámara de Comercio.	\$13.704.779,00.
IV	Gastos de Protocolización Laudo	\$10.000.000,00
V	Gastos de Funcionamiento y Administración Tribunal de Arbitramento	\$ 1.000.000,00
SUBTOTAL		\$120.638.232,00
	IVA Honorarios Secretario	\$ 2.192.764,00
	IVA Gastos de Funcionamiento y Administración del Centro de Arbitraje Cámara de Comercio	\$ 2.192.764,00
TOTAL IVA		\$ 4.385.528,00
TOTAL:		\$125.023.760,00

TERCERO: La suma decretada **CIENTO VEINTICINCO MILLONES VEINTITRES MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS (\$125.023.760,00)**, deberá ser consignada por mitades, por cada una de las partes, dentro de los

términos señalados en el artículo 22 del Decreto 2279 de 1989, modificado por el artículo 105 de la Ley 23 de 1992 (Artículo 144 del Decreto 1818 de 1998), a órdenes de la Presidenta del Tribunal, doctora **DIANA BOVEA MENDINUETA**, en la cuenta de ahorros número 116200095010 del Banco DAVIVIENDA, abierta para tales efectos. No obstante, para efectos de la consignación inicial, las partes podrán dentro de los diez (10) días siguientes a la presente audiencia, entregar el valor correspondiente mediante cheque de gerencia a órdenes de la Presidenta del Tribunal, Dra. Diana Bovea Mendinueta.

CUARTO: Las anteriores sumas deberán ser inicialmente consignadas a título de anticipo ya que su causación tendrá lugar, de conformidad con la ley, el cincuenta por ciento (50%) cuando el Tribunal asuma competencia en la primera audiencia de trámite y, el saldo, cuando se profiera el laudo o por terminación del proceso por cualquier otra causa.

QUINTO: En cuanto a la partida de gastos de Administración del Centro, se advierte que la parte Convocante anticipó la suma de **UN MILLÓN CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS (\$1.194.800)**, incluido IVA al solicitar la integración del Tribunal de Arbitramento, valor que se deducirá de la suma a consignar por la parte convocante. Así mismo, se advierte a las partes que la Cámara de Comercio de Santa Marta, es una entidad responsable del IVA Régimen Común, es retenedora del IVA y es gran contribuyente del impuesto sobre la renta. Es igualmente, una entidad sin ánimo de lucro, por lo cual las partes deben abstenerse de efectuar retenciones.

SEXTO: Los gastos que se generen en la práctica de pruebas y expensas que se ocasionen dentro del proceso, se someterán a lo previsto en el artículo 389 del Código de Procedimiento Civil.

SEPTIMO: Se ordena la expedición de copias de esta providencia con destino a cada una de las partes, para la tramitación de los respectivos pagos.

OCTAVO: Señalase como fecha para la continuación de la audiencia el día treinta (30) de Septiembre de 2010, a la hora de las 4:00 P.M.

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE:

La anterior providencia quedó notificada en estrados.

Se deja constancia que las partes no interpusieron recurso.

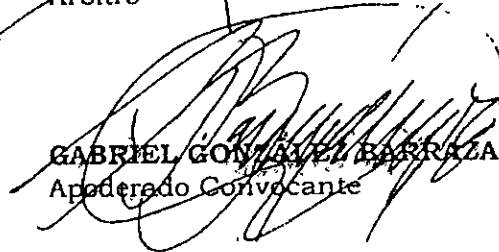
No habiendo otro asunto que tratar se finaliza la presente audiencia, para constancia se firma, por quienes asistieron.


DIANA BOVEA MENDINUETA
Presidenta


JUAN POLO FIGUEROA
Arbitro



MIGUEL POLO CAMPO
Arbitro



GABRIEL GONZALEZ BARAZA
Apoderado Convocante



CARLOS BECERRA BARONA
Apoderado Convocada



GUILLERMO ANTONIS DE LOS RIOS BERMUDEZ
Secretaria

691 21

No. **23902**
Archivado en: **32-24-00**
CAMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA
17 AGO. 2012
Recibida **24** **BI**
Pase a **BI**
Atendido **BI**

Santa Marta, D. T. C. H., 16 de agosto de 2012

Doctor

CÉSAR RIASCOS NOGUERA
DIRECTOR CÁMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA

Doctora

BIBIANA M. OVALLE DE ANDREIS
DIRECTORA CENTRO DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
CÁMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA

Avenida del Libertador No. 13 - 94

Teléfonos: 423 0828

Fax: 421 4777

Ciudad.

**Asunto: SOLICITUD DE NUEVA CONVOCATORIA TRIBUNAL DE
ARBITRAMIENTO DE UNIÓN TEMPORAL OBRESAN - OBRAS ESPECIALES
DE SANTA MARTA -, J.P.G. & CIA S.A., GERMÁN VILLANUEVA CALDERÓN
Y RICARDO LUIS CABANAL GUZMÁN CONTRA LA UNIVERSIDAD DEL
MAGDALENA.**

Respetados Drs del Tribunal. **DIANA PATRICIA BOVEA MENDINUETA, JUAN
ALBERTO POLO FIGUEROA y MIGUEL ÁNGEL POLO CAMPO**

GABRIEL FRANCISCO GONZÁLEZ BARRAZA, mayor de edad, domiciliado y
residenciado en la ciudad de Santa Marta, D. T. C. H., identificado civil y
profesionalmente como aparece al pie de mi firma, apoderado reconocido de la
**UNIÓN TEMPORAL OBRESÁN - OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA Y
DE CADA UNO DE SUS MIEMBROS**, teniendo en cuenta que el H. Consejo de
Estado declaró la anulación del Laudo Arbitral proferido por el Tribunal de
Arbitramento, convocado para dirimir las diferencias surgidas en el Contrato de
Obra No. 0146 de 2005 celebrado entre mis poderdantes y la **UNIVERSIDAD DEL
MAGDALENA**, por encontrarse probada la causal consistente en "haberse
proferido el laudo después del vencimiento del término fijado para el proceso
arbitral o su prórroga" y con fundamento, además, en que el pasado 14 de agosto
del presente año fui notificado, por el Centro de Conciliación y Arbitraje de esta
cámara de comercio, de dicha providencia y de la remisión hecha por el H.
Consejo de Estado del expediente respectivo, me permito solicitar a ustedes, con
el fin de precaver cualquier responsabilidad de la Cámara de Comercio de Santa
Marta por la denegación de justicia que el error producido por los árbitros implica
para nosotros, se sirvan **ORDENAR LA CONVOCATORIA DE UN NUEVO**

692 90

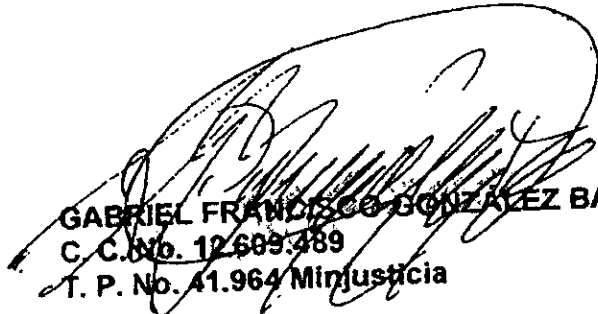
TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO en el cual se conserven las pruebas válidamente practicadas y las actuaciones que no hubieren sido afectadas con la anulación, es decir, todas aquellas llevadas a cabo hasta el día 24 de abril de 2011, que fue la fecha en que según los cálculos de la sentencia del H. Consejo de Estado venció el término del Tribunal de Arbitramento.

De conformidad con lo dispuesto en el inciso 4º del artículo 165 del Decreto 18118 de 1998 (correspondiente al artículo 129 de la Ley 446 de 1998 que modificó el artículo 40 del Decreto 2279 de 1989) los árbitros NO tendrán derecho a la segunda mitad de sus honorarios, por lo que solicito que con dichos montos se sufraguen los costos del nuevo tribunal de arbitramento que se convoque de conformidad con la presente solicitud.

Es importante tener en cuenta que la demanda fue instaurada antes del vencimiento del término de caducidad de la acción, por lo que a estas alturas, si no se accede al remedio pedido en este escrito, mis poderdantes quedarían sin la posibilidad de que se les administre pronta y cumplida justicia, toda vez que NO tendrían posibilidad de accionar nuevamente ante la jurisdicción por una eventual caducidad de la acción, básicamente por un hecho que escapa a sus fuerzas, toda vez que la anulación se produjo por un evidente error en que incurrieron los árbitros, situación que no puede ser trasladada al Convocante.

Agradezco su debida atención.

Atentamente,



GABRIEL FRANCISCO GONZÁLEZ BARRAZA
C. C. No. 12.609.489
T. P. No. 41.964 Minjusticia

24-029324

Santa Marta, 22 AGO, 2012

Doctor
GABRIEL FRANCISCO GONZALEZ BARRAZA
E.S.M.

Ref: Solicitud Dr. Gabriel Francisco González Barraza.

Respetado Doctor:

El día diecisiete (17) de Agosto de dos mil doce (2012) se recibió la solicitud de la referencia radicada bajo el No. 23902, esta Dirección procede a manifestar:

1. Los Centros de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición son entidades que coadyuvan a la administración de justicia y prestan los recursos logísticos, físicos, técnicos y financieros necesarios para el desarrollo de los trámites arbitrales. Es en últimas un administrador y prestador de servicios, y su rol es operativo más no jurisdiccional.
2. De conformidad con la Sentencia C. 1038 de 2002 cumplimos una función de apoyo y trámite.
3. En ejercicio de la función de apoyo y trámite conforme a la Sentencia Constitucional no está autorizado el Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición de esta entidad para ordenar la convocatoria de un nuevo Tribunal de Arbitramento, por ser esta solicitud improcedente e ilegal al carecer el Centro de facultad jurisdiccional, habida cuenta que son los interesados los llamados a presentar una nueva solicitud de convocatoria por tratarse de una justicia rogada la cual deberá estar conforme con lo preceptuado en el artículo 127 del Decreto 1818 de 1998 que a su letra dice:

"La solicitud de convocatoria deberá reunir todos los requisitos exigidos por la ley para la demanda y se dirigirá al centro de arbitraje indicado en el numeral 1º del artículo 15 de este decreto. (Decreto 2651 de 1991, artículo 13)".

32
694

Así mismo deberá cumplir con el pago de los gastos iniciales conforme lo establece el artículo 11 del Decreto 4089 de 2007 que reza:

"GASTOS INICIALES. Con la presentación de cualquier convocatoria a Tribunal de arbitramento, la parte convocante deberá cancelar a favor del Centro, los siguientes valores:

Si es un trámite de menor cuantía el equivalente a un salario mínimo mensual vigente. (1 SMMLV).

Si es un trámite de mayor cuantía o de cuantía indeterminada, el equivalente a dos salarios mínimos mensuales vigentes (2 SMMLV).


Estos valores se imputarán a los gastos administrativos que decreta el Tribunal. En los casos donde el tribunal no pueda asumir sus funciones se reembolsarán dichos recursos".

No obstante las anteriores precisiones en aras de hacer llegar la solicitud a los distintos destinatarios este Centro dio el traslado de su solicitud a los Doctores: DIANA BOVEA MENDINUETA, JUAN ALBERTO POLO FIGUEROA y MIGUEL ANGEL POLO CAMPO, para su conocimiento y fines pertinentes. Anexo copia de las remisiones del traslado.

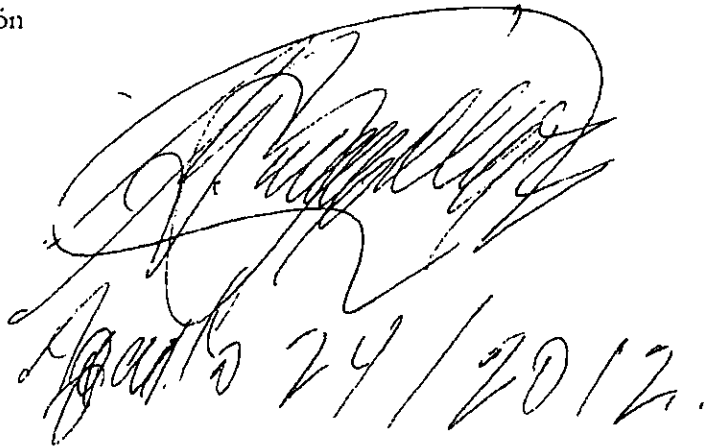
Se advierte que el solicitante no suministró su dirección de notificación judicial.

En el suministro de cualquier información adicional estaré presta a colaborarle gustosamente.

Atentamente,


Bibiana M. Ovalle De Andreis
Directora Centro de Arbitraje, Conciliación
Y Amigable Composición

Anexo: Lo anunciado
Bibiana O. /32-24-20


24/2012.

23978

Archivos en: 82-24-20.
CAMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA

03 SET. 2012

Recibido Para Atendido

Santa Marta, D. T. C. H., 3 de septiembre de 2012

Doctor
CÉSAR RIASCOS NOGUERA
DIRECTOR CÁMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA

Doctora
BIBIANA M. OVALLE DE ANDREIS
DIRECTORA CENTRO DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
CÁMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA
Avenida del Libertador No. 13 – 94
Teléfonos: 423 0828
Fax: 421 4777
Ciudad.

Asunto: RESPUESTA A SU COMUNICACIÓN No. 24-029324 DE 22 DE AGOSTO DE 2012 Y REITERACIÓN DE SOLICITUD DE NUEVA CONVOCATORIA TRIBUNAL DE ARBITRAMIENTO DE UNIÓN TEMPORAL OBRESAN - OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA -, J.P.G. & CIA S.A., GERMÁN VILLANUEVA CALDERÓN Y RICARDO LUIS CABANAL GUZMÁN CONTRA LA UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA.

Respetados Drs. Riascos y Ovalle:

GABRIEL FRANCISCO GONZÁLEZ BARRAZA, mayor de edad, domiciliado y residenciado en la ciudad de Santa Marta, D. T. C. H., identificado civil y profesionalmente como aparece al pie de mi firma, apoderado reconocido de la **UNIÓN TEMPORAL OBRESÁN – OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA Y DE CADA UNO DE SUS MIEMBROS**, en respuesta a su comunicación del asunto me permito manifestar que, en todo caso, así el Tribunal de Arbitramento cuyo laudo arbitral fue anulado por el H. Consejo de Estado por extemporáneo fuere legal, en los términos del artículo 116 del Decreto 1818 de 1998, ello no implica que no se hubiere llevado a cabo a través del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio, quien es la que está legal y reglamentariamente habilitada para llevar a cabo los mencionados medios alternativos de solución de conflictos y, en virtud de ello, para tener su listado oficial de árbitros que en este caso fueron sorteados, seleccionados y posesionados por este centro, lo que implica que tanto ellos como el centro se hacen responsables por los actos u omisiones en que hubieren podido incurrir en el cumplimiento de la función de administrar justicia transitoriamente por habilitación constitucional y legal.

No obstante lo anterior, como se desprende de mi anterior solicitud, la intención es que se eviten perjuicios a la convocante a través de la convocatoria de UN NUEVO TRIBUNAL DE ARBITRAMIENTO, PERO CON EL FIN ÚNICO Y PRIMORDIAL DE QUE CONTINÚE EL TRÁMITE DESDE LO ACTUADO HASTA EL DÍA 24 DE ABRIL DE 2011 Y SE PRONUNCIE UN NUEVO LAUDO, RAZÓN POR LA CUAL NO ESTAMOS ANTE EL TÍPICO CASO EN EL QUE SE HACE UNA SOLICITUD DE CONVOCATORIA DESDE CERO, pero aún así me permitiré citar nuevamente, en el presente escrito, el contenido de la demanda que fue tenida en cuenta por los árbitros durante el fallido proceso arbitral, cuyo laudo fue anulado por el H. Consejo de Estado.

CON RESPECTO A LOS ÁRBITROS, NUESTRA SOLICITUD SE ENCAMINA A QUE SEAN SORTEADOS UNOS NUEVOS QUE RETOMEN EL PROCESO Y LO LLEVEN A FELIZ TÉRMINO.

EN CUANTO A LOS COSTOS ADMINISTRATIVOS, ESTARÍAMOS EN DISPOSICIÓN DE CANCELARLOS, NO OBSTANTE, SOLICITAMOS QUE PRIMERO SE UTILICEN LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES EL 50% DE LOS HONORARIOS DE LOS ÁRBITROS, QUE DEBERÁN DEVOLVER A LAS PARTES, PARA CUBRIR DICHOS GASTOS ADMINISTRATIVOS INICIALES, PUES USTED ENTENDERÁ QUE NO ES JUSTO QUE PRODUCIÉNDOSE UN EVIDENTE ERROR JUDICIAL Y DEBIENDO LOS ÁRBITROS REÍNTERGAR LA MITAD DE SUS HONORARIOS, SE NOS EXIJA SUFRAGAR NUEVAMENTE LOS COSTOS DE UNOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, CUANDO LO QUE SE PIDE ES LA RETOMA DEL TRÁMITE ARBITRAL DESDE LA FECHA EN QUE SE PRODUJO LA EXTEMPORÁNEIDAD DEL INICIAL TRIBUNAL DE ARBITRAMIENTO.

COMO VERÁ USTED, ESTO SE ACOMPASA CON LOS PRIMADOS CONSTITUCIONALES DE ACCESO A LA JUSTICIA, CON EL PROPÓSITO DE OBTENER PRONTA Y CUMPLIDA JUSTICIA Y ES PRECISAMENTE CUMPLIDA JUSTICIA LO QUE DEMANDAMOS EN ESTE MOMENTO ANTE EL JUEZ NATURAL DEL CONTRATO, ES DECIR, UN TRIBUNAL DE ARBITRAMIENTO.

Así las cosas, A CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBE EL TEXTO DE LA DEMANDA QUE SIRVIÓ DE BASE AL TRÁMITE ARBITRAL FALLIDO, COMO HABÍA SIDO ANUNCIADO ATRÁS, SIN APORTAR NUEVAMENTE LAS PRUEBAS Y ANEXOS CORRESPONDIENTES POR RAZONES DE ECONOMÍA, PUES ESTOS REPOSAN EN EL CENTRO DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE QUE USTED DIRIGE:

"GABRIEL FRANCISCO GONZÁLEZ BARRAZA, mayor de edad, domiciliado y residenciado en la ciudad de Santa Marta, D. T. C. H., identificado civil y

6935

profesionalmente como aparece al pie de mi firma, actuando de conformidad con la sustitución del poder que me hiciera el Dr. **JAIRÓ ALBERTO BARROS ACOSTA**, en calidad de apoderado judicial de **JUAN PABLO GONZÁLEZ**, actuando como Gerente y Representante Legal de **J.P.G. & CIA. S.A.**, **GERMAN VILLANUEVA CALDERÓN Y RICARDO LUIS CANABAL GUZMÁN**, miembros de la **UNIÓN TEMPORAL OBRESÁN – OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA**, constituida mediante documento privado del 15 de noviembre de 2005 suscrito en la ciudad de Barranquilla, **Y DE CADA UNO DE SUS MIEMBROS: J.P.G & CIA S.A.**, sociedad colombiana, constituida mediante Escritura Pública No.50 de la Notaría única de Santo Tomas del 28 de enero de 1993, inscrita el 25 de febrero de 1993 bajo el No. 48.547 del libro respectivo de la Cámara de Comercio de Barranquilla, **GERMÁN VILLANUEVA CALDERÓN**, mayor de edad, domiciliado en Santa Marta, D. T. C. H., identificado con la cédula de ciudadanía No. 12.547.660 expedida en Santa Marta **Y RICARDO LUIS CANABAL GUZMÁN**, mayor de edad, domiciliado en Santa Marta, D. T. C. H., identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.872.383 expedida en Montería, en adelante conjuntamente denominados **LOS CONVOCANTES**; según poder debidamente otorgado por el Representante Legal de la **UNIÓN TEMPORAL OBRESÁN – OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA** y por cada uno de sus miembros, el cual, junto con la respectiva sustitución, acompaña la presente demanda; mediante el presente escrito solicito la convocatoria de un Tribunal de Arbitramento para que conozca y falle la presente demanda que interpongo en contra de la **UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA**, en adelante **LA UNIVERSIDAD** o **LA CONVOCADA**, ente autónomo universitario del orden departamental, creado por Ordenanza No. 5 de 1957, con domicilio en la ciudad de Santa Marta, D. T. C. H., representada legalmente por **RUTHBER ANTONIO ESCORCIA CABALLERO** o por quien haga sus veces; para que previo los trámites legales del **PROCESO ARBITRAL** y en ejercicio de lo dispuesto por la cláusula compromisoria del **"CONTRATO DE OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO B DE SALONES SUSCRITO ENTRE UNIÓN TEMPORAL OBRESAN – OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA Y LA UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA"** No. 0146, celebrado entre las partes el día 30 de diciembre del 2005, mediante laudo arbitral que haga tránsito a cosa juzgada, se provean favorablemente las siguientes:

PRETENSIONES:

PRIMERA: Que se declare que entre la **UNIÓN TEMPORAL OBRESÁN – OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA** y la **UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA** se celebró el **"CONTRATO DE OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO B DE SALONES SUSCRITO ENTRE UNIÓN TEMPORAL OBRESAN – OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA Y LA UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA"** No. 0146 del 30 de diciembre del 2005.

SEGUNDA: Que se declare que durante la ejecución del contrato se produjo el **DESEQUILIBRIO ECONÓMICO** del mismo, en detrimento de **LOS CONVOCANTES**, por causas atribuibles a **LA CONVOCADA**, tales como la mayor permanencia en obra; la entrega y aprobación tardía de los diseños; la suspensión reiterada de las actividades; las mayores cantidades de obra por las modificaciones extemporáneas realizadas en el diseño del proyecto, que implicaron la adición, supresión y cambios en la obra; los reajustes a los precios del contrato; el atraso en el pago de las facturas por avance de obra y los costos financieros en que incurrió el contratista al asumir con sus propios recursos la solución a las cargas económicas adicionales del contrato.

TERCERA: Que como consecuencia de la anterior declaración y con el propósito de restablecer el equilibrio económico al contratista se condene a **LA CONVOCADA** al pago, a favor de **LOS CONVOCANTES**, de la suma de **OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SIETE PESOS (\$872.235.707) M./L.**, o la que resulte probada, la cual corresponde a los siguientes conceptos:

- a) Por concepto de **MAYOR PERMANENCIA EN OBRA** ocasionada por la imposibilidad de ejecutar la obra en las condiciones de modo, tiempo y características inicialmente contratadas, la suma de **SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS (\$688.513.584.00) M./L.**, o la que resulte probada.
- b) Por concepto de **MAYOR VALOR LOS ÍTEM DE CUBIERTA Y PUENTES DE ACERO**, debido a las variaciones de los diseños durante la ejecución de las obras, las cuales superaron las cantidades ofertadas y contratadas, la suma de **CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO VEINTITRES PESOS (\$146.722.123.00) M./L.**, o la que resulte probada.
- c) Por concepto de **REMONTAJE DE LA CUBIERTA DE ACERO** del edificio, la suma de **TREINTA Y SIETE MILLONES DE PESOS (\$37.000.000.00) M./L.**, o la que resulte probada.

CUARTA: Que se ordene a **LA CONVOCADA** pagar a favor de **LOS CONVOCANTES** la suma de **CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON 10 CENTAVOS (\$49.842.248,10) M./L.**, por concepto de "**VALOR OBRAS SIN LEGALIZAR A FAVOR DEL CONTRATISTA**", la cual fue reconocida por **LA UNIVERSIDAD** en el Acta de Liquidación, pero aún no ha sido cancelada.

QUINTA: Que se condene a **LA CONVOCADA** a pagar a **LOS CONVOCANTES** la suma de **TREINTA MILLONES DE PESOS (\$30.000.000.00) M./L.**, o la que resulte probada, por concepto de intereses moratorios por la mora en el pago de la

facturas por concepto de avances de obra, correspondientes a la máxima tasa legal permitida conforme lo establece el Código de Comercio.

SEXTA: Que se condene a **LA UNIVERSIDAD** a pagar a **LOS CONVOCANTES** la suma de **CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL PESOS (\$41.926.000.00) M/L.**, por concepto de la utilidad contractual dejada de recibir, debido a que por las circunstancias de la ejecución contractual el contratista no solo tuvo pérdidas sino que dejó de recibir la utilidad a que tenía derecho.

SÉPTIMA: Que se condene a **LA UNIVERSIDAD** a pagar a **LOS CONVOCANTES** la suma de **CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS (\$150.000.000.00) M/L.**, o la que resulte probada, por concepto de perjuicios sufridos al atender la vía gubernativa, presentando los recursos correspondientes en contra de las resoluciones No. 269 del 27 de abril del 2007 y 291 del 15 de mayo del 2007, por medio de las cuales se impusieron unas multas y se declaró la caducidad del Contrato de Obras No. 0146 del 30 de diciembre del 2005, respectivamente, las que a la postre fueron revocadas por **LA UNIVERSIDAD**, con fundamento, entre otros, en que "20.18. – Debido a la demora de la Universidad del Magdalena en entregar esos planos, como los de otros motivos atrás señalados, se suscribieron contratos adicionales... En conclusión, se desprende que esos planos, diseños de la estructura metálica de rampa y puentes, necesariamente alteraron el programa de trabajo o cronograma... Observamos aquí que el incumplimiento de la Universidad generó una razonable imposibilidad de cumplir..."; cargas que **EL CONTRATISTA** no estaba obligado a soportar, defendiéndose de medidas que fueron revocadas tardíamente por **LA UNIVERSIDAD**.

OCTAVA: Que se actualice el valor de la condena a la fecha del pronunciamiento del respectivo Laudo Arbitral, con base en la variación del índice de precios al consumidor, para el periodo comprendido entre la fecha en que se presentó el desequilibrio y la fecha en que se produzca el pago efectivo de la condena.

NOVENA: Que como consecuencia de las anteriores declaraciones y sobre todas ellas se condene a **LA UNIVERSIDAD** a pagar a favor de **LOS CONVOCANTES** los intereses comerciales y moratorios a la máxima tasa legal permitida conforme lo dispuesto en el Código de Comercio en su artículo 884, vigente al momento en que se efectúe el pago, sobre el valor histórico actualizado, hasta la fecha en que se haga efectivo el pago.

DÉCIMA: Que en el caso de que **LA UNIVERSIDAD** no diere cumplimiento inmediato al correspondiente Laudo Arbitral, se le condene al pago de los intereses comerciales y moratorios sobre el monto de la cantidad líquida de la condena, hasta su cancelación, de conformidad con el artículo 177 del C. C. A.

DÉCIMA PRIMERA: Que se condene a **LA UNIVERSIDAD** a pagar a favor de **LOS CONVOCANTES** las costas y las agencias en derecho que ocasione el presente proceso arbitral.

HECHOS:

1. La **UNIÓN TEMPORAL OBRESÁN – OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA** y la **UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA** celebraron el "**CONTRATO DE OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO B DE SALONES SUSCRITO ENTRE UNIÓN TEMPORAL OBRESAN – OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA Y LA UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA**" No. 0146 del 30 de diciembre del 2005, cuyo **OBJETO**, según lo dispuesto en la **CLÁUSULA TERCERA** del mismo, consistió en: "... la construcción del edificio "B" de salones, en los términos, condiciones, plazos y estipulaciones que se prescriben en el presente documento, así como en los términos de referencia, y la propuesta presentada por el contratista el 18 de Noviembre de 2005 y los documentos anexos de acuerdo con las especificaciones técnicas y los valores unitarios expresados en la propuesta presentada, la cual para todos los efectos legales forman parte integral del presente contrato".

2. Según lo pactado en la **CLÁUSULA SÉPTIMA** "el VALOR TOTAL del presente contrato para todos los efectos legales y fiscales es de DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES CINTO OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS CON NOVENTA CENTAVOS M/C (\$2'653'182.803.90)".

3. De acuerdo con la **CLÁUSULA NOVENA** "el término de duración del presente contrato será de doscientos cuarenta (240) días calendario a partir de la entrega del anticipo y de la suscripción del acta de iniciación de la obra".

4. El contrato sufrió sucesivas modificaciones, a través de los otrosí No. 1 al 5, para ampliar el plazo contractual, el plazo empezó a correr el día 6 de marzo del 2006 en que se firmó el Acta de Inicio y la obra fue recibida finalmente por **LA UNIVERSIDAD** el día 30 de septiembre de 2007, incluso por fuera de la última modificación realizada a través del Otrosí No. 5, por causas atribuibles (tanto las modificaciones al plazo contractual, como el recibo final tardío de las obras) enteramente a **LA UNIVERSIDAD**, como fehacientemente lo reconocen la **Resolución No. 622 del 17 de diciembre del 2007**, expedida por Rector (e) de **LA UNIVERSIDAD** y "por medio de la cual se desata un recurso de reposición y se revoca una resolución de declaratoria de caducidad del Contrato Nro. 0146 de 2005"; la **Resolución No. 623 del 17 de diciembre del 2007**, de la Rectoría, "por medio de la cual se revoca una resolución que declara la configuración de un siniestro que afecta el amparo de una garantía de cumplimiento" y la **Resolución No. 621 del 17 de diciembre del 2007**, también expedida por el Rector (e), "por medio de la cual se desata un recurso de reposición y se revoca una resolución de imposición de multa a un Contratista".

5. En el considerando No. 20 de la mencionada **Resolución No. 622 del 17 de diciembre del 2007** LA UNIVERSIDAD reconoce que: "20.- Respecto a las obras materia del incumplimiento del contratista originario de la declaratoria de caducidad del contrato de Obras Nro. 0146-2005, cual es el atraso de la estructura metálica de rampas y puentes y otras obras, tenemos: 20.1).- Hubo demoras en entregar los planos correspondientes a la estructura de rampa y puente, como se verá más adelante en una serie de documentos como actas... 20.2) .- Hubo cambio en la estructura de rampa de concreto reforzado a estructura metálica, tal como se acredita en varios documentos, entre éstos el Oficio UTI-032-07 para Rectoría, de fecha Julio 10 de 2006, donde se desprende demora de la Universidad en entregar esos planos, los cuales habían sido requeridos desde marzo de 2006... 20.3).- Acta de suspensión de frente de obra Nro. 3, de fecha Febrero 23 de 2007, referente al retraso en la instalación del cielo raso, dado que la instalación de la ductería del aire acondicionado y decanaturas no se había iniciado a esa fecha, obra a cargo de otro contratista diferente a la Unión Temporal, y solamente éstas obras relacionadas con el aire acondicionado se contrataron a principios del 2007 y sólo hasta el 24 de abril de 2007 se iniciaron esos trabajos... 20.4.- Acta de suspensión de frente de obra Nro. 1, de fecha Enero 20 de 2007, referente a las actividades de la estructura metálica de cubierta, puentes y rampas. Suspensión que se extendió hasta Febrero 8 de 2007-12-10... 20.11.- El Interventor mediante escrito de fecha 9 de septiembre de 2006., que debido al retardo de la Universidad en entregar los diseños definitivos de la estructura metálica, le ha sido imposible fundir las vigas aéreas como la viga canal y reitera que el atraso no es por causa imputable a él como contratista... 20.15.- Las actividades de cielo raso Dry Wall se suspendieron mediante Acta Nro. 04-2007, por cuanto la instalación de aires acondicionado (contratista diferente a Obresán) fueron iniciados el día 26 de marzo de 2007 y solo hasta el día 24 de abril de 2007 se concluyó el primer salón. Actividad reiniciada en Abril 25 de 2007, según acta de reinicio y ahí se señala que dicha actividad se terminaría el 15 de mayo de 2007, es decir, el mismo día de expedición de la resolución de caducidad, la cual es motivo de impugnación... 20.18.- Debido a la demora de la Universidad del Magdalena en entregar esos planos, diseños, como de los otros motivos atrás señalados, se suscribieron Contratos Adicionales ampliando el plazo de ejecución del contrato inicial, y en lo referente a las estructuras metálicas, éstas se cambiaron de concreto a metálicas, como se lee en los adicionales que los mismos obedecieron a: la necesidad de efectuar el cambio de la estructura de rampas de concreto reforzado a estructuras metalizadas, por lo cual se requería el rediseño. Adición Nro. 01 de fecha Octubre 27 de 2006, plazo que se amplió en 21 días calendario... En conclusión, se desprende que esos planos, diseños de la estructura metálica de rampa y puentes, necesariamente alteraron el programa de trabajo o cronograma donde se tuviera de manera aproximada el plazo dentro del cual el contratista debía ejecutar el frente correspondiente a esas actividades, es decir, construir la estructura metálica de puentes y rampas".

De esta forma, LA UNIVERSIDAD reconoció que la afectación del plazo contractual y, por ende, la mayor permanencia se debió a causas atribuibles a ella, como la entrega tardía de los diseños constructivos, lo cual era su obligación, según el numeral 2 de la CLÁUSULA CUARTA del contrato.

6. En la página 11 de la **Resolución No. 622 del 17 de diciembre del 2007** LA UNIVERSIDAD reconoce su propia culpa en la afectación del plazo contractual, por incumplimientos de sus obligaciones, cuando afirma que: "Observamos aquí que el incumplimiento de la Universidad generó una razonable imposibilidad de cumplir, donde es principio universal de derecho que a lo imposible nadie está obligado. No basta, pues, que se registre un incumplimiento cualquiera, para que el contratista deje de cumplir con sus deberes jurídicos, la Administración debe cumplir primero los suyos, de ahí que si la universidad estaba en la obligación de entregar oportunamente los planos y diseños de las obras objeto del incumplimiento parcial del contratista no lo hizo después de varios meses de haberse iniciado la ejecución del contrato (Marzo 6 de 2006), así como otras circunstancias anotadas en esta parte considerativa como era el cambio de estructuras de concreta a metálicas, cambios de los pisos de adoquines porque los que estaban instalando no tenían las medidas y especificaciones, retraso del contratista diferente a Obresán en la entrega de la instalación de los aires acondicionados, y otras más que se citan en esta resolución, cómo pretender que bajo esas circunstancias reiterativas de incumplimiento de la Universidad, sí se le exija cumplimiento al Contratista y se sancione con una declaratoria de caducidad del Contrato de Obras Nro. 0146-2005 A este extremo no se puede llegar, máximo como se dijo atrás, que la Universidad venía incurriendo en una serie de incumplimientos de sus obligaciones contractuales, más aún, demorando injustificadamente la entrega de diseños, de la localización definitiva para la ubicación y distribución de los puntos eléctricos de los auditorios, aulas, torreón, oficinas de decanaturas y direcciones de programas, tan sólo éstos a menos de un mes de declararse la caducidad todavía no se habían entregados y otras conductas que implicaban que el proyecto tal como venía por esos incumplimientos de la Universidad no se iban a cumplir, circunstancia ésta que ya había vislumbrado el mismo Director de Interventoría en el oficio relacionado en el Numeral 20.16 de esta parte considerativa,. Aquí hay que tener presente los principios de buena fe y de justicia y equidad, por cuanto esos incumplimientos de la Universidad antes citados, implicaba necesariamente que el proyecto sufriera retrasos, máxime que la misma Interventoría en documentos escrito ya lo había previsto y de ahí que se suscribieran los Contratos adicionales, donde el plazo de ejecución inicial del contrato 0146-07 se ampliara. Estamos frente a un abuso del derecho de la Universidad que si bien es cierto que tiene por ley el control y dirección de los contratos que suscribe, también es cierto que ella es la que debe dar ejemplo de cumplimiento y mal haría; como lo hizo al proferir la resolución aquí recurrida, aprovecharse de su propia culpa, desconociendo principio del derecho civil que "a nadie le es permitido aprovecharse de su propia culpa".

7. En la parte final de la parte considerativa de la **Resolución No. 622 del 17 de diciembre del 2007** LA UNIVERSIDAD reconoce su incumplimiento cuando afirma que "como consecuencia de lo expuesto en esta parte considerativa, por haberse violado el debido proceso y por consiguiente el derecho de defensa, además aplicando el principio de equidad (que es uno de los principios generales del derecho), a que hace alusión el Artículo 13 del Acuerdo 019 de Abril 25 de 2002 del Consejo Superior de la Universidad del Magdalena (Estatuto de Contratación), el cual es aceptado por la ciencia del Derecho, precisamente por cuanto en el presente caso, además de que la Universidad hizo abuso de su derecho y de su posición dominante (en su calidad de Administración Contratante) para superar la situación de injusticia en que incurrió al proferir la resolución aquí recurrida, aplicando de manera inflexible y estricta la ley, en el caso de marras la Universidad no obró con justicia frente a sus reiterados incumplimiento que verdaderamente desencadenaron el incumplimiento de Obresán para lo cual es preciso recordar para este caso la famosa frase de Bonnetcase que "el derecho puede encontrarse en contradicción con la ley", donde precisamente hay que decir que el derecho no es otra cosa que la noción de equidad, debido a que no hay que separar el derecho de la ley, de aquí que tal principio de equidad se tenga como fuente del derecho y sea uno de los principios generales del mismo".
8. Debido a los incumplimientos de LA UNIVERSIDAD en la entrega de los diseños de algunos aspectos de la obra, como los de las rampas y puentes y la estructura metálica de la cubierta del edificio, fue necesario suspender algunos frentes de obra, lo cual tuvo incidencia en la ejecución del contrato de acuerdo con el cronograma aprobado, afectando, en consecuencia, el plazo contractual.
9. LA UNIVERSIDAD realizó variadas y sucesivas modificaciones en los diseños de las estructuras metálicas de las rampas, puentes y cubierta, a pesar de que se demoró en la entrega inicial de estos diseños, los cuales debieron estar listos al momento de iniciar la ejecución de las obras, es decir, el 6 de marzo del 2006.
10. Dados los continuos y reiterados cambios en los diseños de las rampas, puentes y cubierta metálica, fue necesario desmontar una primera cubierta instalada, para luego volver a montar otra cubierta, de acuerdo con los cambios de diseños realizados por LA UNIVERSIDAD.
11. LA UNIVERSIDAD demoró la instalación de los aires acondicionados, los cuales se habían contratado a otro contratista, hecho que afectó la normal ejecución de los demás trabajos a cargo de LOS CONVOCANTES.
12. LA UNIVERSIDAD expidió la Resolución No. 0269 del 27 de abril del 2007, por medio de la cual impuso unas multas a LOS CONVOCANTES.
13. Posteriormente expidió la Resolución No. 0291 del 15 de mayo del 2007, por medio de la cual declaró la caducidad del contrato y el siniestro de incumplimiento.

7842

14. Extemporáneamente, mucho después del plazo legal, LA UNIVERSIDAD resolvió los recursos interpuestos por EL CONTRATISTA en contra de las resoluciones mencionadas en los hechos 11 y 12 de la presente demanda, decidiendo la revocatoria de las mismas, respectivamente a través de la **Resolución No. 622, la Resolución No. 623 y la Resolución No. 621, todas del 17 de diciembre del 2007.**

15. La vacilación de LA UNIVERSIDAD en resolver los recursos en contra de las mencionadas resoluciones, originó que se demorara en recibir la obra terminada, pese a los continuos requerimientos del CONTRATISTA, hecho que finalmente se produjo el día 30 de septiembre del 2007.

16. LA UNIVERSIDAD canceló tardíamente facturas por avance parcial de obra, hecho que afectó el flujo de caja de LOS CONVOCANTES para la debida ejecución del contrato, obligándolos a buscar créditos en el sistema financiero.

17. Durante la ejecución de los trabajos LA CONVOCADA ordenó a LOS CONVOCANTES la realización de obras no previstas inicialmente y de mayores cantidades de obras a través del Otrosí No. 3, lo que tuvo incidencia en la afectación del plazo contractual.

18. LA UNIVERSIDAD ordenó al CONTRATISTA la ejecución de nuevas y mayores cantidades de obra, como consta en las comunicaciones UTI-040 del 23 de agosto del 2007 y UTI-043 del 14 de septiembre del 2007, cuando ya había declarado la caducidad del contrato, las cuales no fueron debidamente legalizadas por LA UNIVERSIDAD. De este hecho también se da cuenta en el Acta de Liquidación del contrato.

19. Pese a lo anterior, LA UNIVERSIDAD, aún habiendo reconocido que ordenó tales obras no ha cancelado el valor correspondiente a \$49.842.248,10, pese a haberlo reconocido también en audiencia de conciliación celebrada en la ciudad de Santa Marta.

20. EL CONTRATISTA a más de haber tenido pérdidas durante la ejecución del contrato, no obtuvo la utilidad esperada.

21. El contrato fue liquidado mediante Acta de Liquidación suscrita por las partes el día 30 de enero del 2008, en la cual el CONTRATISTA dejó salvedades, con el fin de no declarar a paz y salvo a LA UNIVERSIDAD y de abrir la posibilidad a demandar a la misma.

FUNDAMENTOS DE DERECHO DE LAS PRETENSIONES:

Artículos 95, numeral 1º del inciso 3º de la Constitución Política; 1496 y 1497 del Código Civil.

Artículos 3º, numeral 3º de DERECHOS DE LA UNIVERSIDAD, numeral 3º de DEBERES DE LA UNIVERSIDAD, 4º, numeral 1º de DERECHOS DEL CONTRATISTA de la Resolución No. 432 del 2004, "por medio de la cual se reglamenta el Estatuto de Contratación de la Universidad del Magdalena", por medio del cual LA UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA en ejercicio de su autonomía, estableció en sus normas internas de contratación la figura y el principio del restablecimiento económico de los contratos que celebre, como un deber y derecho de la Universidad y un derecho de los contratistas.

Además de lo anterior, fundamenta en derecho esta demanda la CLÁUSULA CUARTA del Contrato de Obra No. 0146 del 30 de diciembre del 2005.

PRUEBAS Y ANEXOS:

A. PRUEBAS DOCUMENTALES:

Con el fin de que se hagan valer dentro del proceso aporte las siguientes pruebas:

1. Original del Certificado de Existencia y Representación Legal de la sociedad **J.P.G & CIA S.A.**
2. Copia del Contrato de Obra No. 0146 del 30 de diciembre del 2005, celebrado entre LA UNIÓN TEMPORAL OBRESAN – OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA y LA UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA
3. Copia del Pliego de Condiciones
4. Copia de la oferta presentada por LA UNIÓN TEMPORAL OBRESAN
5. Copia del Acta de Conciliación de la Procuraduría
6. Copia de las comunicaciones de fecha 1º de octubre del 2008 – "CONSTANCIA DE ENTREGA FINAL DE OBRA CONTRATO DE OBRAS No. 0146 DE DICIEMBRE 30 DE 2005", mediante el cual el Representante Legal de la UNIÓN TEMPORAL OBRESAN requirió a LA UNIVERSIDAD para que recibiera la obra terminada.
7. Copia del "Acta de Inspección del estado de las obras del Edificio Ciénaga Grande correspondiente al Contrato de Obras Número 0146 de diciembre 30 de 2005" suscrita entre la UNIÓN TEMPORAL OBRESAN y LA UNIVERSIDAD
8. Copia de la Resolución No. 432 del 2004, "por medio de la cual se reglamenta el Estatuto de Contratación de la Universidad del Magdalena", en treinta y siete (37) folios.
9. Copia del Acuerdo No. 19 de 2002, "por medio del cual se adopta el estatuto de contratación de la Universidad del Magdalena"

- 7544
10. Copia autenticada de la Resolución No. 622 del 17 de diciembre de 2007, "por medio de la cual se desata un recurso de reposición y se revoca una resolución de declaratoria de caducidad del Contrato Nro. 0146 de 2005"
 11. Copia autenticada de la Resolución 623 del 17 de diciembre de 2007, "por medio de la cual se revoca una resolución que declara la configuración de un siniestro que afecta el amparo de una garantía de cumplimiento"
 12. Copia autenticada de la Resolución No. 621 del 17 de diciembre de 2007, "por medio de la cual se desata un recurso de reposición y se revoca una resolución de imposición de multa a un contratista".
 13. Copia autenticada de la Comunicación Interna UTI-027-07 del 25 de mayo de 2007 de la Unidad Técnica de Interventoría.
 14. Copia autenticada de la Comunicación Interna UTI-020-07 del 26 de abril de 2007.
 15. Copia autenticada de la Comunicación Interna UTI-017-07 del 13 de abril de 2007.
 16. Copia autenticada de la Comunicación Interna UTI-016-07 del 9 de abril de 2007.
 17. Copia autenticada de la Comunicación Interna UTI-014-07 del 27 de marzo de 2007.
 18. Copia autenticada de la Comunicación Interna UTI-012-07 del 28 de febrero de 2007.
 19. Copia autenticada del Informe No. 4 de la Unidad Técnica de Interventoría – UTI sobre el Contrato de Obras No. 000146 de 2005.
 20. Copia autenticada de la Comunicación Interna UTI-010-07 del 23 de febrero de 2007.
 21. Copia autenticada de la Comunicación Interna UTI-009-07 del 16 de abril de 2007.
 22. Copia autenticada de la Comunicación Interna UTI-007-07 del 1º de febrero de 2007.
 23. Copia autenticada de la Comunicación Interna UTI-005-07 del 29 de enero de 2007.
 24. Copia autenticada de la Comunicación Interna UTI-004-07 del 29 de enero de 2007.
 25. Copia autenticada de la Comunicación Interna UTI-001-07 del 17 de enero de 2007.
 26. Copia autenticada de la Comunicación Interna UTI-056-06 del 16 de noviembre de 2006 dirigida al Ing. Isaac Pertuz.
 27. Copia autenticada de la Comunicación Interna UTI-056-06 del 10 de noviembre de 2006 dirigida a la Rectora (e) Dra. Carmen Yadira Romero Ávila.
 28. Copia autenticada de la Comunicación Interna UTI-055-06 del 12 de octubre de 2006.
 29. Copia autenticada de la Comunicación Interna UTI-054-06 del 20 de octubre de 2006.

30. Copia autenticada de la Comunicación Interna UTI-052-06 del 6 de octubre de 2006.
31. Copia autenticada de la Comunicación Interna UTI-050-06 del 25 de septiembre de 2006.
32. Copia autenticada de la Comunicación Interna UTI-049-06 del 18 de septiembre de 2006.
33. Copia autenticada de la Comunicación Interna UTI-048-06 del 15 de septiembre de 2006.
34. Copia autenticada de la Comunicación Interna UTI-046-06 del 11 de septiembre de 2006.
35. Copia autenticada de la Comunicación Interna UTI-045-06 del 8 de septiembre de 2006.
36. Copia autenticada de la Comunicación Interna UTI-044-06 del 8 de septiembre de 2006.
37. Copia autenticada de la Comunicación Interna UTI-043-06 del 13 de septiembre de 2006.
38. Copia autenticada de la Comunicación Interna UTI-042-06 del 1º de septiembre de 2006.
39. Copia autenticada de la Comunicación Interna UTI-040-06 del 23 de agosto de 2006.
40. Copia autenticada de la Comunicación Interna UTI-039-06 del 23 de agosto de 2006.
41. Copia autenticada de la Comunicación Interna UTI-037-06 del 31 de julio de 2006.
42. Copia autenticada de la Comunicación Interna UTI-032-06 del 10 de julio de 2006.
43. Copia autenticada de la Comunicación Interna UTI-027-06 del 2 de junio de 2006.
44. Copia autenticada de la Comunicación Interna UTI-025-06 del 29 de mayo de 2006.
45. Copia autenticada de la Comunicación Interna UTI-023-06 del 15 de mayo de 2006.
46. Copia autenticada de la Comunicación Interna UTI-021-06 del 10 de mayo de 2006.
47. Copia autenticada de la Comunicación CS-IT-032 del 19 de abril de 2006 de la UTI dirigida al Ing. Hans Van Heyl Cleves.
48. Copia autenticada de la Comunicación CS-IT-031 del 19 de abril de 2006 dirigida al Ing. Isaac Pertuz.
49. Copia autenticada de la Comunicación CS-IT-029 del 6 de abril de 2006 dirigida al Ing. Hans Van Heyl.
50. Copia autenticada de la Comunicación CS-IT-028 del 6 de abril de 2006 dirigida al Ing. Isaac Pertuz.
51. Copia autenticada de la Comunicación CS-IT-024 del 28 de marzo de 2006.
52. Copia autenticada de la Comunicación CS-IT-016 del 21 de marzo de 2006.
53. Copia autenticada de la Comunicación CS-IT-015 del 3 de marzo de 2006.

54. *Copia autenticada de la Comunicación CS-IT-009 del 23 de febrero de 2006.*
55. *Copia autenticada de la Comunicación CS-IT-008 del 21 de febrero de 2006 dirigida al Sr. Efraín Olivos.*
56. *Copia autenticada de la Comunicación CS-IT-006 del 21 de febrero de 2006 dirigida al Ing. Pablo Vera.*
57. *Copia autenticada del Oficio No. 00002465 del 15 de febrero de 2006 dirigida al Ing. Pablo Vera.*
58. *Copia autenticada de la Comunicación CS-IT-004 del 20 de febrero de 2006.*
59. *Copia autenticada de la Comunicación CS-IT-003 del 16 de febrero de 2006.*
60. *Copia autenticada del Acta del Comité No. 22.*
61. *Copia autenticada del Acta del Comité No. 21.*
62. *Copia autenticada del Acta del Comité No. 19.*
63. *Copia autenticada del Acta del Comité No. 18.*
64. *Copia autenticada del Acta del Comité No. 17.*
65. *Copia autenticada del Acta del Comité No. 16.*
66. *Copia autenticada del Acta del Comité No. 15.*
67. *Copia autenticada del Acta del Comité No. 2.*
68. *Copia autenticada del Acta del Comité No. 14.*
69. *Copia autenticada del Acta de Acuerdo del 17 de febrero de 2006.*
70. *Copia autenticada del Acta del Comité No. 13.*
71. *Copia autenticada del Acta del Comité No. 12.*
72. *Copia autenticada del Acta del Comité No. 11.*
73. *Copia autenticada del Acta del Comité No. 10.*
74. *Copia autenticada del Acta del Comité No. 9.*
75. *Copia autenticada del Acta del Comité No. 8.*
76. *Copia autenticada del Acta del Comité No. 7.*
77. *Copia autenticada del Acta del Comité No. 6.*
78. *Copia autenticada del Acta del Comité No. 5.*
79. *Copia autenticada del Acta del Comité No. 4.*
80. *Copia autenticada del Acta del Comité No. 3.*
81. *Copia autenticada del Acta del Comité No. 1.*
82. *Copia autenticada del Acta de Inicio de Obra del 6 de marzo de 2006.*
83. *Copia autenticada del Acta Trazado de Ejes del 1º de marzo de 2006.*
84. *Copia autenticada del Acta de Obra del 20 de febrero de 2006.*
85. *Copia autenticada del Acta de Entrega del Lote del 14 de febrero de 2006.*
86. *Copia autenticada del Acta de Empalme del 9 de febrero de 2006.*
87. *Copia autenticada de la Carta del 15 de mayo de 2007 de Construagro S. en C. dirigida al Dr. William Renán como Secretario General.*
88. *Copia autenticada de la Comunicación de la Oficina Asesora de Planta Física No. OAF-038-07 del 23 de abril de 2007, dirigida al Rector Juan Carlos Dib Diazgranados.*

- 3847
89. Copia autenticada del Acta de Reinicio de Frente de Obra No. 2 del 16 de febrero de 2007.
 90. Copia autenticada del Acta de Suspensión de Frente de Obra No. 2.
 91. Copia autenticada de la Comunicación del 6 de febrero del 2007 de estudio y concepto jurídico con respecto al Oficio OAF-010-07 sobre la solicitud de autorización de expedición de CDP.
 92. Copia autenticada del Oficio MC-49-06 del 27 de diciembre de 2006 (originalmente mal fechado, debido a que se se puso 27/12/2007 cuando realmente se expidió en el año 2006) en el que el Ing. Han Van Heyl hizo entrega de la memoria de cálculo y diseño estructural.
 93. Copia autenticada del Oficio del 19 de septiembre de 2006 por el cual el Ing. Hans Van Heyl entregó los diseños de estructura metálica (detalles complementarios).
 94. Copia autenticada del Oficio de la Vicerrectoría de Investigación No. VDI-761-06 del 14 de septiembre de 2006.
 95. Copia autenticada del Oficio VDI-762-06 del 14 de septiembre de 2006.
 96. Copia autenticada del Oficio VDI-505-06 del 8 de agosto de 2006.
 97. Copia autenticada del Oficio OAF-008-06 del 22 de mayo de 2006.
 98. Copia de los Otrosí No. 1 al 5.
 99. Original de la Comunicación del 6 de julio del 2006 del Contratista a la Universidad.
 100. Original de la Comunicación del 9 de septiembre del 2006 del Contratista a la Universidad.
 101. Original de la Comunicación del 7 de noviembre del 2006 del Contratista a la Universidad.
 102. Original de la Comunicación del 7 de febrero del 2007 del Contratista a la Universidad.
 103. Original de la Comunicación del 12 de marzo del 2007 del Contratista a la Universidad.
 104. Original de la Comunicación del 15 de mayo del 2007 del Contratista a la Universidad.
 105. Los soportes contables en TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO (385) folios, contenidos en el Anexo 2.
 106. Original de la modificación en los diseños a la cubierta realizada por LA UNIVERSIDAD el 12 de febrero del 2007.
 107. Original de la carta del 24 de octubre del 2006 enviada a la Unión Temporal por CONSTRUAGRO S. en C., subcontratista de la Unión Temporal para la fabricación y montaje de las estructuras metálicas.
 108. Acta de Entrega Final de Obras suscrita entre el subcontratista CONSTRUAGRO S. en C. y la Unión Temporal el día 22 de junio del 2007.
 109. Copia de la comunicación No. UTI-024- 06 del 15 de septiembre de 2006 de la Unidad Técnica de Interventoría de la Universidad del Magdalena dirigida al Contratista.

- 70948
110. Copia de la comunicación No. UTI-029- 06 del 30 de octubre de 2006 de la Unidad Técnica de Interventoría de la Universidad del Magdalena dirigida al Contratista.
 111. Copia de la comunicación No. UTI-032- 06 del 11 de diciembre de 2006 de la Unidad Técnica de Interventoría de la Universidad del Magdalena dirigida al Contratista y de sus dos (2) anexos.
 112. Copia de la comunicación No. UTI-033- 07 del 27 de enero de 2007 de la Unidad Técnica de Interventoría de la Universidad del Magdalena dirigida al Contratista.
 113. Copia de la comunicación No. UTI-02- 07 del 12 de febrero de 2007 de la Unidad Técnica de Interventoría de la Universidad del Magdalena dirigida al Contratista.
 114. Copia de la comunicación No. UTI-08- 07 del 29 de marzo de 2007 de la Unidad Técnica de Interventoría de la Universidad del Magdalena dirigida al Contratista y de su anexo.
 115. Copia de la comunicación No. UTI-010- 07 del 31 de marzo de 2007 de la Unidad Técnica de Interventoría de la Universidad del Magdalena dirigida al Contratista.

B. PRUEBAS PERICIALES:

Solicito se ordene la práctica de sendos peritajes técnico y contable, realizados por perito con amplia experiencia en construcción de obras similares y en contaduría, respectivamente, con el fin de que determinen:

- a. *La mayor cantidad de acero de la cubierta y las rampas con respecto a lo solicitado en el Pliego de Condiciones y a lo ofertado y lo finalmente construido, de conformidad con los diseños entregados y sus modificaciones.*
- b. *La corroboración de los valores presentados en las pretensiones de la presente demanda, así como la determinación en los documentos contables de la UNIÓN TEMPORAL OBRESÁN si hubo o no pérdidas y la determinación de su cuantía; así como la de los demás perjuicios sufridos y la cuantificación de la utilidad dejada de percibir.*

En su oportunidad se presentarán los respectivos cuestionarios para ser absueltos por los peritos designados.

C. Las que de oficio a bien tenga decretar el Tribunal.

- ANEXOS:

- 49
710-
1. Poder debidamente otorgado por los intergrantes de la **UNIÓN TEMPORAL OBRESÁN – OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA** al **Dr. JAIRO ALBERTO BARROS ACOSTA**.
 2. **Sustitución del poder del Dr. JAIRO ALBERTO BARROS ACOSTA en el suscrito.**
 3. Las pruebas documentales aportadas, en DOS (2) ANEXOS DE PRUEBAS.
 4. Las copias de la demanda y sus anexos.

CUANTÍA:

Las pretensiones de la demanda ascienden a la suma de **MIL OCHOCIENTOS MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS (\$1.827.303.919.00) M./L.**, discriminada así: a) **MIL SESENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS SIETE PESOS (\$1.064.161.707.00) M./L.** por las pretensiones Tercera a Séptima; b) **SETECIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS (\$763.142.212) M./L.**, por concepto de intereses calculados hasta la fecha de presentación de la demanda, es decir, el día 30 de enero de 2010; por lo que se trata de un proceso de mayor cuantía, de conformidad con lo establecido en el artículo 123 del Decreto No. 1818 de 1998 (Artículo 12 del Decreto 2651 de 1991).

COMPETENCIA:

El Tribunal de Arbitramento es competente de conformidad con lo establecido en la Cláusula Compromisoria, contenida en la **CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA** del contrato, en el que las partes acordaron la solución de diferencias a través de tribunal de arbitramento.

1. El tenor literal de la **CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA** del señalado contrato es: "cualquier diferencia relacionada con la ejecución de este contrato asociada a aspectos técnicos será resuelta a través de amigables componedores de acuerdo con los procedimientos establecidos en el Decreto 2279 de 1989, la Ley 23 de 1991, el Decreto 2651 de 1991, la Ley 446 de 1998, el Decreto 1818 de 1998, y reglamentación similar, que serán seleccionados de común acuerdo por las partes. La amigable composición tendrá lugar en las instalaciones de la Universidad del Magdalena. Cada parte podrá acudir a este mecanismo, mediante previo aviso a la otra parte. El procedimiento de la amigable composición se regirá por las siguientes reglas: las partes podrán presentar sus alegatos y documentos que los sustenten en términos de diez (10) días hábiles contados desde la fecha de aviso de la contraparte. Los amigables componedores a su vez tendrán plazo máximo

de veinte (20) días hábiles para resolver las disputas por escrito, los cuales se contarán a partir del día siguiente del término previsto en la parte anterior. Los alegatos deberán contener: una explicación de los fundamentos técnicos y contractuales que sustenten la posición de la respectiva parte. Las peticiones que haga la respectiva parte a los amigables componedores para resolver las diferencias. Cada parte deberá cooperar en la realización de cualquier investigación que los amigables componedores efectúen relacionada con la disputa en cuestión. Las decisiones adoptadas por los amigables componedores como resultado de la amigable composición tendrán fuerza vinculante para las partes de acuerdo con la ley. Los gastos que ocasionen la intervención de los amigables componedores serán cubiertos por la parte que resulte vencida. Cualquier divergencia que surja entre las partes como ocasión, celebración, ejecución o liquidación de este contrato, no sea posible solucionar amigablemente, serán dirimidos por un tribunal de arbitramento de conformidad con las disposiciones antes citadas. Las disputas relacionadas con la aplicación y los efectos de las cláusulas de caducidad, terminación unilateral no podrán ser sometidas a arbitramento. La intervención de los amigables componedores o tribunal de arbitramento no suspenderá la ejecución del contrato salvo que aquellos aspectos cuya ejecución dependa necesariamente de la solución de la controversia". (Subrayado fuera de texto).

2. De conformidad con lo acordado por las partes, es claro que la amigable composición se pactó única y exclusivamente para resolver cualquier diferencia **sobre aspectos técnicos** durante o relacionada con la ejecución, mientras que el arbitraje se acordó para resolver "cualquier divergencia que surja entre las partes como ocasión, celebración, ejecución o liquidación de este contrato, no sea posible solucionar amigablemente, serán dirimidos por un tribunal de arbitramento de conformidad con las disposiciones antes citadas". El hecho de que diga que no sea posible resolver amigablemente no implica que antes, y como requisito indispensable, deba agotarse la amigable composición, pues habrá asuntos, como el que nos ocupa, que no se circunscriben a aspectos técnicos de la ejecución del contrato. Más bien quiso decirse que las partes, antes de acudir al arbitraje deberían intentar solucionar amigablemente sus diferencias, fórmula que se utiliza en la mayoría de los contratos, pudiendo acudir a la solución directa o a la conciliación, por ejemplo, pero esta disposición ni expresa, ni implícitamente dice que no se podrá acudir al arbitraje si antes no se busca una solución amigable o si antes no se utiliza la figura de la amigable composición.

3. De la misma forma en que la jurisprudencia abundantemente ha reconocido que las partes renuncian a la cláusula compromisoria cuando una de ellas acude a la jurisdicción estatal, de igual manera debería entenderse que si una de las partes acude al arbitraje, implica que renunció a la posibilidad de buscar acuerdo directo con la contraparte, sin que ello inhiba su derecho constitucional de acceder a que se le administre justicia, a través de particulares investidos transitoriamente de

tan significativa función estatal, en virtud de lo dispuesto en los artículos 116 y 229 de la Constitución Política.

4. En todo caso, en el asunto que nos ocupa las partes agotaron previamente una vía amigable, en la medida en que acudieron en conciliación a buscar solución a parte de sus divergencias, sin que fuere posible, como consta en los hechos y pruebas de la demanda presentada con la solicitud de convocatoria de un tribunal de arbitramento, con lo que se entendería cumplida la parte del pacto, en el sentido de acudir al tribunal de arbitramento cuando no fuere posible solucionar amigablemente sus diferencias.

5. De lo que sí estamos conscientes es de las deficiencias de la cláusula compromisoria, pues no se señalan algunos elementos importantes de la misma, como la definición de si el arbitraje será independiente, institucional o legal; de si será en derecho, técnico o en equidad, pero las mismas normas legales (Arts. 115, 116 y 118 del Decreto 1818 de 1998) resuelven el problema, pues, como ustedes saben, a falta de expresión sobre estos aspectos se entiende que el arbitraje será en derecho y legal.

Aún con estas deficiencias, y apelando a la naturaleza de pacto "en virtud del cual los contratantes acuerdan someter las eventuales diferencias que puedan surgir con ocasión del mismo, a la decisión de un tribunal arbitral" y a la autonomía de la cláusula (Art. 118 Decreto 1818 de 1998), reiteramos nuestra solicitud de iniciar y adelantar los trámites del proceso arbitral solicitado, pues las partes tendrán la ocasión, durante el trámite prearbitral, de modificar de común acuerdo la cláusula compromisoria, de ser necesario.

6. Ahora bien, aun cuando en la cláusula compromisoria no se acordó cuál centro de arbitraje asumiría la competencia, como ustedes saben, corresponde al del domicilio del demandado, como lo dispone el Num. 1º del Art. 129 del Decreto 1818 de 1998, que es la ciudad de Santa Marta, D. T. C. H., por lo que hemos acudido a ustedes.

NOTIFICACIONES:

EL DEMANDANTE:

Recibe notificaciones personales en la calle 11 No.1c-23 Ed. Posihueica, Oficina 309, teléfonos: 421 46 76 – 421 40 70, de esta ciudad.

LA UNIVERSIDAD:

719. 52

Recibe notificaciones personales en la Carrera 32 No. 22 – 08, Sector San Pedro Alejandrino, en el Edificio Administrativo del Campus Universitario, teléfono: 430 12 92, de esta ciudad."

Agradezco su debida atención.

Atentamente,



GABRIEL FRANCISCO GONZÁLEZ BARRAZA
C. C. No. 12.608.489
T. P. No. 41.964 Minjusticia

24- 029507

Santa Marta, 12 SET. 2012

Doctor
GABRIEL FRANCISCO GONZALEZ BARRAZA
Santa Marta

Ref: Solicitud Dr. Gabriel Francisco González Barraza.

Respetado Doctor:

El día tres (3) de Septiembre de dos mil doce (2012), se recibió la solicitud de la referencia radicada bajo el No. 23978, relacionada con el sorteo de unos nuevos árbitros, la retoma del proceso y los costos administrativos, como la solicitud está dirigida tanto al Presidente Ejecutivo como a la Directora del Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición de esta entidad, procedemos a unificar la respuesta dado que la posición de ambos funcionarios es exactamente la misma y en ese orden expresamos:

1. Los Centros de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición son entidades que coadyuvan a la administración de justicia y prestan los recursos logísticos, físicos, técnicos y financieros necesarios para el desarrollo de los trámites arbitrales. Es en últimas un administrador y prestador de servicios, y su rol es operativo más no jurisdiccional conforme a la Sentencia C. 1038 de 2002.
2. Sobre el particular la Corte Constitucional en la Sentencia antes referenciada sostuvo:

"Así, las funciones judiciales que se atribuyen a particulares deben ser conferidas de manera expresa, pues su carácter excepcional así lo exige. Tal conclusión se complementa perfectamente con el elemento de la voluntad de las partes, que deciden no sólo acudir a la justicia arbitral, sino quiénes serán los árbitros."

En ese sentido, la voluntad de las partes activa tanto la jurisdicción arbitral como las competencias y atribuciones de las personas que obrarán como árbitros. Lo contrario, es decir, admitir que funcionarios que no han sido habilitados por la voluntad de las partes puedan ejercer una labor judicial de carácter excepcional, sería ir en contra no sólo el espíritu de la normatividad en materia de arbitramento -basada en la voluntad de las partes- sino también contrariar la Constitución, que establece claramente que se trata de una situación excepcional cuya interpretación debe ser restrictiva.

Admitir una interpretación contraria desconocería el tenor del artículo 116 de la Carta, según el cual los particulares sólo habilitan a los árbitros, no al centro de arbitraje ni a otros funcionarios para el ejercicio de una función tan delicada como la de administrar justicia. En ese orden de ideas, mal podría la ley hacer obligatoria la intervención de personas o entidades no autorizadas por las partes para intervenir en el procedimiento. Es menester entonces reconocer el peso del principio de habilitación al momento de conferir facultades judiciales a los particulares, sin que ello implique negar la importancia de las labores de apoyo y trámite, que pueden ejercer los centros de arbitraje. Sólo así puede ser evitada una participación extraña en el desarrollo de un procedimiento de carácter excepcional que opera basado en la habilitación dada por la voluntad de las partes que acuden al mecanismo. Con base en los fundamentos anteriores, esta Corte encuentra que el cargo del actor es acertado, pues los centros de arbitramento no pueden ser habilitados por la ley para tomar decisiones judiciales indisolublemente ligadas a la suerte del proceso arbitral. Dichas decisiones sólo pueden ser tomadas por los árbitros habilitados por las partes (CP art. 116), sin perjuicio de que la ley pueda conferir a dichos centros labores de apoyo al proceso arbitral, o el desarrollo de ciertas funciones en materia de conciliación".

3. En esas mismas circunstancias con relación al trámite de designación de árbitros, el artículo 119 numeral 4 de la ley 446 de 1.998 establece lo siguiente:

"4. En caso de no aceptación o si las partes no han nombrado, el Centro las citará a audiencia para que éstas hagan la designación total o parcial de los árbitros. El Centro hará las designaciones que no hagan las partes". (La negrilla es nuestra).

La mencionada norma fue objeto de acusación ante la Corte Constitucional y en la Sentencia C. Ibídem se lee:

"En efecto, los aportes acusados establecían una regla supletiva de la voluntad de las partes, a fin de evitar que en esos eventos el tribunal no pudiera ser instalado, y conferirían entonces al centro la atribución de realizar las designaciones que no hubieran sido efectuadas por las partes o por el tercero delegado, incluso si las propias partes no habían delegado de manera directa o indirecta en el centro esa función".

Al respecto la Corte Constitucional resolvió que sólo puede hacer el Centro de Arbitraje las designaciones si las partes lo han autorizado previa y expresamente, en ejercicio del principio de habilitación contenido en el artículo 116 de la C.P.

4. Ante el Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición de esta entidad se presentó una solicitud de convocatoria de tribunal de arbitramento por parte de J.P.G. & CIA S.A., GERMAN VILLANUEVA CALDERON y OTRO – MIEMBROS DE LA UNION TEMPORAL OBRESAN – OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA, convocando a la UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA, el día primero (1) de febrero de dos mil diez (2010).

5. En el contrato de obras No. 000146 de fecha 30 de diciembre de 2005 suscrito entre LA UNION TEMPORAL OBRESAN – OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA y la UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA, se pactó en la cláusula decima octava que a su letra dice:

“CLAUSULA COMPROMISORIA: Cualquier diferencia relacionada con la ejecución de este contrato asociada a aspectos técnicos será resuelta a través de amigables componedores de acuerdo con los procedimientos establecidos en el Decreto 2279 de 1989, la Ley 23 de 1991, el Decreto 2651 de 1991, la Ley 446 de 1998, el Decreto 1818 de 1998, y reglamentación similar, que serán seleccionados de común acuerdo por las partes. La amigable composición tendrá lugar en las instalaciones de la Universidad del Magdalena. Cada parte podrá acudir a este mecanismo, mediante aviso previo a la otra parte. El procedimiento de la amigable composición se regirá por las siguientes reglas: las partes deberán presentar sus alegatos y documentos que los sustenten en términos de diez (10) días hábiles contados desde la fecha de aviso de la contraparte. Los amigables componedores a su vez tendrán plazo máximo de veinte (20) días hábiles para resolver las disputas por escrito, los cuales se contarán a partir del día siguiente del término previsto en la parte anterior. Los alegatos deberán contener: Una explicación de los fundamentos técnicos y contractuales que sustenten la posición de la respectiva parte. Las peticiones que haga la respectiva parte a los amigables componedores para resolver las diferencias. Cada parte deberá cooperar en la realización de cualquier investigación que los amigables componedores efectúen relacionada con la disputa en cuestión. Las decisiones adoptadas por los amigables componedores como resultado de la amigable composición tendrán fuerza vinculante para las partes de acuerdo con la ley. Los gastos que ocasionen la intervención de los amigables componedores serán cubiertos por la parte que resulte vencida. Cualquier divergencia que surja entre las partes como ocasión de la celebración, ejecución o liquidación de este contrato, no sea posible solucionar amigablemente, serán dirimidos por un tribunal de arbitramento de conformidad con las disposiciones antes citadas. Las disputas relacionadas con la aplicación y los efectos de las cláusulas de caducidad, terminación unilateral e interpretación unilateral y modificación unilateral no podrán ser sometidas a arbitramento. La intervención de los amigables componedores o tribunal de arbitramento no suspenderá la ejecución del contrato salvo que aquellos aspectos cuya ejecución dependa necesariamente de la solución de la controversia”.

6. La designación de los árbitros es una función de carácter judicial y sólo la puede ejercer el Centro de Arbitraje, en los casos de habilitación de acuerdo con lo antes expresado. Revisada la cláusula compromisoria transcrita en el punto No. 5, lo procedente era que las partes designaran conjuntamente los tres (3) árbitros que dirimirán dicha controversia, conforme lo establece el artículo 122 del decreto 1818 de 1998 que reza:

"ARTICULO 122. ARBITROS. Las partes conjuntamente nombrarán y determinarán el número de árbitros, o delegarán tal labor en un tercero, total o parcialmente. En todo caso el número de árbitros será siempre impar. Si nada se dice a este respecto los árbitros serán tres (3), salvo en las cuestiones de menor cuantía en cuyo caso el árbitro será uno solo.

Cuando se trate de arbitraje en derecho, las partes deberán comparecer al proceso arbitral por medio de abogado inscrito, a menos que se trate de asuntos exceptuados por la ley. (Artículo 118 de la Ley 446 de 1998 que modifica el artículo 7o. del Decreto 2279 de 1989)".

7. En ejercicio de la labor de apoyo y trámite en el proceso arbitral de **J.P.G. & CIA S.A., GERMAN VILLANUEVA CALDERON y OTRO - MIEMBROS DE LA UNION TEMPORAL OBRESAN - OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA** contra la **UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA**, en su debida oportunidad el Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición de esta entidad procedió a citar a las partes suscriptoras de la cláusula compromisoria a la audiencia de designación de árbitros varias veces aplazadas por solicitud de parte; para que conjuntamente de conformidad con el artículo 122 del decreto 1818 de 1998 designaran quienes dirimirán sus controversias como consta en las copias simples de las citaciones radicadas bajo los Nos. 023026, 023025, 023027, 023131, 023132, 023297, 023296, 023420, 023419, 023421, 023489, 023488, 023490, 023592, 023593 y 023594, que le anexo.

8. En la audiencia de designación de árbitros de fecha veinticuatro (24) de mayo de dos mil diez (2010), las partes conjuntamente designaron como árbitros para dirimir sus controversias a los doctores: **DIANA PATRICIA BOVEA MENDINUETA, ROSA GARCIA DE POLO y MIGUEL ANGEL POLO CAMPO**. Anexo copia simple del acta de la mencionada audiencia.

9. En ejercicio de la misma labor de apoyo y trámite, el Centro de Arbitraje les comunicó la designación como árbitros. Los Doctores Bovea Mendinueta y Polo Campo dentro de la oportunidad legal manifestaron su aceptación. La Doctora Rosa García de Polo comunicó la imposibilidad de aceptar por lo cual se citó nuevamente para que las partes conjuntamente designaran un nuevo árbitro en su reemplazo; audiencia que se adelantó el día ocho (8) de julio de dos mil diez (2010), designando en la misma al Doctor **JUAN ALBERTO POLO FIGUEROA** como principal y Suplente al Doctor **CAMILO DAVID HOYOS**, anexo copia simple del acta. Comunicándole la designación al Doctor Polo Figueroa, quien aceptó el cargo dentro de la oportunidad legal.

10. Así las cosas, el tribunal de arbitramento que dirimiría las controversias entre **J.P.G. & CIA S.A., GERMAN VILLANUEVA CALDERON y OTRO - MIEMBROS DE LA UNION TEMPORAL OBRESAN - OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA** contra la **UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA**, quedó conformado por designación conjunta de las partes acorde con el artículo 122 del decreto 1818 de 1998 por los Doctores: **DIANA BOVEA MENDINUETA, MIGUEL ANGEL POLO CAMPO y JUAN ALBERTO POLO FIGUEROA**. En ese sentido aclaramos que los árbitros no fueron sorteados ni seleccionados por el Centro como erradamente manifiesta en su escrito.

11. Como puede advertirse, al no existir incidencia alguna del Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición de esta entidad, respecto a la designación de los árbitros en el mencionado trámite arbitral, es totalmente improcedente e ilegal la solicitud de sorteo de nuevos árbitros para retomar el señalado proceso, al carecer el Centro de facultad jurisdiccional y por ende de habilitación. Admitir una interpretación contraria desconocería el tenor del artículo 116 de la Carta Política y de la Sentencia de la Corte Constitucional.

12. Así mismo, los miembros de la lista de árbitros responden por sus actuaciones en el ejercicio de sus funciones como tal, lo cual está previsto en el artículo séptimo del reglamento interno del Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición que a su letra dice:

"ARTICULO 7. El Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Santa Marta, sin perjuicio de la obligación de mantener mecanismos eficaces y seguros para la óptima prestación de sus servicios, no asume responsabilidad por actuaciones personales de los conciliadores, árbitros, secretarios de tribunales de arbitraje y amigables componedores. quienes responderán por hechos o actos suyos cuando haya lugar".

13. El Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Tercera, a través de su Secretaria, Doctora Paola Andrea Pérez Banguera, mediante oficio No. C-12 - 413 - D., radicado en esta entidad el día primero (1) de agosto del presente año bajo el No. 23823, remitió el expediente No.110010326000201100064 01 - (42218) - Actor: J.P.G.& CIA S. A. y otros - Miembros de la Unión Temporal "Obresan" el cual consta de nueve (9) cuadernos los cuales contienen un total de 2833 folios útiles.

14. La Alta Corporación mediante providencia proferida el día veinticinco (25) de abril de dos mil doce (2012) resolvió el recurso de anulación interpuesto en el trámite arbitral - Actor: J.P.G. & CIA S. A. y otros - Miembros de la Unión Temporal "Obresan", decretando la nulidad del laudo arbitral de fecha veintidós (22) de agosto de dos mil once (2011).

15. Conforme con el artículo 159 del decreto 1818 de 1998 en firme el fallo de la Alta Corporación procede la protocolización del expediente en la Notaría del Círculo que corresponda al lugar en donde funcionó el tribunal.

16. El Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición de esta entidad remitió a la Presidente del Tribunal Doctora **DIANA BOVEA MENDINUETA**, mediante oficio radicado el día veintisiete (27) de agosto de dos mil doce (2012) bajo el No. 029361, el expediente No.110010326000201100064 01 - (42218) - Actor: J.P.G.& CIA S. A. y otros - Miembros de la Unión Temporal "Obresan" el cual consta de nueve (9) cuadernos los cuales contienen un total de 2833 folios útiles, para lo de su competencia. Así las cosas en el Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición no reposa el expediente el cual contiene los anexos y pruebas. Adjunto copia simple del mencionado oficio con la constancia de su recibido.

17. El artículo 6 del C.P.C. establece:

"ARTÍCULO 6o. OBSERVANCIA DE NORMAS PROCESALES. <Artículo modificado por el artículo 2 de la Ley 794 de 2003. El nuevo texto es el siguiente:> Las normas procesales son de derecho público y orden público y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento, y en ningún caso, podrán ser derogadas, modificadas o sustituidas por los funcionarios o particulares, salvo autorización expresa de la ley.

Las estipulaciones que contradigan lo dispuesto en este artículo, se tendrán por no escritas."

Las normas que regulan el procedimiento arbitral son de derecho público y orden público y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento.

18. El artículo 168 inciso 2 del decreto 1818 de 1998 establece:

"Los árbitros y el secretario no tendrán derecho a la segunda mitad de sus honorarios cuando el tribunal cese en sus funciones por expiración del término fijado para el proceso o el de su prórroga, sin haberse expedido al laudo (Artículo 44 Decreto 2279 de 1989)".

Efectivamente en el trámite arbitral de **J.P.G. & CIA S.A., GERMAN VILLANUEVA CALDERON y OTRO – MIEMBROS DE LA UNION TEMPORAL OBRESAN – OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA** contra la **UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA**, los árbitros no tienen derecho a la segunda mitad de su honorarios por la anulación del laudo arbitral por la causal 5 contenida en el artículo 163 del decreto 1818 de 1998, es decir, haberse proferido el laudo después del vencimiento del término fijado para el proceso arbitral o su prórroga. El Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Tercera mediante providencia proferida el día veinticinco (25) de abril de dos mil doce (2012), anuló el laudo arbitral de fecha veintidós (22) de agosto de dos mil once (2011) por la causal enunciada.

Sin embargo, no es procedente acceder a la solicitud de que se utilicen esos recursos para cubrir los gastos administrativos iniciales. Lo anterior por ser las normas arbitrales de orden público, por lo que no se permite modificar el procedimiento por parte del particular.

19. La solicitud de retoma del proceso desde la fecha en que se produjo la extemporaneidad es improcedente e ilegal conforme a las normas vigentes para los trámites arbitrales que son de derecho público y orden público y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento. En este caso en firme la providencia de la Alta Corporación el Presidente del Tribunal protocolizará el expediente en la Notaría del Círculo que corresponda al lugar en donde funcionó el tribunal.

20. Reiteramos que el Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición de esta entidad carece de función jurisdiccional, son los interesados los llamados a presentar una nueva solicitud de convocatoria por tratarse de una justicia rogada la cual deberá estar conforme con lo preceptuado en el artículo 127 del Decreto 1818 de 1998 que a su letra dice:

"La solicitud de convocatoria deberá reunir todos los requisitos exigidos por la ley para la demanda y se dirigirá al centro de arbitraje indicado en el numeral 1° del artículo 15 de este decreto. (Decreto 2651 de 1991, artículo 13)".

Así mismo deberá cumplir con el pago de los gastos iniciales conforme lo establece el artículo 11 del Decreto 4089 de 2007 que reza:

"GASTOS INICIALES. Con la presentación de cualquier convocatoria a Tribunal de arbitramento, la parte convocante deberá cancelar a favor del Centro, los siguientes valores:

Si es un trámite de menor cuantía el equivalente a un salario mínimo mensual vigente. (1 SMMV).

Si es un trámite de mayor cuantía o de cuantía indeterminada, el equivalente a dos salarios mínimos mensuales vigentes (2 SMMLV).

Estos valores se imputarán a los gastos administrativos que decreta el Tribunal. En los casos donde el tribunal no pueda asumir sus funciones se reembolsarán dichos recursos".

21. El solicitante transcribe la demanda arbitral que sirvió de base al trámite arbitral fallido y la misma contiene como dirección de notificación judicial, calle 11 No. 1C – 23 – Oficina 309 Edificio Posihueida. Sin embargo, el día tres (3) de agosto de dos mil doce (2012), conforme a la información que reposa en nuestros archivos se intentó notificársele en esa dirección la comunicación radicada en esta entidad el día dos (2) de agosto de dos mil doce (2012) bajo el

No. 029155 y no fue posible por cuanto se nos manifestó que ahí no funcionaban las oficinas del destinatario.

Por lo anterior se advierte nuevamente que el solicitante no aportó su actual dirección de notificación judicial.

ANEXOS:

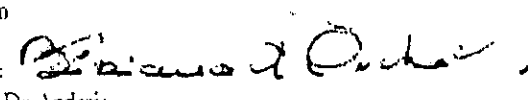
- 1. Copia simple de las citaciones radicadas bajo los No. 023026, 023025, 023027, 023131, 023132, 023297, 023296, 023420, 023419, 023421, 023489, 023488, 023490, 023592, 023593 y 023594. (16 folios).
- 2. Copia simple del acta de audiencia de designación de fecha veinticuatro (24) de mayo de dos mil diez (2010). (3 folios).
- 3. Copia simple del acta de audiencia de designación de fecha ocho (8) de julio de dos mil diez (2010). (3 folios).
- 4. Copia simple del oficio radicado el día veintisiete (27) de agosto de dos mil doce (2012) bajo el No. 029361. (1 folio).

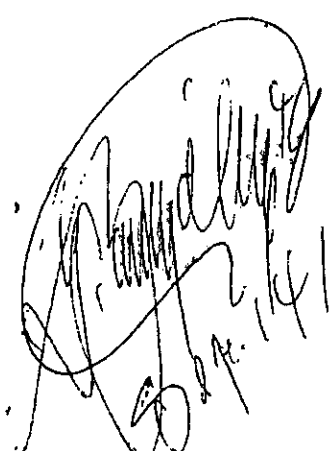
En el suministro de cualquier información adicional estaré presto a colaborarle gustosamente.

Atentamente,


CESAR M. RIASCOS NOGUERA
Presidente Ejecutivo

Anexo: Lo anunciado
Bibiana O. /32-24-20

Preparó y Aprobó: 
Bibiana M. Ovalle De Andreis
Directora Centro de Arbitraje, Conciliación
y Amigable Composición


2012/08/14



MINISTERIO DE JUSTICIA

RESOLUCION NUMERO 1128 DE 19

26 MAYO 1991

Por la cual se autoriza el funcionamiento del Centro de Arbitraje y Amigable Composición de la "CAMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA"

EL VICEMINISTRO DE JUSTICIA
en uso de sus facultades legales y en especial las
conferidas por el Artículo 90 de la Ley 23 de 1991, y

CONSIDERANDO

Que EDGAR POLO FLOREZ, actuando en calidad de Presidente Ejecutivo de la CAMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA, entidad sin animo de lucro, creada por Decreto 121 del 7 de diciembre de 1981, vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, solicitó ante este Ministerio autorización de funcionamiento de un Centro de Arbitraje y Amigable Composición.

Que al revisar la documentación adjunta a la solicitud, se estableció que reúne los requisitos tanto formales como materiales que consagra la Ley 23 de 1991 para proceder a conceder autorización de funcionamiento al Centro de Arbitraje y Amigable Composición de la CAMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA.

Que por las razones expuestas es procedente autorizar a la CAMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA para arbitrar y componer de acuerdo con la Ley.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - Autorizar el funcionamiento del Centro de Arbitraje y Amigable Composición de la CAMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

.. / ..

Hoja 2.- De la resolución por la cual se autoriza el funcionamiento del Centro de Arbitraje y Amigable Composición de la CAMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA.

ARTICULO SEGUNDO. - El interesado publicará a su costa la presente resolución en el Diario Oficial y allegará un ejemplar a la Oficina de Conciliación de este Ministerio.

ARTICULO TERCERO. - Contra esta resolución procede el recurso de reposición y en subsidio el de apelación dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación.

ARTICULO CUARTO. - La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Santafé de Bogotá, D.C., a 28 MAYO 1993


ROBERTO HINESTROZA REY

EL SECRETARIO GENERAL;


CAMILO CALDERÓN RIVERA

725 64

DIANA PATRICIA BOVEA MENDINUETA
ABOGADA TITULADA UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA
ESPECIALISTA EN DERECHO PUBLICO UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COLOMBIA

Santa Marta D.T.C.H., Septiembre 11 de 2012.

Doctora
BIBIANA OVALLE DE ANDREIS
Directora
Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición
Cámara de Comercio de Santa Marta
E. S. D.

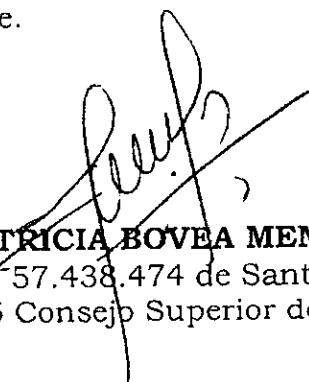
24035
No. 24035
Archivos en: 30-24-20-
CAMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA
12 SET. 2012
Reciba Pago a Atendido
3A B

Apreciada Doctora.

Muy respetuosamente me dirijo a Usted, a fin de manifestarle que el expediente del proceso arbitral promovido por J.P.G. & CIA S.A., y Otros, contra la Universidad del Magdalena, fue protocolizado mediante Escritura Pública No.850 de Septiembre 11 de 2012, en la Notaria Cuarta del Circulo de Santa Marta.

Y el expediente del proceso arbitral promovido por Mario López contra CONDOMINIO COSTA AZUL BEACH RESORT, CONSTRUCTORA COSTAZUL SUITES S.A., FUTURE VACATIONS S.A.S. y GRUPO HOTELERO LONDOÑO GHL GRUPO HOTELES S.C.A., fue protocolizado mediante Escritura Pública No.851 de Septiembre 11 de 2012, en la Notaria Cuarta del Circulo de Santa Marta.

Con todo respeto, atentamente.


DIANA PATRICIA BOVEA MENDINUETA
C.C. No. 57.438.474 de Santa Marta
T.P. No. 90.265 Consejo Superior de la Judicatura

24- 023025

Santa Marta, 14 ABR. 2010

Señores

UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA

Carrera 32 No. 22 - 08, Sector San Pedro Alejandrino,-
Edificio Administrativo del Campus Universitario
Santa Marta.

Ref.: Audiencia designación de árbitros.

Respetados Señores:

Ante éste Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición se ha presentado una solicitud de convocatoria a un tribunal de arbitramento por parte de: **J.P.G. & CIA. S.A., GERMAN VILLANUEVA CALDERON Y RICARDO LUIS CABANAL GUZMAN MIEMBROS DE LA UNION TEMPORAL OBRESAN - OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA** con **LA UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA**; para dirimir la controversia derivada de un contrato.

Corresponde a las partes designar conjuntamente los árbitros que dirimirán dicha controversia, diligencia a la cual los estamos citando.

Anexo copia informal de la solicitud de convocatoria.

Fecha: 27 de Abril de 2010

Hora: 2:30 P.M.

Lugar: Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Santa Marta, ubicado en la Avenida del Libertador No. 13 - 94 - Piso 2.

Cordialmente,



BIBIANA M. OVALLE DE ANDREIS

Directora Centro de Arbitraje, Conciliación
y Amigable Composición.

Anexo: Lo Anunciado
Rosita Z./32-24-20

24- 023026

Santa Marta, 14 ABR. 2010

Señores

J.P.G. & CIA. S.A. Y OTROS

Apoderado: Gabriel Francisco González Barraza
Calle 11 No. 1C – 23 Ed. Posihueica, Oficina 309
Santa Marta.

Ref.: Audiencia designación de árbitros.

Respetados Señores:

Ante éste Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición se ha presentado una solicitud de convocatoria a un tribunal de arbitramento por parte de: **J.P.G. & CIA. S.A., GERMAN VILLANUEVA CALDERON Y RICARDO LUIS CABANAL GUZMAN MIEMBROS DE LA UNION TEMPORAL OBRESAN – OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA con LA UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA;** para dirimir la controversia derivada de un contrato.

Corresponde a las partes designar conjuntamente los árbitros que dirimirán dicha controversia, diligencia a la cual los estamos citando.

Fecha: 27 de Abril de 2010

Hora: 2:30 P.M.

Lugar: Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Santa Marta, ubicado en la Avenida del Libertador No. 13 – 94 - Piso 2.

Cordialmente,


BIBIANA M. OVALLE DE ANDREIS

Directora Centro de Arbitraje, Conciliación
y Amigable Composición

Rosita Z./32-24-20

24- 023027

Santa Marta, 14 ABR. 2010

Doctor

ALVARO CORREA NOGUERA

Procurador No. 43 -

Ante el Tribunal Contencioso Administrativo

Calle 15 No. 3 - 07, Piso 9

Santa Marta.

Ref.: Audiencia designación de árbitros.

Respetados Doctor:

Ante éste Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición se ha presentado una solicitud de convocatoria a un tribunal de arbitramento por parte de: **J.P.G. & CIA. S.A., GERMAN VILLANUEVA CALDERON Y RICARDO LUIS CABANAL GUZMAN MIEMBROS DE LA UNION TEMPORAL OBRESAN - OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA con LA UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA;** para dirimir la controversia derivada de un contrato.

Corresponde a las partes designar conjuntamente los árbitros que dirimirán dicha controversia, diligencia a la cual lo estamos citando.

Fecha: 27 de Abril de 2010

Hora: 2:30 P.M.

Lugar: Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Santa Marta, ubicado en la Avenida del Libertador No. 13 - 94 - Piso 2.

Cordialmente,



BIBIANA M. OVALLE DE ANDREIS

Directora Centro de Arbitraje, Conciliación
y Amigable Composición

Rosita Z./32-24-20

24- 023131

Santa Marta, 27 ABR. 2010

Señores

J.P.G. & CIA. S.A. Y OTROS

Apoderado: Gabriel Francisco González Barraza
Calle 11 No. 1C – 23 Ed. Posihueica, Oficina 309
Santa Marta.

Ref.: Audiencia designación de árbitros.

Respetados Señores:

Ante éste Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición se ha presentado una solicitud de convocatoria a un tribunal de arbitramento por parte de: **J.P.G. & CIA. S.A., GERMAN VILLANUEVA CALDERON Y RICARDO LUIS CABANAL GUZMAN MIEMBROS DE LA UNION TEMPORAL OBRESAN – OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA con LA UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA;** para dirimir la controversia derivada de un contrato.

Corresponde a las partes designar conjuntamente los árbitros que dirimirán dicha controversia, diligencia a la cual los estamos citando nuevamente.

Fecha: 12 de Mayo de 2010

Hora: 2:30 P.M.

Lugar: Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Santa Marta, ubicado en la Avenida del Libertador No. 13 – 94 - Piso 2.

Cordialmente,



BIBIANA M. OVALLE DE ANDREIS

Directora Centro de Arbitraje, Conciliación
y Amigable Composición.

Rosita Z./32-24/20

24- 023132

Santa Marta, 27 ABR. 2010

Señores

UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA

Carrera 32 No. 22 – 08, Sector San Pedro Alejandrino,-

Edificio Administrativo del Campus Universitario

Santa Marta.

Ref.: Audiencia designación de árbitros.

Respetados Señores:

Ante éste Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición se ha presentado una solicitud de convocatoria a un tribunal de arbitramento por parte de: J.P.G. & CIA. S.A., GERMAN VILLANUEVA CALDERON Y RICARDO LUIS CABANAL GUZMAN MIEMBROS DE LA UNION TEMPORAL OBRESAN – OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA con LA UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA; para dirimir la controversia derivada de un contrato.

Corresponde a las partes designar conjuntamente los árbitros que dirimirán dicha controversia, diligencia a la cual los estamos citando nuevamente.

Fecha: 12 de Mayo de 2010

Hora: 2:30 P.M.

Lugar: Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Santa Marta, ubicado en la Avenida del Libertador No. 13 – 94 - Piso 2.

Cordialmente,



BIBIANA M. OVALLE DE ANDREIS

Directora Centro de Arbitraje, Conciliación
y Amigable Composición.

Rosita Z./32-24-20

24- 023297

Santa Marta, 13 MAYO 2010

Señores

UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA

Carrera 32 No. 22 – 08, Sector San Pedro Alejandrino,-
Edificio Administrativo del Campus Universitario
Santa Marta.

Ref.: Audiencia designación de árbitros.

Respetados Señores:

Ante éste Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición se ha presentado una solicitud de convocatoria a un tribunal de arbitramento por parte de: J.P.G. & CIA. S.A., GERMAN VILLANUEVA CALDERON Y RICARDO LUIS CABANAL GUZMAN MIEMBROS DE LA UNION TEMPORAL OBRESAN – OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA con LA UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA; para dirimir la controversia derivada de un contrato.

Corresponde a las partes designar conjuntamente los árbitros que dirimirán dicha controversia, diligencia a la cual los estamos citando nuevamente.

Fecha: 24 de Mayo de 2010

Hora: 2:30 P.M.

Lugar: Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Santa Marta, ubicado en la Avenida del Libertador No. 13 – 94 - Piso 2.

Cordialmente,



BIBIANA M. OVALLE DE ANDREIS
Directora Centro de Arbitraje, Conciliación
y Amigable Composición.

Rosita Z/32-24-20

24- 023296

Santa Marta, 13 MAYO 2010

Doctor
ALVARO CORREA NOGUERA
Procurador No. 43 -
Ante el Tribunal Contencioso Administrativo
Calle 15 No. 3 - 07, Piso 9
Santa Marta.

Ref.: Audiencia designación de árbitros.

Respetados Doctor:

Ante éste Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición se ha presentado una solicitud de convocatoria a un tribunal de arbitramento por parte de: **J.P.G. & CIA. S.A., GERMAN VILLANUEVA CALDERON Y RICARDO LUIS CABANAL GUZMAN MIEMBROS DE LA UNION TEMPORAL OBRESAN - OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA con LA UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA;** para dirimir la controversia derivada de un contrato.

Corresponde a las partes designar conjuntamente los árbitros que dirimirán dicha controversia, diligencia a la cual lo estamos citando nuevamente.

Fecha: 24 de Mayo de 2010

Hora: 2:30 P.M.

Lugar: Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Santa Marta, ubicado en la Avenida del Libertador No. 13 - 94 - Piso 2.

Cordialmente,


BIBIANA M. OVALLE DE ANDREIS
Directora Centro de Arbitraje, Conciliación
y Amigable Composición.

Rosita Z./32-24-20

24- 023419

Santa Marta, 31 MAYO 2010

Señores

UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA

Carrera 32 No. 22 – 08, Sector San Pedro Alejandrino,-
Edificio Administrativo del Campus Universitario
Santa Marta.

Ref.: Audiencia designación de árbitro.

Respetados Señores:

Ante éste Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición se ha presentado una solicitud de convocatoria a un tribunal de arbitramento por parte de: J.P.G. & CIA. S.A., GERMAN VILLANUEVA CALDERON Y RICARDO LUIS CANABAL GUZMAN MIEMBROS DE LA UNION TEMPORAL OBRESAN – OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA con LA UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA; para dirimir la controversia derivada de un contrato.

Corresponde a las partes designar conjuntamente el árbitro que dirimirá dicha controversia, diligencia a la cual los estamos citando.

Fecha: 8 de Junio de 2010

Hora: 11:00 A.M.

Lugar: Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Santa Marta, ubicado en la Avenida del Libertador No. 13 – 94 - Piso 2.

Cordialmente,



BIBIANA M. OVALLE DE ANDREIS

Directora Centro de Arbitraje, Conciliación
y Amigable Composición.

Rosita Z./32-24-20

24- 023420

Santa Marta, 31 MAYO 2010

Señores

J.P.G. & CIA. S.A. Y OTROS

Apoderado: Gabriel Francisco González Barraza
Calle 11 No. 1C – 23 Ed. Posihueica, Oficina 309
Santa Marta.

Ref.: Audiencia designación de árbitro.

Respetados Señores:

Ante éste Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición se ha presentado una solicitud de convocatoria a un tribunal de arbitramento por parte de: **J.P.G. & CIA. S.A., GERMAN VILLANUEVA CALDERON Y RICARDO LUIS CANABAL GUZMAN MIEMBROS DE LA UNION TEMPORAL OBRESAN – OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA con LA UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA;** para dirimir la controversia derivada de un contrato.

Corresponde a las partes designar conjuntamente el árbitro que dirimirá dicha controversia, diligencia a la cual los estamos citando.

Fecha: 8 de junio de 2010

Hora: 11:00 A.M.

Lugar: Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Santa Marta, ubicado en la Avenida del Libertador No. 13 – 94 - Piso 2.

Cordialmente,


BIBIANA M. OVALLE DE ANDREIS
Directora Centro de Arbitraje, Conciliación
y Amigable Composición

Rosita Z./32-24-20

24- 023421

Santa Marta, 31 MAYO 2010

Doctor

ALVARO CORREA NOGUERA

Procurador No. 43 -

Ante el Tribunal Contencioso Administrativo

Calle 15 No. 3 - 07, Piso 9

Santa Marta.

Ref.: Audiencia designación de árbitro.

Respetado Doctor:

Ante éste Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición se ha presentado una solicitud de convocatoria a un tribunal de arbitramento por parte de: **J.P.G. & CIA. S.A., GERMAN VILLANUEVA CALDERON Y RICARDO LUIS CANABAL GUZMAN MIEMBROS DE LA UNION TEMPORAL OBRESAN - OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA con LA UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA;** para dirimir la controversia derivada de un contrato.

Corresponde a las partes designar conjuntamente el árbitro que dirimirá dicha controversia, diligencia a la cual lo estamos citando.

Fecha: 8 de Junio de 2010

Hora: 11:00 A.M.

Lugar: Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Santa Marta, ubicado en la Avenida del Libertador No. 13 - 94 - Piso 2.

Cordialmente,


BIBIANA M. OVALLE DE ANDREIS

Directora Centro de Arbitraje, Conciliación
y Amigable Composición.

Rosita Z./32-24-20

24-023488

Santa Marta, 09 JUN. 2010

Señores

UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA

Carrera 32 No. 22 – 08, Sector San Pedro Alejandrino, -
Edificio Administrativo del Campus Universitario
Santa Marta.

Ref.: Audiencia designación de árbitro.

Respetados Señores:

Ante éste Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición se ha presentado una solicitud de convocatoria a un tribunal de arbitramento por parte de: **J.P.G. & CIA. S.A., GERMAN VILLANUEVA CALDERON Y RICARDO LUIS CANABAL GUZMAN MIEMBROS DE LA UNION TEMPORAL OBRESAN – OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA** con **LA UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA**; para dirimir la controversia derivada de un contrato.

Corresponde a las partes designar conjuntamente el árbitro que dirimirá dicha controversia, diligencia a la cual los estamos citando nuevamente.

Fecha: 23 de Junio de 2010

Hora: 10:30 A.M.

Lugar: Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Santa Marta, ubicado en la Avenida del Libertador No. 13 – 94 - Piso 2.

Cordialmente,


BIBIANA M. OVALLE DE ANDREIS

Directora Centro de Arbitraje, Conciliación
y Amigable Composición.

Rosita Z./32-24-20

24- 023489

Santa Marta, 09 JUN. 2010

Señores

J.P.G. & CIA. S.A. Y OTROS

Apoderado: Gabriel Francisco González Barraza
Calle 11 No. 1C – 23 Ed. Posihueica, Oficina 309
Santa Marta.

Ref.: Audiencia designación de árbitro.

Respetados Señores:

Ante éste Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición se ha presentado una solicitud de convocatoria a un tribunal de arbitramento por parte de: **J.P.G. & CIA. S.A., GERMAN VILLANUEVA CALDERON Y RICARDO LUIS CANABAL GUZMAN MIEMBROS DE LA UNION TEMPORAL OBRESAN – OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA con LA UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA;** para dirimir la controversia derivada de un contrato.


Corresponde a las partes designar conjuntamente el árbitro que dirimirá dicha controversia, diligencia a la cual los estamos citando nuevamente.

Fecha: 23 de junio de 2010

Hora: 10:30 A.M.

Lugar: Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Santa Marta, ubicado en la Avenida del Libertador No. 13 – 94 - Piso 2.

Cordialmente,


BIBIANA M. OVALLE DE ANDREIS
Directora Centro de Arbitraje, Conciliación
y Amigable Composición.

Rosita Z./32-24-20

24- 023490

Santa Marta, 09 JUN. 2010

Doctor
ALVARO CORREA NOGUERA
Procurador No. 43 -
Ante el Tribunal Contencioso Administrativo
Calle 15 No. 3 - 07, Piso 9
Santa Marta.

Ref.: Audiencia designación de árbitro.

Respetado Doctor:

Ante éste Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición se ha presentado una solicitud de convocatoria a un tribunal de arbitramento por parte de: **J.P.G. & CIA. S.A., GERMAN VILLANUEVA CALDERON Y RICARDO LUIS CANABAL GUZMAN MIEMBROS DE LA UNION TEMPORAL OBRESAN - OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA con LA UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA;** para dirimir la controversia derivada de un contrato.

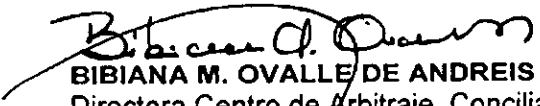
Corresponde a las partes designar conjuntamente el árbitro que dirimirá dicha controversia, diligencia a la cual lo estamos citando nuevamente.

Fecha: 23 de Junio de 2010

Hora: 10:30 A.M.

Lugar: Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Santa Marta, ubicado en la Avenida del Libertador No. 13 - 94 - Piso 2.

Cordialmente,


BIBIANA M. OVALLE DE ANDREIS
Directora Centro de Arbitraje, Conciliación
y Amigable Composición.

Rosita Z./32-24-20

24- 023592

Santa Marta, 25 JUN. 2010

Señores

J.P.G. & CIA. S.A. Y OTROS

Apoderado: Gabriel Francisco González Barraza
Calle 11 No. 1C – 23 Ed. Posihueica, Oficina 309
Santa Marta.

Ref.: Audiencia designación de árbitro.

Respetados Señores:

Ante éste Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición se ha presentado una solicitud de convocatoria a un tribunal de arbitramento por parte de: **J.P.G. & CIA. S.A., GERMAN VILLANUEVA CALDERON Y RICARDO LUIS CANABAL GUZMAN MIEMBROS DE LA UNION TEMPORAL OBRESAN – OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA con LA UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA;** para dirimir la controversia derivada de un contrato.


Corresponde a las partes designar conjuntamente el árbitro que dirimirá dicha controversia, diligencia a la cual los estamos citando nuevamente.

Fecha: 8 de julio de 2010

Hora: 9:00 A.M.

Lugar: Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Santa Marta, ubicado en la Avenida del Libertador No. 13 – 94 - Piso 2.

Cordialmente,


BIBIANA M. OVALLE DE ANDREIS
Directora Centro de Arbitraje, Conciliación
y Amigable Composición.

Rosita Z./32-24-20

24- 023593

Santa Marta, 25 JUN. 2010

Señores

UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA

Carrera 32 No. 22 – 08, Sector San Pedro Alejandrino,-

Edificio Administrativo del Campus Universitario

Santa Marta.

Ref.: Audiencia designación de árbitro.

Respetados Señores:

Ante éste Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición se ha presentado una solicitud de convocatoria a un tribunal de arbitramento por parte de: **J.P.G. & CIA. S.A., GERMAN VILLANUEVA CALDERON Y RICARDO LUIS CANABAL GUZMAN MIEMBROS DE LA UNION TEMPORAL OBRESAN – OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA** con **LA UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA**; para dirimir la controversia derivada de un contrato.

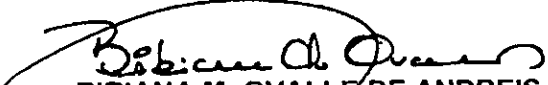
Corresponde a las partes designar conjuntamente el árbitro que dirimirá dicha controversia, diligencia a la cual los estamos citando nuevamente.

Fecha: 8 de Julio de 2010

Hora: 9:00 A.M.

Lugar: Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Santa Marta, ubicado en la Avenida del Libertador No. 13 – 94 - Piso 2.

Cordialmente,


BIBIANA M. OVALLE DE ANDREIS
Directora Centro de Arbitraje, Conciliación
y Amigable Composición.

Rosita Z/32-24-20

24- 023594

Santa Marta, 25 JUN. 2010

Doctor
ALVARO CORREA NOGUERA
Procurador No. 43 -
Ante el Tribunal Contencioso Administrativo
Calle 15 No. 3 - 07, Piso 9
Santa Marta.

Ref.: Audiencia designación de árbitro.

Respetado Doctor:

Ante éste Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición se ha presentado una solicitud de convocatoria a un tribunal de arbitramento por parte de: **J.P.G. & CIA. S.A., GERMAN VILLANUEVA CALDERON Y RICARDO LUIS CANABAL GUZMAN MIEMBROS DE LA UNION TEMPORAL OBRESAN - OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA con LA UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA;** para dirimir la controversia derivada de un contrato.

Corresponde a las partes designar conjuntamente el árbitro que dirimirá dicha controversia, diligencia a la cual lo estamos citando nuevamente.

Fecha: 8 de Julio de 2010

Hora: 9:00 A.M.

Lugar: Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Santa Marta, ubicado en la Avenida del Libertador No. 13 - 94 - Piso 2.

Cordialmente,


BIBIANA M. OVALLE DE ANDREIS
Directora Centro de Arbitraje, Conciliación
y Amigable Composición

Rosita Z./32-24-20

Sindya - Van

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA
SECRETARÍA GENERAL
Ley 1437 de 2011

1071 aplazado, anexa

P A S O A L D E S P A C H O

De la Magistrada Maribel Mendoza Jiménez, hoy catorce (14) de febrero de dos mil dieciocho (2018)

962

Expediente: 47-001-2333-003-2014-00241-00
Demandante: OBRESAN
Demandado: NACION – MINJUSTICIA Y OTROS
Medio de control: REPARACION DIRECTA

Informandó que estando el proceso al despacho, el apoderado de la parte actora presenta solicitud aplazamiento de audiencia a fin de notificar al árbitro Miguel Angel Polo y corrección de auto que fijo la fecha.

Sírvase proveer lo pertinente.

Sube 2 folios


JAIME ORTIZ ROMERO
SECRETARIO

7-105

20-f

JUAN ALBERTO POLO FIGUEROA

Ex - Consejero de Estado

45.000 1022

Honorable Magistrada

Dra. MARIBEL MENDOZA JIMENEZ, Ponente

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA

E. S. D.

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA	
FECHA:	13 FEB 2018
HORA:	10:39 am
FOLIOS:	2 Folios
FIRMA:	[Firma]

Referencia:

Radicación: 47001 3333-003 2014-00241-00
Medio de control: Reparación directa
Demandante: OBRESAN
Demandado: NACION-MINISTERIO DE JUSTICIA -OTROS

963

Con respeto solicito el aplazamiento de la audiencia fijada para el día 21 de febrero venidero, en razón de:

1. La audiencia fue convocada con el objeto de continuar la audiencia inicial comenzada el 7 de marzo de 2017, la cual fue *"suspendida para efectos de conformar el litisconsorte necesario dentro del presente asunto."*

Resulta, empero, Honorable Magistrada, que ese litisconsorcio tampoco se podrá integrar en esta audiencia porque el árbitro MIGUEL ANGEL POLO no ha sido notificado. Es imprescindible notificarlo, así sea por emplazamiento, para poder integrar legalmente el litisconsorcio, sea con su presencia o con la de un curador.

Concurrir a esta audiencia, llamada de entrada al fracaso por la razón aludida, constituye un desgaste de tiempo para la Corporación y para los interesados en el proceso.

Polo Asociados - Abogados & Consultores

Cel: 315 317 55 58 E-mail: jpolofigueroa@gmail.com

Santa Marta: Edif. Bahía Centro, Cra. 1 C N° 22-58. Of. 903. Tels: (5) 431 68 64, 431 96 75
Bogotá: Carrera 8 N° 15 - 80 Of. 402 Cels: 311 470 7275, 310 294 6579

JUAN ALBERTO POLO FIGUEROA

Ex - Consejero de Estado

2

964

1083

2. En la convocatoria usted dispuso "*Señalar el día veintiuno (21) de enero de 2017 a las diez de la mañana (10:00 a.m.) a efectos de llevar a cabo la continuación de la audiencia inicial en el proceso de la referencia*".

Sucede que esa fecha ya transcurrió hace casi un año. Aun cuando se puede interpretar que se trata de un error de digitación, o uno de copia y pega equivocado, es incuestionable que previamente a la realización de la audiencia hay que corregir tal falencia.

Le ruego, en consecuencia, ordenar lo pertinente en orden a evitar un traspié en el debido proceso.

Atentamente,



JUAN ALBERTO POLO FIGUEROA

T.P. 3547

Polo Asociados - Abogados & Consultores

Cel: 315 317 55 58 E-mail: jpolofigueroa@gmail.com

Santa Marta: Edif. Bahía Centro, Cra. 1 C N° 22-58. Of. 903. Tels: (5) 431 68 64, 431 96 75
Bogotá: Carrera 8 N° 15 - 80 Of. 402 Cels: 311 470 7275, 310 294 6579

Señores

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA

Att. Dra. Maribel Mendoza Jiménez

Magistrado Ponente

E. S. D.

1074

Medio de Control	Reparación Directa
Radicado	47-001-2333-003-2014-00421-00
Demandante	German Villanueva Calderón y Otros
Demandado	Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho y Otros


Luis Alejandro Corzo Mantilla, mayor de edad y vecino de esta ciudad, identificado con CC N° 88.213.988 de Cúcuta, abogado en ejercicio, portador de la Tarjeta Profesional N° 101.576 del C. S. de la J., actuando en calidad de apoderado judicial de los Demandantes, conforme al poder otorgado, me dirijo a su Honorable Despacho con el objeto de atender la carga procesal que me asiste.

Adjunto ejemplar de los Diario El Tiempo y El Heraldo, en los cuales se efectuó la publicación del edicto emplazatorio del señor Miguel Ángel Polo Campo, el pasado 28 de octubre de la presente anualidad, dando cumplimiento a lo ordenado por su Despacho..

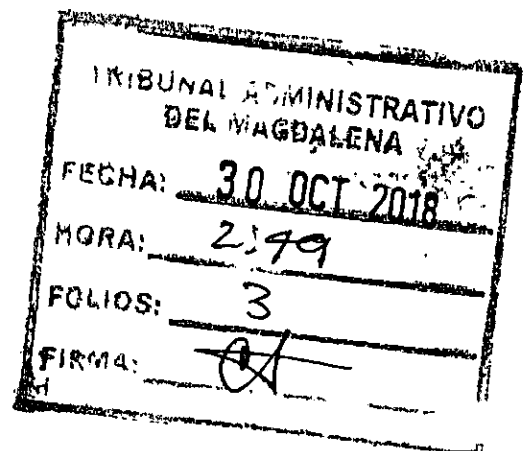
En consecuencia de lo anterior, vencido el término concedido al emplazado, deberá continuarse con el curso normal del proceso.

Agradezco su vocación de servicio en la administración de justicia

Atentamente.


LUIS ALEJANDRO CORZO MANTILLA
CC 88.213.988 De Cúcuta
T.P. 101.576 C. S. De la J.

Anexo. Lo enunciado.



107
967JAIME
ALFONSO
ORTIZ
ROMERORAMA JUDICIAL DEL PODER
PÚBLICO
RED INTEGRADA PARA LA
GESTIÓN DE PROCESOS
JUDICIALES EN LÍNEARama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Save ► Configuración ► Administración ►

PROCESO

CÓDIGO DEL PROCESO 47001233300020140024100

Instancia PRIMERA INSTANCIA/UNICA INSTANCIA

Año 2014

Departamento MAGDALENA

Ciudad SANTA MARTA

Corporación TRIBUNAL ADMINISTRATIVO

Especialidad TRIBUNAL ADMINISTRATIVO ORAL

Tipo Ley No Aplica

Despacho Tribunal Administrativo Del Magdalena

Distrito/Circuito SANTA MARTA

Juez/Magistrado MARIBEL MENDOZA JIMENEZ

Número
Consecutivo 00241Número 00
Interpuestos

Tipo Proceso MEDIOS DE CONTROL

Clase Proceso REPARACION DIRECTA

SubClase
Proceso En General / Sin SubclaseEs Privado ☐

INFORMACIÓN DE LAS ACTUACIONES

CONSULTA ACTUACIÓN

Fecha De
Registro 27/11/2018 4:42:30 P. M.Estado
Actuación REGISTRADA

Ciclo GENERALES *

Tipo
Actuación AUTO EMPLAZA *Etapa
Procesal TRÁMITEFecha
Actuación 27/11/2018 *

Se Emplaza Al Señor MIGUEL ANGEL POLO CAMPO

Anotación

Responsable
Registro JAIME ALFONSO ORTIZ ROMERO

Término TÉRMINO JUDICIAL

Calendario JUDICIAL

Días Del
Término 16Fecha Inicio 27/11/2018
Término *Fecha Fin
Término 18/12/2018

Total Registros : - Páginas : De

ARCHIVO(S) ADJUNTO(S)

Buscar
Archivo Ningún archivo seleccionado

	Nombre Del Archivo	Certificado De Integridad	Tamaño (KB)
	47001233300020140024100_ACT_AUTO EMPLAZA_27-11-2018 4.42.20 P. M..Pdf	139F8BC1F4A3C3CF3AC5FDE9D925D968499FAF9F	190



Rama Judicial
Consejo Superior De La Judicatura
Dirección Ejecutiva De Administración Judicial
Unidad De Informática

Calle 72 No. 7 - 96 Bogotá
Colombia

PBX: (571) 3127011 - E-Mail:
Soporte_n_tyba@Deaj.Ramajudicial.Gov.Co



Último Acceso 27/Nov./2018
04:40:00 P. M..

1.0.1.0

968
1076.

Consulta de Procesos Judiciales.

¡Advertencia!

Se visualizan proceso(s) no disponible(s) para consulta, diríjase al despacho judicial correspondiente.

X

Proceso Ciudadano Predio

Departamento

--SELECCIONE--

Ciudad

Corporación

Especialidad

Despacho

Código Proceso










Escriba el Siguiente Texto

28BAA4

Consultar

Limpiar

Resultado de la Búsqueda.

	CÓDIGO PROCESO	DESPACHO
	47001110200020170041600	CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA SALA DISCIPLINARIA
	47001221300020170016900	TRIBUNAL SUPERIOR SALA CIVIL - FAMILIA
	47001221300020170017000	TRIBUNAL SUPERIOR SALA CIVIL - FAMILIA
	47001221300020170017100	TRIBUNAL SUPERIOR SALA CIVIL - FAMILIA
	47001233300020140024100	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA
	47001316000120180017100	JUZGADO DE CIRCUITO - FAMILIA ORAL 001 SANTA MARTA
	47001316000220060012900	JUZGADO DE CIRCUITO - FAMILIA ORAL 002 SANTA MARTA
	47001400301020060063100	JUZGADO MUNICIPAL - CIVIL 010 SANTA MARTA
	47001418900120170148900	COMPETENCIAS MÚLTIPLES 001 SANTA MARTA

Total Registros: 9 - Páginas: 1 de 1





2169 90
1037

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA

SECRETARÍA GENERAL

Ley 1437 de 2011

RADICACIÓN: 47-001-2333-000-2014-00241-00
DEMANDANTE: UNION TEMPORAL OBRAS ESPECIALES DE
SANTA MARTA (OBRESAN) Y OTROS.
DEMANDADO: NACION – MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL
DERECHO Y OTROS.
MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA.

De la Magistrada Maribel Mendoza Jiménez, hoy dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019) el expediente de la referencia, informándole que mediante providencia del catorce (14) de febrero de dos mil dieciocho (2018), este Despacho dispuso suspender la realización de la audiencia inicial hasta tanto se efectuará la notificación personal del auto admisorio de la demanda bajo estudio al señor Miguel Angel Polo; en este sentido y, habiéndose efectuado el emplazamiento a éste último ciudadano, se encuentra pendiente, en consecuencia, designar curador ad litem.

Sírvase proveer.

Anexo

Un cuaderno No. 1 (Foliado del 1 al 568) y, 1 Cuaderno No. 2 (Foliado del 569 al 968).

Atentamente,


JAIME ORTIZ ROMERO
SECRETARIO



970
1078

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA
Magistrada sustanciadora: MARIBEL MENDOZA JIMÉNEZ

Santa Marta, veintidós (22) de enero dos mil diecinueve (2019).

RADICACIÓN: 47-001-2333-000-2014-00241-00
DEMANDANTE: UNIÓN TEMPORAL OBRAS ESPECIALES DE
SANTA MARTA – OBRESAN
DEMANDADO: MINISTERIO DE JUSTICIA – UNIVERSIDAD DEL
MAGDALENA – CENTRO DE CONCILIACIÓN Y
ARBITRAJE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE
SANTA MARTA
MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Revisada la presente actuación procesal, observa el Despacho que en audiencia inicial celebrada el 7 de marzo de 2017 se ordenó vincular como litisconsorte necesario al señor MIGUEL ANGOL POLO CAMPO, razón por la cual se dispuso notificar al extremo demandado de conformidad a lo establecido en el artículo 200 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, así mismo, advierte el Despacho que no ha sido posible la notificación personal a la parte demandada al señor MIGUEL ANGOL POLO CAMPO del auto admisorio dentro del presente proceso.

Igualmente, se observa que de conformidad con lo establecido en el artículo 108 del C.G.P., se ordenó el emplazamiento del señor MIGUEL ANGOL POLO CAMPO el cual se surtió en el diario EL TIEMPO y EL HERALDO el día 28 de octubre de 2018 siendo remitida la información contenida al Registro Único de Personas Emplazadas sin que a la fecha se haya designado apoderado, ni se ha contestado la demanda, por parte de los demandados.

Teniendo en cuenta lo anterior y para efectos de garantizar el debido proceso del demandado y el ejercicio de las facultades contradicción y defensa en el presente proceso, encuentra el Despacho necesario que se nombre Curador Ad Litem al demandado, el cual se designará de la lista de auxiliares de la justicia.

Por lo anterior y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 55 del C.G.P., se procederá a designar CURADOR AD LITEM para que represente y defienda los intereses del señor MIGUEL ANGOL POLO CAMPO, en el estado actual en que se encuentra el proceso.

En aplicación a lo preceptuado en el numeral 7º del artículo 48 Código General del Proceso, **DESÍGNESE** CURADOR AD LITEM del extremo demandado, al siguiente Auxiliar de la Justicia:

RADICACIÓN: 47-001-2333-000-2014-00241-00
DEMANDANTE: UNIÓN TEMPORAL OBRAS ESPECIALES DE
SANTA MARTA - OBRESAN
DEMANDADO: MINISTERIO DE JUSTICIA - UNIVERSIDAD DEL
MAGDALENA - CENTRO DE CONCILIACIÓN Y
ARBITRAJE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE
SANTA MARTA
MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

EFRAÍN EMILIO LABARCES JIMENEZ

Cedula de ciudadanía: 12528410

Correo electrónico: efralab46@gmail.com

Dirección: carrera 5 No. 8 A -03

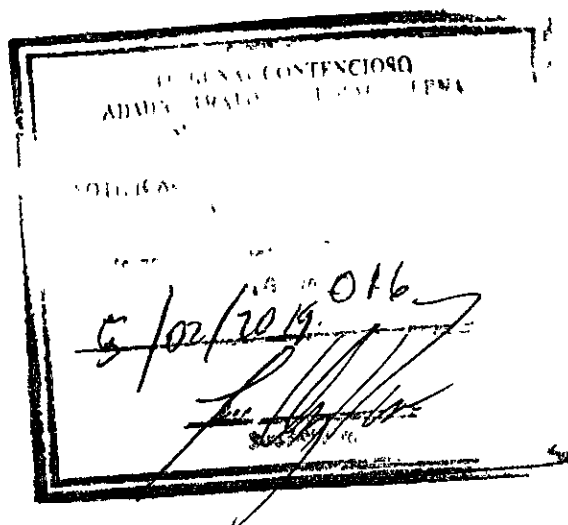
Teléfono: 3114249098

Se advierte al Doctor, que deberá concurrir a asumir el cargo en forma inmediata una vez notificado de la presente designación, so pena de las sanciones disciplinarias a que hubiere lugar, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 7º del artículo 48 del C.G.P.

En garantía del derecho al debido proceso, el curador ad litem designado dispondrá de las facultados que dispone el artículo 56 del C.G.P. y asumirá el proceso en el estado en que se encuentra.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


MARIBEL MENDOZA JIMÉNEZ
Magistrada



1029
2171

Tribunal 03 Administrativo - Magdalena - Santa Marta -Notif

De: Tribunal 03 Administrativo - Magdalena - Santa Marta -Notif
Enviado el: jueves, 7 de febrero de 2019 10:29 a. m.
Para: 'miguelpolocampo@gmail.com'; 'jpolofigueroa@gmail.com'; 'alejocorman@gmail.com'; 'camarasm@ccsm.org.co'; 'mvivesnoguera@hotmail.com'; 'claudiakatime@yahoo.com'; 'ana.ussa@acegroup.com'; 'dianaboveamendinueta@hotmail.com'; 'gherrera@gha.com.co'; 'notificacionjudicial@unimagdalena.edu.co'; 'presidencia@ccsm.org.co'; 'secretariajuridica@ccsm.org.co'; 'notificacionesjudiciales@minjusticia.gov.co'; 'procuraduria43@gmail.com'; 'procuraduria155@gmail.com'; 'marianorumbo@gmail.com'
Asunto: NOTIFICACION EXP. 2014-00241
Datos adjuntos: N Y R 2014-00241 UNION TEMPORAL - OBRESAN - PROVIDENCIA -.pdf
Importancia: Alta

EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR ESTE DESPACHO LE NOTIFICO A TRAVES DE ESTE MENSAJE DE DATOS LA PROVIDENCIA DE 22 DE ENERO DE 2019 PUBLICADA EN ESTADO 016 DE 05 DE FEBRERO DE 2019 MEDIANTE LA CUAL SE NOMBRA UN CURADOR AD LITEM.

MIGUEL ANGEL PAEZ TOVAR
CITADOR

mapt

1086 232

Tribunal 03 Administrativo - Magdalena - Santa Marta -Notif

De: Microsoft Outlook
Para: gherrera@gha.com.co
Enviado el: jueves, 7 de febrero de 2019 10:29 a. m.
Asunto: Retransmitido: NOTIFICACION EXP. 2014-00241

Se completó la entrega a estos destinatarios o grupos, pero el servidor de destino no envió información de notificación de entrega:

gherrera@gha.com.co (gherrera@gha.com.co)

Asunto: NOTIFICACION EXP. 2014-00241

Tribunal 03 Administrativo - Magdalena - Santa Marta -Notif

1081 973

De: Microsoft Outlook
Para: camarasm@ccsm.org.co; presidencia@ccsm.org.co; secretariajuridica@ccsm.org.co
Enviado el: jueves, 7 de febrero de 2019 10:29 a. m.
Asunto: Retransmitido: NOTIFICACION EXP. 2014-00241

Se completó la entrega a estos destinatarios o grupos, pero el servidor de destino no envió información de notificación de entrega:

camarasm@ccsm.org.co (camarasm@ccsm.org.co)

presidencia@ccsm.org.co (presidencia@ccsm.org.co)

secretariajuridica@ccsm.org.co (secretariajuridica@ccsm.org.co)

Asunto: NOTIFICACION EXP. 2014-00241

Tribunal 03 Administrativo - Magdalena - Santa Marta -Notif

1082 a74

De: Microsoft Outlook
Para: ana.ussa@acegroup.com
Enviado el: jueves, 7 de febrero de 2019 10:29 a. m.
Asunto: Retransmitido: NOTIFICACION EXP. 2014-00241

Se completó la entrega a estos destinatarios o grupos, pero el servidor de destino no envió información de notificación de entrega:

ana.ussa@acegroup.com (ana.ussa@acegroup.com)

Asunto: NOTIFICACION EXP. 2014-00241

Tribunal 03 Administrativo - Magdalena - Santa Marta -Notif

1083 975

De: Microsoft Outlook
Para: jpolofigueroa@gmail.com
Enviado el: jueves, 7 de febrero de 2019 10:29 a. m.
Asunto: Retransmitido: NOTIFICACION EXP. 2014-00241

Se completó la entrega a estos destinatarios o grupos, pero el servidor de destino no envió información de notificación de entrega:

jpolofigueroa@gmail.com (jpolofigueroa@gmail.com)

Asunto: NOTIFICACION EXP. 2014-00241

De: Microsoft Outlook
Para: notificaciones.judiciales@minjusticia.gov.co
Enviado el: jueves, 7 de febrero de 2019 10:29 a. m.
Asunto: Retransmitido: NOTIFICACION EXP. 2014-00241

Se completó la entrega a estos destinatarios o grupos, pero el servidor de destino no envió información de notificación de entrega:

notificaciones.judiciales@minjusticia.gov.co (notificaciones.judiciales@minjusticia.gov.co)

Asunto: NOTIFICACION EXP. 2014-00241

De: Microsoft Outlook
Para: claudiakatime@yahoo.com
Enviado el: jueves, 7 de febrero de 2019 10:29 a. m.
Asunto: Retransmitido: NOTIFICACION EXP. 2014-00241

Se completó la entrega a estos destinatarios o grupos, pero el servidor de destino no envió información de notificación de entrega:

claudiakatime@yahoo.com (claudiakatime@yahoo.com)

Asunto: NOTIFICACION EXP. 2014-00241

1086 938

Tribunal 03 Administrativo - Magdalena - Santa Marta -Notif

De: Microsoft Outlook
Para: miguelpolocampo@gmail.com; alejocorman@gmail.com; procuraduria43@gmail.com; procuraduria155@gmail.com; marianorumbo@gmail.com
Enviado el: jueves, 7 de febrero de 2019 10:29 a. m.
Asunto: Retransmitido: NOTIFICACION EXP. 2014-00241

Se completó la entrega a estos destinatarios o grupos, pero el servidor de destino no envió información de notificación de entrega:

miguelpolocampo@gmail.com (miguelpolocampo@gmail.com)

alejocorman@gmail.com (alejocorman@gmail.com)

procuraduria43@gmail.com (procuraduria43@gmail.com)

procuraduria155@gmail.com (procuraduria155@gmail.com)

marianorumbo@gmail.com (marianorumbo@gmail.com)

● Asunto: NOTIFICACION EXP. 2014-00241

De: postmaster@outlook.com
Para: mvivesnoguera@hotmail.com
Enviado el: jueves, 7 de febrero de 2019 10:29 a. m.
Asunto: Entregado: NOTIFICACION EXP. 2014-00241

El mensaje se entregó a los siguientes destinatarios:

mvivesnoguera@hotmail.com (mvivesnoguera@hotmail.com)

Asunto: NOTIFICACION EXP. 2014-00241

1088 0180

De: postmaster@outlook.com
Para: dianaboveamendinueta@hotmail.com
Enviado el: jueves, 7 de febrero de 2019 10:29 a. m.
Asunto: Entregado: NOTIFICACION EXP. 2014-00241

El mensaje se entregó a los siguientes destinatarios:

dianaboveamendinueta@hotmail.com (dianaboveamendinueta@hotmail.com)

Asunto: NOTIFICACION EXP. 2014-00241

Tribunal 03 Administrativo - Magdalena - Santa Marta -Notif

De: postmaster@Universidadmag.onmicrosoft.com
Para: notificacionjudicial@unimagdalena.edu.co
Enviado el: jueves, 7 de febrero de 2019 10:29 a. m.
Asunto: Entregado: NOTIFICACION EXP. 2014-00241

El mensaje se entregó a los siguientes destinatarios:

notificacionjudicial@unimagdalena.edu.co (notificacionjudicial@unimagdalena.edu.co)

Asunto: NOTIFICACION EXP. 2014-00241

Tribunal 03 Administrativo - Magdalena - Santa Marta -Notif

1000

De: Notificaciones Judiciales <notificacionjudicial@unimagdalena.edu.co>
Enviado el: jueves, 7 de febrero de 2019 10:30 a. m.
Para: Tribunal 03 Administrativo - Magdalena - Santa Marta -Notif
Asunto: Leído: NOTIFICACION EXP. 2014-00241
Datos adjuntos: Leído: NOTIFICACION EXP. 2014-00241

Importancia: Alta

AVISO LEGAL: Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no representan la opinión oficial de la UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA- o de su administración. El receptor deberá verificar posibles virus informáticos que tenga el correo o cualquier anexo a él, razón por la cual UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA no aceptará responsabilidad alguna por daños causados por cualquier virus transmitido en este correo. La información contenida en este mensaje y en los archivos electrónicos adjuntos es confidencial y reservada, conforme a lo previsto en la Constitución y en la Ley Colombiana, y está dirigida exclusivamente a su destinatario, sin la intención de que sea revelada o divulgada a otras personas. El acceso al contenido de esta comunicación por cualquier otra persona diferente al destinatario no está autorizado por UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA y está sancionado de acuerdo con las normas legales aplicables. El que ilícitamente sustraiga, oculte, extravíe, destruya, intercepte, controle o impida esta comunicación, antes de que llegue a su destinatario, estará sujeto a las sanciones penales correspondientes. Igualmente, incurrirá en sanciones penales el que, en provecho propio o ajeno o con perjuicio de otro, divulgue o emplee la información contenida en esta comunicación. En particular, los servidores públicos que reciban este mensaje están obligados a asegurar y mantener la confidencialidad de la información en él contenida y, en general, a cumplir con los deberes de custodia, cuidado, manejo y demás previstos en el régimen disciplinario. Si por error recibe este mensaje, le solicitamos enviarlo de vuelta al remitente y borrarlo de sus archivos electrónicos o destruirlo.



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA
SECRETARÍA GENERAL

Santa Marta, dieciocho (18) de febrero de dos mil nueve (2019).

SEÑOR
EFRAÍN EMILIO LABARCES JIMENEZ
Correo electrónico: efralab46@gmail.com
Dirección: Carrera 5 No. 8 A - 03.
Teléfono: 3114249098.

Oficio No. 137-D03

Asunto: DESIGNACIÓN

Rad. 47-001-2333-000-2014-00241-00 **Accionante:** UNIÓN TEMPORAL OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA (OBRESAN) **Accionado:** MINISTERIO DE JUSTICIA- UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA- CENTRO DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA **Acción:** NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO **M.P.** MARIBEL MENDOZA JIMÉNEZ.

Cordial Saludo.

Por medio de la presente misiva me permito poner en su conocimiento que esta Corporación, mediante providencia del veintidós (22) de enero de dos mil diecinueve (2019), proferida dentro del asunto de la referencia dispuso:

*"En aplicación a lo preceptuado en el numeral 7º del artículo 48 Código General del Proceso, **DESÍGNESE** CURADOR AD LITEM del extremo demandado, al siguiente Auxiliar de la Justicia:*

EFRAÍN EMILIO LABARCES JIMENEZ
Cédula de Ciudadanía: 12528410
Correo electrónico: efralab46@gmail.com
Dirección: Carrera 5 No.8º-03
Teléfono: 3114249098

Se advierte al Doctor, que deberá concurrir a asumir el cargo en forma inmediata una vez notificado de la presente designación, so pena de las sanciones disciplinarias a que hubiere lugar, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 7º del artículo 48 del C.G.P.

En garantía del derecho al debido proceso, el curador ad litem designado dispondrá de las facultados que dispone el artículo 56 del C.G.P. y asumirá el proceso en el estado en que se encuentra."

En tal virtud, se le requiere a efectos de que comparezca a la Secretaría de esta Corporación para tomar posesión de dicho cargo o que, en caso de encontrarse impedido para ejercer el mismo, lo manifieste oportunamente.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,


MABELIS CLAUDETT RODRIGUEZ LOBO
ESCRIBIENTE

Tribunal 03 Administrativo Magdalena - Santa Marta

1092 984

De: Tribunal 03 Administrativo Magdalena - Santa Marta
Enviado el: lunes, 18 de febrero de 2019 3:10 p. m.
Para: 'efralab46@gmail.com'
Asunto: Designación Curador Ad Litem (2014-00241)
Datos adjuntos: Oficio No. 137-D03 (Efrain Emilio Labarces).pdf

Cordial saludo,

*Por medio de la presente misiva me permito remitir el Oficio No. 137-D03 del dieciocho (18) de febrero de dos mil dieciocho (2018), por medio del cual se le designa como **CURADOR AD LITEM**, con ocasión del medio de control de **NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO** adelantado por la **UNIÓN TEMPORAL OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA (OBRESAN)** contra el **MINISTERIO DE JUSTICIA Y OTROS**, radicada bajo el número **47-001-2333-000-2014-00241**.*

Lo anterior, para los fines pertinentes.

Atentamente,

Mabelis Claudett Rodriguez Lobo
Escribiente Despacho 003
Tribunal Administrativo del Magdalena.

De: Microsoft Outlook
Para: efralab46@gmail.com
Enviado el: lunes, 18 de febrero de 2019 3:10 p. m.
Asunto: Retransmitido: Designación Curador Ad Litem (2014-00241)

Se completó la entrega a estos destinatarios o grupos, pero el servidor de destino no envió información de notificación de entrega:

efralab46@gmail.com (efralab46@gmail.com)

Asunto: Designación Curador Ad Litem (2014-00241)



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA
SECRETARÍA GENERAL

Santa Marta, diecinueve (19) de marzo de dos mil diecinueve (2019).

SEÑOR

EFRAÍN EMILIO LABARCES JIMENEZ

Correo electrónico: efralab46@gmail.com

Dirección: Carrera 5 No. 8ª-03

Oficio No. 285-D03

Asunto: SEGUNDO REQUERIMIENTO.

Rad. 47-001-2333-000-2014-00241-00 Accionante: UNIÓN TEMPORAL OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA (OBRESAN). Accionado: MUNISTERIO DE JUSTCIA- UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA- CENTRO DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA Acción: REPARACIÓN DIRECTA. M.P. MARIBEL MENDOZA JIMÉNEZ.

Cordial saludo,

Por medio de la presente misiva me permito poner en su conocimiento que esta Corporación mediante oficio N° 137-D03 del 18 de febrero de 2019 se dispuso lo siguiente dentro del asunto de la referencia:

"Mediante Providencia del veintidós (22) de enero de dos mil diecinueve (2019) se dispuso:

En aplicación a lo preceptuado en el numeral 7° del artículo 48 Código General del Proceso, DESIGNAR CURADOR AD LITEM del extremo demandado, al siguiente Auxiliar de la Justicia:

EFRAÍN EMILIO LABARCES JIMENEZ

Cédula de Ciudadanía: 12528410

Correo electrónico: efralab46@gmail.com

Dirección: Carrera 5 No. 8ª-03


Teléfono: 3114249098

Se advierte al Doctor, que deberá concurrir a asumir el cargo en forma inmediata una vez notificado de la presente designación, so pena de las sanciones disciplinarias a que hubiere lugar, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 7° del artículo 48 del C.G.P.

En garantía del derecho al debido proceso, el curador ad litem designado dispondrá de las facultados que dispone el artículo 56 del C.G.P. y asumirá el proceso en el estado en que se encuentra."

No obstante lo anterior se advierte que hasta la fecha no ha comparecido a la Secretaría de esta Corporación, por lo cual se le requiere por **SEGUNDA VEZ** a efectos de que comparezca a tomar posesión al cargo de Curador ad litem que le fue asignado dentro de los diez (10) días siguientes a la recepción del presente oficio.

Atentamente,


LAURA EDITH MENA MONTERO
ESCRIBIENTE

Tribunal 03 Administrativo - Magdalena - Santa Marta

De: Tribunal 03 Administrativo - Magdalena - Santa Marta
Enviado el: martes, 19 de marzo de 2019 3:24 p. m.
Para: 'efralab46@gmail.com'
Asunto: Segundo requerimiento (2014-00241)
Datos adjuntos: OFICIO 285- 1.pdf

Cordial saludo,

*Por medio de la presente misiva me permito remitir el Oficio No. 285-D03 del diecinueve (19) de marzo de dos mil diecinueve (2019), por medio del cual se le efectúa un **SEGUNDO REQUERIMIENTO** a fin de que se posesiones en el cargo de **CURADOR AD LITEM**, con ocasión del medio de control de **NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO** adelantado por la **UNIÓN TEMPORAL OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA (OBRESAN)** contra el **MINISTERIO DE JUSTICIA Y OTROS**, radicada bajo el número **47-001-2333-000-2014-00241-00***

Lo anterior, para los fines pertinentes.

Atentamente,

LAURA EDITH MENA MONTERO
Escribiente Despacho 003
Tribunal Administrativo del Magdalena.

Tribunal 03 Administrativo - Magdalena - Santa Marta

1096

De: Microsoft Outlook
Para: efralab46@gmail.com
Enviado el: martes, 19 de marzo de 2019 3:23 p. m.
Asunto: Retransmitido: Segundo requerimiento (2014-00241)

Se completó la entrega a estos destinatarios o grupos, pero el servidor de destino no envió información de notificación de entrega:

efralab46@gmail.com (efralab46@gmail.com)

Asunto: Segundo requerimiento (2014-00241)



Segundo
requerimiento (...)

109 989

EFRAIN EMILIO LABARCÉS JIMENEZ

Abogado titulado
Cra. 5 No. 8A-03 Tel. 4200232 – Cel. 3114249098-3204540675
Santa Marta - Colombia

Señores

**MAGISTRADOS DEL HONORABLE TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL
MAGDALENA.**

E. S. D.

REF. ACCIONANTE: OBRESAN

ACCIONADA: MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

RAD. 17-001-2333-000-2014-00241

ASUNTO: NO ACEPTACION DE NOMBRAMIENTO COMO CURADOR

67059

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA	
FECHA:	19 JUN 2019
HORA:	10:56 am
FOLIOS:	2 f.
FIRMA:	Isabel Londoño

EFRAIN EMILIO LABARCÉS JIMENEZ, varón mayor de edad, con domicilio y residencia en la Cra. 5 No. 8 A-03 Santa Marta, Abogado con Tarjeta profesional 14430 del C.S. de la J., cedula de ciudadanía No. 12.528.410 de Santa Marta, respetuosamente manifiesto que lamento **NO ACEPTAR** el nombramiento, que de Curador, se me hizo en el proceso referenciado ya que ejerzo como tal en más de seis (6) curadurías, que además de mis asuntos jurídicos particulares me hacen imposible cumplir tal tarea.

Los procesos en los que actúo como Curador ad litem son los siguientes:

1. Proceso de divorcio de JOHANA MARÍA DOMÍNGUEZ SEPÚLVEDA contra JUAN CARLOS RENUÉZ DÍAZ, Juzgado 1º de Familia de Santa Marta. Radicado 469/2017 – contesté el 11 de febrero de 2019.
2. Proceso ejecutivo de DAMARIS PACHECO contra OMAR ORLANDO SITA DÍAZ. Juzgado 2º de pequeñas causas y competencias múltiples de Santa Marta Rad. 00188/2016-contesté 26 de noviembre de 2018.
3. Proceso ordinario laboral de FERNANDO MEDINA RIOS contra CARMEN OLIVA MEDINA. RAD. 2017/491 Juzgado Primero Laboral del Circuito de Santa Marta. Contesté el 12 de abril de 2019.
4. Proceso de divorcio de ZURY MORALES ACOSTA contra ROBERTO CARLOS RATIVA MEDINA. Juzgado 1º de Familia de Santa Marta. Rad. 391/2017.
5. Proceso de disolución y liquidación de Sociedad Conyugal de MERCEDES SAUMETH DE MEDINA y ALFREDO MEDINA ROSADO. Juzgado 3º Oral de Familia de Santa Marta. Rad. 2004/2019. Contesté 31 de enero de 2019.
6. Proceso ejecutivo de CARLOS ANDREA SANCHEZ LOPEZ contra LILIANA DE JESUS DEL CASTILLO OSPINO y JUAN BAUTISTA CONTRERAS BRITO.

1098 990

EFRAIN EMILIO LABARCES JIMENEZ

Abogado titulado

Cra. 5 No. 8A-03 Tel. 4200232 – Cel. 3114249098-3204540675

Santa Marta - Colombia

RAD. 160/2018 Juzgado de Pequeñas Causas y Competencias Múltiples de Santa Marta. Contesté 7 de febrero de 2019.

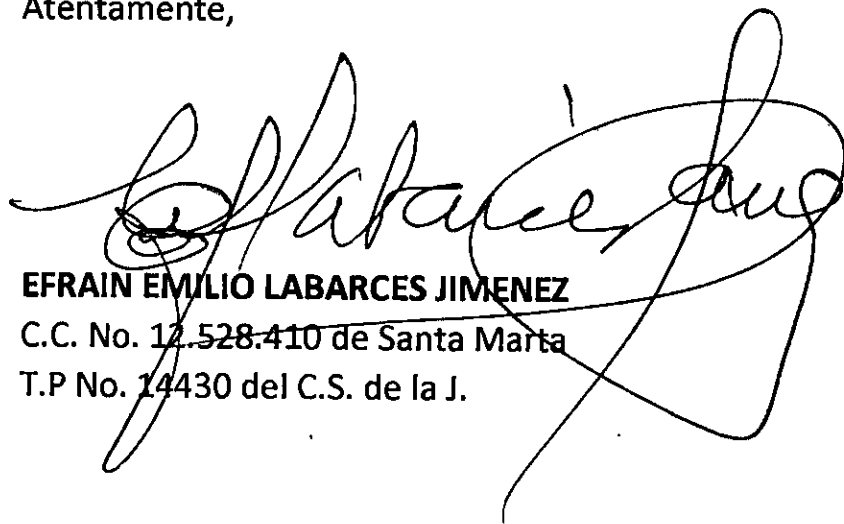
7. Proceso Ejecutivo de EDWIN ARLEY VASQUEZ PACHON contra promotora de ventas CARIBE MALL LTDA en liquidación. Juzgado 2º Civil del Circuito de Santa Marta. Rad. 00022-00/2018. Contesté el 2 de mayo de 2019.
8. Proceso Administrativo de Miguel Ángel Gutiérrez vs nación – ejército nacional Ministerio de Defensa. Rad. 47-001-2333-001-2016-00186-00 Magistrado Ponente Dra. Maribel Mendoza.
9. Proceso Administrativo: nulidad y restablecimiento del derecho –actor NELLY CANALES VS COLPENSIONES. rad. 47-001-3333-0002017-00113-00. Magdalena. ponente: Dra. ADONAI FERRARI.

Usted se servirá verificar si lo considera conveniente la veracidad de lo informado.

NOTIFICACIONES:

Las recibo en la Cra. 5 No. 8A-03, Santa Marta – Colombia, correo electrónico: efralab46@gmail.com

Atentamente,



EFRAIN EMILIO LABARCES JIMENEZ

C.C. No. 12.528.410 de Santa Marta

T.P No. 14430 del C.S. de la J.



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA
SECRETARÍA GENERAL
Ley 1437 de 2011

RADICACIÓN: 47-001-2333-000-2014-00241-00.
DEMANDANTE: UNION TEMPORA OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA (OBRESAN).
DEMANDADO: MINISTERIO DE JUSTICIA – UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA – CENTRO DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA.
MEDIO DE CONTROL: REPARACION DIRECTA.

PASA AL DESPACHO

De la Magistrada Maribel Mendoza Jiménez, hoy veintiocho (28) de junio de dos mil diecinueve (2019), el expediente de la referencia, poniendo de presente que mediante providencia del veintidós (22) de enero de dos mil diecinueve (2019) se designó como curador ad litem del señor MIGUEL ANGEL POLO CAMPO, al Dr. Efraín Emilio Labarcés Jiménez en el proceso de la referencia, el cual fue requerido mediante oficio No. 137-D03 del dieciocho (18) de febrero de dos mil diecinueve (2019) y oficio No. 285-D03 y del diecinueve (19) de marzo de dos mil diecinueve (2019).

No obstante mediante memorial allegado a la Secretaria de esta Corporación el día diecinueve (19) de junio de dos mil diecinueve (2019), el Dr. Efraín Emilio Labarcés Jiménez manifestó la imposibilidad de asumir el cargo de curador ad litem dentro del proceso de la referencia, por encontrarse designado en la misma calidad en otros 9 procesos, encontrándose pendiente en consecuencia, nombrar un nuevo curador ad litem.


Sírvase proveer.

Anexo

Un cuaderno principal con folios 1 a 568

Un segundo cuaderno con folios 569 a 990

7 CDs.


GINA DANIELA AMARIS OLIVEROS
OFICIAL MAYOR



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA

SECRETARÍA GENERAL

Ley 1437 de 2011

RADICACIÓN: 47-001-2333-000-2014-00241-00.
DEMANDANTE: OBRESAN
DEMANDADO: NACIÓN – MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL
DERECHO – OTROS.
MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA.

PASA AL DESPACHO

De la Magistrada Maribel Mendoza Jiménez, hoy cuatro (04) de julio de dos mil diecinueve (2019), informándole que el día dos (02) de julio de dos mil diecinueve (2019), el apoderado judicial de la parte demandante allegó al correo electrónico de esta Corporación, memorial mediante el cual solicita se releve al Curador Ad Litem, Dr. Efraín Emilio Labarces Jiménez, quien mediante escrito de veinte (20) de junio de dos mil diecinueve (2019) manifestó la imposibilidad de aceptar la designación de dicho cargo; encontrándose pendiente, en consecuencia, pronunciarse en torno a tal solicitud.

Sírvase proveer.

Anexo

Un memorial con 2 folios.


JAIME ORTIZ ROMERO
SECRETARIO

993

1101

Tribunal 03 Administrativo - Magdalena - Santa Marta

De: Alexis Pedroza <alexispedroza18@gmail.com>
Enviado el: martes, 02 de julio de 2019 9:54 a. m.
Para: Tribunal 03 Administrativo - Magdalena - Santa Marta
CC: alejocorman@gmail.com
Asunto: SOLICITUD DESIGNACION DE NUEVO CURADOR - REP DIRECTA RAD 2014-00241
Datos adjuntos: REITERACION CURADOR - REP DIRECTA STA MARTA RAD 241-2014.pdf

parte

Cordial saludo.

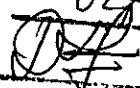
De conformidad con las directrices impartidas por el Dr. Luis Alejandro Corzo Mantilla, quien ostenta la calidad de apoderado judicial de la parte demandante, me permito allegar escrito por medio del cual se solicita se releve al curador Ad Litem designado en virtud de lo manifestado mediante escrito del 20 de junio del 2019, y en consecuencia se proceda a designar un nuevo curador ad-litem.

Adjunto lo enunciado.

--
ALEXIS PEDROZA NORIEGA
ABOGADO
Celular 3015846693

"Yo no hablo de venganzas ni perdones, el olvido es la única venganza y el único perdón". J.L. Borges

67 362

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA	
FECHA:	02 JUL 2019
HORA:	11:50
FOLIOS:	024
FIRMA:	

1002 994

Señores

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA

Att. Dra. Maribel Mendoza Jiménez

Magistrado Ponente

E. S. D.

Medio de Control	Reparación Directa
Radicado	47-001-2333-003-2014-00241-00
Demandante	German Villanueva Calderón y Otros - obresan
Demandado	Nación - Ministerio de Justicia y del Derecho y Otros
Referencia	DESIGNACION DE NUEVO CURADOR AD-LITEM

Luis Alejandro Corzo Mantilla, mayor de edad y vecino de esta ciudad, identificado con CC N° 88.213.988 de Cúcuta, abogado en ejercicio, portador de la Tarjeta Profesional N° 101.576 del C. S. de la J., actuando en calidad de apoderado judicial de los Demandantes, conforme al poder otorgado, me dirijo a su Honorable Despacho con el objeto de atender la carga procesal que me asiste.

Mediante providencia del 22 de enero del 2019, se dispuso: "Designar CURADOR AD LITEM, para que represente y defienda los intereses del señor MIGUEL ANGEL POLO CAMPO, en el estado actual en el que se encuentra el proceso. En aplicación a lo preceptuado en el numeral 7° del artículo 48 del Código General del proceso, DESIGNESE CURADOR AD LITEM del extremo demandado, al Sr. Efraín Emilio Labarces Jiménez. Se advierte al Doctor, que deberá concurrir a asumir el cargo en forma inmediata, una vez notificado de la presente designación, so pena de las sanciones disciplinarias a que hubiere lugar.....".

Toda vez que mediante escrito de fecha 20 de junio de los corrientes el Dr. Efraín Emilio Labarces Jiménez ha manifestado la imposibilidad de aceptar la designación del cargo, es procedente solicitar a su despacho se releve del Cargo al mismo, y se proceda a designar un nuevo curador.

Lo anterior, de conformidad con los principios de la economía y celeridad procesal, establecidos en nuestro Ordenamiento Jurídico.

Agradezco su vocación de servicio en la administración de justicia

Atentamente.


LUIS ALEJANDRO CORZO MANTILLA
CC 88.213.988 De Cúcuta
T.P 101.576 C. S. De la J.



995
1102

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA
Magistrada sustanciadora: MARIBEL MENDOZA JIMÉNEZ
Santa Marta, seis (06) de agosto dos mil diecinueve (2019)

RADICACIÓN: 47-001-2333-003-2014-00241-00
DEMANDANTE: UNION TEMPORAL DE OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA – OBRESAN.
DEMANDADO: NACION – MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO, CAMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA – CENTRO DE ARBITRAJE, CONCILIACION Y OTROS.
MEDIO DE CONTROL: REPARACION DIRECTA

Una vez analizada la actuación, procede el Despacho a nombrar Curador Ad-litem en representación del señor MIGUEL ANGEL POLO CAMPO, toda vez que el doctor EFRAÍN EMILIO LABARCES JIMENEZ, fue designado como Defensor de Oficio a través de auto del 22 de enero de 2019, sin que hasta la fecha haya tomado posesión del cargo, sin embargo, atendiendo la constancia secretarial obrante a folio 991, se advierte que el abogado LABARCES JIMENEZ MEDIANTE escrito del 19 de junio de 2019 manifestó que no aceptaría la designación del cargo por cuanto ejerce nueve (9) curadurías en distintos despachos judiciales.

En ese sentido, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 7¹ del artículo 48 del Código General del Proceso y en inciso final de artículo 49 ibídem, se procederá a relevar al Defensor antes designado, a fin de continuar con el trámite del proceso de la referencia; y se nombrará como Curador Ad Litem para que represente los intereses del señor MIGUEL ANGEL POLO CAMPO en calidad de demandado dentro del asunto de la referencia al Doctor JUAN PABLO BAENA VASQUEZ, quien ejerce habitualmente la profesión ante este Tribunal.

Al citado Defensor se le comunicará de esta decisión a la siguiente dirección, a fin de que comparezca ante la Secretaría de esta Corporación dentro de los cinco (5) días siguientes contados a partir de la notificación de este proveído, para tomar posesión del cargo asignado, so pena de incurrir en las sanciones de ley.

JUAN PABLO BAENA VASQUEZ

Cedula de ciudadanía: 1.032.369.977

Correo electrónico: jbaena@gmail.com – rosemberr@yahoo.es

Dirección: Calle 24 N° 3-95 Oficina 901 Edificio Banco de Bogotá – Santa Marta

Teléfono: 3163342840

En virtud de lo expuesto, este Despacho.

¹ "Artículo 48. Designación. Para la designación de los auxiliares de la justicia se observarán las siguientes reglas: (...) 7.- La designación del curador ad litem recaerá en un abogado que ejerza habitualmente la profesión, quien desempeñará el cargo en forma gratuita¹ como defensor de oficio. El nombramiento es de forzosa aceptación, salvo que el designado acredite estar actuando en más de cinco (5) procesos como defensor de oficio. En consecuencia, el designado deberá concurrir inmediatamente a asumir el cargo, so pena de las sanciones disciplinarias a que hubiere lugar, para lo cual se compulsarán copias a la autoridad competente" (Resaltado del Despacho)

RADICACIÓN: 47-001-2333-000-2014-00241-00
DEMANDANTE: UNION TEMPORAL DE OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA – OBRESAN
DEMANDADO: NACION – MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO, CAMARA DE COMERCIO DE
SANTA MARTA – CENTRO DE ARBITRAJE, CONCILIACION Y OTROS
MEDIO DE CONTROL: ACCIÓN DE REPARACION DIRECTA

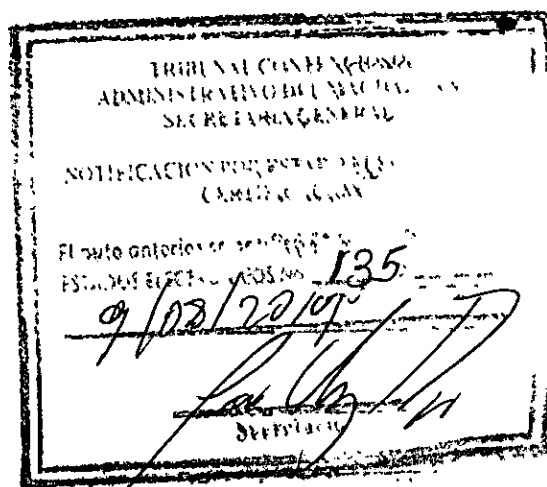
2

RESUELVE:

- 1.- Por Secretaría, **comuníquesele** del nombramiento como defensor del oficio del señor MIGUEL ANGEL POLO CAMPO, en su calidad de demandado en el proceso de la referencia, al Dr. JUAN PABLO BAENA VASQUEZ, conforme lo dispone el artículo 49 del C.G.P.
- 2.- **Adviértase** al nombrado que de conformidad con lo prescrito en el artículo 49, inciso 2º del C.G.P., el cargo de auxiliar de la justicia es de obligatoria aceptación. Siempre que el designado no acepte el cargo dentro de los cinco (5) días siguientes a la comunicación de su nombramiento, se excuse de prestar el servicio, no concurra a la diligencia, no cumpla con el encargo en el término otorgado, o incurra en causal de exclusión de lista, será relevado inmediatamente; so pena de incurrir en las sanciones de ley.
- 3.- Por secretaría, **Líbrese** los oficios correspondientes, comunicando lo dispuesto en esta providencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


MARIBEL MENDOZA JIMÉNEZ
Magistrada



EXCHANGELABS/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECI

Recebido el: Tribunal Administrativo 02 - NO REGISTRA
miércoles, 14 de agosto de 2019 4:36 p. m.
notificacionjudicial@unimagdalena.edu.co; dianaboveamendinueta@hotmail.com;
mvivesnoguera@hotmail.com; miguelpolocampo@gmail.com;
alejpcorman@gmail.com; procuraduria43@gmail.com; 'PROCURADURÍA155 JUDICIAL
II'; marianorumbo@gmail.com; claudiakatime@yahoo.com;
notificaciones.judiciales@minjusticia.gov.co; jpolofigueroa@gmail.com;
ana.ussa@acegroup.com; camarasm@ccsm.org.co; secretariajuridica@ccsm.org.co;
gherrera@gha.com.co
notificacion expediente 2014-00241-00
47001233300020140024100_ACT_FIJACION ESTADO_08-08-2019 5.59.26 p. m..pdf

Destinatario	Entrega
notificacionjudicial@unimagdalena.edu.co	
dianaboveamendinueta@hotmail.com	
mvivesnoguera@hotmail.com	Error: 14/08/2019 4:37 p. m.
miguelpolocampo@gmail.com	
alejpcorman@gmail.com	
procuraduria43@gmail.com	
'PROCURADURÍA155 JUDICIAL II'	
marianorumbo@gmail.com	
claudiakatime@yahoo.com	
notificaciones.judiciales@minjusticia.gov.co	
jpolofigueroa@gmail.com	
ana.ussa@acegroup.com	
camarasm@ccsm.org.co	
secretariajuridica@ccsm.org.co	
gherrera@gha.com.co	

Señores
Operarios judiciales de las partes
S. M.

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 201 inciso 3° del C.P.A.C.A. por medio del presente mensaje de datos **COMUNICO** a usted (ES) que dentro del medio de control ACCION: REPARACION DIRECTA formulado por UNION TEMPORAL DE OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA- OBRESAN VS NACION- MIN DE JUSTICIA Y DEL DERECHO, CAMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA- CENTRO DE ARBITRAJ, CONCILIACION Y TROS. identificado con el N° de Rad 001-2333-000-2014-00241-00 se profirió providencia de fecha 06/08/2019 por medio de la cual se nombra CURADOR AD-LITEM notificado por estado electrónico N° 0135 de 09/08/2019. Para tal efecto puede consultar el estado electrónico en la página web y el estado en el siguiente link: <https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/justicia21/administracion/Descargas/frmArchivosEstados>

Atentamente,
MIGUEL ANGEL PAEZ TOVAR
NOTIFICADOR

1015 497

VISO IMPORTANTE: Esta dirección de correo electrónico
advo02mag@notificacionesrj.gov.co es de uso único y exclusivo de envío de notificaciones, todo
mensaje que se reciba no será leído y automáticamente se eliminara de nuestros servidores.
Interesado usuario si tiene alguna solicitud por favor comuníquese a la siguiente línea telefónica:
21 8901 o envíenos un correo electrónico a la siguiente dirección:
advo02mag@cendoj.ramajudicial.gov.co

1100 998

Se completó la entrega a estos destinatarios o grupos, pero el servidor de destino no envió información de notificación de entrega:

notificaciones.judiciales@minjusticia.gov.co (notificaciones.judiciales@minjusticia.gov.co)

Asunto: notificacion expediente 2014-00241-00

Se completó la entrega a estos destinatarios o grupos, pero el servidor de destino no envió información de notificación de entrega:

ana.ussa@acegroup.com (ana.ussa@acegroup.com)

Asunto: notificacion expediente 2014-00241-00

Se completó la entrega a estos destinatarios o grupos, pero el servidor de destino no envió información de notificación de entrega:

jpolofigueroa@gmail.com (jpolofigueroa@gmail.com)

Asunto: notificacion expediente 2014-00241-00

Se completó la entrega a estos destinatarios o grupos, pero el servidor de destino no envió información de notificación de entrega:

camarasm@ccsm.org.co (camarasm@ccsm.org.co)

Asunto: notificacion expediente 2014-00241-00

Se completó la entrega a estos destinatarios o grupos, pero el servidor de destino no envió información de notificación de entrega:

claudiakatime@yahoo.com (claudiakatime@yahoo.com)

Asunto: notificacion expediente 2014-00241-00

Se completó la entrega a estos destinatarios o grupos, pero el servidor de destino no envió información de notificación de entrega:

miguelpolocampo@gmail.com (miguelpolocampo@gmail.com)

procuraduria43@gmail.com (procuraduria43@gmail.com)

PROCURADURÍA155 JUDICIAL II' (prpcuraduria155@gmail.com)

marianorumbo@gmail.com (marianorumbo@gmail.com)

Asunto: notificacion expediente 2014-00241-00

1102 998

Se completó la entrega a estos destinatarios o grupos, pero el servidor de destino no envió información de notificación de entrega:

gherrera@gha.com.co (gherrera@gha.com.co)
Asunto: notificacion expediente 2014-00241-00

El mensaje se entregó a los siguientes destinatarios:

dianaboveamendinueta@hotmail.com, (dianaboveamendinueta@hotmail.com)

Asunto: notificacion expediente 2014-00241-00

El mensaje se entregó a los siguientes destinatarios:

notificacionjudicial@unimagdalena.edu.co (notificacionjudicial@unimagdalena.edu.co)

Asunto: notificación expediente 2014-00241-00



**TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA
SECRETARÍA GENERAL**

Santa Marta, veintiuno (21) de agosto de dos mil diecinueve (2019).

Doctor.

JUAN PABLO BAENA VASQUEZ.

C.C. 1032.369.977.

Correo Electrónico: jbaena@gmail.com - rosemberr@yahoo.es

Dirección: Calle 21 N° 3-95 Oficina 901 Edificio Banco de Bogotá – Santa Marta

Teléfono: 3163344284

Oficio No. 1087-D03

Asunto: NOMBRAMIENTO COMO CURADOR AD LITEM

Rad. 47-001-2333-000-2014-00421-00 Accionante: UNION TEMPORAL DE OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA - OBRESAN **Accionado:** NACION – MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO – CAMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA – CENTRO DE ARBITRAJE **Acción:** REPARACION DIRECTA **M.P. MARIBEL MENDOZA JIMÉNEZ.**

Cordial Saludo.

Por medio de la presente misiva me permito poner en su conocimiento que esta Corporación bajo la ponencia de la Doctora Maribel Mendoza Jiménez mediante auto del seis (06) de agosto de 2019 dispuso:

“En sentido, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 7 del artículo 48 del Código General del Proceso y en inciso final del artículo 49 del ibídem, se procederá a relevar al Defensor antes designado, a fin de continuar con el trámite del proceso de la referencia; y se nombrará como Curador Ad Litem para que represente los intereses del señor MIGUEL ANGELO POLO CAMPO en calidad de demandado dentro del proceso de la referencia al Doctor JUAN PABLO BAENA VASQUEZ, quien ejerce habitualmente la profesión ante este Tribunal.

Al citado defensor se le comunicara la decisión a la siguiente dirección, a fin de que comparezca ante la Secretaría de esta Corporación dentro de los cinco (05) días siguientes contados a partir de la notificación este proveído, para tomar posesión del cargo asignado, so pena de incurrir en las sanciones de ley.

JUAN PABLO BAENA VASQUEZ.

C.C. 1032.369.977.

Correo Electrónico: jbaena@gmail.com - rosemberr@yahoo.es

Dirección: Calle 21 N° 3-95 Oficina 901 Edificio Banco de Bogotá – Santa Marta

Teléfono: 3163344284”

En tal virtud, se le requiere a efectos de que concurra a la Secretaría de esta Corporación a efectos de que manifieste si se encuentra impedido, para aceptar la designación como Curador Ad Litem dentro del asunto de la referencia.

Atentamente,


**LAURA EDITH MENA MONTERO
ESCRIBIENTE**

1909 7007

Tribunal 03 Administrativo - Magdalena - Santa Marta

De: Tribunal 03 Administrativo - Magdalena - Santa Marta
Enviado el: viernes, 23 de agosto de 2019 9:51 a. m.
Para: 'jbaenav@gmail.com'; 'rosemberrr@yahoo.es'
Asunto: COMUNICACIÓN: NOMBRAMIENTO DE CURADOR AD LITEM
Datos adjuntos: OFICIO N 1087.pdf

Cordial saludo,

*Por medio de la presente misiva me permito remitir el Oficio No. 1087-D03 del veintiuno (21) de agosto de dos mil dieciocho (2018), por medio del cual se le informa la designación como **CURADOR AD LITEM**, con ocasión del medio de control de **NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO** adelantado por la **UNIÓN TEMPORAL OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA (OBRESAN)** contra el **MINISTERIO DE JUSTICIA Y OTROS**, radicada bajo el número **47-001-2333-000-2014-00241**.*

Lo anterior, para los fines pertinentes.

Atentamente,

LAURA EDITH MENA MONTERO

Escribiente Despacho 003

Tribunal Administrativo del Magdalena.

Tribunal 03 Administrativo - Magdalena - Santa Marta

De: Microsoft Outlook
Para: rosemberrr@yahoo.es
Enviado el: viernes, 23 de agosto de 2019 9:51 a. m.
Asunto: Retransmitido: COMUNICACIÓN: NOMBRAMIENTO DE CURADOR AD LITEM

Se completó la entrega a estos destinatarios o grupos, pero el servidor de destino no envió información de notificación de entrega:

rosemberrr@yahoo.es (rosemberrr@yahoo.es)

Asunto: COMUNICACIÓN: NOMBRAMIENTO DE CURADOR AD LITEM



COMUNICACIÓN:
NOMBRAMIENT...

De: Microsoft Outlook
Para: jbaenav@gmail.com
Enviado el: viernes, 23 de agosto de 2019 9:51 a. m.
Asunto: Retransmitido: COMUNICACIÓN: NOMBRAMIENTO DE CURADOR AD LITEM

Se completó la entrega a estos destinatarios o grupos, pero el servidor de destino no envió información de notificación de entrega:

jbaenav@gmail.com (jbaenav@gmail.com)

Asunto: COMUNICACIÓN: NOMBRAMIENTO DE CURADOR AD LITEM



COMUNICACIÓN:
NOMBRAMIENT...

1112

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA

MAGISTRADO SUSTANCIADOR:

DRA. MARIBEL MENDOZA JIMENEZ.

E. S. D.

of. Up.

MEDIO DE CONTROL: REPARACION DIRECTA

RADICADO NO. 47001233300320140024100

ACCIONANTE: UNION TEMPORAL OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA - OBRESAN

ACCIONADO: NACION - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO - CAMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA - CENTRO DE ARBITRAJE, CONCILIACIÓN Y AMIGABLE COMPOSICIÓN - UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA - DIANA BOVEA MENDINUETA, MIGUEL ANGEL POLO CAMPO Y JUAN ALBERTO POLO FIGUEROA.

Asunto: Solicitud de envío de autos al correo electrónico

CRISTIAN MERIÑO SEGRERA, abogado en ejercicio, identificado con la cedula de ciudadanía número 85.154.867 de Santa Marta, portador de la tarjeta profesional número 221.529 del C. S de la J. actuando en calidad de apoderado de la CAMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA dentro del presente asunto, manifiesto:

En calidad de nuevo apoderado, con anterioridad aporté el poder conferido por la Cámara de Comercio junto con un memorial donde deposito mis datos personales. No obstante, los autos proferidos dentro del proceso no me son enviados a mi correo electrónico, razón por la cual ruego que sea tenido en cuenta mi e-mail para tal fin.

E mail: cristianccj@hotmail.com.

Por su atención, gracias.

Atentamente,

CRISTIAN MERIÑO SEGRERA

C.C: 85154867

T.P 221529 C.S. de la J.

80786

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA	
FECHA:	22 AGO 2019
HORA:	5:27
FOLIOS:	2
FIRMA:	B

27 1 24 100 ANUBIA
40044 130
AMC
AFSC
F

1113 1005

REPÚBLICA DE COLOMBIA



RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE MAGDALENA
SECRETARÍA TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA

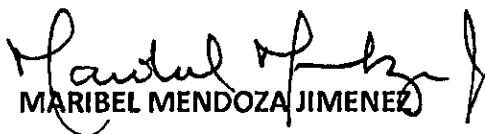
ACTA DE POSESION DE CURADOR AD-LITEM

En Santa Marta D.T.C.H; a los veintinueve (29) días del mes de agosto de dos mil diecinueve (2019); se hizo presente en la Secretaría del Tribunal Administrativo del Magdalena; el Dr. JUAN PABLO BAENA VASQUEZ, identificado con la C.C. No. 1.032.369.977; quien aportó tarjeta profesional de Abogado No.195.341 con el fin de posesionarse como curador ad-litem en el proceso bajo el medio de control de naturaleza REPARACION DIRECTA donde obra como demandante LA firma OBRESAN contra NACION-MINISTERIO DE JUSTICIA Y OTROS. Radicado bajo el No.47-001-2333-000-2014-00241-00. Quien se posesiona como Curador ad-litem del señor MIGUEL ANGEL POLO CAMPO.

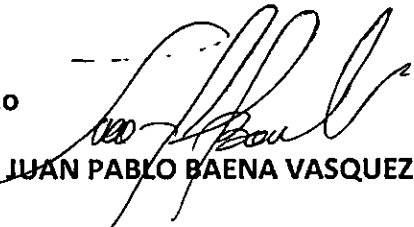
Al señor Curador se le recepciona juramento de rigor; quien promete cumplir bien y fielmente con los deberes que el cargo le impone.

Para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron tal como aparece, así.

La Magistrada ,


MARIBEL MENDOZA JIMENEZ

El señor Curador Posesionado


JUAN PABLO BAENA VASQUEZ

El Secretario


JAIME ORTIZ ROMERO

JUAN PABLO BAENA VÁSQUEZ

ABOGADO

Calle 24 No. 3 – 95, Oficina 901, Edificio Banco de Bogotá, Santa Marta D.T.C.H
Tel. (5) 421 82 90 – Cel. 316 334 28 40
ibaenav@gmail.com

7006

1114

cont dda

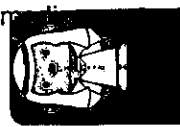
Magistrada

MARIBEL MENDOZA JIMENEZ

Tribunal Administrativo del Magdalena
E.S.D.

Medio de Control: **REPARACIÓN DIRECTA**
Demandante: **UNION TEMPORAL OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA- OBRESAN**
Demandado: **NACIÓN – MINISTERIO DE JUSTICIA Y OTROS**
Asunto: **CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA**
Radicado: **47-001-2333-000-2014-00421-00**

JUAN PABLO BAENA VÁSQUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.032.369.977 de Bogotá y Portador de la Tarjeta Profesional de Abogado No. 195.341 del Consejo Superior de la Judicatura, en calidad de *curador ad litem* del señor **MIGUEL ANGEL POLO CAMPO**, por medio del presente documento contesto el medio de control de la referencia, en los siguientes términos.



OPORTUNIDAD

De conformidad con el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el término de traslado de la demanda es de 30 días. Así, como la diligencia de posesión como Curador Ad Litem del señor **MIGUEL ANGEL POLO CAMPO** se surtió el día 29 de agosto de 2019, el término de traslado vence el día 10 de octubre de 2019.

I. PRONUNCIAMIENTO SOBRE LAS DECLARACIONES Y CONDENAS PEDIDAS.

Me opongo

1. A la pretendida declaratoria de responsabilidad administrativa y patrimonial, por no ser la anulación del laudo arbitral, ni remotamente, la causante de los perjuicios que los demandantes dicen les fueron ocasionados por falla en el ejercicio de la función jurisdiccional, como quiera que el laudo arbitral proferido por los árbitros de la Cámara de Comercio de Santa Marta de calenda 22 de agosto de 2011 en desarrollo del Tribunal de Arbitramento, convocado por OBRESAN contra la Universidad del Magdalena, fue retirado de la vida jurídica, por decisión del Consejo de Estado.
2. A la condena por daños inmateriales, no solo porque no existe la menor prueba sobre los mismos sino porque no consulta las directrices jurisprudenciales sobre el reconocimiento y pago de este tipo de perjuicios.
3. Al reconocimiento de perjuicios por daño emergente y lucro cesante, porque no existe prueba de su causación. Resulta paradójico que los montos indicados de tales perjuicios coincidan o sean los mismos establecidos en el laudo arbitral anulado.

La anulación de este laudo dejó sin piso los reconocimientos y condenas dispuestos en el mismo, por lo que los daños ahora alegados deben ser plenamente probados en este proceso. Los perjuicios que se supone les causó el incumplimiento del contrato suscrito con la **UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA** y las decisiones adoptadas por esta entidad estatal durante la ejecución del contrato, son muy diferentes de los que pudieran derivarse de la anulación del laudo arbitral, situaciones estas que no pueden ser confundidas ni mezcladas.

4. A todas las demás pretensiones de la parte demandante.

II. PRONUNCIAMIENTO ACERCA DE LOS HECHOS U OMISIONES RELATADOS EN LA DEMANDA

7007

MS 2

JUAN PABLO BAENA VÁSQUEZ

ABOGADO

Calle 24 No. 3 – 95, Oficina 901, Edificio Banco de Bogotá, Santa Marta D.T.C.H

Tel. (5) 421 82 90 – Cel. 316 334 28 40

jbaenav@gmail.com

Me pronuncio sobre los mismos, de la siguiente manera:

Hecho 1. Debe ser demostrado por los demandantes.

Hecho 2. Debe ser de mostrado por los demandantes.

Hecho 3. Debe ser demostrado por los demandantes.

Hecho 4. Debe ser demostrado por los demandantes.

Comentario: Los hechos 2 , 3 y 4 dan cuenta de un contrato que reviste las características propias de un contrato estatal: Licitación, cláusulas de caducidad y multas, principios de terminación, interpretación unilaterales, interventoría, etc.

Hechos 5, 6 y 7: Deben ser demostrados por los demandantes.

Comentario: Evidencian estos hechos la posible ocurrencia de incumplimientos, sanciones, revocatorias, etc., imputables, según la demanda, a la Universidad del Magdalena en desarrollo del contrato de obra suscrito entre ellos. Los perjuicios que de ello se deriven son ajenos a los que supuestamente pudieran surgir de lo que constituye la razón de la demanda: la declaratoria de responsabilidad patrimonial por perjuicios ocasionados por *"... la falla en el ejercicio de la Función Jurisdiccional por particulares, acaecida en la expedición del Laudo Arbitral de fecha 22 de agosto de 2011 por el Tribunal de Arbitramento..."*

Hechos 8 a 43: Mi representado se atiene a lo que demuestre el proceso correspondiente al Tribunal de Arbitramento.

Hecho 44: Mi representado se atiene a lo que demuestre el proceso correspondiente al Tribunal de Arbitramento.

Comentario: Cabe anotar que la decisión de ampliar oficiosamente el termino del Tribunal, se adoptó con fundamento en lo dispuesto en el artículo 70, inciso cuarto, de la ley 80 de 1.993, al considerar, de buena fe, que se estaba frente a un contrato estatal. Así puede leerse en el auto No. 1, proferido en la audiencia del día 20 de marzo de 2011, convocado para la presentación de alegatos de conclusión y decretar pruebas pendientes (folios 418 a 420). La misma fue debidamente notificada en estrados y en el texto de dicha acta aparece la anotación *"Se deja constancia que las partes no interpusieron recursos alguno contra el presente auto."* En efecto, contra ella, habiendo podido hacerlo porque estaba presente, el representante de los demandantes, Dr. GABRIEL GONZALEZ BARRAZA, no interpuso recurso alguno. Corolario de lo anterior, es que los ahora demandantes no interpusieron recurso alguno contra la decisión que permitió ampliar el plazo del Tribunal, y que a la postre vino a constituirse en fundamento de la anulación del laudo arbitral. De haberlo propuesto, probablemente el Tribunal no hubiera podido continuar.

Hechos 45 a 57: Mi representado se atiene a lo que demuestre el proceso correspondiente al Tribunal de Arbitramento.

Hecho 58: Mi representado se atiene a lo que demuestre el proceso correspondiente al Tribunal de Arbitramento.

Comentario: Debe observarse que los demandantes, ciertamente con fundamento en la causal 9ª del artículo 163 del decreto 1888 de 1.993, interpusieron recurso de anulación contra el laudo arbitral. Pero ninguna de las causales o motivos invocados por ellos guarda relación con la inaplicabilidad de la ley 80 de 1.993 al arbitramento de marras, lo que permite inferir que, en este aspecto, estuvieron de acuerdo con él.

Hechos 58 a 63: Mi representado se atiene a lo que demuestre el proceso correspondiente al Tribunal.

7009
MG 3

JUAN PABLO BAENA VÁSQUEZ

ABOGADO

Calle 24 No. 3 – 95, Oficina 901, Edificio Banco de Bogotá, Santa Marta D.T.C.H

Tel. (5) 421 82 90 – Cel. 316 334 28 40

jbaenav@gmail.com

Hechos 64 a 69: Mi representado se atiene a lo que demuestre el proceso correspondiente al Tribunal de Arbitramento.

Comentario: A la conciliación prejudicial a que aluden los demandantes en estos hechos, ellos incluyeron a los árbitros, pero por alguna razón no se los citó. Al no haber sido notificados no podía declararse fallida la conciliación solicitada. Lo que pone de presente esta situación es que respecto de los árbitros, a la postre demandados como se aprecia en el texto de la demanda, no se ha surtido la conciliación como condición de procedibilidad. La circunstancia de que al admitir la demanda tampoco se ordenara notificar a los árbitros, que aparecen como demandados, para luego, a fin de suplir la falta de notificación, se le mutó su situación a la de Litis consortes necesarios, lo cual no varía la situación.

Los árbitros fueron incluidos como parte demandada en la solicitud de conciliación, y luego en la demanda. En ninguno de los dos casos fueron citados o notificados.

III. RAZONES DE DEFENSA:

1.1. NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO CELEBRADO ENTRE OBRESAN Y LA UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA.

En el caso que nos ocupa, es cierto que los árbitros que conocieron del arbitraje entre OBRESAN y la Universidad del Magdalena, al proferir el laudo que el Consejo de Estado anuló, estaban ejerciendo función jurisdiccional; pero no es cierto que esa providencia anulada constituya un error judicial, porque dicho laudo no fue contrario a derecho.

Y no lo es porque la suspensión del término del trámite arbitral, con fundamento en el artículo 70 de la ley 80 de 1.993 fue absolutamente jurídica, así el Consejo de Estado haya considerado que por tratarse de un arbitraje institucional referido a un contrato sometido al derecho privado no era aplicable la ley 80 de 1.993.

En efecto:

El artículo 6º de la ley 1285 de 2009, modificó el artículo 13 de la ley 270 de 1.996, en los siguientes términos:

Artículo 13. *Del ejercicio de la función jurisdiccional por otras autoridades y por particulares. Ejercen función jurisdiccional de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política:*

1. El Congreso de la República, con motivo de las acusaciones y faltas disciplinarias que se formulen contra el Presidente de la República o quien haga sus veces; contra los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, de la Corte Constitucional y del Consejo Superior de la Judicatura y el Fiscal General de la Nación, aunque hubieren cesado en el ejercicio de sus cargos.
2. Las autoridades administrativas respecto de conflictos entre particulares, de acuerdo con las normas sobre competencia y procedimiento previstas en las leyes. Tales autoridades no podrán, en ningún caso, realizar funciones de instrucción o juzgamiento de carácter penal; y
3. Los particulares actuando como conciliadores o árbitros habilitados por las partes, en los términos que señale la ley. Tratándose de arbitraje, en el que no sea parte el estado o alguna de sus Entidades, los particulares podrán acordar las reglas de procedimiento a seguir, directamente o por referencia a la de un Centro de Arbitraje, respetando, en todo caso los principios constitucionales que integran el debido proceso.

Esta disposición vino a ser ratificada luego por el artículo 58 de la ley 1563 de 2012, así:

Artículo 58. Reglas de procedimiento. En los arbitrajes en que no sea parte el Estado o alguna de sus entidades, los particulares podrán acordar las reglas de procedimiento a seguir, directamente o por referencia a las de un centro de arbitraje, respetando, en todo caso los principios constitucionales que integran el debido proceso, el derecho de defensa y la igualdad de las partes. En el evento en que las partes no establecieran reglas o el centro seleccionado para adelantar el trámite no tuviere reglamento de procedimientos debidamente aprobado, se aplicarán las reglas establecidas para cada caso en la presente ley.

7010.
M¹ 8 4

JUAN PABLO BAENA VÁSQUEZ

ABOGADO

Calle 24 No. 3 – 95, Oficina 901, Edificio Banco de Bogotá, Santa Marta D.T.C.H

Tel. (5) 421 82 90 – Cel. 316 334 28 40

jbaenav@gmail.com

Lo anterior entraña que, en tratándose de un arbitraje en el que sea parte el Estado (la Universidad del Magdalena, como ente universitario autónomo, hace parte del Estado, en virtud de lo dispuesto en el artículo 40 de la ley 489 de 1998)¹ el arbitramento se sujetará a lo que disponga la ley. Pero no solo a las normas que enlista el Consejo de Estado (decreto 2279 de 1.989, ley 23 de 1.991, ley 446 de 1.998 y decreto ley 1818 de 1.998, como lo estimó en la providencia anulatoria) sino también a la ley 80 de 1.993, que contiene una norma específica para los contratos estatales.

Cuando un contrato como el que nos ocupa no queda sujeto a la autonomía de la voluntad, en cuanto a las reglas que rigen los contratos civiles y comerciales, sino que su forma y contenido queda sujeto al imperio de la ley, o de la voluntad unilateral de la Administración, técnica y jurídicamente es un contrato estatal y por lo tanto cae bajo la órbita de la ley 80 de 1.993.

El laudo arbitral fue anulado con fundamento en que las Universidades son entes autónomos, lo cual ciertamente se desprende lo consagrado en los artículos 93 y siguientes de la ley 30 de 1.992:

Artículo 93. Salvo las excepciones consagradas en la presente ley, los contratos que para el cumplimiento de sus funciones celebren las universidades estatales u oficiales, se regirán por las normas del derecho privado y sus efectos estarán sujetos a las normas civiles y comerciales, según la naturaleza de los contratos.

Pero, en puridad, para el cumplimiento de sus funciones las universidades pueden dictar todas las medidas encaminadas a ofrecer una enseñanza de calidad, mas no para construir edificios, así éstos vayan a estar al servicio de las mismas.²

Las previsiones de la ley 30 de 1.992, para sujetar los contratos que celebren las universidades estatales al derecho privado se refieren a las prescripciones normativas sobre el contenido de tales contratos, en cuanto sean producto de su autonomía. En modo alguno al procedimiento que debe seguirse respecto de las controversias a que su ejecución de lugar, ni las sustraen de las disposiciones relativas a los contratos estatales que contiene la ley 80 de 1.993.

En virtud de su autonomía las universidades están autorizadas para dictar los correspondientes reglamentos de contratación, donde aparezcan cuales son los contratos que puede celebrar y los requerimientos para los mismos. La reglamentación adoptada por la Universidad del Magdalena, no fue aportada al proceso por ninguna de las partes, ni aun por ella misma, pues ésta solo en un momento determinado le dijo al Tribunal que el referido contrato era de derecho privado y no podía ser suspendido oficiosamente el término del arbitramento.

De ahí que a nuestro juicio, existe un error de interpretación del Consejo de Estado al considerar que porque los contratos que celebran las universidades se sujetan, por lo general, a las normas civiles y comerciales, por ese solo hecho quedan sustraídas de las prescripciones de la ley 80 de 1.993. Porque tales contratos, celebrados por la universidades, son necesariamente "contratos estatales".

El concepto de contrato estatal deriva de la definición que da la ley 80 de 1.993 en los siguientes términos:

¹ Ley 489 de 1.998, artículo 40. Entidades y organismos estatales sujetos régimen especial. El Banco de la República, los entes universitarios autónomos, las corporaciones autónomas regionales, la Comisión Nacional de Televisión y los demás organismos y entidades con régimen especial otorgado por la Constitución Política se sujetan a las disposiciones que para ellos establezcan las respectivas leyes.

² El artículo 29 de la ley 30 de 1.992 define cuáles son las funciones de las instituciones de educación superior.

Artículo 29. La autonomía de las instituciones universitarias o escuelas tecnológicas y de las instituciones técnicas profesionales estará determinada por su campo de acción y de acuerdo con la presente Ley en los siguientes aspectos: a) Darse y modificar sus estatutos. b) Designar sus autoridades académicas y administrativas. c) Crear, desarrollar sus programas académicos, lo mismo que expedir los correspondientes títulos. d) Definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas, culturales y de extensión. e) Seleccionar y vincular a sus docentes, lo mismo que a sus alumnos. f) Adoptar el régimen de alumnos y docentes. g) Arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional. **Parágrafo. Para el desarrollo de lo contemplado en los literales a) y e) se requiere notificación al Ministro de Educación Nacional, a través del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (Icfes).**

Artículo 30. Es propio de las instituciones de Educación Superior la búsqueda de la verdad, el ejercicio libre y responsable de la crítica, de la cátedra y del aprendizaje de acuerdo con la presente Ley.

7071.
1118'
5

JUAN PABLO BAENA VÁSQUEZ

ABOGADO

Calle 24 No. 3 – 95, Oficina 901, Edificio Banco de Bogotá, Santa Marta D.T.C.H

Tel. (5) 421 82 90 – Cel. 316 334 28 40

jbaenav@gmail.com

Artículo 32. *De los Contratos Estatales. Son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto³, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título enunciativo, se definen a continuación*

1o. Contrato de Obra

Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la construcción, mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago.

En los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de licitación o concurso públicos, la interventoría deberá ser contratada con una persona independiente de la entidad contratante y del contratista, quien responderá por los hechos y omisiones que le fueren imputables en los términos previstos en el artículo 53 del presente estatuto.

De suerte que el contrato celebrado por la Universidad del Magdalena con OBRESAN es un contrato estatal, y por ello el mismo incorpora las llamadas cláusulas exorbitantes, de caducidad, terminación, modificación e interpretación unilateral, aprobación y registro presupuestal, publicación en el Diario Oficial, etc. Criterio medular que ha sido el utilizado por la doctrina y la jurisprudencia para distinguir los contratos administrativos o estatales de los contratos de derecho privado. En los primeros, El Estado impone condiciones, y en los segundos predomina la autonomía de la voluntad de las partes.

A lo anterior se aúna que por su naturaleza, el contrato de obra sea por antonomasia estatal⁴. La afirmación que hace el Consejo de Estado cuando dice: "En consecuencia los restantes contratos que celebren las universidades estatales, y entre ellos el de obra, se rigen por el derecho privado y no por la ley 80 de 1.993 y por ende a ellos no les son aplicables las normas que sobre arbitramento trae la ley", es absolutamente desafortunada.

Es desafortunada, porque el hecho de que un contrato se rija por el derecho privado no lo excluye per se de su sujeción a la ley 80 de 1.993. ¿Qué sentido tiene, entonces, que la ley diga que son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto⁵, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad?

1.2. EL ERROR JUDICIAL COMO TÍTULO DE IMPUTACIÓN

Es palmario que los demandantes al incoar la acción de reparación directa toman como base de imputación de la responsabilidad patrimonial del Estado, el denominado error jurisdiccional.

Ciertamente, la responsabilidad patrimonial del Estado tiene ocurrencia cuando existan daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción u omisión de sus agentes judiciales, en los casos de defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, error jurisdiccional o privación injusta de la libertad.

Al respecto, cabe considerar:

El artículo 90 de la Carta Política establece que:

³ Cuando se dictó la ley 30 de 1.992 los entes universitarios formaban parte de las entidades a que se refiere la ley 80 de 1.993.

⁴ La ley 167 de 1.41, que fuera el Código Contencioso Administrativo, atribuía al Consejo de Estado y a los Tribunales Administrativos, la revisión de los contratos de la Administración, disponiendo la cláusula de caducidad en los que tuvieran por objeto la construcción de obras, la prestación de servicios y la explotación de bienes del Estado (Cap. XXI)

⁵ Cuando se dictó la ley 30 de 1.992 los entes universitarios formaban parte de las entidades a que se refiere la ley 80 de 1.993. Y todavía, aunque sean autónomas siguen siendo estatales.

1419
6
ZC

JUAN PABLO BAENA VÁSQUEZ

ABOGADO

Calle 24 No. 3 – 95, Oficina 901, Edificio Banco de Bogotá, Santa Marta D.T.C.H

Tel. (5) 421 82 90 – Cel. 316 334 28 40

jbaenav@gmail.com

"El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas".

En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños que hayan sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra éste.

Este tema de la responsabilidad extracontractual del Estado fue desarrollado por la ley Estatutaria de Justicia, de la siguiente manera:

Artículo 65. De la responsabilidad del Estado. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción u omisión de sus agentes judiciales."

En los términos del inciso anterior el Estado responderá por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad".

Artículo 66. Error jurisdiccional. Es aquel cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria a la ley".

Al revisar la constitucionalidad de la Ley 270 de 1.996, Estatutaria de la Administración de Justicia, la Corte Constitucional, al declarar la exequibilidad de estas normas, expresó⁶:

"En segundo lugar, debe decirse que el error jurisdiccional no puede ser analizado únicamente desde una perspectiva orgánica como parece pretenderlo la norma bajo examen. Por el contrario, la posible comisión de una falla por parte del administrador de justicia que conlleve la responsabilidad patrimonial del Estado, debe ser estudiada desde una perspectiva funcional, esto es, bajo el entendido de que al juez, por mandato de la Carta Política, se le otorga una autonomía y una libertad para interpretar los hechos que se someten a su conocimiento y, así mismo, aplicar las normas constitucionales o legales que juzgue apropiadas para la resolución del respectivo conflicto jurídico (Art. 228 C.P.). Dentro de este orden de ideas, se insiste, es necesario entonces que la aplicabilidad del error jurisdiccional parta de ese respeto hacia la autonomía funcional del juez. Por ello, la situación descrita no puede corresponder a una simple equivocación o desacierto derivado de la libre interpretación jurídica de la que es titular todo administrador de justicia. Por el contrario, la comisión del error jurisdiccional debe enmarcarse dentro de una actuación subjetiva, caprichosa, arbitraria y flagrantemente violatoria del debido proceso, que demuestre, sin ningún asomo de duda, que se ha desconocido el principio de que al juez le corresponde pronunciarse judicialmente de acuerdo con la naturaleza misma del proceso y las pruebas aportadas –según los criterios que establezca la ley –, y no de conformidad con su propio arbitrio. En otras palabras, considera esta corporación que el error jurisdiccional debe enmarcarse dentro de los mismos presupuestos que la jurisprudencia, a propósito de la revisión de las acciones de tutela, ha definido como una vía de hecho..."

Por su parte, el H. Consejo de Estado, es del parecer de que el error judicial no se debe analizar desde la perspectiva de la vía de hecho o de la conducta grosera o arbitraria del funcionario, sino desde la arista del daño antijurídico causado por una providencia proferida soslayando los presupuestos fácticos y desconociendo la normatividad legal:

"El error jurisdiccional que puede generar responsabilidad patrimonial del Estado se presenta cuando con una providencia judicial en firme, y con independencia de si fue proferida con culpa o sin ella, pero que es equivocada porque no se ajusta a la realidad procesal o a la ley, se causa un daño antijurídico que debe ser reparado. Dicho de otro modo, se reitera que la antijuricidad de la conducta o de la omisión que origina el error jurisdiccional no siempre es relevante para la reparación del daño antijurídico, pues debe diferenciarse la causa del error con el error mismo..."

⁶ Corte Constitucional. Sentencia C-037. Febrero 5 de 1996. M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa.

102

1120

JUAN PABLO BAENA VÁSQUEZ

ABOGADO

Calle 24 No. 3 – 95, Oficina 901, Edificio Banco de Bogotá, Santa Marta D.T.C.H

Tel. (5) 421 82 90 – Cel. 316 334 28 40

jbaenav@gmail.com

De manera que, al margen de la definición de error jurisdiccional elaborada por el legislador, en tanto que no es norma aplicable al caso concreto y, con fundamento en el artículo 90 de la Constitución, la Sala considera necesario precisar cuáles serán, entonces, las condiciones para estructurar el error jurisdiccional —en la sentencia— que materializará la responsabilidad patrimonial del Estado, a saber:

a) En primer lugar, del concepto mismo, es lógico inferir que el error jurisdiccional debe estar contenido en una providencia judicial que se encuentre en firme. Efectivamente, aun cuando una decisión judicial resulte equivocada, si esta aún puede ser revocada o modificada, el daño no resultaría cierto, pues el error no produciría efectos jurídicos y, además, podría superarse con la intervención del superior funcional. Al margen del asunto sometido a estudio de la Sala, debe recordarse que esta condición fue claramente impuesta por el artículo 66 de la Ley 270 de 1996.

b) Tal y como se deduce de pronunciamientos anteriores de esta sección⁸ - el error jurisdiccional puede ser de orden fáctico o normativo. El primero, supone diferencias entre la realidad procesal y la decisión judicial, porque i) no consideró un hecho debidamente probado o ii) se consideró como fundamental un hecho que no lo era, o se presentan distancias entre la realidad material y la procesal, i) porque no se decretaron pruebas conducentes para determinar el hecho relevante para el derecho o ii) porque la decisión judicial se fundamentó en un hecho que posteriormente se demostró que era falso. El error normativo o de derecho, supone equivocaciones i) en la aplicación del derecho, pues se aplicó al caso concreto una norma que no era relevante o se dejó de aplicar una directa o indirectamente aplicable al mismo y, ii) cuando se aplicaron normas inexistentes o derogadas u otros similares.

c) El error jurisdiccional debe producir un daño personal y cierto que tenga la naturaleza de antijurídico, esto es, que el titular no tenga la obligación jurídica de soportar. Con ello, entonces, se excluyen las decisiones que se mueven en la esfera de lo cuestionable o las sentencias que contienen interpretaciones válidas de los hechos o derechos.

d) La equivocación del juez o magistrado debe incidir en la decisión judicial en firme, pues como bien lo sostiene la doctrina española:

“...el error comentado (judicial) incide exclusivamente en la potestad jurisdiccional que se materializa en la sentencia o resolución —auténtica declaración de voluntad del órgano que ostenta aquella—, siempre ha de consistir en aplicar la norma que a cada supuesto corresponde, el error ha de radicar en un equivocado enjuiciamiento o no aplicación a aquel de la solución únicamente querida por el legislador”⁹.

Frente a estos criterios deberá analizarse la providencia que ordenó ampliar el término de duración del arbitramento referido, para constatar que si bien es cierto que los árbitros que conocieron del arbitraje entre OBRESAN y la Universidad del Magdalena, al proferir el laudo que el Consejo de Estado anuló, estaban ejerciendo función jurisdiccional; no lo es que esa providencia anulada constituya un error jurisdiccional, porque dicho laudo no fue contrario a derecho, ya que como se dejó sentado en el acápite anterior la ampliación del trámite arbitral, con fundamento en el artículo 70 de la ley 80 de 1.993 es absolutamente jurídica, así el Consejo de Estado haya considerado que por tratarse de un arbitraje institucional referido a un contrato sometido al derecho privado no era aplicable la ley 80 de 1.993.

Sobre este tema se volverá, a propósito de estructurar una excepción por inexistencia de los presupuestos legales para configurar el error jurisdiccional.

3.3. LA DIVERGENCIA DE OPINIONES O DE CRITERIOS NO ES CONSTITUTIVA DE ERROR JURISDICCIONAL

⁸ Sentencias de 4 de abril de 2020 y 30 de mayo de 2002

⁹ Consejo de Estado Secc. Tercera. Sentencia de Sentencia de abril 27 de 2006. C. P. Dr. Alir Eduardo Hernández Henríquez; la providencia citada es reiterada por la Sentencia del 5 de diciembre de 2007. Exp. 12.719. C. P. Dr. Ramiro Saavedra Becerra.

1121 7014

JUAN PABLO BAENA VÁSQUEZ

ABOGADO

Calle 24 No. 3 – 95, Oficina 901, Edificio Banco de Bogotá, Santa Marta D.T.C.H

Tel. (5) 421 82 90 – Cel. 316 334 28 40

jbaenav@gmail.com

Como se aprecia, si el artículo 70 de la ley 80 de 1.993 es aplicable o no en los tribunales de arbitraje donde concurra una entidad estatal, pero autónoma, es cuestión de interpretación.

La jurisprudencia y la doctrina están de acuerdo en que para que haya error jurisdiccional se requiere que se esté en presencia de una decisión carente de justificación dentro de la normatividad.

De ahí que el simple desacuerdo sobre la interpretación de una norma aplicable a un caso, no se puede enmarcar dentro del ámbito del error jurisdiccional, salvo cuando ese desacuerdo implique que la decisión tomada por el juez ha sido irrazonable al carecer de una justificación dentro de la normatividad, “De ello se desprende que, ante un mismo caso, es jurídicamente posible la existencia de varias soluciones razonables –en cuanto correctamente justificadas– pero diferentes, incluso excluyentes o contradictorias. Tal consideración limita el ámbito dentro del cual puede estimarse que la decisión de un juez incurre en el multicitado error jurisdiccional, toda vez que la configuración de éste ha de tener en cuenta que en relación con un mismo punto de hecho, pueden darse varias interpretaciones o soluciones de Derecho, todas jurídicamente admisibles en cuanto correctamente justificadas. Entonces, sólo las decisiones carentes de este último elemento –una justificación o argumentación jurídicamente atendible– pueden considerarse incursas en error judicial” (CONSEJO DE ESTADO. Sentencia C-15.128 de 2007).

II. SOLICITUD DE PRUEBAS

III.

Se solicita que por el Tribunal se disponga la práctica de las siguientes pruebas:

- a. Requerir a los demandantes para que aporten copia con constancia de su recibo, del escrito mediante el cual solicitaron la nulidad del Laudo arbitral proferido dentro del arbitramento UNION TEMPORAL OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA-OBRESAN vs UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA.

IV. PROPOSICION DE EXCEPCIONES

1ª EXCEPCION. INEXISTENCIA DE LOS PRESUPUESTOS DEL ERROR JURISDICCIONAL. CULPA DE LOS DEMANDANTES

Los presupuestos para la ocurrencia del error jurisdiccional están señalados en la ley estatutaria de administración de justicia (ley 270 de 1.996) así:

ARTÍCULO 67. PRESUPUESTOS DEL ERROR JURISDICCIONAL. *El error jurisdiccional se sujetará a los siguientes presupuestos:*

1. *El afectado deberá haber interpuesto los recursos de ley en los eventos previstos en el artículo 70, excepto en los casos de privación de la libertad del imputado cuando ésta se produzca en virtud de una providencia judicial.*
2. *La providencia contentiva de error deberá estar en firme*

De este texto legal, aplicado al caso, se infiere que no se configuran los presupuestos exigidos por la ley para que se configure el error jurisdiccional.

Primer Presupuesto. No interposición de recursos. Como se ha venido haciendo hincapié, para adoptar la decisión de prorrogar el plazo del arbitramento, tal como se lee en el acta No. 20 de fecha 13 de abril de 2011, el Tribunal discurrió de la siguiente manera:

“Teniendo en cuenta que el término de funcionamiento del Tribunal, que es de seis meses, vence el 24 de abril de 2011, y para esta fecha aún no podrá proferir el Laudo, máxime cuando concederá un término adicional para la

1122 P 1015

JUAN PABLO BAENA VÁSQUEZ

ABOGADO

Calle 24 No. 3 – 95, Oficina 901, Edificio Banco de Bogotá, Santa Marta D.T.C.H

Tel. (5) 421 82 90 – Cel. 316 334 28 40

jbaenav@gmail.com

práctica de pruebas de oficio. Este Tribunal, de conformidad con el inciso cuarto del artículo 70 de la ley 80 de 1.993 procederá a ampliar el término de duración del Tribunal en tres (3) meses, contados a partir del 23 de abril de 2011"

Bajo esa consideración resolvió: *"PRIMERO: Amplíese el termino del presente Tribunal en tres (3) meses, contados a partir del 23 de abril de 2011"*

En la audiencia donde se dictó este auto, se hallaba presente el doctor GABRIEL GONZALEZ BARRAZA, apoderado de la parte convocante, quien nada dijo al respecto, pues como se expresa en la referida acta **"Se deja constancia que las partes no interpusieron recurso alguno contra el proveído anterior"**.

Posteriormente, fuera de audiencia en agosto de 2011, esto es, cuando ya se habían cumplido prácticamente los tres meses dispuestos para la ampliación del término de funcionamiento del Tribunal y estaba por proferirse el laudo, el apoderado de la Universidad del Magdalena presentó un memorial aduciendo que en el auto anterior (de 23 de abril de 2011) se había omitido la expresión *"a solicitud de las partes o de sus apoderados con facultad expresa para ello"*, pues de haberlo hecho la decisión del Tribunal no hubiera sido la de prorrogar el término sino la de declarar la cesación de sus funciones."

Como aparece en el acta número 26 del 22 de agosto del año 2011, el Tribunal para resolver sobre la petición del referido apoderado, transcribió el contenido del artículo 70 de la ley 80 de 1.993, concluyó que era potestad de los árbitros ampliar de oficio dicho término y, por ende, no accedió a declarar el vencimiento del termino fijado para el proceso arbitral. Esta norma, para esa época estaba vigente, pues no había sido derogada, como lo vino a hacer el artículo 118 de la ley 1563 de 2012.

A esta diligencia no concurrió el apoderado de la Universidad del Magdalena, pero sí el de la parte convocante, doctor GABRIEL GONZALEZ BARRAZA. Como la providencia anterior, que denegó suspender las labores del Tribunal, fue notificada en estrados, correspondía a dicho apoderado, si no estaba de acuerdo con la decisión que mantuvo el aplazamiento del termino con fundamento en el artículo 70 de la ley 80 de 1.993, interponer recurso contra la misma; mas como fue así, al no hacerlo la convalidó.

Posteriormente, una vez notificado el laudo, expedido el 22 de agosto de 2011, el apoderado o representante de la parte convocante interpuso el recurso de anulación del laudo, aduciendo dos razones que no tienen relación alguna con el fundamento esgrimido por el Consejo de Estado para la anulación del mismo.

Todo esto conduce a que no se configura el presupuesto contemplado en el numeral primero del artículo 67 de la ley 270 de 1.996.

De otra parte, la no interposición de los recursos, se erige en **culpa exclusiva de la víctima, en cuyo caso, se exonerará de responsabilidad al Estado**, como lo ordena de manera expresa el artículo 70 ley 270 de 1.996, al disponer que:

ARTÍCULO 70. CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA. *El daño se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley. En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado.*

Segundo presupuesto. Falta de firmeza de la providencia supuestamente contentiva de error.

Conforme al numeral del artículo 67 de la ley 270 de 1.996 **"La providencia contentiva del error deberá estar en firme"**.

No se requiere de mayor análisis para establecer que el laudo proferido el día 22 de agosto de 2011, dentro del arbitramento promovido por la UNION TEMPORAL OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARFTA- OBRESAN contra la Universidad del Magdalena, jamás estuvo en firme. Primero, porque al haberse interpuesto en su contra recurso de anulación, no adquirió firmeza; y segundo, porque en virtud de la decisión anulatoria del Consejo de Estado tal laudo desapareció totalmente de la vida jurídica.

1173 104 10

JUAN PABLO BAENA VÁSQUEZ

ABOGADO

Calle 24 No. 3 – 95, Oficina 901, Edificio Banco de Bogotá, Santa Marta D.T.C.H

Tel. (5) 421 82 90 – Cel. 316 334 28 40

jbaenav@gmail.com

Ello entraña que cuando se incoó la demanda de reparación directa no existía jurídicamente el acto que supuestamente causó los perjuicios cuya indemnización se deprecia. La situación jurídica de las partes volvió a ser la misma que existía antes de proferirse el laudo.

2ª EXCEPCION. INEXISTENCIA DE DOLO O CULPA GRAVE. BUENA FE.

Para que el Estado pueda repetir en el evento de ser condenado a la reparación patrimonial por un daño antijurídico causados por agentes suyos, se requiere que tal daño se haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de tales agentes, como lo dispone el artículo 71 de la ley 270 de 1.996.

El mismo artículo señala que para los efectos indicados se presume que constituye culpa grave o dolo cualquiera de las siguientes conductas:

1. La violación de normas de derecho sustancial o procesal, determinada por error inexcusable.

La lectura del fallo proferido por el Consejo de Estado mediante el cual anuló el laudo arbitral referido simplemente dice que la Universidad del Magdalena es un ente autónomo, excluida del régimen de la ley 80, porque sus contratos son de derecho privado, sin identificar ninguna norma sustancial o procesal que hubiese sido violada, y menos por error inexcusable.

Ya en un capítulo anterior se dejó plasmado que el contrato celebrado por la Universidad del Magdalena con OBRESAN es un contrato estatal, por la calidad de la entidad contratante, el tipo de contrato, de obra; y por la inclusión en él de cláusulas exorbitantes propias del derecho público o de derecho administrativo.

Mucha tinta corrió y muchos fueron los avances legislativos en la pretensión de diferenciar los contratos de derecho privado de los contratos administrativos. Ante la dificultad de precisar cuando el contrato era de derecho administrativo y cuando de derecho privado, la doctrina trató de identificar criterios diferenciadores, tales como **el subjetivo** (jurisdicción), **el formal** (según el procedimiento utilizado para elaborarlo), **el del servicio público** (cuando- según Jeze- se trata de asegurar el funcionamiento del servicio público, y el de **las cláusulas exorbitantes**, en cuanto en los contratos administrativos se insertan cláusulas que se salen de la órbita del derecho civil y colocan a la administración en un plano de superioridad.

Este último criterio había sido el predominante en la doctrina y la jurisprudencia, aunque puede decirse que ha sido superado, y ha comenzado a perder interés jurídico. Allan Brewer Carías dice que: *"la noción de contrato administrativo solo puede aceptarse para identificar un tipo de contrato de la administración, el cual por la finalidad perseguida por la Administración al contratar, está sometido a un régimen de derecho público, pero no porque tenga un régimen de derecho público por contraposición a otros contratos de la Administración que estarían sometidos a un régimen de derecho privado. Estos últimos, como veremos, no existen; toda la actividad contractual de la Administración es administrativa y está sometida a un régimen mixto de derecho público y de derecho privado. La preponderancia de uno y otros y su utilización regular, es lo que ahora adquiere importancia"*¹⁰.

No nos queda la menor duda de que en el contrato que nos ocupa, tienen preponderancia las normas de derecho público, a las que se acoge en su integridad.

Para uno de quienes responde esta demanda, resulta claro que:

"La noción de contrato estatal que recoge la ley 80 de 1.993 responde a ese criterio unificador. La clasificación de los contratos de la Administración entre contratos administrativos y contratos de derecho privado, contenida en el Título III del decreto 222 de 1.983, ha desaparecido para dar paso al contrato estatal, cuya característica general

¹⁰ Brewer Carías, Allan. El Derecho Administrativo en Latinoamérica, Curso internacional Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Bogotá, 1.978, pág. 146.

1124 1067
#

JUAN PABLO BAENA VÁSQUEZ

ABOGADO

Calle 24 No. 3 – 95, Oficina 901, Edificio Banco de Bogotá, Santa Marta D.T.C.H

Tel. (5) 421 82 90 – Cel. 316 334 28 40

ibaenav@gmail.com

estaría dada por un sometimiento tanto a las reglas de derecho privado como a las del derecho público, aunque con énfasis en este último" 11

Al referirse al régimen contractual de las entidades excluidas de la Ley 80, el Consejo de Estado, recientemente precisó:

Una de las cuestiones contractuales más complejas que vive la Administración pública moderna consiste en comprender el régimen de las entidades excluidas de la Ley 80 de 1993..., cuya dificultad estriba, precisamente, en establecer el alcance de la competencia para contratar que tiene esta clase de entidades.

Precisamente, en este contexto conviene hacer las precisiones que siguen, para enfocar correctamente cualquier problema contractual de una entidad excluida de la Ley 80.

Para empezar, y en primer lugar, se señala que el régimen contractual no es exclusivamente el derecho privado, sino una combinación de éste con los principios de la función administrativa. Esta conclusión aplica tanto a partir de la vigencia del artículo 13 de la Ley 1150 de 2007 –norma en la cual el legislador positivizó esta idea–, como desde antes, cuando la doctrina y la jurisprudencia, aplicando los principios generales del derecho, llegaron a esta conclusión¹².

Lo anterior evidencia que si cinco años después de proferido el laudo arbitral de marras, el Consejo de Estado tiene que hacer precisiones acerca de los problemas a que da lugar la existencia de entidades excepcionadas del régimen contractual de la ley 80, **el error de apreciación o interpretación sobre la naturaleza jurídica del contrato suscrito entre la Universidad del Magdalena y OBRESAN no es inexcusable**, y que, por el contrario, el Tribunal actuó con absoluta buena fe, que es un valor constitucional supremo; y estuvo animado por el principio de la eficacia de la justicia.

A esa buena fe contribuyó la presencia del Ministerio Público durante el proceso del arbitramento, concretamente en la audiencia donde se suspendió el proceso con fundamento en la ley 80 de 1.993; y con la presentación del alegato visible a los folios 483y siguientes, antes de proferirse el laudo.

Adicionalmente, el Consejo de Estado....¹³ con ponencia de la Magistrada MYRIAM GUERRERO DE ESCOBAR, al conocer de la legalidad de un laudo proferido dentro de un arbitramento celebrado por las controversias a que dio lugar la ejecución de un contrato celebrado entre el Banco de la República y la sociedad H. Rojas y Asociados, se pronunció diciendo que ese contrato, no obstante que una de sus partes (el Banco de la República) el cual, de conformidad con lo prescrito por el artículo 371 de la Constitución Política "...un órgano autónomo, instituido como persona jurídica de derecho público, que no hace parte de ninguna de las ramas del poder público ni de los órganos de control, con autonomía administrativa, patrimonial y técnica...sometido a un régimen jurídico propio.", era un contrato estatal. Dijo al efecto que "...los contratos regidos por la ley 80 de 1.993 y los celebrados bajo el amparo del derecho común... **Ambos tienen la naturaleza de contratos estatales**, no obstante encontrarse regidos por dos ordenamientos jurídico-sustantivo diferentes" [1]

En esta misma providencia se invocó como precedente judicial, un auto dictado por la misma Sección Tercera el 8 de febrero de 2001, donde se dijo que los contratos celebrados por las empresas de servicios públicos eran contratos estatales. En ese auto aunque se distinguió entre **contratos estatales propiamente dichos**, que son aquellos que se celebran por las entidades públicas a que se refiere la ley 80 de 1.993 y **contratos especiales sujetos a un régimen legal propio**, se concluyó diciendo que :

¹¹ Polo Figueroa, Juan Alberto. "Elementos de Derecho Administrativo" 2ª. Edición, abril de 2001, pág. 286

¹² Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 24 de abril de 2016, M.P. Dra. Marta Nubia Velásquez Rico.

¹³ En el auto que denegó dar por terminado el arbitramento se hizo mención al fallo del día 31 de diciembre de 2010 (o el 17 de marzo de 2010), dentro del proceso 11001-03-26-000-2009-00045-00(36838). Me lo están buscando, porque no fue publicado y en estos días me llega. Servirá para agregar una causal a la buena fe.

1125
1078

JUAN PABLO BAENA VÁSQUEZ

ABOGADO

Calle 24 No. 3 – 95, Oficina 901, Edificio Banco de Bogotá, Santa Marta D.T.C.H

Tel. (5) 421 82 90 – Cel. 316 334 28 40

jbaenav@gmail.com

“De lo anterior es jurídicamente viable considerar que la categoría “contratos estatales” no puede quedar exclusivamente referida a los actos contractuales que celebren las entidades del Estado relacionadas en la ley 80 de 1.993 sino que habría que reconocer que desde el punto de vista material y técnico formal, constituye una acertada categoría jurídica que tiene la virtud de englobar todos los contratos que celebren las entidades públicas del Estado, ya sea que se regulen por el Estatuto General de Contratación Administrativa o que estén sujetos a regímenes especiales”.

En el auto que denegó la solicitud de terminación, sin laudo del arbitramento, que hizo el apoderado de la convocada, la Universidad del Magdalena, se tuvo en cuenta esta providencia como fundamento jurídico, pues si mutatis mutandi tal contrato era estatal, tenía cabida respecto de él el artículo 70 de la ley 80 de 1.993, que en inciso cuarto establecía que “Los árbitros podrán ampliar el término de duración del tribunal por la mitad del inicialmente acordado o legalmente establecido, si ello fuere necesario para la producción del laudo respectivo”.

3ª. EXCEPCION. INEXISTENCIA DE PERJUICIOS

Los demandantes no ha recibido perjuicio alguno por la anulación del laudo arbitral ni aportan elementos de juicio ni solicitan pruebas que tiendan a demostrarlo.

Es evidente que ellos cuantifican tales perjuicios utilizando los valores reconocidos en el laudo arbitral anulado, como puede verse en el siguiente cuadro:

PERJUICIOS POR DAÑO EMERGENTE¹⁴

Razón del perjuicio	Valor perjuicios demandados	Reconocidos en laudo	Observaciones
Obras pendientes por legalizar	67.192.800,00	67.192.800,00	Valores idénticos
Mora en el pago del valor del contrato	17.565.510,72	17.565.510,72	Valores idénticos
Mayor permanencia en obra	244.419.05,00	244.419.095,00	Valores idénticos
Costos del proceso	62.511.880,00	62.511.880,00	Valores idénticos
Agencias en derecho	26.000.000,00	26.000.000,00	Valores idénticos

En gracia de discusión, los únicos perjuicios que hubiera podido acarrearles el laudo arbitral, serían los que en la demanda se enlistan como lucro cesante, a saber:

Pago de honorarios de abogado	120.000.000,00
Pago de solicitud arbitral	1.195.800
Pago gastos 50% funcionamiento del Tribunal	30.957,240
Pago de honorarios de peritos	4.463.332,00
Protocolización del laudo	6.852.389,00

No obstante, los honorarios de abogado no están demostrados; y de los honorarios a los peritos, éstos devolvieron la mitad de los mismos en acatamiento de la ley. Tales honorarios, junto con la protocolización del expediente, forman parte de los gastos del proceso; y en todo caso, deberán ser legalmente comprobados.

4ª EXCEPCION. IMPROCEDENCIA DE LA ACCION INCOADA POR LA EXISTENCIA DE OTROS MEDIOS DE DEFENSA

La ley 1563 de 2012, en su artículo 110, establece los efectos que se derivan de la anulación de un laudo arbitral, como al que se ha hecho referencia, y a tal propósito preceptúa:

¹⁴ Estos valores difieren de los presentados tanto en la solicitud de conciliación como en la demanda del arbitraje y en su corrección (folios 189 y siguientes)

7019
126
18

JUAN PABLO BAENA VÁSQUEZ

ABOGADO

Calle 24 No. 3 – 95, Oficina 901, Edificio Banco de Bogotá, Santa Marta D.T.C.H

Tel. (5) 421 82 90 – Cel. 316 334 28 40

jbaenav@gmail.com

Artículo 110 Efectos del recurso de anulación. Cuando prospere alguna de las causales señaladas en el numeral 1 literal a), del artículo 108 se declarará la nulidad del laudo y las partes podrán acudir ante la autoridad judicial competente.

Cuando prospere alguna de las causales señaladas en el numeral 1 literal b), c) y d), del artículo 108 se declarará la nulidad del laudo, sin que ello perjudique el acuerdo de arbitraje.

Cuando prospere alguna de las causales señaladas en el numeral 2 del artículo 108 se declarará la nulidad del laudo.

En caso de anulación del laudo, las pruebas practicadas en el curso del trámite arbitral podrán ser apreciadas bien por tribunal arbitral o bien por la autoridad judicial"

Este texto demuestra que anulado el laudo, el acuerdo de arbitraje se mantiene vigente; y que los demandantes, esto es, OBRESAN, tienen la oportunidad de acudir ante la "autoridad judicial competente", que bien podría ser otro tribunal de arbitramento; y no a la acción de reparación directa.

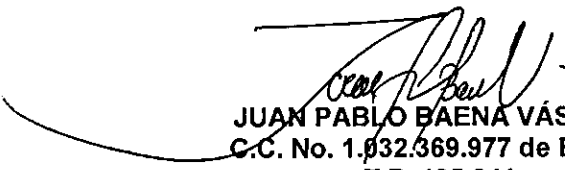
PETICIÓN

Con fundamento en lo expuesto, en representación del señor **MIGUEL ANGEL POLO CAMPO**, solicito a los Magistrado del Tribunal Administrativo del Magdalena denegar las pretensiones de la demanda.

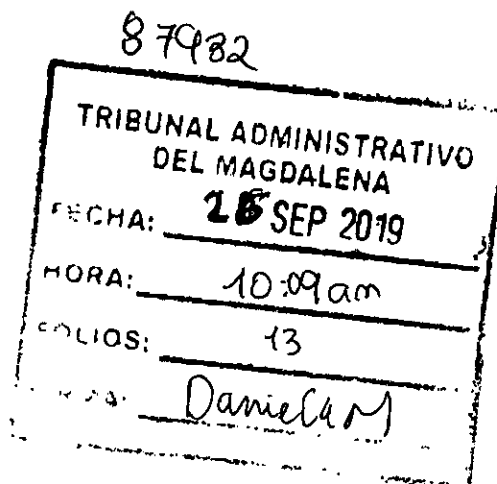
NOTIFICACIONES

La recibiré en el correo electrónico jbaenav@gmail.com o en la dirección Calle 24 No. 3 – 95, Oficina 901, Edificio Banco de Bogotá en la ciudad de Santa Marta D.T.C.H. (Magdalena)

Atentamente,


JUAN PABLO BAENA VÁSQUEZ
C.C. No. 1.032.369.977 de Bogotá
T.P. 195.341

Curador Ad Liten del Señor MIGUEL ANGEL POLO CAMPO



1122 7020

Tribunal 03 Administrativo - Magdalena - Santa Marta

De: Juan Pablo Baena Vásquez <jbaenav@gmail.com>
Enviado el: jueves, 26 de septiembre de 2019 2:41 p. m.
Para: alejocorman@gmail.com; Carlos Felipe Manuel Remolina Botia; jpolofigueroa@gmail.com; procuraduria43@gmail.com; presidencia@ccsm.org.co; secretariajuridica@ccsm.org.co; procjudadm155@procuraduria.gov.co; notificacionjudicial@unimagdalena.edu.co; Tribunal 03 Administrativo - Magdalena - Santa Marta; dianaboveamendinueta@hotmail.com
Asunto: CONTESTACIÓN DEMANDA OBRESAN CONTRA NACIÓN MIN JUSTICIA Y OTROS - RAD. 2014-00421
Datos adjuntos: CONTESTACIÓN DEMANDA OBRESAN.pdf

Cont. dda

Señores
Partes procesales

Medio de Control: REPARACIÓN DIRECTA
Demandante: UNION TEMPORAL OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA- OBRESAN
Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE JUSTICIA Y OTROS
Asunto: CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
Radicado: 47-001-2333-000-2014-00421-00

En mi calidad de *curador ad litem* del señor **MIGUEL ANGEL POLO CAMPO** dentro del proceso de la referencia, envío un ejemplar de la contestación de la demanda presentada el día de hoy 26 de septiembre de 2019 en la Secretaría del Tribunal Administrativo del Magdalena. Dicho envío se realiza de conformidad con el numeral 14 del artículo 78 del Código General del Proceso.

Atentamente,

JUAN PABLO BAENA VÁSQUEZ
C.C. 1.032.369.977 de Bogotá
T.P. No. 195.341

879472

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA	
FECHA:	26 SEP 2019
HORA:	3:12 pm
FOLIOS:	8 folios
FIRMA:	Isabel Jarama

1027
LRCB

JUAN PABLO BAENA VÁSQUEZ

ABOGADO

Calle 24 No. 3 – 95, Oficina 901, Edificio Banco de Bogotá, Santa Marta D.T.C.H

Tel. (5) 421 82 90 – Cel. 316 334 28 40

jbaenav@gmail.com

Magistrada

MARIBEL MENDOZA JIMENEZ

Tribunal Administrativo del Magdalena

E.S.D.

Medio de Control:

REPARACIÓN DIRECTA

Demandante:

UNION TEMPORAL OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA- OBRESAN

Demandado:

NACIÓN – MINISTERIO DE JUSTICIA Y OTROS

Asunto:

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Radicado:

47-001-2333-000-2014-00421-00

JUAN PABLO BAENA VÁSQUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.032.369.977 de Bogotá y Portador de la Tarjeta Profesional de Abogado No. 195.341 del Consejo Superior de la Judicatura, en calidad de *curador ad litem* del señor **MIGUEL ANGEL POLO CAMPO**, por medio del presente documento contesto el medio de control de la referencia, en los siguientes términos.

OPORTUNIDAD

De conformidad con el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el término de traslado de la demanda es de 30 días. Así, como la diligencia de posesión como Curador Ad Litem del señor **MIGUEL ANGEL POLO CAMPO** se surtió el día 29 de agosto de 2019, el término de traslado vence el día 10 de octubre de 2019.

I. PRONUNCIAMIENTO SOBRE LAS DECLARACIONES Y CONDENAS PEDIDAS.

Me opongo

1. A la pretendida declaratoria de responsabilidad administrativa y patrimonial, por no ser la anulación del laudo arbitral, ni remotamente, la causante de los perjuicios que los demandantes dicen les fueron ocasionados por falla en el ejercicio de la función jurisdiccional, como quiera que el laudo arbitral proferido por los árbitros de la Cámara de Comercio de Santa Marta de calenda 22 de agosto de 2011 en desarrollo del Tribunal de Arbitramento, convocado por OBRESAN contra la Universidad del Magdalena, fue retirado de la vida jurídica, por decisión del Consejo de Estado.
2. A la condena por daños inmateriales, no solo porque no existe la menor prueba sobre los mismos sino porque no consulta las directrices jurisprudenciales sobre el reconocimiento y pago de este tipo de perjuicios.
3. Al reconocimiento de perjuicios por daño emergente y lucro cesante, porque no existe prueba de su causación. Resulta paradójico que los montos indicados de tales perjuicios coincidan o sean los mismos establecidos en el laudo arbitral anulado.

La anulación de este laudo dejó sin piso los reconocimientos y condenas dispuestos en el mismo, por lo que los daños ahora alegados deben ser plenamente probados en este proceso. Los perjuicios que se supone les causó el incumplimiento del contrato suscrito con la **UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA** y las decisiones adoptadas por esta entidad estatal durante la ejecución del contrato, son muy diferentes de los que pudieran derivarse de la anulación del laudo arbitral, situaciones estas que no pueden ser confundidas ni mezcladas.

4. A todas las demás pretensiones de la parte demandante.

II. PRONUNCIAMIENTO ACERCA DE LOS HECHOS U OMISIONES RELATADOS EN LA DEMANDA

JUAN PABLO BAENA VÁSQUEZ
ABOGADO

Calle 24 No. 3 – 95, Oficina 901, Edificio Banco de Bogotá, Santa Marta D.T.C.H
Tel. (5) 421 82 90 – Cel. 316 334 28 40
jbaenav@gmail.com

2

Me pronuncio sobre los mismos, de la siguiente manera:

Hecho 1. Debe ser demostrado por los demandantes.

Hecho 2. Debe ser de mostrado por los demandantes.

Hecho 3. Debe ser demostrado por los demandantes.

Hecho 4. Debe ser demostrado por los demandantes.

Comentario: Los hechos 2, 3 y 4 son el resultado de un contrato que reviste las características propias de un contrato estatal: licitación, cláusulas de capacidad, términos, principios de terminación, interpretación, nulidad, etc.

Hechos 5, 6 y 7: Deben ser demostrados por los demandantes.

Comentario: Evidencian estos hechos la posible existencia de incumplimientos, sanciones, sanciones, etc. imputables según la demanda a la Universidad Magdalena en desarrollo del contrato de obra suscrita entre ellas. Los perjuicios que de ellos se derivan son ajenos a los que solamente pudieran sufrir el lo que constituye la razón de la demanda: la declaración de responsabilidad patrimonial por perjuicios ocasionados por la falta en el ejercicio de la Función Jurisdiccional por Particulares, acaecida en la decisión del Auto Arbitral de fecha 22 de agosto de 2011 por el Tribunal de Arbitramento...

Hechos 8 a 43: Mi representado se atiene a lo que demuestre el proceso correspondiente al Tribunal de Arbitramento.

Hecho 44: Mi representado se atiene a lo que demuestre el proceso correspondiente al Tribunal de Arbitramento.

Comentario: Cabe señalar que la decisión de ampliar oficialmente el término del Tribunal, se ajusta con fundamento en lo dispuesto en el artículo 76 inciso c) de la ley 80 de 1993, al considerar de buena fe que se estaba frente a un contrato estatal. Así puede leerse en el auto No. 1 proferido en la audiencia del 20 de marzo de 2011, convocado para la presentación de alegatos de conclusión y decretar pruebas pendientes (folios 418 a 420). La misma fue debidamente notificada en esa sede y en el texto de la misma acta ante la contestación 43a deja constancia que las partes no interpusieron recursos alguno contra el proceso. En el día 1 contra ella, habiendo pasado haberlo porque estaba presente el representante de los demandantes, Dr. GABRIEL GONZALEZ BARRAZA, no interpuso recurso alguno. Corolario de lo anterior, es que los ahora demandantes no interpusieron recurso alguno contra la decisión que permitía ampliar el plazo del Tribunal, y que a la postre vino a consistir en fundamento de la anulación del laudo arbitral. De haberlo propuesto, probablemente el Tribunal no hubiera podido continuar.

Hechos 45 a 57: Mi representado se atiene a lo que demuestre el proceso correspondiente al Tribunal de Arbitramento.

Hecho 58: Mi representado se atiene a lo que demuestre el proceso correspondiente al Tribunal de Arbitramento.

Comentario: Debe observarse que los demandantes, claramente con fundamento en la causal del artículo 40 del decreto 4988 de 1993, interpusieron recurso de anulación contra el laudo arbitral. Para una de las causales o motivos invocados por ellos guarda relación con la inaplicabilidad de la ley 80 de 1993 al arbitramento de marcos, lo que permite inferir que en este aspecto, estuvieron de acuerdo con el laudo.

Hechos 58 a 63: Mi representado se atiene a lo que demuestre el proceso correspondiente al Tribunal.

1020
129

3

JUAN PABLO BAENA VÁSQUEZ
ABOGADO

Calle 24 No. 3 – 95, Oficina 901, Edificio Banco de Bogotá, Santa Marta D.T.C.H
Tel. (5) 421 82 90 – Cel. 316 334 28 40
jbaenav@gmail.com

Hechos 64 a 69: Mi representado se atiene a lo que demuestre el proceso correspondiente al Tribunal de Arbitramento.

Comentario: A la conciliación prejudicial a que aluden los demandantes en estos hechos, ellos no fueron a los árbitros, pero por alguna razón no se les citó. Al no haber sido notificados no podía declararse fallida la conciliación solicitada. Lo que pone en presente esta situación es que en efecto de los árbitros a la postre demandados como se evidencia en el texto de la demanda no se ha solicitado conciliación con la condición de procedibilidad. La falta de citación para admitir la demanda en proceso no genera notificación a los árbitros que en estos casos son demandados pero luego al final de la falta la tramitación se le mutó su situación por la falta de citación, lo cual no varía la situación. Los árbitros fueron incluidos como parte demandada en la solicitud de conciliación, y en la misma demanda. En ninguno de los dos casos fueron citados o notificados.

III. RAZONES DE DEFENSA:

1.1. NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO CELEBRADO ENTRE OBRESAN Y LA UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA.

En el caso que nos ocupa, es cierto que los árbitros que conocieron del arbitraje entre OBRESAN y la Universidad del Magdalena, al proferir el laudo que el Consejo de Estado anuló, estaban ejerciendo función jurisdiccional; pero no es cierto que esa providencia anulada constituya un error judicial, porque dicho laudo no fue contrario a derecho.

Y no lo es porque la suspensión del término del trámite arbitral, con fundamento en el artículo 70 de la ley 80 de 1.993 fue absolutamente jurídica, así el Consejo de Estado haya considerado que por tratarse de un arbitraje institucional referido a un contrato sometido al derecho privado no era aplicable la ley 80 de 1.993.

En efecto:

El artículo 6° de la ley 1285 de 2009, modificó el artículo 13 de la ley 270 de 1.996, en los siguientes términos:

Artículo 13. Del ejercicio de la función jurisdiccional por otras autoridades y por particulares. Ejercen función jurisdiccional de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política:

1. El Congreso de la República, con motivo de las acusaciones y faltas disciplinarias que se formulen contra el Presidente de la República o quien haga sus veces; contra los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, de la Corte Constitucional y del Consejo Superior de la Judicatura y el Fiscal General de la Nación, aunque hubieren cesado en el ejercicio de sus cargos.

2. Las autoridades administrativas respecto de conflictos entre particulares, de acuerdo con las normas sobre competencia y procedimiento previstas en las leyes. Tales autoridades no podrán, en ningún caso, realizar funciones de instrucción o juzgamiento de carácter penal; y

3. Los particulares actuando como conciliadores o árbitros habilitados por las partes, en los términos que señale la ley. Tratándose de arbitraje, en el que no sea parte el estado o alguna de sus Entidades, los particulares podrán acordar las reglas de procedimiento a seguir, directamente o por referencia a la de un Centro de Arbitraje, respetando, en todo caso los principios constitucionales que integran el debido proceso.

Esta disposición vino a ser ratificada luego por el artículo 58 de la ley 1563 de 2012, así:

Artículo 58. Reglas de procedimiento. En los arbitrajes en que no sea parte el Estado o alguna de sus entidades, los particulares podrán acordar las reglas de procedimiento a seguir, directamente o por referencia a las de un centro de arbitraje, respetando, en todo caso los principios constitucionales que integran el debido proceso, el derecho de defensa y la igualdad de las partes. En el evento en que las partes no establecieran reglas o el centro seleccionado para adelantar el trámite no tuviere reglamento de procedimientos debidamente aprobado, se aplicarán las reglas establecidas para cada caso en la presente ley.

JUAN PABLO BAENA VÁSQUEZ

ABOGADO

Calle 24 No. 3 – 95, Oficina 901, Edificio Banco de Bogotá, Santa Marta D.T.C.H

Tel. (5) 421 82 90 – Cel. 316 334 28 40

ibaenav@gmail.com

4

Lo anterior entraña que, en tratándose de un arbitraje en el que sea parte el Estado (la Universidad del Magdalena, como ente universitario autónomo, hace parte del Estado, en virtud de lo dispuesto en el artículo 40 de la ley 489 de 1998)¹ el arbitramento se sujetará a lo que disponga la ley. Pero no solo a las normas que enlista el Consejo de Estado (decreto 2279 de 1.989, ley 23 de 1.991, ley 446 de 1.998 y decreto ley 1818 de 1.998, como lo estimó en la providencia anulatoria) sino también a la ley 80 de 1.993, que contiene una norma específica para los contratos estatales.

Cuando un contrato como el que nos ocupa no queda sujeto a la autonomía de la voluntad, en cuanto a las reglas que rigen los contratos civiles y comerciales, sino que su forma y contenido, queda sujeto al imperio de la ley, o de la voluntad unilateral de la Administración, técnica y jurídicamente es un contrato estatal y por lo tanto cae bajo la órbita de la ley 80 de 1.993.

El laudo arbitral fue anulado con fundamento en que las Universidades son entes autónomos, lo cual ciertamente se desprende lo consagrado en los artículos 93 y siguientes de la ley 30 de 1.992:

Artículo 93. *Salvo las excepciones consagradas en la presente ley, los contratos que para el cumplimiento de sus funciones celebren las universidades estatales u oficiales, se regirán por las normas del derecho privado y sus efectos estarán sujetos a las normas civiles y comerciales, según la naturaleza de los contratos.*

Pero, en puridad, para el cumplimiento de sus funciones las universidades pueden dictar todas las medidas encaminadas a ofrecer una enseñanza de calidad, mas no para construir edificios, así éstos vayan a estar al servicio de las mismas.²

Las previsiones de la ley 30 de 1.992, para sujetar los contratos que celebren las universidades estatales al derecho privado se refieren a las prescripciones normativas sobre el contenido de tales contratos, en cuanto sean producto de su autonomía. En modo alguno al procedimiento que debe seguirse respecto de las controversias a que su ejecución de lugar, ni las sustraen de las disposiciones relativas a los contratos estatales que contiene la ley 80 de 1.993.

En virtud de su autonomía las universidades están autorizadas para dictar los correspondientes reglamentos de contratación, donde aparezcan cuales son los contratos que puede celebrar y los requerimientos para los mismos. La reglamentación adoptada por la Universidad del Magdalena, no fue aportada al proceso por ninguna de las partes, ni aun por ella misma, pues ésta solo en un momento determinado le dijo al Tribunal que el referido contrato era de derecho privado y no podía ser suspendido oficiosamente el término del arbitramento.

De ahí que a nuestro juicio, existe un error de interpretación del Consejo de Estado al considerar que porque los contratos que celebran las universidades se sujetan, por lo general, a las normas civiles y comerciales, por ese solo hecho quedan sustraídas de las prescripciones de la ley 80 de 1.993. Porque tales contratos, celebrados por la universidades, son necesariamente "contratos estatales".

El concepto de contrato estatal deriva de la definición que da la ley 80 de 1.993 en los siguientes términos:

¹ Ley 489 de 1.998, artículo 40. Entidades y organismos estatales sujetos régimen especial. El Banco de la República, los entes universitarios autónomos, las corporaciones autónomas regionales, la Comisión Nacional de Televisión y los demás organismos y entidades con régimen especial otorgado por la Constitución Política se sujetan a las disposiciones que para ellos establezcan las respectivas leyes.

² El artículo 29 de la ley 30 de 1.992 define cuáles son las funciones de las instituciones de educación superior.
Artículo 29. *La autonomía de las instituciones universitarias o escuelas tecnológicas y de las instituciones técnicas profesionales estará determinada por su campo de acción y de acuerdo con la presente Ley en los siguientes aspectos: a) Darse y modificar sus estatutos. b) Designar sus autoridades académicas y administrativas. c) Crear, desarrollar sus programas académicos, lo mismo que expedir los correspondientes títulos. d) Definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas, culturales y de extensión. e) Seleccionar y vincular a sus docentes, lo mismo que a sus alumnos. f) Adoptar el régimen de alumnos y docentes. g) Arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional. Parágrafo. Para el desarrollo de lo contemplado en los literales a) y e) se requiere notificación al Ministro de Educación Nacional, a través del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (Icfes):*

Artículo 30. *Es propio de las instituciones de Educación Superior la búsqueda de la verdad, el ejercicio libre y responsable de la crítica, de la cátedra y del aprendizaje de acuerdo con la presente Ley.*

1190 7023

5

JUAN PABLO BAENA VÁSQUEZ
ABOGADO

Calle 24 No. 3 – 95, Oficina 901, Edificio Banco de Bogotá, Santa Marta D.T.C.H
Tel. (5) 421 82 90 – Cel. 316 334 28 40
jbaenav@gmail.com

Artículo 32. De los Contratos Estatales. Son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto³, **previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título enunciativo, se definen a continuación**

1o. Contrato de Obra

Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la construcción, mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago.

En los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de licitación o concurso públicos, la interventoría deberá ser contratada con una persona independiente de la entidad contratante y del contratista, quien responderá por los hechos y omisiones que le fueren imputables en los términos previstos en el artículo 53 del presente estatuto.

De suerte que el contrato celebrado por la Universidad del Magdalena con OBRESAN es un contrato estatal, y por ello el mismo incorpora las llamadas cláusulas exorbitantes, de caducidad, terminación, modificación e interpretación unilateral, aprobación y registro presupuestal, publicación en el Diario Oficial, etc. Criterio medular que ha sido el utilizado por la doctrina y la jurisprudencia para distinguir los contratos administrativos o estatales de los contratos de derecho privado. En los primeros, El Estado impone condiciones, y en los segundos predomina la autonomía de la voluntad de las partes.

A lo anterior se aúna que por su naturaleza, el contrato de obra sea por antonomasia estatal⁴. La afirmación que hace el Consejo de Estado cuando dice: "En consecuencia los restantes contratos que celebren las universidades estatales, y entre ellos el de obra, se rigen por el derecho privado y no por la ley 80 de 1.993 y por ende a ellos no les son aplicables las normas que sobre arbitramento trae la ley", es absolutamente desafortunada.

Es desafortunada, porque el hecho de que un contrato se rija por el derecho privado no lo excluye per se de su sujeción a la ley 80 de 1.993. ¿Qué sentido tiene, entonces, que la ley diga que son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto⁵, **previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad?**

1.2. EL ERROR JUDICIAL COMO TÍTULO DE IMPUTACION

Es palmario que los demandantes al incoar la acción de reparación directa toman como base de imputación de la responsabilidad patrimonial del Estado, el denominado error jurisdiccional.

Ciertamente, la responsabilidad patrimonial del Estado tiene ocurrencia cuando existan daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción u omisión de sus agentes judiciales, en los casos de defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, error jurisdiccional o privación injusta de la libertad.

Al respecto, cabe considerar:

El artículo 90 de la Carta Política establece que:

³ Cuando se dictó la ley 30 de 1.992 los entes universitarios formaban parte de las entidades a que se refiere la ley 80 de 1.993.

⁴ La ley 167 de 1.41, que fuera el Código Contencioso Administrativo, atribuía al Consejo de Estado y a los Tribunales Administrativos, la revisión de los contratos de la Administración, disponiendo la cláusula de caducidad en los que tuvieran por objeto la construcción de obras, la prestación de servicios y la explotación de bienes del Estado (Cap. XXI)

⁵ Cuando se dictó la ley 30 de 1.992 los entes universitarios formaban parte de las entidades a que se refiere la ley 80 de 1.993. Y todavía, aunque sean autónomas siguen siendo estatales.

JUAN PABLO BAENA VÁSQUEZ

ABOGADO

Calle 24 No. 3 – 95, Oficina 901, Edificio Banco de Bogotá, Santa Marta D.T.C.H
Tel. (5) 421 82 90 – Cel. 316 334 28 40

ibaenav@gmail.com

6

"El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas".

En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños que hayan sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra éste.

Este tema de la responsabilidad extracontractual del Estado fue desarrollado por la ley Estatutaria de Justicia, de la siguiente manera:

Artículo 65. De la responsabilidad del Estado. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción u omisión de sus agentes judiciales."

En los términos del inciso anterior el Estado responderá por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad".

Artículo 66. Error jurisdiccional. Es aquel cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria a la ley".

Al revisar la constitucionalidad de la Ley 270 de 1.996, Estatutaria de la Administración de Justicia, la Corte Constitucional, al declarar la exequibilidad de estas normas, expresó⁶:

"En segundo lugar, debe decirse que el error jurisdiccional no puede ser analizado únicamente desde una perspectiva orgánica como parece pretenderlo la norma bajo examen. Por el contrario, la posible comisión de una falla por parte del administrador de justicia que conlleve la responsabilidad patrimonial del Estado, debe ser estudiada desde una perspectiva funcional, esto es, bajo el entendido de que al juez, por mandato de la Carta Política, se le otorga una autonomía y una libertad para interpretar los hechos que se someten a su conocimiento y, así mismo, aplicar las normas constitucionales o legales que juzgue apropiadas para la resolución del respectivo conflicto jurídico (Art. 228 C.P.). Dentro de este orden de ideas, se insiste, es necesario entonces que la aplicabilidad del error jurisdiccional parta de ese respeto hacia la autonomía funcional del juez. Por ello, la situación descrita no puede corresponder a una simple equivocación o desacierto derivado de la libre interpretación jurídica de la que es titular todo administrador de justicia. Por el contrario, la comisión del error jurisdiccional debe enmarcarse dentro de una actuación subjetiva, caprichosa, arbitraria y flagrantemente violatoria del debido proceso, que demuestre, sin ningún asomo de duda, que se ha desconocido el principio de que al juez le corresponde pronunciarse judicialmente de acuerdo con la naturaleza misma del proceso y las pruebas aportadas –según los criterios que establezca la ley –, y no de conformidad con su propio arbitrio. En otras palabras, considera esta corporación que el error jurisdiccional debe enmarcarse dentro de los mismos presupuestos que la jurisprudencia, a propósito de la revisión de las acciones de tutela, ha definido como una vía de hecho..."⁷.

Por su parte, el H. Consejo de Estado, es del parecer de que el error judicial no se debe analizar desde la perspectiva de la vía de hecho o de la conducta grosera o arbitraria del funcionario, sino desde la arista del daño antijurídico causado por una providencia proferida soslayando los presupuestos fácticos y desconociendo la normatividad legal:

"El error jurisdiccional que puede generar responsabilidad patrimonial del Estado se presenta cuando con una providencia judicial en firme, y con independencia de si fue proferida con culpa o sin ella, pero que es equivocada porque no se ajusta a la realidad procesal o a la ley, se causa un daño antijurídico que debe ser reparado. Dicho de otro modo, se reitera que la antijuricidad de la conducta o de la omisión que origina el error jurisdiccional no siempre es relevante para la reparación del daño antijurídico, pues debe diferenciarse la causa del error con el error mismo..."

⁶ Corte Constitucional. Sentencia C-037. Febrero 5 de 1996. M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa.

1181
702

7

JUAN PABLO BAENA VÁSQUEZ
ABOGADO

Calle 24 No. 3 – 95, Oficina 901, Edificio Banco de Bogotá, Santa Marta D.T.C.H
Tel. (5) 421 82 90 – Cel. 316 334 28 40
jbaenav@gmail.com

De manera que, al margen de la definición de error jurisdiccional elaborada por el legislador, en tanto que no es norma aplicable al caso concreto y, con fundamento en el artículo 90 de la Constitución, la Sala considera necesario precisar cuáles serán, entonces, las condiciones para estructurar el error jurisdiccional —en la sentencia— que materializará la responsabilidad patrimonial del Estado, a saber:

a) En primer lugar, del concepto mismo, es lógico inferir que el error jurisdiccional debe estar contenido en una providencia judicial que se encuentre en firme. Efectivamente, aun cuando una decisión judicial resulte equivocada, si esta aún puede ser revocada o modificada, el daño no resultaría cierto, pues el error no produciría efectos jurídicos y, además, podría superarse con la intervención del superior funcional. Al margen del asunto sometido a estudio de la Sala, debe recordarse que esta condición fue claramente impuesta por el artículo 66 de la Ley 270 de 1996.

b) Tal y como se deduce de pronunciamientos anteriores de esta sección⁶ - el error jurisdiccional puede ser de orden fáctico o normativo. El primero, supone diferencias entre la realidad procesal y la decisión judicial, porque i) no consideró un hecho debidamente probado o ii) se consideró como fundamental un hecho que no lo era, o se presentan distancias entre la realidad material y la procesal, i) porque no se decretaron pruebas conducentes para determinar el hecho relevante para el derecho o ii) porque la decisión judicial se fundamentó en un hecho que posteriormente se demostró que era falso. El error normativo o de derecho, supone equivocaciones i) en la aplicación del derecho, pues se aplicó al caso concreto una norma que no era relevante o se dejó de aplicar una directa o indirectamente aplicable al mismo y, ii) cuando se aplicaron normas inexistentes o derogadas u otros similares.

c) El error jurisdiccional debe producir un daño personal y cierto que tenga la naturaleza de antijurídico, esto es, que el titular no tenga la obligación jurídica de soportar. Con ello, entonces, se excluyen las decisiones que se mueven en la esfera de lo cuestionable o las sentencias que contienen interpretaciones válidas de los hechos o derechos.

d) La equivocación del juez o magistrado debe incidir en la decisión judicial en firme, pues como bien lo sostiene la doctrina española:

“...el error comentado (judicial) incide exclusivamente en la potestad jurisdiccional que se materializa en la sentencia o resolución —auténtica declaración de voluntad del órgano que ostenta aquella—, siempre ha de consistir en aplicar la norma que a cada supuesto corresponde, el error ha de radicar en un equivocado enjuiciamiento o no aplicación a aquel de la solución únicamente querida por el legislador”⁷.

Frente a estos criterios deberá analizarse la providencia que ordenó ampliar el término de duración del arbitramento referido, para constatar que si bien es cierto que los árbitros que conocieron del arbitraje entre OBRESAN y la Universidad del Magdalena, al proferir el laudo que el Consejo de Estado anuló, estaban ejerciendo función jurisdiccional; no lo es que esa providencia anulada constituya un error jurisdiccional, porque dicho laudo no fue contrario a derecho, ya que como se dejó sentado en el acápite anterior la ampliación del trámite arbitral, con fundamento en el artículo 70 de la ley 80 de 1.993 es absolutamente jurídica, así el Consejo de Estado haya considerado que por tratarse de un arbitraje institucional referido a un contrato sometido al derecho privado no era aplicable la ley 80 de 1.993.

Sobre este tema se volverá, a propósito de estructurar una excepción por inexistencia de los presupuestos legales para configurar el error jurisdiccional.

3.3. LA DIVERGENCIA DE OPINIONES O DE CRITERIOS NO ES CONSTITUTIVA DE ERROR JURISDICCIONAL

⁶ Sentencias de 4 de abril de 2020 y 30 de mayo de 2002

⁷ Consejo de Estado Secc. Tercera. Sentencia de Sentencia de abril 27 de 2006. C. P. Dr. Aller Eduardo Hernández Henríquez; la providencia citada es reiterada por la Sentencia del 5 de diciembre de 2007. Exp. 12.719. C. P. Dr. Ramiro Saavedra Becerra.

JUAN PABLO BAENA VÁSQUEZ

ABOGADO

Calle 24 No. 3 – 95, Oficina 901, Edificio Banco de Bogotá, Santa Marta D.T.C.H

Tel. (5) 421 82 90 – Cel. 316 334 28 40

jbaenav@gmail.com

8

Como se aprecia, si el artículo 70 de la ley 80 de 1.993 es aplicable o no en los tribunales de arbitraje donde concurra una entidad estatal, pero autónoma, es cuestión de interpretación.

La jurisprudencia y la doctrina están de acuerdo en que para que haya error jurisdiccional se requiere que se esté en presencia de una decisión carente de justificación dentro de la normatividad.

De ahí que el simple desacuerdo sobre la interpretación de una norma aplicable a un caso, no se puede enmarcar dentro del ámbito del error jurisdiccional, salvo cuando ese desacuerdo implique que la decisión tomada por el juez ha sido irrazonable al carecer de una justificación dentro de la normatividad. "De ello se desprende que, ante un mismo caso, es jurídicamente posible la existencia de varias soluciones razonables –en cuanto correctamente justificadas– pero diferentes, incluso excluyentes o contradictorias. Tal consideración limita el ámbito dentro del cual puede estimarse que la decisión de un juez incurre en el multicitado error jurisdiccional, toda vez que la configuración de éste ha de tener en cuenta que en relación con un mismo punto de hecho, pueden darse varias interpretaciones o soluciones de Derecho, todas jurídicamente admisibles en cuanto correctamente justificadas. Entonces, sólo las decisiones carentes de este último elemento –una justificación o argumentación jurídicamente atendible– pueden considerarse incursas en error judicial" (CONSEJO DE ESTADO. Sentencia C-15.128 de 2007).

II. SOLICITUD DE PRUEBAS

III.

Se solicita que por el Tribunal se disponga la práctica de las siguientes pruebas:

- a. Requerir a los demandantes para que aporten copia con constancia de su recibo, del escrito mediante el cual solicitaron la nulidad del Laudo arbitral proferido dentro del arbitramento UNION TEMPORAL OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA-OBRESAN vs UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA.

IV. PROPOSICION DE EXCEPCIONES

1ª EXCEPCION. INEXISTENCIA DE LOS PRESUPUESTOS DEL ERROR JURISDICCIONAL. CULPA DE LOS DEMANDANTES

Los presupuestos para la ocurrencia del error jurisdiccional están señalados en la ley estatutaria de administración de justicia (ley 270 de 1.996) así:

ARTÍCULO 67. PRESUPUESTOS DEL ERROR JURISDICCIONAL. El error jurisdiccional se sujetará a los siguientes presupuestos:

1. El afectado deberá haber interpuesto los recursos de ley en los eventos previstos en el artículo 70, excepto en los casos de privación de la libertad del imputado cuando ésta se produzca en virtud de una providencia judicial.
2. La providencia contentiva de error deberá estar en firme

De este texto legal, aplicado al caso, se infiere que no se configuran los presupuestos exigidos por la ley para que se configure el error jurisdiccional.

Primer Presupuesto. No interposición de recursos. Como se ha venido haciendo hincapié, para adoptar la decisión de prorrogar el plazo del arbitramento, tal como se lee en el acta No. 20 de fecha 13 de abril de 2011, el Tribunal discurrió de la siguiente manera:

"Teniendo en cuenta que el término de funcionamiento del Tribunal, que es de seis meses, vence el 24 de abril de 2011, y para esta fecha aún no podrá proferir el Laudo, máxime cuando concederá un término adicional para la

7025
1132

9

JUAN PABLO BAENA VÁSQUEZ

ABOGADO

Calle 24 No. 3 – 95, Oficina 901, Edificio Banco de Bogotá, Santa Marta D.T.C.H

Tel. (5) 421 82 90 – Cel. 316 334 28 40

jbaenav@gmail.com

práctica de pruebas de oficio. Este Tribunal, de conformidad con el inciso cuarto del artículo 70 de la ley 80 de 1.993 procederá a ampliar el término de duración del Tribunal en tres (3) meses, contados a partir del 23 de abril de 2011"

Bajo esa consideración resolvió: **"PRIMERO: Amplíese el termino del presente Tribunal en tres (3) meses, contados a partir del 23 de abril de 2011"**

En la audiencia donde se dictó este auto, se hallaba presente el doctor GABRIEL GONZALEZ BARRAZA, apoderado de la parte convocante, quien nada dijo al respecto, pues como se expresa en la referida acta **"Se deja constancia que las partes no interpusieron recurso alguno contra el proveído anterior"**.

Posteriormente, fuera de audiencia en agosto de 2011, esto es, cuando ya se habían cumplido prácticamente los tres meses dispuestos para la ampliación del término de funcionamiento del Tribunal y estaba por proferirse el laudo, el apoderado de la Universidad del Magdalena presentó un memorial aduciendo que en el auto anterior (de 23 de abril de 2011) se había omitido la expresión **"a solicitud de las partes o de sus apoderados con facultad expresa para ello"**, pues de haberlo hecho la decisión del Tribunal no hubiera sido la de prorrogar el término sino la de declarar la cesación de sus funciones."

Como aparece en el acta número 26 del 22 de agosto del año 2011, el Tribunal para resolver sobre la petición del referido apoderado, transcribió el contenido del artículo 70 de la ley 80 de 1.993, concluyó que era potestad de los árbitros ampliar de oficio dicho término y, por ende, no accedió a declarar el vencimiento del termino fijado para el proceso arbitral. Esta norma, para esa época estaba vigente, pues no había sido derogada, como lo vino a hacer el artículo 118 de la ley 1563 de 2012.

A esta diligencia no concurrió el apoderado de la Universidad del Magdalena, pero sí el de la parte convocante, doctor GABRIEL GONZALEZ BARRAZA. Como la providencia anterior, que denegó suspender las labores del Tribunal, fue notificada en estrados, correspondía a dicho apoderado, si no estaba de acuerdo con la decisión que mantuvo el aplazamiento del termino con fundamento en el artículo 70 de la ley 80 de 1.993, interponer recurso contra la misma; mas como fue así, al no hacerlo la convalidó.

Posteriormente, una vez notificado el laudo, expedido el 22 de agosto de 2011, el apoderado o representante de la parte convocante interpuso el recurso de anulación del laudo, aduciendo dos razones que no tienen relación alguna con el fundamento esgrimido por el Consejo de Estado para la anulación del mismo.

Todo esto conduce a que no se configura el presupuesto contemplado en el numeral primero del artículo 67 de la ley 270 de 1.996.

De otra parte, la no interposición de los recursos, se erige en **culpa exclusiva de la víctima, en cuyo caso, se exonerará de responsabilidad al Estado**, como lo ordena de manera expresa el artículo 70 ley 270 de 1.996, al disponer que:

ARTÍCULO 70. CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA. *El daño se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley. En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado.*

Segundo presupuesto. Falta de firmeza de la providencia supuestamente contentiva de error.

Conforme al numeral del artículo 67 de la ley 270 de 1.996 **"La providencia contentiva del error deberá estar en firme"**.

No se requiere de mayor análisis para establecer que el laudo proferido el día 22 de agosto de 2011, dentro del arbitramento promovido por la UNION TEMPORAL OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARFTA- OBRESAN contra la Universidad del Magdalena, jamás estuvo en firme. Primero, porque al haberse interpuesto en su contra recurso de anulación, no adquirió firmeza; y segundo, porque en virtud de la decisión anulatoria del Consejo de Estado tal laudo desapareció totalmente de la vida jurídica.

10

JUAN PABLO BAENA VÁSQUEZ
ABOGADO

Calle 24 No. 3 – 95, Oficina 901, Edificio Banco de Bogotá, Santa Marta D.T.C.H
Tel. (5) 421 82 90 – Cel. 316 334 28 40
ibaenav@gmail.com

Ello entraña que cuando se incoó la demanda de reparación directa no existía jurídicamente el acto que supuestamente causó los perjuicios cuya indemnización se deprecia. La situación jurídica de las partes volvió a ser la misma que existía antes de proferirse el laudo.

2ª EXCEPCION. INEXISTENCIA DE DOLO O CULPA GRAVE. BUENA FE.

Para que el Estado pueda repetir en el evento de ser condenado a la reparación patrimonial por un daño antijurídico causados por agentes suyos, se requiere que tal daño se haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de tales agentes, como lo dispone el artículo 71 de la ley 270 de 1.996.

El mismo artículo señala que para los efectos indicados se presume que constituye culpa grave o dolo cualquiera de las siguientes conductas:

1. La violación de normas de derecho sustancial o procesal, determinada por error inexcusable.

La lectura del fallo proferido por el Consejo de Estado mediante el cual anuló el laudo arbitral referido simplemente dice que la Universidad del Magdalena es un ente autónomo, excluida del régimen de la ley 80, porque sus contratos son de derecho privado, sin identificar ninguna norma sustancial o procesal que hubiese sido violada, y menos por error inexcusable.

Ya en un capítulo anterior se dejó plasmado que el contrato celebrado por la Universidad del Magdalena con OBRESAN es un contrato estatal, por la calidad de la entidad contratante, el tipo de contrato, de obra; y por la inclusión en él de cláusulas exorbitantes propias del derecho público o de derecho administrativo.

Mucha tinta corrió y muchos fueron los avances legislativos en la pretensión de diferenciar los contratos de derecho privado de los contratos administrativos. Ante la dificultad de precisar cuando el contrato era de derecho administrativo y cuando de derecho privado, la doctrina trató de identificar criterios diferenciadores, tales como **el subjetivo** (jurisdicción), **el formal** (según el procedimiento utilizado para elaborarlo), **el del servicio público** (cuando según Jeze se trata de asegurar el funcionamiento del servicio público, y el de **las cláusulas exorbitantes**, en cuanto en los contratos administrativos se insertan cláusulas que se salen de la órbita del derecho civil y colocan a la administración en un plano de superioridad.

Este último criterio había sido el predominante en la doctrina y la jurisprudencia, aunque puede decirse que ha sido superado, y ha comenzado a perder interés jurídico. Allan Brewer Carías dice que: *"la noción de contrato administrativo solo puede aceptarse para identificar un tipo de contrato de la administración, el cual por la finalidad perseguida por la Administración al contratar, está sometido a un régimen de derecho público, pero no porque tenga un régimen de derecho público por contraposición a otros contratos de la Administración que estarían sometidos a un régimen de derecho privado. Estos últimos, como veremos, no existen; toda la actividad contractual de la Administración es administrativa y está sometida a un régimen mixto de derecho público y de derecho privado. La preponderancia de uno y otros y su utilización regular, es lo que ahora adquiere importancia"*¹⁰.

No nos queda la menor duda de que en el contrato que nos ocupa, tienen preponderancia las normas de derecho público, a las que se acoge en su integridad.

Para uno de quienes responde esta demanda, resulta claro que:

"La noción de contrato estatal que recoge la ley 80 de 1.993 responde a ese criterio unificador. La clasificación de los contratos de la Administración entre contratos administrativos y contratos de derecho privado, contenida en el Título III del decreto 222 de 1.983, ha desaparecido para dar paso al contrato estatal, cuya característica general

¹⁰ Brewer Carías, Allan. El Derecho Administrativo en Latinoamérica, Curso Internacional Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Bogotá, 1.978, pág. 146.

1033 7026

JUAN PABLO BAENA VÁSQUEZ

ABOGADO

Calle 24 No. 3 – 95, Oficina 901, Edificio Banco de Bogotá, Santa Marta D.T.C.H

Tel. (5) 421 82 90 – Cel. 316 334 28 40

jbaenav@gmail.com

11

estarla dada por un sometimiento tanto a las reglas de derecho privado como a las del derecho público, aunque con énfasis en este último”¹¹

Al referirse al régimen contractual de las entidades excluidas de la Ley 80, el Consejo de Estado, recientemente precisó:

Una de las cuestiones contractuales más complejas que vive la Administración pública moderna consiste en comprender el régimen de las entidades excluidas de la Ley 80 de 1993...., cuya dificultad estriba, precisamente, en establecer el alcance de la competencia para contratar que tiene esta clase de entidades.

Precisamente, en este contexto conviene hacer las precisiones que siguen, para enfocar correctamente cualquier problema contractual de una entidad excluida de la Ley 80.

Para empezar, y en primer lugar, se señala que el régimen contractual no es exclusivamente el derecho privado, sino una combinación de éste con los principios de la función administrativa. Esta conclusión aplica tanto a partir de la vigencia del artículo 13 de la Ley 1150 de 2007 –norma en la cual el legislador positivizó esta idea-, como desde antes, cuando la doctrina y la jurisprudencia, aplicando los principios generales del derecho, llegaron a esta conclusión¹².

Lo anterior evidencia que si cinco años después de proferido el laudo arbitral de marras, el Consejo de Estado tiene que hacer precisiones acerca de los problemas a que da lugar la existencia de entidades excepcionadas del régimen contractual de la ley 80, **el error de apreciación o interpretación sobre la naturaleza jurídica del contrato suscrito entre la Universidad del Magdalena y OBRESAN no es inexcusable**, y que, por el contrario, el Tribunal actuó con absoluta buena fe, que es un valor constitucional supremo; y estuvo animado por el principio de la eficacia de la justicia.

A esa buena fe contribuyó la presencia del Ministerio Público durante el proceso del arbitramento, concretamente en la audiencia donde se suspendió el proceso con fundamento en la ley 80 de 1.993; y con la presentación del alegato visible a los folios 483y siguientes, antes de proferirse el laudo.

Adicionalmente, el Consejo de Estado....¹³ con ponencia de la Magistrada MYRIAM GUERRERO DE ESCOBAR, al conocer de la legalidad de un laudo proferido dentro de un arbitramento celebrado por las controversias a que dio lugar la ejecución de un contrato celebrado entre el Banco de la República y la sociedad H. Rojas y Asociados, se pronunció diciendo que ese contrato, no obstante que una de sus partes (el Banco de la República) el cual, de conformidad con lo prescrito por el artículo 371 de la Constitución Política “...un órgano autónomo, instituido como persona jurídica de derecho público, que no hace parte de ninguna de las ramas del poder público ni de los órganos de control, con autonomía administrativa, patrimonial y técnica...sometido a un régimen jurídico propio.”, era un contrato estatal. Dijo al efecto que “...los contratos regidos por la ley 80 de 1.993 y los celebrados bajo el amparo del derecho común... **Ambos tienen la naturaleza de contratos estatales, no obstante encontrarse regidos por dos ordenamientos jurídico-sustantivo diferentes**” [1]

En esta misma providencia se invocó como precedente judicial, un auto dictado por la misma Sección Tercera el 8 de febrero de 2001, donde se dijo que los contratos celebrados por las empresas de servicios públicos eran contratos estatales. En ese auto aunque se distinguió entre **contratos estatales propiamente dichos**, que son aquellos que se celebran por las entidades públicas a que se refiere la ley 80 de 1.993 y **contratos especiales sujetos a un régimen legal propio**, se concluyó diciendo que :

¹¹ Polo Figueroa, Juan Alberto. “Elementos de Derecho Administrativo” 2ª. Edición, abril de 2001, pág. 286

¹² Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 24 de abril de 2016, M.P. Dra. Marta Nubia Velásquez Rico.

¹³ En el auto que denegó dar por terminado el arbitramento se hizo mención al fallo del día 31 de diciembre de 2010 (o el 17 de marzo de 2010), dentro del proceso 11001-03-26-000-2009-00045-00(36838). Me lo están buscando, porque no fue publicado y en estos días me llega. Servirá para agregar una causal a la buena fe.

JUAN PABLO BAENA VÁSQUEZ
ABOGADO

Calle 24 No. 3 – 95, Oficina 901, Edificio Banco de Bogotá, Santa Marta D.T.C.H
Tel. (5) 421 82 90 – Cel. 316 334 2840
ibaenav@gmail.com

12

"De lo anterior es jurídicamente viable considerar que la categoría "contratos estatales" no puede quedar exclusivamente referida a los actos contractuales que celebren las entidades del Estado relacionadas en la ley 80 de 1.993 sino que habría que reconocer que desde el punto de vista material y técnico formal, constituye una acertada categoría jurídica que tiene la virtud de englobar todos los contratos que celebren las entidades públicas del Estado, ya sea que se regulen por el Estatuto General de Contratación Administrativa o que estén sujetos a regímenes especiales".

En el auto que denegó la solicitud de terminación, sin laudo del arbitramento, que hizo el apoderado de la convocada, la Universidad del Magdalena, se tuvo en cuenta esta providencia como fundamento jurídico, pues si mutatis mutandi tal contrato era estatal, tenía cabida respecto de él el artículo 70 de la ley 80 de 1.993, que en inciso cuarto establecía que "Los árbitros podrán ampliar el término de duración del tribunal por la mitad del inicialmente acordado o legalmente establecido, si ello fuere necesario para la producción del laudo respectivo".

3ª. EXCEPCION. INEXISTENCIA DE PERJUICIOS

Los demandantes no ha recibido perjuicio alguno por la anulación del laudo arbitral ni aportan elementos de juicio ni solicitan pruebas que tiendan a demostrarlo.

Es evidente que ellos cuantifican tales perjuicios utilizando los valores reconocidos en el laudo arbitral anulado, como puede verse en el siguiente cuadro:

PERJUICIOS POR DAÑO EMERGENTE¹⁴

Razón del perjuicio	Valor perjuicios demandados	Reconocidos en laudo	Observaciones
Obras pendientes por legalizar	67.192.800,00	67.192.800,00	Valores idénticos
Mora en el pago del valor del contrato	17.565.510,72	17.565.510,72	Valores idénticos
Mayor permanencia en obra	244.419.05,00	244.419.095,00	Valores idénticos
Costos del proceso	62.511.880,00	62.511.880,00	Valores idénticos
Agencias en derecho	26.000.000,00	26.000.000,00	Valores idénticos

En gracia de discusión, los únicos perjuicios que hubiera podido acarrearles el laudo arbitral, serían los que en la demanda se enlistan como lucro cesante, a saber:

Pago de honorarios de abogado	120.000.000,00
Pago de solicitud arbitral	1.195.800
Pago gastos 50% funcionamiento del Tribunal	30.957,240
Pago de honorarios de peritos	4.463.332,00
Protocolización del laudo	6.852.389,00

No obstante, los honorarios de abogado no están demostrados; y de los honorarios a los peritos, éstos devolvieron la mitad de los mismos en acatamiento de la ley. Tales honorarios, junto con la protocolización del expediente, forman parte de los gastos del proceso; y en todo caso, deberán ser legalmente comprobados.

4ª EXCEPCION. IMPROCEDENCIA DE LA ACCION INCOADA POR LA EXISTENCIA DE OTROS MEDIOS DE DEFENSA

La ley 1563 de 2012, en su artículo 110, establece los efectos que se derivan de la anulación de un laudo arbitral, como al que se ha hecho referencia, y a tal propósito preceptúa:

¹⁴ Estos valores difieren de los presentados tanto en la solicitud de conciliación como en la demanda del arbitraje y en su corrección (folios 189 y siguientes)

1034 1027

JUAN PABLO BAENA VÁSQUEZ
ABOGADO

13

Calle 24 No. 3 – 95, Oficina 901, Edificio Banco de Bogotá, Santa Marta D.T.C.H
Tel. (5) 421 82 90 – Cel. 316 334 28 40
jbaenav@gmail.com

Artículo 110 Efectos del recurso de anulación. Cuando prospere alguna de las causales señaladas en el numeral 1 literal a), del artículo 108 se declarará la nulidad del laudo y las partes podrán acudir ante la autoridad judicial competente. Cuando prospere alguna de las causales señaladas en el numeral 1 literal b), c) y d), del artículo 108 se declarará la nulidad del laudo, sin que ello perjudique el acuerdo de arbitraje. Cuando prospere alguna de las causales señaladas en el numeral 2 del artículo 108 se declarará la nulidad del laudo. En caso de anulación del laudo, las pruebas practicadas en el curso del trámite arbitral podrán ser apreciadas bien por tribunal arbitral o bien por la autoridad judicial"

Este texto demuestra que anulado el laudo, el acuerdo de arbitraje se mantiene vigente; y que los demandantes, esto es, OBRESAN, tienen la oportunidad de acudir ante la "autoridad judicial competente", que bien podría ser otro tribunal de arbitramento; y no a la acción de reparación directa.

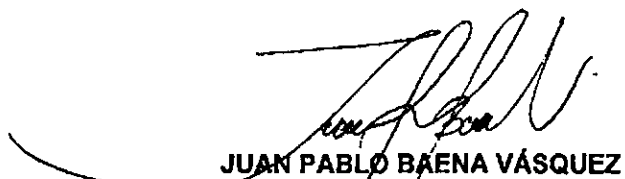
PETICIÓN

Con fundamento en lo expuesto, en representación del señor MIGUEL ANGEL POLO CAMPO, solicito a los Magistrado del Tribunal Administrativo del Magdalena denegar las pretensiones de la demanda.

NOTIFICACIONES

La recibiré en el correo electrónico jbaenav@gmail.com o en la dirección Calle 24 No. 3 – 95, Oficina 901, Edificio Banco de Bogotá en la ciudad de Santa Marta D.T.C.H. (Magdalena)

Atentamente,


JUAN PABLO BAENA VÁSQUEZ
C.C. No. 1.032.369.977 de Bogotá
T.P. 195.341

Curador Ad Litem del Señor MIGUEL ANGEL POLO CAMPO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA	
FECHA:	29 SEP 2019
HORA:	10:09 am.
FOLIOS:	13
FIRMA:	Daniela Rf



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA
SECRETARIA GENERAL

INCLUSION EN LISTA TRASLADO EXCEPCIONES ART. 175 C.P.A.CA.

<i>RAD.</i>	<i>Medio de Control</i>	<i>Demandante</i>	<i>Demandado</i>	<i>Fecha Public.</i>	<i>Vence</i>	<i>MP</i>
2018-00082	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	HIMELDA ISABEL LIÑAN	NACION-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO DE PRESTACIONESSOCIALES - FOMAG	30/10/2019	5/11/2019	MMJ
2019-00203	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	HERCILIA DEL ROSARIO PABON DE LOPEZ	NACION-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO DE PRESTACIONES-FOMAG	30/10/2019	5/11/2019	MMJ
2018-00357	REPARACION DIRECTA	ALEX ALBERTO FERNANDEZ HARDING	NACION-RAMA JUDICIAL-DIRECCION EJECUTIVA	30/10/2019	5/11/2019	MMJ
2019-00186	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	AIDA MARIA OSPINO PATIÑO	NACION-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO DE PRESTACIONES	30/10/2019	5/11/2019	MMJ
2014-00241-00	REPARACION DIRECTA	OBRESAN	NACION-MINISTERIO DE JUSTICIA Y OTROS	30/10/2019	5/11/2019	MMJ
2017-00031	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	GLORIA ISABEL FLOREZ DE PATIGNO	NACION-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	30/10/2019	5/11/2019	MMJ

2016-00212-00	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	UNIDAD DE GESTION PENSIONAL-UGPP	BERTA JOELANIS RODRIGUEZ	30/10/2019	5/11/2019	MMJ
2018-00332	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	COLPENSIONES	ORLANDO RAFAEL CORTEZ MOZO	30/10/2019	5/11/2019	MMJ
2015-00164	ACCION DE GRUPO	ARTURO PEDROZA GUERRERO Y OTROS	YUMA CONCESIONARIA S.A.	30/10/2019	5/11/2019	MMJ
2019-00058	NULIDAD	JEAN CARLOS JIMENEZ FUENTES	UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA	30/10/2019	5/11/2019	MMJ

CONSTANCIA: Hoy, treinta (30) de octubre de dos mil diecinueve (2019) a las ocho de la mañana (8:00.a.m.), se fija la presente lista en lugar visible de la secretaria de la Corporación, por el término legal de un día (1), tal como dispone el artículo 110 del C.G.P. en concordancia con el artículo 233, del C. P.A.C.A.

JAIME ORTIZ ROMERO

Secretario

1136 7029



1137
1030
197

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA

SECRETARÍA GENERAL

Ley 1437 de 2011

11/feb/2020
3:00 pm
OK.

RADICACIÓN: 47-001-2333-000-2014-00241-00
DEMANDANTE: UNIÓN TEMPORAL OBRAS ESPECIALES DE
SANTA MARTA
DEMANDADO: NACIÓN – MINISTERIO DE JUSTICIA –
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA – CENTRO DE
CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA CÁMARA DE
COMERCIO DE SANTA MARTA Y OTROS
MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA

PASA AL DESPACHO

De la Magistrada Maribel Mendoza Jiménez, hoy quince (15) de noviembre de dos mil diecinueve (2019), el expediente de la referencia, informándole que se encuentra vencido el término de contestación de la demanda y que de las excepciones formuladas por el Dr. Juan Pablo Baena Vásquez en su calidad de curador Ad Litem del señor Miguel Ángel Polo Campo, se corrió traslado a la contraparte; encontrándose pendiente en consecuencia, fijar fecha para la celebración de audiencia inicial.

Sírvase proveer.

Anexo:

Un cuaderno No. 2 del folio 539 al 1029 y 9 CD's.

Un cuaderno No. 1 con 568 folios.


JAIME ORTIZ ROMERO
SECRETARIO



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA
Magistrada sustanciadora: MARIBEL MENDOZA JIMÉNEZ

Santa Marta D.T.C.H., Diecinueve (19) de diciembre de dos mil diecinueve (2019)

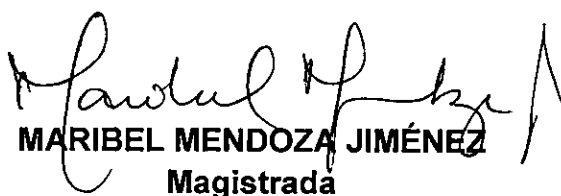
RADICADO: 47-001-2333-003-2014-00241-00
DEMANDANTE: UNIÓN TEMPORAL OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA – OBRESAN
DEMANDADO: NACIÓN – MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO – CÁMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA – CENTRO DE ARBITRAJE Y AMIGABLE COMPOSICIÓN UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA Y OTROS
MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA
ASUNTO: FIJA FECHA CONTINUACIÓN AUDIENCIA INICIAL

Procede el Despacho a fijar fecha para la continuación de la audiencia inicial de que trata el artículo 180 del C.P.A.C.A.; en consideración a que dicha diligencia realizada el 7 de marzo de 2017, se había suspendido para efectos de conformar el litisconsorte necesario dentro del proceso de la referencia. Como quiera que, mediante proveído de 6 de agosto de 2019, se nombró como curador ad litem del señor Miguel Ángel Polo Campo y que el mismo asumió la defensa de dicho litisconsorte.

En virtud de lo anterior se **DISPONE:**

- 1.- Señalar el día once (11) de febrero de dos mil veinte (2020) a las tres de la tarde (3:00 pm) efectos de llevar a cabo continuación audiencia inicial en el proceso de la referencia.
- 2.- Contra el presente auto no procede ningún recurso de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 180 del C.P.A.C.A.
- 3.-Por Secretaría notifíquese la presente providencia por estado electrónico.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

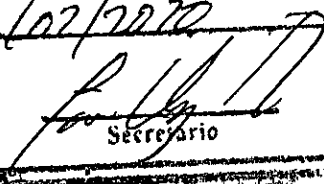

MARIBEL MENDOZA JIMÉNEZ
Magistrada

TRIBUNAL CONSEJO
ADMINISTRATIVO DEL MUNICIPIO DE LENA
SECRETARIA GENERAL

NOTIFICACION POR ESTADO ELECTRÓNICO
CERTIFICACION

El auto anterior se notificó POR ANOTACION EN
ESTADOS ELECTRÓNICOS No. 002

14/02/2020


Secretario

1139
1032

Tribunal 03 Administrativo - Magdalena - Santa Marta

De: postmaster@Chubb.com
Para: ana.ussa@acegroup.com
Enviado el: miércoles, 22 de enero de 2020 6:30 p. m.
Asunto: No se puede entregar: [EXTERNAL] Comunicación providencia 2014-241

No se ha podido realizar la entrega a estos destinatarios o grupos:

ana.ussa@acegroup.com (ana.ussa@acegroup.com)

No se encontró la dirección de correo electrónico especificada. Compruebe la dirección de correo electrónico del destinatario e intente enviar de nuevo el mensaje. Si el problema continúa, póngase en contacto con el departamento de soporte técnico.

Información de diagnóstico para los administradores:

Generando servidor: Chubb.com

ana.ussa@acegroup.com
#550 5.1.1 RESOLVER.ADR.RecipNotFound; not found ##

Encabezados de mensajes originales:

Received: from NAM11-CO1-obe.outbound.protection.outlook.com (10.1.2.131) by
mail.acegroup.com (10.16.183.173) with Microsoft SMTP Server (TLS) id
14.3.439.0; Wed, 22 Jan 2020 18:30:07 -0500
ARC-Seal: i=2; a=rsa-sna256; s=arcselector9901; d=microsoft.com; cv=fail;

b=Jo5iEbAVHswQurOd3IscLUouqd9QIBWQTu3IJzpn+DE+X0qAmXBp31VM88tgM1saEojZljVH8Fb7JzvFxzKj1+9KY3GbE7ri
Quq0wzJTvii69/tzCtu2qvUpa/Ua3FSmsz+0adf6EKOXguP7l6K/acG+p/zFAhU3+Jz05DWS8dtAQjWdLjvRkLjRYS/XffgXQQBs
MDoMIU8QVjvj+dPTCbvo7T2+Gk7M0HcocCRNfDIKfkrnK0a0pgjo8bneeDa3igbCjgiIpsGJcSaSgYgXA6z5UN1KD4ayIo8IkbQz
umi2vcKMwPGcytFIN5h0Uu5v9T3PyAlfyte65o/9k6FIg==

ARC-Message-Signature: i=2; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=microsoft.com;
s=arcselector9901;
h=From:Date:Subject:Message-ID:Content-Type:MIME-Version:X-MS-Exchange-SenderADCheck;
bh=nzmo1vgi84fDEPXhsavfJP6QElnlbDst6f6w5+V1jtc=;

b=hqlgapKZ8Wqp2CYSd895mo8U66Hg9kIWLIu48+9HhdWFLXKRGbD2yd6X2t+iufzmHgN9qeZo7LiqH311aqvfN49t3n7aMK
0GJvW3CdZS7RbniGzh5D+Y0OZtcnbcN3TTPpd9jpKoGIHc8qqsFwq6nYffonqg1vqKXEwekpmDCWzUGCCe6D7yS6p237IVp+
dtPANxbZjQ4H3mGCUmA1NPMotFYzY6Me8nXXobVscjaWdve8dL1o+xUT1kr+Ha859RO4JULnANiYqXvjZYFLmGa/zDB00tPr
KR7MQLunnpsojpMulAgqiJVVWtv/qEUH9B8X+kZfOiOhX/mqg6JQRh+oA==

ARC-Authentication-Results: i=2; mx.microsoft.com 1; spf=fail (sender ip is
148.163.150.102) smtp.rcpttodomain=acegroup.com
smtp.mailfrom=cendoj.ramajudicial.gov.co; dmarc=fail (p=quarantine
sp=quarantine pct=100) action=quarantine
header.from=cendoj.ramajudicial.gov.co; dkim=fail (signature did not verify)
header.d=cendoj.ramajudicial.gov.co; arc=fail (48)

Received: from MN2PR19CA0030.namprd19.prod.outlook.com (2603:10b6:208:178::43)
by BN6PR19MB1442.namprd19.prod.outlook.com (2603:10b6:404:12c::23) with
Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2,
cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) id 15.20.2644.23; Wed, 22 Jan
2020 23:30:03 +0000

Received: from SN1NAM01FT020.eop-nam01.prod.protection.outlook.com
(2a01:111:f400:7e40::202) by MN2PR19CA0030.outlook.office365.com
(2603:10b6:208:178::43) with Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2,
cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) id 15.20.2644.21 via Frontend
Transport; Wed, 22 Jan 2020 23:30:03 +0000
Authentication-Results: spf=fail (sender IP is 148.163.150.102)

1140
1030

smtp.mailfrom=cendoj.ramajudicial.gov.co; acegroup.com; dkim=fail (signature did not verify) header.d=cendoj.ramajudicial.gov.co; acegroup.com; dmarc=fail action=quarantine header.from=cendoj.ramajudicial.gov.co; compauth=none reason=451

Received-SPF: Fail (protection.outlook.com: domain of cendoj.ramajudicial.gov.co does not designate 148.163.150.102 as permitted sender) receiver=protection.outlook.com; client-ip=148.163.150.102; helo=mx0a-002a5f01.pphosted.com;

Received: from mx0a-002a5f01.pphosted.com (148.163.150.102) by SN1NAM01FT020.mail.protection.outlook.com (10.152.65.195) with Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2, cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) id 15.20.2665.18 via Frontend Transport; Wed, 22 Jan 2020 23:30:02 +0000

Received: from pps.filterd (m0129790.pops.net [127.0.0.1]) by mx0a-002a5f01.pphosted.com (8.16.0.42/8.16.0.42) with SMTP id 00MNPJgH001293 for <ana.ussa@acegroup.com>; Wed, 22 Jan 2020 23:30:01 GMT

Authentication-Results-Original: pps.net; spf=pass smtp.mailfrom=tadtvo03mag@cendoj.ramajudicial.gov.co; dkim=pass header.s=selector1 header.d=cendoj.ramajudicial.gov.co

Received: from nam04-sn1-obe.outbound.protection.outlook.com (mail-eopbgr700047.outbound.protection.outlook.com [40.107.70.47]) by mx0a-002a5f01.pphosted.com with ESMTP id 2xpyu3g2df-1 (version=TLSv1.2 cipher=ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 bits=256 verify=NOT) for <ana.ussa@acegroup.com>; Wed, 22 Jan 2020 23:30:00 +0000

ARC-Seal: i=1; a=rsa-sha256; s=arcselector9901; d=microsoft.com; cv=none;

b=dYhI1mFhiyXwOzxsunikt4gLRh0hs+Rus6KPEV2gCGSGI8qhMu8+P2+0feFyObybLqN34fjZCpo8+h9O+/ffqJF6ObJx1oPbLzXQfSnzXY/XPcn9hCEGPrj8LcN5nkj7IT7doF8tFRCzeDX5sJBEGYxs5RsheRkBS2CizLLm30y1ostJCeDrNUm3z9oZxDT1RBQIzMf0O4w/GSTt5LHKFXmspdMGXpG//pc2HpgK5xLd8psgSY1ZI3Av6wRoBbcgdN8JNevGsElp7KQ1wn1TVzAjW2Wg14K/weslBftCw3DPYlpthv9I7GJ/zhrpPE23q9CzcroPLjRG4LyExsL9NQ==

ARC-Message-Signature: i=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=microsoft.com; s=arcselector9901;

h=From:Date:Subject:Message-ID:Content-Type:MIME-Version:X-MS-Exchange-SenderADCheck; bh=nzmo1vgi84fDEPXhsavfJP6QElnlbDst6f6w5+V1jtc=;

b=hS6ZJYEA15VCYUb/IAPVWPP7rVePGG8ILIVfU0bFSXbk3IVNuMSRx9+Rc7124PSCCKVnx5cfbZ9Q5RXtDFpyrKct3FIekmLcELoyID9WuXXGnb+KFFB+FF2jEjNBjsZZoNg21uy6wXErDXYyIiyqqr9GOFIj/tbGYg6eZxpX5dio3138NQnhXtthAC6Rwlmez84h1TXU3M8kcfshyIP5nyeQWBozVIyZOSzc1rB9dDiHBu1G3FG1Jri7PXDIRf52XO6+HTVPBbv4PURzV7gWX+jaxHaTWhlyLo81DUfNYZeNR55HBA7x37mbMRYqRSjiFu4c7f/refbTptY2B/J7w==

ARC-Authentication-Results: i=1; mx.microsoft.com 1; spf=pass smtp.mailfrom=cendoj.ramajudicial.gov.co; dmarc=pass action=none header.from=cendoj.ramajudicial.gov.co; dkim=pass header.d=cendoj.ramajudicial.gov.co; arc=none

DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=cendoj.ramajudicial.gov.co; s=selector1;

h=From:Date:Subject:Message-ID:Content-Type:MIME-Version:X-MS-Exchange-SenderADCheck; bh=nzmo1vgi84fDEPXhsavfJP6QElnlbDst6f6w5+V1jtc=;

b=tq3xvgN791ydLp1IHqDONK4tmfQH1rnmvL71UqiDLDva917/kATKZtE8AsWGS00jhhkFwvVTRRIhebVERQPA/kiLJT5Zmi3ApgSmlD7RRWJXPcm8cUu6md7PkaCOVP7uaUaaykIIVYyIhLVY6zoMjSIOW6at8fp+XUaze0xU8oc=

Received: from BYAPR01MB4247.prod.exchangelabs.com (52.135.236.211) by BYAPR01MB4710.prod.exchangelabs.com (20.177.224.89) with Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2, cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) id 15.20.2644.24; Wed, 22 Jan 2020 23:29:57 +0000

Received: from BYAPR01MB4247.prod.exchangelabs.com ([fe80::59a6:a49:c1e3:c140]) by BYAPR01MB4247.prod.exchangelabs.com ([fe80::59a6:a49:c1e3:c140%7]) with mapi id 15.20.2644.027; Wed, 22 Jan 2020 23:29:57 +0000

From: Tribunal 03 Administrativo - Magdalena - Santa Marta <tadtvo03mag@cendoj.ramajudicial.gov.co>

To: "alejocorman@gmail.com" <alejocorman@gmail.com>, "jpolofigueroa@gmail.com" <jpolofigueroa@gmail.com>, "?iso-8859-1?Q?PROCURADUR=CDA155_JUDICIAL_II?=" <procuraduria155@gmail.com>, "procuraduria43@gmail.com" <procuraduria43@gmail.com>, "procuraduria52@gmail.com" <procuraduria52@gmail.com>, "secretariajuridica@ccsm.org.co" <secretariajuridica@ccsm.org.co>, "dianaboveamendinueta@hotmail.com" <dianaboveamendinueta@hotmail.com>, "jbaenav@gmail.com" <jbaenav@gmail.com>, "cristianccj@hotmail.com" <cristianccj@hotmail.com>, "resemberr@yahoo.es" <resemberr@yahoo.es>, "notificacionjudicial@unimagdalena.edu.co" <notificacionjudicial@unimagdalena.edu.co>, "miguelpolocampo@gmail.com" <miguelpolocampo@gmail.com>, "claudiakatime@yahoo.com"

Tribunal 03 Administrativo - Magdalena - Santa Marta

1034
1141

De: Microsoft Outlook
Para: camarasm@ccsmorg.co
Enviado el: miércoles, 22 de enero de 2020 6:30 p. m.
Asunto: No se puede entregar: Comunicación providencia 2014-241

No se pudo entregar a estos destinatarios o grupos:

camarasm@ccsmorg.co (camarasm@ccsmorg.co)

El mensaje no se pudo entregar. El sistema de nombres de dominio (DNS) ha informado que el dominio del destinatario no existe.

Póngase en contacto con el destinatario por algún otro medio (por teléfono, por ejemplo) y pídale que le diga a su administrador de correo electrónico que parece que su dominio no está registrado correctamente en el registrador de dominios. Proporcione los detalles del error que se muestran a continuación. Es probable que el Administrador de correo electrónico del destinatario sea el único que puede solucionar este problema.

Para obtener más información y consejos para solucionar este problema, vea este artículo:
<https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=389361>.

Información de diagnóstico para los administradores:

Generando servidor: BYAPR01MB4710.prod.exchangelabs.com

camarasm@ccsmorg.co

Remote Server returned '550 5.4.310 DNS domain ccsmorg.co does not exist [Message=InfoDomainNonexistent]
[LastAttemptedServerName=ccsmorg.co] [SN1NAM04FT051.eop-NAM04.prod.protection.outlook.com]'

Encabezados de mensajes originales:

ARC-Seal: i=1; a=rsa-sha256; s=arcselector9901; d=microsoft.com; cv=none;

b=dYhI1mFhiyXwOzxsunikT4gLHr0hs+Rus6KPEV2gCGSGI8qhMu8+P2+0feFyObybLqN34fjZCpo8+h9O+/ffqJF6ObJx1oPbL
zXQfSnzXY/XPcn9hCEGPrj8LcN5nkj7iT7doF8tFRCzeDX5sJBEGYxs5RsheRkBS2CizLLm30y1ostJCeDrNUm3z9oZxDT1RBQIzM
f0O4w/GSTt5LHKFXmspdMGXpG//pc2HpgK5xLd8psgSY1Z13Av6wRoBbcgdN8JNevGsElp7KQ1wn1TVzAjW2Wg14K/wesIBft
Cw3DPYlpthv9I7GJ/zhrpPE23q9CzcroPLjRG4LyExsL9NQ==

ARC-Message-Signature: i=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=microsoft.com;
s=arcselector9901;

h=From:Date:Subject:Message-ID:Content-Type:MIME-Version:X-MS-Exchange-SenderADCheck;
bh=nzmo1vgi84fDEPXhsavfJP6QElnlbDst6f6w5+V1jtc=;

b=hS6ZJYEA15VCYUb/IApVWPP7rVePGG8ILIVfU0bFSXbK3IVNuMSRx9+Rc7124PSCCKVnx5cfbZ9Q5RXtDFpyrKct3FIekmLc
ELoyID9WuXXGnb+KFFB+FF2jEjNBjsZZoNg21uy6wXErDXyyIiyqqr9GOfIJ/tbGYg6eZXpX5dio3138NQnhXtthAC6Rwlmez84hl
1TXU3M8kcfshyIP5nyeqWBozVIyZOSzc1rB9dDiHBu1G3FG1Jri7PXDIR52XO6+HTVPBbv4PURzV7gWX+jaxHaTWWhlyLo81D
UfNYZeNR55HBA7x37mbMRYqRSjiFu4c7f/refbTptY2B/J7w==

ARC-Authentication-Results: i=1; mx.microsoft.com 1; spf=pass
smtp.mailfrom=cendoj.ramajudicial.gov.co; dmarc=pass action=none
header.from=cendoj.ramajudicial.gov.co; dkim=pass
header.d=cendoj.ramajudicial.gov.co; arc::none

1035
142

De: Microsoft Outlook
Para: resemberr@yahoo.es
Enviado el: miércoles, 22 de enero de 2020 6:30 p. m.
Asunto: No se puede entregar: Comunicación providencia 2014-241

No se pudo entregar el mensaje a resemberr@yahoo.es.

Cuando Office 365 intentó enviar el mensaje, el servidor de correo electrónico de recepción externo a Office 365 informó de un error.

Solución

Consulte el "Error detectado" en la sección "Detalles del error" que se muestra a continuación para obtener más información sobre el problema. El error podría indicar el origen del problema y cómo solucionarlo. Por ejemplo, si el error indica que el mensaje se bloqueó debido a un posible virus o porque el tamaño del mensaje era superior a lo permitido, intente volver a enviar el mensaje sin datos adjuntos.

Si no puede solucionar el problema, es probable que solo el administrador de correo electrónico del destinatario pueda solucionarlo. Póngase en contacto con el destinatario por otros medios (por ejemplo, por teléfono) y pídale que informe del problema a su administrador de correo electrónico. Proporcione el "Error detectado" de la sección "Detalles del error" que encontrará a continuación.

¿Le resultó útil esta información? Envíe sus comentarios a Microsoft.

Más información para los administradores de correo electrónico
Código de estado: 550 5.0.350

El error detectado por el servidor de recepción no era lo suficientemente específico para determinar la naturaleza exacta del problema. Estos errores suelen indicar que el mensaje infringe una configuración de directiva o de seguridad de los servidores de correo electrónico del destinatario.

Si el remitente no puede solucionar el problema modificando el mensaje, es probable que el problema solo lo pueda solucionar el administrador de correo electrónico del destinatario. Intente lo siguiente:

Consulte el error para obtener información sobre el problema: el "Error detectado" devuelto por el servidor de correo electrónico externo se muestra en la sección "Detalles del error" a continuación. Este error podría indicar la causa del problema y proporcionar sugerencias para solucionarlo. Por ejemplo, si el error indica que el mensaje se rechazó debido a un problema del marco de directivas de remitente (SPF), tendrá que trabajar con el registrador de dominios para configurar correctamente los registros SPF del dominio.

Consulte el error para obtener información sobre el origen del problema: por ejemplo, busque un nombre de dominio como contoso.com. Un nombre de dominio en el error puede sugerir quién es el responsable del error. Podría ser el servidor de correo electrónico del destinatario, o bien un servicio de terceros que su organización o la organización del destinatario usen para procesar o filtrar mensajes de correo electrónico.

1148
1034

Si no puede corregir el problema, póngase en contacto con el administrador de correo electrónico de la parte responsable: indíqueles el código de error y el mensaje de error de este informe de no entrega (NDR) para ayudarles a solucionar el problema. Por problemas de seguridad o infracción de directiva, puede que sea suficiente agregar el dominio o las direcciones IP de su organización a la lista de remitentes permitidos de la parte responsable.

Es probable que solo el administrador de correo electrónico del destinatario pueda solucionar el problema. Es poco probable que el soporte de Office 365 pueda ayudarle a solucionar este tipo de errores detectados externamente.

Detalles del mensaje original

Fecha de creación: 22/01/2020 11:29:56 p. m.
Dirección del remitente: tadtvo03mag@cendoj.ramajudicial.gov.co
Dirección del destinatario: resemberr@yahoo.es
Asunto: Comunicación providencia 2014-241

Detalles del error

Error detectado: 550 5.0.350 Remote server returned an error -> 554 delivery error: dd This user doesn't have a yahoo.es account (resemberr@yahoo.es) [-9] - mta1081.mail.ir2.yahoo.com
DSN generado por: BYAPR01MB4710.prod.exchangelabs.com
Servidor remoto: mta1081.mail.ir2.yahoo.com

Salto del mensaje

SALTÓ HORA (UTC) DE PARA CON TIEMPO DE RETRANSMISIÓN
1 22/01/2020
11:29:57 p. m. BYAPR01MB4247.prod.exchangelabs.com
BYAPR01MB4247.prod.exchangelabs.com mapi 1 s
2 22/01/2020
11:29:57 p. m. BYAPR01MB4247.prod.exchangelabs.com
BYAPR01MB4710.prod.exchangelabs.com Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2,
cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) *

Encabezados del mensaje original

ARC-Seal: i=1; a=rsa-sha256; s=arcselector9901; d=microsoft.com; cv=none;

b=dYhI1mFhiyXwOzxsunikT4gLHrChs+Rus6KPEV2gqgSGI8qhMu8+P2+0feFyObybLqN34fjZCpo8+h90+/ffqJF
6ObJx1oPbLzXQfSnzXY/XPcn9hCEGPrj8LcN5nkj7i7dof8tFRCzeDX5sJBEGYxs5RsheRkBS2CizLLm30ylostJ
CeDrNum3z9cZxDT1RBQ1zMF004w/GSTt5LHKFXmspdMGXpG//pc2HpgK5xLd8psgSY1Z13Av6wRoBbcgdN8JNevGs
Elp7KQ1wn1TVzAjW2Wg14K/wes1BftCw3DPYlpthv9I7GJ/zhrpPE23q9CzcroPLjRG4LyExsL9NQ==

ARC-Message-Signature: i=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=microsoft.com;
s=arcselector9901;

h=From:Date:Subject:Message-ID:Content-Type:MIME-Version:X-MS-Exchange-SenderADCheck;
bh=rzmolvgi84fDEPXhsavfJP6QElnlbDst6f6w5+V1jtc=;

b=hS6ZJYEA15VCYub/1ApVWPP7rVePGG81LIVfU0bFSXbK3IVNuMSRx9+Rc7124PSCCKVnx5cfbZ9Q5RXtDFpyrKc
-3F7ekmLcELoyID9WuXXGnb+KFFB+FF2jEjNBjsZZoNg21uy6wXErDXyyIiyqqr9G0fIJ/tbGYg6eZXpX5dio3138
NqnhXtthAC6Rwlmez84hl1TXU3M8kcfshyIP5nyeqWBozVIyZOSzclrB9dDiHBulG3FG1Jri7PXD1Rr52X06+HTVP
Bbv4PURzV7gWX+jaxHatWhlyLo81DUfNYZeNR55HBA7x37mbMRYqRSjiFu4c7f/refbTptY2B/J7w==

ARC-Authentication-Results: i=1; mx.microsoft.com 1; spf=pass
smtp.mailfrom=cendoj.ramajudicial.gov.co; dmarc=pass action=none
header.from=cendoj.ramajudicial.gov.co; dkim=pass
header.d=cendoj.ramajudicial.gov.co; arc=none

DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed;
d=cendoj.ramajudicial.gov.co; s=selector1;
h=From:Date:Subject:Message-ID:Content-Type:MIME-Version:X-MS-Exchange-SenderADCheck;
bh=rzmolvgi84fDEPXhsavfJP6QElnlbDst6f6w5+V1jtc=;

b=tq3xvgN791ydLp1IHqDONK4tmfQH1rnmvL71UqiDLDva917/kATKZtE8AsWGS00jhhkFwvvTRR1hebVERQPA/ki
LJT5Zmi3ApgSmlD7RRWJXPcm8cJu6md7PkaCOVP7uaJaayklIVYYlhLVY6zoMjS10W6at8fp+XUaze0xU8oc=

Received: from BYAFRC1MB4247.prod.exchangelabs.com (52.135.236.211) by
BYAPR01MB4710.prod.exchangelabs.com (20.177.224.89) with Microsoft SMTP
Server (version=TLS1_2, cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) id
15.20.2644.24; Wed, 22 Jan 2020 23:29:57 +0000

Received: from BYAFRC1MB4247.prod.exchangelabs.com
([fe80::59a6:a49:c1e3:c140]) by BYAPR01MB4247.prod.exchangelabs.com

Tribunal 03 Administrativo - Magdalena - Santa Marta

1027
1144

De: Tribunal 03 Administrativo - Magdalena - Santa Marta
Enviado el: miércoles, 22 de enero de 2020 6:30 p. m.
Para: alejocorman@gmail.com; jpolofigueroa@gmail.com; PROCURADURÍA 155 JUDICIAL II; procuraduria43@gmail.com; procuraduria52@gmail.com; secretariajuridica@ccsm.org.co; dianaboveamendinueta@hotmail.com; jbaenav@gmail.com; cristianccj@hotmail.com; resemberr@yahoo.es; notificacionjudicial@unimagdalena.edu.co; miguelpolocampo@gmail.com; claudiakatime@yahoo.com; notificacionesjudiciales@minjusticia.gov.co; jpolofigueroa@gmail.com; ana.ussa@acegroup.com; camarasm@ccsmorg.co; secretariajuridica@ccsm.org.co; gherrera@gha.com.co
Asunto: Comunicación providencia 2014-241
Datos adjuntos: OBRESAN VS CAMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA Y OTROS 2014-241 RD.pdf

Señores
Apoderados judiciales de las partes
E.S.M.

En cumplimiento de dispuesto por el artículo 201 inciso 3 del CPACA por medio del presente mensaje de datos **COMUNICO** a usted (es) que dentro del medio de control de REPARACIÓN DIRECTA formulado por **OBRESAN** contra la **NACIÓN-MINISTERIO DE JUSTICIA Y OTROS**, identificado bajo el radicado N 47-001-2333-000-2014-00241-00, se dictó providencia de fecha 19 de diciembre de 2019, mediante la cual se fijó fecha para celebrar audiencia inicial el día 11 de febrero de 2019, a las 03:00 pm. Notificado en estado electrónico **No 2 del 14 de enero de 2020**

Lo anterior para los fines pertinentes

Atentamente,

Laura Edith Mena Montero
Escribiente Despacho 003
Tribunal Administrativo del Magdalena.

1145 1038

De: postmaster@Universidadmag.onmicrosoft.com
Para: notificacionjudicial@unimagdalena.edu.co
Enviado el: miércoles, 22 de enero de 2020 6:30 p. m.
Asunto: Entregado: Comunicación providencia 2014-241

El mensaje se entregó a los siguientes destinatarios:

notificacionjudicial@unimagdalena.edu.co (notificacionjudicial@unimagdalena.edu.co)

Asunto: Comunicación providencia 2014-241



Comunicación
providencia 201...

1146 1039

De: postmaster@Universidadmag.onmicrosoft.com
Para: notificacionjudicial@unimagdalena.edu.co
Enviado el: miércoles, 22 de enero de 2020 6:30 p. m.
Asunto: Entregado: Comunicación providencia 2014-241

El mensaje se entregó a los siguientes destinatarios:

notificacionjudicial@unimagdalena.edu.co (notificacionjudicial@unimagdalena.edu.co)

Asunto: Comunicación providencia 2014-241



Comunicación
providencia 201...

11/4/2020

De: postmaster@outlook.com
Para: cristianccj@hotmail.com
Enviado el: miércoles, 22 de enero de 2020 6:30 p. m.
Asunto: Entregado: Comunicación providencia 2014-241

El mensaje se entregó a los siguientes destinatarios:

cristianccj@hotmail.com (cristianccj@hotmail.com)

Asunto: Comunicación providencia 2014-241



Comunicación
providencia 201...

De: postmaster@outlook.com
Para: dianaboveamendinueta@hotmail.com
Enviado el: miércoles, 22 de enero de 2020 6:30 p. m.
Asunto: Entregado: Comunicación providencia 2014-241

El mensaje se entregó a los siguientes destinatarios:

dianaboveamendinueta@hotmail.com (dianaboveamendinueta@hotmail.com)

Asunto: Comunicación providencia 2014-241



Comunicación
providencia 201...

1141042

De: Microsoft Outlook
Para: claudiakatime@yahoo.com
Enviado el: miércoles, 22 de enero de 2020 6:30 p. m.
Asunto: Retransmitido: Comunicación providencia 2014-241

Se completó la entrega a estos destinatarios o grupos, pero el servidor de destino no envió información de notificación de entrega:

claudiakatime@yahoo.com (claudiakatime@yahoo.com)

Asunto: Comunicación providencia 2014-241



Comunicación
providencia 201...

138043

De: Microsoft Outlook
Para: gherrera@gha.com.co
Enviado el: miércoles, 22 de enero de 2020 6:30 p. m.
Asunto: Retransmitido: Comunicación providencia 2014-241

Se completó la entrega a estos destinatarios o grupos, pero el servidor de destino no envió información de notificación de entrega:

gherrera@gha.com.co (gherrera@gha.com.co)

Asunto: Comunicación providencia 2014-241



Comunicación
providencia 201...

1244
1131

De: Microsoft Outlook
Para: jpolofigueroa@gmail.com
Enviado el: miércoles, 22 de enero de 2020 6:30 p. m.
Asunto: Retransmitido: Comunicación providencia 2014-241

Se completó la entrega a estos destinatarios o grupos, pero el servidor de destino no envió información de notificación de entrega:

jpolofigueroa@gmail.com (jpolofigueroa@gmail.com)

Asunto: Comunicación providencia 2014-241



Comunicación
providencia 201...

1048
1152

De: Microsoft Outlook
Para: notificaciones.judiciales@minjusticia.gov.co
Enviado el: miércoles, 22 de enero de 2020 6:30 p. m.
Asunto: Retransmitido: Comunicación providencia 2014-241

Se completó la entrega a estos destinatarios o grupos, pero el servidor de destino no envió información de notificación de entrega:

notificaciones.judiciales@minjusticia.gov.co (notificaciones.judiciales@minjusticia.gov.co)

Asunto: Comunicación providencia 2014-241



Comunicación
providencia 201...

1046
1150

De: Microsoft Outlook
Para: ana.ussa@acegroup.com
Enviado el: miércoles, 22 de enero de 2020 6:30 p. m.
Asunto: Retransmitido: Comunicación providencia 2014-241

Se completó la entrega a estos destinatarios o grupos, pero el servidor de destino no envió información de notificación de entrega:

ana.ussa@acegroup.com (ana.ussa@acegroup.com)

Asunto: Comunicación providencia 2014-241



Comunicación
providencia 201...

Tribunal 03 Administrativo - Magdalena - Santa Marta

1042

1151

De: Microsoft Outlook
Para: alejocorman@gmail.com; PROCURADURÍA155 JUDICIAL II; procuraduria43@gmail.com; procuraduria52@gmail.com; jbaenav@gmail.com; miguelpolocampo@gmail.com
Enviado el: miércoles, 22 de enero de 2020 6:30 p. m.
Asunto: Retransmitido: Comunicación providencia 2014-241

Se completó la entrega a estos destinatarios o grupos, pero el servidor de destino no envió información de notificación de entrega:

alejocorman@gmail.com (alejocorman@gmail.com)

PROCURADURÍA155 JUDICIAL II (procuraduria155@gmail.com)

procuraduria43@gmail.com (procuraduria43@gmail.com)

procuraduria52@gmail.com (procuraduria52@gmail.com)

jbaenav@gmail.com (jbaenav@gmail.com)

miguelpolocampo@gmail.com (miguelpolocampo@gmail.com)

Asunto: Comunicación providencia 2014-241



Comunicación
providencia 201...

1048
1155

Tribunal 03 Administrativo - Magdalena - Santa Marta

De: Microsoft Outlook
Para: secretariajuridica@ccsm.org.co
Enviado el: miércoles, 22 de enero de 2020 6:30 p. m.
Asunto: No se puede entregar: Comunicación providencia 2014-241

No se pudo entregar el mensaje a secretariajuridica@ccsm.org.co.

No se encontró secretariajuridica en ccsm.org.co.

Solución

La dirección puede estar mal escrita o no existir. Pruebe una o varias de las acciones siguientes:

- Envíe el mensaje otra vez siguiendo estos pasos: en Outlook, abra este informe de no entrega (NDR) y elija **Enviar de nuevo** en la cinta de opciones Informe. En Outlook en la web, seleccione este NDR y luego elija el vínculo "**Haga clic aquí para enviar este mensaje otra vez.**". Después, elimine y vuelva a escribir la dirección completa del destinatario. Si se le ofrece una sugerencia de la lista de Autocompletar, no la seleccione. Después de escribir la dirección completa, haga clic en **Enviar**.
- Póngase en contacto con el destinatario (por teléfono, por ejemplo) para comprobar que la dirección existe y es correcta.
- El destinatario puede haber establecido una dirección de reenvío de correo incorrecta. Pídale que compruebe que el reenvío que ha configurado funciona correctamente.
- Borre la lista de Autocompletar destinatarios en Outlook o Outlook en la web siguiendo los pasos del artículo [Solucionar problemas de entrega para el código de error de correo electrónico 5.1.1 en Office 365](#) y después vuelva a enviar el mensaje. Escriba de nuevo la dirección completa del destinatario antes de seleccionar **Enviar**.

Si el problema persiste, reenvíe este mensaje a su administrador de correo electrónico. Si usted es administrador de correo electrónico, consulte la sección **Más información para los administradores de correo electrónico**, a continuación.

¿Le resultó útil esta información? [Envíe sus comentarios a Microsoft](#).

Más información para los administradores de correo electrónico

Código de estado: 550 5.1.1

Este error se produce porque el remitente envió un mensaje a una dirección de correo ajena a Office 365, pero la dirección es incorrecta o no existe en el dominio de destino. Del error informa el servidor de correo del dominio del destinatario, pero lo habitual es que deba arreglarlo la persona que envió el mensaje. Si los pasos descritos en la sección **Cómo corregirlo** anterior no solucionan el problema y usted es el administrador de correo del destinatario, pruebe una o varias de las siguientes acciones:

La dirección de correo existe y es correcta: confirme que la dirección del destinatario existe, es correcta y acepta mensajes.

Sincronice sus directorios: si su entorno es híbrido y usa sincronización de directorios, asegúrese de que la dirección de correo del destinatario esté correctamente sincronizada tanto en Office 365

como en el directorio local.

1049 156

Regla de reenvío errónea: compruebe si alguna regla de reenvío no se comporta del modo esperado. El reenvío puede configurarlo un administrador mediante reglas de flujo de correo o la configuración de dirección de reenvío del buzón, o un destinatario mediante la característica Reglas de bandeja de entrada.

La configuración del flujo del correo y los registros MX no son correctos: este error puede estar causado por una configuración incorrecta del flujo del correo o de los registros MX. Compruebe la configuración del flujo del correo de Office 365 y asegúrese de que el dominio y los conectores del flujo del correo estén configurados correctamente. Además, trabaje con su registrador de dominios para comprobar que los registros MX del dominio están configurados correctamente.

Para obtener más información y sugerencias adicionales para solucionar este problema, vea [Solucionar problemas de entrega para el código de error de correo electrónico 550 5.1.1 en Office 365](#).

Detalles del mensaje original

Fecha de creación: 22/01/2020 11:29:56 p. m.

Dirección del remitente: tadtvo03mag@cendoj.ramajudicial.gov.co

Dirección del destinatario: secretariajuridica@ccsm.org.co

Asunto: Comunicación providencia 2014-241

Detalles del error

Error detectado: 550-5.1.1 The email account that you tried to reach does not exist. Please try 550-5.1.1 double-checking the recipient's email address for typos or 550-5.1.1 unnecessary spaces. Learn more at 550 5.1.1 <https://support.google.com/mail/?p=NoSuchUser> g5si25019396ejx.103 - gsmtp

DSN generado por: BYAPR01MB4710.prod.exchangelabs.com

Servidor remoto: mx.google.com

Salto del mensaje

SALTO HORA (UTC) DE PARA CON TIEMPO DE RETRANSMISIÓN

1 22/01/2020

11:29:57 p. m. BYAPR01MB4247.prod.exchangelabs.com

BYAPR01MB4247.prod.exchangelabs.com mapi 1 s

2 22/01/2020

11:29:57 p. m. BYAPR01MB4247.prod.exchangelabs.com

BYAPR01MB4710.prod.exchangelabs.com Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2, cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) *

Encabezados del mensaje original

ARC-Seal: i=1; a=rsa-sha256; s=arcselector9901; d=microsoft.com; cv=none;

b=dYhI1mFhiyXwOzxsunikT4gLHrChs+Rus6KPEV2gogSGI8qhMu8+P2+0feFyObybLqN34fjZCpo8+h90+/ffqJF6ObJx1oPbLzXQfSnzXY/XPcn9hCE3Prj8LcN5nkj7iT7doF8tFRCzeDX5sJBEGYxs5RsheRkBS2CizLLm30ylostJCeDrNUm3z9cZxDT1RBQ1zMf004w/GSTt5LHKFXmspdMGXpG//pc2HpgK5xLd8psgSY1Zl3Av6wRoBbcgdN8JNevGsElp7KQ1wn1TVzAjW2Wg14K/wes1BftCw3DPYlpthv9I7GJ/zhrpPE23q9CzcroPLjRG4LyExsL9NQ==

ARC-Message-Signature: i=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=microsoft.com; s=arcselector9901;

h=From:Date:Subject:Message-ID:Content-Type:MIME-Version:X-MS-Exchange-SenderADCheck; bh=nzmolvgi84fDEPXhsavfJP6QElnlbDst6f6w5+V1jtc=;

b=hS6ZJYEA15VCYUblApVWPP7rVePGG81LlVfU0bFSXbK3IVNuMSRx9+Rc7124PSCCKVnx5cfbZ9Q5RXtDFpyrKc3FlekmlcELoyid9WuXXGnb+KFFB+FF2jEjNBjsZZoNg21uy6wXErDXyyIiyqqr9GOfIJ/tbGYg6eZXpX5dio3138NqnhXtthAC6Rwlmez84hl1TXU3M8kcfshyIP5nyeqWBozVIyZOSzclrB9dDiHBulG3FG1Jri7PXDlRr52XG6+HTVPBbv4PURzV7gWX+jaxHaTWhlyLo81DUfNYZeNR55HBA7x37mbMRYqRSjiFu4c7f/refbTptY2B/J7w==

ARC-Authentication-Results: i=1; mx.microsoft.com 1; spf=pass

smtp.mailfrom=cendoj.ramajudicial.gov.co; dmarc=pass action=none

header.from=cendoj.ramajudicial.gov.co; dkim=pass

header.d=cendoj.ramajudicial.gov.co; arc=none

DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed;

d=cendoj.ramajudicial.gov.co; s=selector1;

1050 1158

h=From:Date:Subject:Message-ID:Content-Type:MIME-Version:X-MS-Exchange-SenderADCheck;
bh=rzmolvgi84fDEPFXsavfJP6QElnlbDst6f6w5+Vljtc=;

b=tq3xvgn791ydlp1IHqDONK4tmfQHlrnmvL71UqiDLDva917/kATKZtE8AsWGS00jhhkFwvvTRRlhebVERQPA/ki
LJT5Zmi3ApgSmlD7RRWJXPcm8cJu6md7PkaCOVP7uaJaayklIVYYlhLVY6zoMjS10W6at8fp+XUaze0xU8oc=
Received: from BYAPR01MB4247.prod.exchangelabs.com (52.135.236.211) by
BYAPR01MB4710.prod.exchangelabs.com (20.177.224.89) with Microsoft SMTP
Server (version=TLS1_2, cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) id
15.20.2644.24; Wed, 22 Jan 2020 23:29:57 +0000
Received: from BYAPR01MB4247.prod.exchangelabs.com
([fe80::59a6:a49:c1e3:c140]) by BYAPR01MB4247.prod.exchangelabs.com
([fe80::59a6:a49:c1e3:c140*7]) with mapi id 15.20.2644.027; Wed, 22 Jan 2020
23:29:57 +0000
From: Tribunal 03 Administrativo - Magdalena - Santa Marta
<tadtvo03mag@cendoj.ramajudicial.gov.co>
To: "alejocorman@gmail.com" <alejocorman@gmail.com>, "jpolofigueroa@gmail.com"
<jpolofigueroa@gmail.com>, "=?iso-8859-1?Q?PROCURADUR=CDA155_JUDICIAL_II?=
<procuraduria155@gmail.com>, "procuraduria43@gmail.com"
<procuraduria43@gmail.com>, "procuraduria52@gmail.com"
<procuraduria52@gmail.com>, "secretariajuridica@ccsm.org.co"
<secretariajuridica@ccsm.org.co>, "dianaboveamendinueta@hotmail.com"
<dianaboveamendinueta@hotmail.com>, "jbaenav@gmail.com" <jbaenav@gmail.com>,
"cristianccj@hotmail.com" <cristianccj@hotmail.com>, "resemberr@yahoo.es"
<resemberr@yahoo.es>, "notificacionjudicial@unimagdalena.edu.co"
<notificacionjudicial@unimagdalena.edu.co>, "miguelpolocampo@gmail.com"
<miguelpolocampo@gmail.com>, "claudiakatime@yahoo.com"
<claudiakatime@yahoo.com>, Carlos Felipe Manuel Remolina Botia
<notificaciones.judiciales@minjusticia.gov.co>, "jpolofigueroa@gmail.com"
<jpolofigueroa@gmail.com>, "ana.ussa@acegroup.com" <ana.ussa@acegroup.com>,
"camarasm@ccsmorg.co" <camarasm@ccsmorg.co>, "secretariajuridica@ccsm.org.co"
<secretariajuridica@ccsm.org.co>, "gherrera@gha.com.co" <gherrera@gha.com.co>
Subject: =?iso-8859-1?Q?Comunicaci=F3n providencia_2014-241?=
Thread-Topic: =?iso-8859-1?Q?Comunicaci=F3n providencia_2014-241?=
Thread-Index: AdXReZ7LvOswlgIIRMiL8TBe8YvrJg==
Disposition-Notification-To: Tribunal 03 Administrativo - Magdalena - Santa
Marta <tadtvo03mag@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Return-Receipt-To: <tadtvo03mag@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Date: Wed, 22 Jan 2020 23:29:56 +0000
Message-ID: <BYAPR01MB4247BFC8E69F4DAFCB86FE41D10C0@BYAPR01MB4247.prod.exchangelabs.com>
Accept-Language: es-CO, en-US
Content-Language: es-ES
X-MS-Has-Attach: yes
X-MS-TNEF-Correlator:
authentication-results: spf=none (sender IP is)
smtp.mailfrom=tadtvo03mag@cendoj.ramajudicial.gov.co;
x-originating-ip: [190.217.19.156]
x-ms-publictraffictype: Email
x-ms-office365-filtering-ht: Tenant
x-ms-office365-filtering-correlation-id: 76dad001-47fc-4073-381b-08d79f92fdf3
x-ms-traffictypediagnostic: BYAPR01MB4710:|BYAPR01MB4710:
x-ld-processes: 622cba98-80f8-41f3-8df5-8eb99901598b,ExtAddr
x-microsoft-antispam-prvs:
<BYAPR01MB4710B502AC579FECB38D8632D10C0@BYAPR01MB4710.prod.exchangelabs.com>
x-ms-oob-tlc-oobclassifiers: OLM:1051;
x-forefront-prvs: 029097202E
x-forefront-antispam-report:
SFV:NSPM;SFS:(10009020)(4636009)(136003)(376002)(39860400002)(396003)(366004)(346002)(189
003)(199004)(316002)(33656002)(55016002)(88996005)(2906002)(86362001)(9686003)(52536014)(
26005)(7696005)(110136005)(81156014)(8936002)(5660300002)(81166006)(186003)(478600001)(47
44005)(71200400001)(66616009)(64756008)(66946007)(66446008)(19627235002)(66556008)(664760
07)(224303003)(6506007)(7416002)(921003)(1121003);DIR:OUT;SFP:1101;SCL:1;SRVR:BYAPR01MB47
10;H:BYAPR01MB4247.prod.exchangelabs.com;FPR:;SPF:None;LANG:es;PTR:InfoNoRecords;MX:1;A:0
;
received-spf: None (protection.outlook.com: cendoj.ramajudicial.gov.co does
not designate permitted sender hosts)
x-ms-exchange-senderadcheck: 1
x-microsoft-antispam: BCL:0;
x-microsoft-antispam-message-info:
TkJPIVRq4XVOhuyeJeJMqRMhLHQL8y+CbnI9V/y1PW1bKRX1HudvphEoRIia7wOlOadrgklUmb0ShsAuUbgTZ63AY
MwlvPBoPBHLohdrriLfg4X6hCWtfBluk25/mpjNRyDgk5ckXdt2y0l mor4nXd+1VCfnyXJJwaf3F+yK0znqbhfzFr
oTcSNds9qullUbDTd06RmlXKOMxf593D/DV6Eca2xKa1DK5BfZOAdHxhPo3RqbVS/+KVD/RNSIWMCGElRZHxkmaF
sjc+V9gnSEw+c78U6RGvDtxHBCUYiIBcLcrykiCNDLeAcshreX8visPulKdFbjyyNW8Cr6LAUVHjw5OSKQMYOOL8
WU+bo5itea/iL/PmlXa-AVtpTJjdehOJ/RKMLn+hBjhU9oA/HEedoECHtbr3VV5T4E/g9eM4TTUWF/5HiFmFxfDko
6Gaj6cEtAwLLe8WofU/NqukuHmuYCVIbaPdZGKdcMhzOCUDpU/sgS1elm/XlVvyUI/Y
x-ms-exchange-transport-forked: True

Content-Type: multipart/mixed;

boundary="_004_BYAPR01MB4247BF08E69F4DAFCB86FE41D10C0BYAPR01MB4247prod_"

MIME-Version: 1.0

X-OriginatorOrg: cendoj.ramajudicial.gov.co

X-MS-Exchange-CrossTenant-Network-Message-Id: 76dad001-47fc-4073-381b-08d79f92fdf3

X-MS-Exchange-CrossTenant-originalarrivaltime: 22 Jan 2020 23:29:56.9212

(UTC)

X-MS-Exchange-CrossTenant-fromentityheader: Hosted

X-MS-Exchange-CrossTenant-id: 622cba98-80f3-41f3-8df5-8eb99901598b

X-MS-Exchange-CrossTenant-mailboxtype: HOSTED

X-MS-Exchange-CrossTenant-userprincipalname:

tpwL7zGjEF7rsud3CWWUoBlnJA-ddYiILFMpIFhnPIsaa6EZL5OxjgzJzcYaiNCyObnjc3+iNpj+zhqwRIYYcSuw

BbcRfDzlNm6Jw2hWcwidiGtm3javIKNzYPsxcEu



Comunicación
providencia 201...

X-MS-Exchange-Transport-CrossTenantHeadersStamped: BYAPR01MB4710

Tribunal 03 Administrativo - Magdalena - Santa Marta

Tramite
Bureau 1052
159
notificado

De: Alexis Pedroza <alexispedroza18@gmail.com>
Enviado el: martes, 14 de enero de 2020 5:10 p. m.
Para: Tribunal 03 Administrativo - Magdalena - Santa Marta
CC: alejocorman@gmail.com
Asunto: SOLICITUD DE AGOTAR TRASLADO DE EXCEPCIONES - RAD 2014-00241
Datos adjuntos: MEMORIAL TRASLADO EXCEPCIONES STA MARTA RAD 241-2014.pdf

Cordial saludo.

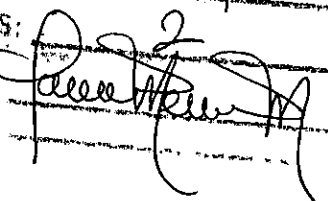
De conformidad con las directrices impartidas por el Dr. Luis Alejandro Corzo Mantilla, quien ostenta la calidad de apoderado judicial de la parte demandante, me permito allegar escrito por medio del cual se solicita corres traslado de excepciones de la contestación de la demanda presentada por el curador adlitem, previo a agotarse la reanudación de la audiencia inicial.

[Adjunto lo enunciado]

--
ALEXIS PEDROZA NORIEGA
ABOGADO
Celular 3015846693

"Yo no hablo de venganzas ni perdones, el olvido es la única venganza y el único perdón". J.L. Borges

90967

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA	
FECHA:	14 ENE 2020
HORA:	5:15 pm
FOLIOS:	2
FIRMA:	

7053160

Señores

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA

Att. Dra. Maribel Mendoza Jiménez

Magistrado Ponente

E. S. D.

Medio de Control	Reparación Directa
Radicado	47-001-2333-003-2014-00241-00
Demandante	UNION TEMPORAL OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA – OBRESAN
Demandado	Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho y Otros

Luis Alejandro Corzo Mantilla, mayor de edad y vecino de esta ciudad, identificado con CC N° 88.213.988 de Cúcuta, abogado en ejercicio, portador de la Tarjeta Profesional N° 101.576 del C. S. de la J., actuando en calidad de apoderado judicial de los Demandantes, conforme al poder otorgado, me dirijo a su Honorable Despacho con el objeto de atender la carga procesal que me asiste.

Mediante providencia del 06 de agosto del 2019, su bien servido Despacho, dispuso: *Nombrar como Curador Ad Litem para que represente los intereses del señor MIGUEL ANGEL POLO CAMPO en calidad de demandado dentro del asunto de la referencia al Doctor JUAN PABLO BAENA VASQUEZ, quien ejerce habitualmente la profesión ante este Tribunal.*

A los 29 días de septiembre del 2019, el Dr. Juan Pablo Baena Vásquez en su condición de curador contestó la demanda de la referencia, formulando al tenor del acápite IV PROPOSICION DE EXCEPCIONES, las siguientes: 1) Inexistencia de los presupuestos del error jurisdiccional, culpa de los demandantes, 2) Inexistencia de dolo o culpa grave. Buena fe. 3) Inexistencia de Perjuicios, 4) Improcedencia de la acción incoada por la existencia de otros medios de defensa.

Su Despacho dispuso mediante auto del 19 de diciembre del 2019, notificado por estado a los 14 días de los mismos, *"Señalar el día 11 de febrero del 2020 a las 3 de la tarde, a efectos de llevar a cabo continuación audiencia inicial en el proceso de la referencia".*

Es pertinente señalar que de conformidad con lo ordenado por el Parágrafo 2° del artículo 175 de la Ley 1437 del 2011, el cual reza: *"Cuando se formulen excepciones se correrá traslado de las mismas por secretaría, sin necesidad de auto que lo ordene, por el término de tres (3) días"*, no se agotó el traslado de las excepciones formuladas en la contestación de la demanda radicada a los 29 días de septiembre del 2019, conforme puede evidenciarse de la página <https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/justicia21/Administracion/Ciudadanos/frmConsultaProceso.aspx>, de la cual me permito adjuntar los respectivos pantallazos:

[illegible]

La anterior solicitud, la elevo a la luz de los principios de economía, celeridad procesal y debido proceso, establecidos en nuestro Ordenamiento Jurídico.

Atentamente,

LUIS ALEJANDRO CORZO MANTILLA
CC 88.213.988 De Cúcuta
T.P 101.576 C. S. De la J.



1161

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA

SECRETARÍA GENERAL

Ley 1437 de 2011

RADICACIÓN: 47-001-2333-000-2014-00241-00
DEMANDANTE: OBRESAN
DEMANDADO: NACIÓN – MINISTERIO DE JUSTICIA Y OTROS
MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA

PASE AL DESPACHO

De la Magistrada Maribel Mendoza Jiménez, hoy veinticuatro (24) de enero de dos mil veinte (2020), el expediente de la referencia informándole que dentro del medio de control de la referencia se encuentra programa audiencia inicial para el día once (11) de febrero de dos mil veinte (2020) a las tres de la tarde (03:00 p.m.).

Así mismo se pone de presente que el día 14 de enero de 2020 el apoderado de la parte accionante solicitó que a través de la Secretaría de esta Corporación se corra traslado de las excepciones presentadas por el curador ad litem; no obstante se advierte que dicho traslado se surtió desde el 30 de octubre de 2019 hasta el 05 de noviembre de 2019 conforme consta en folios 1028 y 1029 del expediente.

Sírvase proveer.

Anexo

Un cuaderno No. 1 con 568 folio.

Un cuaderno No 2 folios 569 a 1053 y 6 CD's.

Atentamente,

JAIME ORTIZ ROMERO

SECRETARIO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DEL MAGDALENA -CALLE 20 No. 2 A 20
TELEFONO 421 3901

53 ⁴⁵² 925 1680

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA	
FECHA:	<u>26 SEP 2018</u>
HORA:	<u>10:26 am</u>
FOLIOS:	<u>1 Sobre</u>
FIRMA:	<u>Mateo R</u>

DOCTOR
MIGUEL ANGEL POLO CAMPO
AVENIDA DEL LIBERTADOR N° 13 - 94
SANTA MARTA - MAGDALENA

CONTIENE OFICIO 2018-155

Servicios Postales
Nacionales S.A.
NIT 900 052917-9
C.G. 25 G 95 A 55
Línea Nat. 01 8000 111 111

472

REMITENTE

Nombre/ Razón Social
CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA - TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO
Dirección: CALLE 23 N° 5-63

Ciudad: SANTA
MARTA_MAGDALENA
Departamento: MAGDALENA
Código Postal: 470004331
Envío: RN971207189C0

DESTINATARIO

Nombre/ Razón Social
MIGUEL ANGEL POLO CAMPO
Dirección: AVENIDA DEL
LIBERTADOR N. 13-84
Ciudad: SANTA MARTA_MAGDALENA

Departamento: MAGDALENA
Código Postal: 470004331
Fecha Pre-Admisión:
25/06/2018 15:36:19

Presencia de carga 000000 del 20/06/2018
El usuario debe expresar conformidad que fue conocimiento del contenido que se encuentra publicado en la página web. 4-72 para el que datos personales para probar la entrega del envío. Para obtener algún recibo con código de seguimiento 72 con el correo electrónico: www.4-72.com.co

SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A NIT 900.062.917-9

CERTIFICADO NACIONAL FRANQUICIA

Operativo: PO.SANTA MARTA
Orden de servicio: 10026388
Fecha Pre-Admisión: 25/06/2018 15:36:19

Nombre/ Razón Social: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
Dirección: CALLE 23 N° 5-63
Referencia: NIT/C.G. 25 G 95 A 55
Ciudad: SANTA MARTA_MAGDALENA
Depto: MAGDALENA
Código Operativo: 8902480

Nombre/ Razón Social: MIGUEL ANGEL POLO CAMPO
Dirección: AVENIDA DEL LIBERTADOR N. 13-84
Tel: Código Postal: 470004331
Ciudad: SANTA MARTA_MAGDALENA
Depto: MAGDALENA
Código Operativo: 8902510

Contenedor:
Peso Flete(gms): 200
Peso Volumétrico(gms): 0
Peso Facturado(gms): 200
Valor Declarado: \$0
Valor Flete: \$5.200
Costo de manejo: \$0
Valor Total: \$5.200

Observaciones del cliente:

Causal Devoluciones:
RE Rehusado
NE No existe
NR No reclamado
DE Desconocido
Dirección errada

Firma nombre y/o sello de quien recibe:

Fecha de entrega: 25/06/2018
Distribución: 741830
C.C. 470004331

Gestión de entrega: 2do

Observaciones del cliente:

8902
480

PO.SANTA MARTA
NORTE

65953

89024808902510RN971207189C0

Presencia de carga 000000 del 20/06/2018
El usuario debe expresar conformidad que fue conocimiento del contenido que se encuentra publicado en la página web. 4-72 para el que datos personales para probar la entrega del envío. Para obtener algún recibo con código de seguimiento 72 con el correo electrónico: www.4-72.com.co



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA
SECRETARIA GENERAL

EDICTO EMPLAZATORIO

EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 108 Y 293 DEL C. G. P. POR MEDIO DEL PRESENTE EDICTO,

EMPLAZA

Al señor MIGUEL ANGEL POLO CAMPO, cuya habitación y lugar de trabajo se ignoran o se encuentra ausente y no se conoce su paradero, para que en un término máximo de quince (15) días hábiles contados a partir de la publicación del presente edicto, comparezcan a la Secretaría del Tribunal Administrativo del Magdalena ubicada en la calle 20 número 2A-20 Palacio de Justicia de Santa Marta, a notificarse personalmente de la providencia contentiva del auto admisorio de la demanda y del auto que ordena su vinculación como litisconsorte necesario de fecha siete (7) de marzo de 2017 proferida dentro del proceso radicado con el número 47-001-3333-000-2014-00241-00, dentro del medio de control de REPARACION DIRECTA que ha promovido la entidad **UNION TEMPORAL DE OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA -OBRESAN-** contra las entidades públicas MINISTERIO DE JUSTICIA-CAMARA DE COMERCIO-UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA Y OTROS

Se le advierte a las personas emplazadas, que de no comparecer se le designará Curador Ad-Litem para que lo represente en el proceso.

Dicha publicación se hará de conformidad a lo señalado en el artículo 108 del C. G. P., en los medios de comunicación Diario el Tiempo Y el Herald; para lo cual se expide el presente edicto a los dieciocho (18) días del mes de octubre de dos mil dieciocho (2018)


JAIME ORTIZ ROMERO
Secretario

Anexo 2m
85.465.766
18/10/2018



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA
SECRETARIA GENERAL-SISTEMA DE ORALIDAD LEY 1437 DE 2011

INCLUSION EN LISTA TRASLADO EXCEPCIONES ART. 175 C.P.A.CA.

RAD.	Medio de Control	Demandante	Demandado	Fecha Public.	Vence	MP
2014-241	CONTRACTUAL	OBRESAN	NACIÓN-MINISTERIO DE JUSTICIA Y OTROS	09/08/2017	14/08/2017	MMJ

CONSTANCIA: Hoy nueve (9) de agosto de dos mil diecisiete (2017) a las ocho de la mañana (8:00.a.m.), se publica la presente lista en lugar visible de la secretaria de la Corporación, por el término legal de un día (1), tal como lo disponen los artículos 101 y 110 del C.G.P. El traslado de las excepciones correrá por el término de tres (3) días en concordancia con lo dispuesto en el artículo 175, del C. P.A.CA.

JAIRO ORTIZ ROMERO
Secretario General

8/8/2017

Correo - tadtvo03mag@cendoj.ramajudicial.gov.co

AUTORIZACIÓN - REPARACION DIRECTA - 2014-241

Alexis Pedroza <alexispedroza18@gmail.com>

jue 03/05/2017 5:37 p.m.

Para: Tribunal 03 Administrativo Magdalena - Santa Marta <tadtvo03mag@cendoj.ramajudicial.gov.co>;

Cclapeira_armando@hotmail.com <lapeira_armando@hotmail.com>; alejo.orman@gmail.com <alejo.orman@gmail.com>;

1 archivo adjunto (546 KB)

AUTORIZACION ARMANDO RUIZ LAPEIRA.pdf

Cordial saludo,

De conformidad con las directrices impartidas por el Dr. Luis Alejandro Corzo manilla, quien ostenta la calidad de apoderado dentro del medio de control de la referencia, de manera respetuosa me permito adjuntar autorización a nombre del señor ARMANDO RUIZ LAPEIRA, para que pueda consultar el proceso y solicitar copias de las piezas procesales que obren en el expediente.

Atentamente

--
ALEXIS PEDROZA NORIEGA
ABOGADO
Celular 3015846693

"Yo no hablo de venganzas ni perdones, el olvido es la única venganza y el único perdón". J.L. Borges

40904 la 9 002

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA	
FECHA:	08 AGO 2017
HORA:	10:00 AM
FOLIOS:	3
FIRMA:	JOSE TOBIA

Andrés

GRABADO

Luis Alejandro Corzo Mantilla
Abogado.

Señores

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO ORAL DE MAGDALENA – SANTA MARTA

Att. Dra. Maribel Mendoza Jiménez

Magistrada Ponente

E. S. D.

Radicado	47001-23-33-003-2014-00241-00
Demandante	OBRESAN – Unión Temporal de Obras Especiales de Santa Marta
Demandado	Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho; Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio y Universidad del Magdalena; y Otros
Medio de Acción	Reparación Directa
Referencia	Autorización Revisión del proceso.

Luis Alejandro Corzo Mantilla, mayor de edad y vecino de esta ciudad, identificado con CC N° 88.213.988 de Cúcuta, abogado en ejercicio, portador de la Tarjeta Profesional N° 101.576 del C. S. de la J., actuando en calidad de apoderado judicial del Demandante (**OBRESAN – Unión Temporal de Obras Especiales de Santa Marta**), conforme a los poderes otorgados, me permito allegar ante su H. Despacho el presente memorial por medio del cual

AUTORIZO

Al Señor **ARMANDO RUIZ LAPEIRA**, identificado con la Cédula de Ciudadanía N° 85.465.766 de Santa Marta, para que en mi nombre y representación consulte, revise el expediente de la referencia, presente memoriales, solicite la expedición de copia de las providencias y de los memoriales presentados por las partes, de conformidad con lo establecido en el 123 del Código General del proceso.

Agradezco su Vocación de Servicio en la Administración de Justicia.

Atentamente,


LUIS ALEJANDRO CORZO MANTILLA
CC 88.213.988 De Cúcuta
T.P 101.576 C. S. De la J.

Señores

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO ORAL DE MAGDALENA – SANTA MARTA

Att. H. MP. Dra. Maribel Mendoza Jiménez

Magistrada Ponente

E. S. D.

Radicado 47001-23-33-003-2014-00241-00
Demandante OBRESAN – Unión Temporal de Obras Especiales de Santa Marta
Demandado Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho; Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio y Universidad del Magdalena; y Otros
Medio de Acción Reparación Directa
Referencia Contestación de las Excepciones presentadas

Luis Alejandro Corzo Mantilla, mayor de edad y vecino de esta ciudad, identificado con CC N° 88.213.988 de Cúcuta, abogado en ejercicio, portador de la Tarjeta Profesional N° 101.576 del C. S. de la J., actuando en calidad de apoderado judicial del Demandante (**OBRESAN – Unión Temporal de Obras Especiales de Santa Marta**), conforme a los poderes otorgados, me permito allegar ante su H. Despacho memorial Describiendo el Traslado a las Excepciones contenidas en la Contestación de la Demanda de los Litisconsortes Necesarios Diana Bovea Mendinueta y Juan Alberto Polo Figueroa, conforme a la oportunidad procesal que me asiste, la cual está contenida en la Providencia (Auto) emanado del despacho, de conformidad con los siguientes argumentos:

De las Excepciones formuladas por los Litisconsortes Necesarios.

1. INEXISTENCIA DE LOS PRESUPUESTOS DE ERROR JURISDICCIONAL. CULPA DE LOS DEMANDANTES.

Contrario sensu a lo que establecen los libelistas, en nuestro caso en particular se configuró un error judicial o jurisdiccional, porque se profirió una decisión tardía (del laudo arbitral) la cual fue anulada posteriormente por el Consejo de Estado después de su ejecutoriedad e interposición de recursos ordinarios.

Por consiguiente las conductas desplegadas por los árbitros del Tribunal de Arbitramento, no se ciñeron a nuestro Ordenamiento Jurídico, como lo deja ver la decisión proferida por el Consejo de Estado, mediante la cual decreta la anulación del Laudo Arbitral aludido, configurándose en concomitancia un funcionamiento anormal de la administración de justicia por parte de dichos particulares, al estar investidos de dichas facultades.

Por su parte el artículo 66 y ss de la Ley Estatutaria 270 de 1996 al establecer que cuando el daño proviene de un error judicial, configura el título de imputación jurídica de la responsabilidad del Estado. Dentro de ese concepto están comprendidas todas las acciones u omisiones que se presenten con ocasión del ejercicio de la función de impartir

justicia en que incurran no sólo los funcionarios sino también los particulares investidos de facultades jurisdiccionales (como es el caso que nos ocupa), los empleados judiciales, los agentes y los auxiliares judiciales. Así mismo, el comportamiento de los árbitros fue más que tardío, ilegal e incorpora los ingredientes subjetivos exigidos por la Constitución en el Artículo 90 y lo implícito que comporta la Ley Estatutaria de Administración de Justicia 270 de 1998.

En lo que respecta a la culpa exclusiva de los Demandantes, es preciso señalar que no es coherente alegar tal criterio encausado en excepción, porque sería tanto como pretender que mis apoderados al procurar dirimir el conflicto generado en principio a través del (MASC) Tribunal de Arbitramento, el cual debió haber proferido un Laudo arbitral ajustado a derecho y principalmente a tiempo, lo hizo con la tenue y fútil intención de generarse un propio daño con posterior perjuicio.

De igual forma resulta contrario a todas luces, pretender que sean mis apoderados quienes debieron informar a los árbitros el vencimiento de los términos, máxime cuando son estos, los árbitros, quienes al igual que el juez en la Jurisdicción (y en la aplicación del principio *iura novit curia*, según el cual el juez define la norma o el régimen de responsabilidad que resulte aplicable¹) debe ejercer sus funciones ajustadas a Derecho y con el cumplimiento de los términos en la mayor medida de lo posible, para así resolver el caso en un plazo justo y razonable.

2. INEXISTENCIA DE DOLO OCULPA GRAVE. BUENA FE.

Para argumentar la presente excepción aluden los Litisconsortes Necesarios el numeral 1° del artículo 71 de la ley estatutaria (270 de 1996), aduciendo que no se incurrió en la misma por parte de los árbitros, por lo cual mal podría repetirles, en el evento de ser condenado el estado a una reparación de índole patrimonial.

Al respecto, es pertinente traer a colación el artículo 71 de la Ley 270 de 1996, el cual reza:

DE LA RESPONSABILIDAD DEL FUNCIONARIO Y DEL EMPLEADO JUDICIAL.

En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial por un daño antijurídico que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste.

Para los efectos señalados en este artículo, se presume que constituye culpa grave o dolo cualesquiera de las siguientes conductas:

- 1. La violación de normas de derecho sustancial o procesal, determinada por error inexcusable.*
- 2. El pronunciamiento de una decisión cualquiera, restrictiva de la libertad física de las personas, por fuera de los casos expresamente previstos en la ley o sin la debida motivación.*

¹ Consejo de Estado., Sección Tercera, Sentencia Radicado N° 05001232500019960263001 (20713), del 22 de junio de 2011. Consejero Ponente Enrique Gil Botero.

10736
R06

3. La negativa arbitraria o el incumplimiento injustificado de los términos previstos por la ley procesal para el ejercicio de la función de administrar justicia o la realización de actos propios de su oficio, salvo que hubiere podido evitarse el perjuicio con el empleo de recurso que la parte dejó de interponer.

En nuestro caso en particular observamos como las actuaciones de los litisconsortes necesarios, se encajan dentro de las conductas establecidas al tenor de los numerales 1° y 3° del artículo anteriormente en cita.

De una parte, por cuanto la decisión proferida por los mismos dentro del trámite del Tribunal de Arbitramento contravino normas de derecho procesal y sustancial, y como si ello fuera poco, se incumplió con los términos establecidos para proferir el laudo arbitral pertinente, situaciones estas que conllevaron a que el Consejo de Estado declarara la anulación del mismo, generándose con ello un perjuicio grave e irremediable para mis poderdantes, los cuales no están obligados a soportar el mismo.

Por consiguiente en virtud de lo establecido en el artículo 90 de la Constitución Política, el Estado debe responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas, conforme acontece en nuestro caso en particular.

3. INEXISTENCIA DE PERJUICIOS.

No es coherente señalar que los demandados no han sufrido ningún perjuicio con ocasión de la anulación del laudo arbitral por parte del Consejo de Estado, como pretende hacerlo ver los litisconsortes necesarios, por cuanto el argumento no es cierto.

El Error Judicial y/o Jurisdiccional en que incurrieron los demandados, conllevo a que mis poderdantes sufrieron unos perjuicios que deben ser resarcidos, conforme lo establece nuestro Ordenamiento jurídico, razón por la cual con la solicitud de conciliación (requisito de procedibilidad), al igual que en la formulación del medio de control (Reparación Directa) en los acápites de cuantía, pretensiones, donde no solo se evidencia la constitución de una persona jurídica a la cual se le afecto el patrimonio de sus integrantes, personas naturales, si no que permite esquematizar y trazar una línea de tiempo contenida en 60 puntos referidos a las pruebas generadas a lo largo y dilatorio del proceso desarrollado en el Tribunal de Arbitramento.

Por ende si se configuran una serie de perjuicios, los cuales se encuentran amparados conforme las pruebas aportadas, los cuales deberán ser resarcidos por las Entidades demandadas, conforme la responsabilidad que les asista a cada una de ellas,

4. IMPROCEDENCIA DE LA ACCION INCOADA POR LA EXISTENCIA DE OTROS MEDIO DE DEFENSA.

Aducen los Litisconsortes Necesarios al tenor del Numeral 4° y 6° la excepción denominada Improcedencia de la Acción, la cual se refutara en los siguientes términos.

Debe declararse no probada la excepción en mención, por cuanto el medio de control escogido - Reparación Directa-, es el idóneo y adecuado, conforme lo establece el artículo 140 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en virtud de la Falla en el ejercicio de la Función Jurisdiccional por Particulares, acaecida en la expedición del Laudo Arbitral de fecha 22 de agosto de 2011 por el Tribunal de Arbitramento de J.P.G. & CIA S.A., GERMAN VILLANUEVA CALDERON y RICARDO LUIS CANABAL GUZMAN, INTEGRANTES DE LA UNION TEMPORAL OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA -OBRESAN-, CON UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA, del cual fuere declarada la Nulidad mediante providencia por el Consejo de Estado, por haberse proferido el laudo después del vencimiento del término fijado para la duración del Arbitramento.

5. CADUCIDAD.

La caducidad de la acción se define como aquel fenómeno jurídico que implica la imposibilidad de formular ante la jurisdicción unas determinadas pretensiones por haber dejado transcurrir el término que perentoriamente había sido señalado por la Ley para ejercer la correspondiente acción.

Los términos de caducidad de las acciones son de orden público y por lo tanto de obligatorio cumplimiento frente a todos sus destinatarios, son irrenunciables y no son susceptibles de ser modificados por las partes. La caducidad se estructura por el sólo hecho de haber transcurrido el término previsto en la ley para ello y debe ser declarada por el juez ya sea a petición de parte o de oficio cuando aparezca que ella ha operado. Así las cosas, una vez se da el supuesto de hecho previsto por la ley para que se inicie la contabilización del término de caducidad, éste indefectiblemente empezará a correr sin que las partes puedan variarlo o modificarlo.

Tratándose de la declaración de responsabilidad del Estado por la Falla en el ejercicio de la Función Jurisdiccional por Particulares, acaecida en la expedición del Laudo Arbitral de fecha 22 de agosto de 2011 por el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Santa Marta, el término de caducidad se cuenta a partir del día siguiente al de ejecutoria de la providencia judicial que Decreto la Nulidad del Laudo Arbitral en mención.

De conformidad con lo establecido en el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 Literal i), el cual reza: Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.

Por tratarse de un error judicial o error jurisdiccional, en el presente caso de particulares investidos de las facultades para Administrar Justicia Transitoriamente, el término de caducidad de la acción es de dos (2) años, conforme lo contempla la norma anteriormente

citada, período en el cual se podrá acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en ejercicio del Medio de Control denominado Reparación Directa.

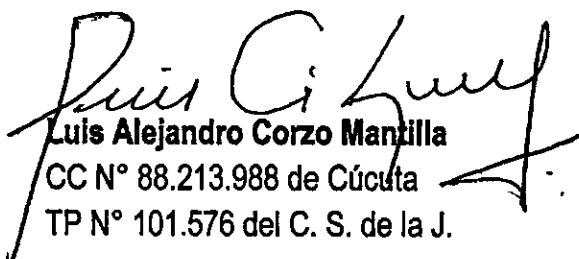
En consecuencia de lo anterior y toda vez que la providencia del Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera- Subsección C, fue proferida a los 25 días de abril de 2012 y notificada por edicto a los 03 días de Mayo de 2012, quedando debidamente ejecutoriada la misma a los 07 días de los mismos, al momento de formulación del Medio de Control de Reparación Directa ante la Justicia Contencioso Administrativa, no había acaecido el término anteriormente en cita, para que operara dicho fenómeno de caducidad.

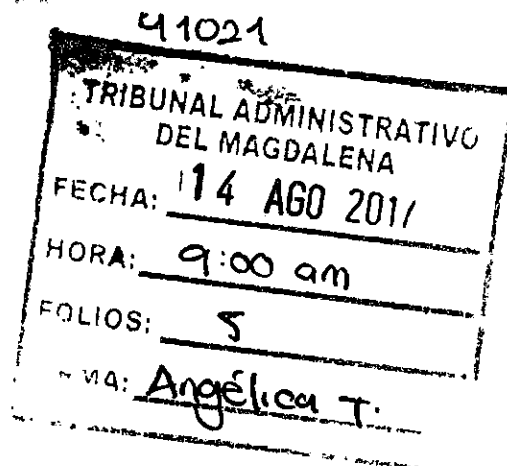
Así las cosas los términos para efectos de caducidad de la acción empiezan a contar a partir de la ejecutoria de la providencia que declaró la anulación del laudo arbitral, conforme ya se pronunciara el despacho de conocimiento al momento de resolver sobre la admisión de la demanda, razón por la cual no le asiste razón de ser a la argumentación formulada por el libelista.

De esta forma descorro el traslado de las Excepciones presentadas por los Litisconsortes Necesarios y respetuosamente reitero a su Despacho que a no les asisten fundamentos de derecho a los medios exceptivos planteados por lo cual de manera respetuosa solicito declarar no probadas las mismas.

Agradezco su vocación de servicio en la administración de justicia.

Atentamente,


Luis Alejandro Corzo Mantilla
CC N° 88.213.988 de Cúcuta
TP N° 101.576 del C. S. de la J.



Santa Marta, 23 de agosto de 2017

Doctora

MARIBEL MENDOZA JIMÉNEZ

Magistrada

Tribunal Administrativo del Magdalena

E.S.M.

*longo.
Revisar
personería
en 9º no?*

42376 1626 009

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA
FECHA: 23 AGO 2017
HORA: 9:30
FOLIOS: 1
FIRMA: <i>[Firma]</i>

Ref.: Poder – Acción de Reparación Directa - J.P.G. & CIA S.A.S., GERMAN VILLANUEVA CALDERON y RICARDO LUIS CANABAL GUZMÁN, miembros de la UNIÓN TEMPORAL OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA – OBRESAN contra NACIÓN - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO - CÁMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA PARA EL MAGDALENA (CENTRO DE ARBITRAJE, CONCILIACIÓN Y AMIGABLE COMPOSICIÓN) - UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA – DIANA BOVEA MENDINUETA, MIGUEL ÁNGEL POLO CAMPO y JUAN ALBERTO POLO FIGUEROA - radicada bajo el No. 47-001-2333-003-2014-000241-00.

Cordial saludo.

CÉSAR MIGUEL RIASCOS NOGUERA, mayor de edad, vecino de esta ciudad e identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.285.498 expedida en Bogotá, en mi calidad de **Presidente Ejecutivo** de la **Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena**, por ende Representante Legal de la misma, entidad distinguida con el NIT número 891.780.160-9, institución de orden legal, con personería jurídica, sin ánimo de lucro, constituida a iniciativa de los comerciantes de Santa Marta, creada mediante Decreto 421 del 7 de diciembre de 1.931, tal como consta en el certificado expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio, en dicha calidad, me dirijo a usted, para manifestarle que por medio de este escrito otorgo poder especial, amplio y suficiente al Doctor **CRISTIAN ALBERTO MERIÑO SEGRERA**, también mayor de edad, vecino de esta ciudad e identificado con la cédula de ciudadanía No. 85.154.867 expedida en Santa Marta y T.P. No. 221.529 del C.S. de la J., para que represente a la **CÁMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA PARA EL MAGDALENA**, en el proceso de acción de reparación directa instaurado por J.P.G. & CIA S.A.S., GERMAN VILLANUEVA CALDERON y RICARDO LUIS CANABAL GUZMÁN, miembros de la UNIÓN TEMPORAL OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA – OBRESAN, hasta su culminación.

Mi apoderado queda facultado para tramitar, desistir, recibir, interponer recursos y demás facultades propias del cargo que tiendan a la defensa de la Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena.

Ruego Señor Magistrado, conferirle personería para actuar en los términos y para los fines del presente mandato.

Del Señor Magistrado,

PODERDANTE,

[Firma]

CÉSAR MIGUEL RIASCOS NOGUERA

C.C. No. 79.285.498 expedida en Bogotá.

ACEPTO,

[Firma]

CRISTIAN ALBERTO MERIÑO SEGRERA

C.C. No. 85.154.867 expedida en Santa Marta.

T.P. No. 221.529 del C.S. de la J.

NOTARIA SEGUNDA DEL CIRCULO DE SANTA MARTA
DILIGENCIA DE PRESENTACIÓN PERSONAL

Santa Marta, 2017-08-28 10:27:20 Odd: 61b7emz

El anterior escrito fue presentado personalmente por:

RIASCOS NOGUERA CESAR MIGUEL

Identificado con C.C. 79285498

Quiero declarar que las firmas de este documento son suyas, el contenido del mismo es cierto.

ingrese a www.notariainlinea.com
para verificar este documento
1a94f



MERCEDES PERTUZ MOZO

NOTARIA (E) 2 DEL CIRCULO DE SANTA MARTA



910

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA
SECRETARÍA GENERAL
Ley 1437 de 2011

RADICACIÓN: 47-001-2333-000-2014-00241-00
DEMANDANTE: UNIÓN TEMPORAL OBRAS ESPECIALES DE
SANTA MARTA - OBRESAN
DEMANDADO: MINJUSTICIA – UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA –
CENTRO DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA
CÁMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA
MEDIO DE CONTROL: N Y R DEL DERECHO

P A S O A L D E S P A C H O

De la Magistrada Maribel Mendoza Jiménez, hoy 29 de septiembre de 2017 el expediente de la referencia, informándole que se le dio cumplimiento a la orden dada en la audiencia de 7 de marzo de 2017.

Obra constancia de notificación a folio 875-1.

El término de traslado de las excepciones ha finalizado, el presente asunto está pendiente para decidir sobre la comparecencia del señor Miguel Ángel Polo Campo quien fue vinculado al proceso.

Asi mismo figura poder conferido a folio 909 del proceso

Consta de 1 cuaderno principal con dos tomos, el primero del folio 1 al 680 y el segundo del folio 682 al 909.

Sírvase proveer.


JAIME ORTIZ ROMERO
Secretario

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA
SECRETARÍA GENERAL
Ley 1437 de 2011

p 98
911

RADICACIÓN: 47-001-2333-000-2014-00241-00
DEMANDANTE: OBRESAN
DEMANDADO: DISTRITO DE SANTA MARTA
MEDIO DE CONTROL: N Y R DEL DERECHO

P A S O A L D E S P A C H O

De la Magistrada Maribel Mendoza Jiménez, hoy 17 de octubre de 2017 el memorial relacionado a continuación y a través del cual la Cámara de Comercio de Santa Marta designa dependiente judicial.

Lo anterior, debido a que el expediente se encuentra a su disposición.

Consta de 1 folio.

Sírvase proveer.


JAIME ORTIZ ROMERO
Secretario

Despacho 1079
912

auxiliar
y tener en
cuenta
Marlin

Santa Marta, 02 de Octubre de 2017

Señores
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA
Ciudad.

Referencia: Rad: 47001233300320140024100

Dte: UNIÓN TEMPORAL OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA OBRESAN

Asunto: Dependencia Judicial y vigilancia de proceso.

ALFONSO LUIS LASTRA FUSCALDO, mayor de edad, con domicilio en el Distrito de Santa Marta, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 85.473.397, de Santa Marta, actuando como Representante Legal Suplente de la **Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena**, en mi calidad de Director General de la entidad, persona jurídica distinguida con el NIT Número 891.780.160-9, institución del orden legal, con personería jurídica, sin ánimo de lucro, constituida a iniciativa de los comerciantes de Santa Marta, creada mediante Decreto 421 de 1.931 de la Gobernación del Magdalena, quien en el proceso de la referencia actúa como demandada, por medio del presente, respetuosamente manifiesto que autorizo a la señorita **LAURA MARCELA AHUMADA VARGAS**, mayor de edad, y vecino de esta ciudad, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.082.960.478, de Santa Marta, judicante y funcionario de ésta entidad, para que actúe ante su correspondiente despacho judicial como: Asistente en Derecho, Auxiliar en derecho y /o Dependiente Judicial y para que en consecuencia pueda conocer y examinar los expedientes del proceso de la referencia, quedando igualmente facultado para retirar demandas; recibir y retirar despachos comisorios, oficios o cualquier otro documento dirigido a la Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena; solicitar y recibir copias y para conocer las fechas para las diligencias en las cuales el Representante Legal el o Apoderado de la entidad deba asistir. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 del Decreto 196 de 1971.

Ruego, Señor Magistrado, acceder a la petición.

Atentamente,

ALFONSO LUIS LASTRA FUSCALDO
C.C. No. 85.473.397, de Santa Marta.

41073

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA
FECHA: 03 OCT 2017
HORA: 10:17 AM
FOLIOS: 1
FIRMA: Ana Gonzalez

GRABADO



1022
b30 913

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA
Magistrada sustanciadora: MARIBEL MENDOZA JIMÉNEZ

Santa Marta, diecinueve (19) de diciembre de dos mil diecisiete (2017)

Expediente: 47-001-2333-003-2014-00241-00
Demandante: OBRESAN
Demandado: NACIÓN – MIN DE JUSTICIA Y DE DERECHO- CÁMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA- CENTRO DE ARBITRAJE, CONCILIACIÓN Y DE AMIGABLE COMPOSICIÓN DE LA UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA Y OTROS
Medio de control: REPARACIÓN DIRECTA
Asunto: AUTO FIJA FECHA CONTINUACIÓN DE AUDIENCIA INICIAL

Procede el Despacho a fijar fecha para la continuación de la audiencia inicial de que trata el artículo 180 del C.P.A.C.A., en consideración a que dicha diligencia realizada el 07 de marzo de 2017, se había suspendido para efectos de conformar el litisconsorte necesario dentro del presente asunto.

En virtud de lo anterior se **DISPONE**:

1. Señalar el día veintiuno (21) de febrero de 2017 a las diez de la mañana (10:00 a.m.) a efectos de llevar a cabo la continuación de la audiencia inicial en el proceso de la referencia.
- 2.-Por Secretaria notifíquese la presente providencia por estado electrónico.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

MARIBEL MENDOZA JIMÉNEZ

Magistrada

TRIBUNAL CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DE MAGDALENA
SECRETARÍA GENERAL

NOTIFICACION POPULAR ELECTRÓNICA
CERTIFICACIÓN

Auto anterior se notificó por NOTIFICACIÓN EN
ESTADOS ELECTRONICOS No. 002

15/01/2017

Secretario

De: Tribunal 03 Administrativo - Magdalena - Santa Marta
Enviado el: lunes, 15 de enero de 2018 10:52 a.m.
Para: 'miguelpolocampo@gmail.com'; 'jpolofigueroa@gmail.com'; 'alejocorman@gmail.com'; 'camarasm@ccsm.org.co'; 'mvivesnoguera@hotmail.com'; 'claudiakatime@yahoo.com'; 'ana.ussa@acegroup.com'; 'dianaboveamendinueta@hotmail.com'; 'gherrera@gha.com.co'; 'notificacionjudicial@unimagdalena.edu.co'; 'presidencia@ccsm.org.co'; 'secretariajuridica@ccsm.org.co'; 'notificaciones.judiciales@minjusticia.gov.co'; 'procuraduria43@gmail.com'; 'procjudadm155@procuraduria.gov.co'; 'marianorumbo@gmail.com'
Asunto: NOTIFICACIÓN EXPEDIENTE 2014-00241
Datos adjuntos: 2014-00241 OBRESAN.pdf

POR MEDIO DEL PRESENTE MENSAJE DE DATOS NOTIFICO PERSONALMENTE A USTED DEL PROVEÍDO DE 19 DE DICIEMBRE DE 2017, PÚBLICADO EN ESTADO 002 DE 15 DE ENERO DE 2018, POR MEDIO DEL CUAL ESTE DESPACHO SEÑALÓ COMO FECHA PARA CELEBRAR AUDIENCIA INICIAL EL DÍA 21 D FEBRERO DE 2018 A LAS DIEZ DE LA MAÑANA (10:00 AM), A EFECTOS DE LLEVAR A CABO LA CONTINUACIÓN DE LA AUDIENCIA INICIAL EN EL PROCESO SEGUIDO POR OBRESAN CONTRA LA NACIÓN – MINISTERIO DE JUSTUICIA Y DE DERECHO – CÁMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA – CENTRO DE ÁRBITRAJE, CONICLIACIÓN Y AMIGABLE COMPOSICIÓ Y OTROS, DENTRO DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA.

ATENTAMENTE
JAIME ORTIZ ROMERO
SECRETARIO

Tribunal 03 Administrativo - Magdalena - Santa Marta

915
b32

De: postmaster@Universidadmag.onmicrosoft.com
Para: notificacionjudicial@unimagdalena.edu.co
Enviado el: lunes, 15 de enero de 2018 10:49 a.m.
Asunto: Entregado: NOTIFICACIÓN EXPEDIENTE 2014-00241

El mensaje se entregó a los siguientes destinatarios:

notificacionjudicial@unimagdalena.edu.co (notificacionjudicial@unimagdalena.edu.co)

Asunto: NOTIFICACIÓN EXPEDIENTE 2014-00241



NOTIFICACIÓN
EXPEDIENTE 201...

9/16

De: Postmaster@procuraduria.gov.co
Para: procjudadm155@procuraduria.gov.co
Enviado el: lunes, 15 de enero de 2018 10:49 a.m.
Asunto: Entregado: NOTIFICACIÓN EXPEDIENTE 2014-00241

El mensaje se entregó a los siguientes destinatarios:

procjudadm155@procuraduria.gov.co (procjudadm155@procuraduria.gov.co)

Asunto: NOTIFICACIÓN EXPEDIENTE 2014-00241



NOTIFICACIÓN
EXPEDIENTE 201...

9/12

De: postmaster@outlook.com
Para: dianaboveamendinueta@hotmail.com
Enviado el: lunes, 15 de enero de 2018 10:49 a.m.
Asunto: Entregado: NOTIFICACIÓN EXPEDIENTE 2014-00241

El mensaje se entregó a los siguientes destinatarios:

dianaboveamendinueta@hotmail.com (dianaboveamendinueta@hotmail.com)

Asunto: NOTIFICACIÓN EXPEDIENTE 2014-00241



NOTIFICACIÓN
EXPEDIENTE 201...

Tribunal 03 Administrativo - Magdalena - Santa Marta

1035 9/18

De: postmaster@outlook.com
Para: mvivesnoguera@hotmail.com
Enviado el: lunes, 15 de enero de 2018 10:49 a.m.
Asunto: Entregado: NOTIFICACIÓN EXPEDIENTE 2014-00241

El mensaje se entregó a los siguientes destinatarios:

mvivesnoguera@hotmail.com (mvivesnoguera@hotmail.com)

Asunto: NOTIFICACIÓN EXPEDIENTE 2014-00241



NOTIFICACIÓN
EXPEDIENTE 201...

De: Microsoft Outlook
Para: claudiakatime@yahoo.com
Enviado el: lunes, 15 de enero de 2018 10:49 a.m.
Asunto: Retransmitido: NOTIFICACIÓN EXPEDIENTE 2014-00241

Se completó la entrega a estos destinatarios o grupos, pero el servidor de destino no envió información de notificación de entrega:

claudiakatime@yahoo.com (claudiakatime@yahoo.com)

Asunto: NOTIFICACIÓN EXPEDIENTE 2014-00241



NOTIFICACIÓN
EXPEDIENTE 201...

De: Microsoft Outlook
Para: miguelpolocampo@gmail.com; alejocorman@gmail.com; procuraduria43@gmail.com; marianorumbo@gmail.com
Enviado el: lunes, 15 de enero de 2018 10:49 a.m.
Asunto: Retransmitido: NOTIFICACIÓN EXPEDIENTE 2014-00241

Se completó la entrega a estos destinatarios o grupos, pero el servidor de destino no envió información de notificación de entrega:

miguelpolocampo@gmail.com (miguelpolocampo@gmail.com)

alejocorman@gmail.com (alejocorman@gmail.com)

procuraduria43@gmail.com (procuraduria43@gmail.com)

marianorumbo@gmail.com (marianorumbo@gmail.com)

Asunto: NOTIFICACIÓN EXPEDIENTE 2014-00241



NOTIFICACIÓN
EXPEDIENTE 201...

102
a21

De: Microsoft Outlook
Para: gherrera@gha.com.co
Enviado el: lunes, 15 de enero de 2018 10:49 a.m.
Asunto: Retransmitido: NOTIFICACIÓN EXPEDIENTE 2014-00241

Se completó la entrega a estos destinatarios o grupos, pero el servidor de destino no envió información de notificación de entrega:

gherrera@gha.com.co (gherrera@gha.com.co)

Asunto: NOTIFICACIÓN EXPEDIENTE 2014-00241



NOTIFICACIÓN
EXPEDIENTE 201...

De: Microsoft Outlook
Para: jpolofigueroa@gmail.com
Enviado el: lunes, 15 de enero de 2018 10:49 a.m.
Asunto: Retransmitido: NOTIFICACIÓN EXPEDIENTE 2014-00241

Se completó la entrega a estos destinatarios o grupos, pero el servidor de destino no envió información de notificación de entrega:

jpolofigueroa@gmail.com (jpolofigueroa@gmail.com)

Asunto: NOTIFICACIÓN EXPEDIENTE 2014-00241



NOTIFICACIÓN
EXPEDIENTE 201...

Tribunal 03 Administrativo - Magdalena - Santa Marta

1040 973

De: Microsoft Outlook
Para: notificaciones.judiciales@minjusticia.gov.co
Enviado el: lunes, 15 de enero de 2018 10:49 a.m.
Asunto: Retransmitido: NOTIFICACIÓN EXPEDIENTE 2014-00241

Se completó la entrega a estos destinatarios o grupos, pero el servidor de destino no envió información de notificación de entrega:

notificaciones.judiciales@minjusticia.gov.co (notificaciones.judiciales@minjusticia.gov.co)

Asunto: NOTIFICACIÓN EXPEDIENTE 2014-00241



NOTIFICACIÓN
EXPEDIENTE 201...

Tribunal 03 Administrativo - Magdalena - Santa Marta

De: Microsoft Outlook
Para: ana.ussa@acegroup.com
Enviado el: lunes, 15 de enero de 2018 10:49 a.m.
Asunto: Retransmitido: NOTIFICACIÓN EXPEDIENTE 2014-00241

Se completó la entrega a estos destinatarios o grupos, pero el servidor de destino no envió información de notificación de entrega:

ana.ussa@acegroup.com (ana.ussa@acegroup.com)

Asunto: NOTIFICACIÓN EXPEDIENTE 2014-00241



NOTIFICACIÓN
EXPEDIENTE 201...

Tribunal 03 Administrativo - Magdalena - Santa Marta

De: Microsoft Outlook
Para: camarasm@ccsm.org.co; presidencia@ccsm.org.co; secretariajuridica@ccsm.org.co
Enviado el: lunes, 15 de enero de 2018 10:49 a.m.
Asunto: Retransmitido: NOTIFICACIÓN EXPEDIENTE 2014-00241

Se completó la entrega a estos destinatarios o grupos, pero el servidor de destino no envió información de notificación de entrega:

camarasm@ccsm.org.co (camarasm@ccsm.org.co)

presidencia@ccsm.org.co (presidencia@ccsm.org.co)

secretariajuridica@ccsm.org.co (secretariajuridica@ccsm.org.co)

Asunto: NOTIFICACIÓN EXPEDIENTE 2014-00241



NOTIFICACIÓN
EXPEDIENTE 201...

Tribunal 03 Administrativo - Magdalena - Santa Marta

De: Juan Alberto Polo Figueroa <jpolofigueroa@gmail.com>
Enviado el: miércoles, 07 de febrero de 2018 07:06 p.m.
Para: Tribunal 03 Administrativo - Magdalena - Santa Marta
Asunto: Re: NOTIFICACIÓN EXPEDIENTE 2014-00241

Dr. Jaime, creo que la audiencia programada no puede realizarse en la fecha indicada, por dos razones:

1. Está convocada para el 21 de febrero de 2017, que pasó hace casi un año. Habría que modificar esa fecha mediante otro auto.
 2. El litis consorcio no se ha integrado aún. Al Dr. Miguel Ángel Polo no lo han podido notificar. Habría que emplazarlo.
- Por favor comenté estas dos circunstancias a la Dra. Maribel para ver qué dispone. Y me cuenta, por favor.

Juan Alberto Polo Figueroa.

El 15 ene. 2018 10:48 a. m., "Tribunal 03 Administrativo - Magdalena - Santa Marta"
<tadmin03mgd@notificacionesrj.gov.co> escribió:

POR MEDIO DEL PRESENTE MENSAJE DE DATOS NOTIFICO PERSONALMENTE A USTED DEL PROVEÍDO DE 19 DE DICIEMBRE DE 2017, PÚBLICADO EN ESTADO 002 DE 15 DE ENERO DE 2018, POR MEDIO DEL CUAL ESTE DESPACHO SEÑALÓ COMO FECHA PARA CELEBRAR AUDIENCIA INICIAL EL DÍA 21 D FEBRERO DE 2018 A LAS DIEZ DE LA MAÑANA (10:00 AM), A EFECTOS DE LLEVAR A CABO LA CONTINUACIÓN DE LA AUDIENCIA INICIAL EN EL PROCESO SEGUIDO POR OBRESAN CONTRA LA NACIÓN – MINISTERIO DE JUSTUICIA Y DE DERECHO – CÁMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA – CENTRO DE ÁRBITRAJE, CONICLIACIÓN Y AMIGABLE COMPOSICIÓ Y OTROS, DENTRO DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA.

ATENTAMENTE

JAIME ORTIZ ROMERO

SECRETARIO

4492

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA
FECHA: 108 FEB 2018
HORA: 2:20 PM
FOLIOS: 1
FIRMA: Ana C Briceno

De: Juan Alberto Polo Figueroa <jpolofigueroa@gmail.com>
Enviado el: miércoles, 07 de febrero de 2018 07:06 p.m.
Para: Tribunal 03 Administrativo - Magdalena - Santa Marta
Asunto: Re: NOTIFICACIÓN EXPEDIENTE 2014-00241

Dr. Jaime, creo que la audiencia programada no puede realizarse en la fecha indicada, por dos razones:

1. Está convocada para el 21 de febrero de 2017, que pasó hace casi un año. Habría que modificar esa fecha mediante otro auto.
 2. El litis consorcio no se ha integrado aún. Al Dr. Miguel Ángel Polo no lo han podido notificar. Habría que emplazarlo.
- Por favor comenté estas dos circunstancias a la Dra. Maribel para ver qué dispone. Y me cuenta, por favor.
Juan Alberto Polo Figueroa.

El 15 ene. 2018 10:48 a. m., "Tribunal 03 Administrativo - Magdalena - Santa Marta"
<tadmin03mgd@notificacionesrj.gov.co> escribió:

POR MEDIO DEL PRESENTE MENSAJE DE DATOS NOTIFICO PERSONALMENTE A USTED DEL PROVEÍDO DE 19 DE DICIEMBRE DE 2017, PÚBLICADO EN ESTADO 002 DE 15 DE ENERO DE 2018, POR MEDIO DEL CUAL ESTE DESPACHO SEÑALÓ COMO FECHA PARA CELEBRAR AUDIENCIA INICIAL EL DÍA 21 D FEBRERO DE 2018 A LAS DIEZ DE LA MAÑANA (10:00 AM), A EFECTOS DE LLEVAR A CABO LA CONTINUACIÓN DE LA AUDIENCIA INICIAL EN EL PROCESO SEGUIDO POR OBRESAN CONTRA LA NACIÓN – MINISTERIO DE JUSTUICIA Y DE DERECHO – CÁMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA – CENTRO DE ÁRBITRAJE, CONICLIACIÓN Y AMIGABLE COMPOSICIÓ Y OTROS, DENTRO DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA.

ATENTAMENTE

JAIME ORTIZ ROMERO

SECRETARIO

1646
929

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA
SECRETARÍA GENERAL
Ley 1437 de 2011

P A S O A L D E S P A C H O

De la Magistrada Maribel Mendoza Jiménez, hoy trece (13) de febrero de dos mil dieciocho (2018)

Expediente: 47-001-2333-003-2014-00241-00
Demandante: OBRESAN
Demandado: NACION – MINJUSTICIA Y OTROS
Medio de control: REPARACION DIRECTA

Informando que el auto del 19/12/2017 señaló erradamente la audiencia inicial para el día 21/02/2017, fecha anterior al mismo proveído, por lo cual debe ser corregido.

Se informa que en la notificación a las partes por correo electrónico se señaló como fecha de audiencia el día 21/02/2018.

Sírvase proveer lo pertinente.

Sube 2 cuadernos con 925 folios



JAIME ORTIZ ROMERO
SECRETARIO



104
929
930

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA
Magistrada Ponente: MARIBEL MENDOZA JIMENEZ

Santa Marta, catorce (14) de febrero de dos mil dieciocho (2018)

Expediente: 47-001-2333-003-2014-00241-00
Demandante: UNIÓN TEMPORAL DE OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA – OBRESAN - .
Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO – CAMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA – CENTRO DE ARBITRAJE, CONCILIACIÓN Y AMIGABLE COMPOSICIÓN – UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA – DIANA BOVEA MENDINUETA – MIGUEL ANGEL POLO CAMPO – JUAN ALBERTO POLO FIGUEROA.
Medio de control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Revisado el proceso de la referencia, y encontrándose pendiente para la celebración de la audiencia inicial, se advierte que la misma debe ser suspendida, teniendo en cuenta que se hace necesario comunicar y notificar debidamente al Doctor Miguel Ángel Polo la decisión de vincularlo como litisconsorte necesario en el proceso de la referencia.

En efecto, se tiene que tratándose de una persona natural se debe enviar comunicación a la dirección del mismo, para que dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de la misma, comparezca a la Secretaría de la Corporación con el fin de recibir notificación personal de la decisión que ordenó su vinculación al proceso. Lo anterior, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 200 del C.P.A.C.A. y el artículo 291 del C.G.P.

Para tal fin, se debió intentar la comunicación a la dirección aportada con la demanda, y de no concurrir a notificarse proceder a enviar el aviso correspondiente. Así mismo, en el evento de no ser posible la comunicación, porque no reside, no trabaja en el lugar o la dirección no existe, proceder conforme lo dispone el artículo 291 del C.G.P., esto es, realizar el emplazamiento correspondiente.

Teniendo en cuenta que, en el asunto de la referencia, la Secretaría de la Corporación no agotó las formas de notificación dispuestas en el C.P.A.C.A., y


C.G.P., limitándose a enviar la comunicación por un correo electrónico que se presume corresponde al vinculado, se deberá ordenar que proceda de conformidad con lo expuesto.

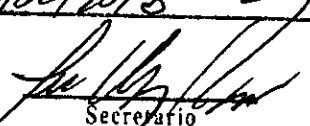
En consecuencia, se **DISPONE**:

PRIMERO: Suspender la realización de la audiencia inicial programada dentro del proceso de la referencia.

SEGUNDO: Proceder a efectuar la notificación personal del auto que ordenó la vinculación del señor Miguel Ángel Polo, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE


MARIBEL MENDOZA JIMENEZ
Magistrada

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA SECRETARIA GENERAL
NOTIFICACIÓN POR ESTADO ELECTRÓNICO CERTIFICACIÓN
El auto anterior se notificó POR ANOTACIÓN EN ESTADOS ELECTRONICOS No. <u>026</u> hoy <u>20/02/2018</u>
 Secretario

De: Tribunal 03 Administrativo - Magdalena - Santa Marta
Enviado el: miércoles, 21 de febrero de 2018 12:37 p.m.
Para: 'miguelpolocampo@gmail.com'; 'jpolofigueroa@gmail.com'; 'alejocorman@gmail.com'; 'camarasm@ccsm.org.co'; 'claudiakatime@yahoo.com'; 'mvivesnoguera@hotmail.com'; 'ana.ussa@acergroup.com'; 'dianaboveamendinueta@hotmail.com'; 'gherrera@gha.com.co'; 'notificacionjudicial@unimagdalena.edu.co'; 'presidencia@ccsm.org.co'; 'secretariajuridica@ccsm.org.co'; 'notificacionesjudiciales@minjusticia.gov.co'; 'procjudadm155@procuraduria.gov.co'; 'procuraduria43@gmail.com'; 'marianorumbo@gmail.com'
Asunto: NOTIFICACIÓN EXPEDIENTE 2014-000241
Datos adjuntos: 2014-000241 OBRESAN.pdf

POR MEDIOD DEL PRESENTE MENSAJE DE DATOS NOTIFICO PERSONALMENTE A USTED DEL PROVEÍDO DE 14 DE FEBRERO DE 2018, PUBLICADO EN ESTADO 026 DE 20 DE FEBRERO DE 2018, EN EL PROCESO DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO SEGUIDO POR OBRESAN CONTRA NACIÓN – MINISTERIO DE JUSTICIA Y OTROS, RADICADO 47-001-2333-003-2014-00241-00.

ATENTAMENTE
JAIME ORTIZ ROMERO
SECRETARIO

De: Microsoft Outlook
Para: ana.ussa@acergroup.com
Enviado el: miércoles, 21 de febrero de 2018 12:38 p.m.
Asunto: Retransmitido: NOTIFICACIÓN EXPEDIENTE 2014-000241

Se completó la entrega a estos destinatarios o grupos, pero el servidor de destino no envió información de notificación de entrega:

ana.ussa@acergroup.com (ana.ussa@acergroup.com)

Asunto: NOTIFICACIÓN EXPEDIENTE 2014-000241



NOTIFICACIÓN
EXPEDIENTE 201...

De: Postmaster@procuraduria.gov.co
Para: procjudadm155@procuraduria.gov.co
Enviado el: miércoles, 21 de febrero de 2018 12:38 p.m.
Asunto: Entregado: NOTIFICACIÓN EXPEDIENTE 2014-000241

El mensaje se entregó a los siguientes destinatarios:

procjudadm155@procuraduria.gov.co (procjudadm155@procuraduria.gov.co)

Asunto: NOTIFICACIÓN EXPEDIENTE 2014-000241



NOTIFICACIÓN
EXPEDIENTE 201...

De: postmaster@outlook.com
Para: mvivesnoguera@hotmail.com
Enviado el: miércoles, 21 de febrero de 2018 12:38 p.m.
Asunto: Entregado: NOTIFICACIÓN EXPEDIENTE 2014-000241

El mensaje se entregó a los siguientes destinatarios:

mvivesnoguera@hotmail.com (mvivesnoguera@hotmail.com)

Asunto: NOTIFICACIÓN EXPEDIENTE 2014-000241



NOTIFICACIÓN
EXPEDIENTE 201...

De: postmaster@outlook.com
Para: dianaboveamendinueta@hotmail.com
Enviado el: miércoles, 21 de febrero de 2018 12:38 p.m.
Asunto: Entregado: NOTIFICACIÓN EXPEDIENTE 2014-000241

El mensaje se entregó a los siguientes destinatarios:

dianaboveamendinueta@hotmail.com (dianaboveamendinueta@hotmail.com)

Asunto: NOTIFICACIÓN EXPEDIENTE 2014-000241



NOTIFICACIÓN
EXPEDIENTE 201...

De: postmaster@Universidadmag.onmicrosoft.com
Para: notificacionjudicial@unimagdalena.edu.co
Enviado el: miércoles, 21 de febrero de 2018 12:38 p.m.
Asunto: Entregado: NOTIFICACIÓN EXPEDIENTE 2014-000241

El mensaje se entregó a los siguientes destinatarios:

notificacionjudicial@unimagdalena.edu.co (notificacionjudicial@unimagdalena.edu.co)

Asunto: NOTIFICACIÓN EXPEDIENTE 2014-000241



NOTIFICACIÓN
EXPEDIENTE 201...

De: Microsoft Outlook
Para: claudiakatime@yahoo.com
Enviado el: miércoles, 21 de febrero de 2018 12:37 p.m.
Asunto: Retransmitido: NOTIFICACIÓN EXPEDIENTE 2014-000241

Se completó la entrega a estos destinatarios o grupos, pero el servidor de destino no envió información de notificación de entrega:

claudiakatime@yahoo.com (claudiakatime@yahoo.com)

Asunto: NOTIFICACIÓN EXPEDIENTE 2014-000241



NOTIFICACIÓN
EXPEDIENTE 201...

938
1053

Tribunal 03 Administrativo - Magdalena - Santa Marta

De: Microsoft Outlook
Para: miguelpolocampo@gmail.com; alejocorman@gmail.com; procuraduria43@gmail.com; marianorumbo@gmail.com
Enviado el: miércoles, 21 de febrero de 2018 12:37 p.m.
Asunto: Retransmitido: NOTIFICACIÓN EXPEDIENTE 2014-000241

Se completó la entrega a estos destinatarios o grupos, pero el servidor de destino no envió información de notificación de entrega:

miguelpolocampo@gmail.com (miguelpolocampo@gmail.com)

alejocorman@gmail.com (alejocorman@gmail.com)

procuraduria43@gmail.com (procuraduria43@gmail.com)

marianorumbo@gmail.com (marianorumbo@gmail.com)

Asunto: NOTIFICACIÓN EXPEDIENTE 2014-000241



NOTIFICACIÓN
EXPEDIENTE 201...

De: Microsoft Outlook
Para: camarasm@ccsm.org.co; presidencia@ccsm.org.co; secretariajuridica@ccsm.org.co
Enviado el: miércoles, 21 de febrero de 2018 12:37 p.m.
Asunto: Retransmitido: NOTIFICACIÓN EXPEDIENTE 2014-000241

Se completó la entrega a estos destinatarios o grupos, pero el servidor de destino no envió información de notificación de entrega:

camarasm@ccsm.org.co (camarasm@ccsm.org.co)

presidencia@ccsm.org.co (presidencia@ccsm.org.co)

secretariajuridica@ccsm.org.co (secretariajuridica@ccsm.org.co)

Asunto: NOTIFICACIÓN EXPEDIENTE 2014-000241



NOTIFICACIÓN
EXPEDIENTE 201...

940
1657

De: Microsoft Outlook
Para: gherrera@gha.com.co
Enviado el: miércoles, 21 de febrero de 2018 12:37 p.m.
Asunto: Retransmitido: NOTIFICACIÓN EXPEDIENTE 2014-000241

Se completó la entrega a estos destinatarios o grupos, pero el servidor de destino no envió información de notificación de entrega:

gherrera@gha.com.co (gherrera@gha.com.co)

Asunto: NOTIFICACIÓN EXPEDIENTE 2014-000241



NOTIFICACIÓN
EXPEDIENTE 201...

941
1050

Tribunal 03 Administrativo - Magdalena - Santa Marta

De: Microsoft Outlook
Para: notificacionesjudiciales@minjusticia.gov.co
Enviado el: miércoles, 21 de febrero de 2018 12:37 p.m.
Asunto: No se puede entregar: NOTIFICACIÓN EXPEDIENTE 2014-000241



No se pudo entregar el mensaje a
notificacionesjudiciales@minjusticia.gov.co.

No se encontró notificacionesjudiciales en
minjusticia.gov.co.

tadmin03mgd	Office 365	notificacionesjudici. . .
Acción necesaria		Destinatario
Dirección Para desconocida		

Solución

La dirección puede estar mal escrita o no existir. Pruebe una o varias de las acciones siguientes:

- Envíe el mensaje otra vez siguiendo estos pasos: en Outlook, abra este informe de no entrega (NDR) y elija **Enviar de nuevo** en la cinta de opciones Informe. En Outlook en la web, seleccione este NDR y luego elija el vínculo "**Haga clic aquí para enviar este mensaje otra vez.**". Después, elimine y vuelva a escribir la dirección completa del destinatario. Si se le ofrece una sugerencia de la lista de Autocompletar, no la seleccione. Después de escribir la dirección completa, haga clic en **Enviar**.
- Póngase en contacto con el destinatario (por teléfono, por ejemplo) para comprobar que la dirección existe y es correcta.
- El destinatario puede haber establecido una dirección de reenvío de correo incorrecta. Pídale que compruebe que el reenvío que ha configurado funciona correctamente.
- Borre la lista de Autocompletar destinatarios en Outlook o Outlook en la web siguiendo los pasos del artículo Solucionar problemas de entrega para el código de error de correo electrónico 5.1.1 en Office 365 y después vuelva a enviar el mensaje. Escriba de nuevo la dirección completa del destinatario antes de seleccionar **Enviar**.

Si el problema persiste, reenvíe este mensaje a su administrador de correo electrónico. Si usted es administrador de correo electrónico, consulte la sección **Más información para los administradores de correo electrónico**, a continuación.

¿Le resultó útil esta información? Envíe sus comentarios a Microsoft.

De: Microsoft Outlook
Para: jpolofigueroa@gmail.com
Enviado el: miércoles, 21 de febrero de 2018 12:37 p.m.
Asunto: Retransmitido: NOTIFICACIÓN EXPEDIENTE 2014-000241

Se completó la entrega a estos destinatarios o grupos, pero el servidor de destino no envió información de notificación de entrega:

jpolofigueroa@gmail.com (jpolofigueroa@gmail.com)

Asunto: NOTIFICACIÓN EXPEDIENTE 2014-000241



NOTIFICACIÓN
EXPEDIENTE 201...

1060
943



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA
Secretaría General

Santa Marta D.T.C.H., junio 5 de 2018

Doctor
MIGUEL ANGEL POLO CAMPO
Avenida del Libertador No.13-94
Santa Marta D.T. C.H.

Of. No.Tamsg-2018-155

Ref.: RAD. EXP. 47000-2333-003-2014-00241-00
ACCION: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
ACTOR: UNION TEMPORAL DE OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA
-OBRESAN-
DEMANDADO: NACIÓN-MINISTERIO DE JUSTICIA-CAMARA DE COMERCIO Y
OTROS

**COMUNICACIÓN PARA LA DILIGENCIA DE NOTIFICACION PERSONAL ART.
291 C.G.P.**

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 200 del C.P.A.C.A y artículo 291 del C. G.P.; sírvase comparecer a la Secretaría del Tribunal Administrativo del Magdalena, ubicada en la calle 20 No. 2 A - 20 de la ciudad de Santa Marta; dentro de los CINCO (5) días siguientes al recibo de la presente comunicación, a fin de recibir notificación personal del auto que ordena su vinculación como demandado de fecha siete (7) de marzo de 2017; dentro del proceso referenciado y para que comparezca al proceso; conteste la demanda y proponga excepciones.

Se advierte al notificado, que si no comparece dentro de la oportunidad legal señalada, se procederá en forma inmediata a practicar la notificación por AVISO en la forma establecida en el artículo 292 del C. G.P.

Atentamente,

JAIME ORTIZ ROMERO
Secretario General



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA
Secretaría General

Santa Marta D.T.C.H., junio 5 de 2018

Doctor
MIGUEL ANGEL POLO CAMPO
Avenida del Libertador No.13-94
Santa Marta D.T. C.H.

Of. No.Tamsg-2018-155

Ref.: RAD. EXP. 47000-2333-003-2014-00241-00

ACCION: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

ACTOR: UNION TEMPORAL DE OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA
-OBRESAN-

DEMANDADO: NACIÓN-MINISTERIO DE JUSTICIA-CAMARA DE COMERCIO Y
OTROS

COMUNICACIÓN PARA LA DILIGENCIA DE NOTIFICACION PERSONAL ART.
291 C.G.P.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 200 del C.P.A.C.A y artículo 291 del C. G.P.; sírvase comparecer a la Secretaría del Tribunal Administrativo del Magdalena, ubicada en la calle 20 No. 2 A - 20 de la ciudad de Santa Marta; dentro de los CINCO (5) días siguientes al recibo de la presente comunicación, a fin de recibir notificación personal del auto que ordena su vinculación como demandado de fecha siete (7) de marzo de 2017; dentro del proceso referenciado y para que comparezca al proceso; conteste la demanda y proponga excepciones.

Se advierte al notificado, que si no comparece dentro de la oportunidad legal señalada, se procederá en forma inmediata a practicar la notificación por AVISO en la forma establecida en el artículo 292 del C. G.P.

Atentamente,



JAIME ORTIZ ROMERO
Secretario General

1062
945



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA
Secretaría General

Santa Marta D.T.C.H., junio 5 de 2018

Doctor
MIGUEL ANGEL POLO CAMPO
Avenida del Libertador No.13-94
Santa Marta D.T. C.H.

Of. No.Tamsg-2018-155

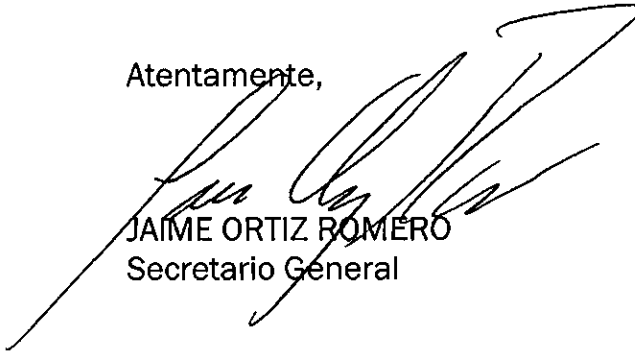
Ref.: RAD. EXP. 47000-2333-003-2014-00241-00
ACCION: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
ACTOR: UNION TEMPORAL DE OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA
-OBRESAN-
DEMANDADO: NACIÓN-MINISTERIO DE JUSTICIA-CAMARA DE COMERCIO Y
OTROS

**COMUNICACIÓN PARA LA DILIGENCIA DE NOTIFICACION PERSONAL ART.
291 C.G.P.**

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 200 del C.P.A.C.A y artículo 291 del C. G.P.; sírvase comparecer a la Secretaría del Tribunal Administrativo del Magdalena, ubicada en la calle 20 No. 2 A - 20 de la ciudad de Santa Marta; dentro de los CINCO (5) días siguientes al recibo de la presente comunicación, a fin de recibir notificación personal del auto que ordena su vinculación como demandado de fecha siete (7) de marzo de 2017; dentro del proceso referenciado y para que comparezca al proceso; conteste la demanda y proponga excepciones.

Se advierte al notificado, que si no comparece dentro de la oportunidad legal señalada, se procederá en forma inmediata a practicar la notificación por AVISO en la forma establecida en el artículo 292 del C. G.P.

Atentamente,


JAIME ORTIZ ROMERO
Secretario General

PLbrión #177
21-06-2018

Señores

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTA MARTA

Att. Dra. Maribel Mendoza Jiménez

Magistrada Ponente

E. S. D.

Ojo
Notación en el
Cuadro
Aprecar

Medio de Control	Reparación Directa
Radicado	47-001-23-33-003-2014-00241-00
Demandante	OBRESAN
Demandados	Ministerio de Justicia – Universidad de Santa Marta y Otros.

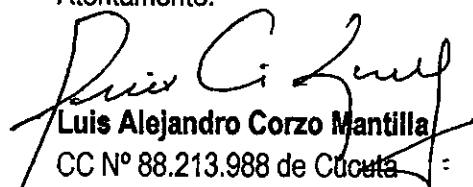
Luis Alejandro Corzo Mantilla, mayor de edad, domiciliado en la Ciudad de San José de Cúcuta, identificado con la Cédula de Ciudadanía N° 88.213.988 de Cúcuta, de profesión abogado y portador de la Tarjeta Profesional N° 101.576 del C. S de la J., obrando conforme al poder conferido, de manera respetuosa me permito allegar a su bien servido Despacho el presente memorial.

En audiencia inicial llevada a cabo a los 07 días de marzo del 2017, se dispuso vincular a los señores DIANA BOVEA MENDINUETA, MIGUEL ÁNGEL POLO CAMPO y JUAN ALBERTO POLO FIGUEROA, como litisconsortes necesarios en el presente proceso, de los cuales a la fecha no ha comparecido al proceso el sr. MIGUEL ÁNGEL POLO CAMPO, razón que imposibilita continuar con las etapas procesales pertinentes.

En virtud de lo anterior, y de conformidad con los principios de economía y celeridad, solicito que se efectúen los trámites pertinentes para integrar al litisconsorte necesario al proceso, y poder así surtir las etapas procesales subsiguientes.

Agradezco su vocación de servicio en la Administración de Justicia.

Atentamente.


Luis Alejandro Corzo Mantilla
CC N° 88.213.988 de Cúcuta
TP N° 101.576 del C. S. de la J.

50645

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA	
FECHA:	25-06-18
HORA:	8:35 a.m.
FOLIOS:	1
FIRMA:	Jorge Hdez.



Servientrega S.A. Nit 860.512.330-3, Principal Bogotá D.C., Colombia Av Calle 8 No 34 A-11
Atención al usuario: www.servientrega.com, PBX 7 700 200 FAX 7 700 380 ext 110045, Grandes
Contenedores Resolución DIAN 000041 del 30 enero de 2014, Aduela en el área de Resol.
DIAN 00698 de Nov 24/2003, Responsables y Representantes de IVA Factura No. Rematador
Resolución DIAN 18752007694668, 09/04/2018, Prelijo 009 desde el 8/5249107-9-90328317

Código CDS/SER: 1 - 22 - 516

AV. 5 # 8-58 EDIFICIO MUTUO AUXILIO OFIC INA 305

DR LUIS ALEJANDRO CORZO MANTILLA

Tel/cel: 5718267

Ciudad: CUCUTA

País: COLOMBIA D.I./NIT: 5718267

Cod. Postal: 540004

Dpto: NORTE DE SANTANDER

REMITENTE

CAUSAL DEVOLUCIÓN DEL ENVÍO	INTENTO DE ENTREGA	NO. NOTIFICACIÓN
-----------------------------	--------------------	------------------

1	2	3	1	2	3
Desconocido	1	1	1	1	1
Retenido	2	1	1	1	1
No reside	3	1	1	1	1
No Reclamado	4	1	1	1	1
Dirección Errada	5	1	1	1	1
Otro (indicar cual)	6	1	1	1	1

RECIBI A CONFORMIDAD (NOMBRE LEGIBLE SELLO Y D.I.)

Guia No. 977813597



FECHA Y HORA DE ENTREGA
HORA / DIA / ME / AÑO

Observaciones en la entrega:

Fecha: 20 / 06 / 2016 11:43

Fecha Prog. Entrega: / /

Guia No.: 977813597



947

DESTINATARIO	SMR	DOCUMENTO UNITAR	PZ: 1
	70	MAGDALENA	SANTA MARTA
		NORMAL	MT. TERRESTRE
	CLL 20 # 2 A-20 CENTRO PALACIO DE JUSTICIA		
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTA MARTA			
Tel/cel: 11111111111 D.I./NIT: 20220			
País: COLOMBIA Cod. Postal: 470004			
e-mail:			

Dice Contener: DOCUMENTOS

Obs. para entrega

Vr. Declarado: \$ 5.000

Vr. Flete: \$ 0

Vr. Sobrevalor: \$ 300

Vr. Mensajería expresa: \$ 8.900

Vr. Total: \$ 9.200

Vr. a Cobrar: \$ 0

Vol (Pz.) / / Peso Pz (Kg):
Peso (Vol). Peso (Kg): 1.00
No. Remisión:
No. Bolsa seguridad
No. Sobrevalor:
Guia Retorno Sobrevalor:

PRUEBA DE ENTREGA

Ministerio de Transporte, Licencia No. 805 de Marzo 5/2001, MINTC, licencia No. 1776 de Sept 7/2010.



El usuario debe aceptar constancia que tuvo conocimiento del contenido que se encuentra publicado en la página web de Servientrega S.A. www.servientrega.com y en las centrales ubicadas en los Centros de Soluciones. Quien Entregue:
que requiera el servicio acordado entre las partes, cuyo contenido clasificar según corresponda con la clasificación de este documento. Así mismo declara conocer nuestro Aviso de Privacidad y Aceptación de Política de
Protección de Datos Personales los cuales se encuentran en el sitio web. Para la preservación de documentos, claves y recursos necesarios al portal www.servientrega.com o a la línea telefónica (11) 7700200

Auto 98875-2.
Manuel

Señores
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA
E. S. D.

Referencia: Contestación de la demanda
Radicado: 47-001-2333-003-2014-000241-00
Accionante: Unión Temporal Obras Especiales de Santa Marta (OBRESAN)
Demandado: Nación – Ministerio de Justicia – Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición de la Cámara de Comercio y Universidad Del Magdalena
Magistrado Ponente: MARIBEL MENDOZA JIMENEZ

MANUEL VIVES NOGUERA, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Santa Marta, abogado en ejercicio, identificado con cedula de ciudadanía numero 84.454.719 de Santa Marta, portador de la tarjeta profesional de abogado número 169.144 del consejo superior de la judicatura, renuncio al poder que me fuere otorgado por LA CAMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA PARA EL MAGDALENA, para representarla en demanda de Reparación Directa interpuesta por los miembros de la unión Temporal OBRESAN. Lo anterior por motivos de orden personal y laboral. Para todos los efectos certifico que los poderdantes se encuentran a paz y salvo con el suscrito.

Agradezco de ante mano su amable colaboración.

Atentamente,

Manuel Vives Noguera
MANUEL VIVES NOGUERA
CC 84.454.719 de Santa Marta
TP 169.144 del C.S. de la J.



GRABADO

W.

Santa Marta, D.T.C.H. Junio de 2017

Señores

CAMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA PARA EL MAGDALENA

E. S. M.

Manuel Vives Noguera identificado con cedula de ciudadanía numero 84.454.719 de Santa Marta, abogado en ejercicio, portador de la tarjeta profesional de abogado 169.144 expedida por el H. Consejo Superior de Judicatura, me permito informarle que no se me hace posible continuar representándolos en el proceso de radicado 47-001-2333-003-2014-000241-00 mediante acción de Reparación Directa interpuesta por los miembros de la unión temporal OBRESAN, que actualmente cursa en el Tribunal Administrativo del Magdalena con Ponencia de la H. MARIBEL MENDOZA JIMENEZ. Lo anterior como consecuencia de motivos personales y profesionales que me impiden continuar con la representación en cuestión. Para todos los efectos legales las partes se encuentran a paz y salvo y este documento así lo certifica.

Agradezco de antemano su amable atención.

Atentamente,



MANUEL VIVES NOGUERA
CC 84.454.719 de Santa Marta
TP 169.144 del C.S. de la J.

Honorables Magistrados

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA

M.P. Dra. Maribel Mendoza Jiménez

E. S. D.

Subm-her
Anulacion
recurso

985 877
40515

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA
FECHA: 30 JUN 2017
HORA: 8:45 AM
FOLIOS: 24
FIRMA: JOSÉ TOBIAS

REF:

Radicación: 47001 3333-003 2014-00241-00
Medio de control: Reparación directa
Demandante: OBRESAN
Demandado: NACION-MINISTERIO DE JUSTICIA -OTROS

DIANA BOVEA MENDINUETA y JUAN ALBERTO POLO FIGUEROA, mayores, abogados titulados y en ejercicio, identificados al pie de nuestras firmas, en nuestro propio nombre, por medio de este escrito damos respuesta, en tiempo¹, a la demanda promovida contra nosotros, en condición de árbitros, por la UNION TEMPORAL OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA- OBRESAN, y al respecto exponemos:

I. PRONUNCIAMIENTO SOBRE LAS DECLARACIONES Y CONDENAS PEDIDAS.

Nos oponemos

1. A la pretendida declaratoria de responsabilidad administrativa y patrimonial, por no ser la anulación del laudo arbitral, ni remotamente, la causante de los perjuicios que los demandantes dicen les fueron ocasionados por falla en el ejercicio de la función jurisdiccional, como quiera que el laudo arbitral proferido por nosotros el 22 de agosto de 2011 en desarrollo del Tribunal de Arbitramento, convocado por OBRESAN contra la Universidad del Magdalena, fue retirado de la vida jurídica, por decisión del Consejo de Estado.

¹ En un fallo de tutela, del 15 de diciembre de 2016, el Consejo de Estado con ponencia de la Magistrada María Elizabeth García González, con referencia a la contestación de la demanda por litisconsortes, manifestó que si bien es cierto que el artículo 172 del CPACA concede un plazo de 30 días, también lo es que dicha norma supedita el término al artículo 199 ibídem, que prevé que esos 30° días comienzan a correr una vez venzan los 25 días allí consagrados, los cuales se contabilizan a partir del momento en que se efectúa la última notificación de los demandados.

GRABADO

946

878

2. A la condena por daños inmateriales, no solo porque no existe la menor prueba sobre los mismos sino porque no consulta las directrices jurisprudenciales sobre el reconocimiento y pago de este tipo de perjuicios.
3. Al reconocimiento de perjuicios por daño emergente y lucro cesante, porque no existe prueba de su causación. Resulta paradójico que los montos indicados de tales perjuicios coincidan o sean los mismos establecidos en el laudo arbitral anulado.

La anulación de este laudo dejó sin piso los reconocimientos y condenas dispuestos en el mismo, por lo que los daños ahora alegados deben ser plenamente probados en este proceso. Los perjuicios que se supone les causó el incumplimiento del contrato suscrito con la **UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA** y las decisiones adoptadas por esta entidad estatal durante la ejecución del contrato, son muy diferentes de los que pudieran derivarse de la anulación del laudo arbitral, situaciones estas que no pueden ser confundidas ni mezcladas.

Por lo demás, el hecho de haber involucrado a la Universidad del Magdalena como parte demandada pone de presente que lo que se persigue realmente es, a través de este proceso, revivir lo actuado en el Tribunal de Arbitramento, lo cual implica una acumulación indebida procesos.

4. A las demás pretensiones de la parte demandante.

II. PRONUNCIAMIENTO ACERCA DE LOS HECHOS U OMISIONES RELATADOS EN LA DEMANDA.

Nos pronunciamos acerca de los mismos, de la siguiente manera:

Hecho 1. Debe ser demostrado por los demandantes

Hecho 2. Debe ser de mostrado por los demandantes

Hecho 3. Debe ser demostrado por los demandantes

Hecho 4. Debe ser demostrado por los demandantes

Comentario: Los hechos 1, 2, 3 y 4 dan cuenta de un contrato que reúne las características propias de un contrato estatal: licitación, cláusula de arbitraje, multas, principios de terminación, interpretación unilateral, interventoría, etc.

Hechos 5, 6 y 7: Deben ser demostrados por los demandantes.

Comentario: Evidencian estos hechos la posible ocurrencia de incumplimientos, sanciones, revocatorias, etc., imputables, según la demanda, a la Universidad del Magdalena en desarrollo del contrato de obra suscrito entre ellos. Los perjuicios que de ello se deriven son ajenos a los que supuestamente pudieran surgir de lo que constituye la razón de la demanda: la declaratoria de responsabilidad patrimonial por perjuicios ocasionados por *"... la falla en el ejercicio de la Función Jurisdiccional por particulares, acaecida en la expedición del Laudo Arbitral de fecha 22 de agosto de 2011 por el Tribunal de Arbitramento..."*

Hechos 8 a 43: Nos atenemos a lo que demuestre el proceso correspondiente al Tribunal de Arbitramento.

Hecho 44: Nos atenemos a lo que demuestre el proceso correspondiente al Tribunal de Arbitramento.

Comentario: Cabe anotar que la decisión de ampliar oficiosamente el término del Tribunal, se adoptó con fundamento en lo dispuesto en el artículo 70, inciso cuarto, de la ley 80 de 1993, al considerar, de buena fe, que se estaba frente a un contrato estatal. Así puede leerse en el auto No. 1, proferido en la audiencia del día 20 de marzo de 2011, convocado para la presentación de alegatos de conclusión y decretar pruebas pendientes (folios 418 a 420). La misma fue debidamente notificada en estrados y en el texto de dicha acta aparece la anotación *"Se deja constancia que las partes no interpusieron recursos alguno contra el presente auto."* En efecto, contra ella, habiendo podido hacerlo porque estaba presente, el representante de los demandantes, Dr. GABRIEL GONZALEZ BARRAZA, no interpuso recurso alguno. Corolario de lo anterior, es que los ahora demandantes no interpusieron recurso alguno contra la decisión que permitió ampliar el plazo del Tribunal, y que a la postre vino a constituirse en fundamento de la anulación del laudo arbitral. De haberlo propuesto, probablemente el Tribunal no hubiera podido continuar.

Hechos 45 a 57: Nos atenemos a lo que demuestre el proceso correspondiente al Tribunal de Arbitramento.

Hecho 58: Nos atenemos a lo que demuestre el proceso correspondiente al Tribunal de Arbitramento.

Comentario: Debe observarse que los demandantes, ciertamente con fundamento

en la causal 9ª del artículo 163 del decreto 1888 de 1993, interpusieron recurso de anulación contra el laudo arbitral. Pero ninguna de las causales o motivos invocados por ellos guarda relación con la inaplicabilidad de la ley 80 de 1993, al arbitramento de marra, lo que permite inferir que, en este aspecto, estuvieron de acuerdo con él.

Hechos 58 a 63: Nos atenemos a lo que demuestre el proceso correspondiente al Tribunal.

Hechos 64 a 69: Nos atenemos a lo que demuestre el proceso correspondiente al Tribunal de Arbitramento.

Comentario: A la conciliación prejudicial a que aluden los demandantes en estos hechos, ellos incluyeron a los árbitros, pero por alguna razón no se los citó. Al no haber sido notificados no podía declararse fallida la conciliación solicitada. Lo que pone de presente esta situación es que respecto de los árbitros, a la postre demandados como se aprecia en el texto de la demanda, no se ha surtido la conciliación como condición de procedibilidad. La circunstancia de que al admitir la demanda tampoco se ordenara notificar a los árbitros, que aparecen como demandados, para luego, a fin de suplir la falta de notificación, se le mutó su situación a la de litis consortes necesarios, lo cual no varía la situación. Los árbitros fueron incluidos como parte demandada en la solicitud de conciliación y luego en la demanda. En ninguno de los dos casos fueron citados o notificados.

III. RAZONES DE DEFENSA

3.1. NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO CELEBRADO ENTRE OBRESAN Y LA UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA.

En el caso que nos ocupa, es cierto que los árbitros que conocieron del arbitraje entre OBRESAN y la Universidad del Magdalena, al proferir el laudo que el Consejo de Estado anuló, estaban ejerciendo función jurisdiccional; pero no es cierto que esa providencia anulada constituya un error judicial, porque dicho laudo no fue contrario a derecho.

Y no lo es porque la suspensión del término del trámite arbitral, con fundamento en el artículo 70 de la ley 80 de 1993 fue absolutamente jurídica, así el Consejo de Estado haya considerado que por tratarse de un arbitraje institucional referido a un contrato sometido al derecho privado no era aplicable la ley 80 de 1993.

En efecto:

El artículo 6° de la ley 1285 de 2009, modificó el artículo 13 de la ley 270 de 1.996, en los siguientes términos:

Artículo 13. Del ejercicio de la función jurisdiccional por otras autoridades y por particulares. Ejercen función jurisdiccional de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política:

1. El Congreso de la República, con motivo de las acusaciones y faltas disciplinarias que se formulen contra el Presidente de la República o quien haga sus veces; contra los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, de la Corte Constitucional y del Consejo Superior de la Judicatura y el Fiscal General de la Nación, aunque hubieren cesado en el ejercicio de sus cargos.

2. Las autoridades administrativas respecto de conflictos entre particulares, de acuerdo con las normas sobre competencia y procedimiento previstas en las leyes. Tales autoridades no podrán, en ningún caso, realizar funciones de instrucción o juzgamiento de carácter penal; y

3. Los particulares actuando como conciliadores o árbitros habilitados por las partes, en los términos que señale la ley. Tratándose de arbitraje, en el que no sea parte el estado o alguna de sus Entidades, los particulares podrán acordar las reglas de procedimiento a seguir, directamente o por referencia a la de un Centro de Arbitraje, respetando, en todo caso los principios constitucionales que integran el debido proceso.

Esta disposición vino a ser ratificada luego por el artículo 58 de la ley 1563 de 2012, así:

Artículo 58. Reglas de procedimiento. En los arbitrajes en que no sea parte el Estado o alguna de sus entidades, los particulares podrán acordar las reglas de procedimiento a seguir, directamente o por referencia a las de un centro de arbitraje, respetando, en todo caso los principios constitucionales que integran el debido proceso, el derecho de defensa y la igualdad de las partes. En el evento en que las partes no establecieran reglas o el centro seleccionado para adelantar el trámite no tuviere reglamento de procedimientos debidamente aprobado, se aplicarán las reglas establecidas para cada caso en la presente ley.

Lo anterior entraña que, en tratándose de un arbitraje en el que sea parte el Estado (la Universidad del Magdalena, como ente universitario autónomo, hace parte del Estado, en virtud de lo dispuesto en el artículo 40 de la ley 489 de 1998)² el arbitramento se sujetará a lo que disponga la ley. Pero no solo a las normas que enlista el Consejo de Estado (decreto 2279 de 1.989, ley 23 de 1.991, ley 446 de 1.998 y decreto ley 1818 de 1.998, como lo estimó en la providencia anulatoria) sino también a la ley 80 de 1.993, que contiene una norma específica para los contratos estatales.

Cuando un contrato como el que nos ocupa no queda sujeto a la autonomía de la voluntad, en cuanto a las reglas que rigen los contratos civiles y comerciales, sino que su forma y contenido queda sujeto al imperio de la ley, o de la voluntad unilateral de la Administración, técnica y jurídicamente es un contrato estatal y por lo tanto cae bajo la órbita de la ley 80 de 1.993.

El laudo arbitral fue anulado con fundamento en que las Universidades son entes autónomos, lo cual ciertamente se desprende lo consagrado en los artículos 93 y siguientes de la ley 30 de 1.992:

Artículo 93. Salvo las excepciones consagradas en la presente ley, los contratos que para el cumplimiento de sus funciones celebren las universidades estatales u oficiales, se regirán por las normas del derecho privado y sus efectos estarán sujetos a las normas civiles y comerciales, según la naturaleza de los contratos.

Pero, en puridad, para el cumplimiento de sus funciones las universidades pueden dictar todas las medidas encaminadas a ofrecer una enseñanza de calidad, mas no para construir edificios, así éstos vayan a estar al servicio de las mismas.³

² Ley 489 de 1.998, artículo 40. Entidades y organismos estatales sujetos régimen especial. El Banco de la República, los entes universitarios autónomos, las corporaciones autónomas regionales, la Comisión Nacional de Televisión y los demás organismos y entidades con régimen especial otorgado por la Constitución Política se sujetan a las disposiciones que para ellos establezcan las respectivas leyes.

³ El artículo 29 de la ley 30 de 1.992 define cuáles son las funciones de las instituciones de educación superior.

Artículo 29. La autonomía de las instituciones universitarias o escuelas tecnológicas y de las instituciones técnicas profesionales estará determinada por su campo de acción y de acuerdo con la presente Ley en los siguientes aspectos: a) Darse y modificar sus estatutos. b) Designar sus autoridades académicas y administrativas. c) Crear, desarrollar sus programas académicos, lo mismo que expedir los correspondientes títulos. d) Definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas, culturales y de extensión. e) Seleccionar y vincular a sus docentes, lo mismo que a sus alumnos. f) Adoptar el régimen de alumnos y docentes. g) Arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional. Parágrafo. Para el desarrollo de lo contemplado en los literales a) y e) se requiere

Las previsiones de la ley 30 de 1.992, para sujetar los contratos que celebren las universidades estatales al derecho privado se refieren a las prescripciones normativas sobre el contenido de tales contratos, en cuanto sean producto de su autonomía. En modo alguno al procedimiento que debe seguirse respecto de las controversias a que su ejecución de lugar, ni las sustraen de las disposiciones relativas a los contratos estatales que contiene la ley 80 de 1.993.

En virtud de su autonomía las universidades están autorizadas para dictar los correspondientes reglamentos de contratación, donde aparezcan cuales son los contratos que puede celebrar y los requerimientos para los mismos. La reglamentación adoptada por la Universidad del Magdalena, no fue aportada al proceso por ninguna de las partes, ni aun por ella misma, pues ésta solo en un momento determinado le dijo al Tribunal que el referido contrato era de derecho privado y no podía ser suspendido oficiosamente el término del arbitramento.

De ahí que a nuestro juicio, existe un error de interpretación del Consejo de Estado al considerar que porque los contratos que celebran las universidades se sujetan, por lo general, a las normas civiles y comerciales, por ese solo hecho quedan sustraídas de las prescripciones de la ley 80 de 1.993. Porque tales contratos, celebrados por la universidades, son necesariamente "contratos estatales".

El concepto de contrato estatal deriva de la definición que da la ley 80 de 1.993 en los siguientes términos:

Artículo 32. De los Contratos Estatales. Son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto⁴, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título enunciativo, se definen a continuación

1o. Contrato de Obra

Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la construcción, mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago.

En los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de licitación o concurso públicos, la interventoría

notificación al Ministro de Educación Nacional, a través del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (Icfes) .

Artículo 30. Es propio de las instituciones de Educación Superior la búsqueda de la verdad, el ejercicio libre y responsable de la crítica, de la cátedra y del aprendizaje de acuerdo con la presente Ley.

⁴ Cuando se dictó la ley 30 de 1.992 los entes universitarios formaban parte de las entidades a que se refiere la ley 80 de 1.993.

1002
884

deberá ser contratada con una persona independiente de la entidad contratante y del contratista, quien responderá por los hechos y omisiones que le fueren imputables en los términos previstos en el artículo 53 del presente estatuto.

De suerte que el contrato celebrado por la Universidad del Magdalena con OBRESAN es un contrato estatal, y por ello el mismo incorpora las llamadas cláusulas exorbitantes, de caducidad, terminación, modificación e interpretación unilateral, aprobación y registro presupuestal, publicación en el Diario Oficial, etc. criterio medular que ha sido el utilizado por la doctrina y la jurisprudencia para distinguir los contratos administrativos o estatales de los contratos de derecho privado. En los primeros, el Estado impone condiciones, y en los segundos predomina la autonomía de la voluntad de las partes.

A lo anterior se añade que por su naturaleza, el contrato de obra sea por antonomasia estatal⁵. La afirmación que hace el Consejo de Estado cuando dice: "En consecuencia los restantes contratos que celebren las universidades estatales, y entre ellos el de obra, se rigen por el derecho privado y no por la ley 80 de 1.993 y por ende a ellos no les son aplicables las normas que sobre arbitramento trae la ley", es absolutamente desafortunada.

Es desafortunada, porque el hecho de que un contrato se rija por el derecho privado no lo excluye per se de su sujeción a la ley 80 de 1.993. ¿Qué sentido tiene, entonces, que la ley diga que son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto⁶, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad?

3.2. EL ERROR JUDICIAL COMO TITULO DE IMPUTACION

Es palmario que los demandantes al incoar la acción de reparación directa toman como base de imputación de la responsabilidad patrimonial del Estado, el llamado error jurisdiccional.

Ciertamente, la responsabilidad patrimonial del Estado tiene ocurrencia cuando existan daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción u omisión

⁵ La ley 167 de 1.41, que fuera el Código Contencioso Administrativo, atribuía al Consejo de Estado y a los Tribunales Administrativos, la revisión de los contratos de la Administración, disponiendo la cláusula de caducidad en los que tuvieran por objeto la construcción de obras, la prestación de servicios y la explotación de bienes del Estado (Cap. XXI)

⁶ Cuando se dictó la ley 30 de 1.992 los entes universitarios formaban parte de las entidades a que se refiere la ley 80 de 1.993. Y todavía, aunque sean autónomas siguen siendo estatales.

103 085

de sus agentes judiciales, en los casos de defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, error jurisdiccional o privación injusta de la libertad. Al respecto, cabe considerar:

El artículo 90 de la Carta Política establece que:

"El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas".

En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños que hayan sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra éste

Este tema de la responsabilidad extracontractual del Estado fue desarrollado por la ley Estatuaria de Justicia, de la siguiente manera:

Artículo 65. De la responsabilidad del Estado. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción u omisión de sus agentes judiciales."

En los términos del inciso anterior el Estado responderá por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad".

Artículo 66. Error jurisdiccional. Es aquel cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria a la ley".

Al revisar la constitucionalidad de la Ley 270 de 1.996, Estatutaria de la Administración de Justicia, la Corte Constitucional, al declarar la exequibilidad de estas normas, expresó⁷:

"En segundo lugar, debe decirse que el error jurisdiccional no puede ser analizado únicamente desde una perspectiva orgánica como parece pretenderlo la norma bajo examen. Por el contrario, la posible comisión de una falla por parte del administrador de justicia que conlleve la responsabilidad patrimonial del Estado, debe ser estudiada desde una perspectiva funcional, esto es, bajo el entendido de que al juez, por mandato de la Carta Política, se le otorga una autonomía y una libertad para interpretar los hechos que se someten a su conocimiento y, así

⁷ Corte Constitucional. Sentencia C-037. Febrero 5 de 1996. M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa.

deberá ser contratada con una persona independiente de la entidad contratante y del contratista, quien responderá por los hechos y omisiones que le fueren imputables en los términos previstos en el artículo 53 del presente estatuto.

De suerte que el contrato celebrado por la Universidad del Magdalena con OBRESAN es un contrato estatal, y por ello el mismo incorpora las llamadas cláusulas exorbitantes, de caducidad, terminación, modificación e interpretación unilateral, aprobación y registro presupuestal, publicación en el Diario Oficial, etc. criterio medular que ha sido el utilizado por la doctrina y la jurisprudencia para distinguir los contratos administrativos o estatales de los contratos de derecho privado. En los primeros, el Estado impone condiciones, y en los segundos predomina la autonomía de la voluntad de las partes.

A lo anterior se aúna que por su naturaleza, el contrato de obra sea por antonomasia estatal⁵. La afirmación que hace el Consejo de Estado cuando dice: "En consecuencia los restantes contratos que celebren las universidades estatales, y entre ellos el de obra, se rigen por el derecho privado y no por la ley 80 de 1.993 y por ende a ellos no les son aplicables las normas que sobre arbitramento trae la ley", es absolutamente desafortunada.

Es desafortunada, porque el hecho de que un contrato se rija por el derecho privado no lo excluye per se de su sujeción a la ley 80 de 1.993. ¿Qué sentido tiene, entonces, que la ley diga que son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto⁶, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad?

3.2. EL ERROR JUDICIAL COMO TITULO DE IMPUTACION

Es palmario que los demandantes al incoar la acción de reparación directa toman como base de imputación de la responsabilidad patrimonial del Estado, el llamado error jurisdiccional.

Ciertamente, la responsabilidad patrimonial del Estado tiene ocurrencia cuando existan daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción u omisión

⁵ La ley 167 de 1.41, que fuera el Código Contencioso Administrativo, atribuía al Consejo de Estado y a los Tribunales Administrativos, la revisión de los contratos de la Administración, disponiendo la cláusula de caducidad en los que tuvieran por objeto la construcción de obras, la prestación de servicios y la explotación de bienes del Estado (Cap. XXI)

⁶ Cuando se dictó la ley 30 de 1.992 los entes universitarios formaban parte de las entidades a que se refiere la ley 80 de 1.993. Y todavía, aunque sean autónomas siguen siendo estatales.

de sus agentes judiciales, en los casos de defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, error jurisdiccional o privación injusta de la libertad. Al respecto, cabe considerar:

El artículo 90 de la Carta Política establece que:

"El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas".

En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños que hayan sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra éste

Este tema de la responsabilidad extracontractual del Estado fue desarrollado por la ley Estatutaria de Justicia, de la siguiente manera:

Artículo 65. De la responsabilidad del Estado. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción u omisión de sus agentes judiciales."

En los términos del inciso anterior el Estado responderá por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad".

Artículo 66. Error jurisdiccional. Es aquel cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria a la ley".

Al revisar la constitucionalidad de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, la Corte Constitucional, al declarar la exequibilidad de estas normas, expresó⁷:

"En segundo lugar, debe decirse que el error jurisdiccional no puede ser analizado únicamente desde una perspectiva orgánica como parece pretenderlo la norma bajo examen. Por el contrario, la posible comisión de una falla por parte del administrador de justicia que conlleve la responsabilidad patrimonial del Estado, debe ser estudiada desde una perspectiva funcional, esto es, bajo el entendido de que al juez, por mandato de la Carta Política, se le otorga una autonomía y una libertad para interpretar los hechos que se someten a su conocimiento y, así

⁷ Corte Constitucional. Sentencia C-037. Febrero 5 de 1996. M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa.

1006008

de sus agentes judiciales, en los casos de defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, error jurisdiccional o privación injusta de la libertad. Al respecto, cabe considerar:

El artículo 90 de la Carta Política establece que:

"El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas".

En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños que hayan sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra éste

Este tema de la responsabilidad extracontractual del Estado fue desarrollado por la ley Estatutaria de Justicia, de la siguiente manera:

Artículo 65. De la responsabilidad del Estado. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción u omisión de sus agentes judiciales."

En los términos del inciso anterior el Estado responderá por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad".

Artículo 66. Error jurisdiccional. Es aquel cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria a la ley".

Al revisar la constitucionalidad de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, la Corte Constitucional, al declarar la exequibilidad de estas normas, expresó⁷:

"En segundo lugar, debe decirse que el error jurisdiccional no puede ser analizado únicamente desde una perspectiva orgánica como parece pretenderlo la norma bajo examen. Por el contrario, la posible comisión de una falla por parte del administrador de justicia que conlleve la responsabilidad patrimonial del Estado, debe ser estudiada desde una perspectiva funcional, esto es, bajo el entendido de que al juez, por mandato de la Carta Política, se le otorga una autonomía y una libertad para interpretar los hechos que se someten a su conocimiento y, así

⁷ Corte Constitucional. Sentencia C-037. Febrero 5 de 1996. M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa.

mismo, aplicar las normas constitucionales o legales que juzgue apropiadas para la resolución del respectivo conflicto jurídico (Art. 228 C.P.). Dentro de este orden de ideas, se insiste, es necesario entonces que la aplicabilidad del error jurisdiccional parta de ese respeto hacia la autonomía funcional del juez. Por ello, la situación descrita no puede corresponder a una simple equivocación o desacierto derivado de la libre interpretación jurídica de la que es titular todo administrador de justicia. Por el contrario, la comisión del error jurisdiccional debe enmarcarse dentro de una actuación subjetiva, caprichosa, arbitraria y flagrantemente violatoria del debido proceso, que demuestre, sin ningún asomo de duda, que se ha desconocido el principio de que al juez le corresponde pronunciarse judicialmente de acuerdo con la naturaleza misma del proceso y las pruebas aportadas –según los criterios que establezca la ley-, y no de conformidad con su propio arbitrio. En otras palabras, considera esta corporación que el error jurisdiccional debe enmarcarse dentro de los mismos presupuestos que la jurisprudencia, a propósito de la revisión de las acciones de tutela, ha definido como una vía de hecho...”⁸.

Por su parte, el H. Consejo de Estado, es del parecer de que el error judicial no se debe analizar desde la perspectiva de la vía de hecho o de la conducta grosera o arbitraria del funcionario, sino desde la arista del daño antijurídico causado por una providencia proferida soslayando los presupuestos fácticos y desconociendo la normatividad legal:

“El error jurisdiccional que puede generar responsabilidad patrimonial del Estado se presenta cuando con una providencia judicial en firme, y con independencia de si fue proferida con culpa o sin ella, pero que es equivocada porque no se ajusta a la realidad procesal o a la ley, se causa un daño antijurídico que debe ser reparado. Dicho de otro modo, se reitera que la antijuricidad de la conducta o de la omisión que origina el error jurisdiccional no siempre es relevante para la reparación del daño antijurídico, pues debe diferenciarse la causa del error con el error mismo...”

De manera que, al margen de la definición de error jurisdiccional elaborada por el legislador, en tanto que no es norma aplicable al caso concreto y, con fundamento en el artículo 90 de la Constitución, la Sala considera necesario precisar cuáles serán, entonces, las condiciones

para estructurar el error jurisdiccional —en la sentencia— que materializará la responsabilidad patrimonial del Estado, a saber:

a) En primer lugar, del concepto mismo, es lógico inferir que el error jurisdiccional debe estar contenido en una providencia judicial que se encuentre en firme. Efectivamente, aun cuando una decisión judicial resulte equivocada, si esta aún puede ser revocada o modificada, el daño no resultaría cierto, pues el error no produciría efectos jurídicos y, además, podría superarse con la intervención del superior funcional. Al margen del asunto sometido a estudio de la Sala, debe recordarse que esta condición fue claramente impuesta por el artículo 66 de la Ley 270 de 1996.

b) Tal y como se deduce de pronunciamientos anteriores de esta sección⁹ el error jurisdiccional puede ser de orden fáctico o normativo. El primero, supone diferencias entre la realidad procesal y la decisión judicial, porque i) no consideró un hecho debidamente probado o ii) se consideró como fundamental un hecho que no lo era, o se presentan distancias entre la realidad material y la procesal, i) porque no se decretaron pruebas conducentes para determinar el hecho relevante para el derecho o ii) porque la decisión judicial se fundamentó en un hecho que posteriormente se demostró que era falso. El error normativo o de derecho, supone equivocaciones i) en la aplicación del derecho, pues se aplicó al caso concreto una norma que no era relevante o se dejó de aplicar una directa o indirectamente aplicable al mismo y, ii) cuando se aplicaron normas inexistentes o derogadas u otros similares.

c) El error jurisdiccional debe producir un daño personal y cierto que tenga la naturaleza de antijurídico, esto es, que el titular no tenga la obligación jurídica de soportar. Con ello, entonces, se excluyen las decisiones que se mueven en la esfera de lo cuestionable o las sentencias que contienen interpretaciones válidas de los hechos o derechos.

d) La equivocación del juez o magistrado debe incidir en la decisión judicial en firme, pues como bien lo sostiene la doctrina española:

⁹ Sentencias de 4 de abril de 2020 y 30 de mayo de 2002

“...el error comentado (judicial) incide exclusivamente en la potestad jurisdiccional que se materializa en la sentencia o resolución —auténtica declaración de voluntad del órgano que ostenta aquella—, siempre ha de consistir en aplicar la norma que a cada supuesto corresponde, el error ha de radicar en un equivocado enjuiciamiento o no aplicación a aquel de la solución únicamente querida por el legislador” -¹⁰.

Frente a estos criterios deberá analizarse la providencia que ordenó ampliar el termino de duración del arbitramento referido, para constatar que si bien es cierto que los árbitros que conocieron del arbitraje entre OBRESAN y la Universidad del Magdalena, al proferir el laudo que el Consejo de Estado anuló, estaban ejerciendo función jurisdiccional; no lo es que esa providencia anulada constituya un error jurisdiccional, porque dicho laudo no fue contrario a derecho, ya que como se dejó sentado en el acápite anterior la ampliación del trámite arbitral, con fundamento en el artículo 70 de la ley 80 de 1.993 es absolutamente jurídica, así el Consejo de Estado haya considerado que por tratarse de un arbitraje institucional referido a un contrato sometido al derecho privado no era aplicable la ley 80 de 1.993.

Sobre este tema se volverá, a propósito de estructurar una excepción por inexistencia de los presupuestos legales para configurar el error jurisdiccional.

3.3. LA DIVERGENCIA DE OPINIONES O DE CRITERIOS NO ES CONSTITUTIVA DE ERROR JURISDICCIONAL

Como se aprecia, si el artículo 70 de la ley 80 de 1.993 es aplicable o no en los tribunales de arbitraje donde concurra una entidad estatal, pero autónoma, es cuestión de interpretación.

La jurisprudencia y la doctrina están de acuerdo en que para que haya error jurisdiccional se requiere que se esté en presencia de una decisión carente de justificación dentro de la normatividad.

De ahí que el simple desacuerdo sobre la interpretación de una norma aplicable a un caso, no se puede enmarcar dentro del ámbito del error jurisdiccional, salvo cuando ese desacuerdo implique que la decisión tomada por el juez ha sido irrazonable al carecer de una justificación dentro de la normatividad, “De ello se desprende que,

¹⁰ Consejo de Estado Secc. Tercera. Sentencia de Sentencia de abril 27 de 2006. C. P. Dr. Alíer Eduardo Hernández Henríquez; la providencia citada es reiterada por la Sentencia del 5 de diciembre de 2007. Exp. 12.719. C. P. Dr. Ramiro Saavedra Becerra.

106 892

ante un mismo caso, es jurídicamente posible la existencia de varias soluciones razonables –en cuanto correctamente justificadas– pero diferentes, incluso excluyentes o contradictorias. Tal consideración limita el ámbito dentro del cual puede estimarse que la decisión de un juez incurre en el multicitado error jurisdiccional, toda vez que la configuración de éste ha de tener en cuenta que en relación con un mismo punto de hecho, pueden darse varias interpretaciones o soluciones de Derecho, todas jurídicamente admisibles en cuanto correctamente justificadas. Entonces, sólo las decisiones carentes de este último elemento –una justificación o argumentación jurídicamente atendible– pueden considerarse incursas en error judicial” (CONSEJO DE ESTADO. Sentencia C-15.128 de 2007).

IV. SOLICITUD DE PRUEBAS

Se solicita que por el Tribunal se disponga la práctica de la siguiente prueba:

Requerir al demandante para que aporten copia con constancia de su recibo, del escrito mediante el cual solicitaron la nulidad del Laudo arbitral proferido dentro del arbitramento **UNION TEMPORAL OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA-OBRESAN vs UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA.**

V. PROPOSICION DE EXCEPCIONES

1ª EXCEPCION. INEXISTENCIA DE LOS PRESUPUESTOS DEL ERROR JURISDICCIONAL. CULPA DE LOS DEMANDANTES

Los presupuestos para la ocurrencia del error jurisdiccional están señalados en la ley estatutaria de administración de justicia (ley 270 de 1.996) así:

ARTÍCULO 67. PRESUPUESTOS DEL ERROR JURISDICCIONAL.
El error jurisdiccional se sujetará a los siguientes presupuestos:

- 1. El afectado deberá haber interpuesto los recursos de ley en los eventos previstos en el artículo 70, excepto en los casos de privación de la libertad del imputado cuando ésta se produzca en virtud de una providencia judicial.*
- 2. La providencia contentiva de error deberá estar en firme*

De este texto legal, aplicado al caso, se infiere que no se dan los presupuestos exigidos por la ley para que se configure el error jurisdiccional.

1010 893

Primer Presupuesto. No interposición de recursos. Como se ha venido haciendo hincapié, para adoptar la decisión de prorrogar el plazo del arbitramento, tal como se lee en el acta No20, de 13 de abril de 2011, el Tribunal discurrió de la siguiente manera:

"Teniendo en cuenta que el término de funcionamiento del Tribunal, que es de seis meses, vence el 24 de abril de 2011, y para esta fecha aún no podrá proferir el Laudo, máxime cuando concederá un término adicional para la práctica de pruebas de oficio. Este Tribunal, de conformidad con el inciso cuarto del artículo 70 de la ley 80 de 1.993 procederá a ampliar el término de duración del Tribunal en tres (3) meses, contados a partir del 23 de abril de 2011"

Bajo esa consideración resolvió: *"PRIMERO: Amplíese el termino del presente Tribunal en tres (3) meses, contados a partir del 23 de abril de 2011"*

En la audiencia donde se dictó este auto, se hallaba presente el doctor GABRIEL GONZALEZ BARRAZA, apoderado de la parte convocante, quien nada dijo al respecto, pues como se expresa en la referida acta *"Se deja constancia que las partes no interpusieron recurso alguno contra el proveído anterior"*.

Posteriormente, casi cuatro (4) meses después, fuera de audiencia en agosto de 2011, esto es, cuando ya se habían cumplido prácticamente los tres meses dispuestos para la ampliación del término de funcionamiento del Tribunal y estaba por proferirse el laudo, el apoderado de la Universidad del Magdalena presentó un memorial aduciendo que en el auto anterior (de 23 de abril de 2011) se había omitido la expresión *"a solicitud de las partes o de sus apoderados con facultad expresa para ello"*, pues de haberlo hecho la decisión del Tribunal no hubiera sido la de prorrogar el término sino la de declarar la cesación de sus funciones."

Como aparece en el acta número 26 del 22 de agosto del año 2011, el Tribunal para resolver sobre la petición del referido apoderado, transcribió el contenido del artículo 70 de la ley 80 de 1.993, concluyó que era potestad de los árbitros ampliar de oficio dicho término y, por ende, no accedió a declarar el vencimiento del termino fijado para el proceso arbitral. Esta norma, para esa época estaba vigente, pues no había sido derogada, como lo vino a hacer el artículo 118 de la ley 1563 de 2012.

A esta diligencia no concurrió el apoderado de la Universidad del Magdalena, pero sí el de la parte convocante, doctor GABRIEL GONZALEZ BARRAZA. Como la

1011 094.
providencia anterior, que denegó suspender las labores del Tribunal, fue notificada en estrados, correspondía a dicho apoderado, si no estaba de acuerdo con la decisión que mantuvo el aplazamiento del termino con fundamento en el artículo 70 de la ley 8i0 de 1.993, interponer recurso contra la misma; mas como fue así, al no hacerlo la convalidó.

Posteriormente, una vez notificado el laudo, expedido el 22 de agosto de 2011, el apoderado o representante de la parte convocante interpuso el recurso de anulación del laudo, aduciendo dos razones que no tienen relación alguna con el fundamento esgrimido por el Consejo de Estado para la anulación del mismo.

Todo esto conduce a que no se configura el presupuesto contemplado en el numeral primero del artículo 67 de la ley 270 de 1.996.

De otra parte, la no interposición de los recursos, se erige en **culpa exclusiva de la víctima, en cuyo caso, se exonerará de responsabilidad al Estado**, como lo ordena de manera expresa el artículo 70 ley 270 de 1.996, al disponer que

ARTÍCULO 70. CULPA EXCLUSIVA DE LA VICTIMA. El daño se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley. En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado.

Segundo presupuesto. Falta de firmeza de la providencia supuestamente contentiva de error.

Conforme al numeral del artículo 67 de la ley 270 de 1.996 ***“La providencia contentiva del error deberá estar en firme”***.

No se requiere de mayor análisis para establecer que el laudo proferido el día 22 de agosto de 2011, dentro del arbitramento promovido por la UNION TEMPORAL OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARFTA- OBRESAN contra la Universidad del Magdalena, jamás estuvo en firme. Primero, porque al haberse interpuesto en su contra recurso de anulación, no adquirió firmeza; y segundo, porque en virtud de la decisión anulatoria del Consejo de Estado tal laudo desapareció totalmente de la vida jurídica.

Ello entraña que cuando se incoó la demanda de reparación directa no existía jurídicamente el acto que supuestamente causó los perjuicios cuya indemnización se depreca. La situación jurídica de las partes volvió a ser la misma que existía antes de proferirse el laudo.

2ª EXCEPCION. INEXISTENCIA DE DOLO O CULPA GRAVE. BUENA FE.

Para que el Estado pueda repetir en el evento de ser condenado a la reparación patrimonial por un daño antijurídico causados por agentes suyos, se requiere que tal daño se haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de tales agentes, como lo dispone el artículo 71 de la ley 270 de 1.996.

El mismo artículo señala que para los efectos indicados se presume que constituye culpa grave o dolo cualquiera de las siguientes conductas:

1. La violación de normas de derecho sustancial o procesal, determinada por error inexcusable.

La lectura del fallo proferido por el Consejo de Estado mediante el cual anuló el laudo arbitral referido simplemente dice que la Universidad del Magdalena es un ente autónomo, excluida del régimen de la ley 80, porque sus contratos son de derecho privado, sin identificar ninguna norma sustancial o procesal que hubiese sido violada, y menos por error inexcusable.

Ya en un capítulo anterior se dejó plasmado que el contrato celebrado por la Universidad del Magdalena con OBRESAN es un contrato estatal, por la calidad de la entidad contratante, el tipo de contrato, de obra; y por la inclusión en él de cláusulas exorbitantes propias del derecho público o de derecho administrativo.

Mucha tinta corrió y muchos fueron los avances legislativos en la pretensión de diferenciar los contratos de derecho privado de los contratos administrativos. Ante la dificultad de precisar cuando el contrato era de derecho administrativo y cuando de derecho privado, la doctrina trató de identificar criterios diferenciadores, tales como *el subjetivo* (jurisdicción), *el formal* (según el procedimiento utilizado para elaborarlo), *el del servicio público* (cuando- según Jeze- se trata de asegurar el funcionamiento del servicio público, y el de *las cláusulas exorbitantes*, en cuanto en los contratos administrativos se insertan cláusulas que se salen de la órbita del derecho civil y colocan a la administración en un plano de superioridad.

Este último criterio había sido el predominante en la doctrina y la jurisprudencia, aunque puede decirse que ha sido superado, y ha comenzado a perder interés jurídico. Allan Brewer Carías dice que: *"la noción de contrato administrativo solo puede aceptarse para identificar un tipo de contrato de la administración, el cual por la finalidad perseguida por la Administración al contratar, está sometido a un régimen de derecho público, pero no porque tenga un régimen de derecho público"*

por contraposición a otros contratos de la Administración que estarían sometidos a un régimen de derecho privado. Estos últimos, como veremos, no existen; toda la actividad contractual de la Administración es administrativa y está sometida a un régimen mixto de derecho público y de derecho privado. La preponderancia de uno y otros y su utilización regular, es lo que ahora adquiere importancia”¹¹.

No nos queda la menor duda de que en el contrato que nos ocupa, tienen preponderancia las normas de derecho público, a las que se acoge en su integridad.

Para uno de quienes responde esta demanda, resulta claro que:

*“La noción de contrato estatal que recoge la ley 80 de 1.993 responde a ese criterio unificador. La clasificación de los contratos de la Administración entre contratos administrativos y contratos de derecho privado, contenida en el Título III del decreto 222 de 1.983, ha desaparecido para dar paso al contrato estatal, cuya característica general estaría dada por un sometimiento tanto a las reglas de derecho privado como a las del derecho público, aunque con énfasis en este último”*¹²

Al referirse al régimen contractual de las entidades excluidas de la Ley 80, el Consejo de Estado, recientemente precisó:

Una de las cuestiones contractuales más complejas que vive la Administración pública moderna consiste en comprender el régimen de las entidades excluidas de la Ley 80 de 1993..., cuya dificultad estriba, precisamente, en establecer el alcance de la competencia para contratar que tiene esta clase de entidades.

Precisamente, en este contexto conviene hacer las precisiones que siguen, para enfocar correctamente cualquier problema contractual de una entidad excluida de la Ley 80.

Para empezar, y en primer lugar, se señala que el régimen contractual no es exclusivamente el derecho privado, sino una combinación de éste con los principios de la función administrativa. Esta conclusión aplica tanto a partir de la vigencia del artículo 13 de la Ley 1150 de 2007 —norma en la cual el legislador positivizó esta idea—, como desde antes, cuando la doctrina y la jurisprudencia, aplicando los principios generales del derecho, llegaron a esta conclusión”¹³.

¹¹ Brewer Carias, Allan. El Derecho Administrativo en Latinoamérica, Curso internacional Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Bogotá, 1.978, pág. 146.

¹² Polo Figueroa, Juan Alberto. “Elementos de Derecho Administrativo” 2ª. Edición, abril de 2001, pág. 286

¹³ Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 24 de abril de 2016, M.P. Dra. Marta Nubia Velásquez Rico.

Lo anterior evidencia que si cinco años después de proferido el laudo arbitral de marras, el Consejo de Estado tiene que hacer precisiones acerca de los problemas a que da lugar la existencia de entidades excepcionadas del régimen contractual de la ley 80, **el error de apreciación o interpretación sobre la naturaleza jurídica del contrato suscrito entre la Universidad del Magdalena y OBRESAN no es inexcusable**, y que, por el contrario, el Tribunal actuó con absoluta buena fe, que es un valor constitucional supremo; y estuvo animado por el principio de la eficacia de la justicia.

A esa buena fe contribuyó la presencia del Ministerio Público durante el proceso del arbitramento, concretamente en la audiencia donde se suspendió el proceso con fundamento en la ley 80 de 1.993; y con la presentación del alegato visible a los folios 483y siguientes, antes de proferirse el laudo.

Adicionalmente, el Consejo de Estado, con ponencia de la Magistrada MYRIAM GURRERO DE ESCOBAR, al conocer de la legalidad de un laudo proferido dentro de un arbitramento celebrado por las controversias a que dio lugar la ejecución de un contrato celebrado entre el Banco de la República y la sociedad H. Rojas y Asociados, se pronunció diciendo que ese contrato, no obstante que una de sus partes (el Banco de la República) el cual, de conformidad con lo prescrito por el artículo 371 de la Constitución Política *"...un órgano autónomo, instituido como persona jurídica de derecho público, que no hace parte de ninguna de las ramas del poder público ni de los órganos de control, con autonomía administrativa, patrimonial y técnica...sometido a un régimen jurídico propio."*, era un contrato estatal. Dijo al efecto que *"...los contratos regidos por la ley 80 de 1.993 y los celebrados bajo el amparo del derecho común..... ambos tienen la naturaleza de contratos estatales, no obstante encontrarse regidos por dos ordenamientos jurídico-sustantivo diferentes"*¹⁴

En esta misma providencia se invocó como precedente judicial, un auto dictado por la misma Sección Tercera el 8 de febrero de 2001, donde se dijo que los contratos celebrados por las empresas de servicios públicos eran contratos estatales. En ese

¹⁴ En el auto que denegó la solicitud de terminación, sin laudo, del arbitramento, que hizo el apoderado de la convocada, la Universidad del Magdalena, se tuvo en cuenta esta providencia como fundamento jurídico, pues si mutatis mutandi tal contrato era estatal, tenía cabida respecto de él el artículo 70 de la ley 80 de 1.993, que en inciso cuarto establecía que *"Los árbitros podrán ampliar el término de duración del tribunal por la mitad del inicialmente acordado o legalmente establecido, si ello fuere necesario para la producción del laudo respectivo"*.

105
998

auto aunque se distinguió entre **contratos estatales propiamente dichos** que son aquellos que se celebran por las entidades públicas a que se refiere la ley 80 de 1.993 y **contratos especiales sujetos a un régimen legal propio**, se concluyó diciendo que :

"De lo anterior es jurídicamente viable considerar que la categoría "contratos estatales" no puede quedar exclusivamente referida a los actos contractuales que celebren las entidades del Estado relacionadas en la ley 80 de 1.993 sino que habría que reconocer que desde el punto de vista material y técnico formal, constituye una acertada categoría jurídica que tiene la virtud de englobar todos los contratos que celebren las entidades públicas del Estado, ya sea que se regulen por el Estatuto General de Contratación Administrativa o que estén sujetos a regímenes especiales".

3ª. EXCEPCION. INEXISTENCIA DE PERJUICIOS.

Los demandantes no han recibido perjuicio alguno por la anulación del laudo arbitral ni aportan elementos de juicio ni solicitan pruebas que tiendan a demostrarlo.

Es evidente que ellos cuantifican tales perjuicios utilizando los valores reconocidos en el laudo arbitral anulado, como puede verse en el siguiente cuadro:

PERJUICIOS POR DAÑO EMERGENTE¹⁵

Razón del perjuicio	Valor perjuicios demandados	Reconocidos en laudo	Observaciones
Obras pendientes por legalizar	67.192.800,00	67.192.800,00	Valores idénticos
Mora en el pago del valor del contrato	17.565.510,72	17.565.510,72	Valores idénticos
Mayor permanencia en obra	244.419.05,00	244.419.095,00	Valores idénticos
Costos del proceso	62.511.880,00	62.511.880,00	Valores idénticos
Agencias en derecho	26.000.000,00	26.000.000,00	Valores idénticos

En gracia de discusión, los únicos perjuicios que hubiera podido acarrearles el laudo arbitral, serían los que en la demanda se enlistan como lucro cesante, a saber:

Pago de honorarios de abogado	120.000.000,00
Pago de solicitud arbitral	1.195.800

¹⁵ Estos valores difieren de los presentados tanto en la solicitud de conciliación como en la demanda del arbitraje y en su corrección (folios 189 y siguientes)

1016 899

Pago gastos 50% funcionamiento del Tribunal	30.957,240
Pago de honorarios de peritos	4.463.332,00
Protocolización del laudo	6.852.389,00

No obstante, los honorarios de abogado no están demostrados; y de los honorarios a los peritos, éstos devolvieron la mitad de los mismos en acatamiento de la ley. Tales honorarios, junto con la protocolización del expediente, forman parte de los gastos del proceso; y en todo caso, deberán ser legalmente comprobados.

4ª EXCEPCION. IMPROCEDENCIA DE LA ACCION INCOADA POR LA EXISTENCIA DE OTROS MEDIOS DE DEFENSA.

La ley 1563 de 2012, en su artículo 110, establece los efectos que se derivan de la anulación de un laudo arbitral, como al que se ha hecho referencia, y a tal propósito preceptúa:

Artículo 110 Efectos del recurso de anulación. Cuando prospere alguna de las causales señaladas en el numeral 1 literal a), del artículo 108 se declarará la nulidad del laudo y las partes podrán acudir ante la autoridad judicial competente.

Cuando prospere alguna de las causales señaladas en el numeral 1 literal b), c) y d), del artículo 108 se declarará la nulidad del laudo, sin que ello perjudique el acuerdo de arbitraje.

Cuando prospere alguna de las causales señaladas en el numeral 2 del artículo 108 se declarará la nulidad del laudo.

En caso de anulación del laudo, las pruebas practicadas en el curso del trámite arbitral podrán ser apreciadas bien por tribunal arbitral o bien por la autoridad judicial

Este texto demuestra que anulado el laudo, el acuerdo de arbitraje se mantiene vigente; y que los demandantes, esto es, OBRESAN, tienen la oportunidad de acudir ante la "autoridad judicial competente", que bien podría ser otro tribunal de arbitramento; y no a la acción de reparación directa.

5ª. EXCEPCION. CADUCIDAD.

107
900

Nos sumamos a esta excepción propuesta, desde un principio, por el apoderado de la Universidad del Magdalena; y luego por el señor apoderado de la Compañía de Seguros llamada en garantía.

Mas con una doble precisión: La primera que el termino de caducidad debería contarse a partir de la expedición del auto que ordenó suspender términos, esto es el 13 de abril de 2011, el cual permitió proseguir con el arbitramento; y la segunda, que ese término debe contabilizarse hasta el día en que se introdujo la demanda, habida consideración, como ya se expresó, de que los árbitros no fueron llamados a conciliar.

De ahí surge, por contera, la excepción de improcedencia de la acción.

6ª. EXCEPCION DE IMPROCEDIBILIDAD DE LA ACCION.

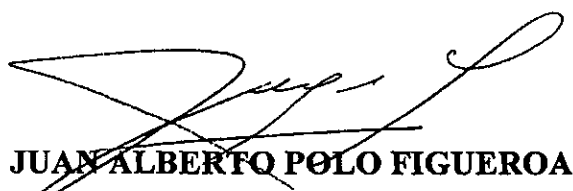
Como es fácil comprobarlo, los árbitros no fueron incluidos en la solicitud de conciliación extrajudicial ni fueron citados. Al vincularlos a ellos en la demanda, respecto de ellos se produjo la causal de improcedibilidad de la acción, pues respecto de los árbitros no podía adelantarse demanda alguna sin que previamente fuesen llamados a conciliar. El posterior llamamiento en garantía, a solicitud de la Cámara de Comercio, no subsana el defecto inicial de esta demanda, referida a los arbitros.

PETICION:

Con fundamento en lo expuesto, solicitamos a esa Honorable Corporación denegar las pretensiones de la demanda.

Con todo respeto, atentamente.


DIANA BOVEA MENDINUETA
C.C. 57.438.474
T.P. 90.265


JUAN ALBERTO POLO FIGUEROA
C.C. No. 159.526
T.P. 3547

979 882

Notificaciones Tribunal 03 Administrativo del Magdalena

De: Notificaciones Tribunal 03 Administrativo del Magdalena
<tadmin03mgd@notificacionesrj.gov.co>
Enviado el: miércoles, 08 de marzo de 2017 04:34 p.m.
Para: 'miguelpolocampo@gmail.com'; 'jpolofigueroa@gmail.com'
Asunto: NOTIFICACION EXP. 2014-00241
Datos adjuntos: REPARACION DIRECTA 2014-00241 OBRESAN - AUDIENCIA INICIAL -.pdf
Importancia: Alta

EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR ESTE DESPACHO LE NOTIFICO A TRAVES DE ESTE MENSAJE DE DATOS LO RESUELTO EN AUDIENCIA INICIAL LLEVADA A CABO EL DIA 07 DE MARZO DE 2017 DONDE SE ORDENA VINCULAR A LOS SEÑORES DIANA BOVEA MENDINUETA, MIGUEL ANGEL POLO CAMPO Y JUAN ALBERTO POLO CAMPO COMO LITIS CONSORTE NECESARIO EN EL PRESENTE PROCESO, SIENDO NECESARIA SU PRESENCIA EN LA SECRETARIA DE ESTE TRIBUNAL A FIN DE NOTIFICARSE PERSONALMENTE Y RWECIBIR COPIA DE LA DEMANDA Y SUS ANEXOS.

MIGUEL ANGEL PAEZ TOVAR
CITADOR

AVISO IMPORTANTE: Esta dirección de correo electrónico tadmin03mgd@notificacionesrj.gov.co es de uso único y exclusivo de envío de notificaciones, todo mensaje que se reciba no será leído y automáticamente se eliminará de nuestros servidores, apreciado usuario si tiene alguna solicitud por favor comuníquese a la siguiente línea telefónica: 4213901 o envíenos un correo electrónico a la siguiente dirección: tadtvo03mag@cendoj.ramajudicial.gov.co

-900
873

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA
SECRETARIA GENERAL
NOTIFICACIÓN PERSONAL
ARTS. 197 Y 198 DEL C.P.A.C.A

DILIGENCIA DE NOTIFICACIÓN PERSONAL

RADICADO: No. 47-001-2333-003-2014-00241-00
MEDIO DE CONTROL: REPARACION DIRECTA
DEMANDANTE: UNION TEMPORAL DE OBRAS ESPECIALES DE
SANTA MARTA - OBRESAN
DEMANDADO: NACION-MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL
DERECHO-CAMARA DE COMERCIO DE SANTA
MARTA-UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA-
CENTRO DE ARBITRAJE CONCILIACION Y
AMIGABLE COMPOSICION
MAGISTRADO
PONENTE: MARIBEL MENDOZA JIMENEZ

En la ciudad de Santa Marta, a los 18 días del mes de Junio del año dos mil diecisiete (2017) el suscrito Citador del Tribunal Administrativo del Magdalena, debidamente autorizado por el Secretario de la Corporación, **notifica personalmente** al señor JUAN ALBERTO POLO FIGUEROA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 159526 de Bogotá, en su condición de LITISCONSORTE; de conformidad con lo dispuesto en el art., 200 de la Ley 1437 de 2011 y Audiencia Inicial de fecha 07 de marzo de 2017.

Se le advierte que cuenta con el termino de treinta (30) contados a partir de la notificación de la providencia

Se hace entrega de copia de la demanda, sus anexos y del auto admisorio de fecha 08 de julio de 2016 como del auto que ordena su vinculación de fecha 24 de marzo de 2017.

Firma a satisfacción:

NOMBRE DEL NOTIFICADO:

FIRMA:

C.C.:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

CORREO ELECTRÓNICO:

EL SECRETARIO:

EL CITADOR:

1943
926

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA
SECRETARÍA GENERAL
Ley 1437 de 2011

P A S O A L D E S P A C H O

De la Magistrada Maribel Mendoza Jiménez, hoy trece (13) de febrero de dos mil dieciocho (2018)

Expediente: 47-001-2333-003-2014-00241-00
Demandante: OBRESAN
Demandado: NACION – MINJUSTICIA Y OTROS
Medio de control: REPARACION DIRECTA

Informando que el apoderado de la parte actora presenta solicitud de corrección de la fecha de audiencia programada para el 21/02/2017 y solicita el emplazamiento del litisconsorte Miguel Angel Polo.

Sírvase proveer lo pertinente.

Sube 2 folios


JAIME ORTIZ ROMERO
SECRETARIO

q81 874

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA
SECRETARIA GENERAL
NOTIFICACIÓN PERSONAL
ARTS. 197 Y 198 DEL C.P.A.C.A

DILIGENCIA DE NOTIFICACIÓN PERSONAL

RADICADO: No. 47-001-2333-003-2014-00241-00
MEDIO DE CONTROL: REPARACION DIRECTA
DEMANDANTE: UNION TEMPORAL DE OBRAS ESPECIALES DE
SANTA MARTA - OBRESAN
DEMANDADO: NACION-MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL
DERECHO-CAMARA DE COMERCIO DE SANTA
MARTA-UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA-
CENTRO DE ARBITRAJE CONCILIACION Y
AMIGABLE COMPOSICION
MAGISTRADO
PONENTE: MARIBEL MENDOZA JIMENEZ

En la ciudad de Santa Marta, a los (18) días del mes de Mayo del año dos mil diecisiete (2017) el suscrito Citador del Tribunal Administrativo del Magdalena, debidamente autorizado por el Secretario de la Corporación, notifica personalmente a la señora **DIANA BOVEA MENDINUETA**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 57438434 de Santa Marta, en su condición de LITISCONSORTE; de conformidad con lo dispuesto en el art., 200 de la Ley 1437 de 2011 y Audiencia Inicial de fecha 07 de marzo de 2017.

Se le advierte que cuenta con el termino de treinta (30) contados a partir de la notificación de la providencia

Se hace entrega de copia de la demanda, sus anexos y del auto admisorio de fecha 08 de julio de 2016 como del auto que ordena su vinculación de fecha 24 de marzo de 2017.

Firma a satisfacción:

NOMBRE DEL NOTIFICADO:

FIRMA:

C.C.:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

CORREO ELECTRÓNICO:

EL SECRETARIO:

EL CITADOR:

982
275-1



REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA

El suscrito Secretario del Tribunal Administrativo del Magdalena, de conformidad con lo establecido en el artículo 115 del C.G.P.,

HACE CONSTAR:

Que las diligencias de NOTIFICACION ordenadas por el Despacho 003, en auto fecha marzo siete (7) de 2017, fueron efectivamente realizadas a los doctores DIANA BOVEA MENDINUETA y JUAN ALBERTO POLO FIGUEROA, personalmente y a través de correo electrónico, quienes comparecieron al proceso según contestaciones que obran a folios del expediente. En cuanto a la notificación ordenada al doctor MIGUEL ANGEL POLO CAMPO, la misma se realizó vía correo electrónico tal como obra a folio 872 del expediente, y se logró comunicación telefónica con el mencionado ciudadano, quien manifestó su desinterés con tal vinculación y rehusándose a comparecer a la Secretaria del Tribunal para su notificación, pues se desconoce la dirección donde pueda ser localizado.

Para constancia se firma al primer (1º) día del mes de junio de dos mil diecisiete (2017).


JAIME ORTIZ ROMERO
Secretario



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

CODIGO DE VERIFICACION: 05224386252BD1

3 DE MARZO DE 2017 HORA 15:41:24

R052243862

PAGINA: 1 de 6

* * * * *

LA MATRICULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS.

RENUEVE SU MATRICULA A MAS TARDAR EL 31 DE MARZO Y EVITE SANCIONES DE HASTA 17 S.M.L.M.V.

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA:

NOMBRE : CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A.

N.I.T. : 860026518-6

DOMICILIO : BOGOTA D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 00007164 DEL 21 DE MARZO DE 1972

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA : 14 DE MARZO DE 2016

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2016

ACTIVO TOTAL : 456,317,910,000

TAMAÑO EMPRESA : GRANDE

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CARRERA 7 NO 71 21 TORRE B PISO 7
MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : notificacioneslegales.co@chubb.com

DIRECCION COMERCIAL : CARRERA 7 NO 71 21 TORRE B PISO 7

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL COMERCIAL : notificacioneslegales.co@chubb.com

CERTIFICA:

DUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0809 NOTARIA 10 DE BOGOTA DEL 11 DE MARZO DE 1.988 INSCRITA EL 14 DE MARZO DE 1.988 BAJO EL NO.231.117 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO EL NOMBRE DE: "SEGUROS COLINA S.A. POR EL DE: CIGNA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.

Validez de Constancia del Párrafo Trujillo

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 000809 DE NOTARIA 10 DE BOGOTA, D.E. DEL 11 DE MARZO DE 1988, INSCRITA EL 17 DE MARZO DE 1988 BAJO EL NO. 00217391 DEL LIBRO 09, LA SOCIEDAD CAMBIO EL NOMBRE POR: CIGNA SEGUROS DE COLOMBIA S.A.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 003583 DE NOTARIA 18 DE SANTA FE DE BOGOTA, D.C. DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 1999, INSCRITA EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 1999 BAJO EL NO. 00696123 DEL LIBRO 09, LA SOCIEDAD CAMBIO EL NOMBRE DE: CIGNA SEGUROS DE COLOMBIA S.A., POR EL DE: ACE SEGUROS S.A.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 1482 DE LA NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C. DEL 21 DE OCTUBRE DE 2016, INSCRITA EL 1 DE NOVIEMBRE DE 2016 BAJO EL NUMERO 02154169 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO SU NOMBRE DE: ACE SEGUROS S.A., POR EL DE: CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A.

CERTIFICA:

QUE POR E.P. NO. 1071 DE LA NOTARIA 10 DE BOGOTA DEL 4 DE ABRIL DE 1988, INSCRITA EL 15 DE ABRIL DE 1988 BAJO EL NO. 233521 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD SE FUSIONO, ABSORVIENDO A LA COMPAÑIA LA CONTINENTAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 1498 DE LA NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C., DEL 25 DE OCTUBRE DE 2016, INSCRITA EL 1 DE NOVIEMBRE DE 2016 BAJO EL NUMERO 02154138 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (ABSORBENTE) ABSORBE MEDIANTE FUSION A LA SOCIEDAD CHUBB DE COLOMBIA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. LA CUAL SE DISUELVE SIN LIQUIDARSE, TRANSFIRIENDO EN BLOQUE LA TOTALIDAD DE SUS ACTIVOS Y PASIVOS.

CERTIFICA:

REFORMAS:

ESCRITURAS NO.	FECHA	NOTARIA	INSCRIPCION
2.844	26-V- 1.992	18 STAFE BTA	27-V- 1.992 NO.366.564
2.142	16- V-1.995	18 STAFE BTA	24- V-1.995 NO.493.932
2.847	19-VI-1.996	18 STAFE BTA.	24-VI-1.996 NO.542.979

CERTIFICA:

REFORMAS:

DOCUMENTO NO.	FECHA	ORIGEN	FECHA	NO. INSC.
0001797	1999/05/19	NOTARIA 18	1999/06/01	00682571
0003583	1999/09/07	NOTARIA 18	1999/09/14	00696123
0008226	2000/06/27	NOTARIA 18	2000/06/29	00735121
0005349	2000/10/06	NOTARIA 18	2000/10/20	00749625
0001104	2001/08/21	NOTARIA 16	2001/08/30	00791851
0003874	2002/05/03	NOTARIA 29	2002/05/16	00827149
0010754	2002/10/09	NOTARIA 29	2002/10/25	00850293
0001182	2006/05/03	NOTARIA 11	2006/05/09	01054022
1010	2009/04/22	NOTARIA 28	2009/04/29	01293353
122	2010/01/22	NOTARIA 16	2010/01/25	01356112
660	2010/03/12	NOTARIA 16	2010/03/15	01368649
642	2014/04/15	NOTARIA 28	2014/04/24	01828907
1034	2014/06/18	NOTARIA 28	2014/07/07	01849532
001634	2015/12/22	NOTARIA 28	2016/01/13	02052237
1498	2016/10/25	NOTARIA 28	2016/11/01	02154138
1482	2016/10/21	NOTARIA 28	2016/11/01	02154169

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL 8 DE OCTUBRE DE 2069

987/009



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

CODIGO DE VERIFICACION: 05224386252BD1

3 DE MARZO DE 2017 HORA 15:41:24

R052243862

PAGINA: 2 de 6

* * * * *

CERTIFICA:

ESTATUTOS ESCRITURAS NO.	FECHA	NOTARIA	INSCRIPCION
5100	8- X-1.969	3 BOGOTA	10-IX-1.969 NO. 26745
1497	16-VIII-1974	11 BOGOTA	16-IX-1.974 NO. 20935
3933	19-XI -1.976	10 BOGOTA	7-XII-1.976 NO. 41326
964	9-III-1.982	7 BOGOTA	4-VI -1.982 NO.116768
4131	1-XII-1.987	10 BOGOTA	28-XII-1.987 NO.225595
809	11-III-1.988	10 BOGOTA	14-III-1.988 NO.231117
1067	8-VII-1.988	28 BOGOTA	15-VII-1.988 NO.240759
2007	7-XII-1.988	28 BOGOTA	13-XII-1.988 NO.252457
5128	10- XI-1.989	18 BOGOTA	21- XI-1.989 NO.280317
1740	20-IV- 1.990	18 BOGOTA	8-IV- 1.990 NO.293613
2010	7- V- 1.990	18 BOGOTA	8-IV- 1.990 NO.293613
3779	19- VI-1.991	18 BOGOTA	27-VI -1.991 NO.330796
2844	26- V -1.992	18 STAFE BTA	27-V -1.992 NO.366564

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TENDRÁ POR OBJETO PRINCIPAL LA REALIZACIÓN DE OPERACIONES DE SEGURO, BAJO LAS MODALIDADES Y RAMOS FACULTADOS EXPRESAMENTE POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA Y AQUELLAS PREVISTAS EN LA LEY CON CARÁCTER ESPECIAL. ASÍ MISMO, PODRÁ EFECTUAR OPERACIONES DE REASEGURO EN LOS TÉRMINOS QUE ESTABLEZCAN LAS DISPOSICIONES LEGALES SOBRE EL PARTICULAR, O LAS DE CUALQUIER OTRO PAÍS DONDE ESTABLEZCA SUCURSALES O AGENCIAS. EN DESARROLLO DE SU OBJETO PRINCIPAL, LA SOCIEDAD PODRÁ EJECUTAR TODA CLASE DE NEGOCIOS AFINES AL DE SEGURO QUE LA LEY COLOMBIANA AUTORICE A LAS COMPAÑÍAS DE SEGUROS GENERALES O COMERCIALES, SEA QUE ESTOS NEGOCIOS SE DESARROLLEN EN EL PAÍS O EN EL EXTERIOR Y HACER LAS INVERSIONES EN BIENES RAÍCES O MUEBLES LEGALMENTE PERMITIDAS, PUDIENDO PARTICIPAR EN OTRAS SOCIEDADES DE CUALQUIER TIPO Y CUALQUIERA QUE SEA SU OBJETO, YA SEAN CONSTITUIDAS O EN EL ACTO DE SU CONSTITUCIÓN. ADEMÁS, LA SOCIEDAD PODRÁ DAR Y RECIBIR CRÉDITOS, RECIBIENDO U OTORGANDO GARANTÍAS REALES. Y PERSONAJES, ADQUIRIR Y ENAJENAR A CUALQUIER TÍTULO TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, GRAVARLOS A CUALQUIER TÍTULO Y CAMBIARLES SU FORMA, CELEBRAR EL CONTRATO COMERCIAL DE CAMBIO EN TODAS SUS MANIFESTACIONES Y, EN CONSECUENCIA, ACEPTAR, GIRAR, DESCONTAR, ADQUIRIR, ENDOSAR, GARANTIZAR, PROTESTAR, DAR EN GARANTÍA TODA CLASE DE TÍTULOS VALORES, ASÍ COMO PARA REALIZAR OPERACIONES DE LIBRANZA, Y EN GENERAL, EJECUTAR O CELEBRAR TODA CLASE DE ACTOS LÍCITOS QUE TIENDAN DIRECTAMENTE A LA REALIZACIÓN DE SU OBJETO SOCIAL PRINCIPAL Y LAS QUE TENGAN COMO FINALIDAD EJERCER LOS DERECHOS O CUMPLIR LAS OBLIGACIONES LEGAL O CONVENCIONALMENTE DERIVADAS DE LA EXISTENCIA Y ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD.

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:

6511 (SEGUROS GENERALES)

CERTIFICA:

CAPITAL:

** CAPITAL AUTORIZADO **

VALOR : \$0.00
NO. DE ACCIONES : 0.00
VALOR NOMINAL : \$0.00

** CAPITAL SUSCRITO **

VALOR : \$0.00
NO. DE ACCIONES : 0.00
VALOR NOMINAL : \$0.00

** CAPITAL PAGADO **

VALOR : \$0.00
NO. DE ACCIONES : 0.00
VALOR NOMINAL : \$0.00

CERTIFICA:

ACLARACIÓN CAPITAL

** CAPITAL AUTORIZADO **

VALOR : \$48,803,202,304.00
NO. DE ACCIONES : 1,449,809,040.00
VALOR NOMINAL : \$33.6618140441447

** CAPITAL SUSCRITO **

VALOR : \$48,803,202,304.00
NO. DE ACCIONES : 1,449,809,040.00
VALOR NOMINAL : \$33.6618140441447

** CAPITAL PAGADO **

VALOR : \$48,803,202,304.00
NO. DE ACCIONES : 1,449,809,040.00
VALOR NOMINAL : \$33.6618140441447

CERTIFICA:

QUE MEDIANTE OFICIO NO. 0435 DEL 22 DE FEBRERO DE 2016, INSCRITO EL 26 DE FEBRERO DE 2016 BAJO EL NO. 00152670 DEL LIBRO VIII, EL JUZGADO QUINTO CIVIL MUNICIPAL DE POPAYÁN, COMUNICO QUE EN EL PROCESO VERBAL-CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS E INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS NO. 2016-00004-00 DE ANA LUCIA CIFUENTES GOMEZ CONTRA ACE SEGUROS, SE DECRETO LA INSCRIPCIÓN DE LA DEMANDA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.

CERTIFICA:

** JUNTA DIRECTIVA: PRINCIPAL (ES) **

QUE POR ACTA NO. 85 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 10 DE OCTUBRE DE 2016, INSCRITA EL 21 DE DICIEMBRE DE 2016 BAJO EL NUMERO 02168829 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER RENGLON	
OBREGON TRILLOS MANUEL FRANCISCO	C.C. 000000079151183
SEGUNDO RENGLON	
AFANADOR GARZON OSCAR LUIS	C.C. 000000019490945
TERCER RENGLON	
WEISS HERMAN GUILLERMO	P.P. 000000AAA332532
CUARTO RENGLON	
GUNN MARCOS ANDRES	P.P. 000000AAB744127
QUINTO RENGLON	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

CODIGO DE VERIFICACION: 05224386252BD1

3 DE MARZO DE 2017 HORA 15:41:24

R052243862

PAGINA: 3 de 6

* * * * *

SEVILLA MUÑOZ FABRICIO

P.P. 000001707261366

** JUNTA DIRECTIVA: SUPLENTE (S) **

QUE POR ACTA NO. 85 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 10 DE OCTUBRE DE 2016, INSCRITA EL 21 DE DICIEMBRE DE 2016 BAJO EL NUMERO 02168829 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER RENGLON	
CHAVES LOPEZ JAIME	C.C. 000000079693817
SEGUNDO RENGLON	
MONTENEGRO RAMIREZ ALVARO JOAQUIN	C.C. 000000079485188
TERCER RENGLON	
SALCEDO ROBERTO	P.P. 000000488390096
CUARTO RENGLON	
SARNIGUET KUZMANIC VIVIANNE	P.P. 000000101178536
QUINTO RENGLON	
PAZMINO CABRERA XAVIER ANTONIO	P.P. 000000908889264

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 01040 DEL 17 DE MAYO DE 2005 DE LA NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C., INSCRITA EL 19 DE MAYO DE 2005 BAJO EL NO. 0009713 DEL LIBRO V, COMPARECIO EL SEÑOR JAIME ANTONIO LOZANO FLOREZ, QUIEN SE IDENTIFICA CON CEDULA DE CIUDADANIA NO. 17.194.167 EXPEDIDA EN BOGOTA D.C., Y MANIFESTO : QUE OBRA EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DE ACE SEGUROS S.A. ; QUE EN SU EXPRESADA CALIDAD POR MEDIO DE ESTE PUBLICO INSTRUMENTO CONFIERE PODER GENERAL, AMPLIO Y SUFICIENTE EN CUANTO A DERECHO FUERE MENESTER AL DR. JORGE RODRIGUEZ ROJAS, MAYOR Y VECINO DE BOGOTA D.C., IDENTIFICADO CON LA CEDULA DE CIUDADANIA NUMERO 17.044. 874 EXPEDIDA EN BOGOTA D.C., ABOGADO INSCRITO SEGUN TARJETA PROFESIONAL NO. 1340, PARA QUE EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE ACE SEGUROS S.A. ATIENDA Y EJECUTE LOS SIGUIENTES ACTOS: COMPARECER EN JUICIO Y REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN TODA CLASE DE ASUNTOS JUDICIALES, EXTRAJUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS, TENIENDO TODAS AQUELLAS FUNCIONES Y FACULTADES PARA EJERCER DICHA REPRESENTACION. EL APODERADO EN DESARROLLO DE LA REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD PARA ASUNTOS DE INDOLE JUDICIAL O ADMINISTRATIVA, TENDRA LA FACULTAD DE IMPONERSE DE TODA CLASE DE NOTIFICACIONES LEGALES, CONFESAR, INTERPONER Y SUSTENTAR RECURSOS, CONTESTAR DEMANDAS, DEMANDAR Y CONTRA DEMANDAR, PEDIR Y ALLEGAR PRUEBAS, INTERVENIR EN TODAS LAS ETAPAS, INSTANCIAS E INCIDENTES DE LOS PROCESOS O ACTUACIONES JUDICIALES O ADMINISTRATIVAS, RENDIR INFORMES, ABSOLVER INTERROGATORIOS EN DILIGENCIAS DE CONFESION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL, DESISTIR, CONCILIAR, TRANSIGIR, RECIBIR, CONFERIR PODERES Y REVOCARLOS Y, EN GENERAL PARA QUE ASUMA LA PERSONERIA Y REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD ACE SEGUROS S.A. EN TODOS AQUELLOS ASUNTOS JUDICIALES O ADMINISTRATIVOS QUE ESTIME NECESARIO Y CONVENIENTE A LOS INTERESES DE ESTA SOCIEDAD, DE MANERA TAN AMPLIA QUE ESTA EN NINGUN CASO QUEDE SIN REPRESENTACION EN DICHA CLASE DE

ASUNTOS.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 1442 DE LA NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C., DEL 3 DE NOVIEMBRE DE 2015, INSCRITA EL 2 DE DICIEMBRE DE 2015 BAJO EL NO. 00032689 DEL LIBRO V, COMPARECIO OSCAR JAVIER RUIZ MATEUS IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA NO. 79.341.937 DE BOGOTA D.C., EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA, POR MEDIO DE LA PRESENTE ESCRITURA PUBLICA, CONFIERE PODER GENERAL AMPLIO Y SUFICIENTE AL DOCTOR JAIME RODRIGO CAMACHO MELO, VARON COLOMBIANO, MAYOR DE EDAD, DOMICILIADO Y RESIDENTE EN BOGOTA D.C., IDENTIFICADO CON CEDULA CIUDADANIA NO. 79.650.508 EXPEDIDA EN BOGOTA Y CON LA TARJETA PROFESIONAL DE ABOGADO NÚMERO 75.792 EXPEDIDA POR EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA PARA QUE REPRESENTE LEGAL, JURÍDICAMENTE Y JUDICIALMENTE A ACE SEGUROS S.A., EN TODOS LOS ASUNTOS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO, JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL Y ARBITRAL, QUE CONCIERNAN A ACE SEGUROS S.A., Y PARA QUE LLEVE A CABO LOS SIGUIENTES ACTOS, EN CUALQUIER ORDEN Y SIN CONSIDERACION A SU CUANTIA Y CALIDAD. 1. REPRESENTACIÓN: PARA QUE REPRESENTA A ACE SEGUROS S.A., ANTE CUALQUIER PERSONA NATURAL O JURÍDICA, DE DERECHO PÚBLICO O PRIVADO, DE CARÁCTER NACIONAL O INTERNACIONAL Y ANTE CUALQUIERA JUZGADO, DESPACHO JUDICIAL, CUERPO COLEGIADO O TRIBUNAL, ASAMBLEA, JUNTA, REUNIÓN, SOCIEDAD, CONSORCIO, CORPORACIÓN, ENTIDAD, PATRIMONIO AUTÓNOMO, ESTABLECIMIENTO, OFICINA, DIRECCIÓN, SECCIÓN, QUE PERTENEZCAN O NO, O QUE ESTÉN VINCULADOS O ADSCRITOS AL ESTADO O A LA NACIÓN, A LOS DEPARTAMENTOS, DISTRITOS, MUNICIPIOS, MINISTERIOS, DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS, EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO, ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA, NOTARÍAS Y EN GENERAL A TODA LA RAMA EJECUTIVA O ADMINISTRATIVA, JUDICIAL O JURISDICCIONAL Y LEGISLATIVA DEL PODER PÚBLICO DEL ESTADO, EN CUALQUIER ACTO, PETICIÓN, ACTUACIÓN, DILIGENCIA, TRÁMITE O PROCESO EN CUALQUIER CALIDAD. EL APODERADO PODRÁ EN REPRESENTACIÓN DE ACE SEGUROS S.A., ABSOLVER INTERROGATORIOS DE PARTE, DECLARAR Y CONFESAR. 2. TRIBUNAL DE ARBITRAMIENTO: PARA QUE SOMETA A LA DECISIÓN DE ÁRBITROS CONFORME A LA LEY Y NORMAS RELACIONADAS, LAS CONTROVERSIAS SUSCEPTIBLES DE TRANSACCIÓN RELATIVAS A LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE ACE SEGUROS S.A. Y PARA QUE REPRESENTA A LA MENCIONADA ASEGURADORA DONDE SEA NECESARIO EN EL TRÁMITE DE PROCESOS ARBITRALES. 3. APODERADO JUDICIAL: PARA QUE REPRESENTA A ACE SEGUROS S.A. ANTE CUALQUIER AUTORIDAD JURISDICCIONAL O JUDICIAL EN TODA CLASE DE PROCESOS, JUICIOS, TRÁMITES, DILIGENCIAS, COMO DEMANDANTE, DEMANDADO, LLAMADO EN GARANTÍA U OTRA CALIDAD, SEAN CIVILES, COMERCIALES, LABORALES, CONTENCIOSAS ADMINISTRATIVAS, ARBITRALES Y DEMÁS JURISDICCIONES QUE EXISTAN ACTUALMENTE O PUEDAN EXISTIR, TENIENDO LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE LA LEY Y ESTE MANDATO EN GENERAL, MÁS LAS DE NOTIFICARSE PERSONALMENTE DE TODA PROVIDENCIA, CONTESTAR DEMANDAS Y LLAMAMIENTOS EN GARANTÍA, PRESENTAR E INTERPONER RECURSOS, PROMOVER INCIDENTES, RECIBIR, TRANSIGIR, NOVAR, CONCILIAR, DESISTIR Y RENUNCIAR, SUSTITUIR TOTAL O PARCIALMENTE Y REASUMIR, Y LAS DEMAS QUE SEAN NECESARIAS PARA QUE. NUNCA QUEDE SIN REPRESENTACION ACE SEGUROS S.A., JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE ANTE AUTORIDADES JUDICIALES, ARBITRALES O ADMINISTRATIVAS. 4. CONCILIAR Y TRANSIGIR: PARA QUE CONCILIE TOTAL O (SIC) PROCESAL, JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE, CUALQUIER TIPO DE (SIC) NEGOCIOS, ANTE JUEZ, MAGISTRADO, ARBITRO, NOTARIO O CONCILIADOR (SIC) GENERAL QUE ESTÉ ADSCRITO O HAGA PARTE O NO DE CUALQUIER (SIC) ENTIDAD, FUNDACIÓN, ASOCIACIÓN, CONSULTORIO JURÍDICO, CENTRO (SIC) CONCILIACIÓN, CENTRO DE ARBITRAJE, ETC.; PARA QUE TRANSIJA, (SIC)

ARREGLE NEGOCIOS, PLEITOS, PROCESOS O TRÁMITES Y DIFERENCIAS (SIC) OCURRAN RESPECTO DE LOS ACTOS Y CONTRATOS, DERECHOS Y OBLIGACIONES DE ACE SEGUROS S.A. EL APODERADO EN EL EVENTO DE CONCILIACIÓN PODRÁ PRESENTAR AL CONCILIADOR, O A QUIEN HAGA SUS VECES, TODAS LAS PRUEBAS, DOCUMENTOS Y EXCUSAS NECESARIOS O A QUE HAYA LUGAR PARA QUE SE PUEDA CELEBRAR LA RESPECTIVA AUDIENCIA. 5. SUSTITUCIÓN Y REVOCACIÓN: PARA QUE SUSTITUYA Y REASUMA TOTAL O PARCIALMENTE EL PRESENTE PODER Y REVOQUE SUSTITUCIONES. 6. GENERAL: EN GENERAL PARA QUE ASUMA LA PERSONERÍA DE ACE SEGUROS S.A., CUANDO LO ESTIME CONVENIENTE Y NECESARIO, DE TAL MODO QUE EN NINGÚN CASO QUEDE SIN REPRESENTACIÓN EN SUS NEGOCIOS. SEGUNDO: REVOCABILIDAD: ACE SEGUROS S.A., SE RESERVA EXPRESAMENTE LA FACULTAD DE REVOCAR TOTAL O PARCIALMENTE EL PRESENTE MANDATO, EN CUALQUIER MOMENTO Y POR CUALQUIER RAZÓN. PARA ELLO BASTARÁ QUE ACE SEGUROS S.A. ELEVE A ESCRITURA PÚBLICA LA REVOCACIÓN Y SOLICITUD AL SEÑOR NOTARIO PARA QUE ESTE ORDENE, A QUIEN CORRESPONDA, HACER LA RESPECTIVA NOTA DE REVOCACIÓN O CANCELACIÓN SOBRE EL TEXTO DE LA PRESENTE ESCRITURA PÚBLICA QUE CONTIENE AL PRESENTE PODER GENERAL. TERCERO: VIGENCIA: EL PRESENTE PODER TENDRÁ VIGENCIA INDEFINIDA A PARTIR DE LA FECHA DE OTORGAMIENTO DE LA PRESENTE ESCRITURA PÚBLICA.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 1599 DE LA NOTARIA 28 DE BOGOTÁ D.C., DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2016, INSCRITA EL 6 DE DICIEMBRE DE 2016 BAJO LOS NO. 00036435 Y 00036439 DEL LIBRO V, COMPARECIO JAIME CHAVES LOPEZ, IDENTIFICADO CON LA CEDULA DE CIUDADANIA NO. 79.693.817 EXPEDIDA EN BOGOTÁ D.C., EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA, POR MEDIO DE LA PRESENTE ESCRITURA PUBLICA, CONFIERE PODER GENERAL, AMPLIO Y SUFICIENTE, A FAVOR DE CARLOS HUMBERTO CARVAJAL PABON, IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA NO. 19.354.035 Y TARJETA PROFESIONAL NUMERO 33041 DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y A GUSTAVO ALBERTO HERRERA AVILA, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 19.395.114 Y CON TARJETA PROFESIONAL NÚMERO 39116 DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA (LOS [APODERADOS]), PARA QUE EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD, REALICE LOS SIGUIENTES ACTOS: COMPARECER EN JUICIO Y REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN TODA CLASE DE ASUNTOS JUDICIALES, EXTRAJUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS, TENIENDO TODAS AQUELLAS FUNCIONES Y FACULTADES PARA EJERCER DICHA REPRESENTACIÓN. LOS APODERADOS EN DESARROLLO DE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD PARA ASUNTOS DE ÍNDOLE JUDICIAL O ADMINISTRATIVA, TENDRÁN LA FACULTAD DE IMPONERSE DE TODA CLASE DE NOTIFICACIONES LEGALES, CONFESAR, INTERPONER Y SUSTENTAR RECURSOS, CONTESTAR DEMANDAS, DEMANDAR Y CONTRA DEMANDAR, PEDIR Y ALLEGAR PRUEBAS, INTERVENIR EN TODAS LAS ETAPAS, INSTANCIAS E INCIDENTES DE LOS PROCESOS O ACTUACIONES JUDICIALES O ADMINISTRATIVAS, RENDIR INFORMES, ABSOLVER INTERROGATORIOS EN DILIGENCIA DE CONFESIÓN JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL, DESISTIR, CONCILIAR, TRANSIGIR, RECIBIR, CONFERIR

PODERES Y REVOCARLOS Y EN GENERAL PARA QUE ASUMA LA PERSONERÍA Y REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A. EN TODOS AQUELLOS ASUNTOS JUDICIALES O ADMINISTRATIVOS QUE ESTIME NECESARIO Y CONVENIENTE A LOS INTERESES DE ESTA SOCIEDAD, DE MANERA TAN AMPLIA QUE ESTÁ NINGÚN CASO QUEDE SIN REPRESENTACIÓN EN DICHA CLASE DE ASUNTOS.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 1585 DE LA NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C., DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2016, INSCRITA EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2016 BAJO LOS NO. 00036239, 00036240, 00036241, 00036242, 00036243 Y 00036244 DEL LIBRO V, COMPARECIO MARIA DEL MAR GARCIA DE BRIGARD IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO. 52.882.565 DE BOGOTA D.C., EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL, POR MEDIO DE LA PRESENTE ESCRITURA PUBLICA, CONFIERE PODER ESPECIAL AMPLIO Y SUFICIENTE A JAIME CHAVES LOPEZ IDENTIFICADO CON CEDULA CIUDADANÍA NO. 79.693.817; Y/O A EDGARD SAAVEDRA CLAVIJO IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO. 73.072.852; Y/O A JAVIER AUGUSTO DUQUE SALAZAR, IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO. 79.136.682; Y/O A OSCAR LUIS AFANADOR GARZON IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO. 19.490.945; Y/O A MARIA PATRICIA ARAGON VELEZ, IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO. 43.510.821; Y/O A PAULO CESAR LOPEZ SALGADO, IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO. 80.422.743 (LOS APODERADOS), PARA QUE ACTÚEN INDIVIDUAL O CONJUNTAMENTE EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD PARA: I) FIRMAR PÓLIZAS DE SEGUROS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD. II) FIRMAR CERTIFICACIONES DERIVADAS DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS PARA LOS RAMOS AUTORIZADOS. LOS APODERADOS ESTARÁN FACULTADOS PARA NEGOCIAR, SUSCRIBIR, ACTUALIZAR Y CANCELAR LAS PÓLIZAS DE SEGUROS, JUNTO CON EL OTORGAMIENTO DE LAS CERTIFICACIONES DERIVADAS DE LAS MISMAS. II) LOS APODERADOS TIENEN LA CAPACIDAD PARA SUSTITUIR Y REASUMIR ESTE PODER

CERTIFICA:

** REVISOR FISCAL **

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. sin num DE REVISOR FISCAL DEL 6 DE ABRIL DE 2016, INSCRITA EL 26 DE ABRIL DE 2016 BAJO EL NUMERO 02097678 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL PRINCIPAL	

MARTINEZ TORRADO MATILDE DEL PILAR	C.C. 000000041764707
------------------------------------	----------------------

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. sin num DE REVISOR FISCAL DEL 4 DE NOVIEMBRE DE 2016, INSCRITA EL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 BAJO EL NUMERO 02167232 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL SUPLENTE	

PADUA JIMENEZ JENNY JOHANA	C.C. 000001032408936
----------------------------	----------------------

QUE POR ACTA NO. 84 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 1 DE MARZO DE 2016, INSCRITA EL 26 DE ABRIL DE 2016 BAJO EL NUMERO 02097638 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA	

PRICEWATERHOUSECOOPERS LTDA PERO PODRA	
OPERAR UTILIZANDO LAS SIGLAS	
PRICEWATERHOUSECOOPERS O PWC	N.I.T. 000008600020626

CERTIFICA:

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE REPRESENTANTE LEGAL DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2008, INSCRITO EL 3 DE FEBRERO DE 2009 BAJO EL NUMERO 01272228 DEL LIBRO IX, COMUNICO LA SOCIEDAD MATRIZ:

- CHUBB LIMITED

DOMICILIO: (FUERA DEL PAIS)



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

CODIGO DE VERIFICACION: 05224386252BD1

3 DE MARZO DE 2017 HORA 15:41:24

R052243862

PAGINA: 5 de 6

* * * * *

QUE SE HA CONFIGURADO UNA SITUACION DE CONTROL CON LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. sin num DE REPRESENTANTE LEGAL DEL 11 DE FEBRERO DE 2016, INSCRITO EL 4 DE ABRIL DE 2016 BAJO EL NUMERO 02089552 DEL LIBRO IX, COMUNICO LA SOCIEDAD MATRIZ:

- CHUBB LIMITED

DOMICILIO: (FUERA DEL PAIS)

QUE SE HA CONFIGURADO UNA SITUACION DE GRUPO EMPRESARIAL CON LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.

FECHA DE CONFIGURACION DE LA SITUACION DE GRUPO EMPRESARIAL : 2016-01-14

CERTIFICA:

ACLARACIÓN DE SITUACIÓN DE CONTROL

SE ACLARA LA SITUACIÓN DE CONTROL INSCRITA EL 3 DE FEBRERO DE 2009 BAJO EL NUMERO 01272228 DEL LIBRO IX, INFORMANDO QUE LA SOCIEDAD MATRIZ CHUBB LIMITED (MATRIZ) EJERCE SITUACIÓN DE CONTROL INDIRECTAMENTE A TRAVES DE ACE INA INTERNATIONAL HOLDINGS LTD Y OTRAS FILIALES Y/O EMPRESAS DEL GRUPO ACE SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (SUBORDINADA).

ACLARACION GRUPO EMPRESARIAL

SE ACLARA QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. SIN NUM DE REPRESENTANTE LEGAL DEL 11 DE FEBRERO DE 2016, INSCRITO EL 4 DE ABRIL DE 2016, BAJO EL NUMERO 02089552 DEL LIBRO IX, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE CONFIGURA GRUPO EMPRESARIAL ENTRE LA SOCIEDAD MATRIZ CHUBB LIMITED Y LAS SUBORDINADAS: CHUBB DE COLOMBIA COMPAÑIA DE SEGUROS S A Y ACE SEGUROS SA.

ACLARACION DE SITUACION DE CONTROL Y GRUPO EMPRESARIAL

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. SIN NUM DE REPRESENTANTE LEGAL DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2016, INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2016, BAJO EL NUMERO 02164764 DEL LIBRO IX, SE MODIFICA LA SITUACIÓN DE CONTROL INSCRITA BAJO EL REGISTRO 01272228 Y GRUPO EMPRESARIAL INSCRITO BAJO EL REGISTRO 02089552 DEL LIBRO IX, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE LA SOCIEDAD MATRIZ CHUBB LIMITED EJERCE SITUACION DE CONTROL Y GRUPO EMPRESARIAL DE MANERA INDIRECTA SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA A TRAVES DE LAS SOCIEDADES: CHUBB GROUP HOLDINGS INC., CHUBB INA HOLDINGS INC., FEDERAL INSURANCE COMPANY, GREAT NORTHERN INSURANCE COMPANY, VIGILANT INSURANCE COMPANY, PACIFIC INDEMNITY COMPANY, INA CORPORATION, CHUBB INA INTERNATIONAL HOLDINGS LTD., AFIA FINANCE CORPORATION, INA FINANCIAL CORPORATION, BRANDYWINE HOLDINGS CORPORATION, INA HOLDINGS CORPORATION, INSURANCE COMPANY OF NORTH AMÉRICA, CENTURY INDEMNITY COMPANY, CENTURY INTERNATIONAL REINSURANCE COMPANY LTD.

CERTIFICA:

SUCURSAL (ES) O AGENCIA (S) MATRICULADAS ANTE ESTA JURISDICCION

NOMBRE DE LA SUCURSAL : CHUBB DE COLOMBIA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.
SUCURSAL BOGOTA

MATRICULA : 00249065

RENOVACION DE LA MATRICULA : 29 DE MARZO DE 2016

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2016

DIRECCION : AV CL 26 NO. 59 - 51 TO 3 P 7

TELEFONO : 3266200

DOMICILIO : BOGOTA D.C.

EMAIL : mcrojas@chubb.com

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONSTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE LA CORRESPONDIENTE ANOTACIÓN. SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSO. (LOS SABADOS NO SON TENIDOS EN CUENTA COMO DIAS HABILES PARA LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTA)

* * * EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE * * *
* * * FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO * * *

INFORMACION COMPLEMENTARIA

LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE RIT Y PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS
CONTRIBUYENTE INSCRITO EN EL REGISTRO RIT DE LA DIRECCION DISTRITAL DE
IMPUESTOS, FECHA DE INSCRIPCION : 21 DE NOVIEMBRE DE 2016
FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 11 DE ENERO DE
2017

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000
SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED
TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE
75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL
SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525
DE 2009.

RECUERDE INGRESAR A www.supersociedades.gov.co PARA VERIFICAR SI SU
EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.

** ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA **
** SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION... **

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,
VALOR : \$ 5,200

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA
INFORMACION QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PUBLICOS DE LA CAMARA DE
COMERCIO DE BOGOTA, EL CODIGO DE VERIFICACION PUEDE SER VALIDADO POR
SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y

9871



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

CODIGO DE VERIFICACION: 05224386252BD1

3 DE MARZO DE 2017 HORA 15:41:24

R052243862

PAGINA: 6 de 6

* * * * *

CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURIDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

FIRMA MECANICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA
AUTORIZACION IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

Constante Puentes A.

* * *

NO ES VALIDO POR ESTA CARA

* * *



936
859

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA
Magistrada sustanciadora: MARIBEL MENDOZA JIMÉNEZ

Santa Marta, veintiséis (26) de enero de dos mil diecisiete (2017)

Expediente: 47-001-2333-003-2014-00241-00
Demandante: OBRESAN
Demandado: NACION-MINJUSTICIA Y OTROS
Medio de control: REPARACION DIRECTA

Mediante auto de 19 de mayo de 2016 se señaló como fecha para la celebración de audiencia inicial de que trata el artículo 180 de la ley 1437 de 2011, el 03 de noviembre de 2016 a las diez de la mañana (10:00 am), en el proceso de la referencia. Dicha audiencia debe ser reprogramada con ocasión a que mediante auto del 01 de noviembre de 2016 se suspendió la realización de dicha audiencia, debido a que con ocasión al cambio del titular del Despacho, resultaba necesario la reorganización del calendario de audiencias y estudio de cada uno de los procesos.

En mérito de lo expuesto, se dispone:

1. Fijar el día siete (07) de marzo de 2017 a las diez y media de la mañana (10:30 a.m.) como fecha y hora para llevar a cabo audiencia inicial en el proceso de la referencia.
2. Por Secretaria notifíquese la presente providencia por estado electrónico.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

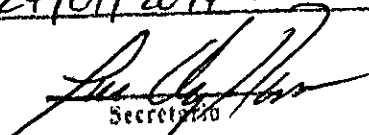

MARIBEL MENDOZA JIMÉNEZ
Magistrada

TRIBUNAL CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA
SECRETARIA GENERAL

NOTIFICACIÓN POR ESTADO ELECTRÓNICO
CERTIFICACION

El auto anterior se notificó POR ANOTACIÓN EN
ESTADOS ELECTRONICOS No. 006

27/01/2017


Secretario

988/860

Notificaciones Tribunal 03 Administrativo del Magdalena

De: Notificaciones Tribunal 03 Administrativo del Magdalena
<tadmin03mgd@notificacionesrj.gov.co>
Enviado el: lunes, 30 de enero de 2017 11:53 a.m.
Para: alejocorman@gmail.com; universidad del magdalena
(notificacionjudicial@unimagdalena.edu.co); 'presidencia@ccsm.org.co';
'secretariajuridica@ccsm.org.co'; notificacionesjudiciales@minjusticia.gov.co;
procuraduria (procjudadm155@procuraduria.gov.co); procuraduria43@gmail.com;
marianorumbo@gmail.com
Asunto: NOTIFICACION
Datos adjuntos: REPARACION DIRECTA 2014-00241 OBRESAN - FIJA FECHA AUDIENCIA INICIAL -.pdf
Importancia: Alta

EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR ESTE DESPACHO LE NOTIFICO A TRAVES DE ESTE MENSAJE DE DATOS LA
PROVIDENCIA DE 26 DE ENERO DE 2017
PUBLICADA EN ESTADO 006 DE 27 DE ENERO DE 2017 DONDE SE RESOLVIO FIJAR EL 7 DE MARZO DE 2017 A LAS DIEZ Y
MEDIA DE LA MAÑANA A FIN DE
LLEVAR A CABO AUDIENCIA DE INICIAL DENTRO DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS.

MIGUEL ANGEL PAEZ TOVAR
CITADOR

AVISO IMPORTANTE: Esta dirección de correo electrónico tadmin03mgd@notificacionesrj.gov.co es de uso
único y exclusivo de envío de notificaciones, todo mensaje que se reciba no será leído y automáticamente se
eliminará de nuestros servidores, apreciado usuario si tiene alguna solicitud por favor comuníquese a la
siguiente línea telefónica: 4213901 o envíenos un correo electrónico a la siguiente
dirección: tadtvo03mag@cendoj.ramajudicial.gov.co

9985
861

SECRETARÍA GENERAL
Ley 1437 de 2011

RADICACIÓN: 47-001-2333-003-2014-00241-00
ACCIONANTE: OBRESAN
ACCIONADO: NACIÓN- MINISTERIO DE JUSTICIA Y
OTROS
MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA
ASUNTO: AUDIENCIA INICIAL EL 07 MARZO DE 2017

P A S O A L D E S P A C H O

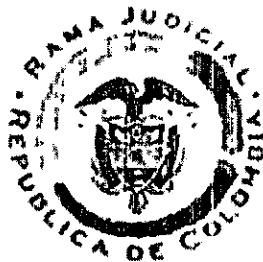
De la Magistrada Maribel Mendoza Jiménez, hoy 03 de marzo de 2017, para informarle que el proceso de referencia tiene audiencia inicial el día 07 de marzo de 2017 a las 10:30 am

Anexos 269 folios útiles.

Sírvase proveer lo que estime pertinente

Atentamente,


JAIME ORTIZ ROMERO
SECRETARIO



262

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA
Magistrada sustanciadora: MARIBEL MENDOZA JIMÉNEZ

Santa Marta, siete (07) de marzo de dos mil diecisiete (2017)

Expediente: 47-001-2333-003-2014-00241-00
Demandante: UNIÓN TEMPORAL DE OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA – OBRESAN - .
Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO – CAMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA – CENTRO DE ARBITRAJE, CONCILIACIÓN Y AMIGABLE COMPOSICIÓN – UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA.
Medio de control: REPARACIÓN DIRECTA

ACTA DE AUDIENCIA INICIAL

1.- ASISTENTES (min: 00:00 – 4:55)

1.1.- Parte Demandante:

Unión Temporal Obras Temporales de Santa Marta.

Apoderado: Luis Alejandro Corzo Mantilla

Cédula de ciudadanía: 88.213.988 de Cúcuta

Tarjeta profesional: 101.576 C.S.J.

Correo electrónico: alejocorman@gmail.com

1.2. Demandado:

Cámara de Comercio.

Apoderado: Manuel Vives Noguera

Cédula de ciudadanía: 84.454.719 de Santa Marta

Tarjeta profesional: 169.144 C.S.J.

Dirección apoderado: Cañera 1ª N° 27-46 Apto 7 – Santa Marta - Magdalena.

Correo electrónico entidad: camarasm@ccsm.org.co

Correo electrónico apoderado: mvivesnoguera@hotmail.com

1.3. Demandado:

Universidad del Magdalena

Apoderado: Claudia Katime Zuñiga

Cédula de ciudadanía: 36.724.902 de Santa Marta

Tarjeta profesional: 143914 del CSJ

Correo electrónico apoderado: Claudiakatime@yahoo.com

1.4. Llamado en garantía:

ACE SEGUROS S.A. hoy Chubb Seguros Colombia S.A.

Apoderada sustituta: Maria Camila Cárdenas Londoño

Cédula de ciudadanía: 1.020.768.046 de Bogotá

Tarjeta profesional: 272.875 C.S.J.

Dirección entidad: Calle 72 N° 10-51 -- Piso 6° - Bogotá.

Dirección apoderado: Avenida 6 A Bis N° 35 n-100 – oficina 212, Centro empresarial Chipichape, Cali.

Correo electrónico entidad: ana.ussa@acegroup.com

Correo electrónico apoderado: gherrera@gha.com.co

1.6. Ministerio Público. (02:48)

Se deja constancia de la comparecencia de la Procurador Delegado ante el Tribunal Administrativo del Magdalena el Doctor Manuel Mariano Rumbo.

2- RECONOCIMIENTO DE PERSONERÍA JURIDICA. (4:56 -)

- **Manuel Vives Noguera**, apoderado de la parte demandada – Cámara de Comercio - , a quien se le reconoce personería jurídica para actuar según el poder conferido visible a folio 684 cuaderno 2 del expediente.

- **Ligia Patricia Aguirre Cubides**, apoderada de la parte demandada – Ministerio de Justicia y del Derecho - , a quien se le reconoce personería jurídica para actuar según el poder conferido visible a folio 678 - 682 cuaderno 2 del expediente.

- **Claudia Katime Zuñiga**, apoderada de la parte demandada – Universidad del Magdalena - , a quien se le reconoce personería jurídica para actuar según el poder conferido visible a folio 833 cuaderno 2 del expediente.

- **Gustavo Alberto Herrera Ávila**, apoderado del llamado en garantía – ACE SEGUROS S.A., - HOY CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A., a quien se le reconoce personería jurídica para actuar según el poder conferido visible a folio 794 cuaderno 2 del expediente.

- **Maria Camila Cárdenas Londoño**, apoderada sustituta del llamado en garantía – ACE SEGUROS S.A. - HOY CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A., a quien se le reconoce personería jurídica para actuar según el poder conferido aportado en la presente diligencia.

La presente decisión queda notificada por estrado y contra ella procede recurso de reposición de conformidad con el artículo 243 del CPACA. (Min 3:00)

Sin recursos.

3.- TRÁMITE DE LA DEMANDA Y SANEAMIENTO DEL PROCESO (Min: 7:20 - 15:00)

Para efectos de realizar el saneamiento del proceso, la Magistrada sustanciadora indica el trámite que se surtió en el presente medio de control, a efectos de verificar las etapas surtidas dentro del mismo, en virtud a lo dispuesto en el numeral 5º del artículo 180 del C.P.A.C.A.

La Magistrada manifiesta que la demanda fue presentada en contra de la NACIÓN – MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO – CAMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA – CENTRO DE ARBITRAJE, CONCILIACIÓN Y AMIGABLE COMPOSICIÓN – UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA – DIANA BOVEA MENDINUETA – MIGUEL ANGEL POLO CAMPO y JUAN ALBERTO POLO FIGUEROA.

El auto admisorio de la demanda dispuso la admisión de la misma contra la NACIÓN – MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO – CAMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA – CENTRO DE ARBITRAJE, CONCILIACIÓN Y AMIGABLE COMPOSICIÓN – UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA, pero no tuvo como demandados a DIANA BOVEA MENDINUETA – MIGUEL ANGEL POLO CAMPO y JUAN ALBERTO POLO FIGUEROA, quienes fueron los árbitros que hicieron parte del Tribunal que profirió el laudo arbitral y además fueron señalados como accionados en el escrito de la demanda.

El capítulo de la intervención de terceros dispuesto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 del 2011), no reguló lo pertinente al litisconsorte necesario, sin embargo, el artículo 227 ibídem, estableció que en lo no regulado en dicho código sobre la intervención de terceros se aplicarán las normas del Código de Procedimiento Civil, no obstante y teniendo en cuenta que el literal c) del artículo 626 del Código General del Proceso, derogó el Código de Procedimiento Civil, se dará aplicación al artículo 61 del Código General del Proceso, el cual establece:

"Cuando el proceso verse sobre relaciones o actos jurídicos respecto de los cuales, por su naturaleza o por disposición legal, hay de resolverse de manera uniforme y no sea posible decidir de mérito sin la comparecencia de las personas que sean sujetos de tales relaciones o que intervinieron en dichos actos, la demanda deberá formularse por todas o dirigirse contra todas; si no se hiciere así, el juez, en el auto que admite la demanda, ordenará notificar y dar traslado de ésta a quienes falten para integrar el contradictorio, en la forma y con el término de comparecencia dispuesto para el demandado.

En caso de no haberse ordenado el traslado al admitirse la demanda, el juez dispondrá la citación de las mencionadas personas, de oficio o a petición de parte, mientras no se haya dictado sentencia de primera instancia, y concederá a los citados el mismo término para que comparezcan. El proceso se suspenderá durante dicho término. (...)"

Al respecto de la integración del contradictorio, el Honorable Consejo de Estado ha señalado:

"Existe litisconsorcio necesario cuando hay pluralidad de sujetos en calidad demandante (litisconsorcio por activa) o demandado (litisconsorcio por pasiva) que están vinculados por una única "relación jurídico sustancial" (art. 51 C. de P. Civil); en este caso y por expreso mandato de la ley, es indispensable la presencia dentro del litigio de todos y cada uno de ellos, para que el proceso pueda desarrollarse, pues cualquier decisión que se tome dentro de éste es uniforme y puede perjudicar o beneficiarlos a todos.

En cambio, el litisconsorcio será facultativo o voluntario cuando concurren libremente al litigio varias personas, en calidad de demandantes o demandados, ya no en virtud de una única relación jurídica, sino de tantas cuantas partes dentro del proceso deciden unirse para promoverlo conjuntamente (legitimación por activa), aunque válidamente pudieran iniciarlo por separado, o de padecer la acción si sólo uno o varios de ellos debe soportar la pretensión del actor (legitimación por pasiva). Bajo esta modalidad, los actos de cada uno de los litisconsortes no redundarán en provecho o en perjuicio de los otros, sin que ello afecte la unidad del proceso o implique que la sentencia sea igual para todos (art. 50 del C. de P. Civil). En este caso, el proceso puede adelantarse con o sin su presencia porque el contenido de la sentencia en últimas no lo perjudica ni lo beneficia. Sólo contándose con su presencia en el proceso, la decisión que se adopte en la sentencia lo vinculará, dado que en ella se decidirá sobre sus propias pretensiones o sobre las razones que esgrime en su defensa. La intervención facultativa sólo podrá ejercerse hasta antes de que se profiera sentencia de única o primera instancia y dentro del término previsto para la interposición de la acción correspondiente, esto es, siempre que no hubiese operado la caducidad (art. 52 ejusdem)."

En virtud de lo anterior, un litisconsorte es la persona que litigia por el mismo interés y causa que otra, formando con ella una sola parte; es decir, que en una misma causa las dos personas son demandantes o demandadas pudiendo darse su vinculación al proceso, como litisconsorte necesario o facultativo con la diferencia que en el necesario los sujetos procesales están vinculados por una relación jurídica única y la decisión de fondo que se profiera en el proceso, perjudica o beneficia al litisconsorte sin importar su comparecencia al proceso.

¹ CONSEJO DE ESTADO. SECCION TERCERA. C.P. RUTH ESTELLA CORREA. PROVIDENCIA DEL 19 DE JULIO DEL 2011. RADICADO 66001-23-31-000-2009-00073-01 (38341).

Las consideraciones citadas resultan aplicables a la presente litis puesto que es necesaria la comparecencia al proceso de los señores DIANA BOVEA MENDINUETA – MIGUEL ANGEL POLO CAMPO y JUAN ALBERTO POLO FIGUEROA, puesto que, los efectos de la sentencia la alcanzarán, teniendo un interés directo en lo que aquí se dirima.

En consecuencia, se ordena VINCULAR a los señores DIANA BOVEA MENDINUETA – MIGUEL ANGEL POLO CAMPO y JUAN ALBERTO POLO FIGUEROA, como litisconsorte necesario en el presente proceso.

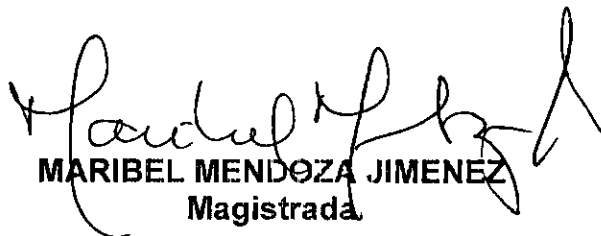
Para lo anterior, Se ORDENA notificar el presente auto a los vinculados, según lo establecido en los Art. 197 y 198 del CPACA. Para el efecto, el mensaje deberá identificar la notificación que se realiza y adjuntar copia del escrito de la demanda y sus anexos.

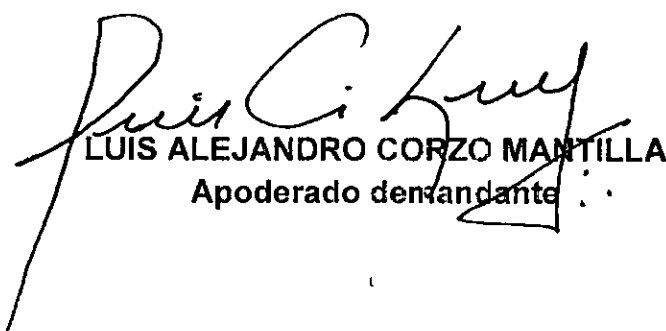
Otorgar el término de treinta (30) días, contados a partir del vencimiento del término contenido en el artículo 199 del C.P.A.C.A., modificado por el artículo 612 del C.G.P. para que los vinculados contesten la demanda, propongan excepciones, soliciten pruebas.

Decisión notificada en estrado y contra ella procede el recurso de reposición.

Constancia de grabación

Se verifica que ha quedado debidamente grabado el audio y que hará parte de la presente acta.


MARIBEL MENDOZA JIMENEZ
Magistrada


LUIS ALEJANDRO CORZO MANTILLA
Apoderado demandante



MANUEL MARIANO RUMBO
Ministerio Público



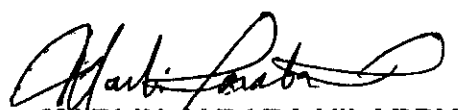
MANUEL VIVES NOGUERA
Apoderado Cámara de Comercio



CLAUDIA KATIME ZUÑIGA
Apoderada Universidad del Magdalena



MARIA CAMILA CÁRDENAS LONDOÑO
Apoderada sustituta
ACE SEGUROS S.A., HOY CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A.,



MARLIN JARABA VILARDY
Auxiliar Judicial Grado 1

Señores

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA

E. S. D.

982 005

REF. REPARACIÓN DIRECTA

DEMANDANTE: J.P.G. & CÍA S.A., GERMÁN VILLANUEVA CALDERÓN Y OTROS

DEMANDADOS: CÁMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA

LLAMAMIENTO: CHUBB DE COLOMBIA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. (antes ACE Seguros S.A.)

RADICACIÓN: 47001233300320140024100

Asunto:

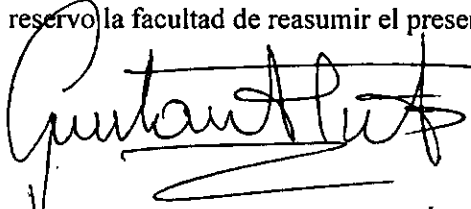
Sustitución de poder

GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Bogotá D.C., identificado con la cédula de ciudadanía número 19.395.114 expedida en Bogotá, abogado en ejercicio portador de la Tarjeta Profesional número 39.116 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en mi calidad de Apoderado General de **CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A.** conforme al poder otorgado por medio de Escritura Pública No. 1599 de la Notaría 28 de Bogotá D.C. del 24 de noviembre de 2016, tal como consta en el Certificado de Existencia y Representación Legal de esa aseguradora expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá que anexo a este escrito, mediante la presente manifiesto expresamente que **SUSTITUYO EL PODER** general a mí conferido, a la Doctora **MARIA CAMILA CÁRDENAS LONDOÑO**, mayor de edad, domiciliada en la ciudad de Bogotá D.C., identificada con la cédula de ciudadanía número 1.020.768.046 de Bogotá D.C., abogada en ejercicio portadora de la Tarjeta Profesional número 272.875 del Consejo Superior de la Judicatura, para que asuma la representación judicial de esa aseguradora en el proceso de la referencia, solicite pruebas, interponga recursos, asista a las audiencias y demás diligencias que se surtan con ocasión de este proceso y realice todas las actuaciones necesarias e inherentes a su calidad.

Para el pleno cumplimiento de la presente sustitución, la Doctora **MARIA CAMILA CÁRDENAS LONDOÑO** queda investida con todas las facultades que me fueron conferidas en el poder inicial, estando así facultado para recibir, desistir, conciliar, transigir, comprometer, sustituir, reasumir, y en general, para realizar todas las acciones necesarias e indispensables para el buen éxito del mandato a su cargo.

Sírvase reconocerle personería a la Doctora **CÁRDENAS LONDOÑO** para actuar.

Me reservo la facultad de reasumir el presente poder.



GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA

C.C. No. 19.395.114 de Bogotá

T.P. No. 39.116 del C.S. de la J.

Acepto,.



MARIA CAMILA CÁRDENAS LONDOÑO

C.C. 1.020.768.046 de Bogotá D.C.

T.P. 272.875 del C.S de la J.

963

846

Responder a todos | Eliminar Correo no deseado | ...

x

Retransmitido: NOTIFICACION

MO Microsoft Outlook

Responder a todos |

jue 26/05/2016 03:45 p.m.

Para: alejocorman@gmail.com; procuraduria43@gmail.com

Bandeja de entrada

Se completó la entrega a estos destinatarios o grupos, pero el servidor de destino no envió información de notificación de entrega:

alejocorman@gmail.com (alejocorman@gmail.com)

procuraduria43@gmail.com (procuraduria43@gmail.com)

Asunto: NOTIFICACION



Responder a todos | Eliminar Correo no deseado | ...

964 x
847

Retransmitido: NOTIFICACION

MO Microsoft Outlook

Responder a todos |

jue 26/05/2016 03:45 p.m.

Para: alejocorman@gmail.com; procuraduria43@gmail.com

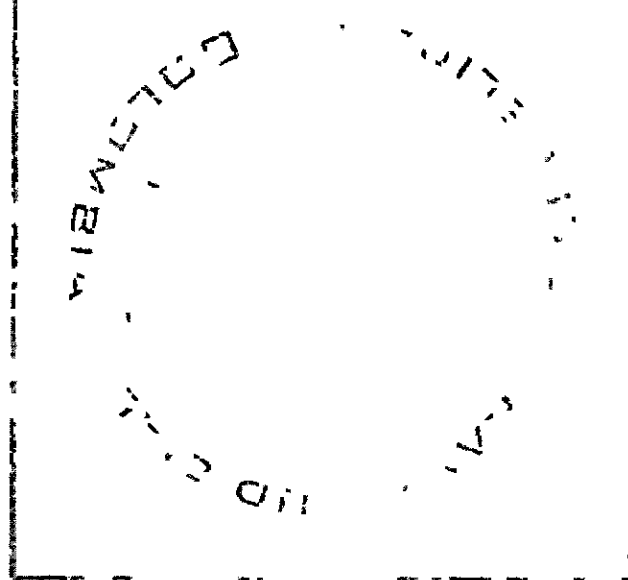
Bandeja de entrada

Se completó la entrega a estos destinatarios o grupos, pero el servidor de destino no envió información de notificación de entrega:

alejocorman@gmail.com (alejocorman@gmail.com)

procuraduria43@gmail.com (procuraduria43@gmail.com)

Asunto: NOTIFICACION



Responder a todos | v Eliminar Correo no deseado | v ...

96

x

849

Retransmitido: NOTIFICACION

MO

Microsoft Outlook

jue 26/05/2016 03:45 p.m.

Para: presidencia@ccsm.org.co; secretariajuridica@ccsm.org.co

Responder a todos | v

Bandeja de entrada

Se completó la entrega a estos destinatarios o grupos, pero el servidor de destino no envió información de notificación de entrega:

presidencia@ccsm.org.co (presidencia@ccsm.org.co)

secretariajuridica@ccsm.org.co (secretariajuridica@ccsm.org.co)

Asunto: NOTIFICACION



Responder a todos | v Eliminar Correo no deseado | v ...

966
x
849

Retransmitido: NOTIFICACION

MO Microsoft Outlook

jue 26/05/2016 03:45 p.m.

Para: presidencia@ccsm.org.co; secretariajuridica@ccsm.org.co

Responder a todos | v

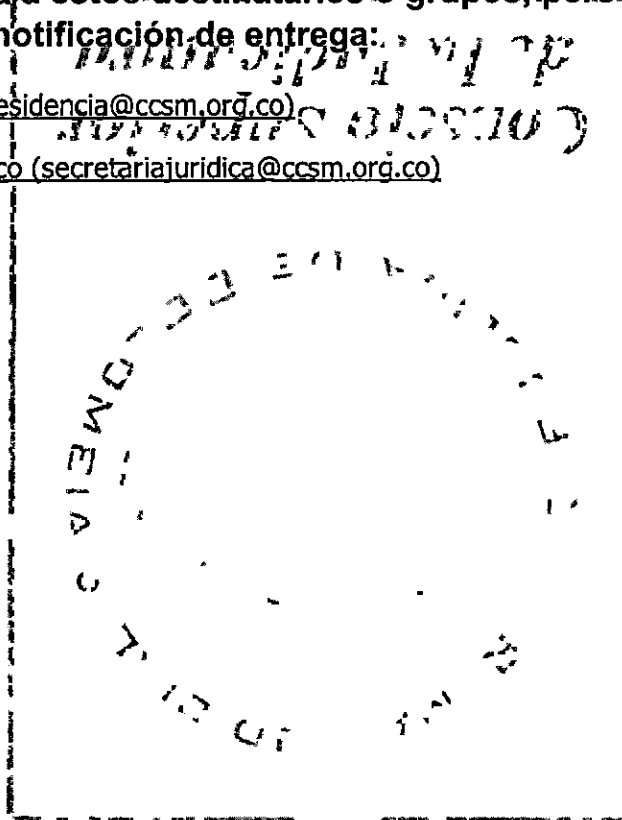
Bandeja de entrada

Se completó la entrega a estos destinatarios o grupos, pero el servidor de destino no envió información de notificación de entrega:

presidencia@ccsm.org.co (presidencia@ccsm.org.co)

secretariajuridica@ccsm.org.co (secretariajuridica@ccsm.org.co)

Asunto: NOTIFICACION



Responder a todos | v Eliminar Correo no deseado | v ...

96.
x
850

Retransmitido: NOTIFICACION

MO Microsoft Outlook
jue 26/05/2016 03:45 p.m.
Para: procjudadm155@procuraduria.gov.co ^

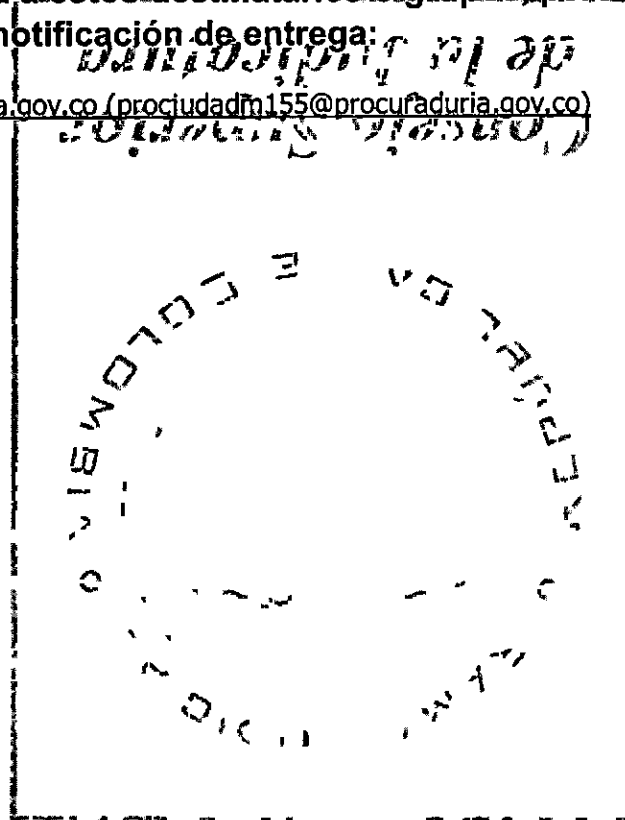
Responder a todos | v

Bandeja de entrada

Se completó la entrega a estos destinatarios o grupos, pero el servidor de destino no envió información de notificación de entrega:

procjudadm155@procuraduria.gov.co (procjudadm155@procuraduria.gov.co)

Asunto: NOTIFICACION



Responder a todos | Eliminar Correo no deseado | ...

968

x

851

Retransmitido: NOTIFICACION

MO Microsoft Outlook
jue 26/05/2016 03:45 p.m.

Responder a todos |

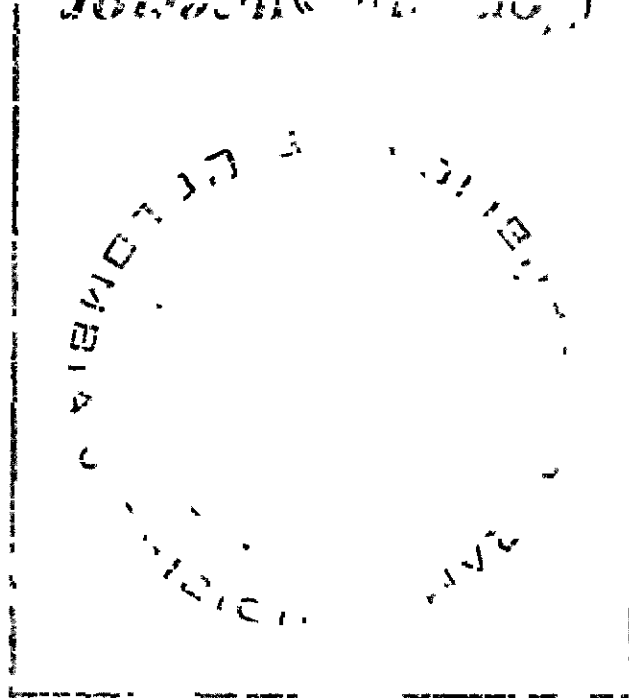
Para: procjudadm155@procuraduria.gov.co

Bandeja de entrada

Se completó la entrega a estos destinatarios o grupos, pero el servidor de destino no envió información de notificación de entrega:

procjudadm155@procuraduria.gov.co (procjudadm155@procuraduria.gov.co)

Asunto: NOTIFICACION



Responder a todos | Eliminar Correo no deseado | ...

909
x
852

Entregado: NOTIFICACION

postmaster@Universidadmag.onmicrosoft.com

Responder a todos |

jue 26/05/2016 03:45 p.m.

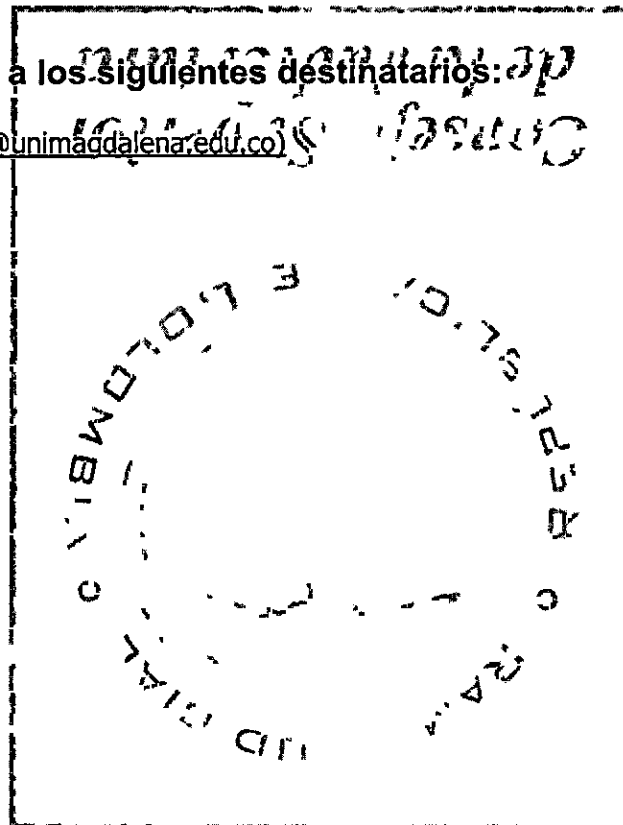
Para: UNIMAG <notificacionjudicial@unimagdalena.edu.co>

Bandeja de entrada

El mensaje se entregó a los siguientes destinatarios:

UNIMAG (notificacionjudicial@unimagdalena.edu.co)

Asunto: NOTIFICACION



Responder a todos | v Eliminar Correo no deseado | v ...

970

x

853

Entregado: NOTIFICACION

P postmaster@Universidadmag.onmicrosoft.com

o

Responder a todos | v

jue 26/05/2016 03:45 p.m.

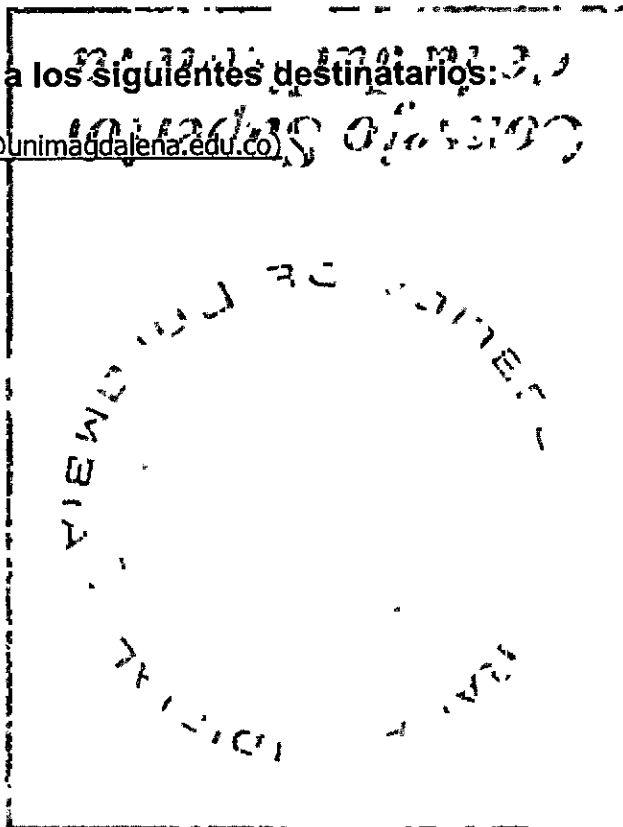
Para: UNIMAG <notificacionjudicial@unimagdalena.edu.co> ^

Bandeja de entrada

El mensaje se entregó a los siguientes destinatarios:

UNIMAG (notificacionjudicial@unimagdalena.edu.co)

Asunto: NOTIFICACION



971854
x

NOTIFICACION

T Tribunal Administrativo 02 Magdalena - Santa Marta
O

Responder a todos | v

jue 26/05/2016 3:45 p.m.

Para: alejocorman@gmail.com; UNIMAG<notificacionjudicial@unimagdalena.edu.co>;
presidencia@ccsm.org.co; secretariajuridica@ccsm.org.co; procjudadm155@procuraduria.gov.co;
procuraduria43@gmail.com; notificacionesjudiciales@minjusticia.gov.co

Elementos enviados

REPARACION DIRECTA 2..
41 KB

Mostrar todos 1 archivo adjunto (41 KB) descargar Guardar en OneDrive - Consejo Superior de la Judicatura

EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR ESTE DESPACHO LE NOTIFICO A TRAVES DE ESTE MENSAJE DE DATOS LA PROVIDENCIA DE 19 DE MAYO DE 2016 PUBLICADA EN ESTADO 068 DE 24 DE MAYO DE 2016 EN LA QUE SE RESOLVIO FIJAR EL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2016 A LAS DIEZ DE LA MAÑANA COMO FECHA Y HORA PARA LLEVAR A CABO AUDIENCIA INICIAL EN EL PROCESO DE LA REFERENCIA.

MIGUEL ANGEL PAEZ TOVAR
CITADOR

9x2 105

RV: NOTIFICACION

T O Tribunal Administrativo 02 Magdalena - Santa Marta

Responder a todos | ▼

jue 30/06/2016 3:15 p.m.

Para: O notificacionesjudiciales@minjusticia.gov.co ↗

Elementos enviados

REPARACION DIRECTA 2..
41 KB

descargar Guardar en OneDrive - Consejo Superior de la Judicatura

De: Tribunal Administrativo 02 Magdalena - Santa Marta

Enviado: jueves, 26 de mayo de 2016 3:45 p. m.

Para: alejocorman@gmail.com; UNIMAG; presidencia@ccsm.org.co; secretariajuridica@ccsm.org.co; procjudadm155@procuraduria.gov.co; procuraduria43@gmail.com; notificacionesjudiciales@minjusticia.gov.co

Asunto: NOTIFICACION

EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR ESTE DESPACHO LE NOTIFICO A TRÁVES DE ESTE MENSAJE DE DATOS LA PROVIDENCIA DE 19 DE MAYO DE 2016 PUBLICADA EN ESTADO 068 DE 24 DE MAYO DE 2016 EN LA QUE SE RESOLVIO FIJAR EL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2016 A LAS DIEZ DE LA MAÑANA COMO FECHA Y HORA PARA LLEVAR A CABO AUDIENCIA INICIAL EN EL PROCESO DE LA REFERENCIA.

MIGUEL ANGEL PAEZ TOVAR
CITADOR



923
806

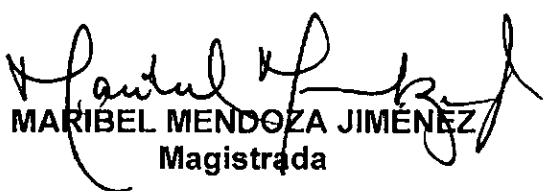
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA
Magistrada Ponente: MARIBEL MENDOZA JIMÉNEZ
Santa Marta, primero (01) de noviembre de dos mil dieciséis (2016)

Expediente: 47-001-2333-003-2014-00241-00
Demandante: OBRESAN
Demandado: NACIÓN-MIN JUSTICIA Y OTROS
Medio de control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Mediante auto de 19 de mayo de 2016 se señaló como fecha para la celebración de audiencia inicial, el 03 de noviembre de 2016 a las (10:00 a.m), en el proceso de la referencia. Dicha diligencia deberá ser suspendida debido a que con ocasión al cambio del titular del Despacho, resulta necesario la reorganización del calendario de audiencias y estudio de cada uno de los procesos.

En consecuencia este Despacho procederá a reprogramar dicha diligencia en nueva fecha y hora que se señalará en proveído posterior.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


MARIBEL MENDOZA JIMÉNEZ
Magistrada

9289 07

Notificaciones Tribunal 03 Administrativo del Magdalena

De: Notificaciones Tribunal 03 Administrativo del Magdalena
<tadmin03mgd@notificacionesrj.gov.co>
Enviado el: jueves, 03 de noviembre de 2016 08:52 a.m.
Para: alejocorman@gmail.com; universidad del magdalena
(notificacionjudicial@unimagdalena.edu.co); 'presidencia@ccsm.org.co';
'secretariajuridica@ccsm.org.co'; notificacionesjudiciales@minjusticia.gov.co;
procuraduria (procjudadm155@procuraduria.gov.co); procuraduria43@gmail.com;
marianorumbo@gmail.com
Asunto: NOTIFICACION
Datos adjuntos: N Y R 2014-00241 OBRESAN - SUSPENDE A.I..pdf

Importancia: Alta

EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR ESTE DESPACHO LE NOTIFICO A TRAVES DE ESTE MENSAJE DE DATOS LA PROVIDENCIA DE 01 DE NOVIEMBRE DE 2016 EN LA CUAL SE DISPUSO SUSPENDER LA AUDIENCIA INICIAL QUE ESTABA PROGRAMADA PARA EL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2016 A LAS DIEZ DE LA MAÑANA, DEBIDO AL CAMBIO DEL TITULAR DEL DESPACHO EN DONDE SE HACE NECESARIO UNA REORGANIZACION DEL CALENDARIO DE AUDIENCIAS. EN CONSECUENCIA ESTE DESPACHO PROCEDERA A REPROGRAMAR DICHA DILIGENCIA EN NUEVA FECHA Y HORA QUE SE SEÑALARA EN PROVEIDO POSTERIOR.

MIGUEL ANGEL PAEZ TOVAR
CITADOR

REPUBLICA DE COLOMBIA
*Consejo Superior
de la Judicatura*

AVISO IMPORTANTE: Esta dirección de correo electrónico tadmin03mgd@notificacionesrj.gov.co es de uso único y exclusivo de envío de notificaciones, todo mensaje que se reciba no será leído y automáticamente se eliminará de nuestros servidores, apreciado usuario si tiene alguna solicitud por favor comuníquese a la siguiente línea telefónica: 4213901 o envíenos un correo electrónico a la siguiente dirección: tadtvo03mag@cendoj.ramajudicial.gov.co

975858



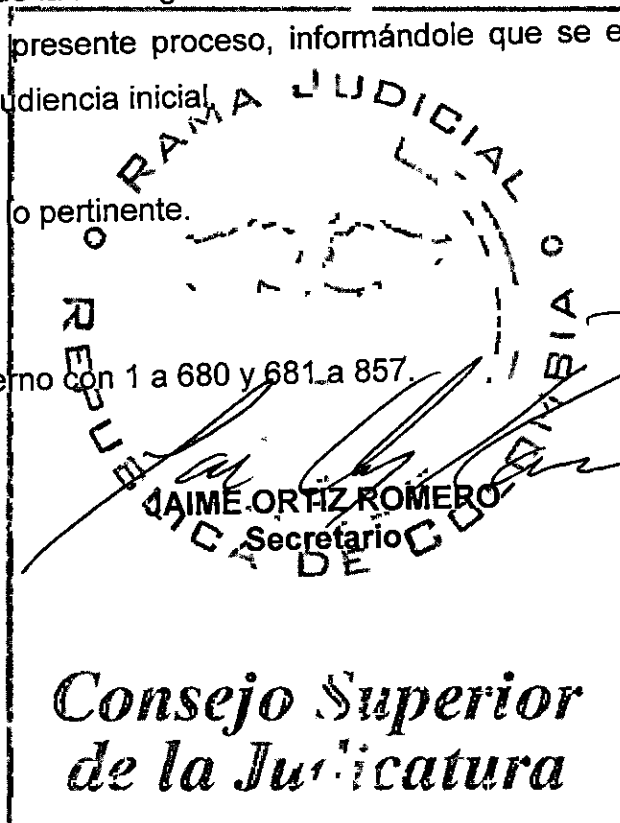
REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA

RADICACIÓN: 47-001-3333-003-2014-00241-00
DEMANDANTE: OBRESAN
DEMANDADO: NACION – MINISTERIO DE JUSTICIA Y OTROS
MEDIO DE CONTROL: REPARACION DIRECTA

Paso al Despacho de la H. Magistrado MARIBEL MENDOZA JIMENEZ, hoy 22 de noviembre 2016 el presente proceso, informándole que se encuentra pendiente para reprogramar audiencia inicial.

Sírvase de proveer lo pertinente.

Consta de 2 cuaderno con 1 a 680 y 681 a 857.



25855 1 934 818
GRABADO

Señores

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO ORAL DE MAGDALENA – SANTA MARTA

Att. H. MP. Dr. Edgar Alexi Vásquez Contreras

Magistrado del Tribunal Administrativo de Magdalena

Calle 20 N° 2A – 20, Palacio de Justicia de Santa Marta – Magdalena

E. S. D.

Radicado	47001-23-33-003-2014-00241-00
Demandante	OBRESAN – Unión Temporal de Obras Especiales de Santa Marta
Demandado	Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho; Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio y Universidad del Magdalena; y Otros
Medio de Acción	Reparación Directa
Referencia	Traslado de Objeciones a las Excepciones presentadas en las Contestaciones de la Demanda de la llamada en Garantía ACE ASEGURADORA S.A.

Luis Alejandro Corzo Mantilla, mayor de edad y vecino de esta ciudad, identificado con CC N° 88.213.988 de Cúcuta, abogado en ejercicio, portador de la Tarjeta Profesional N° 101.576 del C. S. de la J., actuando en calidad de apoderado judicial del Demandante (OBRESAN – Unión Temporal de Obras Especiales de Santa Marta), conforme a los poderes otorgados, me permito allegar ante su H. Despacho Memorial Descorriendo el Traslado a las Excepciones contenidas en las Contestaciones de la Demanda de la llamada en Garantía ACE ASEGURADORA S.A., conforme a la oportunidad (carga) procesal que me asiste, la cual está contenida en la Providencia (Auto) del primero (01) de Diciembre de 2015 y Notificado por estado el día dos (02) del mismo mes y año.

Acorde al procedimiento que señalan las normas referentes a la materia, dentro del proceso de la referencia, su H. Despacho entrara a decidir, la validez de las excepciones propuestas por el apoderado de la llamada en Garantía ACE ASEGURADORA S.A., donde plantean las excepciones de:

- 1) Caducidad de la acción
- 2) Culpa exclusiva de los demandantes
- 3) No se configuran los elementos del error judicial
- 4) Inexistencia de responsabilidad de la cámara de comercio de Santa Marta
- 5) Causa extraña y hecho de un tercero
- 6) La cámara de comercio de Santa Marta no incurrió en falla alguna en la elaboración de la lista de árbitros adscritos a esa entidad
- 7) Ruptura del nexo causal
- 8) La cámara de comercio de santa marta no está obligada a responder
- 9) No se dan los presupuestos de la responsabilidad endilgada
- 10) Carencia de prueba del supuesto perjuicio
- 11) Imposibilidad de reconocer perjuicios morales en favor de una persona jurídica
- 12) Los demandantes pretenden obtener doble indemnización por un mismo hecho
- 13) Concurrencia de culpas
- 14) Genérica (por parte del Apoderado del Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición de la Cámara de Comercio del Magdalena y la Universidad del Magdalena)

Así posteriormente, se podrá comprobar mediante la interpretación en Derecho que su H. Despacho realizara de los elementos aportados en el transcurso del proceso y los argumentos que se utilizaran para seguir dando el fundamento Jurídico ajustado a Derecho que Operadores Jurisdiccionales, como es el caso de los integrantes de la Sección Tercera Subsección C – Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, mediante providencia de fecha 25 de abril de 2012, resolvió **DECRETAR LA NULIDAD** del laudo arbitral proferido el 22 de agosto de 2011 dentro del proceso arbitral promovido por **J. P. G. & CIA S. A., GERMAN VILLANUEVA CALDERON y RICARDO LUIS CANABAL GUZMAN, INTEGRANTES DE LA UNION TEMPORAL OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA "OBRESAN"** contra la **UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA**, por haberse proferido el laudo Arbitral después del vencimiento del término fijado para la duración del Tribunal de Arbitramento; han encontrado ajustados al Ordenamiento Jurídico Colombiano, los argumentos jurídico-rationales anteriormente expuestos.

Por ende referiré inicialmente a la objeción a la estimación de la cuantía de las pretensiones realizada por el apoderado de la llamada en garantía ACE ASEGURADORA S.A., donde se puede entrever que no se justifica tal objeción, puesto que desde la admisión de la demanda, se realizó este análisis por parte del despacho competente; y por otra parte no se están alegando valores exagerados o alejados de la realidad, mucho menos que el daño no se haya probado a este ente con personería jurídica máxime cuando a sus integrantes les ocasiono una pérdida evidente y salida de dinero de su patrimonio, generándole al ente OBRESAN una afectación al buen nombre, sin mencionar los inconvenientes entre

sus asociados por la pérdida de parte de su patrimonio con los retrasos y demoras ocasionadas en el *error judicial o jurisdiccional* que se genera por el tardío laudo arbitral (proceso por el cual se consignaron importantes sumas de dinero), el cual además no se ajustó a Derecho en debida forma. De tal razonar los gastos generados en el pago de todo lo referido al proceso cursado en aquella instancia, son la principal causa del daño ocasionado, puesto que aun así se vio la imperiosa necesidad de acudir a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, resultado de esto, se termina dejando indemne y casi nulo el haber acudido al Mecanismo Alternativo de Solución de Conflictos (MASC) del Tribunal de Arbitramento. Todo esto sin contar el tiempo (perdido) y los inconvenientes para continuar labores de manera normal.

Igualmente, con el mayor respeto profesional se debe enfatizar al H. Despacho que, dichos criterios consignados por el apoderado (Gustavo Alberto Herrera Ávila) de la llamada en garantía ACE ASEGURADORA S.A., no constituyen (en su mayoría) en el argot doctrinal y jurisprudencial como excepciones (nominadas e innominadas) en sí, más allá de la ambivalente posibilidad que genera la constitucionalización del Derecho al poder presentar excepciones innominadas, es decir, esta nueva palestra de posibilidades no deber ser utilizada con el fin de crear cuanta excepción (innominada) se pretenda, sino buscar evidenciar su ajuste a Derecho y productiva aplicación, como se explicara a lo largo del presente memorial.

De las cuales se hace énfasis en los siguientes argumentos racionales que permiten dilucidar lo planteado por el apoderado de la parte Demandada (llamada en garantía ACE ASEGURADORA S.A.):

1. Respecto de la excepción N° I) *Caducidad de la acción*, se puede resaltar que en cuanto al concepto alegado no es viable utilizar dicha excepción. Puesto que se está confundiendo con el de Prescripción (más allá que ambas contemplen dentro de sí, el tiempo o con el conteo de este), la cual, como lo apuntala el apoderado de la llamada en garantía ACE ASEGURADORA S.A., "**desde ese momento comenzó a correr el termino bienal consagrado en la ley para EJERCER las acciones jurisdiccionales correspondientes**" (a folio 17 de la contestación de la demanda), es decir, que lo que pretende hacer entrever el apoderado es que la ACCIÓN, no tenía fondo real para su ejercicio (prescripción) por este medio de control, siguiendo prevalente el Derecho y debiendo ACCIONAR mediante otro instrumentos o procedimiento ante la Jurisdicción en busca de invocar el acceso a la justicia, es allí donde se puede apreciar que al mantenerse prevalente el DERECHO de mis poderdantes, el cual no ha Caducado, no existe mérito alguno para alegar tal criterio encausado en una excepción.

Al no darse la Excepción de Caducidad, y mucho menos la de Prescripción, se evidencia (esto en razón de la existencia de los presupuestos procesales¹), como lo expresa Calamandrei: "Los presupuestos procesales son condiciones que deben existir a fin de que pueda tenerse un pronunciamiento favorable o desfavorable sobre la demanda". Es decir, que el Juez Natural encargado de revisar desde el inicio del proceso jurisdiccional contemplo dichos presupuestos procesales (los cuales no se deben confundir con los requisitos de la demanda o acción) que permitirán al juez proferir una sentencia de fondo. Es por ello que nos encontramos en la instancia referida, lo cual indica que ha sido el Funcionario judicial quien en el ejercicio de la administración de justicia ha encontrado ajustado el Derecho alegado al proceso encausado, donde como resultado que no hay razón para configurar tal excepción.

De igual forma si fuese el caso de prescripción del ejercicio de la acción, el propio despacho sanador, (en función de la aplicación del Juez Tropos o rector del proceso) habría inadmitido, o en el peor de los casos rechazado la demanda (medio de acción), pero como nuevamente ese no fue el caso, siendo simple la razón, pues al accionar mis poderdantes, se encontraban dentro del término bienal tan referido por el mentado apoderado.

2. Respecto de la excepción N° II) *Culpa exclusiva de los demandantes*, se puede resaltar que en cuanto al concepto alegado no es coherente alegar tal criterio encausado en excepción porque sería tanto como pretender que mis apoderados al procurar dirimir el conflicto generado en principio a través del (MASC) Tribunal de Arbitramento, el cual debió haber proferido un Laudo arbitral ajustado a derecho y principalmente a tiempo, lo hizo con la tenue y fútil intención de generarse un propio daño con posterior perjuicio. De igual forma resulta contrario a todas luces, pretender que sean mis apoderados quienes debieron informar a los árbitros el vencimiento de los términos, máxime cuando son estos, los árbitros, quienes al igual que el juez en la Jurisdicción (y en la aplicación del principio *iura novit curia*, según el cual el juez define la norma o el régimen de responsabilidad que resulte aplicable²) debe ejercer sus funciones con el ajuste a Derecho y con el cumplimiento de los termino en la mayor medida de lo posible, para así resolver el caso en un plazo justo y razonable (como lo expresaría el maestro Jairo Parra Quijano).

¹ VON BULOW, Oscar, *Teoría De Las Excepciones Y Lo Presupuestos*, 1868.

² Consejo de Estado., Sección Tercera, Sentencia Radicado N° 05001232500019960263001 (20713), del 22 de junio de 2011. Consejero Ponente Enrique Gil Botero.

Criterio este, el cual resulta de doble filo, pues así como el apoderado de la llamada en garantía ACE ASEGURADORA S.A., asegura que mis poderdantes debieron alegar el plazo razonado, los demás integrantes del proceso, les asistía la misma carga procesal, siendo este criterio utilizado como excepción, una falacia argumentativa de ambigüedad o anfibología³, resultando contrario a lo que se ha podido apreciar en el curso del proceso, e incluso temerario por pretender endilgar cargas procesales a quienes no le asisten o en su defecto en la medida que no se es posible.

3. Respecto de la excepción N° III) *No configuración de los elementos del Error Judicial o Jurisdiccional*, se puede referir que en el presente caso Si se configuró un error judicial o jurisdiccional porque se profirió una decisión tardía (del laudo arbitral) la cual fue revocada posteriormente por el Consejo de Estado después de su ejecutoriedad e interposición de recursos ordinarios. Por ello las conductas (de los árbitros del tribunal de arbitramento) son constitutivas de un funcionamiento anormal de la administración de justicia por parte de dichos particulares en tan mentada función.

Tal como lo expresa el artículo 66 y ss de la Ley 270 de 1996⁴ al establecer que cuando el daño proviene de un error judicial, configura el título de imputación jurídica de la responsabilidad del Estado. Dentro de ese concepto están comprendidas todas las acciones u omisiones que se presenten con ocasión del ejercicio de la función de impartir justicia en que incurran no sólo los funcionarios sino también los particulares investidos de facultades jurisdiccionales (como es el caso que nos ocupa), los empleados judiciales, los agentes y los auxiliares judiciales. Así mismo, el comportamiento de los árbitros fue más que tardío, ilegal e incorpora los ingredientes subjetivos exigidos por la Constitución en el Artículo 90 y lo implícito que comporta la Ley Estatutaria de Administración de Justicia 270 de 1998.

4. Respecto de las excepciones de:
- A. N° IV) *inexistencia de la responsabilidad de la Cámara de Comercio de Santa Marta,*
 - B. N° VI) *La Cámara de Comercio no incurrió en falla alguna en la elaboración de las listas de árbitros adscritos a esa entidad; y*
 - C. N° VIII) *La Cámara de Comercio de Santa Marta no está obligada a responder*

Se pueden resolver de forma conexa de la siguiente manera:

La Responsabilidad y Obligación de dicho ente particular en función de administrar justicia (así como otras facultades y funciones), sin obviar que el hecho de referirse a la ley que regula el arbitramento (por parte del apoderado el cual solo se limita a enunciarla mas no especificarla, por temor a lo claro y textual de su contenido), la cual es **Ley 1563 del 2012 "Por medio de la cual se expide el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional y se dictan otras disposiciones"**, en conexidad con la **LEY 640 DE 2001 "Por medio de la cual se modifican normas relativas a la conciliación y se dictan otras disposiciones"**.

En cuanto a la Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena y su Centro de Arbitraje, Amigable Composición y Conciliación en asocio con la Universidad del Magdalena, sigue siendo contrario a la Constitución Política Colombiana de 1991, pretender que sus funciones referentes a los MASC (Mecanismos Alternativos en la Solución de Conflictos) no comporten RESPONSABILIDAD y OBLIGACIÓN alguna; resulta por fuera de lo expresado en el Art. 116 de la Constitución Política de 1991, el cual expresa:

"La Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, los Tribunales y los Jueces, administran Justicia. También lo hace la Justicia Penal Militar.

Excepcionalmente la ley podrá atribuir función jurisdiccional en materias precisas a determinadas autoridades administrativas. Sin embargo no les será permitido adelantar la instrucción de sumarios ni juzgar delitos.

Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de jurados en las causas criminales, conciliadores o en la de árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad, en los términos que determine la ley."

³ *Introducción a la lógica*; Irving M. Copi; Editorial Universitaria de Buenos Aires, 1962.

⁴ Congreso de la Republica de Colombia. Secretaria del Senado. Ley 270 de 1996. (mayo 13). Diario Oficial No. 42.787 de 16 de mayo de 1996. *Por medio de la cual se aprueba el Convenio entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República del Perú sobre promoción y protección recíproca de inversiones suscrito en Lima el 26 de abril de 1994.*

Siguiendo con la Teoría de la Administración Pública, el desarrollo de la Función Pública y la teoría del Sistema de Responsabilidad del Estado Avalada y reafirmada en Sendas Providencias del Consejo de Estado entre otras Altas Cortes Colombianas, entendido así, las Cámaras de Comercio ejercen FUNCIONES PÚBLICAS y Función Administrativa desde el punto de vista de la DESCENTRALIZACIÓN POR SERVICIOS de la cual hacen parte las Cámaras de Comercio, las cuales son PARTICULARES en ejercicio de Funciones propias del Estado, y reafirmado con lo subrayado referente al Art. 116 de la Constitución Política de 1991.

Incluso grandes Doctrinantes de la talla del profesor **Eduardo García de Enterría**, ha sido reseñado en múltiples sentencias desde 1991, incluso en épocas más recientes, dejando claro que la dicha Teoría de la Responsabilidad del Estado se centra "en el perjuicio provocado a una persona que no tiene el deber jurídico de soportarlo". (...)

Y la "Imputabilidad es la atribución jurídica que se le hace a la entidad pública del daño antijurídico padecido y por el que, por lo tanto, en principio estaría en la obligación de responder", bajo cualquiera de los títulos de imputación reconocidos en los regímenes de responsabilidad aplicados en el Ordenamiento Jurídico Colombiano, esto es, del subjetivo (falla en el servicio o error jurisdiccional) y del objetivo (riesgo excepcional y daño especial).

Por las ya enunciadas razones, no se puede permitir que dicha función jurisdiccional temporal o transitoria en cabeza de los Árbitros (y/o Conciliadores y Amigables Componedores) de atribución Constitucional, sea desvirtuada por norma inferior a la Constitución Política de 1991, como lo alega el apoderado de dicha entidad llamada en garantía, siendo que el Art. 122 del Decreto 1818 de 1998, que ha sido derogado por la Ley 1563 de 2012, la cual contiene el actual Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional aplicado en Colombia, el cual define la responsabilidad tanto de los Árbitros, como de los centros de Arbitraje por ser encargados de ser el primer filtro de control y vigilancia, más allá de ser elegidos por las partes como la actual norma lo indica, sin obviar que el Ministerio de Justicia y del Derecho sigue en cabeza del ejercicio de la función de Control y vigilancia ya antes desarrollada en las teorías del derecho.

5. Respecto de la excepción N° V) *Causa extraña y hecho de un tercero*, se desvirtuaran de la siguiente manera:

Causa extraña, según el régimen de responsabilidad del Estado y acorde a lo expresado por el Consejo de Estado, dicho concepto se refiere a la fuerza mayor, culpa exclusiva de la víctima o hecho de un tercero, como medios para exonerarse de responsabilidad por parte de un Ente Estatal o como en el caso que nos concierne (Cámara de Comercio de Santa Marta y la llamada en Garantía ACE ASEGURADORA S.A.), un Particular en Ejercicio de funciones Jurisdiccionales.

En relación con todas ellas, el Consejo de Estado en conocidas, públicas y estudiadas providencias⁵ ha delimitado sus tres elementos cuya concurrencia tradicionalmente se ha señalado como necesaria para que sea procedente admitir su configuración: *i) su irresistibilidad, ii) su imprevisibilidad y iii) su exterioridad respecto del demandado*.

De tal razonar, se puede apreciar que la Cámara de Comercio (e incluso la llamada en garantía) no pueden probar bajo ningún planteamiento o criterio, su irresistibilidad, puesto que este hecho, es decir, el retraso injustificado e ilegal en la emisión de un fallo o laudo arbitral, se podía resistir y evitar tal error. Segundo, en cuanto a su imprevisibilidad era más que obvio el deber de quien está en Funciones de Administración de Justicia, más allá de ser o no un Particular con dicha facultad. Donde no se vislumbra razón alguna para creer que existió o existe hecho imprevisible que impidiera el buen funcionamiento del Tribunal de Arbitramento; tercero, siendo la Cámara de Comercio de Santa Marta uno de los demandados, este no puede exteriorizarse respecto de sí mismo o de la llamada en garantía, debiendo ser alguien externo al proceso (un tercero) el cual solo sería participe (por un corto periodo de tiempo) al comprobar su accionar dañino, hecho que aún sigue incólume y no ha sido probado por el apoderado de la llamada en garantía ACE ASEGURADORA SA.

6. Respecto de la excepción N° VII) *Ruptura del Nexo Causal*, no es coherente dicha excepción y se mantiene en firme dicho NEXO CAUSAL (como tercer elemento de la teoría de la responsabilidad del Estado) debido a la Teoría de la Administración Pública y al desarrollo de la Función pública en cabeza del Gobierno Nacional, que para el caso inicia desde la Presidencia de la República, la cual mediante los lineamientos Constitucionales ha DESCONCENTRADO (Ley 489 de 1998 y Art. 189 # 15 y 16) sus funciones en los Ministerios (de Justicia y del Derecho) para ejercer el Control y la

⁵ Consejo De Estado. Sala De Lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Bogotá D.C., veintidós (23) de junio dos mil diez (2010). Consejera Ponente: Dr. Mauricio Fajardo Gómez. No. Interno: 18.800. Reparación Directa.

Av. 5 N° 9-58 Edificio Mutuo Auxilio, Oficina 305, Teléfono 5718267

Celular 3164668894, Email: alelocorman@gmail.com

Cúcuta - Colombia

Vigilancia sobre los Centros de Arbitraje acorde a la Ley 1563 de 2012 "Por medio de la cual se expide el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional y se dictan otras disposiciones que a este le corresponde". El cual esta conexo a la Cámara de Comercio de Santa Marta. Pues es esta quien se encarga de velar por el cumplimiento de la renovación de registros y verificación de requisitos o calidades que deben cumplir las personas (Abogados) que pretender ejercer como Árbitros y a su vez es el Ministerio de Justicia y del Derecho verificar su cumplido reporte legal.

7. Respecto de la excepción N° IX) *No se dan los presupuestos de la responsabilidad endilgada*, nuevamente el apoderado de la llamada en garantía se limita a nombrar o enunciar los presupuestos de la responsabilidad; los cuales si configuran acorde a lo expuesto en la Constitución Política de 1991 con la llamada "constitucionalización"⁶ de la responsabilidad del Estado y se erigió como garantía de los derechos e intereses de los administrados y de su patrimonio, sin distinguir su condición, situación e interés.

En relación con la naturaleza del daño antijurídico, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sostenido reiteradamente que: *"ha de corresponder al juez determinar si el daño va más allá de lo que, normalmente y sin compensación alguna, debe soportar una persona por el hecho de vivir en una comunidad jurídicamente organizada y comportarse como un sujeto solidario"*⁷. En este sentido se ha señalado que "en cada caso concreto deberá establecerse si el daño sufrido es de tal entidad que el afectado no está en la obligación de soportarlo, y resulta, en consecuencia, antijurídico"⁸. De igual forma este daño debe tener fondo para ser imputado al Estado (en este caso a la Cámara de Comercio por ser un particular en ejercicio de funciones propias del Estado, como lo es administración de justicia), así, se erige el tercer elemento, el cual es el nexo causal, cuyo concepto permite encausar el daño antijurídico imputado al Ente Estatal, reafirmando su responsabilidad.

8. Respecto de la excepción N° X) *Carencia de prueba del supuesto perjuicio*, dicha excepción flaquea *per se*, por la omisión de lo estructurado en los acápites de cuantía, pretensiones y principalmente el de pruebas encausadas en el Medio de Control (Demanda) de Reparación Directa, donde no solo se evidencia la constitución de una persona jurídica a la cual se le afecto el patrimonio de sus integrantes, personas naturales, si no que permite esquematizar y trazar una línea de tiempo contenida en 60 puntos referidos a las pruebas generadas a lo largo y dilatorio del proceso desarrollado en el Tribunal de Arbitramento. Por ende es el H. Tribunal administrativo de Santa Marta a través de los Magistrados que utilizaran entre otros medios de valoración probatoria, el *Arbitrio Iudicis* para determinar el valor probatorio de cada elemento allegado al proceso.
9. Respecto de la excepción N° XI) *Imposibilidad de reconocer perjuicios morales en favor de una persona jurídica*, es bien sabido que por regla general no se suele reconocer un perjuicio moral a un persona jurídica, es bien sabido que por regla general no se suele reconocer un perjuicio moral a un persona jurídica, sin embargo, la posición doctrinal propuesta por el profesor Adriano de Cupis⁹, quien en su obra "El Daño", se refiere sobre el particular al distinguir el daño privado en patrimonial y no patrimonial; su desarrollo se divide en dos zonas que cubren, en su conjunto, el íntegro ámbito del daño privado; y los sufrimientos morales, las sensaciones dolorosas, por lo tanto no envuelven todos los daños que no son perjuicios patrimoniales, ya que, por ejemplo, la disminución del prestigio y de la reputación pública, constituyen un daño no patrimonial independientemente del dolor o amargura del sujeto que la sufre. Por lo tanto, si se quiere dar a los daños no patrimoniales una noción lógica y completa, no puede limitarse al campo de los sufrimientos físicos o morales, los cuales deberían integrarse de forma que puedan complementar todos los daños que no se comprenden en el otro grupo, o sea, en el de los daños patrimoniales.

Sin soslayar dichas posiciones, la reclamación por daño moral que se hace en el petitum de la demanda, concierne principalmente al daño moral padecido por las personas naturales integrantes y principales afectados con el daño a la persona jurídica OBRESAN, la cual se fundó con el fin económico y lucrativo, comportando en ello la necesidad de unión de patrimonios con el fin de ejercer y laborar a través de dicho organismo de carácter privado. Finalmente no se debe pretender que la reparación solicitada sea en si para un ente con personería jurídica, sino para los

⁶ "El Estado de Derecho se funda en dos grandes axiomas: El principio de legalidad y la responsabilidad patrimonial del Estado. La garantía de los derechos y libertades de los ciudadanos no se preserva solamente con la exigencia a las autoridades públicas que en sus actuaciones se sujeten a la ley sino que también es esencial que si el Estado en ejercicio de sus poderes de intervención causa un daño antijurídico o lesión lo repare íntegramente". Corte Constitucional, sentencia C-832 de 2001.

⁷ Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia de 4 de diciembre de 2006. C.P. Mauricio Fajardo. Exp. 13168.

⁸ Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia de 27 de septiembre de 2000. C.P. Alir Eduardo Hernández Enríquez. Exp. 11601.

⁹ El Daño y la reparación moral. Adriano de Cupis. 1975. 3ª edición.

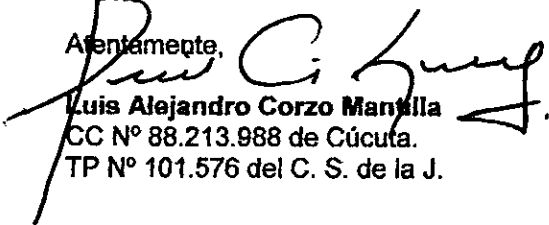
Luis Alejandro Corzo Mantilla
Abogado.

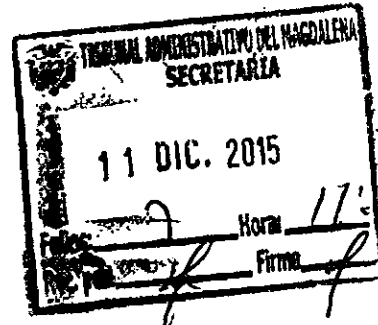
824
7 940

De esta forma descorro el traslado de las Excepciones presentadas por el apoderado de la parte llamada en Garantía ACE ASEGURADORA S.A., integrante de la parte demandada, la cuales están contenidas en la Contestación de la Demanda, y respetuosamente reitero a su Despacho que a dichos criterios no le asiste el sustento jurídico real para su reconocimiento, acorde a la revisión de los actos administrativos trasgresores del Ordenamiento Jurídico Colombianos y de los Derechos de mi poderdante.

Agradezco su vocación de servicio en la administración de justicia.

Atentamente,


Luis Alejandro Corzo Mantilla
CC N° 88.213.988 de Cúcuta.
TP N° 101.576 del C. S. de la J.



Señores
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO ORAL DE MAGDALENA – SANTA MARTA
Att. H. MP. Dr. Edgar Alexi Vásquez Contreras
Magistrado del Tribunal Administrativo de Magdalena
Calle 20 N° 2A – 20, Palacio de Justicia de Santa Marta – Magdalena
E. S. D.

GRABADO

Radicado	47001-23-33-003-2014-00241-00
Demandante	OBRESAN – Unión Temporal de Obras Especiales de Santa Marta
Demandado	Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho; Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio y Universidad del Magdalena; y Otros
Medio de Acción	Reparación Directa
Referencia	Traslado de Objeciones a las Excepciones presentadas en las Contestaciones de la Demanda de la <i>llamada en Garantía ACE ASEGURADORA S.A.</i>

Luis Alejandro Corzo Mantilla, mayor de edad y vecino de esta ciudad, identificado con CC N° 88.213.988 de Cúcuta, abogado en ejercicio, portador de la Tarjeta Profesional N° 101.576 del C. S. de la J., actuando en calidad de apoderado judicial del Demandante (**OBRESAN – Unión Temporal de Obras Especiales de Santa Marta**), conforme a los poderes otorgados, me permito allegar ante su H. Despacho Memorial Descorriendo el Traslado a las Excepciones contenidas en las Contestaciones de la Demanda de la llamada en Garantía ACE ASEGURADORA S.A., conforme a la oportunidad (carga) procesal que me asiste, la cual está contenida en la Providencia (Auto) del primero (01) de Diciembre de 2015 y Notificado por estado el día dos (02) del mismo mes y año.

Acorde al procedimiento que señalan las normas referentes a la materia, dentro del proceso de la referencia, su H. Despacho entrara a decidir, la validez de las excepciones propuestas por el apoderado de la llamada en Garantía ACE ASEGURADORA S.A., donde plantean las excepciones de:

- 1) Caducidad de la acción
- 2) Culpa exclusiva de los demandantes
- 3) No se configuran los elementos del error judicial
- 4) Inexistencia de responsabilidad de la cámara de comercio de Santa Marta
- 5) Causa extraña y hecho de un tercero
- 6) La cámara de comercio de Santa Marta no incurrió en falla alguna en la elaboración de la lista de árbitros adscritos a esa entidad
- 7) Ruptura del nexo causal
- 8) La cámara de comercio de Santa Marta no está obligada a responder
- 9) No se dan los presupuestos de la responsabilidad endilgada
- 10) Carencia de prueba del supuesto perjuicio
- 11) Imposibilidad de reconocer perjuicios morales en favor de una persona jurídica
- 12) Los demandantes pretenden obtener doble indemnización por un mismo hecho
- 13) Concurrencia de culpas
- 14) Genérica (por parte del Apoderado del Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición de la Cámara de Comercio del Magdalena y la Universidad del Magdalena)

Así posteriormente, se podrá comprobar mediante la interpretación en Derecho que su H. Despacho realizara de los elementos aportados en el transcurso del proceso y los argumentos que se utilizaran para seguir dando el fundamento Jurídico ajustado a Derecho que Operadores Jurisdiccionales, como es el caso de los integrantes de la Sección Tercera Subsección C – Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, mediante providencia de fecha 25 de abril de 2012, resolvió **DECRETAR LA NULIDAD** del laudo arbitral proferido el 22 de agosto de 2011 dentro del proceso arbitral promovido por **J. P. G. & CIA S. A., GERMAN VILLANUEVA CALDERON y RICARDO LUIS CANABAL GUZMAN, INTEGRANTES DE LA UNION TEMPORAL OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA "OBRESAN"** contra la **UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA**, por haberse proferido el laudo Arbitral después del vencimiento del término fijado para la duración del Tribunal de Arbitramento; han encontrado ajustados al Ordenamiento Jurídico Colombiano, los argumentos jurídico-rationales anteriormente expuestos.

Por ende referiré inicialmente a la objeción a la estimación de la cuantía de las pretensiones realizada por el apoderado de la llamada en garantía ACE ASEGURADORA S.A., donde se puede entrever que no se justifica tal objeción, puesto que desde la admisión de la demanda, se realizó este análisis por parte del despacho competente; y por otra parte no se están alegando valores exagerados o alejados de la realidad, mucho menos que el daño no se haya probado a este ente con personería jurídica máxime cuando a sus integrantes les ocasiono una perdida evidente y salida de dinero de su patrimonio, generándole al ente OBRESAN una afectación al buen nombre, sin mencionar los inconvenientes entre

sus asociados por la pérdida de parte de su patrimonio con los retrasos y demoras ocasionadas en el *error judicial o jurisdiccional* que se genera por el tardío laudo arbitral (proceso por el cual se consignaron importantes sumas de dinero), el cual además no se ajustó a Derecho en debida forma. De tal razonar los gastos generados en el pago de todo lo referido al proceso cursado en aquella instancia, son la principal causa del daño ocasionado, puesto que aun así se vio la imperiosa necesidad de acudir a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, resultado de esto, se termina dejando indemne y casi nulo el haber acudido al Mecanismo Alternativo de Solución de Conflictos (MASC) del Tribunal de Arbitramento. Todo esto sin contar el tiempo (perdido) y los inconvenientes para continuar labores de manera normal.

Igualmente, con el mayor respeto profesional se debe enfatizar al H. Despacho que, dichos criterios consignados por el apoderado (Gustavo Alberto Herrera Ávila) de la llamada en garantía ACE ASEGURADORA S.A., no constituyen (en su mayoría) en el argot doctrinal y jurisprudencial como excepciones (nominadas e innominadas) en sí, más allá de la ambivalente posibilidad que genera la constitucionalización del Derecho al poder presentar excepciones innominadas, es decir, esta nueva palestra de posibilidades no deber ser utilizada con el fin de crear cuanta excepción (innominada) se pretenda, sino buscar evidenciar su ajuste a Derecho y productiva aplicación, como se explicara a lo largo del presente memorial.

De las cuales se hace énfasis en los siguientes argumentos racionales que permiten dilucidar lo planteado por el apoderado de la parte Demandada (llamada en garantía ACE ASEGURADORA S.A.):

1. Respecto de la excepción N° I) *Caducidad de la acción*, se puede resaltar que en cuanto al concepto alegado no es viable utilizar dicha excepción. Puesto que se está confundiendo con el de Prescripción (más allá que ambas contemplen dentro de sí, el tiempo o con el conteo de este), la cual, como lo apuntala el apoderado de la llamada en garantía ACE ASEGURADORA S.A., "**desde ese momento comenzó a correr el termino bienal consagrado en la ley para EJERCER las acciones jurisdiccionales correspondientes**" (a folio 17 de la contestación de la demanda), es decir, que lo que pretende hacer entrever el apoderado es que la ACCIÓN, no tenía fundo real para su ejercicio (prescripción) por este medio de control, siguiendo prevalente el Derecho y debiendo ACCIONAR mediante otro instrumentos o procedimiento ante la Jurisdicción en busca de invocar el acceso a la justicia, es allí donde se puede apreciar que al mantenerse prevalente el DERECHO de mis poderdantes, el cual no ha Caducado, no existe mérito alguno para alegar tal criterio encausado en una excepción.

Al no darse la Excepción de Caducidad, y mucho menos la de Prescripción, se evidencia (esto en razón de la existencia de los presupuestos procesales¹), como lo expresa Calamandrei: "*Los presupuestos procesales son condiciones que deben existir a fin de que pueda tenerse un pronunciamiento favorable o desfavorable sobre la demanda*". Es decir, que el Juez Natural encargado de revisar desde el inicio del proceso jurisdiccional contemplo dichos presupuestos procesales (los cuales no se deben confundir con los requisitos de la demanda o acción) que permitirán al juez proferir una sentencia de fondo. Es por ello que nos encontramos en la instancia referida, lo cual indica que ha sido el Funcionario judicial quien en el ejercicio de la administración de justicia ha encontrado ajustado el Derecho alegado al proceso encausado, donde como resultado que no hay razón para configurar tal excepción.

De igual forma si fuese el caso de prescripción del ejercicio de la acción, el propio despacho sanador, (en función de la aplicación del Juez Tropos o rector del proceso) habría inadmitido, o en el peor de los casos rechazado la demanda (medio de acción), pero como nuevamente ese no fue el caso, siendo simple la razón, pues al accionar mis poderdantes, se encontraban dentro del término bienal tan referido por el mentado apoderado.

2. Respecto de la excepción N° II) *Culpa exclusiva de los demandantes*, se puede resaltar que en cuanto al concepto alegado no es coherente alegar tal criterio encausado en excepción porque sería tanto como pretender que mis apoderados al procurar dirimir el conflicto generado en principio a través del (MASC) Tribunal de Arbitramento, el cual debió haber proferido un Laudo arbitral ajustado a derecho y principalmente a tiempo, lo hizo con la tenue y fútil intención de generarse un propio daño con posterior perjuicio. De igual forma resulta contrario a todas luces, pretender que sean mis apoderados quienes debieron informar a los árbitros el vencimiento de los términos, máxime cuando son estos, los árbitros, quienes al igual que el juez en la Jurisdicción (y en la aplicación del principio *iura novit curia*, según el cual el juez define la norma o el régimen de responsabilidad que resulte aplicable²) debe ejercer sus funciones con el ajuste a Derecho y con el cumplimiento de los termino en la mayor medida de lo posible, para así resolver el caso en un plazo justo y razonable (como lo expresaría el maestro Jairo Parra Quijano).

¹ VON BULOW, Oscar, *Teoría De Las Excepciones Y Lo Presupuestos*, 1868.

² Consejo de Estado., Sección Tercera, Sentencia Radicado N° 05001232500019960263001 (20713), del 22 de junio de 2011. Consejero Ponente Enrique Gil Botero.

Criterio este, el cual resulta de doble filo, pues así como el apoderado de la llamada en garantía ACE ASEGURADORA S.A., asegura que mis poderdantes debieron alegar el plazo razonado, los demás integrantes del proceso, les asistía la misma carga procesal, siendo este criterio utilizado como excepción, una falacia argumentativa de ambigüedad o anfibología³, resultando contrario a lo que se ha podido apreciar en el curso del proceso, e incluso temerario por pretender endilgar cargas procesales a quienes no le asisten o en su defecto en la medida que no se es posible.

3. Respecto de la excepción N° III) *No configuración de los elementos del Error Judicial o Jurisdiccional*, se puede referir que en el presente caso Si se configuró un error judicial o jurisdiccional porque se profirió una decisión tardía (del laudo arbitral) la cual fue revocada posteriormente por el Consejo de Estado después de su ejecutoriedad e interposición de recursos ordinarios. Por ello las conductas (de los árbitros del tribunal de arbitramento) son constitutivas de un funcionamiento anormal de la administración de justicia por parte de dichos particulares en tan mentada función.

Tal como lo expresa el artículo 66 y ss de la Ley 270 de 1996⁴ al establecer que cuando el daño proviene de un error judicial, configura el título de imputación jurídica de la responsabilidad del Estado. Dentro de ese concepto están comprendidas todas las acciones u omisiones que se presenten con ocasión del ejercicio de la función de impartir justicia en que incurran no sólo los funcionarios sino también los particulares investidos de facultades jurisdiccionales (como es el caso que nos ocupa), los empleados judiciales, los agentes y los auxiliares judiciales. Así mismo, el comportamiento de los árbitros fue más que tardío, ilegal e incorpora los ingredientes subjetivos exigidos por la Constitución en el Artículo 90 y lo implícito que comporta la Ley Estatutaria de Administración de Justicia 270 de 1998.

4. Respecto de las excepciones de:
- A. N° IV) *inexistencia de la responsabilidad de la Cámara de Comercio de Santa Marta,*
 - B. N° VI) *La Cámara de Comercio no incurrió en falla alguna en la elaboración de las listas de árbitros adscritos a esa entidad; y*
 - C. N° VIII) *La Cámara de Comercio de Santa Marta no está obligada a responder*

Se pueden resolver de forma conexa de la siguiente manera:

La Responsabilidad y Obligación de dicho ente particular en función de administrar justicia (así como otras facultades y funciones), sin obviar que el hecho de referirse a la ley que regula el arbitramento (por parte del apoderado el cual solo se limita a enunciarla mas no especificarla, por temor a lo claro y textual de su contenido), la cual es **Ley 1563 del 2012 "Por medio de la cual se expide el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional y se dictan otras disposiciones"**, en conexidad con la **LEY 640 DE 2001 "Por medio de la cual se modifican normas relativas a la conciliación y se dictan otras disposiciones"**.

En cuanto a la Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena y su Centro de Arbitraje, Amigable Composición y Conciliación en asocio con la Universidad del Magdalena, sigue siendo contrario a la Constitución Política Colombiana de 1991, pretender que sus funciones referentes a los MASC (Mecanismos Alternativos en la Solución de Conflictos) no comporten RESPONSABILIDAD y OBLIGACIÓN alguna; resulta por fuera de lo expresado en el Art. 116 de la Constitución Política de 1991, el cual expresa:

"La Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, los Tribunales y los Jueces, administran Justicia. También lo hace la Justicia Penal Militar.

Excepcionalmente la ley podrá atribuir función jurisdiccional en materias precisas a determinadas autoridades administrativas. Sin embargo no les será permitido adelantar la instrucción de sumarios ni juzgar delitos.

Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de jurados en las causas criminales, conciliadores o en la de árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad, en los términos que determine la ley."

³ *Introducción a la lógica*; Irving M. Copi; Editorial Universitaria de Buenos Aires, 1962.

⁴ Congreso de la Republica de Colombia. Secretaria del Senado. Ley 270 de 1996. (Mayo 13). Diario Oficial No. 42.787 de 16 de mayo de 1996. *Por medio de la cual se aprueba el Convenio entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República del Perú sobre promoción y protección recíproca de inversiones suscrito en Lima el 26 de abril de 1994.*

Siguiendo con la Teoría de la Administración Pública, el desarrollo de la Función Pública y la teoría del Sistema de Responsabilidad del Estado Avalada y reafirmada en Sendas Providencias del Consejo de Estado entre otras Altas Cortes Colombianas, entendido así, las Cámaras de Comercio ejercen FUNCIONES PÚBLICAS y Función Administrativa desde el punto de vista de la DESCENTRALIZACIÓN POR SERVICIOS de la cual hacen parte las Cámaras de Comercio, las cuales son PARTICULARES en ejercicio de Funciones propias del Estado, y reafirmado con lo subrayado referente al Art. 116 de la Constitución Política de 1991.

Incluso grandes Doctrinantes de la talla del profesor **Eduardo García de Enterría**, ha sido reseñado en múltiples sentencias desde 1991, incluso en épocas más recientes, dejando claro que la dicha Teoría de la Responsabilidad del Estado se centra "en el perjuicio provocado a una persona que no tiene el deber jurídico de soportarlo". (...)

Y la "Imputabilidad es la atribución jurídica que se le hace a la entidad pública del daño antijurídico padecido y por el que, por lo tanto, en principio estaría en la obligación de responder", bajo cualquiera de los títulos de imputación reconocidos en los regímenes de responsabilidad aplicados en el Ordenamiento Jurídico Colombiano, esto es, del subjetivo (falla en el servicio o error jurisdiccional) y del objetivo (riesgo excepcional y daño especial).

Por las ya enunciadas razones, no se puede permitir que dicha función jurisdiccional temporal o transitoria en cabeza de los Árbitros (y/o Conciliadores y Amigables Componedores) de atribución Constitucional, sea desvirtuada por norma inferior a la Constitución Política de 1991, como lo alega el apoderado de dicha entidad llamada en garantía, siendo que el Art. 122 del Decreto 1818 de 1998, que ha sido derogado por la Ley 1563 de 2012, la cual contiene el actual Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional aplicado en Colombia, el cual define la responsabilidad tanto de los Árbitros, como de los centros de Arbitraje por ser encargados de ser el primer filtro de control y vigilancia, más allá de ser elegidos por las partes como la actual norma lo indica, sin obviar que el Ministerio de Justicia y del Derecho sigue en cabeza del ejercicio de la función de Control y vigilancia ya antes desarrollada en las teorías del derecho.

5. Respecto de la excepción N° V) *Causa extraña y hecho de un tercero*, se desvirtuaron de la siguiente manera:

Causa extraña, según el régimen de responsabilidad del Estado y acorde a lo expresado por el Consejo de Estado, dicho concepto se refiere a la fuerza mayor, culpa exclusiva de la víctima o hecho de un tercero, como medios para exonerarse de responsabilidad por parte de un Ente Estatal o como en el caso que nos concierne (Cámara de Comercio de Santa Marta y la llamada en Garantía ACE ASEGURADORA S.A.), un Particular en Ejercicio de funciones Jurisdiccionales.

En relación con todas ellas, el Consejo de Estado en conocidas, públicas y estudiadas providencias⁵ ha delimitado sus tres elementos cuya concurrencia tradicionalmente se ha señalado como necesaria para que sea procedente admitir su configuración: *i) su irresistibilidad, ii) su imprevisibilidad y iii) su exterioridad respecto del demandado.*

De tal razonar, se puede apreciar que la Cámara de Comercio (e incluso la llamada en garantía) no pueden probar bajo ningún planteamiento o criterio, su irresistibilidad, puesto que este hecho, es decir, el retraso injustificado e ilegal en la emisión de un fallo o laudo arbitral, se podía resistir y evitar tal error. Segundo, en cuanto a su imprevisibilidad era más que obvio el deber de quien está en Funciones de Administración de Justicia, más allá de ser o no un Particular con dicha facultad. Donde no se vislumbra razón alguna para creer que existió o existe hecho imprevisible que impidiera el buen funcionamiento del Tribunal de Arbitramento; tercero, siendo la Cámara de Comercio de Santa Marta uno de los demandados, este no puede exteriorizarse respecto de sí mismo o de la llamada en garantía, debiendo ser alguien externo al proceso (un tercero) el cual solo sería participe (por un corto periodo de tiempo) al comprobar su accionar dañino, hecho que aún sigue incólume y no ha sido probado por el apoderado de la llamada en garantía ACE ASEGURADORA SA.

6. Respecto de la excepción N° VII) *Ruptura del Nexo Causal*, no es coherente dicha excepción y se mantiene en firme dicho NEXO CAUSAL (como tercer elemento de la teoría de la responsabilidad del Estado) debido a la Teoría de la Administración Pública y al desarrollo de la Función pública en cabeza del Gobierno Nacional, que para el caso inicia desde la Presidencia de la Republica, la cual mediante los lineamientos Constitucionales ha DESCONCENTRADO (Ley 489 de 1998 y Art. 189 # 15 y 16) sus funciones en los Ministerios (de Justicia y del Derecho) para ejercer el Control y la

⁵ Consejo De Estado. Sala De Lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Bogotá D.C., veintidós (23) de junio dos mil diez (2010). Consejero Ponente: Dr. Mauricio Fajardo Gómez. No. Interno: 18.800. Reparación Directa.



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA
SECRETARIA GENERAL-SISTEMA DE ORALIDAD LEY 1437 DE 2011

INCLUSION EN LISTA TRASLADO EXCEPCIONES ART. 175 C.P.A.CA.

RAD.	Medio de Control	Demandante	Demandado	Fecha Public.	Vence	MP
2015-0051	REPARACION DIRECTA	MAGALY ESTHER LAFAURIE OJEDA	NACION-MINISTERIO DE DEFENSA-EJERCITO NACIONAL-POLICIA NACIONAL-FISCALIA GENERAL DE LA NACION	16/12/2015	13/01/2016	EVC
2014-00241	REPARACION DIRECTA	OBRESAN	NACION-MINISTERIO DE JUSTICIA Y OTROS -(Propuestas por el llamado en garantía)	16/12/2015	13/01/2016	EVC

CONSTANCIA: Hoy, dieciséis (16) de diciembre de dos mil quince (2015) a las ocho de la mañana (8:00.a.m.), se publica la presente lista en lugar visible de la secretaria de la Corporación, por el término legal de un día (1), tal como lo disponen los artículos 101 y 110 del C.G.P. El traslado de las excepciones correrá por el término de tres (3) días en concordancia con lo dispuesto en el artículo 175, del C. P.A.CA.


JAIME ORTIZ ROMERO
Secretario



GRABADO

Santa Marta, D.T.C.H., 15 de diciembre de 2015

Señores:
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA
Presente

Ref.: Acción: REPARACIÓN DIRECTA
Demandante: UNIÓN TEMPORAL DE OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA - OBRESAN
Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO, CAMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA - CENTRO DE ARBITRAJE, CONCILIACIÓN Y AMIGABLE COMPOSICION, UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA
Radicación: 2014 - 00241

CARLOS EDUARDO GAMBOA GARCÍA mayor de edad, con residencia y domicilio en la ciudad de Santa Marta, identificado con la cédula de ciudadanía N° 12.563.688 expedida en Santa Marta (Magdalena), obrando en mi calidad de Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de **LA UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA "UNIMAGDALENA"** ente universitario autónomo, público, de carácter educativo, creado mediante Ordenanza N° 05 de 1958, con Personería Jurídica reconocida mediante Resolución N° 831 del 3 de diciembre de 1974, identificada con el NIT. 891.780.111-8 y conforme se dispone en la delegación de funciones de que trata la Resolución N° 884 del 26 de septiembre de 2013 proferida por el Despacho del Rector, por medio del presente escrito, manifiesto a usted, que confiero poder especial, amplio y suficiente en cuanto a derecho se refiere a la Dra. **CLAUDIA KATIME ZUÑIGA**, igualmente mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía N° 36.724.902 de Santa Marta, portadora de la T.P. N° 143914 del C.S.J., para que en nombre del ente universitario demandado continúe con la representación del mismo y lo lleve hasta su culminación en primera y en segunda instancia.

Nuestra apoderada queda ampliamente facultada para asistir a las audiencias de conciliación, conciliar, previa decisión del Comité de Conciliación de la Universidad, transigir, desistir, interponer recursos, sustituir, reasumir y en general todas aquellas facultades contenidas en los Arts. 74 y 77 del C.G.P. y en todo lo que considere proveniente para el cumplimiento del presente mandato.

Para tal fin anexo la siguiente documentación: a) Copia autenticada del Acuerdo Superior N° 026 del 13 de noviembre de 2012 y del Acta de Posesión N° 233 del Rector Ruthber Escorcia Caballero. b) Copia autenticada de la Resolución Rectoral N° 884 de 2013. c) Copia autenticada del acta de posesión N° 082 de 2012 del Dr. Carlos Eduardo Gamboa García. d) Copia autenticada de la Resolución N° 148 del 01 de marzo de 2012 correspondiente al nombramiento del suscrito.

Sírvase reconocerle personería jurídica a nuestro apoderado en los términos concedidos.

Atentamente,

CARLOS EDUARDO GAMBOA GARCÍA
Jefe de la Oficina Asesora Jurídica

Acepto,

CLAUDIA KATIME ZUÑIGA
C.C. N° 36.724.902 de Santa Marta
T.P. N° 143914 del C.S. de la Judicatura

NOTARÍA SEGUNDA DEL CÍRCULO DE SANTA MARTA
DILIGENCIA DE PRESENTACIÓN PERSONAL
El anterior escrito fue presentado personalmente por:

GAMBOA GARCIA CARLOS EDUARDO

Identificado con: C.C. 12563688
Y Tarjeta Profesional No. ELB

Santa Marta 16/12/2015
Hora: 8:11:35 a.m.
zax9qs22zsa9pzx

ALEJANDRO FÁBIAN LÓPEZ PEÑALOZA
NOTARIO

T3WVOCJJ1E18tts



Esta autenticación puede ser verificada mediante el lector de código QR o en la página web www.unimagdalena.edu.co

autentica y la excelencia siempre lo número, periodo 2012 - 2018

Carrera 37 No. 22-08 Sector San Pedro Alejandrino
Edificio Administrativo 'Roque Morelli Zárate' 2do Piso
Santa Marta - Colombia PBX: (57-5) 421 7940 Ext. 3136-3205
juridica@unimagdalena.edu.co
www.unimagdalena.edu.co

EL Jefe de la Oficina de Registro y Contratación
P. de la J. de la Oficina de Registro y Contratación
Karine ZUATTA
C. de la J. de la Oficina de Registro y Contratación
de abogado no. 14-39419
EL SECRETARIO: *[Signature]*

9
Clavir
quien exhibió su
y tarjeta profesional
161214

198 sheng ndwscmglur L12
1 101- 15 10102012
1 ne a F





El secretario General de la Universidad del Magdalena da fe de que esta copia corresponde exactamente al original que se encuentra en los archivos de la Institución

16 SET. 2015

CONSEJO SUPERIOR

ACUERDO SUPERIOR No. 026

"Por medio del cual se nombra al Rector de la Universidad del Magdalena para el período 2012-2016"

El Consejo Superior de la Universidad, en uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas en la Ley 30 de 1992 y en el Estatuto General, Acuerdo Superior No. 012 de 2011 y,

CONSIDERANDO:

Que la autonomía universitaria consagrada en la Constitución Política de Colombia, artículo 69, y de conformidad con la Ley 30 de 1992, artículos 28 y 57, reconoce a las universidades el derecho a darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y administrativas.

Que conforme lo dispone el Estatuto General en el numeral 6 del artículo 25, es función del Consejo Superior nombrar al Rector para un período de cuatro (4) años de terna seleccionada según reglamentación expedida para tal fin.

Que mediante Acuerdo Superior No. 019 de 2012 se reglamentó la consulta de selección de terna para nombramiento del Rector y por Acuerdo Superior No. 020 de 2012 se convocó y fijó calendario de consulta para selección de terna para designación de Rector para el período 2012 - 2016, ajustado mediante Acuerdo Superior No. 025 de 2012.

Que de conformidad con lo establecido en el Acuerdo Superior No. 019 de 2012, se constituyó el Comité de Consulta, para el proceso de designación de Rector período 2012 - 2016.

Que en el proceso de consulta se postularon los siguientes aspirantes:

ASPIRANTE	CEDULA DE CIUDADANÍA
SONJA LILIANA LOZANO SOCARRAS	36.547.341
RUTHBER ANTONIO ESCORCIA CABALLERO	85.448.878
CARLOS ALBERTO GARCÍA RODRÍGUEZ	12.560.896

Que verificado el cumplimiento de requisitos de los aspirantes, el Comité de Consulta mediante Resolución No. 05 de 2012 determinó la lista oficial de candidatos, la cual quedó integrada de la siguiente manera:

CANDIDATO	CÉDULA DE CIUDADANÍA
SONJA LILIANA LOZANO SOCARRAS	36.547.341
RUTHBER ANTONIO ESCORCIA CABALLERO	85.448.878

Que mediante Resolución No. 013 de 2012 el Comité de Consulta determinó la lista de candidatos elegibles para ocupar el cargo de Rector conformada por quienes alcanzaron o superaron la votación mínima requerida del 10% del censo electoral de estudiantes y el 20% del de docentes, conforme lo señala el ARTÍCULO QUINTO del Acuerdo Superior No. 019 de 2012, así:

NOMBRE	CÉDULA DE CIUDADANÍA
RUTHBER ANTONIO CABALLERO ESCORCIA	85.448.878

Que de conformidad con el ARTICULO QUINTO del Acuerdo Superior No. 019 de 2012, "En caso de que menos de tres (3) candidatos igualen o superen los porcentajes establecidos en el presente artículo, el Consejo Superior escogerá al Rector entre estos", este órgano procede a estudiar la hoja de vida del candidato elegible a fin de designar Rector para el período 2012 - 2016.

En mérito de lo expuesto,

ACUERDA:

W. C. F. E. K.
W. C. F. E. K.

ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar a RUTHBER ANTONIO ESCORCIA CABALLERO identificado con cédula de ciudadanía No. 85.448.878 expedida en Santa Marta, como Rector de la Universidad del Magdalena para el período comprendido entre el 26 de noviembre de 2012 hasta el 25 noviembre de 2016.

ARTÍCULO SEGUNDO: El nombrado deberá tomar posesión del cargo ante el Consejo Superior de la Universidad de conformidad con el artículo 32 del Estatuto General, Acuerdo Superior No. 012 de 2011.

ARTÍCULO TERCERO: A través de la Secretaría General se comunicará lo aquí acordado al Rector designado, al Ministerio de Educación Nacional, a la Dirección de Talento Humano de la Universidad y a las demás autoridades que así lo requieran.

ARTÍCULO CUARTO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en Santa Marta D. T. C. e H., a los 13 NOV. 2012

LUIS MIGUEL COTES HABEYCH
Presidente del Consejo Superior

MERCEDES DE LA TORRE HASBUN
Secretaría General



El secretario General de la Universidad del Magdalena da fe de que esta copia corresponde exactamente al original que reposa en los archivos de la Institución

16 SET. 2015

W. W. W. W. W.
W. W. W. W. W.



958 885

El secretario General de la Universidad del Magdalena da fe de que esta copia corresponde exactamente al original que se encuentra en los archivos de la Institución

16 SET. 2015

ACTA DE POSESIÓN No. 233

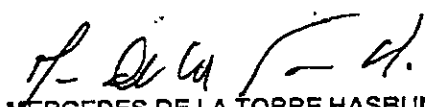
En la ciudad de Santa Marta-D.T. C. e H., en sesión del Consejo Superior de la Universidad del Magdalena, se da posesión al Doctor **RUTHBER ANTONIO ESCORCIA CABALLERO**, identificado con la cédula de ciudadanía N° 85.448.878 expedida en la ciudad de Santa Marta, en el cargo de Rector de la Universidad del Magdalena, Nivel Directivo, Código 067, Grado 25; cargo para el cual fue nombrado a través del Acuerdo Superior N° 026 del 13 de noviembre de 2012.

Para los fines legales pertinentes, el posesionado presenta los siguientes documentos: a) Formato de Hoja de Vida de la Función Pública debidamente diligenciada, con sus respectivos soportes. b) Declaración Juramentada de Bienes y Rentas y Actividad Económica Privada. c) Fotocopia de la cédula de ciudadanía. d) Antecedentes Judiciales vigente, expedido por la Policía Nacional de Colombia. e) Certificado de Antecedentes Disciplinarios vigente expedido por la Procuraduría General de la Nación. f) Certificado de Antecedentes Fiscales vigente expedido por la Contraloría General de la República. g) Fotocopia de la Libreta Militar.

Para tal efecto se toma el juramento de rigor en los términos de ley, manifestando quien se posiona bajo la gravedad de juramento desempeñar y cumplir bien y fielmente las funciones del cargo encomendado, además, de no estar incurso en causal alguna de inhabilidad general o especial, de incompatibilidad o prohibición establecida en la Constitución y en los Decretos 2400 de 1968, 1950 de 1973, Ley 4ª de 1992, Ley 734 de 2002 y demás disposiciones vigentes para el desempeño de empleo público.

Se firma la presente diligencia, por quienes en ella intervienen en la ciudad de Santa Marta, D. T. C. e H., a los veintiséis (26) días del mes de noviembre de dos mil doce (2012)


LUIS MIGUEL COTES HABEYCH
Presidente del Consejo Superior


MERCEDES DE LA TORRE HASBUN
Secretaria General


RUTHBER A. ESCORCIA CABALLERO
Posesionado

RECEIVED
F. B. I.



El secretario General de la Universidad del Magdalena da fe de que esta copia corresponde exactamente al original que reposa en los archivos de la institución



16 SET 2015

DESPACHO DEL RECTOR

RESOLUCIÓN No. 884

"Por la cual se delegan unas funciones"

El Rector de la Universidad en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias, en especial la señalada en numeral 22 del Artículo 34 del Estatuto General y,

CONSIDERANDO:

Que el Artículo 9 del Estatuto General, Acuerdo Superior N° 012 de 2011, establece la descentralización y gestión administrativa como principios orientadores de la Universidad en el cumplimiento de sus funciones.

Que el numeral 22 del Artículo 34 del Estatuto General concede la facultad al Rector para delegar las funciones de su competencia en los términos legales y estatutarios.

Que el Acuerdo Superior N° 017 de 2011 definió la estructura interna de la Universidad y determinó las competencias de las diferentes dependencias.

Que es necesario dotar de competencia legal a personal directivo y asesor para que tomen decisiones oportunas, pertinentes y eficientes en la gestión de los asuntos y competencias a cargo de la Universidad.

En mérito de lo anterior,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Comisión de Servicios en el país.- Delegar, en los siguientes funcionarios, las autorizaciones de las comisiones de servicio en el país:

Vicerrector Administrativo.- Servidores públicos de su dependencia y de aquellos que laboren en las dependencias adscritas a la Vicerrectoría Administrativa.

Vicerrectores Académico, de Investigación y, de Extensión y Proyección Social.- Servidores públicos de su dependencia, los que laboren en las dependencias adscritas a la respectiva vicerrectoría y la de aquellos que participen en proyectos y convenios de la Vicerrectoría correspondiente.

Director IDEA.- Servidores públicos de su dependencia y de aquellos que laboren en las dependencias adscritas al IDEA.

ARTÍCULO SEGUNDO: Comisión de Servicios en el exterior.- Delegar las autorizaciones de las comisiones de servicio en el exterior, en los mismos términos del artículo anterior, en los siguientes casos:

- a. Cuando no den lugar al pago de viáticos y gastos de transporte.
- b. Cuando el pago de viáticos y gastos de transporte sea con cargo a recursos de un proyecto o convenio. Recursos propios de la Vicerrectoría, proyectos del Plan de Acción donde figure como líder.

ARTÍCULO TERCERO: Oportunidad de la solicitud.- Las comisiones de servicio al exterior deberán tramitarse con un mínimo de quince (15) días hábiles anteriores a la fecha del viaje y, las que se cumplan en el país con un tiempo no inferior a cinco (5) días hábiles anteriores a la fecha del viaje.

ARTÍCULO CUARTO: Delegación de funciones en el Vicerrector Académico.- Delegar en el Vicerrector Académico las siguientes funciones:



1. Celebrar contratos de contraprestación de servicios con los docentes que sean beneficiarios de comisión de estudios, suscribir los documentos relacionados con prórrogas, suspensiones y demás novedades relacionadas con la comisión, aprobar garantías y demás formalidades exigidas por las normas legales y los reglamentos de la Universidad.
2. Expedir actos administrativos requeridos para el desarrollo de exámenes de admisión, suficiencia en inglés y convocatorias de programas de desarrollo estudiantil y profesoral.
3. Suscribir procedimientos, guías, instructivos y demás documentos relacionados con los procedimientos del proceso académico, en el marco del Sistema de Gestión Integral de la Calidad 'COGUI'.
4. Suscribir pólizas de responsabilidad civil médica y riesgos biológicos.
5. Presentar y suscribir propuestas y ofertas de servicios en el país que, de acuerdo con sus funciones, sean de su competencia, así como las respectivas pólizas y demás documentos requeridos.
6. Suscribir los convenios de relación docencia - servicio.

ARTÍCULO QUINTO: Delegación de funciones en el Vicerrector de Investigación.- Delegar en el Vicerrector de Investigación las siguientes funciones:

1. Expedir los procedimientos, guías, instructivos y demás documentos relacionados con los procedimientos del proceso de investigación, en el marco del Sistema de Gestión Integral de la Calidad 'COGUI'.
2. Presentar y suscribir propuestas y ofertas de servicios en el país que, de acuerdo con sus funciones, sean de su competencia, así como las respectivas pólizas y demás documentos requeridos.

ARTÍCULO SEXTO: Delegación de funciones en el Vicerrector de Extensión y Proyección Social.- Delegar en el Vicerrector de Extensión y Proyección Social las siguientes funciones:

1. Suscribir procedimientos, guías, instructivos y demás documentos relacionados con los procedimientos del proceso de extensión y proyección social, en el marco del Sistema de Gestión Integral de la Calidad 'COGUI'.
2. Presentar y suscribir propuestas y ofertas de servicios en el país que, de acuerdo con sus funciones, sean de su competencia, así como las respectivas pólizas y demás documentos requeridos.
3. Suscribir convenios de prácticas profesionales.
4. Convenios de prácticas extendidas.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Delegación de funciones en el Vicerrector Administrativo.- Delegase en el Vicerrector Administrativo las siguientes funciones:

1. Expedir procedimientos, guías, instructivos y demás documentos relacionados con los procedimientos de los procesos administrativo y financiero, en el marco del Sistema de Gestión Integral de la Calidad 'COGUI'.
2. Tramitar y suscribir documentos para apertura de cuentas bancarias asociados a proyectos y convenios que así lo exijan.
3. Suscribir informes de ejecución presupuestal de ingresos y egresos para presentar a los organismos de control que así lo requiera.
4. Suscribir autorizaciones en el trámite de nacionalización de bienes importados por la Universidad.
5. Suscribir contratos de arrendamiento, previa autorización Rector.
6. Solicitar y tramitar la actualización y expedición del RUT y RUP.

ARTÍCULO OCTAVO: Delegación de funciones en el Director Administrativo.- Delegase en Director Administrativo las siguientes funciones:

1. Suscribir contratos de servicios públicos y privados previo aval del Rector. De igual manera aquellos requeridos para el desarrollo de proyectos y convenios, según solicitud y autorización del Vicerrector responsable del área correspondiente.
2. Suscribir pólizas de seguros para el amparo del patrimonio de la Universidad.

El secretario General de la Universidad del Magdalena da fe de que esta copia corresponde exactamente al original que reposa en los archivos de la institución



16 SET. 2015

20 24

NOJAN
EL ALCE

ARTÍCULO NOVENO: Delegación de funciones en el Director Financiero.- Delegase en el Director Financiero las siguientes funciones:

1. Autorizar todos los pagos correspondientes al presupuesto de funcionamiento, inversión y servicio de la deuda de la Universidad así como aquellos relacionados con proyectos y convenios.
2. Efectuar trámites, suscribir declaraciones y certificaciones tributarias y de parafiscales de acuerdo con las obligaciones fiscales de la Institución.
3. Realizar la presentación y cobro de las devoluciones del impuesto del valor agregado - IVA- y demás obligaciones tributarias.
4. Efectuar los trámites correspondientes para la negociación del bono pensional, previo visto bueno del Rector.

ARTÍCULO DÉCIMO: Delegaciones en el Secretario General.- Delegase en el Secretario General la actualización de información que sobre la Universidad deba estar disponible, para quien esté interesado en consultarla, de conformidad con el Artículo 8 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Delegaciones en el Director de Talento Humano.- Delegase en el Director de Talento Humano las siguientes funciones:

1. Expedir los actos relacionados con situaciones administrativas, a excepción de las comisiones de estudio y de servicio, de los servidores públicos previa autorización del Rector o el Vicerrector responsable del área correspondiente. No requerirán autorización previa la expedición de los actos que provengan de situaciones administrativas relacionadas con el Sistema de Seguridad Social Integral.
2. Suscribir documentos exigidos por las autoridades del Sistema de Seguridad Social Integral para el cobro y recobro de deudas a favor de la Universidad.
3. Expedir actos administrativos derivados del reconocimiento de derechos de orden laboral.
4. La ordenación del gasto que implique el ejercicio de las funciones delegadas en los numerales anteriores.

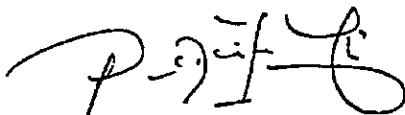
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Delegaciones en el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica. Delegase en el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, bajo la dirección e instrucciones del Rector, la representación legal de la Universidad en los procesos y actuaciones administrativas y judiciales en los cuales la institución deba hacerse parte o intervenir en ellos; además la función de recibir notificación personal de las demandas y/o acciones que se presenten en contra de la entidad y la de otorgar poderes a los abogados que deban representarla en los procesos judiciales, en las acciones de tutela, cumplimiento, populares o de grupo y en los trámites de conciliación judicial o extrajudicial en los cuales aquella deba actuar o participar, en calidad de parte o tercero interviniente.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Unidad de interpretación y gestión normativa.- Los Jefes de las dependencias en el ejercicio de las funciones delegadas actuarán siempre teniendo en cuenta las interpretaciones, criterios y conceptos jurídicos emitidos por el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica y, le solicitarán su apoyo en la exegesis y aplicación de las normas, con el fin de garantizar la unidad de materia normativa en la gestión de los asuntos a su cargo.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Vigencia.- La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deroga las normas que le sean contrarias.

PUBLIQUESE Y CÚPLASE

Dada en Santa Marta, D. T. C. e H., a los 26 SET. 2013



RUTHBER ESCORCIA CABALLERO
Rector

El secretario General de la Universidad del Magdalena da fe de que esta copia corresponde exactamente al original que reposa en los archivos de la institución.

16 SET. 2015



[Handwritten signature]



DESPACHO DEL RECTOR

RESOLUCIÓN No. 148

"Por la cual se hacen unas incorporaciones con nombramiento ordinario en la Universidad del Magdalena"

El Rector de la Universidad del Magdalena en ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias, en especial las conferidas en el numeral 9 del Artículo 34 del Acuerdo Superior No. 12 de 2011 y Artículo 5 del Acuerdo Superior No. 18 de 2011.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Incorporar con nombramiento ordinario en la Planta de Personal Global de la Universidad del Magdalena a las siguientes personas:

DENOMINACIÓN EMPLEO	CÓDIGO	GRADO	DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	NO. CÉDULA
TESORERO GENERAL	201	17	DIRECCIÓN FINANCIERA -GRUPO INTERNO DE TESORERÍA	BETTY PATRICIA PATIÑO URIELES	36.665.858
DIRECTOR ADMINISTRATIVO	009	19	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	BLADIMIR JOSÉ DE LA HOZ ROSALES	85.152.047
DIRECTOR TÉCNICO	009	16	DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	JULIO ALBERTO VEGA BAQUERO	7.633.817
DECANO DE UNIVERSIDAD	008	19	FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y ECONÓMICAS	ALVARO LUIS MERCADO SUÁREZ	12.630.026
DECANO DE UNIVERSIDAD	008	19	FACULTAD DE HUMANIDADES	ALEJANDRA MARÚ MOLINARES	52.692.782
DECANO DE UNIVERSIDAD	008	19	FACULTAD DE INGENIERÍA	JUAN CARLOS DE LA ROSA SERRANO	85.460.625
DIRECTOR TÉCNICO	009	16	DIRECCIÓN DE ODONTOLOGÍA	LUIS FERNANDO BORDA GUZMÁN	79.152.768
DIRECTOR TÉCNICO	009	16	DIRECCIÓN DE ECONOMÍA	ALEXANDER ALFONSO MALDONADO ATENCIO	7.601.124
DIRECTOR TÉCNICO	009	16	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA EN GESTIÓN HOTELERA Y TURÍSTICA	OMAR HERNÁN GARCÍA SILVA	79.506.402
DIRECTOR TÉCNICO	009	16	DIRECCIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES BILINGÜE	CARLOS ALBERTO LABARCES BALLESTAS	7.140.177
DIRECTOR TÉCNICO	009	16	DIRECCIÓN DE DERECHO	ELVIA ESTHER SERRANO MÁRQUEZ	36.563.587
DIRECTOR TÉCNICO	009	16	DIRECCIÓN DE INGENIERÍA PESQUERA	SAEXO ISABEL GAITÁN IBARRA	45.498.601
DIRECTOR TÉCNICO	009	16	DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE SISTEMAS	INÉS DEL CARMEN MERINO FUENTES	26.670.464
DIRECTOR TÉCNICO	009	16	DIRECCIÓN DE INGENIERÍA CIVIL	JORGE DANIEL ARAGÓN RUSSO	85.452.861
DIRECTOR TÉCNICO	009	16	DIRECCIÓN DE INGENIERÍA INDUSTRIAL	RAFAEL ENRIQUE LINERO MEJÍA	85.452.825

16 SET. 2015

DENOMINACIÓN EMPLEO	CÓDIGO	GRADO	DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	NO. CÉDULA
DIRECTOR TÉCNICO	009	16	DIRECCIÓN DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA	ÁLVARO LEÓN CASTILLO MIRANDA	70.031.350
DIRECTOR TÉCNICO	009	16	DIRECCIÓN DE BIOLOGÍA	CÉSAR TAMARIS TURIZO	7.632.967
DIRECTOR TÉCNICO	009	15	DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES	EDGAR JOSÉ SALAS BALLESTEROS	19.586.984
DIRECTOR TÉCNICO	009	15	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO	NORMA CONSTANZA VERA SALAZAR	36.723.464
JEFE DE OFICINA	006	15	OFICINA DE CONTROL INTERNO	WILFRIDO ENRIQUE GUTIÉRREZ OSPINO	12.562.564
DIRECTOR FINANCIERO	009	19	DIRECCIÓN FINANCIERA	RICARDO ALFONSO CAMPO REDONDO	17.805.883
JEFE DE OFICINA ASESORA DE JURÍDICA	115	16	OFICINA ASESORA JURÍDICA	CARLOS EDUARDO GAMBONA GARCÍA	12.563.688
JEFE DE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	115	13	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	MARÍA FERNANDA REYES SARMIENTO	37.752.645
SECRETARIO GENERAL DE UNIVERSIDAD	052	19	SECRETARÍA GENERAL	MERCEDES CECILIA DE LA TORRE HASBUN	57.400.977
VICERRECTOR DE UNIVERSIDAD	077	23	VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA	JAIME ALFREDO NOGUERA SERRANO	85.455.983
JEFE DE DEPARTAMENTO DE UNIVERSIDAD	027	17	DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS GENERALES E IDIOMAS	WILSON VELÁSQUEZ BASTIDAS	12.560.219
JEFE DE OFICINA	006	15	OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	MARÍA NOHEMÍ DÍAZ CUELLO	56.084.849

ARTÍCULO SEGUNDO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, surte efectos fiscales a partir de la fecha de la posesión y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Santa Marta D. T. C. e. H, a los **01 MAR. 2012**

RUTHREY ESCORCIA CABALLERO
Rector

NOV 21 1966



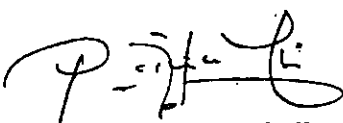
ACTA DE POSESIÓN No. 082

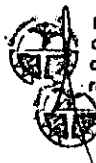
En la Ciudad de Santa Marta D.T.C. e H, a los dos (02) días del mes de marzo de dos mil doce (2012), se presentó al Despacho del Rector de la Universidad del Magdalena, el (la) señor(a) **Carlos Eduardo Gamboa García**, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 12.563.688, con el fin de tomar posesión del empleo de **JEFE DE OFICINA ASESORA DE JURÍDICA**, código 115, grado 16, al cual fue incorporado con nombramiento ordinario por la Resolución No. 148 del 1 de marzo de 2012 de la Universidad del Magdalena, con una asignación básica mensual de SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE. (\$6.196.765,00), con efectos fiscales, a partir del 2 de marzo de 2012.

La mencionada persona prestó el juramento ordenado por el artículo 122 de la Constitución Política y el Artículo 23 del Acuerdo Superior 013 de 2011. Manifestó bajo la gravedad de juramento no estar incurso en causal alguna de inhabilidad general o especial, de incompatibilidad o prohibición alguna establecida en la Ley 4 de 1992 y demás disposiciones vigentes para el desempeño de empleos públicos.

En virtud de lo dispuesto en la Resolución No. 148 del 1 de marzo de 2012, Carlos Eduardo Gamboa García se identificó con cédula de ciudadanía No. 12.563.688.


Carlos Eduardo Gamboa García
El Posesionado


Ruthber Escorcia Caballero
Rector



El secretario General de la Universidad
del Magdalena, en su
correspondiente oficina,
reposa en los archivos
correos
reposa en los archivos

16 SET. 2015

SECRET

099 842

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA
SECRETARÍA GENERAL
Ley 1437 de 2011

Radicación: 47-001-2333-003-2014-00241-00
Demandante: OBRESAN
Demandado: NACION – MINISTERIO DE JUSTICIA Y OTROS
Acción: REPARACIÓN DIRECTA

PASO AL DESPACHO

Del Magistrado Edgar Vásquez Contreras, hoy 22 de enero de 2016, el expediente de la referencia, informándole que se encuentra pendiente para fijar fecha y hora para audiencia inicial.

Anexo un (1) cuaderno principal con 842 folios útiles y un Cd.

Sírvase proveer.

Atentamente,


JORGE ANDRES HERNANDEZ MEJIA
Escribiente

989
847

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA

Santa Marta, quince (15) de abril de dos mil dieciséis (2016)

Magistrado Ponente: DR. EDGAR ALEXI VÁSQUEZ CONTRERAS

Expediente: 47-001-2333-003-2015-00028-00
Demandante: OBRESAN.
Demandado: NACIÓN-MINISTERIO DE JUSTICIA Y OTROS.
Medio de control: REPARACIÓN DIRECTA.

SISTEMA DE ORALIDAD
-Ley 1437 de 2011-

Procede el Despacho a fijar fecha para la celebración de la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011, según el cual *"vencido el término de traslado de la demanda o de la de reconvención según el caso, el Juez o Magistrado Ponente, convocará a una audiencia que se sujetará a las siguientes reglas: **Oportunidad. La audiencia se llevará a cabo bajo la dirección del Juez o Magistrado Ponente dentro del mes siguiente al vencimiento del término de traslado de la demanda o del de su prórroga o del de la de reconvención o del de la contestación de las excepciones o del de la contestación de la demanda de reconvención, según el caso. El auto que señale fecha y hora para la audiencia se notificará por estado y no será susceptible de recursos"***

De acuerdo con el informe secretarial de 22 de enero de 2016 obrante a folio 842 del expediente el término de traslado de la admisión de la demanda feneció; en consecuencia, se fijara fecha para celebrar audiencia inicial el día 30 de junio de 2016 a las diez de la mañana (10:00 a.m), advirtiéndole que la asistencia de los apoderados a la misma es de carácter obligatorio, so pena de sanción, conforme lo establece los numerales 2º y 4º del artículo 180 de del C.P.A.C.A¹².

En virtud de lo anterior se **DISPONE:**

¹² Artículo 180. **Audiencia Inicial.** Vencido el término de traslado de la demanda o de la de reconvención según el caso, el Juez o Magistrado Ponente, convocará a una audiencia que se sujetará a las siguientes reglas:

(...) 2. **Intervinientes.** Todos los apoderados deberán concurrir obligatoriamente. También podrán asistir las partes, los terceros y el Ministerio Público.

La inasistencia de quienes deban concurrir no impedirá la realización de la audiencia, salvo su aplazamiento por decisión del Juez o Magistrado Ponente.

(...) 4. **Consecuencias de la inasistencia.** Al apoderado que no concurra a la audiencia sin justa causa se le impondrá multa de dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

1.- Señalar el día 30 de junio de 2016 a las diez de la mañana (10:00 a.m) a efectos de llevar a cabo Audiencia Inicial en el proceso de la referencia.

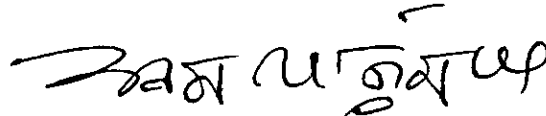
2.- Contra el presente auto no procede ningún recurso de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 180 del C.P.A.C.A.

3.-Por Secretaría notifíquese la presente providencia por estado electrónico.

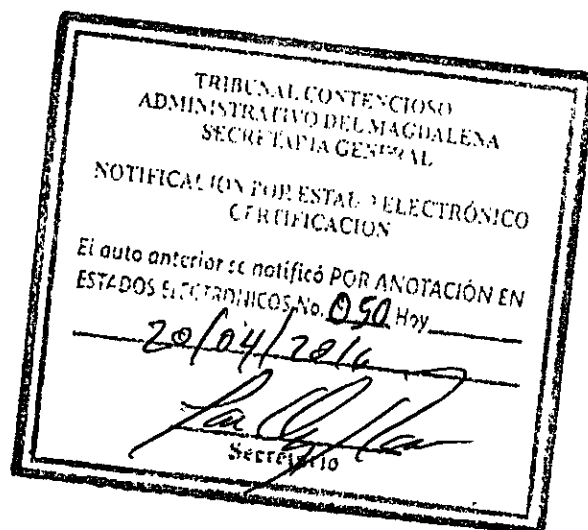
4.- Se insta a las partes para que con anticipación a la celebración de la audiencia verifiquen en la Secretaría del Tribunal Administrativo del Magdalena que reposen en el expediente todos los documentos aportados y los antecedentes administrativos, con el propósito hacer más eficiente y efectivo el decreto de pruebas.

5.- Teniendo en cuenta que dentro del proceso de la referencia existe la posibilidad de tomar alguna decisión de Sala de acuerdo a lo previsto en los artículos 179 y 180 del C.P.A.C.A., infórmese a los Magistrados de esta Corporación la fecha de la realización de la audiencia inicial.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



EDGAR ALEXI VASQUEZ CONTRERAS
Magistrado



961
844

Notificaciones Tribunal 03 Administrativo del Magdalena

De: Notificaciones Tribunal 03 Administrativo del Magdalena
<tadmin03mgd@notificacionesrj.gov.co>
Enviado el: jueves, 21 de abril de 2016 02:11 p.m.
Para: alejocorman@gmail.com; universidad del magdalena
(notificacionjudicial@unimagdalena.edu.co); 'presidencia@ccsm.org.co';
'secretariajuridica@ccsm.org.co'; procuraduria (procjudadm155@procuraduria.gov.co);
procuraduria43@gmail.com; notificacionesjudiciales@minjusticia.gov.co
Asunto: NOTIFICACION
Datos adjuntos: REPARACION DIRECTA 2015-0028 OBRESAN- AUTO FIJA FECHA A.I..pdf
Importancia: Alta

EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR ESTE DESPACHO LE NOTIFICO A TRAVES DE ESTE MENSAJE DE DATOS LA
PROVIDENCIA DE 15 DE ABRIL DE 2016
PUBLICADA EN ESTADO 050 DE 20 DE ABRIL DE 2016 DONDE SE FIJO EL DIA 30 DE JUNIO DE 2016 A LAS DIEZ DE LA
MAÑANA A FIN DE LLEVAR A CABO
AUDIENCIA INICIAL DENTRO DEL PROCESO DE LA REFERENCIA.

MIGUEL ANGEL PAEZ TOVAR
CITADOR

AVISO IMPORTANTE: Esta dirección de correo electrónico tadmin03mgd@notificacionesrj.gov.co es de uso
único y exclusivo de envío de notificaciones, todo mensaje que se reciba no será leído y automáticamente se
eliminará de nuestros servidores, apreciado usuario si tiene alguna solicitud por favor comuníquese a la
siguiente línea telefónica: 4213901 o envíenos un correo electrónico a la siguiente
dirección: tadtvo03mag@cendoj.famajudicial.gov.co

962
845

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA**

Santa Marta, diecinueve (19) de mayo de dos mil dieciséis (2016)

MAGISTRADO PONENTE: Dr. EDGAR ALEXI VASQUEZ CONTRERAS

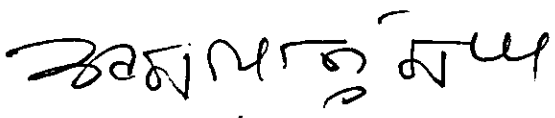
RADICACIÓN: 47-001-2333-003-2015-00028-00
DEMANDANTE: OBRESAN.
DEMANDADO: NACIÓN- MINISTERIO DE JUSTICIA Y OTROS.
M. CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA.

Mediante auto de 15 de abril de 2015 se señaló como fecha para la celebración de la audiencia inicial de que trata el artículo 180 de la ley 1437 de 2011, el día 30 de junio de 2016 a las (10:00 a.m.) en el proceso de la referencia. Dicha audiencia deberá ser reprogramada puesto que el Despacho debe darle prelación a las acciones constitucionales que se encuentran pendientes de trámite y decisión, en cumplimiento de los artículos 15 del Decreto 2591 de 1991 y 6 de la Ley 472 de 1998.

En mérito de lo expuesto, se dispone:

1. Fijar el día tres (03) de noviembre de 2016 a las diez de la mañana (10:00a.m) como fecha y hora para llevar a cabo Audiencia Inicial en el proceso de la referencia.
2. De conformidad con los artículos 179 y 180 del C.P.A.C.A., infórmese a los Magistrados de esta Corporación la fecha de la realización de la audiencia inicial reprogramada.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE


EDGAR ALEXI VÁSQUEZ CONTRERAS
Magistrado

TRIBUNAL CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA DE JUSTICIA

NOTIFICACIÓN DE ACTA ELECTRONICO
CERTIFICACIÓN

El auto anterior se rectificó por error en
ESTADOS ELECTRONICOS NO. 068

24/05/2016

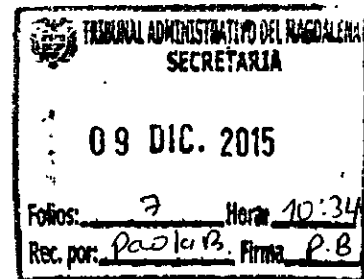
Secretaría

De esta forma descorro el traslado de las Excepciones presentadas por el apoderado de la parte llamada en Garantía ACE ASEGURADORA S.A., integrante de la parte demandada, la cuales están contenidas en la Contestación de la Demanda, y respetuosamente reitero a su Despacho que a dichos criterios no le asiste el sustento jurídico real para su reconocimiento, acorde a la revisión de los actos administrativos trasgresores del Ordenamiento Jurídico Colombianos y de los Derechos de mi poderdante.

Agradezco su vocación de servicio en la administración de justicia.

Atentamente,


LUIS ALEJANDRO CORZO MANTILLA
CC 88.213.988 De Cúcuta
T.P 101.576 C. S. De la J.





**Cámara de
Comercio de
Cali**

CODIGO DE VERIFICACION:0815FOBQND

NUMERO DE RADICACION: 20150827488-PRI

FECHA DE IMPRESION: 20 NOVIEMBRE 2015 12:49 PM

PAGINAS: 1 - 5

REPUBLICA DE COLOMBIA

EL SUSCRITO SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI

CERTIFICA

NOMBRE DE LA CASA PRINCIPAL : ACE SEGUROS S.A.

NIT NRO :860026518 - 6

DOMICILIO :BOGOTA DISTRITO CAPITAL

DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: ana.ussa@acegroup.com

DIRECCIÓN ELECTRÓNICA NOTIFICACIÓN JUDICIAL:daniel.jimenez@acegroup.com

NOMBRE DE LA SUCURSAL :ACE SEGUROS S.A.

DOMICILIO :CALI VALLE

DIRECCION NOTIFICACION JUDICIAL :CALLE 72 NRO. 10 51 PISO 7

CIUDAD :BOGOTA

WEB:www.aceseguros.com

DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: ana.ussa@acegroup.com

DIRECCIÓN ELECTRÓNICA NOTIFICACIÓN JUDICIAL:ana.ussa@acegroup.com

MATRICULA NRO :142870 - 2

AFILIADO

CERTIFICA

QUE EN LOS REGISTROS QUE SE LLEVAN EN ESTA CAMARA DE COMERCIO, FIGURAN INSCRITOS LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS A NOMBRE DE: ACE SEGUROS S.A.

CERTIFICA

QUE POR ESCRITURA NRO. 1071 DEL 04 DE ABRIL DE 1988 NOTARIA DECIMA DE BOGOTA ,INSCRITA EN LA CAMARA DE COMERCIO EL 22 DE JULIO DE 1988 BAJO EL NRO. 9549 DEL LIBRO IX ,CAMBIO SU NOMBRE DE SEGUROS COLINA S.A. . POR EL DE CIGNA SEGUROS DE COLOMBIA S A

CERTIFICA

QUE POR ESCRITURA NRO. 1071 DEL 04 DE ABRIL DE 1988 NOTARIA DECIMA DE BOGOTA ,INSCRITA EN LA CAMARA DE COMERCIO EL 22 DE JULIO DE 1988 BAJO EL NRO. 9549 DEL LIBRO IX ,SE APROBO LA FUSION POR ABSORCION ENTRE (ABSORBENTE) CIGNA SEGUROS DE COLOMBIA S A Y (ABSORBIDA(S)) LA CONTINENTAL COMPANIA DE SEGUROS GENERALES S.A. .

CERTIFICA

QUE POR ESCRITURA NRO. 3583 DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 1999 NOTARIA DIECIOCHO DE BOGOTA ,INSCRITA EN LA CAMARA DE COMERCIO EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 1999 BAJO EL NRO. 2204 DEL LIBRO VI ,CAMBIO SU NOMBRE DE CIGNA SEGUROS DE COLOMBIA S A . POR EL DE ACE SEGUROS S.A. .

CERTIFICA

REFORMAS

DOCUMENTO	FECHA.DOC	ORIGEN	FECHA.INS	NRO.INS	LIBRO
E.P. 5100	08/10/1969	NOTARIA TERCERA DE BOGOTA	31/07/1984	69919	IX
E.P. 1497	16/07/1974	NOTARIA ONCE DE BOGOTA	31/07/1984	69920	IX
E.P. 2007	07/12/1988	NOTARIA VEINTIOCHO DE BOGOTA	14/03/1989	16454	IX
E.P. 5128	10/11/1989	NOTARIA DIECIOCHO DE BOGOTA	06/12/1989	24068	IX
E.P. 3779	19/06/1991	NOTARIA DIECIOCHO DE BOGOTA	15/07/1991	42391	IX
E.P. 2847	19/06/1996	NOTARIA DIECIOCHO DE BOGOTA	26/07/1996	1449	VI
E.P. 3583	07/09/1999	NOTARIA DIECIOCHO DE BOGOTA	29/09/1999	2204	VI
E.P. 1010	22/04/2009	NOTARIA VEINTIOCHO DE BOGOTA	08/05/2009	1314	VI

CERTIFICA

OBJETO SOCIAL: LA REALIZACION DE OPERACIONES DE SEGURO, BAJO LAS MODALIDADES Y RAMOS FACULTADOS EXPRESAMENTE POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA Y AQUELLAS PREVISTAS EN LA LEY



**Cámara de
Comercio de
Cali**

CODIGO DE VERIFICACION:0815FOBQND

NUMERO DE RADICACION: 20150827488-PRI

FECHA DE IMPRESION: 20 NOVIEMBRE 2015 12:49 PM

PAGINAS: 2 - 5

CON CARACTER ESPECIAL. ASI MISMO, PODRA EFECTUAR OPERACIONES DE REASEGURO EN LOS TERMINOS QUE ESTABLEZCAN LAS DISPOSICIONES LEGALES SOBRE EL PARTICULAR, O LAS DE CUALQUIER OTRO PAIS DONDE ESTABLEZCA SUCURSALES O AGENCIAS. EN DESARROLLO DE SU OBJETO PRINCIPAL, LA SOCIEDAD PODRA EJECUTAR TODA CLASE DE NEGOCIOS AFINES AL DE SEGURO QUE LA LEY COLOMBIANA AUTORICE A LAS COMPANIAS DE SEGUROS GENERALES O COMERCIALES, SEA QUE ESTOS NEGOCIOS SE DESARROLLEN EN EL PAIS O EN EL EXTERIOR Y HACER LAS INVERSIONES EN BIENES RAICES O MUEBLES LEGALMENTE PERMITIDAS, PUDIENDO PARTICIPAR EN OTRAS SOCIEDADES DE CUALQUIER TIPO Y CUALQUIERA QUE SEA SU OBJETO, YA SEAN CONSTITUIDAS O EN EL ACTO DE SU CONSTITUCION. ADEMAS, LA SOCIEDAD PODRA DAR Y RECIBIR CREDITOS, RECIBIENDO U OTORGANDO GARANTIAS REALES Y PERSONALES, ADQUIRIR Y ENAJENAR A CUALQUIER TITULO TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES GRAVARLOS A CUALQUIER TITULO Y CAMBIARLES SU FORMA, CELEBRAR EL CONTRATO COMERCIAL DE CAMBIO EN TODAS SUS MANIFESTACIONES Y EN CONSECUENCIA, ACEPTAR, GIRAR, DESCONTAR, ADQUIRIR, ENDOSAR, GARANTIZAR, PROTESTAR, DAR EN GARANTIA TODA CLASE DE TITULOS VALORES Y EN GENERAL, EJECUTAR O CELEBRAR TODA CLASE DE ACTOS LICITOS QUE TIENDAN DIRECTAMENTE A LA REALIZACION DE SU OBJETO SOCIAL PRINCIPAL Y LAS QUE TENGAN COMO FINALIDAD EJERCER LOS DERECHOS O CUMPLIR LAS OBLIGACIONES LEGAL O CONVENCIONALMENTE DERIVADAS DE LA EXISTENCIA Y ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD.

CERTIFICA

DOCUMENTO: ACTA No. 281 DEL 19 DE JUNIO DE 2014

ORIGEN: JUNTA DIRECTIVA

INSCRIPCION: 09 DE OCTUBRE DE 2015 No. 2709 DEL LIBRO VI

FUE(RON) NOMBRADO(S):

REPRESENTANTE LEGAL DE LA SUCURSAL
OLIVIA STELLA VIVEROS ARCILA
C.C.29434260

CERTIFICA

QUE POR ESCRITURA NRO. 1680 DEL 27 DE ABRIL DE 2005 NOTARIA TRECE DE CALI , INSCRITA EN LA CAMARA DE COMERCIO EL 11 DE MAYO DE 2005 BAJO EL NRO. 87 DEL LIBRO V EL DOCTOR HAROLD LARRAHONDO BARONA, MAYOR DE EDAD Y VECINO DE LA CIUDAD DE BOGOTA, IDENTIFICADO CON LA CEDULA DE CIUDADANIA 16.603.683 DE CALI, EN SU CODICION DE CUARTO SUPLENTE DEL PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD ACE SEGUROS S.A., QUE EN LA CONDICION ANTES EXPRESADA, CONFIERE PODER GENERAL AMPLIO Y SUFICIENTE AL DOCTOR HAROLD ARISTIZABAL MARIN, IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA 16.678.028 DE CALI Y PORTADOR DE LA TARJETA PROFESIONAL No. 41291 DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, PARA QUE REPRESENTA A LA SOCIEDAD ACE SEGUROS S.A., SUCURSAL DE CALI, EN LOS SIGUIENTES ACTOS RELACIONADOS CON SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES, A SABER: A) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ACE SEGUROS S.A., ANTE LOS CENTROS DE CONCILIACION CUANDO SE REQUIERA LA PRESENCIA DE LA CITADA COMPAÑIA DE SEGUROS, Y ASI SE LO SOLICITE ALGUNO DE LOS REPRESENTANTES. B) CONCILIAR TODO TIPO DE CONTROVERSIAS Y DIFERENCIAS QUE OCURRAN RESPECTO DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL PODERDANTE, POR LOS ACCIDENTES DE TRANSITO QUE SE VEAN INVOLUCRADOS LOS VEHICULOS ASEGURADOS A AMPARO DE CONTRATOS EXPEDIDOS POR ACE SEGUROS S.A., O LOS VEHICULOS VINCULADOS A LA MISMA. C) SUSTITUIR EN LOS ART. 68 DEL C.P.C., ESTE PODER OTORGADO.

CERTIFICA

QUE POR ESCRITURA NRO. 1454 DEL 06 DE ABRIL DE 2009 NOTARIA VEINTINUEVE DE BOGOTA , INSCRITA EN LA CAMARA DE COMERCIO EL 21 DE ABRIL DE 2009 BAJO EL NRO. 47 DEL LIBRO V SE CONFIERE PODER A LA SEÑORA CLAUDIA PATRICIA HOYOS MERINO, PARA ACTUAR COMO GERENTE Y REPRESENTANTE DE LA SUCURSAL DE LA COMPAÑIA, EN LA CIUDAD DE CALI, CON LAS SIGUIENTES FACULTADES:

A- PROMOVER LA VENTA DE POLIZAS O CONTRATOS DE SEGUROS EN LOS RAMOS EN QUE LA COMPAÑIA



**Cámara de
Comercio de
Cali**

CODIGO DE VERIFICACION:0815FOBQND

NUMERO DE RADICACION: 20150827488-PRI

FECHA DE IMPRESION: 20 NOVIEMBRE 2015 12:49 PM

PAGINAS: 3 - 5

LEGALMENTE AUTORIZA PARA OPERAR EN COLOMBIA DENTRO DE LOS LIMITES DE LA COMPAÑIA LE FIJE PERIODICAMENTE.

B- COBRAR Y RECIBIR CUALQUIER SUMA DE DINERO QUE POR CUALQUIER CONCEPTO SE LE ADEUDE A LA COMPAÑIA Y TOMAR CUALQUIER MEDIDA PARA PROTEGER LOS INTERESES DE LA MISMA.

C- ATENDER Y TRAMITAR INTERNAMENTE CUALQUIER SINIESTRO O RECLAMACION QUE AFECTE LAS POLIZAS DE SEGUROS O DOCUMENTOS EXPEDIDOS POR LA COMPAÑIA.

D- PROPONER AL PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA O A QUIEN HAGA SUS VECES, LA DESIGNACION O NOMBRAMIENTO DE AGENCIAS Y AGENTES EN JURISDICCION TERRITORIAL DE LA SUCURSAL, CONFORME A LAS DISPOSICIONES VIGENTES SOBRE LA MATERIA.

E- CON LA PREVIA APROBACION DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA O DE QUIEN HAGA SUS VECES, NOMBRAR Y RENOVAR A LOS EMPLEADOS DE LA SUCURSAL Y FIJARLES SU REMUNERACION.

F- REPRESENTAR LOCALMENTE A LA COMPAÑIA, EN TODO AQUELLO QUE LA APODERADA JUZGUE CONVENIENTE O NECESARIO PARA EL CIUDADO Y PROTECCION DE LOS INTERESES DE LA COMPAÑIA, O PARA UNA APROPIADA EJECUCION DE LAS FACULTADES QUE SE LE CONFIEREN.

QUINTO: QUE EL PRESENTE PODER PODRA SER REVOCADO EN CUALQUIER TIEMPO POR EL PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA O POR QUIEN LEGALMENTE HAGA SUS VECES, POR MEDIO DE CARTA O POR ESCRITURA PUBLICA Y LA COPIA DEBERA SER ENVIADA A LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA.

NOTA: ESTE PODER SE ENTENDERA VIGENTE HASTA TANTO NO SE REVOQUE MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA.

CERTIFICA

QUE POR ESCRITURA NRO. 2179 DEL 18 DE AGOSTO DE 2010 NOTARIA DIECIOCHO DE BOGOTA , INSCRITA EN LA CAMARA DE COMERCIO EL 24 DE AGOSTO DE 2010 BAJO EL NRO. 98 DEL LIBRO V SE CONFIERE PODER GENERAL AL ABOGADO GUSTAVO ALBERTO HERRERA AVILA, DE QUIEN SE DIJO ES MAYOR DE EDAD, IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA 19.395.114 Y CON TARJETA PROFESIONAL NO. 39116 DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA PARA QUE EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD, REALICE LOS SIGUIENTES ACTOS:

A)- REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODAS LAS AUTORIDADES JUDICIALES Y EN TODA CLASE DE PROCESOS DE CARACTER CIVIL, COMERCIAL, PENAL, LABORAL, PENAL ADUANERO, CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, BIEN SEA QUE LA SOCIEDAD SEA DEMANDADA, DEMANDA, LLAMADA EN GARANTIA, LITIS CONSORTE O TERCERO INTERVINIENTE.

B) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LAS AUTORIDADES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS EN LA SOLICITUD Y PRACTICA DE PRUEBAS ANTICIPADAS, EXHIBICION DE DOCUMENTOS, CONSTITUCION DE PARTE CIVIL EN PROCESOS PENALES; PARA NOTIFICARSE DE TODA CLASE PROVIDENCIAS INCLUYENDO AUTOS ADMISORIOS DE DEMANDAS, DE LLAMAMIENTOS EN GARANTIA O DE CUALQUIER CLASE DE VINCULACION COMO TERCERO, PROFERIDOS POR CUALQUIER AUTORIDAD ADMINISTRATIVA O JUDICIAL, SEA CIVIL, LABORAL, PENAL, CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA Y DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA, PARA QUE ABSUELVA INTERROGATORIOS DE PARTE, PARA QUE CONFIERE, COMPAREZCA A DECLARAR Y ASISTA A LAS DEMAS DILIGENCIAS JUDICIALES, PROCESALES O EXTRAPROCESALES, SEAN ELLAS DE NATURALEZA CIVIL, LABORAL, COMERCIAL, ADMINISTRATIVA, PENAL, CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA Y DE CUALQUIER OTRA NATURAZA, PARA QUE ASISTA A LAS AUDIENCIAS DE CONCILIACION CON FACULTADES EXPRESAS PARA CONCILIAR Y TRANSIGIR, QUEDANDO TAMBIEN AUTORIZADO PARA RECIBIR LAS NOTIFICACIONES Y LAS CITACIONES ORDENADAS POR LOS JUZGADOS O AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS QUE ASI LO REQUIERAN, QUEDANDO ENTENDIDO QUE EN ESTOS CASOS DE NOTIFICACION, CITACION Y COMPARECENCIA PERSONAL DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD, LA MISMA QUEDARA VALIDA Y LEGALMENTE HECHA A TRAVES DEL APODERADO GENERAL DESIGNADO DOCTOR GUSTAVO ALBERTO HERRERA AVILA, ASI MISMO EL APODERADO QUEDA FACULTADO PARA CONFESAR.



**Cámara de
Comercio de
Cali**

CODIGO DE VERIFICACION:0815FOBQND

NUMERO DE RADICACION: 20150827488-PRI

FECHA DE IMPRESION: 20 NOVIEMBRE 2015 12:49 PM

PAGINAS: 4 - 5

C) QUE EL PRESENTE PODER GENERAL SE EXTIENDE PARA QUE EL DOCTOR GUSTAVO ALBERTO HERRERA AVILA, REPRESENTA A LA SOCIEDAD ACE SEGUROS S.A., ANTE LOS JUECES CIVILES DE TODO EL PAIS Y PUEDE TRANSIGIR O INTERVENIR EN LAS AUDIENCIAS DE CONCILIACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE QUE TRATA EL ARTICULO CIENTO UNO (101) DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL O LA LEY 640 DE 2001, QUEDANDO ENTENDIDO QUE EL APODERADO GENERAL PUEDE COMPROMETER A LA SOCIEDAD, FACULTAD QUE SE EXTIENDE TAMBIEN A LAS ACTUACIONES, DILIGENCIAS Y AUDIENCIAS DE CONCILIACION QUE REALICEN ANTE CUALQUIER AUTORIDAD JURISDICCIONAL, CENTROS DE CONCILIACION, MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL O PROCURADORES JUDICIALES, CONFORME LO TIENE PREVISTO LA LEY 446 DE 1998, EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, LEY 128 DE 1991 Y LA LEY 640 DE 2001.

D) QUE EL PODER GENERAL QUE POR ESTA ESCRITURA SE OTORGA SE EXTIENDE PARA QUE EL DOCTOR GUSTAVO ALBERTO HERRERA AVILA, REPRESENTA A LA SOCIEDAD ACE SEGUROS S.A., EN TODA CLASE DE PROCESOS QUE CURSEN ANTE CUALQUIER AUTORIDAD JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVA, SEA PUBLICA O PRIVADA.

E) ASI MISMO COMPRENDE FACULTAD PARA DESIGNAR EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD ACE SEGUROS S.A., LOS ARBITROS QUE SE REQUIERAN EN VIRTUD DE LOS TRIBUNALES DE ARBITRAMIENTO QUE SE CONSTITUYAN EN DESARROLLO DE CLAUSULAS COMPROMISORIAS. IGUALMENTE QUEDA FACULTADO EXPRESAMENTE PARA DESISTIR, CONCILIAR, TRANSIGIR, RECIBIR, DESIGNAR ARBITROS COMO TAMBIEN PARA SUSTITUIR, DAR PODER, NOMBRAR APODERADOS ESPECIALES QUE REPRESENTEN A LA COMPAÑIA Y REASUMIR EL PRESENTE MANDATO.

CERTIFICA

QUE A NOMBRE DE LA SOCIEDAD FIGURA MATRICULADO EN LA CAMARA DE COMERCIO BAJO EL NRO.142870-2 SUCURSAL: ACE SEGUROS S.A.

UBICADO EN: CALLE 64 NORTE NRO. 5 B NORTE- 146 OFICINA B 2 DE CALI

FECHA MATRICULA : 31 DE JULIO DE 1984

RENOVO : POR EL AÑO 2015

CERTIFICA

QUE NO FIGURAN OTRAS INSCRIPCIONES QUE MODIFIQUEN TOTAL O PARCIALMENTE EL PRESENTE CERTIFICADO.

LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE SU INSCRIPCION, SIEMPRE Y CUANDO DENTRO DE DICHO TERMINO NO SEAN OBJETO DE RECURSOS.

LA PERSONA O ENTIDAD A LA QUE USTED LE VA A ENTREGAR EL CERTIFICADO PUEDE VERIFICAR, POR UNA SOLA VEZ, SU CONTENIDO INGRESANDO A <http://www.ccc.org.co/registraya/> Y DIGITANDO EL CODIGO DE VERIFICACION QUE SE ENCUENTRA EN EL ENCABEZADO DEL PRESENTE DOCUMENTO.

EL CERTIFICADO A VALIDAR CORRESPONDE A LA IMAGEN Y CONTENIDO DEL CERTIFICADO CREADO EN EL MOMENTO EN QUE SE GENERO EN LAS SEDES O A TRAVES DE LA PLATAFORMA VIRTUAL DE LA CAMARA.

DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1.995 Y LA AUTORIZACION IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO LA FIRMA MECANICA QUE APARECE A CONTINUACION TIENE PLENA VALIDEZ PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES.

DADO EN CALI A LOS 20 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015 HORA: 12:49:00 PM



**Cámara de
Comercio de
Cali**

CODIGO DE VERIFICACION:0815FOBQND.

NUMERO DE RADICACION: 20150827488-PRI

FECHA DE IMPRESION: 20 NOVIEMBRE 2015 12:49 PM

PAGINAS: 5 - 5

Q. M. Z.



ace seguros

Calle 72 No. 10-51 Piso 7
Bogotá D.C.
Colombia
Nit 860.026.518-6
www.ancelatinamerica.com

571 3190300 PBX
571 3190400
571 3190408 Fax
571 3190304

DEFENSOR DEL CLIENTE: Estudio Jurídico Uribe & Abogados, Tels (571) 8138851 - 4830433 Dirección: Cra. 10 #27A-13 Torre A Ofc. 502 Edificio Bogotá Trade Center.
Correo electrónico: defensor@acegroup.com

RAMO		OPERACION		POLIZA		ANEXO		REFERENCIA				
12 RESPONSABILIDAD		22 Aum con mov p		14837		25917		12001483725917				
SUCURSAL		VIGENCIA DEL SEGURO								FECHA DE EMISION		
03 BOGOTA		DESDE	AÑO	MES	DIA	HORA	HASTA	AÑO	MES	DIA	HORA	
			2014	04	01	00		2015	03	31	24	
										2014	04	21
TOMADOR		CONFEDERACION COLOMBIANA DE CAMARAS DE C						C.C. O NIT		8600256140		
DIRECCION		CRA 13 NO. 27-47 OFIC 502						CIUDAD		BOGOTA		
ASEGURADO		CONFEDERACION COLOMBIANA DE CAMARAS DE C						C.C. O NIT		8600256140		
DIRECCION		CRA 13 NO. 27-47 OFIC 502						CIUDAD		BOGOTA		
BENEFICIARIO		TERCEROS AFECTADOS						C.C. O NIT		11111		
DIRECCION		ND						CIUDAD		-		
INTERMEDIARIO		31054 JIMENEZ ZABALA MARTA LUZ						16.00				

INFORMACION DEL RIESGO

FOR SOLICITUD DEL ASEGURADO Y SEGUN COMUNICACION DEL BROKER SE RENUEVA LA PRESENTE POLIZA

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE POLIZA, O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A LA COMPAÑIA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICION DE LA POLIZA.

Para mayor información contáctenos al e-mail pagos.clientes@acegroup.com

VALOR PRIMA	105.000.000,00	COL\$
GASTOS EXPED.	0,00	COL\$
I.V.A.	16.800.000,00	COL\$
TOTAL A PAGAR	121.800.000,00	COL\$

TOMADOR

Jaimé Charvez

ACE Seguros S.A.

ARCHIVO



ace seguros

POLIZA No.	ANEXO No.	PAG. No.
12/14831	25917	I
CONFEDERACION COLOMBIANA DE CAMARAS DE COMERCIO		

POLIZA DE SEGURO DE ERRORES Y OMISIONES

ACE ELITE MISCELANEOS

TIPO: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA SERVICIOS MISCELÁNEOS

TOMADOR: CONFECÁMARAS

FIRMA: CÁMARAS DE COMERCIO AFILIADAS A CONFECAMARAS CON INGRESOS ENTRE COP\$1.000.000.000 Y COP\$4.000.000.000

ASEGURADO: La firma y los estipulados en el numeral 26.4 sección 26. Definiciones del clausulado ACE ELITE MISCELANEOS - SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA SERVICIOS MISCELÁNEOS

BENEFICIARIOS: Terceros Afectados

PERIODO CONTRACTUAL: 1 de Abril de 2014 a las 00:00 horas al 31 de Marzo de 2015 a las 24:00 horas

PARTICIPACION ACE: 100%

TIPO DE CAMARA	LIMITES POR GRUPO	PRIMA ANUAL POR GRUPO (SIN IVA)
Cámaras de Comercio con Ingresos entre COP\$1,000,000.000 y COP\$4,000,000.000	COP\$6,000,000,000 toda y cada reclamación y en el agregado	COP\$105,000,000



ace seguros

POLIZA NO.	ANEXO NO.	PAGE NO.
CONFEDERACION COLOMBIANA DE CAMARAS DE COMERCIO		

POLIZA DE SEGURO DE ERRORES Y OMISIONES

DEDUCIBLE:

- COSTOS (Gastos de Defensa) \$10,000,000
- DAÑOS (Perjuicio financiero) \$20,000,000

DELIMITACION TERRITORIAL: Mundial, excepto Estado Unidos, Puerto Rico y Canadá.

CONDICIONES:

1. Alcance de la cobertura:

Cobertura limitada a la prestación de servicios profesionales relacionados a:

Cámaras de Comercio

- Funciones asignadas en el Código de Comercio
- Registro Único Empresarial y Social RUES (Art. 166 Decreto 19 de 2012)
- Labores propias de un Centro de conciliación y arbitraje: Arbitraje, Trámite Arbitral (Fase previa, Fase arbitral)
- Actividades de promoción de la actividad comercial e industrial
- Liquidación y recaudo del impuesto de registro
- Registro de la Economía Solidaria (Esaes)
- Registro Único Tributario, RUT
- Registro de Garantías mobiliarias
- Actuar como Comisionados en diligencias de remate
- Expedición del certificado de existencia y representación legal de las asociaciones, ligas, federaciones o confederaciones de padres de familia
- Las demás que les atribuyan las Leyes y el Gobierno Nacional

2. Todas las extensiones y coberturas forman parte y no están en adición al límite total agregado de la póliza.
3. Solo se incluyen en la cobertura las cámaras de comercio indicadas en el endoso **CÁMARAS DE COMERCIO GRUPO 2**
4. Como Firma se entenderá las Cámaras de Comercio las cuales están relacionadas en el Endoso **CÁMARAS DE COMERCIO GRUPO 2**
5. Base de Reclamación Claims Made
6. El asegurado declara cumplir con todos los requisitos legales, administrativos y de seguridad competente.
7. Los **ACTOS ERRÓNEOS** deben haber sido cometidos con posterioridad al inicio de la **FECHA DE RETROACTIVIDAD** que para esta póliza será: 01/01/2002
8. Los **Asegurados**, están obligados a mantener el estado del riesgo. En tal virtud, deberán notificar por escrito al **Asegurador** los hechos o circunstancias que sobrevengan con posterioridad a la celebración del contrato y que, signifiquen una agravación del riesgo incluyendo pero no limitándose a un cambio en



ace seguros

POLIZA No.	ANEXO No.	PAG. No.
12/11/85	25917	3
CONFEDERACIÓN COLOMBIANA DE CÁMARAS DE COMERCIO		

POLIZA DE SEGURO DE ERRORES Y OMISIONES

- las funciones que vienen desempeñando que impliquen cambios sustanciales en la infraestructura que se tiene actualmente para atender a sus clientes.
9. Se otorga cobertura para las oficinas de las cámaras de Comercio en lugares diferentes a la ciudad principal de la Cámara, sujeto a que se conserven los mismos controles de la oficina principal.
 10. Única y exclusivamente se considera cobertura para la actividad aquí descrita.
 11. Para la cotización el asegurador se ha basado en la información y declaraciones contenidas en la solicitud de seguro y cuestionarios complementarios. Dichas declaraciones son la base de la aceptación del riesgo y de los términos y condiciones de esta Póliza, y por lo tanto se considerarán como parte integrante de la misma.
 12. Esta póliza es basada en los ingresos del 2012
 13. Extensión de cobertura para daños y/o costos originadas en una reclamación por pérdida de documentos, con sublímite de \$50,000,000 toda y cada pérdida y en el agregado anual. Según Texto Adjunto
 14. Infidelidad de Empleados (Cobertura de Actos Erróneos por Fraude de Empleados) Esta cobertura se otorga con un Sublímite de \$15,000,000 toda y cada pérdida y en el agregado anual. Según Texto Adjunto
 15. Propiedad intelectual Esta cobertura se otorga con un Sublímite de \$25,000,000 toda y cada pérdida y en el agregado anual
 16. Difamación Esta cobertura se otorga con un Sublímite de \$25,000,000 toda y cada pérdida y en el agregado anual. Según Texto Adjunto
 17. El deducible para las extensiones de 11, 12, 13 Cobertura Actos Erróneos por Fraude de Empleados, Pérdida de Documentos, Cobertura Propiedad Intelectual y Cobertura Difamación es de \$5,000,000.
 18. La Aseguradora deja expresa constancia de que en la definición de Daños contenida en la Cláusula 26, numeral 26.8 de las condiciones generales de la Póliza, se entiende cubierto el Lucro Cesante que se configure como consecuencia de un Acto Erróneo en la prestación de Servicios Profesionales por parte del Asegurado de conformidad con los restantes términos y exclusiones de la póliza.
 19. La Aseguradora deja expresa constancia de que en la definición de Daños contenida en la Cláusula 26, numeral 26.8 de las condiciones generales de la Póliza, se entiende cubierto la Pérdida de imagen que se configure como consecuencia de un acto erróneo en la prestación de servicios profesionales por parte del Asegurado de conformidad con los restantes términos y exclusiones de la póliza.
 20. Se otorgan GASTOS DE EMERGENCIA según el texto anexo. En caso de que el Asegurado cuente con un término igual o inferior a cinco días hábiles para incurrir en un gasto cubierto por la cobertura 1 y derivado de una Reclamación cubierta por la póliza, y no le sea posible obtener el consentimiento previo y por escrito del Asegurador, este reconocerá tales gastos encaminados o dirigidos a atender únicamente esa actuación de emergencia, siempre y cuando el Asegurado solicite la aprobación de los mismos antes de quince (15) días calendario contados a partir del momento en que incurrió en ellos. Esta extensión de cobertura no excederá COP\$ 10.000.000 para toda y cada Reclamación y operará dentro del límite de responsabilidad indicado en la cláusula 4 de la póliza
 21. En caso de agotamiento del límite de responsabilidad se cotizará, en el momento del agotamiento, el valor de la prima para el restablecimiento de este límite.
 22. Extensión de Cobertura de Responsabilidad por Privacidad con sublímite de \$100,000,000 toda y cada pérdida y en el agregado anual. Según Texto Adjunto



ace seguros

918 800

POLIZA No.	ANEXO No.	PAG. No.
CONFEDERACION ECUATORIANA DE CAMARAS DE COMERCIO		

POLIZA DE SEGURO DE ERRORES Y OMISIONES

EXCLUSIONES

Mediante el presente endoso a las condiciones generales de la presente póliza, el **Asegurador** agrega las siguientes exclusiones en los siguientes términos:

EL ASEGURADOR NO SERÁ RESPONSABLE DE PAGAR DAÑOS Y/O COSTOS ORIGINADAS EN UNA RECLAMACIÓN:

EXCLUSIÓN DE FALLA MECANICA

ORIGINADA EN, BASADA EN, O ATRIBUIBLE DIRECTA O INDIRECTAMENTE A CUALQUIER INTERRUPCION Y/O FALLAS ELÉCTRICAS O MECÁNICAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITADO A CUALQUIER PERTURBACIÓN ELÉCTRICA, AUMENTO DE VOLTAJE, APAGÓN; E INTERRUPCION DE GAS, AGUA, TELÉFONO, CABLE, SATÉLITE, TELECOMINUCACIONES, FALLA DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET U OTRA INFRAESTRUCTURA

EXCLUSION DE DAÑOS A BIENES BAJO CUIDADO, CUSTODIA O CONTROL DEL ASEGURADO

ORIGINADA EN, BASADA EN, O DE CUALQUIER MANERA ATRIBUIBLE O EN CUALQUIER MANERA RELACIONADA DIRECTAMENTE O INDIRECTAMENTE POR DAÑOS A BIENES BAJO CUIDADO, CUSTODIA O CONTROL DEL ASEGURADO

EXCLUSION DE DAÑO MORAL

ORIGINADA EN, BASADA EN, O DE CUALQUIER MANERA ATRIBUIBLE O EN CUALQUIER MANERA RELACIONADA DIRECTAMENTE O INDIRECTAMENTE POR DAÑO MORAL Y TODO TIPO DE DANOS A CONSECUENCIA DE ESTA

EXCLUSION POR FALTA DE CUMPLIMIENTO CON LOS ESTÁNDARES TÉCNICOS

ORIGINADA EN, BASADA EN, O DE CUALQUIER MANERA ATRIBUIBLE O EN CUALQUIER MANERA RELACIONADA A LA FALTA DE CUMPLIMIENTO CON LOS ESTÁNDARES TÉCNICOS COMÚNMENTE OBSERVADOS EN LA PRÁCTICA PROFESIONAL, REQUERIDO POR LEY, O REGLAMENTADO POR AGENCIAS OFICIALES

EXCLUSION POR INFRACCIONES DE DERECHOS DE AUTOR, PATENTE O MARCA REGISTRADA

ORIGINADA EN, BASADA EN, O DE CUALQUIER MANERA ATRIBUIBLE O EN CUALQUIER MANERA RELACIONADA DIRECTAMENTE O INDIRECTAMENTE POR INFRACCIONES DE DERECHOS DE AUTOR, PATENTE O MARCA REGISTRADA

EXCLUSION POR SEGUROS

ORIGINADA EN, BASADA EN, O DE CUALQUIER MANERA ATRIBUIBLE O EN CUALQUIER MANERA RELACIONADA DIRECTAMENTE O INDIRECTAMENTE POR UNA RECLAMACION DERIVADA DE LA RESPONSABILIDAD DE ASEGURADO POR FALTA DE TENER, CONSEGUIR O OFRECER CUALQUIERA FORMA DE SEGURO O FIANZA O POR FALTA EN NO HABER AVISADO TERCEROS EN MANTENER DICHO SEGURO O FIANZA



ace seguros

912 801

POLIZA NO.	PREMIO NO.	PAG. NO.
CONFEDERACION COLOMBIANA DE CAMARAS DE COMERCIO		

POLIZA DE SEGURO DE ERRORES Y OMISIONES

EXCLUSION POR VEHICULOS

ORIGINADA EN, BASADA EN, O ATRIBUIBLE DIRECTA O INDIRECTAMENTE A LA PROPIEDAD, MANTENIMIENTO, OPERACIÓN, USO, CARGA O DESCARGA, POR O EN NOMBRE DE, O BAJO EL CONTROL DEL **ASEGURADO**, DE EMBARCACIONES, AUTOMÓVILES, VEHÍCULOS MOTORES, AVIONES O VEHÍCULOS MÓVILES DE CUALQUIER TIPO.

MANEJO DE FONDOS

ORIGINADA EN, BASADA EN, O ATRIBUIBLE DIRECTA O INDIRECTAMENTE AL MANEJO O ADMINISTRACIÓN DE FONDOS POR PARTE DEL **ASEGURADO**, BIEN SEAN AJENOS O PROPIOS, INCLUYENDO EL APROVECHAMIENTO O USO INDEBIDO DE FONDOS DE TERCEROS.

EXCLUSION OFAC

ESTE SEGURO NO SE APLICA EN LA MEDIDA EN QUE LAS SANCIONES ECONÓMICAS O COMERCIALES U OTRAS LEYES O REGULACIONES NOS PROHÍBAN PROPORCIONAR EL SEGURO, INCLUIDO, ENTRE OTROS, EL PAGO DE RECLAMACIONES. TODOS LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PÓLIZA NO SE MODIFICAN

Demás términos y condiciones según clausulado **ACE ELITE MISCELANEOS - SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA SERVICIOS MISCELÁNEOS**

LEY &

JURISDICCION:

Ley aplicable:

Colombia

Jurisdicción:

Colombia

REQUERIMIENTOS

DE INFORMACIÓN:

La siguiente información deberá ser entregada a ACE Seguros S.A. representando esta una garantía de la cobertura otorgada.

30 días después de iniciada la vigencia:

- Carta con confirmación de no conocimientos de reclamos y/o circunstancias que puedan llevar a uno.
- Carta con confirmación de no cambios a lo declarado en el formulario de solicitud.
- Por favor indicar el estado de las circunstancias avisadas por la cámara de Comercio de Palmira.

412 802



ace seguros

POLIZA NO.	CAMPO NO.	PAGO NO.
12/12335	2501	
CONFERENCIAS COLOMBIANAS DE CARTAS DE COMERCIO		

POLIZA DE SEGURO DE ERRORES Y OMISIONES

TÉRMINOS DE

PAGO DE PRIMA:

60 días calendario desde inicio de vigencia



ace seguros

POLIZA No.	ANEXO No.	PAG. No.
12/14837	25917	7
CONFEDERACION COLOMBIANA DE CAMARAS DE COMERCIO		

POLIZA DE SEGURO DE ERRORES Y OMISIONES

ENDOSO A LA POLIZA DE CONFECAMARAS

Mediante el presente endoso a las condiciones generales de la presente póliza, el Asegurador agrega la siguiente condición en los siguientes términos:

1. COBERTURA DIFAMACION

LA COBERTURA SE EXTIENDE A CUBRIR LOS DAÑOS Y/O COSTOS A CARGO DEL ASEGURADO QUE SE GENEREN POR CUALQUIER RECLAMACIÓN BASADA EN UNA CALUMNIA O INJURIA INVOLUNTARIA COMETIDA POR UN ASEGURADO, QUE NO DERIVE RESPONSABILIDAD PENAL PARA EL ASEGURADO. ESTA EXTENSION DE COBERTURA NO EXCEDERA \$25,000,000 TODA Y CADA PERDIDA Y EN EL AGREGADO ANUAL

2. COBERTURA PROPIEDAD INTELECTUAL

LA COBERTURA SE EXTIENDE A CUBRIR LOS DAÑOS Y/O COSTOS A CARGO DEL ASEGURADO QUE SE GENEREN POR CUALQUIER RECLAMACIÓN BASADA EN UNA VIOLACION A LA PROPIEDAD INTELECTUAL POR CAUSA DE UN ACTO ERRÓNEO EN LA PRESTACIÓN DE SUS SERVICIOS PROFESIONALES. ESTA EXTENSION DE COBERTURA NO EXCEDERA \$25,000,000 TODA Y CADA PERDIDA Y EN EL AGREGADO ANUAL.

VIOLACION A LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Significa una infracción involuntaria por propiedad intelectual a un tercero que no sea por patente ni secreto comercial

3. PERDIDA DE DOCUMENTOS

EXTENSIÓN DE COBERTURA PARA DAÑOS Y/O COSTOS ORIGINADAS EN UNA RECLAMACIÓN POR PERDIDA DE DOCUMENTOS, CON SUBLÍMITE DE \$50,000,000 TODA Y CADA PERDIDA Y EN EL AGREGADO ANUAL

4. COBERTURA DE ACTOS ERRÓNEOS POR FRAUDE DE EMPLEADOS

MEDIANTE EL PRESENTE ENDOSO A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PRESENTE PÓLIZA, EL ASEGURADOR AGREGA LA SIGUIENTE CONDICIÓN EN LOS SIGÜIENTES TÉRMINOS:

EL ASEGURADOR NO APLICARÁ LA EXCLUSIÓN 3.1 MALA FE O DOLO Y RETRIBUCIONES IMPROCEDENTES POR UNA CONDUCTA FRAUDULENTO O DESHONESTA DE UN ASEGURADO INDIVIDUAL, CUANDO DICHA CONDUCTA NO HAYA SIDO APROBADA EN FORMA EXPRESA O IMPLICITA, Y QUE POR CAUSA DE ESTE ACTO SE OCASIONE UN ACTO ERRÓNEO DEL ASEGURADO. NO OBSTANTE LO ANTERIOR, DICHA EXCLUSION SERÁ PLENAMENTE APLICABLE AL ASEGURADO INDIVIDUAL QUE HAYA COMETIDO LA CONDUCTA DOLOSA.

PARA LA PRESENTE CONDICIÓN SE ENTENDERÁ COMO ASEGURADO INDIVIDUAL:

1. LA PERSONA NATURAL EMPLEADO O CONTRATISTA, DE LA FIRMA, PERO SÓLO EN LO REFERENTE A LOS SERVICIOS PROFESIONALES, DESARROLLADOS EN NOMBRE O REPRESENTACIÓN DE LA MISMA.



ace seguros

920 804

POLIZA No.	ANEXO No.	PAG. No.
12/14837	25917	8
CONFEDERACION COLOMBIANA DE CAMARAS DE COMERCIO		

POLIZA DE SEGURO DE ERRORES Y OMISIONES

2. LAS PERSONAS NATURALES INDEPENDIENTES CONTRATADOS POR LA FIRMA, PERO ÚNICAMENTE CUANDO DESARROLLEN LABORES DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON LOS **SERVICIOS PROFESIONALES** QUE PRESTA LA FIRMA Y CUANDO DICHOS SERVICIOS SON REALIZADOS EN NOMBRE Y BAJO LA SUPERVISIÓN DE ESTA.

ESTA EXTENSION DE COBERTURA NO EXCEDERA \$15,000,000 TODA Y CADA PERDIDA Y EN EL AGREGADO ANUAL

5. RESPONSABILIDAD POR LA PRIVACIDAD

Mediante el presente endoso a las condiciones generales de la presente póliza, el Asegurador agrega la siguiente condición en los siguientes términos:

SUJETO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE ESTA PÓLIZA LA SIGUIENTE EXTENSIÓN DE COBERTURA SERÁ APLICABLE:

SUJETO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES ESTABLECIDOS EN LA CARÁTULA DE ESTA PÓLIZA, EL **ASEGURADOR** INDEMNIZARÁ EN EXCESO DEL DEDUCIBLE Y CON UN SUBLIMITE DE COP\$ 100,000,000 TODA Y CADA PERDIDA Y EN EL AGREGADO, EL **DAÑO Y/O COSTOS Y/O GASTOS**, SEGÚN SEA APLICABLE, A CARGO DEL **ASEGURADO**, PROVENIENTES DE UNA **RECLAMACIÓN** PRESENTADA POR PRIMERA VEZ EN CONTRA DEL **ASEGURADO** DURANTE EL **PERIODO CONTRACTUAL** Y/O DURANTE EL **PERIODO ADICIONAL PARA RECIBIR RECLAMACIONES** EN CASO EN QUE ESTE ÚLTIMO SEA CONTRATADO, DERIVADA DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EN QUE INCURRA DE ACUERDO CON LA LEY, POR CAUSA DE UN **ACTO ERRÓNEO** QUE TENGA LUGAR DESPUÉS DE LA **FECHA DE RETROACTIVIDAD** Y ANTES DE LA TERMINACIÓN DEL **PERIODO CONTRACTUAL** Y QUE SE ENCUENTRE CUBIERTO POR LA SIGUIENTE EXTENSION DE COBERTURA:

RESPONSABILIDAD POR LA PRIVACIDAD

- a. LA FALLA DEL **ASEGURADO** RELACIONADA CON MANEJAR, GESTIONAR, ALMACENAR, DESTRUIR O DE OTRA FORMA CONTROLAR ADECUADAMENTE:
- i. **INFORMACIÓN PERSONAL.**
 - ii. **INFORMACIÓN CORPORATIVA DE TERCEROS** EN CUALQUIER FORMATO SUMINISTRADO AL **ASEGURADO** E IDENTIFICADO ESPECÍFICAMENTE COMO CONFIDENCIAL Y PROTEGIDO BAJO UN ACUERDO DE NO DIVULGACIÓN O CONTRATO SIMILAR CON EL **TOMADOR** O
- b. **ACTO ERRÓNEO** QUE VIOLE LAS POLÍTICAS DE PRIVACIDAD DEL **ASEGURADO** QUE RESULTE EN LA VIOLACIÓN DE LAS NORMAS Y REGULACIONES ASOCIADAS CON EL CONTROL Y USO DE ESTADOS FINANCIEROS PERSONALES IDENTIFICABLES, MÉDICOS Y OTRA INFORMACIÓN SENSIBLE, INCLUYENDO PERO NO LIMITADO A LOS ARTÍCULOS 20 Y 25 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, LA LEY DE HABEAS DATA 1266 DE 2008, LAS NORMAS QUE REGULAN LOS SECRETOS PROFESIONALES DE TODAS LAS PROFESIONES, EL CÓDIGO PENAL, EL CÓDIGO SUSTANTIVO

921805



ace seguros

POLIZA No.	ANEXO No.	PAG. No.
12714535	25917	9
CONFEDERACION COLOMBIANA DE CAMARAS DE COMERCIO		

POLIZA DE SEGURO DE ERRORES Y OMISIONES

DEL TRABAJO, ASÍ COMO CUALQUIER OTRA PROTECCIÓN LEGAL A DATOS NO FINANCIEROS, NACIONAL O EXTRANJERA QUE PROTEJA LA PRIVACIDAD Y EL ROBO DE IDENTIDAD, QUE REQUIERA QUE LAS ENTIDADES COMERCIALES QUE RECOLECTEN INFORMACIÓN CONFIDENCIAL PUBLIQUEN LAS POLÍTICAS DE PRIVACIDAD, ADOPTEN CONTROLES ESPECÍFICOS DE SEGURIDAD O PRIVACIDAD, O NOTIFIQUEN A LOS INDIVIDUOS EN EL EVENTO DE QUE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL SE VEA POTENCIALMENTE COMPROMETIDA.

Para esta extensión de cobertura **INFORMACIÓN PERSONAL**. Se entenderá lo siguiente:

Información Personal

Significa:

- I. El nombre de un individuo, número de identificación nacional (cédula, tarjeta de identidad o cédula de extranjería), datos médicos o de salud, otra información de salud protegida, número de licencia de conducir, número de identificación tributaria N.I.T., número de tarjeta de crédito, número de tarjeta débito, dirección, número de teléfono, número de cuenta, histórico de cuentas, o claves; y
- II. Otra información personal no pública como se define en las normas y regulaciones asociadas con el control y uso de estados financieros personales identificables, médicos y otra información sensible, incluyendo pero no limitado a los artículos 20 y 25 de la constitución política, la ley de habeas data 1266 de 2008, las normas que regulan los secretos profesionales de todas las profesiones, el código penal, el código sustantivo del trabajo, así como cualquier otra protección legal a datos no financieros, nacional o extranjera que proteja la privacidad y el robo de identidad, que requiera que las entidades comerciales que recolecten información confidencial publiquen las políticas de privacidad, adopten controles específicos de seguridad o privacidad, o notifiquen a los individuos en el evento de que la información confidencial se vea potencialmente comprometida;

En cualquier formato en que se encuentre. No se entiende por Información Personal, la que esté legalmente disponible al público general por cualquier razón, incluyendo pero no limitado a la información de los archivos gubernamentales federales, estatales o locales

Los demás términos, condiciones, límites de responsabilidad y exclusiones de la póliza no modificados por este endoso permanecen iguales.



ace seguros

922 006

POLIZA No.	ACESS No.	FECHA
10/14607	25917	10
CONFEDERACION COLOMBIANA DE CAMARAS DE COMERCIO		

POLIZA DE SEGURO DE ERRORES Y OMISIONES

CÁMARAS DE COMERCIO GRUPO 2

Mediante el presente endoso a las condiciones generales de la presente póliza, el **Asegurador** agrega la siguiente condición en los siguientes términos.

Las Cámaras de Comercio a ASEGURAR del GRUPO 2, según los términos, exclusiones y condiciones de la póliza son:

- SOGAMOSO
- GIRARDOT
- QUIBDO
- PUTUMAYO
- BUGA
- CARTAGO
- URABA
- DUITAMA
- FLORENCIA
- ESPINAL
- TULUA
- BUENAVENTURA
- GUAJIRA
- SINCELEJO
- FACATATIVA
- BARRANCABERMEJA
- VALLEDUPAR
- PALMIRA
- ORIENTE ANTIOQUEÑO
- CASANARE

928 807



ace seguros

POLIZA No.	12/1000	FECHA No.	25/17
CONFEDERACIÓN COLOMBIANA DE CÁMARA DE COMERCIO			

POLIZA DE SEGURO DE ERRORES Y OMISIONES

- ARMENIA
- CAUCA
- TUNJA
- PASTO
- SANTA MARTA

Los demás términos, condiciones, límites de responsabilidad y exclusiones de la póliza no modificados por este endoso permanecen iguales.

**ACE ELITE MISCELANEOS - SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA SERVICIOS
MISCELÁNEOS**

CÓDIGO SUPERBANCARIA 18/07/2007-1305-P-06-12EOMIS001

A. CONDICIONES PARTICULARES

B. CONDICIONES GENERALES

1.	COBERTURAS	3
2.	EXTENSIONES DE COBERTURA	3
2.1.	HEREDEROS LEGALES	3
2.2.	CÓNYUGES	3
2.3.	GASTOS LEGALES INCURRIDOS EN UNA INVESTIGACIÓN INICIADA CONTRA LOS ASEGURADOS	4
2.4.	GASTOS PENALES	4
3.	EXCLUSIONES	4
3.1.	MALA FE O DOLO Y RETRIBUCIONES IMPROCEDENTES	4
3.2.	MULTAS Y SANCIONES	4
3.3.	LITIGIOS ANTERIORES O PENDIENTES	5
3.4.	CIRCUNSTANCIAS ANTERIORES	5
3.5.	SEGUROS ANTERIORES	5
3.6.	ASEGURADO CONTRA ASEGURADO	5
3.7.	DAÑOS CORPORALES Y BIENES TANGIBLES	5
3.8.	ENTIDADES RELACIONADAS	5
3.9.	PRÁCTICAS ANTIMONOPOLIO Y COMPETENCIA DESLEAL	6
3.10.	PRACTICAS LABORALES	6
3.11.	INCUMPLIMIENTO POR EXTRALIMITACION PROFESIONAL Y GARANTIAS PURAS	6
3.12.	DIRECTORES Y ADMINISTRADORES	6
3.13.	GUERRA Y TERRORISMO	6
3.14.	CONTAMINACIÓN	6
3.15.	DISCRIMINACION	7
3.16.	ASBESTOS	7
3.17.	REACCIÓN NUCLEAR	7
3.18.	INFLUENCIA DE TOXICOS	7
3.19.	SERVIDORES PUBLICOS	7
3.20.	HONORARIOS	8
4.	LIMITE DE RESPONSABILIDAD	8
5.	DEDUCIBLE	9
6.	REGLAS SOBRE NOTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN	9
6.1.	Notificación de Reclamaciones	9
6.2.	Notificación de Reclamaciones Potenciales	9
6.3.	Asistencia y Cooperación	10
6.4.	Obligaciones del Asegurado	10
7.	COSTOS LEGALES Y DEFENSA DE LA RECLAMACIÓN	10
8.	CONSENTIMIENTO	11
9.	DISTRIBUCIÓN	11
10.	PERÍODO DE REPORTE EXTENDIDO	12
11.	CLÁUSULA DE CANCELACIÓN	12
12.	CONSERVACIÓN DEL ESTADO DEL RIESGO Y NOTIFICACIÓN DE CAMBIOS	13
13.	SUBROGACIÓN Y REPETICIÓN	14
14.	CAMBIOS	14
15.	CONCURRENCIA DE SEGUROS	14
16.	COMUNICACIONES Y REPRESENTATIVIDAD	14

17.	CESION	15
18.	PAGO DE PRIMAS	15
19.	FORMULARIO DE SOLICITUD	15
20.	FRAUDE O DOLO	15
21.	DELIMITACIÓN TEMPORAL	15
22.	RENOVACION	16
23.	DAÑO Y/O COSTOS EN MONEDA EXTRANJERA	16
24.	LEY Y JURISDICCIÓN APLICABLES AL CONTRATO DE SEGUROS	16
25.	DELIMITACION TERRITORIAL	16
26.	DEFINICIONES	16

Todas aquellas palabras que se encuentran en negrilla a lo largo de esta póliza, han sido definidas al final de la misma y deben ser entendidas de acuerdo con su definición. Los títulos y subtítulos que se utilizan a continuación son estrictamente enunciativos y por lo tanto deben ser interpretados de acuerdo al texto que los acompaña.

Basado en las declaraciones hechas en el Formulario de Solicitud de Seguro debidamente diligenciado por el **Tomador**, el cual forma parte de esta póliza, y sujeto a las Condiciones Generales, Condiciones Particulares y/o carátula de la póliza, ACE Seguros S.A. y/o el **Tomador** y los **Asegurados** acuerdan lo siguiente:

CONDICIONES GENERALES

1. COBERTURAS

COBERTURA DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA SERVICIOS MISCELÁNEOS

POR LA PRESENTE PÓLIZA, EL **ASEGURADOR** PAGARÁ EN EXCESO DEL DEDUCIBLE LOS **DAÑOS Y/O COSTOS** A CARGO DEL **ASEGURADO**, PROVENIENTES DE UNA **RECLAMACIÓN** PRESENTADA POR PRIMERA VEZ EN CONTRA DEL **ASEGURADO**, DURANTE EL **PERIODO CONTRACTUAL** Y/O DURANTE EL **PERÍODO DE REPORTE EXTENDIDO**, EN CASO EN QUE ESTE ÚLTIMO SEA CONTRATADO, POR CAUSA DE UN **ACTO ERRÓNEO** EN LA PRESTACIÓN DE SUS **SERVICIOS PROFESIONALES**.

LOS **ACTOS ERRÓNEOS** DEBEN HABER SIDO COMETIDOS CON POSTERIORIDAD AL INICIO DE LA **FECHA DE RETROACTIVIDAD** ESPECIFICADA EN LAS CONDICIONES PARTICULARES, Y DURANTE EL **PERIODO CONTRACTUAL**.

2. EXTENSIONES DE COBERTURA

SUJETO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE ESTA PÓLIZA LAS SIGUIENTES EXTENSIONES DE COBERTURA SERÁN APLICABLES:

2.1. **HEREDEROS LEGALES**

EN EL CASO DE FALLECIMIENTO, INCAPACIDAD O INSOLVENCIA DE CUALQUIER PERSONA NATURAL CONSIDERADO **ASEGURADO**, LA PRESENTE PÓLIZA SE EXTENDERÁ A CUBRIR LOS **DAÑOS Y/O COSTOS** PROVENIENTES DE UNA **RECLAMACIÓN** ENTABLADA CONTRA EL CAUDAL HEREDITARIO, HEREDEROS O REPRESENTANTES LEGALES DE TAL **ASEGURADO** POR CAUSA DE UN **ACTO ERRÓNEO** EN LA PRESTACIÓN DE SUS **SERVICIOS PROFESIONALES** DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES LEGALES Y A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PRESENTE PÓLIZA.

2.2. **CÓNYUGES**

LA COBERTURA SE EXTIENDE A CUBRIR AL CÓNYUGE DE CUALQUIER PERSONA NATURAL CONSIDERADO **ASEGURADO**, CUANDO ESTE DEBA ASUMIR UN **DAÑO Y/O COSTOS** DERIVADOS DE UNA **RECLAMACIÓN** BASADA EN UN **ACTO ERRÓNEO** COMETIDO POR EL **ASEGURADO** EN LA PRESTACIÓN DE SUS **SERVICIOS PROFESIONALES**, Y QUE COMO CONSECUENCIA, SE PRETENDA OBTENER INDEMNIZACIÓN DEL PATRIMONIO DE LOS CITADOS CÓNYUGES. LO ANTERIOR DE ACUERDO A



LAS DISPOSICIONES LEGALES Y A LOS TERMINOS Y CONDICIONES DE LA PRESENTE POLIZA.

2.3. GASTOS LEGALES INCURRIDOS EN UNA INVESTIGACIÓN INICIADA CONTRA LOS ASEGURADOS

LA DEFINICIÓN DE **COSTOS** SE EXTIENDE A CUBRIR HASTA EL LÍMITE DE RESPONSABILIDAD DE LA PÓLIZA, LOS GASTOS Y HONORARIOS QUE, PREVIAMENTE APROBADOS POR ESCRITO POR EL **ASEGURADOR**, SE GENEREN DE LA COMPARECENCIA DE LOS **ASEGURADOS** A CUALQUIER PROCESO ADMINISTRATIVO O INVESTIGACIÓN FORMAL RELACIONADOS CON UN **ACTO ERRÓNEO** DE LOS **ASEGURADOS** EN LA PRESTACIÓN DE SUS **SERVICIOS PROFESIONALES**.

2.4. GASTOS PENALES

LA DEFINICIÓN DE **COSTOS** SE EXTIENDE A CUBRIR HASTA EL LÍMITE DE RESPONSABILIDAD DE LA PÓLIZA, LOS GASTOS Y HONORARIOS QUE SE GENEREN DE LA COMPARECENCIA DE UN **ASEGURADO**, A UN PROCESO PENAL INICIADO POR LA PRESUNTA VIOLACION DE NORMAS PENALES.

3. EXCLUSIONES

EL **ASEGURADOR** NO SERÁ RESPONSABLE DE PAGAR **DAÑOS Y/O COSTOS** ORIGINADAS EN UNA **RECLAMACIÓN**:

3.1. MALA FE O DOLO Y RETRIBUCIONES IMPROCEDENTES

- I. ORIGINADA EN, BASADA EN, O ATRIBUIBLE DIRECTA O INDIRECTAMENTE A LA COMISIÓN DE CUALQUIER ACTO CRIMINAL O MALA CONDUCTA INTENCIONAL, INCLUIDO CUALQUIER ACTO DOLOSO Y CULPA GRAVE (PERO SOLAMENTE CUANDO ESTA SE ASEMEJE AL DOLO). SIN EMBARGO, EL **ASEGURADOR** CUBRIRA LOS **COSTOS** DERIVADOS DE **RECLAMACIONES** RELACIONADAS CON ESTOS EVENTOS, SIN INCURRIR EN RESPONSABILIDAD ALGUNA DE PAGAR LOS **DAÑOS** POR LOS CUALES EL **ASEGURADO** RESULTE RESPONSABLE EN EL CURSO O AL CABO DE LAS **RECLAMACIONES**. EN EL CASO QUE EL **ASEGURADO** SEA RESPONSABLE POR DOLO DEBERA PROCEDER A REEMBOLSAR LOS **COSTOS** RECIBIDOS DEL **ASEGURADOR**, DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA 7 DE ESTA POLIZA.
- II. ORIGINADA EN, BASADA EN, O ATRIBUIBLE DIRECTA O INDIRECTAMENTE AL HECHO DE QUE CUALQUIER **ASEGURADO** HAYA OBTENIDO CUALQUIER BENEFICIO O VENTAJA PERSONAL O PERCIBIDO CUALQUIER REMUNERACIÓN A LA CUAL NO TUVIESE LEGALMENTE DERECHO.

3.2. MULTAS Y SANCIONES

ORIGINADA EN, BASADA EN, O ATRIBUIBLE DIRECTA O INDIRECTAMENTE A MULTAS O SANCIONES PECUNIARIAS O ADMINISTRATIVAS DE CUALQUIER NATURALEZA IMPUESTAS A LOS **ASEGURADOS**. SIN EMBARGO, EL **ASEGURADOR** CUBRIRA LOS **COSTOS** DERIVADOS DE **RECLAMACIONES** RELACIONADAS CON ESTOS EVENTOS Y GENERADOS EXCLUSIVAMENTE EN PRIMERA INSTANCIA, ÚNICAMENTE EN LOS CASOS QUE DICHAS MULTAS O SANCIONES SEAN IMPUESTAS POR AUTORIDADES Y ORGANISMOS DE CONTROL, Y SIEMPRE Y CUANDO ESTOS NO ACTUEN COMO BENEFICIARIOS DEL **SERVICIO PROFESIONAL**. TAMBIEN SE CUBRIRAN LAS



926 015

MULTAS Y SANCIONES IMPUESTAS A UN BENEFICIARIO DEL SERVICIO PROFESIONAL POR UN ACTO ERRÓNEO DEL ASEGURADO

3.3. LITIGIOS ANTERIORES O PENDIENTES

ORIGINADA EN, BASADA EN, O ATRIBUIBLE DIRECTA O INDIRECTAMENTE A LITIGIOS ENTABLADOS Y CONOCIDOS CON ANTERIORIDAD A LA FECHA DE **RECONOCIMIENTO DE ANTIGÜEDAD** A QUE SE REFIERE ESTA PÓLIZA, O QUE TENGAN COMO BASE O DE CUALQUIER MANERA SEAN ATRIBUIBLES A LOS MISMOS HECHOS, O ESENCIALMENTE LOS MISMOS HECHOS, QUE HUBIESEN SIDO ALEGADOS EN CUALQUIERA DE DICHOS LITIGIOS, AÚN CUANDO HAYAN SIDO INICIADOS CONTRA TERCEROS.

3.4. CIRCUNSTANCIAS ANTERIORES

ORIGINADA EN, BASADA EN, O ATRIBUIBLE DIRECTA O INDIRECTAMENTE A HECHOS, CIRCUNSTANCIAS, O SITUACIONES QUE HAYAN SIDO CONOCIDAS O QUE RAZONABLEMENTE HA DEBIDO DE HABER CONOCIDO EL **ASEGURADO**, EN O CON ANTERIORIDAD A LA FECHA DE **RECONOCIMIENTO DE ANTIGÜEDAD** DE ESTA PÓLIZA.

3.5. SEGUROS ANTERIORES

ORIGINADA EN, BASADA EN, O ATRIBUIBLE DIRECTA O INDIRECTAMENTE A LOS HECHOS QUE YA HUBIESEN SIDO ALEGADOS, O A UN **ACTO ERRÓNEO** QUE YA HUBIESE SIDO ALEGADO O QUE HUBIESE ESTADO RELACIONADO CON CUALQUIER **RECLAMACIÓN** REPORTADA ANTERIORMENTE, O CUALESQUIERA CIRCUNSTANCIAS DE LAS CUALES SE HAYA DADO AVISO BAJO CUALQUIER CONTRATO DE SEGURO O PÓLIZA DE LA CUAL ÉSTA SEA UNA RENOVACIÓN O REEMPLAZO, O A LA QUE PUEDA EVENTUALMENTE REEMPLAZAR.

3.6. ASEGURADO CONTRA ASEGURADO

PRESENTADA POR O EN BENEFICIO DIRECTO O INDIRECTO DE CUALQUIER **ASEGURADO** AMPARADO BAJO ESTA POLIZA.

3.7. DAÑOS CORPORALES Y BIENES TANGIBLES

ORIGINADA EN, BASADA EN, O ATRIBUIBLE DIRECTA O INDIRECTAMENTE A CUALQUIER **DAÑO CORPORAL**, ENFERMEDAD O MUERTE DE UNA PERSONA, O DAÑOS O DESTRUCCION DE BIENES TANGIBLES, NO OBSTANTE ESTA EXCLUSION NO RESULTARÁ APLICABLE A ENFERMEDAD MENTAL, EMOCIONAL O HUMILLACION CAUSADA A TITULO DE **PERJUICIO O LESION PERSONAL**.

3.8. ENTIDADES RELACIONADAS

ORIGINADA EN, BASADA EN, O ATRIBUIBLE DIRECTA O INDIRECTAMENTE A **SERVICIOS PROFESIONALES** DESEMPEÑADOS O PRESTADOS POR EL **ASEGURADO** PARA CUALQUIER ENTIDAD, SOCIEDAD O EMPRESA, SI AL TIEMPO DE LA PRESTACIÓN DE LOS **SERVICIOS PROFESIONALES**:

- I. EL **ASEGURADO** GERENCIABA DICHA ENTIDAD;
- II. EL **ASEGURADO** ERA UN SOCIO, DIRECTOR, O EMPLEADO DE DICHA ENTIDAD;
- III. EL **ASEGURADO** POSEÍA O POSEE, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, 10% O MÁS DE TAL ENTIDAD SI LA MISMA FUERA PUBLICA, O EL 30% O MÁS SI FUERA PRIVADA.

3.9. PRÁCTICAS ANTIMONOPOLIO Y COMPETENCIA DESLEAL

ORIGINADA EN, BASADA EN, O ATRIBUIBLE DIRECTA O INDIRECTAMENTE A FIJACIÓN DE PRECIOS, RESTRICCIÓN DEL COMERCIO, MONOPOLIZACIÓN O COMPETENCIA DESLEAL.

3.10. PRACTICAS LABORALES

ORIGINADA EN, BASADA EN, O ATRIBUIBLE DIRECTA O INDIRECTAMENTE A RESPONSABILIDAD DERIVADA DE INCORRECTAS PRACTICAS LABORALES.

3.11. INCUMPLIMIENTO POR EXTRALIMITACION PROFESIONAL Y GARANTIAS

PURAS

ORIGINADA EN, BASADA EN, O ATRIBUIBLE DIRECTA O INDIRECTAMENTE A RECLAMACIONES GENERADAS POR O RESULTANTES DEL INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR LOS ASEGURADOS, DISTINTAS O QUE EXCEDAN LAS FIJADAS POR LA LEY PARA EL EJERCICIO DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL ASEGURADO.

SE ENTIENDEN IGUALMENTE EXCLUIDAS LAS OBLIGACIONES QUE CONLLEVEN LA GARANTIA DE UN RESULTADO ESPECIFICO O LAS RECLAMACIONES RESULTANTES DEL INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE RESULTADO.

3.12. DIRECTORES Y ADMINISTRADORES

ORIGINADA EN, BASADA EN, O ATRIBUIBLE DIRECTA O INDIRECTAMENTE A ACTIVIDADES REALIZADAS POR UN ASEGURADO QUE TOTAL O PARCIALMENTE SIRVA, COMO MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA O ALTO EJECUTIVO DE LA FIRMA O DE CUALQUIER OTRA ENTIDAD.

3.13. GUERRA Y TERRORISMO

ORIGINADA EN, BASADA EN, O ATRIBUIBLE DIRECTA O INDIRECTAMENTE A:

- I. GUERRA CIVIL O INTERNACIONAL SEAN ESTAS DECLARADAS O NO, INVASIÓN, ACTOS DE ENEMIGOS EXTRANJEROS, HOSTILIDADES U OPERACIONES BÉLICAS O SIMILARES (SIN PERJUICIO DE QUE LA GUERRA HAYA SIDO O NO DECLARADA), HUELGA, PAROS PATRONALES, ACTOS MALINTENCIONADOS DE TERCEROS, REBELIÓN, REVOLUCIÓN, INSURRECCIÓN, O CONMOCIÓN CIVIL ALCANZADO LA PROPORCION DE, O LLEGANDO A CONSTITUIRSE EN UN LEVANTAMIENTO, PODER MILITAR O USURPADO
- II. CUALQUIER ACTO DE TERRORISMO INCLUYENDO PERO NO LIMITADO AL USO DE FUERZA O VIOLENCIA Y/O LA AMENAZA DE LA MISMA, DIRIGIDOS A O QUE CAUSEN DAÑO, LESIÓN, ESTRAGO O INTERRUPCIÓN O COMISIÓN DE UN ACTO PELIGROSO PARA LA VIDA HUMANA O PROPIEDAD, EN CONTRA DE CUALQUIER PERSONA, PROPIEDAD O GOBIERNO, CON OBJETIVO ESTABLECIDO O NO ESTABLECIDO DE PERSEGUIR INTERESES ECONÓMICOS, ÉTNICOS, NACIONALISTAS, POLÍTICOS, RACIALES O INTERESES RELIGIOSOS, SI TALES INTERESES SON DECLARADOS O NO.

3.14. CONTAMINACIÓN

ORIGINADA EN, BASADA EN, O ATRIBUIBLE DIRECTA O INDIRECTAMENTE A

- I. CUALQUIER AMENAZA, REAL O SUPUESTA, DE DESCARGA, DISPERSIÓN, FILTRACIÓN, MIGRACIÓN, LIBERACIÓN O ESCAPE DE **CONTAMINANTES** EN CUALQUIER OCASIÓN; O
- II. CUALQUIER REQUERIMIENTO, DEMANDA U ORDEN RECIBIDA POR UN **ASEGURADO** PARA MONITOREAR, LIMPIAR, REMOVER, CONTENER, TRATAR O NEUTRALIZAR, O DE CUALESQUIERA FUERA LA FORMA RESPONDER A, O CALCULAR LOS EFECTOS DE LOS **CONTAMINANTES** INCLUYENDO PERO NO LIMITANDO A CUALQUIER **RECLAMACIÓN**, JUICIO O PROCESO POR O EN NOMBRE DE UNA AUTORIDAD GUBERNAMENTAL, UNA PARTE POTENCIALMENTE RESPONSABLE O CUALQUIER OTRA PERSONA FÍSICA O ENTIDAD POR **DAÑOS** DEBIDOS A PRUEBAS, MONITOREO, LIMPIEZA, REMOCIÓN, CONTENCIÓN, TRATAMIENTO, DESINTOXICACIÓN O NEUTRALIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE LOS **CONTAMINANTES**.

3.15. **DISCRIMINACION**

ORIGINADA EN, BASADA EN, O ATRIBUIBLE DIRECTA O INDIRECTAMENTE A:

- I. DISCRIMINACIÓN ILEGAL DE CUALQUIER TIPO QUE FUERE Y COMETIDA FRENTE A CLIENTES Y TERCEROS
- II. HUMILLACIÓN O ACOSO, PROVENIENTE DE, O RELACIONADA CON TAL TIPO DE DISCRIMINACIÓN.

3.16. **ASBESTOS**

ORIGINADA EN, BASADA EN, O ATRIBUIBLE DIRECTA O INDIRECTAMENTE A ASBESTOS, O A CUALQUIER **DAÑO CORPORAL** O DAÑO A BIENES TANGIBLES, CAUSADO POR ASBESTOS, O PRESUNTO ACTO, ERROR, OMISIÓN U OBLIGACIÓN QUE INVOLUCRE ASBESTOS, SU USO, EXPOSICIÓN, PRESENCIA, EXISTENCIA, DETECCIÓN, REMOCIÓN, ELIMINACIÓN, O USO DE ASBESTOS EN CUALQUIER AMBIENTE, CONSTRUCCIÓN O ESTRUCTURA.

3.17. **REACCIÓN NUCLEAR**

ORIGINADA EN, BASADA EN, O ATRIBUIBLE DIRECTA O INDIRECTAMENTE A LOS EFECTOS DE EXPLOSION, ESCAPE DE CALOR, IRRADIACIONES PROCEDENTES DE LA TRANSMUTACION DE NUCLEOS DE ATOMOS DE RADIOACTIVIDAD, ASI COMO LOS EFECTOS DE RADIACIONES PROVOCADAS POR TODO ENSAMBLAJE NUCLEAR, ASI COMO CUALQUIER INSTRUCCION O PETICION PARA EXAMINAR, CONTROLAR, LIMPIAR, RETIRAR, CONTENER, TRATAR, DESINTOXICAR O NEUTRALIZAR MATERIAS O RESIDUOS NUCLEARES.

3.18. **INFLUENCIA DE TOXICOS**

ORIGINADA EN, BASADA EN, O ATRIBUIBLE DIRECTA O INDIRECTAMENTE A LOS **DAÑOS** CAUSADOS POR EL **ASEGURADO** CUANDO ESTE ACTÚE O HAYA ACTUADO BAJO LA INFLUENCIA DE TÓXICOS, INTOXICANTES, NARCÓTICOS, ALCALOIDES O ALCOHOL BIEN SEA QUE HAYA SIDO O NO INDUCIDO POR UN TERCERO.

3.19. **SERVIDORES PUBLICOS**

ORIGINADA EN, BASADA EN, O ATRIBUIBLE DIRECTA O INDIRECTAMENTE A ACTOS DEL **ASEGURADO** EN SU CARÁCTER DE FUNCIONARIO O SERVIDOR PUBLICO SEGÚN LO DEFINE LA LEY 80, 1993 Y NORMAS

COMPLEMENTARIAS Y/O EN EJERCICIO DE CUALQUIER CARGO DE CARÁCTER PÚBLICO.

3.20. HONORARIOS

ORIGINADA EN, BASADA EN, O ATRIBUIBLE DIRECTA O INDIRECTAMENTE A **RECLAMOS** MOTIVADOS EN LA LIQUIDACIÓN Y COBRO DE HONORARIOS PROFESIONALES.

3.21. RESPONSABILIDAD CIVIL POR PRODUCTOS

ORIGINADA EN, BASADA EN, O ATRIBUIBLE DIRECTA O INDIRECTAMENTE AL DISEÑO O MANUFACTURA DE BIENES O PRODUCTOS VENDIDOS, PROPORCIONADOS O DISTRIBUIDOS POR EL **ASEGURADO** O POR OTRO BAJO SU PERMISO O MEDIANTE LICENCIA OTORGADA POR EL **ASEGURADO**. (LA PRESENTE EXCLUSIÓN NO APLICARÁ A DEFECTOS DE PRODUCTOS O TRABAJOS TERMINADOS ELABORADOS O DISTRIBUIDOS POR EL **ASEGURADO** EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS **SERVICIOS PROFESIONALES** PARA LOS CUALES HAYA SIDO DESIGNADO, SI TALES DEFECTOS O ERRORES PROVIENEN DE FALLAS DEL **ASEGURADO** EN EL DISEÑO, ELABORACIÓN Y UTILIZACIÓN DE FORMULAS, PLANOS, ESPECIFICACIONES O INSTRUCCIONES).

3.22. GARANTÍAS Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES

ORIGINADA EN, BASADA EN, O ATRIBUIBLE DIRECTA O INDIRECTAMENTE A LAS GARANTÍAS, OBLIGACIONES O RESPONSABILIDADES ASUMIDAS POR EL **ASEGURADO** BAJO CONTRATO, SALVO QUE ESTAS FUERAN EXIGIBLES AUN EN AUSENCIA DE DICHO CONTRATO.

4. LÍMITE DE RESPONSABILIDAD

El Límite de Responsabilidad establecido en las condiciones particulares y/o en la carátula de la póliza como límite agregado de responsabilidad, es el máximo de responsabilidad del **Asegurador** en relación con todos los **Daños y/o Costos** producto de todas las **Reclamaciones** cubiertas por esta Póliza, independientemente de la cantidad de **Asegurados**, **Reclamaciones** hechas o personas o entidades que efectúen tales **Reclamaciones**.

El **Asegurador** no estará obligado, en ningún caso, a pagar **Daños y/o Costos** que excedan el Límite agregado de **Responsabilidad** aplicable, una vez éste haya sido agotado por el pago de **Daños y/o Costos**.

Todas las **Reclamaciones** derivadas del mismo **Acto Erróneo** se considerarán como una sola **Reclamación**, la cual estará sujeta a un único límite de responsabilidad por **reclamación** establecido en las condiciones particulares y/o en la carátula de la póliza. Dicha **Reclamación** se considerará presentada por primera vez en la fecha en que la primera del conjunto de las **Reclamaciones** haya sido presentada, sin importar si tal fecha tuvo lugar durante o con anterioridad al inicio del **Periodo Contractual**.

Así mismo, la serie de **Actos Erróneos** que son o están temporal, lógica o causalmente conectados por cualquier hecho, circunstancia, situación o evento se considerarán una misma **Reclamación** y constituirán un solo y único **Daño y/o Costos** sin importar el número de reclamantes y/o **Reclamaciones** formuladas. La responsabilidad máxima del **Asegurador** por dicho **Daño y/o Costos**, no excederá el límite de responsabilidad por **reclamación** establecido en las condiciones particulares y/o en la carátula de la póliza.

5. DEDUCIBLE

El **Asegurador** será exclusivamente responsable de pagar los **Daños y/o Costos** en exceso del deducible fijado en las condiciones particulares y/o en la carátula de la póliza de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 1128 del Código de Comercio. Se aplicará un solo deducible a los **Daños y/o Costos** originados en **Reclamaciones** derivadas del mismo **Acto Erróneo**. La cuantía del deducible sumada a los **Daños y/o Costos** pagados por el **Asegurador**, reducirá el límite de responsabilidad.

El Deducible será a cargo del **Asegurado** y de acuerdo con lo previsto por el artículo 1103 del Código de Comercio no podrá ser objeto de cobertura de seguro sin el consentimiento previo del **Asegurador**.

6. REGLAS SOBRE NOTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN

6.1. Notificación de Reclamaciones

En cumplimiento al Artículo 1075 del Código de Comercio, el **Asegurado**, deberá avisar al **Asegurador** acerca de la presentación de cualquier reclamación judicial o extrajudicial al **Asegurado**, o de cualquier circunstancia que pueda dar lugar a **Daños y/o Costos** a cargo del **Asegurado**, dentro de los diez (10) días calendario comunes siguientes a la fecha que los haya conocido o debido conocer.

El **Asegurado** deberá tomar todas las medidas necesarias para adelantar una defensa adecuada de sus intereses, sujeto a lo dispuesto en la Cláusula 7 "**Costos legales y defensa de la Reclamación**", y deberá mantener al **Asegurador** permanentemente informado sobre el desarrollo de la **Reclamación** en su contra.

Si debido al incumplimiento de este deber se perjudicaran o disminuyeran las posibilidades de defensa de la **Reclamación**, el **Asegurador** podrá reclamar al **Asegurado** los daños y perjuicios en proporción a la culpa de los mismos y al perjuicio sufrido.

Si el incumplimiento del **Asegurado** se produjera con la manifiesta intención de perjudicar o de engañar al **Asegurador** o si se obrase dolosamente con los reclamantes o con los afectados, el **Asegurador** quedará librado de toda responsabilidad bajo la póliza.

6.2. Notificación de Reclamaciones Potenciales

Si durante el **Período Contractual** o durante el **Periodo de Reporte Extendido**, en caso de que éste último sea contratado, el **Asegurado** tuviere conocimiento de cualquier **Acto Erróneo** que pueda razonablemente dar origen a una **Reclamación cubierta por esta póliza**, deberá durante el **Período Contractual**, dar notificación por escrito de ello al **Asegurador** mencionando todos los detalles que razonablemente conozca o deba conocer, incluyendo, pero no limitado a:

- I. El **Acto Erróneo** alegado durante la prestación de los **Servicios Profesionales**.
- II. Las fechas y personas involucradas;
- III. La identidad posible o anticipada de los Demandantes;
- IV. Las circunstancias por las cuales el **Asegurado** tuvo conocimiento por primera vez de la posible **Reclamación**.

Cumplidos estos requisitos, cualquier **Reclamación** posteriormente efectuada contra el **Asegurado** y proveniente de dicho **Acto Erróneo**, que haya sido debidamente reportado al **Asegurador**, será considerada como efectuada en el **Período Contractual**.

6.3. Asistencia y Cooperación

En desarrollo de las obligaciones legales previstas en el artículo 1074 y concordantes del Código de Comercio, el **Asegurado** cooperará con el **Asegurador** y le suministrará toda la información y asistencia que el **Asegurador** pueda razonablemente requerir, incluyendo pero no limitada a, la presentación en audiencias, descargos y juicios y la asistencia para la celebración de arreglos, asegurando y suministrando evidencia, obteniendo la presencia de los testigos y adelantando la defensa de cualquier **Reclamación** cubierta por esta Póliza. El **Asegurado** no hará nada que pueda llegar a perjudicar la posición del **Asegurador**.

El incumplimiento de las obligaciones que le corresponden con ocasión del siniestro y en especial, las establecidas en los párrafos 6.2 y 6.3 anterior, acarreará los efectos jurídicos establecidos en el artículo 1078 del Código de Comercio.

6.4. Obligaciones del Asegurado

De conformidad con el Artículo 1077 del Código de Comercio, una vez acaecido el **Daño y/o Costos**, el **Asegurado** deberá suministrar al **Asegurador** la información, documentos y pruebas necesarias para demostrar la ocurrencia del siniestro y la cuantía del **Daño y/o Costos**, según lo exigido por la ley. El **Asegurador**, mediante esta póliza, solicita al **Asegurado** que adjunte al reclamo formal todos los documentos, comprobantes contables y facturas, entre otros, que le permitan establecer la ocurrencia de los supuestos establecidos en el artículo 1077 del Código de Comercio.

7. COSTOS LEGALES Y DEFENSA DE LA RECLAMACIÓN

El **Asegurador** pagará los **Costos** en que incurra el **Asegurado** con la previa autorización del **Asegurador**, para la defensa de cualquier **Reclamación** que le sea formulada o presentada aún cuando los hechos que den lugar a la **Reclamación** no tengan fundamento, fueran falsos o fraudulentos, los cuales se pagarán en la medida en que se vayan incurriendo. El **Asegurador** pagará los **Costos** siempre y cuando los hechos y circunstancias que den origen a las **Reclamaciones** no se encuentren desprovistos de cobertura o se encuentren excluidos de la cobertura ofrecida por la presente Póliza.

Si se llegare a determinar que los **Costos** no están cubiertos por esta póliza, el **Asegurado** deberá rembolsar la integridad de las mismas al **Asegurador**. Para el efecto, al momento en que el **Asegurador** apruebe y proceda a desembolsar los **Costos**, el **Asegurado** suscribirá a favor del **Asegurador**, un documento en este sentido.

El **Asegurado** designará un abogado para asumir la defensa, más no incurrirá en **Costos**, sin contar previamente con el consentimiento por escrito del **Asegurador** tanto con respecto al abogado que adelantará la defensa como el monto de los honorarios que se le pagarían. Será obligación del **Asegurado** y no del **Asegurador** asumir la defensa de la **Reclamación**. El **Asegurador** tendrá el derecho de nombrar en cualquier momento

un ajustador, representante o un abogado y a hacer todas y tantas investigaciones y defensas de una **Reclamación** como considere necesario.

En el caso que el **Asegurador** en ejercicio del anterior derecho haya asumido la defensa del **Asegurado** será igualmente su derecho devolver el control de la defensa de la **Reclamación** al **Asegurado** en cualquier momento en que el **Asegurador** lo considere sin que el **Asegurado** pueda negarse a retomar la defensa de dicha **Reclamación**.

El límite o sublímite de responsabilidad del **Asegurador** establecido para la cobertura de **Costos** en la carátula de la póliza y/o en sus condiciones particulares son parte integral, y no ofrecen cobertura adicional al Límite de Responsabilidad del **Asegurador** y en consecuencia, el pago por parte del **Asegurador** de las **Costos** reduce el **Límite de Responsabilidad** aplicable. Los **Costos** están sujetos a los deducibles expresamente indicados en la carátula de la póliza y/o en sus condiciones particulares o cualquier anexo o endoso.

8. CONSENTIMIENTO

El **Asegurado** no podrá admitir su responsabilidad, ni liquidar o intentar liquidar **Reclamo** alguno sin el consentimiento escrito del **Asegurador**, quien tendrá derecho en cualquier momento a intervenir en el manejo de la defensa o liquidación del **Reclamo**, si el **Asegurador** así lo considere conveniente.

El **Asegurador** no liquidará **Reclamo** alguno sin el consentimiento de los **Asegurados**. Si éstos se rehusaran a prestar su consentimiento en relación con un acuerdo sugerido por el **Asegurador**, su responsabilidad no excederá el monto de dicho acuerdo, incluyendo los **Costos** incurridos desde el momento en que el **Asegurador** solicitó el consentimiento del **Asegurado** hasta la fecha de rechazo. En el evento en que se logre un acuerdo entre **Asegurado** y **Asegurador**, ambas partes realizarán sus mejores esfuerzos para determinar un reparto justo y equitativo de los **Costos** incurridos para lograr dicho acuerdo, a fin de que sean asumidos por ellas.

9. DISTRIBUCIÓN

En el evento en que una **Reclamación** de lugar a un **Daño** y/o **Costos** cubierto por esta póliza y a un **Daño** y/o **Costos** no cubiertos por la póliza, el **Asegurado** y el **Asegurador** distribuirán dicho **Daño** y/o **Costos** de acuerdo con la responsabilidad legal de las partes.

Si **Asegurado** y **Asegurador** no lograren llegar a un acuerdo en relación con los **Costos** que deben ser desembolsados para la atención de dicha **Reclamación**, el **Asegurador** suministrará los **Costos** que considere razonablemente cubiertos bajo la Póliza hasta que se acuerde o se determine una distribución diferente. Cualquier distribución o anticipo de **Costos** en relación con una **Reclamación** no creará presunción alguna respecto a la distribución de otro **Daño** y/o **Costos** originados por dicha **Reclamación**.

Si no obstante lo anterior, las partes no llegaren a un acuerdo en la distribución del **Daño** y/o **Costos**, someterán sus diferencias a **Arbitraje**.

Una vez acordada o determinada la distribución de **Costos**, estos serán aplicados de manera retroactiva a todos los ya incurridos en relación con dicha **Reclamación**, sin perjuicio de cualquier anticipo previo que haya sido efectuado. El **Asegurador** suministrará los **Costos** futuros de acuerdo con la distribución acordada.

10. PERÍODO DE REPORTE EXTENDIDO

La cobertura de esta póliza se extenderá a cubrir los **Daños y/o Costos** derivados de una **Reclamación** que sea formulada por primera vez en contra del **Asegurado**, y presentada por éste al **Asegurador** durante esta extensión que se denominará **Periodo de Reporte Extendido**.

Los términos y condiciones del último **Periodo Contractual** de la póliza, continuarán siendo aplicables al **Periodo de Reporte Extendido**. Las **Reclamaciones** presentadas contra los **Asegurados** durante el **Periodo de Reporte Extendido** deben basarse en **Actos Erróneos** derivados de la prestación de los **Servicios Profesionales**, que generen un **Daño y/o Costos** cubiertos por la póliza, siempre y cuando dichos **Actos Erróneos** se hayan cometido después del inicio de la **Fecha de Retroactividad** y hasta la fecha de entrada en vigor del **Periodo de Reporte Extendido**. Cualquier **Reclamación** presentada durante el **Periodo de Reporte Extendido** será considerada como si hubiere sido presentada durante el **Periodo Contractual** inmediatamente anterior.

El **Periodo de Reporte Extendido** se otorgará previa solicitud del **Asegurado**, si la póliza es terminada, revocada o no renovada por cualquier razón diferente al no pago de prima o al incumplimiento de alguna obligación a cargo del **Asegurado** bajo la póliza, y siempre y cuando ésta no sea reemplazada por otra póliza de la misma naturaleza, tomada con ésta o con otra Compañía de Seguros. La vigencia y la prima de este periodo serán las indicadas en la carátula de la póliza y/o condiciones particulares. Para ejercer el derecho que esta cláusula otorga, los **Asegurados** deberán comunicar por escrito al **Asegurador** su intención de contratar el **Periodo de Reporte Extendido**, debiendo pagar la prima establecida en las condiciones particulares y/o en la carátula de la póliza, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha de terminación, revocación o no renovación de la póliza.

El límite de responsabilidad aplicable durante el **Periodo de Reporte Extendido** será el que continúe disponible a la expiración del último **Periodo Contractual**, no suponiendo de ninguna forma que el **Periodo de Reporte Extendido** implique un reinstalamento del límite de responsabilidad.

11. CLÁUSULA DE CANCELACIÓN

Este contrato podrá ser revocado unilateralmente por los contratantes:

- I. Por el **Asegurador**, mediante comunicación escrita al **Asegurado**, enviada a su última dirección conocida, con no menos de diez (10) días de antelación, contados a partir de la fecha del envío y sujeto a los términos del artículo 1071 del Código de Comercio Colombiano;
- II. Por el **Asegurado**, en cualquier momento, mediante aviso escrito al **Asegurador**.

En el primer caso, la revocación da derecho al **Asegurado** a recuperar la prima no devengada, o sea, la que corresponde al lapso comprendido entre la fecha que comienza a surtir efecto la revocación y la de vencimiento del contrato. La devolución se calculará de igual modo, si la revocación resulta del mutuo acuerdo de las partes.

En el segundo caso, el importe de la prima devengada y el de la devolución se calcularán tomando en cuenta la tarifa de seguros a corto plazo.

12. CONSERVACIÓN DEL ESTADO DEL RIESGO Y NOTIFICACIÓN DE CAMBIOS

Los **Asegurados**, según el caso, están obligados a mantener el estado del riesgo. En tal virtud deberán notificar por escrito al **Asegurador** los hechos o circunstancias no previsibles que sobrevengan con posterioridad a la celebración del contrato, y que signifiquen agravación del riesgo o variación de su identidad local incluyendo pero no limitándose a la Aceptación de un contrato que supere en un 25% los ingresos del mayor contrato reportado en el Formulario de Solicitud y/o cambio en la especialización de la labor de la Firma.

Para efectos de esta póliza, además se entiende como agravación del estado del riesgo, sin perjuicio de los demás hechos y circunstancias que tengan tal carácter, las siguientes:

- I. La cesión a cualquier título de mas del 50% de las acciones con derecho a voto de la Firma; o
- II. La fusión o absorción por otra sociedad de la Firma ; o
- III. La liquidación obligatoria, toma de posesión o intervención administrativa, liquidación forzosa administrativa, o la imposición de otra medida que persiga los mismos fines que las anteriores independientemente de su denominación legal; o
- IV. La adquisición del control de la Firma por cualquier gobierno, autoridad competente, o por funcionarios designados por los mismos;

Resultando en un cambio en:

- I. La posesión directa o indirecta de la mayoría de los derechos de voto; o
- II. El derecho de nombramiento o cese de la mayoría de los miembros de la Junta Directiva, Consejo de Administración, u otros órganos de administración; o
- III. El control efectivo con base en un acuerdo escrito con otros accionistas de la mayoría de los derechos de voto,

La notificación se hará con antelación de no menos de diez (10) días a la fecha de la modificación del riesgo, si esta depende del arbitrio de los **Asegurados**. Si la modificación del riesgo les es extraña, se deberá avisar al **Asegurador** dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha en que se tenga conocimiento de este cambio, conocimiento que se presume transcurridos 30 días desde el momento de la modificación.

Una vez notificada la modificación del riesgo en los términos consignados aquí, el **Asegurador** podrá revocar el contrato o exigir el reajuste a que haya lugar en el valor de la prima.

En caso de falta de notificación oportuna la presente póliza cubrirá solamente las **Reclamaciones** derivadas de **Actos Erróneos** por la prestación de **Servicios Profesionales** realizados antes del día en que se llevaron a cabo dichos cambios.

13. SUBROGACIÓN Y REPETICIÓN

El **Asegurador**, una vez efectuados cualesquiera de los pagos previstos en esta póliza, se subrogará hasta el límite de tal o tales pagos y podrá ejercer los derechos y las acciones que por razón del siniestro correspondieran al **Asegurado**. Para estos efectos, el **Asegurado** prestará toda la colaboración que sea precisa para la efectividad de la subrogación, incluyendo la formalización de cualesquiera documentos que fuesen necesarios para dotar al **Asegurador** de legitimación activa para demandar judicialmente por sí o, en su caso, en nombre de la **Firma** y/o los **Asegurados**. Así mismo, al **Asegurado** le está prohibido renunciar a sus derechos contra los terceros responsables del siniestro so pena de perder el derecho a la indemnización en caso de incumplir con esta obligación.

Sin perjuicio de las exclusiones establecidas en esta póliza, El **Asegurador** puede presentar una demanda de recobro contra los **Asegurados**, por la cantidad del **Daño** y/o **Costos** que ha tenido que pagar a la parte perjudicada o a los beneficiarios, en relación con una acción directa contra el **Asegurador** por dicha tercera parte, si los **Daños** y/o **Costos** se generaron por un acto fraudulento de los **Asegurados**.

14. CAMBIOS

La notificación a cualquier intermediario o corredor de seguros o el conocimiento por parte de éstos últimos, de cambios solicitados por el **Asegurado** con respecto a los términos de la cobertura, no producirá un cambio en ninguna de las partes o condiciones de esta póliza; ni tampoco los términos de esta Póliza, serán cambiados o modificados excepto mediante un endoso o anexo emitido para formar parte de esta Póliza y firmado por un representante autorizado del **Asegurador**.

15. CONCURRENCIA DE SEGUROS

Cuando cualquier **Daño** y/o **Costos** definidos bajo esta Póliza estuviere también cubierto, en todo o en parte, por otra póliza válida emitida por otro **Asegurador**, esta Póliza cubrirá, con sujeción a sus términos y condiciones, dicho **Daño** y/o **Costos** solo en la medida en que su importe sobrepase el límite de indemnización de dicha póliza agotado íntegramente por el pago en moneda de curso legal del **Daño** y/o **Costos** cubiertos bajo dicha póliza, y únicamente en cuanto a dicho exceso. En el caso de que tal póliza esté suscrita solamente como seguro de exceso específico por encima del Límite de Responsabilidad establecido en esta Póliza, el **Daño** y/o **Costos** serán cubiertos por esta Póliza con sujeción a sus términos y condiciones.

16. COMUNICACIONES Y REPRESENTATIVIDAD

Se acuerda que la **Firma** actuará por derecho propio y en nombre de sus Filiales, en el caso que estas estén incluidas en la cobertura, y de todas las personas naturales consideradas **Asegurados**, en todo en cuanto concierne al envío y recepción de comunicaciones de demandas, resolución, terminación o revocación de este contrato, pago de primas y recibo de cualquier devolución de primas que pueda devenir obligatoria según esta póliza, recibo y aceptación de cualesquiera suplementos, anexos o endosos de esta póliza y al ejercicio o la negativa a ejercitar cualquier derecho al **Periodo de Reporte Extendido**.

17. CESION

En aplicación de los mandatos previstos en el artículo 1107 del Código de Comercio en concordancia con el artículo 1086 del mismo Código la cesión de interés asegurable o de los derechos previstos a favor del **Asegurado** en la presente Póliza no será válida ni producirá efecto alguno a menos que medie consentimiento por escrito del **Asegurador**.

18. PAGO DE PRIMAS

El **Tomador** está obligado al pago de la prima. Salvo disposición legal o contractual en contrario, deberá hacerlo a más tardar dentro del mes siguiente contado a partir de la fecha de la entrega de la póliza o si fuere el caso, de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella. Si en la póliza no se determina ningún lugar para el pago de la prima, se entenderá que éste ha de hacerse en el domicilio del **Asegurador** o en el de sus representantes o agentes debidamente autorizados.

La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del contrato y dará derecho al **Asegurador** para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato.

19. FORMULARIO DE SOLICITUD

Para emitir esta Póliza el **Asegurador** se ha basado en la información y declaraciones contenidas en el formulario de solicitud de seguro, cuestionarios complementarios, estados financieros y demás información exigida para la suscripción y sometidos al **Asegurador**, dichas declaraciones son la base de la aceptación del riesgo y de los términos y condiciones de esta Póliza, y por lo tanto se considerarán como parte integrante de la misma.

20. FRAUDE O DOLO

Fuera de los casos que contempla el Código de Comercio y legislación complementaria en materia de seguros, las obligaciones del **Asegurador** quedarán extinguidas en los siguientes supuestos:

- I. Si el **Asegurado** con el fin de hacer incurrir en el error, disimulara o declarara inexactamente hechos que liberarían al **Asegurado** de sus obligaciones o podrían limitarlas.
- II. Si, con igual propósito, no entregara en tiempo al **Asegurador** la documentación que deba o sea propicio entregar al **Asegurador** en los términos de esta póliza.
- III. Si hubiese en el siniestro o en la **Reclamación** dolo o mala fe del **Asegurado**, beneficiario, causahabiente o apoderado.

21. DELIMITACIÓN TEMPORAL

La cobertura de esta Póliza es aplicable a las **Reclamaciones** presentadas por primera vez contra cualquier **Asegurado** durante el **Periodo Contractual** o en el **Periodo de Reporte Extendido** en caso en que este último sea contratado.

22. RENOVACION

Para solicitar la renovación de la Póliza, el **Asegurado** deberá proporcionar al **Asegurador**, por lo menos treinta (30) días calendario antes de la fecha de vencimiento del **Periodo Contractual**, el Formulario de solicitud de seguro y la información complementaria. Con base en el estudio de esta información, el **Asegurador** determinará los términos y condiciones para el nuevo **Periodo Contractual**.

23. DAÑO Y/O COSTOS EN MONEDA EXTRANJERA

Si el **Daño y/o Costos** son expresados en una moneda distinta a la establecida en el límite de responsabilidad de las condiciones particulares y/o en la carátula de la póliza, esta será convertida y pagada en la moneda establecida en dichas condiciones, de acuerdo con la Tasa Representativa del Mercado oficial (TRM) del día que se alcance la sentencia final, el laudo arbitral y se alcance el acuerdo transaccional.

24. LEY Y JURISDICCIÓN APLICABLES AL CONTRATO DE SEGUROS

Para cuantas cuestiones se refieran a la interpretación, validez y/o cumplimiento de esta póliza, el presente contrato queda sometido a la Ley Colombiana y en particular, al Código de Comercio y legislación complementaria en materia de seguros, que será también de aplicación a aquellos aspectos no previstos en el mismo. No obstante lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en la Legislación mencionada, se establece expresamente que si el contenido de la póliza difiere, en su caso, de la proposición de seguro de las cláusulas acordadas, el **Tomador** y/o la **Firma** podrá solicitar la aclaración al **Asegurador** en un plazo de treinta (30) días calendario a contar desde la entrega de la póliza para que subsane la divergencia existente; transcurrido dicho plazo sin que se efectúe las aclaraciones, tendrá validez lo dispuesto en la póliza.

Para cuantas cuestiones puedan surgir entre las partes con motivo de la celebración, validez y cumplimiento de este contrato, las partes se someten a **Arbitraje**.

25. DELIMITACION TERRITORIAL

La cobertura y extensiones de cobertura de esta Póliza son aplicables a las **Reclamaciones** presentadas en los territorios establecidos en la carátula de la póliza y/o condiciones particulares en la sección delimitación territorial. Se entiende y acuerda que la ley aplicable a la **Reclamación** en contra del **Asegurado** será la del territorio en la que ésta se haya presentado. Lo anterior, sin perjuicio de que las disputas emanadas del contrato de seguro deban ser sometidas a la Ley y Jurisdicción Colombianas, según lo estipulado en la Cláusula 24.

26. DEFINICIONES

- 26.1. **Acto Erróneo** significa cualquier acto real o supuesto, **Perjuicio o Lesión Personal**, error, omisión, falsa declaración, declaración engañosa o incumplimiento negligente del **Asegurado** en la prestación de sus **Servicios Profesionales**.
- 26.2. **Alto Ejecutivo** significa quien sea debidamente nombrado como Gerente, o en un cargo directivo, o quien realice funciones que sean ordinariamente realizadas por un Gerente o por un empleado en un cargo directivo.

Se entenderá exclusivamente como Gerente o en ejercicio de un cargo directivo, quien ejerza funciones o detente poderes que impliquen el ejercicio de facultades de dirección o de gobierno.

- 26.3. **Arbitraje** significa un proceso arbitral ante un Tribunal de Arbitramento que se constituirá y sujetará a la legislación colombiana. El tribunal estará integrado por tres árbitros que serán elegidos de común acuerdo por el **Asegurado** y el **Asegurador**. El tribunal fallará en derecho y funcionará en Bogotá
- 26.4. **Asegurado** significa la **Firma** y:
- I. Todo Pasado, presente o futuro accionista, socio, ejecutivo, director, apoderado o empleado de la **Firma**, pero sólo en lo referente a los **Servicios Profesionales**, desarrollados en nombre o representación de la misma.
 - II. Personas naturales independientes contratados por la **Firma**, pero únicamente cuando desarrollen labores directamente relacionadas con los **Servicios Profesionales** que presta la **Firma** y cuando dichos servicios son realizados en nombre y bajo la supervisión de esta.
- 26.5. **Asegurador** significa ACE Seguros S.A.
- 26.6. **Contaminantes** significan cualquier contaminante o irritante sólido, líquido, gaseoso o térmico, incluyendo sin estar limitado a, humo, vapor, hollín, emanaciones, ácidos, álcalis, químicos, y desechos. Los desechos incluyen los materiales para ser reciclados, reacondicionados o reclamados.
- 26.7. **Costos** significa honorarios (incluidos honorarios de abogados y peritos) y las costas del proceso, o sea los gastos, razonables y necesarios que hayan sido aprobados por el **Asegurador** previamente a ser incurridos, y que resulten única y exclusivamente de una **Reclamación** iniciada contra el **Asegurado** derivada de un **Acto Erróneo**. No se incluirán salarios, honorarios o costos de directores, ejecutivos o empleados del **Asegurado** o de la **Firma**.
- También se entenderán incluidos, como **Costos** en los casos de una **Reclamación** cubierta por esta póliza:
- I. La prima pagada para obtener fianza judicial o garantía bancaria sobre el patrimonio personal de **Asegurado**, y / o
 - II. Los intereses dejados de percibir sobre el dinero depositado para justificar la emisión de la fianza judicial o garantía bancaria (tipo interbancario)
- 26.8. **Daños** significa cualquier suma, indemnización o monto compensatorio por el cuál el **Asegurado** resulte legalmente obligado a pagar a consecuencia de una **Reclamación** proveniente de un **Acto Erróneo**. Todos los acuerdos judiciales o extrajudiciales tienen que ser negociados y acordados contando previamente con el consentimiento escrito del **Asegurador**.

Daños no comprende:

- I. Las multas, sanciones y penas de acuerdo con la exclusión 3.2.
- II. Daños punitivos, ejemplarizantes y morales.
- III. Las cantidades que no puedan ser cobradas a los **Asegurados** por sus acreedores,

IV. Las cantidades que se deriven de actos o hechos no asegurables bajo las leyes Colombianas conforme a las cuales se interprete el presente Contrato.

- 26.9. **Daño Corporal** significa cualquier daño o lesión, enfermedades mentales, trastornos emocionales, heridas corporales, enfermedad o muerte, también significa lesión, ansiedad o tensión mental, sufrimiento emocional, fueran o no resultantes de la lesión, enfermedad, o muerte de una persona.
- 26.10. **Fecha de Retroactividad** significa la fecha especificada en las condiciones particulares. En caso de no estar especificadas será la misma fecha de **Reconocimiento de Antigüedad**.
- 26.11. **Firma** significa la persona natural o jurídica especificada en las condiciones particulares como tal.
- 26.12. **Periodo Contractual** significa el espacio de tiempo que media entre la fecha de inicio de vigencia indicada en la carátula de la póliza y/o condiciones particulares y la terminación, expiración o revocación de esta Póliza.
- 26.13. **Periodo de Reporte Extendido**, significa la extensión de cobertura que se otorga de acuerdo a la Cláusula 10 de la presente póliza.
- 26.14. **Perjuicio o Lesión Personal** significa el perjuicio que surgiera de una o más de las siguientes ofensas:
- I. Falso arresto, detención o prisión;
 - II. Calumnia, difamación o injuria;
 - III. Publicación de una manifestación, o expresión violatoria de los derechos a la privacidad de un individuo; y
 - IV. Desalojo u otro tipo de invasión al derecho de la propiedad privada.
- 26.15. **Proceso Disciplinario** significa cualquier proceso iniciado y/o adelantado por las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Superiores y Seccionales de la Judicatura que conocen de los procesos que se adelanten contra **Abogados** en ejercicio de su profesión.
- 26.16. **Reclamación** significa:
- I. Toda demanda o proceso, ya sea civil, comercial o arbitral en contra del **Asegurado**, para obtener la reparación de un daño patrimonial originado por un **Acto Erróneo**.
 - II. Cualquier notificación o requerimiento escrito en contra del **Asegurado** que pretenda la declaración de que el mismo es responsable, de un **Daño** como resultado o derivado de un **Acto Erróneo**.
 - III. Cualquier denuncia penal iniciada en contra del **Asegurado**, sujeto a las Exclusiones de esta póliza; o
 - IV. Cualquier proceso o investigación administrativa o disciplinaria relacionados con un **Acto Erróneo** del **Asegurado**, sujeto a las exclusiones de esta póliza.

Todas las anteriores se considerarán **Reclamaciones** siempre y cuando estén relacionadas con un **Daño** y/o **Costos** cubierta bajo la presente póliza,

- 26.17. **Reconocimiento de Antigüedad** significa la fecha especificada en las condiciones particulares y que constituye el momento a partir del cual el

983

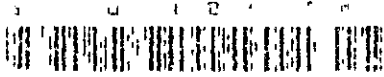
Asegurado ha mantenido cobertura con el **Asegurador** en los términos de esta póliza.

26.18. **Responsabilidad Derivada de Incorrectas Prácticas Laborales** significa cualquier **Reclamación** originada en la relación entre el **Asegurado** y los empleados a su cargo y que este derivado de las siguientes circunstancias:

- I. Cualquier despido, destitución o terminación de relación laboral, real o implícita, incorrectas prácticas o políticas para conceder, contratar o impedir o no conceder la promoción o continuidad de un empleado del **Asegurado** en su cargo.
- II. Distorsión negligente de los términos o condiciones de empleo o del contrato de trabajo;
- III. Medidas disciplinarias injustas o evaluación errónea del desempeño laboral.
- IV. Declaraciones difamatorias concernientes al pasado o presente del empleado;
- V. Violación de cualquier disposición legal que imponga obligaciones a cargo del **Asegurado**, derivadas del régimen de prestaciones sociales y de seguridad social.
- VI. Hostigamiento sexual o de cualquier otro tipo, incluyendo la supuesta creación de un ambiente de hostigamiento;
- VII. Falla para proveer o adherir a políticas públicas o privadas o procedimientos o normas laborales.
- VIII. Discriminación ilegal, ya sea directa o indirecta, intencional o no.

26.19. **Servicios Profesionales** significa únicamente aquellos servicios prestados a terceros que estén especificados en las condiciones particulares de la póliza y en cuya contraprestación el **Asegurado** recibe el pago de honorarios. Dichos servicios deben ser realizados por un **Asegurado** o por cualquier persona física o entidad por la que el **Asegurado** sea legalmente responsable.

26.20. **Tomador** persona natural o jurídica señalada condiciones particulares y/o en la carátula de la póliza como tal.



Para la presentación de peticiones, quejas y recursos remitirse al portal web: www.servientrega.com
o a la línea telefónica: (1) 7700200.



Centro de Soluciones

Servientrega S.A. NIT. 860.612.330-3. Grandes contribuyentes Resolución DIAN: 8836 de Dic. 18/1998. Autorizaciones Resolución DIAN: 09698 de Nov. 24/2003. Responsables y Ratificadores de IVA. Autorización Numeración Resolución DIAN: 37000069332. 12/03/2013. Prefijo 7 desde el 196200001 al 208000000 Habilita. Acción al usuario: www.servientrega.com Tel.: 7700200 Fax: 7700380 Ext. 110045 Principal; Avenida Calle 6 No. 34A 11 Bogotá D.C. Colombia

FECHA PROGRAMADA DE ENTREGA	FECHA DE ENTREGA
DIAS / MES / AÑO	DIAS / MES / AÑO
HORA	

FACTURA DE VENTA No.



2 0 7 5 6 9 6 4

CÓDIGO DESTINO		CÓDIGO DEPARTAMENTO DE DESTINO		CÓDIGO DE TRANSPORTE		TIPO DE ENTREGA		FORMA DE ACO	
10		Bogotá		ferry		Entrega		Cont.	
Nombre:		Dirección:		C.C./NIT:		Tel/cel:		Pais:	
Luis Alberto (Calle Montaña)		A. S. + 9-18 (Calle Montaña)		5218267		5218267		Colombia	
Ciudad:		Dpto:		E-mail:		Cód. Postal:		Tel/cel:	
Bogotá		Cundinamarca		Calle 20 # 74-20		5218267		5218267	
Vr. Declarado:		Vr. Flete:		Vr. Mens. expresa:		Vr. Sobretarifa:		Vr. Total:	
								17900	
Dice content:		Observaciones para la entrega:		Observaciones en la entrega:		Fecha y hora de entrega		RECIBI A CONFORMIDAD, NOMBRE LEGIBLE DESTINATARIO.	
								HORA / DIA / MES / AÑO	
Quien entrega:		Firma, SELLO DEL REMITENTE		El usuario de la expresa constancia que tuvo conocimiento del contrato que se encuentra publicado en la página web de Servientrega S.A. www.servientrega.com y en las carteleras ubicadas en Centros de Soluciones; que regula el servicio acordado entre las partes, cuyo contenido clausular acepta expresamente con la suscripción de este documento.		Código CDS/SE:		Código CDS/SE:	
Causal Devolución del Envío		Fecha y Hora de Intento de Entrega		Fecha Devolución a Remitente		Otros (Novedad operativa/Cerrado)		Código CDS/SE:	
1		1		1		1		1	
2		2		2		2		2	
3		3		3		3		3	
Desconocido		Desconocido		Desconocido		Desconocido		Desconocido	
Rechazado		Rechazado		Rechazado		Rechazado		Rechazado	
No reside		No reside		No reside		No reside		No reside	
No reclamado		No reclamado		No reclamado		No reclamado		No reclamado	
Dirección errada		Dirección errada		Dirección errada		Dirección errada		Dirección errada	
Otros (Novedad operativa/Cerrado)		Otros (Novedad operativa/Cerrado)		Otros (Novedad operativa/Cerrado)		Otros (Novedad operativa/Cerrado)		Otros (Novedad operativa/Cerrado)	

DESTINATARIO

DESTINATARIO

DESTINATARIO

DESTINATARIO

DESTINATARIO

DESTINATARIO

DESTINATARIO

DESTINATARIO

2720 877
Luis Alejandro Corzo Mantilla
Abogado.

Señores

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO ORAL DE MAGDALENA – SANTA MARTA

Att. H. MP. Dr. Edgar Alexi Vásquez Contreras

Magistrado del Tribunal Administrativo de Magdalena

Calle 20 N° 2A – 20, Palacio de Justicia de Santa Marta – Magdalena

E. S. D.

Radicado 47001-23-33-003-2014-00241-00

Demandante

Demandado

OBRESAN – Unión Temporal de Obras Especiales de Santa Marta

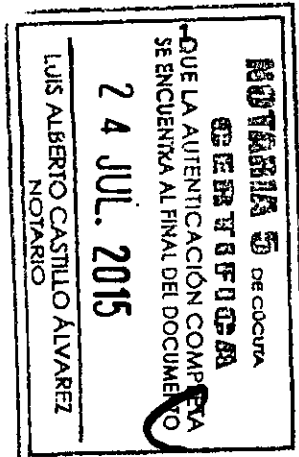
Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho; Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio y Universidad del Magdalena; y Otros

Medio de Acción

Reparación Directa

Referencia

Traslado de Objeciones a las Excepciones presentadas en las Contestaciones de la Demanda



GRABADO

Luis Alejandro Corzo Mantilla, mayor de edad y vecino de esta ciudad, identificado con CC N° 88.213.988 de Cúcuta, abogado en ejercicio, portador de la Tarjeta Profesional N° 101.576 del C. S. de la J., actuando en calidad de apoderado judicial del Demandante (**OBRESAN – Unión Temporal de Obras Especiales de Santa Marta**), conforme a los poderes otorgados, me permito allegar ante su H. Despacho *Memorial Describiendo el Traslado a las Excepciones contenidas en las Contestaciones de la Demanda*, conforme a la oportunidad procesal que el Auto (Providencia) del (00) de Junio de 2015 y Notificado por estado el día (00) del mismo mes y año, confirma.

Acorde al procedimiento que señalan las normas referentes a la materia, dentro del proceso de la referencia, su H. Despacho entrara a decidir, la validez de las excepciones propuestas por los entes integrantes de la parte Demandada (Apoderada del Ministerio de Justicia y del Derecho; y Apoderado de Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Santa Martha y la Universidad del Magdalena), donde plantean las excepciones de:

- 1) Falta de legitimación material en la causa por pasiva,
- 2) Inexistencia de falla del servicio imputable al ministerio de Justicia y del Derecho (Ausencia del Nexo Causal) por parte de la Apoderada del Ministerio de Justicia y del Derecho; y
- 3) Inepta Demanda y/o indebida escogencia de la acción,
- 4) Cosa juzgada
- 5) Falta de legitimación en la causa por pasiva
- 6) Falta de competencia
- 7) Caducidad,
- 8) Culpa exclusiva de la víctima (de Fondo)
- 9) Hecho de un tercero,
- 10) Carencia de los elementos de responsabilidad,
- 11) Genérica (por parte del Apoderado del Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición de la Cámara de Comercio del Magdalena y la Universidad del Magdalena)

Así posteriormente, se podrá comprobar mediante la interpretación en Derecho que su H. Despacho realizara de los elementos aportados en el transcurso del proceso y los argumentos que se utilizaran para

Av. 5 N° 9-58 Edificio Mutuo Auxilio, Oficina 305, Teléfono 5718267
Celular 3164668894, Email: alejocorman@gmail.com
Cúcuta - Colombia

Luis Alejandro Corzo Mantilla
Abogado.

Según el fundamento Jurídico ajustado a Derecho que Operadores Jurídicos, como es el caso de la Sección Tercera Subsección C -- Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, mediante providencia de fecha 25 de abril de 2012, resolvió **DECRETAR LA NULIDAD** del laudo arbitral proferido el 22 de agosto de 2011 dentro del proceso arbitral promovido por J. P. G. & CIA S.A. contra **GERMAN VILLANUEVA CALDERON y RICARDO LUIS CANABAL GUZMAN, INTEGRANTES DE LA UNION TEMPORAL OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA "OBRESAN"** contra la **UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA**, por haberse proferido el laudo después del vencimiento del término fijado para la duración del arbitramento; han encontrado ajustados al Ordenamiento Jurídico Colombiano.

De las cuales se hace énfasis en los siguientes argumentos que permiten dilucidar lo planteado por los apoderados de la parte Demandada:

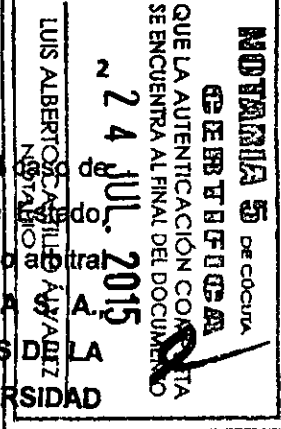
1. En Cuanto a la excepción de Falta de Legitimación por pasiva que alegan ambos apoderados de la parte Demandada, se puede resaltar que:

- A. En cuanto al Ministerio de Justicia y del Derecho, no es viable alegar dicha excepción, por cuanto las funciones de un ministerio como el referenciado (e incluso los demás ministerios) no solo pueden ser interpretadas exegética y únicamente a lo expuesto en el Art. 116 de la Constitución Política Colombiana de 1991, debido a que desde el Preámbulo Constitucional, el Art. 1 con la Organización del Estado Colombiano y el Art. 2 con los fines esenciales del Estado, permiten dar complemento al Art. 90 que enuncia el sistema de la Responsabilidad por los "daños antijurídicos que le sean imputables" al Estado. Donde dicho artículo enuncia los dos elementos esenciales de la responsabilidad del Estado.

En lo que respecta a los Procesos Contenciosos Administrativos se pueden constituir como partes, las personas jurídicas de derecho público, por ser capaces al tener personería jurídica, por otra parte, las entidades u órganos que carecen de tal atributo necesitan dirigirse a uno de los órganos del Estado (Ministerio de Justicia y del Derecho), carente de personería, pero el daño antijurídico debe ser imputado a la persona jurídica de la Nación, de la cual este Ministerio hace parte.

Es por eso que la excepción de legitimación en la causa por pasiva, en el este tipo de procesos resueltos por la Jurisdicción de los Contencioso Administrativo, se debe entender como la capacidad para ser parte. Sólo podría alegarse referente a las personas que tienen capacidad para ser parte en el proceso, y no como se pretende por parte de los Apoderados de la Parte Demandad, como lo son los representantes o de los órganos de éstos que acuden al proceso, en nombre de la persona jurídica de derecho público principal (Nación). Entendido esto como la *Mutatis Mutandi*, expuesta ampliamente por Honorables Magistrados del Consejo de Estado como el Dr. Enrique Gil Botero, de la Sección Tercera.

- B. En cuanto a la Cámara de Comercio de Santa marta para el Magdalena y su Centro de Arbitraje, Amigable composición y Conciliación en asocio con la Universidad del Magdalena, sigue siendo contrario a la Constitución Política Colombiana de 1991, pretender que sus





Luis Alejandro Corzo Mantilla
Abogado.

funciones referentes a los MASC (Mecanismos Alternativos en la Solución de Conflictos) en solo de "Labores de Apoyo y trámite" como lo expresa a folio 11 de la contestación a la Demanda.

De igual forma resulta por fuera de lo expresado en el Art. 116 de la Constitución Política de 1991, el cual expresa: "La Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, los Tribunales y los Jueces, administran Justicia. También lo hace la Justicia Penal Militar.

Excepcionalmente la ley podrá atribuir función jurisdiccional en materias precisas a determinadas autoridades administrativas. Sin embargo no les será permitido adelantar la instrucción de sumarios ni juzgar delitos.

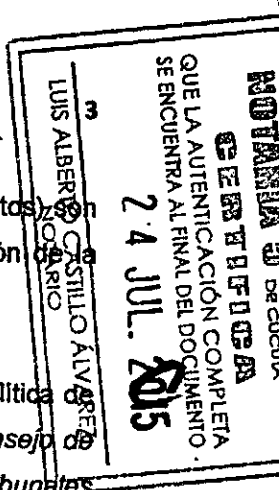
Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de jurados en las causas criminales, conciliadores o en la de árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad, en los términos que determine la ley."

Siguiendo con la Teoría de la Administración Pública, el desarrollo de la Función Pública y la teoría del Sistema de Responsabilidad del Estado Avalada y reafirmada en Sendas Providencias del Consejo de Estado entre otras Altas Cortes Colombianas, entendido así, las Cámaras de Comercio ejercen FUNCIONES PÚBLICAS y Función Administrativa desde el punto de vista de la DESCENTRALIZACIÓN POR SERVICIOS de la cual Hacen parte las Cámaras de Comercio, las cuales son PARTICULARES en ejercicio de Funciones propias del Estado, y reafirmado con lo subrayado referente al Art. 116 de la Constitución Política de 1991.

Incluso grandes Doctrinantes de la talla del profesor **Eduardo García de Enterría**, ha sido reseñado en múltiples sentencias desde 1991, incluso en épocas más recientes, dejando claro que la dicha Teoría de la Responsabilidad del Estado se centra "en el perjuicio provocado a una persona que no tiene el deber jurídico de soportarlo". (...)

Y la "Imputabilidad es la atribución jurídica que se le hace a la entidad pública del daño antijurídico padecido y por el que, por lo tanto, en principio estaría en la obligación de responder", bajo cualquiera de los títulos de imputación reconocidos en los regímenes de responsabilidad aplicados en el Ordenamiento Jurídico Colombiano, esto es, del subjetivo (falla en el servicio) y del objetivo (riesgo excepcional y daño especial).

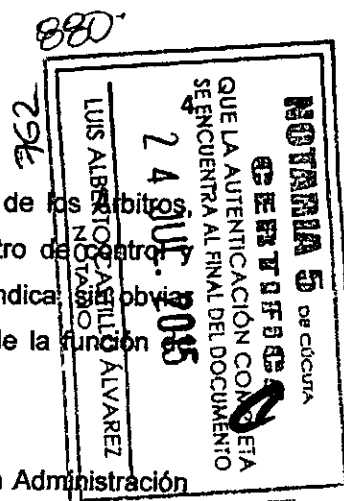
Por las ya enunciadas razones, no se puede permitir que dicha función jurisdiccional temporal o transitoria en cabeza de los Árbitros (y/o Conciliadores y amigables componedores) de atribución Constitucional, sea desvirtuada por norma inferior a la constitución, como lo alega el apoderado de dicha entidad, siendo que el Art. 122 del Decreto 1818 de 1998, que ha sido derogado por la Ley 1563 de 2012, la cual contiene el actual Estatuto de Arbitraje Nacional e





Luis Alejandro Corzo Mantilla
Abogado.

Internacional aplicado en Colombia, el cual define la responsabilidad tanto de los árbitros como de los centros de Arbitraje por ser encargados de ser el primer filtro de control y vigilancia, más allá de ser elegidos por las partes como la actual norma lo indica, obviamente que el Ministerio de Justicia y del Derecho sigue en cabeza del ejercicio de la función Control y vigilancia ya antes desarrollada en las teorías del derecho.



2. De igual forma en cuanto al Nexo Causal se mantiene debido a la teoría de la Administración Pública y al desarrollo de la Función pública en cabeza del Gobierno Nacional, que para el caso inicia desde la Presidencia de la Republica, la cual mediante los lineamientos Constitucionales ha DESCONCENTRADO (Ley 489 de 1998 y Art. 189 # 15 y 16) sus funciones en los Ministerios (de Justicia y del Derecho) para ejercer el Control y la Vigilancia sobre los Centros de Arbitraje acorde a la **Ley 1563 de 2012** "Por medio de la cual se expide el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional y se dictan otras disposiciones que a este le corresponde".

Más específicamente en sus Arts. 50, 51 y 52, donde se delimita la función de Control y Vigilancia que dicho Ministerio tiene sobre el Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición de la Cámara de Comercio del Magdalena; y demás Establecimientos de igual o semejante funcionalidad. Donde el Ministerio de Justicia y del Derecho debe estar al tanto de las Calidades de las Personas (Abogados) que cumplen a cabalidad con los requisitos para ejercer como Árbitros. A su vez los Centros de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición deben velar por el cumplimiento de la renovación de registros y requisitos para ejercer como tales.

3. Referente a la Excepción de Inepta Demanda y/o Indebida Escogencia de la Acción, propuesto por el apoderado de la Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena, el Centro de Arbitraje, Amigable Composición y Conciliación en asocio con la Universidad del Magdalena, debemos tener en cuenta que este Medio de Control contenido en el Art. 140 del CPACA (ley 1437 de 2011) funde parte de sus bases en el Art. 90 de la Constitución Política de 1991, la cual busca la "Reparación del Daño Antijurídico causado por el Estado e igualmente imputable a este, en razón de una acción, omisión, operación administrativa entre otras".

Siendo así, dentro de la reparación se puede solicitar la restitución de la que trata el apoderado del Ente integrante de la parte Demandada, vista de forma correcta como la Reparación mediante la tasación que ofrece la tipología de los perjuicios Materiales e incluso Inmateriales al consagrar los daños Constitucionales y Convencionales que causaron la tardía decisión tomada en el Laudo Arbitral, motivo principal de las pretensiones contenidas en este Medio de Control.

4. Referente a la Excepción de Cosa Juzgada, es sustancial entenderla como una institución jurídico procesal que ha sido desarrollada igualmente en senda Jurisprudencia desde la Corte Constitucional hasta el Consejo de Estado y demás altas cortes, en la búsqueda de alcanzar la seguridad jurídica dentro del Ordenamiento Jurídico Colombiano y de igual forma en el entendido que todo proceso debe tener un final acorde a los principios de justicia y los demás Generales del Derecho. Pero no puede pretenderse que en todos los casos se puede alegar cosa juzgada por ser una decisión emanada de un operador jurídico de carácter constitucional o de un

Luis Alejandro Corzo Mantilla
Abogado.

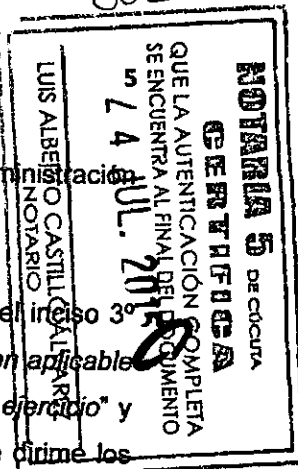
particular investido temporalmente o transitoriamente en la función pública de la Administración de la Justicia realizada por lo general a cargo de la Jurisdicción.

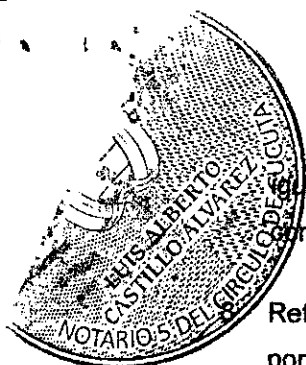
5. En cuanto a la Excepción de Falta de Competencia, se dirime con los postulados del inciso 3º Art. 123 de la Constitución Política de 1991 el cual reza "La ley determinara el régimen aplicable a los particulares que temporalmente desempeñen funciones públicas y regulara su ejercicio" y los Arts. 3, 4 y 5 de la 1563 de 2012. Por ende al estar vinculados al régimen que dirige los conflictos de los Servidores Públicos y/o Trabajadores Oficiales, es competente la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, de igual forma por el Medio de Control utilizado, el cual es conducente para obtener la Reparación por los daños causados y sus posteriores perjuicios acaecidos.

6. Con la excepción de Caducidad, no podemos confundir conceptos básico como el de daño con el de perjuicio, la Corte Suprema de Justicia, en Sentencia del 13 de Diciembre de 1943 del MP Aníbal Cardoso referencio: "El daño es la existencia de un hecho constitutivo de una vulneración, de un deterioro, tomado en sí mismo, y el perjuicio es la culpa o si se quiere, el perjuicio a cargo de una persona jurídica". Esto con el fin de dilucidar lo planteado por el apoderado de la Universidad del Magdalena y Cámara de Comercio de Santa Marta, donde pretende alegar un término de caducidad que el mismo tribunal de Arbitramento ya con anterioridad había determinado como no probado, por el computo hecho por el mismo tribunal, debido a las suspensiones provisionales de las audiencias y demás reuniones conjuntas para el desarrollo del proceso arbitral, adicional a lo expuestos en los hechos 57 y 58 de la Demanda donde se procede a protocolizar el Laudo Arbitral y a la recepción del posterior recurso de Anulación, el cual fue radicado ante el Consejo de Estado, el 7 de octubre de 2011 por el Secretario del Tribunal de Arbitramento, correspondiéndole el Radicado N° 11001-03-26-000-2011-00064-01, del cual por reparto conoció la Sección Tercera Subsección C – Magistrado Ponente Dr. José Orlando Santofimio Gamboa, la cual mediante auto del 21 de noviembre de 2011 avocó el conocimiento del asunto y corrió traslado para que los recurrentes sustentaran el recurso y para que presentaran los correspondientes alegatos. Lo cual no acepto como del todo cierto el apoderado de estos Entes.

De igual forma el término que se debe tener en cuenta y por el cual se dio la admisión de este Medio de Control es el referido en el hecho N° 61 de la Demanda, el cual trata de la Notificación de la Decisión del Recurso resuelto por el consejo de Estado en su Sección Tercera ya antes referenciada; y posteriormente se formuló la solicitud de Conciliación Extrajudicial (hecho 64 de la Demanda) necesaria para recurrir a los medios de control contenidos en el CPACA, manteniéndose dentro del término.

7. En cuanto a la Excepción de Culpa exclusiva de la víctima, es contrario a derecho manifestar que se pretendió dilatar el normal desenvolvimiento del proceso dirigido por el Tribunal de Arbitramento debido a la imparcialidad y discrecionalidad de los Árbitros a la hora de determinar si aceptaban la solicitud de aplazamiento que se radico ante dicho tribunal, o como el caso en que el mismo tribunal por autonomía decidió aplazar por tres meses la audiencia de alegatos. Al





Luis Alejandro Corzo Mantilla
Abogado.

igual que la solicitud de ampliación y/o complementación del Laudo Arbitral. Hechos que constituyen tal manifestación de mala fe.

Referente a la excepción hecho de un tercero, sería irse en lance en ristre con lo preceptado por el Constituyente de 1991 y claramente contra la Constitución política de 1991, más aun cuando lo enfatizado en los anteriores argumentos expuestos; y no los criterios postulados por el apoderado de la Cámara de Comercio de Santa Marta, como es el caso de la expresión *“las cosas pudo haber sido responsable cualquier otra persona, pero NO mi cliente”* o cuando hace referencia a que las labores de la Cámara de Comercio de Santa Marta *“se limitan a la función de apoyo y tramite y NO funciones jurisdiccionales”*, hecho que sigue estando en contra de los postulados constitucionales y en especial el inciso 3° del Art. 116 Const. Pol. Donde es esta norma de normas quien aclara que temporalmente ejercerán la función de administrar justicia, función que por regla general está a cargo de la Jurisdicción (mas allá de la rama o división concebida por el Ordenamiento Jurídico Colombiano).

9. En cuanto a la excepción carencia de los elementos de responsabilidad, para alegar dicho criterio, se deben tener en cuenta los tres (3) requisitos que el mismo Consejo de Estado en su Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, donde el Consejero Ponente MAURICIO FAJARDO GÓMEZ en el expediente de Radicado Número: 52001-23-31-000-1999-00518-01(20750), los cuales son: (i) su irresistibilidad; (ii) su imprevisibilidad y (iii) su exterioridad respecto del demandado. Requisitos que no se ven configurados o en su defecto expuestos por el Apoderado de la Cámara de Comercio de Santa Marta. Por tales argumentos solicito muy respetuosamente que no se tengan en cuenta dichas excepciones, porque en ellas se destacan criterios o puntos de vista de los apoderados, y no argumentos que se puedan ajustar al Ordenamiento Jurídico Colombiano.

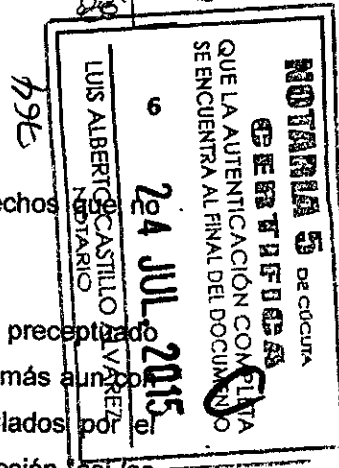
En consecuencia, muy Respetuosamente solicito no se tengan en cuenta dichas excepciones, por su falta de sustento jurídico e igualmente:

1. Que no se tenga en cuenta las Excepciones presentadas por los apoderados (as) que integran la parte Demandada, llamadas: i) Falta de legitimación material en la causa por pasiva, ii) Inexistencia de falla del servicio imputable al ministerio de Justicia y del Derecho (Ausencia del Nexo Causal) por parte de la Apoderada del Ministerio de Justicia y del Derecho, iii) Inepta Demanda y/o indebida escogencia de la acción, iv) Cosa juzgada, v) Falta de legitimación en la causa por pasiva, vi) Falta de competencia vii) Caducidad, viii) Culpa exclusiva de la víctima (de Fondo), ix) Hecho de un tercero, x) Carencia de los elementos de responsabilidad, xi) Genérica (por parte del Apoderado del Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición de la Cámara de Comercio del Magdalena y la Universidad del Magdalena).

2. Que se continúe con las pretensiones del Medio de Control *Reparación Directa*.

De esta forma descorro el traslado de las Excepciones presentadas por los Apoderados de la Parte Demandada (Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho – Cámara de Comercio de Santa Marta y la universidad del Magdalena) contenidas en la Contestación de la Demanda, y respetuosamente reitero a

Av. 5 N° 9-58 Edificio Mutuo Auxilio, Oficina 305, Teléfono 5718267
Celular 3164668894, Email: alejocorman@gmail.com
Cúcuta - Colombia



883

7

768

Luis Alejandro Corzo Mantilla
Abogado.

su despacho el desconocimiento de la misma, máxime que no le asiste el sustento jurídico para su reconocimiento acorde a la revisión de los actos administrativos trasgresores del Ordenamiento Jurídico Colombianos y de los Derechos de mi poderdante.

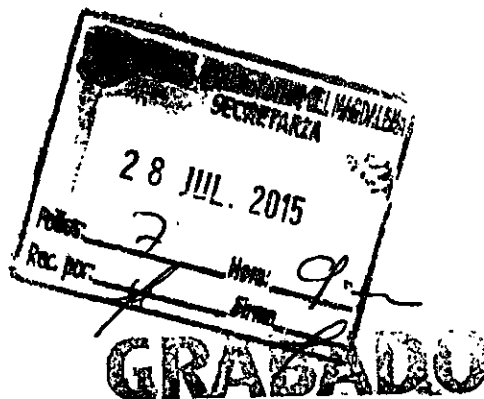
Agradezco su vocación de servicio en la administración de justicia.

Atentamente,

Luis Alejandro Corzo Mantilla

CC N° 88.213.988 de Cúcuta.

TP N° 101.576 del C. S. de la J.



NOTARIA 5
NOTARIA QUINTA DEL CIRCULO DE CÚCUTA
DILIGENCIA DE PRESENTACIÓN PERSONAL
Y RECONOCIMIENTO

El suscrito Notario Certifica que este escrito, dirigido a: Tribuna Administrativa

Fue presentado personalmente por Luis
Alejandro Corzo Mantilla

Identificado con C.C. No. 88.213.988
de Luis y T.P. 101.576 C.S.J.

quien declara que la firma que aparecen en el presente documento es suya y que el contenido del mismo es cierto

Cúcuta: 24 JUL. 2015





REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA

Santa Marta, tres (03) de agosto de dos mil quince (2015)

MAGISTRADO PONENTE: EDGAR ALEXI VASQUEZ CONTRERAS

RADICACIÓN: 47-001-23331-003-2014-00241-00.
ACTOR: UNIÓN TEMPORAL OBRAS ESPECIALES SANTA MARTA
DEMANDADO: MINDEFENSA Y OTROS
ACCION: REPARACIÓN DIRECTA
ASUNTO: FALLA EN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL

SISTEMA DE ORALIDAD
-Ley 1437 de 2011-

El día 17 de julio de 2015, el proceso de la referencia subió al despacho para fijar fecha de audiencia inicial, sin que hubiese fenecido el término de traslado de la demanda. Por lo que se ordena devolver el expediente a Secretaría de esta Corporación para que continúe con el trámite señalado.

CÚMPLASE

EDGAR ALEXI VÁSQUEZ CONTRERAS
Magistrado

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA
SECRETARÍA GENERAL
Ley 1437 de 2011

RADICACIÓN: N° 47-001-2333-003-2014-00241-00.
DEMANDANTE: UNION TEMPORAL OBRAS ESPECIALES SANTA MARTA.
DEMANDADO: MINDEFENSA Y OTROS.
MEDIO DE CONTROL: REPARACION DIRECTA.

PAÑO AL DESPACHO

Del Magistrado Edgar Vásquez Contreras, hoy 4 de noviembre de 2015, el expediente de la referencia, informándole que se encuentra pendiente para decidir sobre la solicitud de llamamiento en garantía.

Lo anterior consta de dos (2) cuadernos principales con 766 folios útiles incluyendo el presente y ocho (8) CDs.

Sírvase proveer lo que estime pertinente.

Atentamente,



Jaime Ortiz Romero
Secretario

886 768

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA
SISTEMA ORAL**

Santa Marta, seis (6) de noviembre de dos mil catorce (2015)

MAGISTRADO PONENTE: Dr. EDGAR ALEXI VÁSQUEZ CONTRERAS

Radicación: N° 47-001-2333-003-2014-00241-00
Demandante: OBRESAN
Demandado: Nación – Ministerio de Justicia y Otros
Medio de control: Reparación Directa

Visto el informe secretarial que antecede, procede el Despacho a pronunciarse acerca de la solicitud de llamamiento en garantía presentada por el apoderado de la Cámara de Comercio.

ANTECEDENTES

El señor Juan Pablo González Rosales presentó demanda el 31 de julio 2014 bajo el medio de control de reparación directa contra la Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho – Cámara de Comercio de Santa Marta – Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición – Universidad del Magdalena – Diana Boveda Mendinueta – Miguel Ángel Polo Campo y Juan Alberto Polo Figueroa.

Mediante auto de 19 de agosto de 2014 este Despacho inadmitió la demanda para que el demandante aportara el certificado de existencia y representación legal correspondiente a la empresa JPG & CIA S.A., y constancia de notificación y ejecutoria de la providencia que decretó la nulidad del laudo arbitral. La demanda fue subsanada dentro del término y fue admitida el 23 de septiembre de 2014.

El día 27 de enero de 2015, el apoderado de la Cámara de Comercio interpuso recurso de reposición contra el auto que admitió la demanda, el cual fue resuelto el 8 de mayo de 2015 ordenando no reponer el auto.

Mediante escrito presentado el 21 de julio de 2015, el apoderado judicial de la Cámara de Comercio solicitó llamamiento en garantía a ACE Seguros S.A.

II. CONSIDERACIONES

El llamamiento en garantía es una figura procesal mediante la cual se otorga la posibilidad al demandado de exigir a un tercero —frente al cual tiene un derecho legal o contractual— la indemnización del perjuicio que llegare a sufrir, o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia.

En cuanto a la oportunidad para solicitar el llamamiento en garantía, el artículo 172 de la Ley 1437 de 2011 dispone lo siguiente:

Artículo 172. Traslado de la demanda. De la demanda se correrá traslado al demandado, al Ministerio Público y a los sujetos que, según la demanda o las actuaciones acusadas, tengan interés directo en el resultado del proceso, por el término de treinta (30) días, plazo que comenzará a correr de conformidad con lo previsto en los artículos 199 y 200 de este Código y dentro del cual deberán contestar la demanda, proponer excepciones, solicitar pruebas, llamar en garantía, y en su caso, presentar demanda de reconvención. (Subrayas y negrillas fuera del texto)

A su turno el artículo 225 ibídem regula la figura del llamamiento en garantía en los siguientes términos:

Artículo 225. Llamamiento en garantía. Quien afirme tener derecho legal o contractual de exigir a un tercero la reparación integral del perjuicio que llegare a sufrir, o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia, podrá pedir la citación de aquel, para que en el mismo proceso se resuelva sobre tal relación.

El llamado, dentro del término de que disponga para responder el llamamiento que será de quince (15) días, podrá, a su vez, pedir la citación de un tercero en la misma forma que el demandante o el demandado.

El escrito de llamamiento deberá contener los siguientes requisitos:

- 1. El nombre del llamado y el de su representante si aquel no puede comparecer por sí al proceso.*
- 2. La indicación del domicilio del llamado, o en su defecto, de su residencia, y la de su habitación u oficina y los de su representante, según fuere el caso, o la manifestación de que se ignoran, lo último bajo juramento, que se entiende prestado por la sola presentación del escrito.*
- 3. Los hechos en que se basa el llamamiento y los fundamentos de derecho que se invoquen.*
- 4. La dirección de la oficina ó habitación donde quien hace el llamamiento y su apoderado recibirán notificaciones personales.*

El llamamiento en garantía con fines de repetición se regirá por las normas de la Ley 678 de 2001 o por aquellas que la reformen o adicionen.

Atendiendo lo dispuesto en los artículos transcritos, la oportunidad para la solicitar la vinculación de una persona en calidad de llamado en garantía, lo es el término de traslado de la demanda el cual inicio 12 de mayo de 2015 y feneció el 3 de agosto de 2015. La solicitud aquí estudiada se presentó el 21 de julio de 2015 tal como consta a folios 744 - 745 del expediente, luego fue presentada oportunamente.

Por otra parte, en cuanto a los requisitos que debe cumplir la solicitud de llamamiento en garantía, del artículo 225 de la Ley 1437 de 2011, transcrito previamente, se extrae que para que el mismo sea procedente es necesario entre otras cosas que entre la parte que lo solicita y aquella a quien se cita en calidad de llamada, exista una relación de orden legal o contractual que permita que ésta sea vinculada.

En el caso concreto la solicitud de llamamiento en garantía propuesto por la parte demandada Cámara de Comercio cumple con los requisitos legales consagrados en el CPACA para ser admitido.

En cuanto a la relación que soporta la solicitud, afirma el solicitante tener un vínculo contractual con ACE Seguros S.A, para lo cual aporta como prueba copia de la póliza 12 -148371, suscrita entre la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio y ACE Seguros S.A., la cual en su numeral 1° establece el alcance de la cobertura el cual está relacionado, entre otras cosas, con *"las labores propias de un Centro de Conciliación y Arbitraje: Arbitraje, Trámite Arbitral (fase previa, fase arbitral)"*, así mismo, a folio 757, se evidencia que dentro del grupo 2 de los asegurados está incluida la Cámara de Comercio de Santa Marta.

El vínculo alegado por la Cámara de Comercio, sustenta, en principio, el derecho de exigirle a la llamada su comparecencia al proceso, toda vez que, de acuerdo con jurisprudencia reiterada del Consejo de Estado² al momento de la admisión del llamamiento en garantía no solamente se deben estudiar los aspectos formales de la figura, conforme a los requisitos que exige la Ley, los cuales, en el presente asunto, fueron cumplidos por el solicitante.

Por lo anterior, el Tribunal Administrativo del Magdalena en Sala Unitaria,

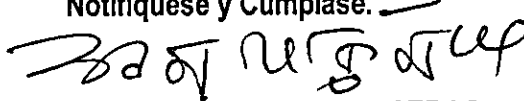
RESUELVE

PRIMERO: Acéptese el llamamiento en garantía hecho a ACE Aseguradora S.A., por parte de la Cámara de Comercio de Santa Marta.

SEGUNDO: Notifíquese personalmente al representante legal de la ACE Aseguradora S.A., de conformidad con lo establecido en el artículo 66 del C.G.P, el cual contará con el término de quince (15) días para responder el llamamiento de acuerdo con lo previsto en el inciso segundo del artículo 225 del C.P.A.C.A.

TERCERO: Reconocer al doctor Manuel Vives Noguera, identificado con la C.C No. 84.454.719 de Santa Marta y portador de la Tarjeta Profesional No. 169.144 del C. S. de la J. como apoderado judicial de la Cámara de Comercio de Santa Marta en los términos y para los efectos del poder obrante a folio 684 del expediente.

Notifíquese y Cúmplase. —


EDGAR ALEXI VÁSQUEZ CONTRERAS
Magistrado

¹ Folios 746 – 757

² Radicado: 43465, C.P.: Santofimio Gamboa. También auto de 19 de febrero de 2004, radicado: 26048, C.P.: María Elena Giraldo Gómez; y auto de 16 de diciembre de 1987, C.P.: Carlos Betancur Jaramillo, radicado: 5093. *"Por otro tanto, el Despacho considera pertinente precisar que la admisión del llamamiento en garantía debe ceñirse al cumplimiento de los requisitos formales del artículo 55 del Código de Procedimiento Civil, ya que las valoraciones de fondo sobre dicho asunto, esto es, el vínculo legal o contractual, deben efectuarse en la sentencia que ponga fin al respectivo litigio."*

TRIBUNAL CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA
SECRETARIA GENERAL

NOTIFICACIÓN POR ESTADO ELECTRÓNICO
CERTIFICACIÓN

El auto anterior se notificó POR ANOTACIÓN EN
ESTADOS ELECTRONICOS No. 112 Hoy 12/11/2015


Secretario

Notificaciones Tribunal 03 Administrativo del Magdalena

De: Notificaciones Tribunal 03 Administrativo del Magdalena
<tadmin03mgd@notificacionesrj.gov.co>
Enviado el: jueves, 12 de noviembre de 2015 10:28 a.m.
Para: 'ace.servicioalcliente@acegroup.com'
Asunto: URGENTE LEER - TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA.
Datos adjuntos: LLAMAMIENTO EN GARANTIA - OBRESAN.pdf; obresan.pdf

Señores:
Apoderados dentro del medio de control.

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 201 inciso 3º del CPACA por medio del presente mensaje de datos NOTIFICO a usted (ES) que dentro de medio de control de **REPARACION DIRECTA** formulada por **OBRESAN** contra **NACION- MIN. JUSTICIA- Y OTROS**, identificado con el No. De RAD 47-001-2333-003-2014-0241-00, se profirió providencia de fecha 6 DE NOVIEMBRE de 2015 por medio del cual se acepta el llamamiento en garantía hecho a ACE ASEGURADORA S.A. por parte de la cámara de comercio.

ATENTAMENTE,

ALISSON LLANOS MIRANDA
citadora

AVISO IMPORTANTE: Esta dirección de correo electrónico tadmin03mgd@notificacionesrj.gov.co es de uso único y exclusivo de envío de notificaciones, todo mensaje que se reciba no será leído y automáticamente se eliminará de nuestros servidores, apreciado usuario si tiene alguna solicitud por favor comuníquese a la siguiente línea telefónica: 4213901 o envíenos un correo electrónico a la siguiente dirección: tadtvo03mag@cendoj.ramajudicial.gov.co

Notificaciones Tribunal 03 Administrativo del Magdalena

De: Notificaciones Tribunal 03 Administrativo del Magdalena
<tadmin03mgd@notificacionesrj.gov.co>
Enviado el: jueves, 12 de noviembre de 2015 10:34 a.m.
Para: villanauta@yahoo.com; ministro de justicia
(notificaciones.judiciales@minjusticia.gov.co); universidad del magdalena
(notificacionjudicial@unimagdalena.edu.co); dianaboveamendinueta@hotmail.com;
jpolofigueroa@gmail.com; conciliacionesextrajudiciales@defensajuridica.gov.co;
procuraduria (procjudadm155@procuraduria.gov.co); 'procjudadm43
@procuraduria.gov.co'
Asunto: auto acepta llamamiento en garantia
Datos adjuntos: obresan.pdf

Señores:

Apoderados dentro del medio de control.

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 201 inciso 3º del CPACA por medio del presente mensaje de datos NOTIFICO a usted (ES) que dentro de medio de control de **REPARACION DIRECTA** formulada por **OBRESAN** contra **NACION- MIN. JUSTICIA- Y OTROS**, identificado con el No. De RAD 47-001-2333-003-~~2014-0241-00~~, se profirió providencia de fecha 6 DE NOVIEMBRE de 2015 por medio del cual se acepta el llamamiento en garantía hecho a ACE ASEGURADORA S.A. por parte de la cámara de comercio.

ATENTAMENTE,

ALISSON LLANOS MIRANDA
citadora

AVISO IMPORTANTE: Esta dirección de correo electrónico tadmin03mgd@notificacionesrj.gov.co es de uso único y exclusivo de envío de notificaciones, todo mensaje que se reciba no será leído y automáticamente se eliminará de nuestros servidores, apreciado usuario si tiene alguna solicitud por favor comuníquese a la siguiente línea telefónica: 4213901 o envíenos un correo electrónico a la siguiente dirección: tadtvo03mag@cendoj.ramajudicial.gov.co

772
890

Notificaciones Tribunal 03 Administrativo del Magdalena

De: Notificaciones Tribunal 03 Administrativo del Magdalena
<tadmin03mgd@notificacionesrj.gov.co>
Enviado el: jueves, 12 de noviembre de 2015 10:38 a.m.
Para: 'camarasm@ccsm.org.co'; 'mvivesnoguera@hotmail.com'
Asunto: RV: auto acepta llamamiento en garantia
Datos adjuntos: obresan.pdf

Señores:
Apoderados dentro del medio de control.

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 201 inciso 3º del CPACA por medio del presente mensaje de datos NOTIFICO a usted (ES) que dentro de medio de control de **REPARACION DIRECTA** formulada por **OBRESAN** contra **NACION- MIN. JUSTICIA- Y OTROS**, identificado con el No. De RAD 47-001-2333-003-**2014-0241-00**, se profirió providencia de fecha 6 DE NOVIEMBRE de 2015 por medio del cual se acepta el llamamiento en garantía hecho a ACE ASEGURADORA S.A. por parte de la cámara de comercio.

ATENTAMENTE,

ALISSON LLANOS MIRANDA
citadora

AVISO IMPORTANTE: Esta dirección de correo electrónico tadmin03mgd@notificacionesrj.gov.co es de uso único y exclusivo de envío de notificaciones, todo mensaje que se reciba no será leído y automáticamente se eliminará de nuestros servidores, apreciado usuario si tiene alguna solicitud por favor comuníquese a la siguiente línea telefónica: 4213901 o envíenos un correo electrónico a la siguiente dirección: tadtvo03mag@cendoj.ramajudicial.gov.co



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA
SECRETARIA GENERAL-SISTEMA DE ORALIDAD LEY 1437 DE 2011

INCLUSION EN LISTA TRASLADO EXCEPCIONES ART. 175 C.P.A.CA.

RAD.	Medio de Control	Demandante	Demandado	Fecha Public.	Vence	MP
2015-0055	ACCION DE GRUPO	NANCY ESTELA ARMENTA BARRIOS Y OTROS	MINISTERIO DE DEFENSA-COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS ARMADAS DE COLOMBIA Y OTROS	2/12/2015	7/12/2015	EVC
2014-00241	REPARACION DIRECTA	OBRESAN	NACION-MINISTERIO DE JUSTICIA Y OTROS	2/12/2015	2/12/2015	EVC

CONSTANCIA: Hoy, dos (2) de diciembre de dos mil quince (2015) a las ocho de la mañana (8:00.a.m.), se publica la presente lista en lugar visible de la secretaria de la Corporación, por el término legal de un día (1), tal como lo disponen los artículos 101 y 110 del C.G.P. El traslado de las excepciones correrá por el término de tres (3) días en concordancia con lo dispuesto en el artículo 175, del C. P.A.CA.

JANET ARTIZ MONTEO
Secretario

G. HERRERA & ASOCIADOS

A B O G A D O S S A S

892 774
GRABADO

Honorable Magistrados

TRIBUNAL (03) ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA (Sistema Oral)

Magistrado Ponente Dr. EDGAR ALEXI VÁSQUEZ CONTRERAS

E. S. D.

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA	
SECRETARIA	
03 DIC. 2015	
Folios: 62	Horas: 10:50
Rec. por: Andres	Firma: [Firma]

REFERENCIA: MEDIO DE CONTROL DE REPARACION DIRECTA
RADICACIÓN: 47001233300320140024100
DEMANDANTE: SOCIEDAD J.P.G. & CIA S.A. Y OTROS – INTEGRANTES DE LA
UNION TEMPORAL OBRAS ESPECIALES DE SANTAMARTA –
OBRESAN
DEMANDADO: CAMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA Y OTROS
LLAMADO EN GARANTÍA: ACE SEGUROS S.A.

GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA, mayor, vecino de la ciudad de Cali, identificado con la cedula de ciudadanía No.19.395.114 de Bogotá, abogado en ejercicio, portador de la Tarjeta Profesional No.39.116 del Consejo Superior de la Judicatura, con domicilio en Cali y oficina en la Av.6ª A bis No. 35 N - 100 oficina 202 del Centro Empresarial Chipichape, actuando en calidad de Apoderado General de ACE SEGUROS S.A., sociedad legalmente constituida, con domicilio en la ciudad de Bogotá, tal y como se acredita en el Certificado expedido por la Cámara de Comercio de Cali que anexo a este escrito, respetuosamente me dirijo a su Despacho encontrándome dentro del término legal oportuno, con el fin de proceder, en primer lugar, a dar CONTESTACIÓN A LA DEMANDA que impetraron la sociedad J.P.G & CIA S.A. y otros contra la CAMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA y otros y, en segundo término, a contestar el llamamiento en garantía formulado por esta entidad a ACE SEGUROS S.A., en los siguientes términos:

CAPITULO I
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

A LOS HECHOS DE LA DEMANDA

Al hecho Primero: A mi poderdante no le constan las circunstancias narradas en este acápite de la demanda debido a que nunca tuvo relación alguna con la citada Unión Temporal, ni con la persona jurídica y naturales de las cuales se aduce que estuvo conformada. Por lo tanto, deberá la parte actora acreditar de manera idónea lo expuesto en este hecho.

Al hecho Segundo: A la sociedad que represento no le consta lo afirmado en el hecho segundo de la demanda debido a que no intervino en la celebración de esa supuesta convención, ni en su ejecución o desarrollo. En consecuencia, es obligación del demandante acreditar la existencia del contrato mencionado.

Al hecho Tercero: A mi poderdante no le constan las circunstancias narradas en este acápite de la demanda debido a que no intervino en la celebración del contrato mencionado por la parte actora, ni participó en su ejecución o desarrollo. En ese orden de ideas, deberá la parte actora demostrar su existencia conforme a lo ordenado en la ley.

Al hecho Cuarto: A la aseguradora que represento no le constan ninguna de las afirmaciones realizadas por los demandantes en este aparte de la demanda ya que no intervino en modo alguno en la fase precontractual o contractual de esa supuesta convención. Por lo tanto, deberán los demandantes acreditar fehacientemente la veracidad de sus dichos.

Al hecho Quinto: A mi poderdante no le constan las circunstancias narradas en este acápite de la demanda debido a que no intervino en la celebración del contrato mencionado por la parte actora, ni participó en su ejecución o desarrollo. En ese orden de ideas, deberá la parte actora demostrar su existencia conforme a lo ordenado en la ley.

Al hecho Sexto: A la sociedad que represento no le consta lo afirmado en el hecho segundo de la demanda debido a que no intervino en la celebración de esa supuesta convención, ni en su ejecución o desarrollo. En consecuencia, es obligación del demandante acreditar la existencia del contrato mencionado.

Al hecho Séptimo: A ACE Seguros S.A. no le consta lo afirmado en este punto de la demanda ya que se refiere a la actuación de terceros, por lo que mi mandante no está en posibilidad de aceptar o negar el contenido del hecho. Por lo tanto, conforme a lo ordenado en la ley, deberá la parte actora acreditar en forma fehaciente cada una de sus afirmaciones.

Al hecho Octavo: Teniendo en cuenta que el hecho hace referencia a las actuaciones atribuidas a terceras personas, ACE Seguros S.A. no está en posibilidad de aceptar o negar el contenido de este acápite de la demanda, debiendo los demandante probar en el curso del proceso los supuestos de hecho alegados en el libelo genitor.

Al hecho noveno: ACE Seguros S.A. no está en posibilidad de aceptar o negar el contenido del hecho debido a que se refiere a la actuación de terceros en la que no tuvo participación alguna la citada aseguradora. En consecuencia, le corresponde a la parte

actora acreditar de manera fehaciente lo alegado en la demanda.

Al hecho décimo: Teniendo en cuenta que el hecho hace referencia a las actuaciones atribuidas a terceras personas, ACE Seguros S.A. no está en posibilidad de aceptar o negar el contenido de este acápite de la demanda, debiendo los demandantes probar en el curso del proceso los supuestos de hecho alegados en el libelo genitor.

Al hecho once: A mi poderdante no le consta lo afirmado por los demandantes debido a que no fue parte en la actuación a la que se refiere el libelo genitor, ello en razón a que dentro del proceso arbitral referenciado no fue vinculada. Por lo expuesto, deberá la parte actora probar fehacientemente la ocurrencia del hecho.

Al hecho doce: ACE Seguros S.A. no puede afirmar o negar el contenido del hecho debido a que se refiere al trámite de un proceso arbitral del que no hizo parte mi mandante, por lo que desconoce las actuaciones surtidas en su desarrollo. En consecuencia, es la parte actora la que deberá acreditar la ocurrencia de los hechos de los cuales pretende derivar consecuencias jurídicas.

Al hecho trece: Teniendo en cuenta que el hecho se refiere a la actuación de terceros dentro del trámite de un proceso arbitral del que no fue parte ACE Seguros S.A., mi mandante no está en posibilidad de aceptar o negar el contenido del hecho. De conformidad con lo expuesto, es obligación de los demandantes probar la existencia de los fundamentos de hecho sobre los cuales pretendió erigir sus pretensiones.

Al hecho catorce: A mi poderdante no le consta lo afirmado por los demandantes debido a que no fue parte en la actuación a la que se refiere el libelo genitor, ello en razón a que dentro del proceso arbitral referenciado no fue vinculada. Por lo expuesto, deberá la parte actora probar fehacientemente la ocurrencia del hecho.

Al hecho quince: ACE Seguros S.A. no puede afirmar o negar el contenido del hecho debido a que se refiere al trámite de un proceso arbitral del que no hizo parte mi mandante, por lo que desconoce las actuaciones surtidas en su desarrollo. En consecuencia, es la parte actora la que deberá acreditar la ocurrencia de los hechos de los cuales pretende derivar consecuencias jurídicas.

Al hecho dieciséis: Teniendo en cuenta que el hecho se refiere a la actuación de terceros dentro del trámite de un proceso arbitral del que no fue parte ACE Seguros S.A., mi mandante no está en posibilidad de aceptar o negar el contenido del hecho. De conformidad con lo expuesto, es obligación de los demandantes probar la existencia de

los fundamentos de hecho sobre los cuales pretendió erigir sus pretensiones.

Al hecho diecisiete: A mi poderdante no le consta lo afirmado por los demandantes debido a que no fue parte en la actuación a la que se refiere el libelo genitor, ello en razón a que dentro del proceso arbitral referenciado no fue vinculada. Por lo expuesto, deberá la parte actora probar fehacientemente la ocurrencia del hecho.

Al hecho dieciocho: ACE Seguros S.A. no puede afirmar o negar el contenido del hecho debido a que se refiere al trámite de un proceso arbitral del que no hizo parte mi mandante, por lo que desconoce las actuaciones surtidas en su desarrollo. En consecuencia, es la parte actora la que deberá acreditar la ocurrencia de los hechos de los cuales pretende derivar consecuencias jurídicas.

Al hecho diecinueve: Teniendo en cuenta que el hecho se refiere a la actuación de terceros dentro del trámite de un proceso arbitral del que no fue parte ACE Seguros S.A., mi mandante no está en posibilidad de aceptar o negar el contenido del hecho. De conformidad con lo expuesto, es obligación de los demandantes probar la existencia de los fundamentos de hecho sobre los cuales pretendió erigir sus pretensiones.

Al hecho veinte: A mi poderdante no le consta lo afirmado por los demandantes debido a que no fue parte en la actuación a la que se refiere el libelo genitor, ello en razón a que dentro del proceso arbitral referenciado no fue vinculada. Por lo expuesto, deberá la parte actora probar fehacientemente la ocurrencia del hecho.

Al hecho veintiuno: ACE Seguros S.A. no puede afirmar o negar el contenido del hecho debido a que se refiere al trámite de un proceso arbitral del que no hizo parte mi mandante, por lo que desconoce las actuaciones surtidas en su desarrollo. En consecuencia, es la parte actora la que deberá acreditar la ocurrencia de los hechos de los cuales pretende derivar consecuencias jurídicas.

Al hecho veintidós: Teniendo en cuenta que el hecho se refiere a la actuación de terceros dentro del trámite de un proceso arbitral del que no fue parte ACE Seguros S.A., mi mandante no está en posibilidad de aceptar o negar el contenido del hecho. De conformidad con lo expuesto, es obligación de los demandantes probar la existencia de los fundamentos de hecho sobre los cuales pretendió erigir sus pretensiones.

Al hecho veintitrés: A mi poderdante no le consta lo afirmado por los demandantes debido a que no fue parte en la actuación a la que se refiere el libelo genitor, ello en razón a que dentro del proceso arbitral referenciado no fue vinculada. Por lo expuesto,

deberá la parte actora probar fehacientemente la ocurrencia del hecho.

Al hecho veinticuatro: ACE Seguros S.A. no puede afirmar o negar el contenido del hecho debido a que se refiere al trámite de un proceso arbitral del que no hizo parte mi mandante, por lo que desconoce las actuaciones surtidas en su desarrollo. En consecuencia, es la parte actora la que deberá acreditar la ocurrencia de los hechos de los cuales pretende derivar consecuencias jurídicas.

Al hecho veinticinco: Teniendo en cuenta que el hecho se refiere a la actuación de terceros dentro del trámite de un proceso arbitral del que no fue parte ACE Seguros S.A., mi mandante no está en posibilidad de aceptar o negar el contenido del hecho. De conformidad con lo expuesto, es obligación de los demandantes probar la existencia de los fundamentos de hecho sobre los cuales pretendió erigir sus pretensiones.

Al hecho veintiséis: A mi poderdante no le consta lo afirmado por los demandantes debido a que no fue parte en la actuación a la que se refiere el libelo genitor, ello en razón a que dentro del proceso arbitral referenciado no fue vinculada. Por lo expuesto, deberá la parte actora probar fehacientemente la ocurrencia del hecho.

Al hecho veintisiete: ACE Seguros S.A. no puede afirmar o negar el contenido del hecho debido a que se refiere al trámite de un proceso arbitral del que no hizo parte mi mandante, por lo que desconoce las actuaciones surtidas en su desarrollo. En consecuencia, es la parte actora la que deberá acreditar la ocurrencia de los hechos de los cuales pretende derivar consecuencias jurídicas.

Al hecho veintiocho: Teniendo en cuenta que el hecho se refiere a la actuación de terceros dentro del trámite de un proceso arbitral del que no fue parte ACE Seguros S.A., mi mandante no está en posibilidad de aceptar o negar el contenido del hecho. De conformidad con lo expuesto, es obligación de los demandantes probar la existencia de los fundamentos de hecho sobre los cuales pretendió erigir sus pretensiones.

Al hecho veintinueve: A mi poderdante no le consta lo afirmado por los demandantes debido a que no fue parte en la actuación a la que se refiere el libelo genitor, ello en razón a que dentro del proceso arbitral referenciado no fue vinculada. Por lo expuesto, deberá la parte actora probar fehacientemente la ocurrencia del hecho.

Al hecho treinta: ACE Seguros S.A. no puede afirmar o negar el contenido del hecho debido a que se refiere al trámite de un proceso arbitral del que no hizo parte mi mandante, por lo que desconoce las actuaciones surtidas en su desarrollo. En

consecuencia, es la parte actora la que deberá acreditar la ocurrencia de los hechos de los cuales pretende derivar consecuencias jurídicas.

Al hecho treinta y uno: Teniendo en cuenta que el hecho se refiere a la actuación de terceros dentro del trámite de un proceso arbitral del que no fue parte ACE Seguros S.A., mi mandante no está en posibilidad de aceptar o negar el contenido del hecho. De conformidad con lo expuesto, es obligación de los demandantes probar la existencia de los fundamentos de hecho sobre los cuales pretendió erigir sus pretensiones.

Al hecho treinta y dos: A mi poderdante no le consta lo afirmado por los demandantes debido a que no fue parte en la actuación a la que se refiere el libelo genitor, ello en razón a que dentro del proceso arbitral referenciado no fue vinculada. Por lo expuesto, deberá la parte actora probar fehacientemente la ocurrencia del hecho.

Al hecho treinta y tres: ACE Seguros S.A. no puede afirmar o negar el contenido del hecho debido a que se refiere al trámite de un proceso arbitral del que no hizo parte mi mandante, por lo que desconoce las actuaciones surtidas en su desarrollo. En consecuencia, es la parte actora la que deberá acreditar la ocurrencia de los hechos de los cuales pretende derivar consecuencias jurídicas.

Al hecho treinta y cuatro: Teniendo en cuenta que el hecho se refiere a la actuación de terceros dentro del trámite de un proceso arbitral del que no fue parte ACE Seguros S.A., mi mandante no está en posibilidad de aceptar o negar el contenido del hecho. De conformidad con lo expuesto, es obligación de los demandantes probar la existencia de los fundamentos de hecho sobre los cuales pretendió erigir sus pretensiones.

Al hecho treinta y cinco: A mi poderdante no le consta lo afirmado por los demandantes debido a que no fue parte en la actuación a la que se refiere el libelo genitor, ello en razón a que dentro del proceso arbitral referenciado no fue vinculada. Por lo expuesto, deberá la parte actora probar fehacientemente la ocurrencia del hecho.

Al hecho treinta y seis: ACE Seguros S.A. no puede afirmar o negar el contenido del hecho debido a que se refiere al trámite de un proceso arbitral del que no hizo parte mi mandante, por lo que desconoce las actuaciones surtidas en su desarrollo. En consecuencia, es la parte actora la que deberá acreditar la ocurrencia de los hechos de los cuales pretende derivar consecuencias jurídicas.

Al hecho treinta y siete: Teniendo en cuenta que el hecho se refiere a la actuación de terceros dentro del trámite de un proceso arbitral del que no fue parte ACE Seguros S.A.,

mi mandante no está en posibilidad de aceptar o negar el contenido del hecho. De conformidad con lo expuesto, es obligación de los demandantes probar la existencia de los fundamentos de hecho sobre los cuales pretendió erigir sus pretensiones.

Al hecho treinta y ocho: A mi poderdante no le consta lo afirmado por los demandantes debido a que no fue parte en la actuación a la que se refiere el libelo genitor, ello en razón a que dentro del proceso arbitral referenciado no fue vinculada. Por lo expuesto, deberá la parte actora probar fehacientemente la ocurrencia del hecho.

Al hecho treinta y nueve: ACE Seguros S.A. no puede afirmar o negar el contenido del hecho debido a que se refiere al trámite de un proceso arbitral del que no hizo parte mi mandante, por lo que desconoce las actuaciones surtidas en su desarrollo. En consecuencia, es la parte actora la que deberá acreditar la ocurrencia de los hechos de los cuales pretende derivar consecuencias jurídicas.

Al hecho cuarenta: Teniendo en cuenta que el hecho se refiere a la actuación de terceros dentro del trámite de un proceso arbitral del que no fue parte ACE Seguros S.A., mi mandante no está en posibilidad de aceptar o negar el contenido del hecho. De conformidad con lo expuesto, es obligación de los demandantes probar la existencia de los fundamentos de hecho sobre los cuales pretendió erigir sus pretensiones.

Al hecho cuarenta y uno: A mi poderdante no le consta lo afirmado por los demandantes debido a que no fue parte en la actuación a la que se refiere el libelo genitor, ello en razón a que dentro del proceso arbitral referenciado no fue vinculada. Por lo expuesto, deberá la parte actora probar fehacientemente la ocurrencia del hecho.

Al hecho cuarenta y dos: ACE Seguros S.A. no puede afirmar o negar el contenido del hecho debido a que se refiere al trámite de un proceso arbitral del que no hizo parte mi mandante, por lo que desconoce las actuaciones surtidas en su desarrollo. En consecuencia, es la parte actora la que deberá acreditar la ocurrencia de los hechos de los cuales pretende derivar consecuencias jurídicas.

Al hecho cuarenta y tres: Teniendo en cuenta que el hecho se refiere a la actuación de terceros dentro del trámite de un proceso arbitral del que no fue parte ACE Seguros S.A., mi mandante no está en posibilidad de aceptar o negar el contenido del hecho. De conformidad con lo expuesto, es obligación de los demandantes probar la existencia de los fundamentos de hecho sobre los cuales pretendió erigir sus pretensiones.

Al hecho cuarenta y cuatro: A mi poderdante no le consta lo afirmado por los

demandantes debido a que no fue parte en la actuación a la que se refiere el libelo genitor, ello en razón a que dentro del proceso arbitral referenciado no fue vinculada. Por lo expuesto, deberá la parte actora probar fehacientemente la ocurrencia del hecho.

Al hecho cuarenta y cinco: ACE Seguros S.A. no puede afirmar o negar el contenido del hecho debido a que se refiere al trámite de un proceso arbitral del que no hizo parte mi mandante, por lo que desconoce las actuaciones surtidas en su desarrollo. En consecuencia, es la parte actora la que deberá acreditar la ocurrencia de los hechos de los cuales pretende derivar consecuencias jurídicas.

Al hecho cuarenta y seis: Teniendo en cuenta que el hecho se refiere a la actuación de terceros dentro del trámite de un proceso arbitral del que no fue parte ACE Seguros S.A., mi mandante no está en posibilidad de aceptar o negar el contenido del hecho. De conformidad con lo expuesto, es obligación de los demandantes probar la existencia de los fundamentos de hecho sobre los cuales pretendió erigir sus pretensiones.

Al hecho cuarenta y siete: A mi poderdante no le consta lo afirmado por los demandantes debido a que no fue parte en la actuación a la que se refiere el libelo genitor, ello en razón a que dentro del proceso arbitral referenciado no fue vinculada. Por lo expuesto, deberá la parte actora probar fehacientemente la ocurrencia del hecho.

Al hecho cuarenta y ocho: ACE Seguros S.A. no puede afirmar o negar el contenido del hecho debido a que se refiere al trámite de un proceso arbitral del que no hizo parte mi mandante, por lo que desconoce las actuaciones surtidas en su desarrollo. En consecuencia, es la parte actora la que deberá acreditar la ocurrencia de los hechos de los cuales pretende derivar consecuencias jurídicas.

Al hecho cuarenta y nueve: Teniendo en cuenta que el hecho se refiere a la actuación de terceros dentro del trámite de un proceso arbitral del que no fue parte ACE Seguros S.A., mi mandante no está en posibilidad de aceptar o negar el contenido del hecho. De conformidad con lo expuesto, es obligación de los demandantes probar la existencia de los fundamentos de hecho sobre los cuales pretendió erigir sus pretensiones.

Al hecho cincuenta: A mi poderdante no le consta lo afirmado por los demandantes debido a que no fue parte en la actuación a la que se refiere el libelo genitor, ello en razón a que dentro del proceso arbitral referenciado no fue vinculada. Por lo expuesto, deberá la parte actora probar fehacientemente la ocurrencia del hecho.

Al hecho cincuenta y uno: ACE Seguros S.A. no puede afirmar o negar el contenido del

hecho debido a que se refiere al trámite de un proceso arbitral del que no hizo parte mi mandante, por lo que desconoce las actuaciones surtidas en su desarrollo. En consecuencia, es la parte actora la que deberá acreditar la ocurrencia de los hechos de los cuales pretende derivar consecuencias jurídicas.

Al hecho cincuenta y dos: Teniendo en cuenta que el hecho se refiere a la actuación de terceros dentro del trámite de un proceso arbitral del que no fue parte ACE Seguros S.A., mi mandante no está en posibilidad de aceptar o negar el contenido del hecho. De conformidad con lo expuesto, es obligación de los demandantes probar la existencia de los fundamentos de hecho sobre los cuales pretendió erigir sus pretensiones.

Al hecho cincuenta y tres: A mi poderdante no le consta la afirmado por los demandantes debido a que no fue parte en la actuación a la que se refiere el líbelo genitor, ello en razón a que dentro del proceso arbitral referenciado no fue vinculada. Por lo expuesto, deberá la parte actora probar fehacientemente la ocurrencia del hecho.

Al hecho cincuenta y cuatro: ACE Seguros S.A. no puede afirmar o negar el contenido del hecho debido a que se refiere al trámite de un proceso arbitral del que no hizo parte mi mandante, por lo que desconoce las actuaciones surtidas en su desarrollo. En consecuencia, es la parte actora la que deberá acreditar la ocurrencia de los hechos de los cuales pretende derivar consecuencias jurídicas.

Al hecho cincuenta y cinco: Teniendo en cuenta que el hecho se refiere a la actuación de terceros dentro del trámite de un proceso arbitral del que no fue parte ACE Seguros S.A., mi mandante no está en posibilidad de aceptar o negar el contenido del hecho. De conformidad con lo expuesto, es obligación de los demandantes probar la existencia de los fundamentos de hecho sobre los cuales pretendió erigir sus pretensiones.

Al hecho cincuenta y seis: A mi poderdante no le consta lo afirmado por los demandantes debido a que no fue parte en la actuación a la que se refiere el líbelo genitor, ello en razón a que dentro del proceso arbitral referenciado no fue vinculada. Por lo expuesto, deberá la parte actora probar fehacientemente la ocurrencia del hecho.

Al hecho cincuenta y siete: ACE Seguros S.A. no puede afirmar o negar el contenido del hecho debido a que se refiere al trámite de un proceso arbitral del que no hizo parte mi mandante, por lo que desconoce las actuaciones surtidas en su desarrollo. En consecuencia, es la parte actora la que deberá acreditar la ocurrencia de los hechos de los cuales pretende derivar consecuencias jurídicas.

Al hecho cincuenta y ocho: Teniendo en cuenta que el hecho se refiere a la actuación de terceros dentro del trámite de un proceso arbitral del que no fue parte ACE Seguros S.A., mi mandante no está en posibilidad de aceptar o negar el contenido del hecho. De conformidad con lo expuesto, es obligación de los demandantes probar la existencia de los fundamentos de hecho sobre los cuales pretendió erigir sus pretensiones.

Al hecho cincuenta y nueve: A mi poderdante no le consta lo afirmado por los demandantes debido a que no fue parte en la actuación a la que se refiere el libelo genitor, ello en razón a que dentro del proceso arbitral referenciado no fue vinculada. Por lo expuesto, deberá la parte actora probar fehacientemente la ocurrencia del hecho.

Al hecho sesenta: ACE Seguros S.A. no puede afirmar o negar el contenido del hecho debido a que se refiere al trámite de un proceso arbitral del que no hizo parte mi mandante, por lo que desconoce las actuaciones surtidas en su desarrollo. En consecuencia, es la parte actora la que deberá acreditar la ocurrencia de los hechos de los cuales pretende derivar consecuencias jurídicas.

Al hecho sesenta y uno: Teniendo en cuenta que el hecho se refiere a la actuación de terceros dentro del trámite de un proceso arbitral del que no fue parte ACE Seguros S.A., mi mandante no está en posibilidad de aceptar o negar el contenido del hecho. De conformidad con lo expuesto, es obligación de los demandantes probar la existencia de los fundamentos de hecho sobre los cuales pretendió erigir sus pretensiones.

Al hecho sesenta y uno: A mi poderdante no le consta lo afirmado por los demandantes debido a que no fue parte en la actuación a la que se refiere el libelo genitor, ello en razón a que dentro del proceso arbitral referenciado no fue vinculada. Por lo expuesto, deberá la parte actora probar fehacientemente la ocurrencia del hecho.

Al hecho sesenta y dos: ACE Seguros S.A. no puede afirmar o negar el contenido del hecho debido a que se refiere a la actuación de terceros. En consecuencia, es la parte actora la que deberá acreditar la ocurrencia de los hechos de los cuales pretende derivar consecuencias jurídicas.

Al hecho sesenta y tres: Teniendo en cuenta que el hecho se refiere a la actuación de terceros mi mandante no está en posibilidad de aceptar o negar el contenido del hecho. De conformidad con lo expuesto, es obligación de los demandantes probar la existencia de los fundamentos de hecho sobre los cuales pretendió erigir sus pretensiones.

Al hecho sesenta y cuatro: ACE Seguros S.A. no puede afirmar o negar el contenido

del hecho debido a que se refiere a la actuación de terceros. En consecuencia, es la parte actora la que deberá acreditar la ocurrencia de los hechos de los cuales pretende derivar consecuencias jurídicas.

Al hecho sesenta y cinco: Teniendo en cuenta que el hecho se refiere a la actuación de terceros mi mandante no está en posibilidad de aceptar o negar el contenido del hecho. De conformidad con lo expuesto, es obligación de los demandantes probar la existencia de los fundamentos de hecho sobre los cuales pretendió erigir sus pretensiones.

Al hecho sesenta y seis: A mi poderdante no le consta lo afirmado por los demandantes debido a que no fue parte en la actuación a la que se refiere el libelo genitor, ello en razón a que dentro de la conciliación extrajudicial referenciada no fue vinculada. Por lo expuesto, deberá la parte actora probar fehacientemente la ocurrencia del hecho.

Al hecho sesenta y siete: Teniendo en cuenta que el hecho se refiere a la actuación de terceros mi mandante no está en posibilidad de aceptar o negar el contenido del hecho. De conformidad con lo expuesto, es obligación de los demandantes probar la existencia de los fundamentos de hecho sobre los cuales pretendió erigir sus pretensiones.

Al hecho sesenta y ocho: A mi poderdante no le consta lo afirmado por los demandantes debido a que no fue parte en la actuación a la que se refiere el libelo genitor, ello en razón a que dentro de la conciliación extrajudicial referenciada no fue vinculada. Por lo expuesto, deberá la parte actora probar fehacientemente la ocurrencia del hecho.

Al hecho sesenta y nueve: Teniendo en cuenta que el hecho se refiere a la actuación de terceros mi mandante no está en posibilidad de aceptar o negar el contenido del hecho. De conformidad con lo expuesto, es obligación de los demandantes probar la existencia de los fundamentos de hecho sobre los cuales pretendió erigir sus pretensiones.

FRENTE A LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA

Mi representada ACE Seguros S.A., en lo que a ella concierne, se opone a la prosperidad de todas y cada una de las pretensiones de la la parte actora, por considerarlas completamente ajenas a la realidad que se revela de los hechos en los que se basó la demanda, pues no existe prueba alguna que demuestre que los demandados, especialmente la Cámara de Comercio de Santa Marta, incurrieron en acciones u omisiones de las cuales pueda imputarse algún tipo de responsabilidad a título de culpa.

En efecto, tal como se demostrará en el curso del proceso, los demandados, en especial la Cámara de Comercio de Santa Marta, no tuvo participación alguna en el trámite del proceso arbitral del cual la parte actora pretende derivar la obligación indemnizatoria, siendo en consecuencia totalmente ajena a la actividad o actividades que se surtieron en el desarrollo del proceso, las cuales fueron ejecutadas por parte de los árbitros que fueron designados directamente por las partes, con total autonomía e independencia.

Por lo tanto, frente a los demandados, especialmente con relación a la Cámara de Comercio de Santa Marta y consecuentemente frente a mi poderdante, ACE Seguros S.A., respetuosamente solicito que sean negadas las pretensiones de la demanda y en su lugar se reconozca que tales entidades no están obligadas al pago de suma de dinero alguna a los demandantes por no ser responsables de los hechos narrados en el libelo genitor.

En consecuencia, ACE Seguros S.A. se opone a la improbable prosperidad de las pretensiones de la parte actora, empezando por la tendiente a que se declare que la parte demandada debe responder por los perjuicios que alegan y deben demostrar los demandantes, toda vez que el libelo demandatorio carece de los fundamentos fácticos requeridos para que puedan surtir los efectos normativos que se pretenden deducir en contra de la parte pasiva de la acción, sin razones jurídicas válidas, o que permitan la viabilidad de las peticiones, por cuanto no se estructura la responsabilidad atribuida, por lo tanto pido que se niegue lo pedido por la parte acora.

Sin perjuicio de la evidente inexistencia de responsabilidad de los demandados en los hechos que originaron la demanda, especialmente de la Cámara de Comercio de Santa Marta y de mi representada, en esta oportunidad procesal manifiesto al Despacho que el perjuicio reclamado carece de justificación, siendo pertinente resaltar que con miras a la obtención de una indemnización no basta alegar el supuesto detrimento, por cuanto el mismo no es susceptible de presunción, sino que es menester acreditar debidamente su producción, esto comprende su identificación y obviamente su cuantificación cierta, toda vez que al funcionario juzgador le está vedado presumir un perjuicio y se tiene que concretar a lo que ciertamente está acreditado en el expediente, de manera que lo que no aparezca allí simplemente no existe y por ende no puede ser considerado por el Juez.

Lo anterior exige que la comprobación del supuesto daño sea satisfactoria, es decir suficiente, con pruebas documentales auténticas, confirmadas, veraces y otros medios de prueba que las corroboren, para que en ejercicio de la elevada función de impartir justicia sea posible aplicar atinadamente el método de la sana crítica para la acertada valoración

del acervo probatorio.

Adicionalmente manifiesto que me opongo a la eventual e improbable prosperidad de la pretensión encaminada al resarcimiento de los perjuicios morales, en primer lugar, por cuanto resulta notoriamente injustificada e improcedente la pretensión de reconocimiento de perjuicios extrapatrimoniales a favor de un ente moral o ficticio como la Unión Temporal Obras Especiales de Santa Marta o la sociedad J.P.G. & Cia. S.A. y, en segundo lugar, porque no sólo no se encuentran acreditados sino también porque aquellos, en el remoto evento de resultar probados, no le son atribuibles a la parte pasiva de la acción ya que, aparte de que ella no comprometió su responsabilidad dentro del caso que nos ocupa, no hay título de imputación posible, por lo que no es comprensible la pretensión de reparación de un detrimento inmaterial que no se produjo y que excede ostensiblemente los parámetros jurisprudenciales o doctrinales adoptados para la reparación del daño.

Adicionalmente, en gracia de discusión y sin que el presente constituya una aceptación de las cargas que se pretenden atribuir a la parte pasiva de la acción, será necesario recalcar que el resarcimiento del daño moral no es un regalo u obsequio gracioso, sino que tiene por causa el quebranto de intereses protegidos por el ordenamiento, que deba repararse en un caso y con sujeción de los elementos de convicción y las particularidades de la situación litigiosa según el ponderado *arbitrio iudicis*, sin perjuicio de los criterios orientadores de la jurisprudencia, en procura de una verdadera, justa, recta y eficiente impartición de justicia¹.

Frente a este particular punto, es decir con respecto a la tasación de los perjuicios morales reclamados por los demandantes, debe señalarse que éstos están siendo reclamados por montos que desbordan ampliamente los límites jurisprudencialmente establecidos para la indemnización de este tipo de daño. Al respecto, es preciso manifestar que el Consejo de Estado, mediante Acta del 28 de agosto de 2014, unificó jurisprudencia en torno a los montos del resarcimiento cuando se reclaman perjuicios inmatrimoniales y las peticiones del libelo genitor desbordan arbitrariamente los parámetros jurisprudenciales.

En tal sentido, ni siquiera en el remoto y exótico evento en el que en el sub lite se declarara la hipotética responsabilidad de los demandados podría accederse a otorgar las millonarias indemnizaciones que por perjuicios morales buscan los demandantes.

¹ Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 18 de Septiembre de 2009, expediente 001-3101-005-2005-00406-01, Magistrado Ponente: Dr. William Namén Vargas.

Frente a las pretensiones individualmente consideradas procedo a pronunciarme en detalle así:

Frente a la primera pretensión (declarativa) Mi poderdante se opone a la prosperidad de la pretensión declarativa debido a que no existe título de responsabilidad alguna que permita atribuir responsabilidad a los demandados, especialmente a la Cámara de Comercio de Santa Marta y a ACE Seguros S.A., por acción u omisión, en los hechos que originaron la demanda.

Frente a la segunda pretensión (condenatoria) Con relación a las pretensiones condenatorias, mi mandante manifiesta respetuosamente que se opone a la prosperidad de ésta debido a que no está acreditada la existencia del perjuicio deprecado por los actores en este punto de la demanda, ni existe en cabeza de los demandados, especialmente de la Cámara de Comercio de Santa Marta y ACE Seguros S.A., algún tipo de responsabilidad que les imponga la obligación de resarcir el supuesto daño sufrido.

Adicionalmente, mi mandante se opone la prosperidad de esta pretensión por resultar notoriamente injustificada e improcedente la petición de reconocimiento de perjuicios extrapatrimoniales a favor de un ente moral o ficticio.

Frente a la tercera pretensión (condenatoria): Me opongo a la prosperidad de ésta pretensión debido a que no está acreditada la existencia del perjuicio deprecado por los actores en este punto de la demanda, ni existe en cabeza de los demandados, especialmente de la Cámara de Comercio de Santa Marta y ACE Seguros S.A., algún tipo de responsabilidad que le imponga la obligación de resarcir el supuesto daño sufrido.

Frente a la cuarta pretensión (condenatoria): Me opongo a la prosperidad de ésta pretensión debido a que al no estar acreditada la existencia del perjuicio deprecado por los actores en la demanda, ni prueba de la responsabilidad de los demandados en los hechos que originaron la demanda, mucho menos podrá existir obligación de reconocer intereses sobre sumas que no se adeudan por mi poderdante.

Frente a la quinta pretensión (condenatoria): Me opongo a la prosperidad de ésta pretensión debido a que, tal y como se indicó en párrafos precedentes, resulta notoriamente injustificada e improcedente la pretensión de reconocimiento de perjuicios extrapatrimoniales a favor de un ente moral o ficticio como el que actúa como demandante.

Frente a la sexta pretensión (condenatoria): Me opongo a la prosperidad de ésta

pretensión debido a que no se ha demostrado la existencia de un perjuicio indemnizable, ni del nexo causal exigido en la ley, requisitos que son indispensable para que potencialmente pueda reconocerse la prosperidad de la petición deprecada.

Frente a la séptima pretensión (condenatoria): Me opongo a la prosperidad de ésta pretensión debido a que al no estar acreditada la responsabilidad de los demandados, especialmente de la Cámara de Comercio de Santa Marta y ACE Seguros S.A. en los hechos que originaron la demanda, mucho menos podrá existir obligación de cumplir con un fallo condenatorio que seguramente no se dictará en el presente proceso en contra de la sociedad que represento.

OBJECCIÓN A LA ESTIMACIÓN DE LA CUANTÍA DE LAS PRETENSIONES

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 206 del Código General del Proceso, aplicable por remisión expresa a la presente controversia, conforme a lo ha señalado el Consejo de Estado mediante el Auto de Unificación de Jurisprudencia de 2014 citado en los acápites anteriores, de manera respetuosa presento OBJECCIÓN a la estimación de la cuantía establecida en la demanda, como quiera que, además de que resultar ser inexistente la responsabilidad que infundadamente se le pretende endilgar a los demandados y especialmente a la Cámara de Comercio de Santa Marta y ACE Seguros S.A., estos fueron tasados sobre límites que desbordan ampliamente los parámetros que jurisprudencialmente han sido establecidos para la indemnización de ese tipo de daño.

En efecto, la parte actora no sólo reclama el pago de sumas exageradas por perjuicios de orden material, sino que además pretende el reconocimiento de perjuicios extrapatrimoniales inexistentes para un ente ficticio como el demandante, debiendo además reiterarse que no obra prueba del daño emergente reclamado, careciendo también de sustento la supuesta base sobre la que se pueda tasar el lucro cesante.

El lucro cesante es un tipo de perjuicio material que consiste en la imposibilidad de percibir una ganancia, interés o utilidad esperados con certeza como consecuencia de un hecho dañoso. Sin embargo en este caso la parte actora reclama el resarcimiento de un hipotético e inexistente perjuicio por lucro cesante, sin aportar prueba alguna de su efectiva causación.

En el derecho colombiano no es admisible el reconocimiento de indemnización alguna por hechos que no constituyan un verdadero daño, es decir que el detrimento o perjuicio debe ser cierto y no puede presumirse. En el caso que nos ocupa, no hay elementos de juicio o pruebas que puedan utilizarse para calcular los supuestos perjuicios materiales que

apócrifamente se denuncian como generados por la actuación de la parte pasiva de la acción, brillando por su ausencia prueba alguna que conduzca a la demostración de la existencia de semejante detrimento, máxime que él correspondería a la supuesta privación de ingresos generada con motivo de aquel hecho y no hay prueba alguna que indique que la accionante ciertamente percibiría ingresos y mucho menos que ellos no se hubieran recibido como consecuencia de acciones u omisiones que fueron imputables a la parte pasiva de la acción.

Téngase en cuenta que la demandante aduce, entre otros perjuicios, un supuesto detrimento patrimonial derivado del lucro cesante, hipotéticamente representado en los ingresos dejados de percibir como consecuencia del laudo que fue anulado por el Consejo de Estado, sin embargo, ninguna prueba aportó al Despacho que acredite que efectivamente se hubiera visto privado de recibir las sumas pretendidas, falencia que se deriva precisamente de la imposibilidad de acreditar la ocurrencia de una acción que nunca se produjo, tal y como se demostrará en el desarrollo del proceso.

Por daño emergente la parte actora reclama la suma de \$175'870.001, monto supuestamente representado por los honorarios de abogado, los honorarios de los árbitros y secretario del tribunal, el pago de los gastos del proceso arbitral y la protocolización del mismo. No obstante lo anterior, la parte actora no aportó ningún elemento de juicio que demuestre que efectivamente se vio precisado a realizar tales erogaciones, ni mucho menos ha aportado prueba alguna acredite el nexo causal exigido por la ley.

Pero si lo anterior no fuera suficiente, es importante señalar que la parte actora pretende que los mismos valores le sean resarcidos como lucro cesante y a la vez como daño emergente. En efecto, por una parte, los demandantes afirman que sufrieron un detrimento por daño emergente, representado, en resumen, en los gastos derivados del trámite del tribunal de arbitramento. Sin embargo y por otra parte, esos mismos gastos del tribunal de arbitramento los accionantes pretenden que le sean reconocidos como lucro cesante con base en las condenas impuestas en el laudo que fue anulado, en el que se ordenó el pago de las costas del proceso y las agencias en derecho precisamente para resarcir los costos en los que eventualmente tuvo que incurrir dentro del trámite del arbitramento.

Entonces, los demandantes, por una vía solicitan que se les paguen los gastos del tribunal de arbitramento (daño emergente) y por la otra vía esos mismos valores que fueron reconocidos en su favor en el laudo a título de costas y agencias en derecho, buscan que igualmente le sean pagados como lucro cesante, todo lo cual constituye un

doble cobro y eventualmente un enriquecimiento sin causa justa en su favor.

En tal virtud, respetuosamente solicito al señor Juez, dar aplicación a lo dispuesto en el Ar. 206 del Código General del Proceso, declarando procedente la objeción de la cuantía en cuanto no sólo arbitrariamente se busca obtener una doble indemnización por un mismo concepto, sino que sus pretensiones, completamente huérfanas de pruebas, exceden ostensiblemente los lineamientos jurisprudenciales mencionados en los párrafos precedentes.

EXCEPCIONES DE FONDO CONTRA LA DEMANDA

Contra las pretensiones de la demanda me permito proponer las siguientes:

- **CADUCIDAD DE LA ACCIÓN.**

En el sub lite la parte actora pretende el reconocimiento de la indemnización de los supuestos perjuicios causados por haberse proferido extemporáneamente el laudo dentro de un proceso arbitral que se adelantó en el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Santa Marta.

Conforme a lo anterior, si el hecho generador del perjuicio alegado por los accionantes fue precisamente la expedición extemporánea del laudo, no cabe ninguna duda que en ese contexto es precisamente desde ese momento que comenzó a correr el término bial consagrado en la ley para ejercer las acciones jurisdiccionales correspondientes.

Es importante tener en cuenta que el laudo proferido dentro del trámite arbitral convocado por los hoy demandantes en contra de la Universidad del Magdalena se profirió el 11 de agosto de 2011 y, siendo ese el hecho generador, la caducidad de la acción se habría configurado el 11 de agosto de 2013.

La parte actora aduce en el libelo genitor que el término de caducidad de la acción comenzó a correr en el momento en el cual el Consejo de Estado declaró la nulidad del laudo, situación que no puede ser de recibo por la Corporación ya que aceptar ese engañoso argumento sería tanto como afirmar que el hecho que generó el daño es la providencia proferida por el Consejo de Estado.

No puede confundirse la decisión que declaró la nulidad del laudo arbitral con el hecho del cual los accionantes pretenden derivar las consecuencias jurídicas nocivas en contra del Estado, pues se reitera que los demandantes aducen que el perjuicio provino de la

extemporaneidad de la decisión que puso fin a la controversia arbitral, dictado el 11 de agosto de 2011, en ningún caso se duelen de la providencia que declaró tal circunstancia, por lo que del mismo modo el término de caducidad debe necesariamente computarse desde el momento en el que se produjo hecho al cual se le atribuye la producción del daño.

Por lo expuesto, resulta evidente que para el momento en el cual los demandantes impetraron la demanda ya se había configurado la caducidad de la acción, de manera que respetuosamente solicito declarar probada esta excepción.

• CULPA EXCLUSIVA DE LOS DEMANDANTES

Los demandantes afirman en el libelo genitor que sufrieron perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales como resultado de haberse proferido un laudo por fuera de los términos legales, lo cual motivo la anulación de la decisión adoptada en el proceso arbitral. Para soportar el petitum de la acción, en una extensa relación de hechos, en el texto de la demanda se presentan un sinnúmero de actuaciones realizadas en el trámite arbitral, en todas las cuales participaron la sociedad J.P.G. & Cia. S.A. y los señores German Villanueva Calderón y Ricardo Luis Canabal Guzmán a través de apoderado.

De lo anterior se colige sin hesitación alguna que los hoy demandantes, al estar directamente involucrados en el proceso arbitral, en todo momento tuvieron la oportunidad de informar a los árbitros designados para resolver la controversia sobre los riesgos del vencimiento de los términos para adoptar la decisión que en derecho correspondiera.

No obstante lo anterior, la sociedad J.P.G. & Cia. S.A. y los señores German Villanueva Calderón y Ricardo Luis Canabal Guzmán guardaron absoluto silencio dentro del trámite del proceso arbitral, ningún llamado se realizó a los señores árbitros que advirtiera el riesgo del vencimiento de los términos, de suerte que fue precisamente la actuación de los demandantes la que generó que el laudo se profiera por fuera de los plazos señalados para la duración del proceso.

Y es que se observa que fue precisamente la Universidad del Magdalena la entidad que puso de presente el vencimiento del término de duración del tribunal de arbitramento y a pesar de ello los hoy demandantes continuaron guardando silencio, convalidando con esa actuación permisiva que los plazos para dictar el laudo se vencieran sin que se adoptara la decisión.

No tiene asidero alguno que los demandantes (J.P.G. & Cia. S.A., German Villanueva

Calderón y Ricardo Luis Canabal Guzmán) hubieran convalidado con su silencio el trámite adelantado en el proceso arbitral y ahora pretendan obtener una indemnización aduciendo un supuesto daño generado por hechos que ellos tenían la obligación de poner en conocimiento de los árbitros y no lo hicieron, pues era su deber realizar todas las gestiones legales y hacer uso de los recursos correspondientes para que el proceso se adelantara con diligencia, de suerte que cualquier potencial daño derivado de esa demora es imputable exclusivamente a los propios accionantes por no haber ejercido las acciones correctivas de manera oportuna dentro del proceso de arbitramento.

Consecuentemente, al guardar silencio la sociedad J.P.G. & Cia. S.A. y los señores German Villanueva Calderón y Ricardo Luis Canabal Guzmán durante el trámite del proceso arbitral, sin hacer ningún llamado para que los términos se cumplieran con rigurosidad, voluntaria y conscientemente se expusieron al riesgo de vencimiento de los términos, lo cual constituye negligencia de su parte, además de una imprudencia y un descuido que les hace responsables de los daños que supuestamente padecieron.

Así pues, el hecho al cual los demandantes le atribuyen la causa del daño tuvo lugar exclusivamente por omisión en el cumplimiento de las obligaciones de ellos como parte en el proceso arbitral, constituyéndose esa actuación en una negligencia culpable, por lo que respetuosamente solicito declarar probada esta excepción.

- **NO SE CONFIGURAN LOS ELEMENTOS DEL ERROR JUDICIAL**

La responsabilidad por el error judicial sobre el cual la parte demandante pretende erigir el petitum de la demanda se enmarca en la teoría general de la falla del servicio. Por lo tanto, es necesario probar esta última y acreditar la existencia del daño antijurídico para deducir la responsabilidad patrimonial de los demandados.

Al respecto es importante precisar que el Consejo de Estado ha sido reiterativo en su jurisprudencia en señalar como causal eximente de responsabilidad el hecho de un tercero. Según explicó el órgano de cierre de la jurisdicción administrativa, en estos casos no es relevante acreditar que la conducta sea imprevisible e irresistible, sino que el comportamiento del tercero o de la víctima sea decisivo, determinante y exclusivo en la producción del daño.

Al respecto, recordó el Consejo de Estado, que la responsabilidad por falla del servicio judicial no se declara por la simple equivocación conceptual en la que pueda incurrir el juzgador, sino cuando se presentan conductas abiertamente contrarias al derecho, ilegales y generadoras de daños y perjuicios materiales y morales.

En el presente caso, para que el laudo se hubiera proferido por fuera de los términos de duración del proceso arbitral necesariamente se requirió de la conducta omisiva de las partes del proceso, entre ellas obviamente la de quienes ahora fungen como accionantes dentro del sub lite, por lo que su comportamiento fue, en los términos del Consejo de Estado, claramente decisivo y determinante para la producción del hecho supuestamente generador del daño, todo lo cual constituye un eximente de responsabilidad, eliminando de contera la posibilidad de declarar la existencia de un error judicial.

Por lo expuesto, ruego declarar probada ésta excepción ya que la actuación de las partes del proceso arbitral fue precisamente la generadora del hecho del cual ahora pretenden derivar consecuencias jurídicas.

- **INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD DE LA CAMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA**

Los Centros de Arbitraje son los encargados de organizar y administrar el denominado arbitraje institucional, que de acuerdo a lo establecido en la Ley, se rigen por lo dispuesto en el reglamento de cada uno de los centros que prestan dicho servicio. Estas entidades, en este caso el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Santa Marta, no desempeñan funciones propiamente arbitrales pues no tienen inherencia o control de las decisiones que se adopten dentro del trámite del proceso arbitral, con lo cual se descarta de entrada el carácter o naturaleza jurisdiccional de la actuación de los centros de arbitraje y a su vez los diferencia de la actividad de los árbitros propiamente dicha.

El régimen jurídico de los centros de arbitraje está contenido, además de la ley que regula el procedimiento del proceso arbitral, en los propios estatutos y reglamentos de los Centros de Arbitraje. En consecuencia, los centros de arbitraje no ejercen ninguna función de tipo jurisdiccional, pues son los árbitros a quienes les corresponde dicha función.

Consecuentemente, los Centros de Arbitraje cumplen con la prestación de servicios e infraestructura física para que se puedan dirimir las controversias que voluntariamente las partes decidan someter a consideración de los árbitros inscritos, de lo que se desprende que el centro de arbitraje organiza y administra el arbitraje que le ha sido sometido y las partes remuneran dichos servicios mediante el pago de los servicios administrativos de acuerdo a lo previsto en el reglamento del centro.

Es por esto que los centros de arbitraje no responden por hecho ajeno, es decir, por los actos u omisiones de los árbitros que designen, pues no son superiores de dichos

árbitros, ni éstos son dependientes de los centros de arbitraje. Los centros de arbitraje no tienen injerencia o control en las decisiones adoptadas en el desarrollo del proceso arbitral, por lo que en modo alguno están llamados a responder por las actuaciones de los árbitros ya que ellos actúan de manera autónoma e independiente.

En ese orden de ideas, siendo evidente que el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Santa Marta no tiene ninguna facultad legal o contractual para controlar o direccionar las decisiones que eventualmente puedan adoptar los árbitros designados por las partes para dirimir una controversia, resulta inexistente la responsabilidad que arbitrariamente se le pretende atribuir por la parte actora, ya que el supuesto hecho generado del perjuicio no le sería imputable ni por acción ni por omisión.

Adicionalmente es importante mencionar que fueron los mismos demandantes, de manera voluntaria y autónoma, en compañía de su contraparte la Universidad del Magdalena, quienes en su momento designaron los árbitros que habrían de resolver el litigio. Tal actuación fue efectuada por los hoy accionantes de manera libre, sin que en la elección hubiera mediado la actuación de la Cámara de Comercio de Santa Marta, de suerte que ese acto no puede en modo alguno comprometer la responsabilidad de la citada entidad.

Además de lo expuesto, a manera de simple ilustración y aunque la parte actora no ha cuestionado en modo alguno el proceso de selección o el cumplimiento de los requisitos de idoneidad y capacidad por parte de los árbitros que ellos mismos eligieron para resolver su controversia, es importante precisar que la Dra. Diana Bovea Mendinueta, el Dr. Miguel Angel Polo Campo y el Dr. Juan Alberto Polo Figueroa son profesionales ampliamente reconocidos en la plaza, con estudios avanzados en las materias sometidas a su consideración, quienes participaron en un riguroso proceso de selección en el que demostraron tener la capacidad e idoneidad para actuar como árbitros.

Así las cosas, si bien no se ha cuestionado la validez o pertinencia del proceso de selección de los árbitros adscritos al Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Santa Marta y la idoneidad de los profesionales que resolvieron la controversia, resulta conveniente precisar que en el proceso de selección de los árbitros que realiza la Cámara de Comercio de Santa Marta se cumple con todos los requisitos legales, señalando además que la Dra. Diana Bovea Mendinueta, el Dr. Miguel Angel Polo Campo y el Dr. Juan Alberto Polo Figueroa estaban capacitados para resolver la controversia, siendo esa precisamente la razón por la cual los hoy demandantes voluntariamente decidieron elegirlos como jueces en su caso, lo cual necesariamente indica que ellos tenían conocimiento de sus capacidades y aptitudes y estuvieron de acuerdo en su selección.

De conformidad con lo expuesto, ninguna responsabilidad le asiste a la Cámara de Comercio de Santa Marta, no sólo porque no tuvo participación, control o dirección del desarrollo del proceso arbitral que se tramitó por los hoy demandantes en contra de la Universidad del Magdalena, sino también por cuanto los árbitros fueron designados directamente las partes, sin el consejo del Centro de Arbitraje, de una lista de profesionales que fue integrada después de surtirse un riguroso procedimiento de selección, el cual no ha sido cuestionado de ninguna manera por la parte actora.

Por lo expuesto, siendo evidente que la Cámara de Comercio de Santa Marta y ACE Seguros S.A. no tenían ningún tipo de control, dirección o manejo de los tiempos del tribunal de arbitramento convocado por los accionantes, es inexistente cualquier título que potencialmente permita imputarle responsabilidad por los hechos que originaron la presente controversia, por lo que respetuosamente solicito al Despacho declarar probada la excepción propuesta.

- **LA CAMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA NO INCURRIO EN FALLA ALGUNA EN LA ELABORACION DE LA LISTA DE ARBITROS ADSCRITOS A ESA ENTIDAD.**

A pesar que los demandantes no realizaron imputación alguna en contra de la Cámara de Comercio de Santa Marta con ocasión de la confección de la lista de árbitros adscrita al Centro de Arbitraje de dicha entidad, resulta conveniente precisar que en la elaboración de la mencionada lista de profesionales no se incurrió en error o falla que eventualmente hubiera generado el daño del que se duelen los accionantes.

En efecto, cada uno de los profesionales que integran el listado de árbitros, ciertamente participó en un riguroso proceso de selección, en el que acreditaron además de los estudios pertinentes, la experiencia exigida, el reconocimiento profesional, una excelente reputación y la inexistencia de reparos sobre su conducta personal y profesional.

De conformidad con lo expuesto, no existe ninguna falla que potencialmente haga responsable a la Cámara de Comercio de Santa Marta frente a los demandantes por las actuaciones de terceros, motivo por el cual ruego declarar probada esta excepción.

- **RUPTURA DEL NEXO CAUSAL.**

Fundamento esta excepción en el hecho que la Cámara de Comercio de Santa Marta no tuvo participación, injerencia, dirección o control alguno del proceso arbitral que adelantaron los hoy demandantes en contra de la Universidad del Magdalena, ello en

razón a que la actividad de los árbitros es autónoma e independiente.

En efecto, Cámara de Comercio de Santa Marta se limitó a facilitar la infraestructura física y la logística requerida para el funcionamiento del tribunal arbitral, siendo directamente los demandantes quienes eligieron, de manera directa y personal, los árbitros que habrían de resolver la controversia, lo cual se efectuó de manera autónoma, sin la intervención de la Cámara de Comercio citada, pues se reitera que la actividad de los árbitros es independiente de la actividad puramente administrativa que realizada el centro de arbitraje.

Dentro de ese contexto, debe tenerse en cuenta que no sólo se carece de prueba alguna sobre la supuesta existencia del perjuicio alegado, sino también que no hay ningún medio probatorio que demuestre la existencia de relación de causalidad entre el hipotético detrimento que aducen haber sufrido los demandante y las acciones u omisiones atribuidas arbitrariamente a la Cámara de Comercio de Santa Marta, por ende, la ausencia de ese requisito indispensable para la prosperidad de las pretensiones destruye cualquier posibilidad de erigir válidamente un cargo de responsabilidad en contra de la parte pasiva de la acción.

En este punto se destaca que es la parte demandante quien tiene la carga de la prueba, no solo sobre la supuesta falla en la que quiere fundar sus indebidas pretensiones, sino también de la imprescindible relación de causalidad que debe existir entre la acción u omisión y el daño.

En ese orden de ideas, no existe ninguna acción u omisión de la Cámara de Comercio de Santa Marta de la que eventualmente pudiera derivarse un perjuicio para los demandantes, por lo que en el presente caso no existe una relación de causalidad, debiendo declararse probada esta excepción.

• CAUSA EXTRAÑA Y HECHO DE UN TERCERO.

Según los hechos de la demanda, la parte actora sufrió perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales como resultado de haberse proferido un laudo por fuera de los términos legales, lo cual motivo la anulación de la decisión adoptada. De lo expuesto se colige con facilidad que el supuesto hecho que originó la demanda en modo alguno es atribuible a la Cámara de Comercio de Santa Marta o a mi representada, pues ninguna de ellas tuvo participación en esa actuación, ni contribuyó a su realización.

En efecto, la Cámara de Comercio de Santa Marta no es la superior de los árbitros que son designados por las partes para resolver las controversias, ni estos son dependientes

del centro de arbitraje, de suerte que no existió ninguna actuación de esa entidad que hubiera producido el supuesto daño o que hubiera contribuido a su realización. Tampoco se presentó alguna omisión por parte de la Cámara de Comercio de Santa Marta a la cual se le pueda imputar la causa del hecho generador del daño alegado, pues se reitera, los árbitros, una vez designados, actúan de manera independiente y autónoma, adoptando las decisiones en el desarrollo del proceso arbitral sin la intervención de terceros.

Consecuentemente, ante la inexistencia de subordinación o dependencia entre los árbitros y el Centro de Arbitraje, la actuación de los jueces que resolvieron la controversia suscitada entre los hoy demandantes y la Universidad del Magdalena no compromete la responsabilidad de la Cámara de Comercio de Santa Marta, pues esta entidad no tenía ninguna posibilidad de ejercer control o dirección del proceso arbitral, siendo los árbitros los únicos directores del proceso.

En ese orden de ideas, en el sub lite la única manera para que prosperen las pretensiones de la demanda es que se demuestre la responsabilidad de los árbitros que fueron designados directamente por los hoy demandantes por la omisión en el cumplimiento de sus deberes constitucionales y legales, situación que en el caso que nos ocupa destruye la posibilidad de endilgar algún tipo de responsabilidad a la Cámara de Comercio de Santa Marta y de mi representada, toda vez que cualquier incumplimiento atribuible a los señores árbitros constituye una causa extraña a la actividad del centro de Arbitraje y de la aseguradora que represento y por lo tanto rompe el nexo causal que forzosamente se le quiere atribuir por los demandantes a la Cámara de Comercio de Santa Marta y fulmina cualquier alternativa de achacarle responsabilidad.

Entonces, debe tenerse en cuenta que los únicos que tenían la dirección y control del proceso de arbitramento eran precisamente los árbitros designados por los hoy demandantes, justamente por gozar de la independencia y autonomía que la ley les reconoce por actuar investidos temporalmente de la calidad de jueces, sin que la Cámara de Comercio de Santa Marta hubiera ejecutado alguna actividad o dejado de realizar alguna actuación que hubiera contribuido a la realización del hecho del cual se duelen los actores, de donde emerge palmariamente claro que cualquier omisión que se hubiera presentado en el cumplimiento de los deberes por parte de los árbitros que resolvieron el proceso arbitral convocado por los hoy accionantes y que resulte ser la causa del supuesto perjuicio alegado, sin lugar a dudas es ajena a la conducta y a la voluntad de la Cámara de Comercio de Santa Marta y de mi poderdante, siendo atribuible exclusivamente a un tercero.

Cualquier entidad diferente a los señores árbitros que resolvieron la controversia planteada por los demandantes en contra de la Universidad del Magdalena y las mismas partes involucradas en el proceso, incluida la Cámara de Comercio de Santa Marta y ACE Seguros S.A., en paridad de circunstancias fácticas, de ninguna manera habría podido evitar que los hechos narrados en la demanda hubieran ocurrido, pues era imposible para el citado centro de arbitraje o cualquiera otra entidad o persona privada, obligar a los señores Árbitros a agilizar el trámite del proceso.

En este evento, del hecho de un tercero del que hablamos, nace una causa extraña que exonera de responsabilidad a la Cámara de Comercio de Santa Marta teniendo en cuenta que, en determinado momento, el supuesto daño producido debe considerarse como causado por un fenómeno exterior a la actividad de esa entidad; por lo tanto, la actuación de la Cámara de Comercio de Santa Marta no tuvo ninguna incidencia en la producción del supuesto hecho generador del daño, y la causa extraña, pues, es independiente de la culpabilidad, y solo está referida a la causalidad que debe existir entre el hecho del agente y el daño producido, es por esto que la Cámara de Comercio de Santa Marta, al no haber incurrido en acciones u omisiones de las que potencialmente hubiera podido derivarse el perjuicio aducido en la demanda y para quien la actividad de los árbitros que resolvieron la controversia constituye causa extraña y el hecho de un tercero, queda totalmente liberada de responsabilidad.

Para poder entender este planteamiento es necesario aclarar que se entiende por causa extraña y para ello se hace la siguiente cita: "Es aquel efecto imprevisible e irresistible cuyo origen no es imputable a la esfera jurídica del deudor". (Javier Tamayo Jaramillo, De la responsabilidad civil, 2ª Edición, Tomo 1, Volumen 2, página 242).

En consecuencia, la presente excepción esta llamada a prosperar como quiera que las circunstancias narradas en la demanda se presentaron por el hecho de un tercero y por tanto se configura una eximente de responsabilidad, por lo que la Cámara de Comercio de Santa Marta no debe responder en este proceso.

• **LA CAMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA NO ESTÁ OBLIGADA A RESPONDER.**

Fundamento esta excepción, además de lo dicho, en que la Cámara de Comercio de Santa Marta no está obligado a responder en el presente proceso, ya que debe tenerse en cuenta que los hechos ocurrieron por una causa extraña y en consecuencia existe una causal de ausencia de responsabilidad que la exonera de la obligación de indemnizar los perjuicios deprecados en la demanda, pues tal como se demostrará en el presente

proceso, los hechos ocurrieron por circunstancias ajenas a la conducta de esa entidad, como quiera que habrían sido las acciones y omisiones de los mismos demandante o de un tercero las únicas generadoras del hecho que originó la demanda, sin que en su producción hubieran contribuido las acciones u omisiones la Cámara de Comercio de Santa Marta.

Por lo expuesto ruego declarar probada esta excepción.

- **NO SE DAN LOS PRESUPUESTOS DE LA RESPONSABILIDAD ENDILGADA.**

Teniendo en cuenta que el hecho del cual pretenden derivarse consecuencias jurídicas para la parte pasiva de la acción verdaderamente ocurrió por circunstancias imputables a los mismos demandantes o a la actuación de un tercero, constituyendo una causa extraña para la Cámara de Comercio de Santa Marta, podemos concluir que en el presente proceso no se dan los presupuesto de la responsabilidad endilgada.

Por lo anterior, se concluye que mi poderdante no está obligada a responder por los supuestos perjuicios que reclama la parte actora; mucho más si se tiene en cuenta que el resultado fue la consecuencia de las omisiones de los mismos demandantes o del hecho de un tercero, en el que no existieron acciones, omisiones o algún otro título que permita imputar responsabilidad a la Cámara de Comercio de Santa Marta, de lo que se sigue necesariamente que no existe ningún nexo entre la acción, las actividades desarrolladas por ésta y el resultado alegado en la demanda.

Conforme a lo expuesto, ruego declarar probada esta excepción.

- **CARENCIA DE PRUEBA DEL SUPUESTO PERJUICIO.**

Esta excepción enerva las pretensiones en cuanto ellas se erigieron pese a la carencia absoluta de medios de prueba de la producción, naturaleza e identidad del perjuicio y por supuesto de la cuantía del supuesto detrimento alegado y éste no es susceptible de presunción alguna, pues requiere su fehaciente demostración para poder ser considerado, luego la falta de certidumbre sobre el mismo se traduce en un obstáculo insalvable para su reconocimiento, lo que constituiría un enriquecimiento injustificado a su favor.

Por los argumentos expuestos, ruego declarar probada esta excepción.

- **IMPOSIBILIDAD DE RECONOCER PERJUICIOS MORALES EN FAVOR DE UNA PERSONA JURÍDICA.**

Dentro de las pretensiones de la demanda, los accionantes solicitaron el reconocimiento y pago de los supuestos perjuicios morales causados a cada uno de los accionantes. Tal solicitud, además de encontrarse completamente huérfana de pruebas, resulta abiertamente improcedente y arbitraria en cuanto pretende el reconocimiento de perjuicios extrapatrimoniales para un ente ficticio como es la sociedad J.P.G. & CIA S.A.

Para acreditar la improcedencia de semejante solicitud basta con reiterar que los apócrifos perjuicios por daño moral que se habrían irrogado a la sociedad J.P.G. & CIA S.A., no son indemnizables porque ese tipo de daño consiste exclusivamente en el pesar, dolor o molestias que sufre una persona en su sensibilidad física o en sus sentimientos, creencias o afectos y aquella es una entidad moral que por esa misma circunstancia no está dotada de sentimientos que puedan verse afectados.

Consecuente con lo anterior, debe declararse probada esta excepción en cuanto se encuentra plenamente decantado por la jurisprudencia que el daño moral es un potencial perjuicio que solo las personas naturales pueden sufrir, haciendo notoriamente improcedente la solicitud efectuada por los accionantes.

- **LOS DEMANDANTES PRETENDEN OBTENER DOBLE INDEMNIZACION POR UN MISMO HECHO.**

En la demandante se aduce, entre otros perjuicios, la existencia de un daño emergente por el cual los accionantes reclaman el pago de la suma de \$175'870.001, monto supuestamente representado por los honorarios de abogado, los honorarios de los árbitros, los honorarios del secretario del tribunal, el pago de los gastos del proceso y la protocolización del mismo.

Adicional a lo anterior, los demandantes aducen que con ocasión de la nulidad del laudo proferido dentro del trámite arbitral, las indemnizaciones que habían sido reconocidas en esa providencia que fue dejada sin efecto jurídico por parte del Consejo de Estado constituyen el perjuicio por lucro cesante.

En ese orden de ideas, si se verifica con detenimiento los que para los accionantes constituye el daño emergente y el lucro cesante, claramente se puede evidenciar que existe identidad entre las dos pretensiones y, en caso de reconocerse en su favor, se generaría un doble pago y el consecuente enriquecimiento sin causa en su favor.

En efecto, nótese precisamente que en el laudo se ordenó a la Universidad del Magdalena reconocer las costas del proceso y las agencias en derecho. Tales

obligaciones correspondían precisamente a la devolución que debía efectuar la parte vencida en el proceso arbitral a los hoy demandantes por los honorarios de abogado, los honorarios de los árbitros y secretario del tribunal, el pago de los gastos del proceso y la protocolización del mismo.

Así las cosas, no pueden los demandantes pretender por un lado que se condene a los demandados al reconocimiento de los gastos del tribunal de arbitramento a título de daño emergente y por el otro lado buscar que esos mismos dineros que fueron reconocidos en su favor en el anulado laudo por el mismo concepto, le sean también pagados a título de lucro cesante. Semejante petición constituye la fuente de un potencial enriquecimiento sin causa.

Entonces, queda absolutamente claro que los demandantes por una vía solicitan que se les paguen los gastos del tribunal de arbitramento (daño emergente) y por la otra vía (lucro cesante) pretenden que esos mismos valores que fueron reconocidos en su favor en el laudo a título de costas y agencias en derecho, también le sean pagados con un título diferente, todo lo cual constituye un doble cobro y eventualmente un enriquecimiento sin causa justa en su favor y a costa de la parte pasiva de la acción.

Por lo expuesto, respetuosamente solicito declarar probada esta excepción.

• CONCURRENCIA DE CULPAS

En el remoto evento de no declararse probada la culpa exclusiva de los demandantes, es imperioso reiterar que de todos modos se habría configurado la concurrencia de culpas debido a que la negligencia de los accionantes en el curso del proceso arbitral resulta ser un factor predominante en el vencimiento de los términos para proferir el laudo.

En efecto, a pesar de haber estado vinculados al proceso arbitral como parte convocante, los hoy demandantes nunca hicieron algún pronunciamiento frente a los árbitros para llamar su atención sobre el vencimiento de los términos, por lo que al guardar silencio la sociedad J.P.G. & Cia. S.A. y los señores German Villanueva Calderon y Ricardo Luis Canabal Guzman, cuando menos contribuyeron en gran medida a la producción del hecho del cual ahora se duelen.

No puede perderse de vista entonces que la conducta totalmente omisiva de los demandantes es responsable del vencimiento de los términos para proferir el laudo y, por ese hecho, están llamados a responder por las potenciales consecuencias que de él pudieran derivarse.

Conforme a lo expuesto, ruego declarar probada esta excepción.

- **INNOMINADA**

Pido comedidamente al señor juez, declarar probada cualquier excepción cuando en el proceso se hallen probados hechos que la constituyan.

En consecuencia, solicito al despacho se sirva declarar probadas las excepciones formuladas en la presente contestación de la demanda, pues las mismas cuentan con fundamento fáctico, jurídico y probatorio.

CAPITULO II

CONTESTACION DEL LLAMAMIENTO EN GARANTIA FORMULADO POR LA CAMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA

FRENTE A LOS HECHOS DEL LLAMAMIENTO EN GARANTIA

FRENTE A LOS HECHOS DEL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA

Frente al hecho primero: No es propiamente un hecho del llamamiento en garantía, sino la alusión a actuaciones de terceros, que mi mandante no está en posibilidad de aceptar o negar. Consecuentemente, me atengo a lo que se demuestre dentro del proceso.

Frente al hecho segundo: No es propiamente un hecho del llamamiento en garantía, sino la alusión a actuaciones de terceros, que mi mandante no está en posibilidad de aceptar o negar. Consecuentemente, me atengo a lo que se demuestre dentro del proceso.

Frente al hecho tercero: No es propiamente un hecho del llamamiento en garantía, sino la alusión a una providencia del Consejo de Estado.

Frente al hecho cuarto: No es propiamente un hecho del llamamiento en garantía, pero se acepta.

Frente al hecho quinto: Es parcialmente cierto sólo en cuanto tiene que ver con que entre CONFECAMARAS, como tomador y ACE SEGUROS S.A., como asegurador, se celebró el contrato de seguro documentado en la Póliza de Seguro 12 /14837; vigente del 1° de abril de 2014 al 31 de marzo de 2015, en la se designó como uno de los asegurados del Grupo 2, a la Cámara de Comercio de Santa Marta.

Sin embargo debe señalarse que dicho contrato se circunscribe estrictamente a la cobertura otorgada, estipulada en las condiciones de la póliza, las que determinan el ámbito, extensión o alcance del respectivo amparo, así como sus límites, sublímites, sumas aseguradas, deducibles, las exclusiones de amparo, etc., luego son esas condiciones las que enmarcan la obligación condicional que contrae el asegurador y por eso el Juzgador debe sujetar su pronunciamiento al contenido de las condiciones de la póliza.

La Póliza de Seguro 12 /14837, opera bajo la modalidad Claims made y se otorgó un periodo de retroactividad a partir del 1° de enero de 2002, es decir que cubre, con sujeción a las demás condiciones, la responsabilidad del ente asegurado, por hechos acaecidos con posterioridad a la fecha de retroactividad otorgada, siempre y cuando sean reclamados por primera vez al asegurado, dentro de la vigencia de la póliza.

En las condiciones particulares de la póliza se definió la cobertura en los siguientes términos:

"CONDICIONES:

1. Alcance de la cobertura:

Cobertura limitada a la prestación de servicios profesionales relacionados a:

Cámaras de Comercio

- *Funciones asignadas en el Código de Comercio*
- *Registro Único Empresarial y Social RUES (Art. 166 Decreto 19 de 2012)*
- *Labores propias de un Centro de conciliación y arbitraje: Arbitraje, Trámite Arbitral (Fase previa, Fase arbitral)*
- *Actividades de promoción de la actividad comercial e industrial*
- *Liquidación y recaudo del impuesto de registro*
- *Registro de la Economía Solidaria (Esales)*
- *Registro Único Tributario, RUT*
- *Registro de Garantías mobiliarias*
- *Actuar como Comisionados en diligencias de remate*
- *Expedición del certificado de existencia y representación legal de las asociaciones, ligas, federaciones o confederaciones de padres de familia*
- *Las demás que les atribuyan las Leyes y el Gobierno Nacional*

2. Todas las extensiones y coberturas forman parte y no están en adición al límite total agregado de la póliza.

*3. Solo se incluyen en la cobertura las cámaras de comercio indicadas en el endoso **CÁMARAS DE COMERCIO GRUPO 2***

4. Como **Firma** se entenderá las Cámaras de Comercio las cuales están relacionadas en el Endoso **CÁMARAS DE COMERCIO GRUPO 2**
5. Base de Reclamación Claims Made
6. El asegurado declara cumplir con todos los requisitos legales, administrativos y de seguridad competente.
7. Los **ACTOS ERRÓNEOS** deben haber sido cometidos con posterioridad al inicio de la **FECHA DE RETROACTIVIDAD** que para esta póliza será: 01/01/2002 (...)"

Igualmente, en las condiciones particulares se establecieron algunas exclusiones de amparo, entre ellas, las siguientes:

"EXCLUSIONES

Mediante el presente endoso a las condiciones generales de la presente póliza, el **Asegurador** agrega las siguientes exclusiones en los siguientes términos:

EL ASEGURADOR NO SERÁ RESPONSABLE DE PAGAR DAÑOS Y/O COSTOS ORIGINADAS EN UNA RECLAMACIÓN:

EXCLUSIÓN DE FALLA MECANICA

ORIGINADA EN, BASADA EN, O ATRIBUIBLE DIRECTA O INDIRECTAMENTE A CUALQUIER INTERRUPCION Y/O FALLAS ELÉCTRICAS O MECÁNICAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITADO A CUALQUIER PERTURBACIÓN ELÉCTRICA, AUMENTO DE VOLTAJE, APAGÓN; E INTERRUPCION DE GAS, AGUA, TELÉFONO, CABLE, SATÉLITE, TELECOMINUCACIONES, FALLA DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET U OTRA INFRAESTRUCTURA.

EXCLUSION DE DAÑOS A BIENES BAJO CUIDADO, CUSTODIA O CONTROL DEL ASEGURADO

ORIGINADA EN, BASADA EN, O DE CUALQUIER MANERA ATRIBUIBLE O EN CUALQUIER MANERA RELACIONADA DIRECTAMENTE O INDIRECTAMENTE POR DAÑOS A BIENES BAJO CUIDADO, CUSTODIA O CONTROL DEL ASEGURADO

EXCLUSION DE DAÑO MORAL

ORIGINADA EN, BASADA EN, O DE CUALQUIER MANERA ATRIBUIBLE O EN CUALQUIER MANERA RELACIONADA DIRECTAMENTE O INDIRECTAMENTE POR DAÑO MORAL Y TODO TIPO DE DANOS A CONSECUENCIA DE ESTA

EXCLUSION POR FALTA DE CUMPLIMIENTO CON LOS ESTÁNDARES TÉCNICOS

ORIGINADA EN, BASADA EN, O DE CUALQUIER MANERA ATRIBUIBLE O EN CUALQUIER MANERA RELACIONADA A LA FALTA DE CUMPLIMIENTO CON LOS ESTÁNDARES TÉCNICOS COMÚNMENTE OBSERVADOS EN LA PRÁCTICA

PROFESIONAL, REQUERIDO POR LEY, O REGLAMENTADO POR AGENCIAS OFICIALES (...)"

Por lo tanto, al decidir sobre la relación sustancial en que se basa el llamamiento en garantía, deben tomarse en consideración no sólo los amparos otorgados, los límites y sublímites asegurados, los deducibles pactados, sino todas y cada una de las condiciones del contrato de seguro, incluyendo las causales que eximen a la aseguradora de obligación indemnizatoria, pues la obligación del asegurador no nace si no se cumple la condición pactada de la que depende su surgimiento, es decir la realización de uno de los riesgos asegurados o sea que el evento en cuestión efectivamente esté previsto en el amparo otorgado, siempre y cuando no se configure una exclusión de amparo u otra causa convencional o legal que lo exonere de responsabilidad.

No son hechos las pretensiones de la entidad convocante.

FRENTE A LAS PRETENSIONES DEL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA

Al momento de resolver lo concerniente a la relación sustancial que sirve de base a la convocatoria que se hizo a mi procurada, pese a la ausencia de responsabilidad de la entidad asegurada en torno a los hechos en que se basa la demanda, ruego tener en cuenta que en el remoto evento de que prosperaren una o algunas de las pretensiones del libelo de la parte actora, en gracia de discusión y sin que esta observación constituya aceptación de responsabilidad alguna, mi representada se opone a la prosperidad de las pretensiones del Llamamiento en garantía en la medida en que excedan los límites y coberturas acordadas, y/o desconozcan las condiciones particulares y generales de la Póliza y las disposiciones que rigen el contrato de seguro, así como también, si exceden el ámbito del amparo otorgado o no se demuestra la realización del riesgo asegurado o se comprueba una causal de exclusión.

EXCEPCIONES FRENTE AL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA

Como excepciones perentorias propongo las siguientes:

- **INEXISTENCIA DE COBERTURA Y CONSECUENTEMENTE, DE OBLIGACION A CARGO DE MI REPRESENTADA**

Esta excepción se sustenta en que mi representada sólo está obligada a responder por un siniestro, al tenor de las obligaciones expresamente estipuladas en la póliza, luego no puede entenderse comprometido al asegurador por riesgos que no le fueron trasladados por el tomador.

Como quiera que la responsabilidad de la aseguradora está delimitada estrictamente por el amparo que otorgó a la Cámara de Comercio de Santa Marta, como lo confirma el examen del texto del contrato de seguro, se concluye que como la responsabilidad del ente convocante no se estructuró, ni los hechos y pretensiones de la demanda están enmarcados dentro de la cobertura otorgada, no nació la obligación de indemnizar a cargo ni de mi representada.

Respetuosamente solicito declarar probada esta excepción.

- **MARCO DE LOS AMPAROS OTORGADOS, LIMITES MÁXIMOS DE RESPONSABILIDAD, CONDICIONES DEL SEGURO, EXCLUSIONES PACTADAS Y EN GENERAL, ALCANCE CONTRACTUAL DE LAS OBLIGACIONES DEL ASEGURADOR**

Se formula esta excepción, pese a la ausencia de fundamento de la acción y la carencia de los derechos invocados por la parte actora, en gracia de discusión y sin que la presente constituya el reconocimiento de alguna obligación a cargo de mi representada, pues en el remoto evento de que prosperaran una o algunas de las pretensiones del libelo en contra de la Cámara de Comercio de Santa Marta, se destaca que contractualmente, en la póliza de seguro No. 12/14837, se estipularon las condiciones de la obligación indemnizatoria del asegurador, sus límites y sublímites asegurados, los amparos otorgados, las exclusiones, los deducibles pactados, que corresponden al porcentaje de la pérdida que de su propio peculio debe asumir el asegurado, etc., de manera que son estos los parámetros que determinarían en un momento dado la posible responsabilidad que podría atribuirse a mi poderdante, en cuanto enmarcan la obligación condicional que contrajo y las diversas cláusulas del aseguramiento, sin perjuicio de las estipulaciones que la exoneran de responsabilidad, que pido declarar en el fallo.

Ahora, la remota posibilidad de que la póliza expedida por mi mandante pueda ser afectada solo se materializaría si dentro del proceso se demostrara que efectivamente se estructuró la responsabilidad que pretende endilgarse a la Cámara de Comercio de Santa Marta; es decir que se realizó uno de los riesgos amparados por mi mandante, cosa que no podrá demostrarse como quiera que en este caso no existe ni la más mínima prueba de que alguna acción u omisión del ente asegurado haya causado algún perjuicio a los demandantes.

No debe olvidarse que las condiciones del contrato de seguro establecen qué eventos generan o no obligación alguna a cargo de la aseguradora, entendiendo incorporado en todo este contexto el régimen legal vigente a la celebración del contrato, como quiera que las obligaciones contraídas

por la compañía son exclusivamente las expresadas en su texto, mediante las diversas cláusulas en las que se estipularon los límites, amparos, valor asegurado, deducibles, exclusiones y demás convenciones.

En este punto, es imprescindible destacar que la obligación del asegurador no nace en cuanto no se cumpla la condición pactada de la que pende para su surgimiento, condición esa que es la realización del riesgo asegurado o siniestro, o sea que el evento en cuestión efectivamente esté previsto en el amparo otorgado, siempre y cuando no se configure una exclusión de amparo u otra causa convencional o legal que la exonere de responsabilidad, por ende la eventual obligación indemnizatoria está supeditada al contenido de la póliza, es decir a sus diversas condiciones, al ámbito del amparo, a la definición contractual de su alcance o extensión, a los límites y sublímites asegurados para cada riesgo tomado, etc.. Al respecto siempre se deberán atender los riesgos asumidos por la convocada, los valores asegurados para cada uno de los amparos, etc., como quiera que la obligación indemnizatoria de la aseguradora en ningún caso podrá superar el monto de la suma asegurada para cada uno de los riesgos amparados, sin perjuicio del deducible pactado, como lo preceptúa el Art. 1079 del C.Co., en concordancia con el Art. 1089, ibídem.

En las condiciones particulares de la póliza No. 12 / 14837 se definió la cobertura en los siguientes términos:

“CONDICIONES:

1. Alcance de la cobertura:

Cobertura limitada a la prestación de servicios profesionales relacionados a:

Cámaras de Comercio

- *Funciones asignadas en el Código de Comercio*
- *Registro Único Empresarial y Social RUES (Art. 166 Decreto 19 de 2012)*
- *Labores propias de un Centro de conciliación y arbitraje: Arbitraje, Trámite Arbitral (Fase previa, Fase arbitral)*
- *Actividades de promoción de la actividad comercial e industrial*
- *Liquidación y recaudo del impuesto de registro*
- *Registro de la Economía Solidaria (Esales)*
- *Registro Único Tributario, RUT*
- *Registro de Garantías mobiliarias*
- *Actuar como Comisionados en diligencias de remate*
- *Expedición del certificado de existencia y representación legal de las asociaciones, ligas, federaciones o confederaciones de padres de familia*
- *Las demás que les atribuyan las Leyes y el Gobierno Nacional*

2. Todas las extensiones y coberturas forman parte y no están en adición al límite total agregado de la póliza.

3. Solo se incluyen en la cobertura las cámaras de comercio indicadas en el endoso **CÁMARAS DE COMERCIO GRUPO 2**

4. Como **Firma** se entenderá las Cámaras de Comercio las cuales están relacionadas en el Endoso **CÁMARAS DE COMERCIO GRUPO 2**
5. Base de Reclamación *Claims Made*
6. El asegurado declara cumplir con todos los requisitos legales, administrativos y de seguridad competente.
7. Los **ACTOS ERRÓNEOS** deben haber sido cometidos con posterioridad al inicio de la **FECHA DE RETROACTIVIDAD** que para esta póliza será: 01/01/2002 (...)"

Igualmente, en las condiciones particulares se establecieron algunas exclusiones de amparo, entre ellas, las siguientes:

"EXCLUSIONES

Mediante el presente endoso a las condiciones generales de la presente póliza, el **Asegurador** agrega las siguientes exclusiones en los siguientes términos:

EL ASEGURADOR NO SERÁ RESPONSABLE DE PAGAR DAÑOS Y/O COSTOS ORIGINADAS EN UNA RECLAMACIÓN:

EXCLUSIÓN DE FALLA MECANICA

ORIGINADA EN, BASADA EN, O ATRIBUIBLE DIRECTA O INDIRECTAMENTE A CUALQUIER INTERRUPCION Y/O FALLAS ELÉCTRICAS O MECÁNICAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITADO A CUALQUIER PERTURBACIÓN ELÉCTRICA, AUMENTO DE VOLTAJE, APAGÓN; E INTERRUPCION DE GAS, AGUA, TELÉFONO, CABLE, SATÉLITE, TELECOMINUCACIONES, FALLA DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET U OTRA INFRAESTRUCTURA.

EXCLUSION DE DAÑOS A BIENES BAJO CUIDADO, CUSTODIA O CONTROL DEL ASEGURADO

ORIGINADA EN, BASADA EN, O DE CUALQUIER MANERA ATRIBUIBLE O EN CUALQUIER MANERA RELACIONADA DIRECTAMENTE O INDIRECTAMENTE POR DAÑOS A BIENES BAJO CUIDADO, CUSTODIA O CONTROL DEL ASEGURADO

EXCLUSION DE DAÑO MORAL

ORIGINADA EN, BASADA EN, O DE CUALQUIER MANERA ATRIBUIBLE O EN CUALQUIER MANERA RELACIONADA DIRECTAMENTE O INDIRECTAMENTE POR DAÑO MORAL Y TODO TIPO DE DANOS A CONSECUENCIA DE ESTA

EXCLUSION POR FALTA DE CUMPLIMIENTO CON LOS ESTÁNDARES TÉCNICOS

ORIGINADA EN, BASADA EN, O DE CUALQUIER MANERA ATRIBUIBLE O EN CUALQUIER MANERA RELACIONADA A LA FALTA DE CUMPLIMIENTO CON LOS ESTÁNDARES TÉCNICOS COMÚNMENTE OBSERVADOS EN LA PRÁCTICA

PROFESIONAL, REQUERIDO POR LEY, O REGLAMENTADO POR AGENCIAS OFICIALES (...)"

Por lo tanto, al decidir sobre la relación sustancial en que se basa el llamamiento en garantía, deben tomarse en consideración no sólo los amparos otorgados, los límites y sublímites asegurados, los deducibles pactados, sino todas y cada una de las condiciones del contrato de seguro, incluyendo las causales que eximen a la aseguradora de obligación indemnizatoria, pues la obligación del asegurador no nace si no se cumple la condición pactada de la que depende su surgimiento, es decir la realización de uno de los riesgos asegurados o sea que el evento en cuestión efectivamente este previsto en el amparo otorgado, siempre y cuando no se configure una exclusión de amparo u otra causa convencional o legal que lo exonere de responsabilidad.

• **PRESCRIPCION DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE SEGURO**

Se formula esta excepción, sin que implique reconocimiento de responsabilidad u obligación alguna a cargo de mi representada, para que de llegar a configurarse los presupuestos consagrados en los Arts. 1081 y 1131 del Código de Comercio, el H. Magistrado declare en el fallo que operó el fenómeno prescriptivo de las acciones derivadas del contrato de seguro, pues mi representada en calidad de llamada en garantía, desconoce las eventuales reclamaciones extrajudiciales que con ocasión de los hechos objeto de la demanda, han formulado los hoy demandantes a la entidad convocante.

• **LAS EXCLUSIONES DE AMPARO**

El hecho de haber pactado en la póliza de seguro algunas exclusiones de amparo, debe ser considerado al pronunciar sentencia, pues de presentarse o configurarse una de ellas se releva a la compañía de la obligación de pagar cualquier tipo de indemnización.

Respetuosamente solicito declarar probada esta excepción.

• **GENÉRICA**

Ruego declarar probada cualquier otra excepción que resulte probada en el curso de este proceso, de acuerdo al contrato de seguro respectivo y a la Ley, incluyendo la de prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro.

MEDIOS DE PRUEBA

Solicito decretar y tener como pruebas las siguientes:

DOCUMENTALES

1. Original del Certificado de ACE SEGUROS S.A., expedido por la Cámara de Comercio de Cali, que acredita mi condición de Apoderado General y Representante de la aseguradora.

2. Copia Integra de la Póliza de Seguro No. 12 /14837, tomada por COMFECAMARAS, vigente del 1 de abril de 2014 al 31 de marzo de 2015 (Carátula, anexos y condiciones particulares y generales).

- **DOCUMENTALES- OFICIOS**

Respetuosamente solicito oficiar a ACE SEGUROS S.A. a Calle 72 No. 10-51, Piso 6° de Bogotá, para que con destino a este proceso certifique sobre la disponibilidad de la suma asegurada en la Póliza de Seguro No. 12 /14837, tomada por COMFECAMARAS, vigente del 1 de abril de 2014 al 31 de marzo de 2015.

- **INTERROGATORIO DE PARTE**

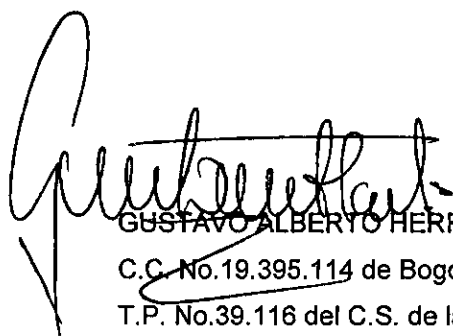
Respetuosamente solicito citar y hacer comparecer a su Despacho a cada uno de los demandantes, quienes pueden ser citados en las direcciones aportadas en el libelo genitor, para que absuelvan el interrogatorio de parte que en sobre cerrado o verbalmente les formularé y que versará sobre los hechos y pretensiones que da cuenta este proceso.

NOTIFICACIONES

ACE SEGUROS S.A. recibirá notificaciones en su domicilio en la ciudad de Bogotá, en la Calle 72 No. 10-51, Piso 6° de Bogotá, and USSA@acegroup.com

El suscrito recibirá notificaciones en la secretaria de su despacho o en la Av. 6 A Bis No. 35 N - 100, Oficina 212, Centro Empresarial Chipichape, en Cali, gherrera@gha.com.co

Del H. Magistrado, cordialmente,



GUSTAVO ALBERTO HERRERA AVILA

C.C. No.19.395.114 de Bogotá

T.P. No.39.116 del C.S. de la J.

AUTENTICACION

Ante el Secretario del Juzgado 23 Civil Municipal de
Cali, Valle compareció el Señor(a) Gustavo

Alberto Herrera Anle
con C. de C. No. 19395 114 de Bogotá

✓ manifiesto que la firma impuesta en este documento es la que
publicos y privados y por lo tanto es autentica

Cali Valle, **02 DIC 2015** Gustavo

EL COMPARECIENTE, _____

EL SECRETARIO _____





ace seguros

Calle 72 No. 10-51 Piso 7
Bogotá D.C.
Colombia
Nit 860.026.518-6
www.acealtnamerica.com

571 3190300 PBX
571 3190400
571 3190408 Fax
571 3190304

RAMO		OPERACION		POLIZA	ANEXO	REFERENCIA	
12 RESPONSABILIDAD		22 Aum con mov p		14837	25917	12001483725917	
SUCURSAL		VIGENCIA DEL SEGURO				FECHA DE EMISION	
03 BOGOTA		DESDE AÑO MES DIA HORA 2014 04 01 00 HASTA AÑO MES DIA HORA 2015 03 31 24				AÑO MES DIA 2014 04 21	
TOMADOR		CONFEDERACION COLOMBIANA DE CAMARAS DE C			C.C. O NIT		8600256140
DIRECCION		CRA 13 NO. 27-47 OFIC 502			CIUDAD		BOGOTA
ASEGURADO		CONFEDERACION COLOMBIANA DE CAMARAS DE C			C.C. O NIT		8600256140
DIRECCION		CRA 13 NO. 27-47 OFIC 502			CIUDAD		BOGOTA
BENEFICIARIO		TERCEROS AFECTADOS			C.C. O NIT		11111
DIRECCION		ND			CIUDAD		-
INTERMEDIARIO		31054 JIMENEZ ZABALA MARTA LUZ			16.00		

INFORMACION DEL RIESGO

POR SOLICITUD DEL ASEGURADO Y SEGUN COMUNICACION DEL BROKER SE RENUEVA LA PRESENTE POLIZA

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE POLIZA, O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A LA COMPAÑIA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEICION DE LA POLIZA

Para mayor información contáctenos al e-mail pagos.clientes@acegroup.com

VALOR PRIMA	105.000.000,00	COL\$
GASTOS EXPED.	0,00	COL\$
I.V.A.	16.800.000,00	COL\$
TOTAL A PAGAR	121.800.000,00	COL\$

TOMADOR

ACE Seguros S.A.



ace seguros Nit 860.026.518-6

CUPON DE PAGO

REFERENCIA DE PAGO
12001483725917

TOMADOR CONFEDERACION COLOMBIANA DE CAMARAS DE C

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Citibank Cta Ahs. 5019884025 | <input type="checkbox"/> Bancolombia Cta Cte 04802651807 |
| <input type="checkbox"/> Bco Occidente Cta Cte 288038185 | <input type="checkbox"/> Davivienda Cta Cte 516990066 |
| <input type="checkbox"/> Grupo Almacenes Exito | |

Para mayor información contáctenos al e-mail pagos.clientes@acegroup.com



415770999800062980201200148372591739000000000009600000000

(415)7709998000629(8020)12001483725917(3900)0000000000(96)00000000

JELAVE

ENTIDAD BANCARIA

DEFENSOR DEL CLIENTE: Evaristo Jarama Uribe, 8 Aogosto, 1918 (57) 311 613051 - 480043 Dirección: Cra 10 #97A-11 Torre A Ofc 502 Edificio Bogotá Trade Center
Correo electrónico: defensorcliente@atajurabogados.com

CLIENTE

855
7494



ace seguros

POLIZA No. 12/14837	ANEXO No. 25917	PAG. No. 1
CONFEDERACION COLOMBIANA DE CAMARAS DE COMERCIO		

POLIZA DE SEGURO DE ERRORES Y OMISIONES

ACE ELITE MISCELANEOS

TIPO: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA SERVICIOS MISCELÁNEOS

TOMADOR: CONFECÁMARAS

FIRMA: CÁMARAS DE COMERCIO AFILIADAS A CONFECAMARAS CON INGRESOS ENTRE COP\$1.000.000.000 Y COP\$4.000.000.000

ASEGURADO: La firma y los estipulados en el numeral 26.4 sección 26. Definiciones del clausulado ACE ELITE MISCELANEOS - SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA SERVICIOS MISCELÁNEOS

BENEFICIARIOS: Terceros Afectados

PERIODO CONTRACTUAL: 1 de Abril de 2014 a las 00:00 horas al 31 de Marzo de 2015 a las 24:00 horas

PARTICIPACION ACE: 100%

TIPO DE CAMARA	LIMITES POR GRUPO	PRIMA ANUAL POR GRUPO (SIN IVA)
Cámaras de Comercio con Ingresos entre COP\$1,000,000.000 y COP\$4,000,000.000	COP\$6,000,000,000 toda y cada reclamación y en el agregado	COP\$105,000,000



ace seguros

POLIZA No.	ANEXO No.	PAG. No.
12714837	25317	2
CONFEDERACIÓN COLOMBIANA DE CÁMARAS DE COMERCIO		

POLIZA DE SEGURO DE ERRORES Y OMISIONES

DEDUCIBLE:

- COSTOS (Gastos de Defensa) \$10,000,000
- DAÑOS (Perjuicio financiero) \$20,000,000

DELIMITACION TERRITORIAL: Mundial, excepto Estado Unidos, Puerto Rico y Canadá.

CONDICIONES:

1. Alcance de la cobertura:

Cobertura limitada a la prestación de servicios profesionales relacionados a:

Cámaras de Comercio

- Funciones asignadas en el Código de Comercio
- Registro Único Empresarial y Social RUES (Art. 166 Decreto 19 de 2012)
- Labores propias de un Centro de conciliación y arbitraje: Arbitraje, Trámite Arbitral (Fase previa, Fase arbitral)
- Actividades de promoción de la actividad comercial e industrial
- Liquidación y recaudo del impuesto de registro
- Registro de la Economía Solidaria (Esaes)
- Registro Único Tributario, RUT
- Actuar como Comisionados en diligencias de remate
- Expedición del certificado de existencia y representación legal de las asociaciones, ligas, federaciones o confederaciones de padres de familia
- Las demás que les atribuyan las Leyes y el Gobierno Nacional

2. Todas las extensiones y coberturas forman parte y no están en adición al limite total agregado de la póliza.
3. Solo se incluyen en la cobertura las cámaras de comercio indicadas en el endoso **CÁMARAS DE COMERCIO GRUPO 2**
4. Como Firma se entenderá las Cámaras de Comercio las cuales están relacionadas en el Endoso **CÁMARAS DE COMERCIO GRUPO 2**
5. Base de Reclamación Claims Made
6. El asegurado declara cumplir con todos los requisitos legales, administrativos y de seguridad competente.
7. Los **ACTOS ERRÓNEOS** deben haber sido cometidos con posterioridad al inicio de la **FECHA DE RETROACTIVIDAD** que para esta póliza será: 01/01/2002
8. Los **Asegurados**, están obligados a mantener el estado del riesgo. En tal virtud, deberán notificar por escrito al **Asegurador** los hechos o circunstancias que sobrevengan con posterioridad a la celebración del contrato y que, signifiquen una agravación del riesgo incluyendo pero no limitándose a un cambio en



ace seguros

POLIZA No.	ANEXO No.	PAG. No.
12/14837	25917	3
CONFEDERACION COLOMBIANA DE CAMARAS DE COMERCIO		

POLIZA DE SEGURO DE ERRORES Y OMISIONES

- las funciones que vienen desempeñando que impliquen cambios sustanciales en la infraestructura que se tiene actualmente para atender a sus clientes.
9. Se otorga cobertura para las oficinas de las cámaras de Comercio en lugares diferentes a la ciudad principal de la Cámara, sujeto a que se conserven los mismos controles de la oficina principal.
 10. Única y exclusivamente se considera cobertura para la actividad aquí descrita.
 11. Para la cotización el asegurador se ha basado en la información y declaraciones contenidas en la solicitud de seguro y cuestionarios complementarios. Dichas declaraciones son la base de la aceptación del riesgo y de los términos y condiciones de esta Póliza, y por lo tanto se considerarán como parte integrante de la misma.
 12. Esta póliza es basada en los ingresos del 2012
 13. Extensión de cobertura para daños y/o costos originadas en una reclamación por pérdida de documentos, con sublímite de \$50,000,000 toda y cada pérdida y en el agregado anual. Según Texto Adjunto
 14. Infidelidad de Empleados (Cobertura de Actos Erróneos por Fraude de Empleados) Esta cobertura se otorga con un Sublímite de \$15,000,000 toda y cada pérdida y en el agregado anual. Según Texto Adjunto
 15. Propiedad intelectual Esta cobertura se otorga con un Sublímite de \$25,000,000 toda y cada pérdida y en el agregado anual
 16. Difamación Esta cobertura se otorga con un Sublímite de \$25,000,000 toda y cada pérdida y en el agregado anual. Según Texto Adjunto
 17. El deducible para las extensiones de 11, 12, 13 Cobertura Actos Erróneos por Fraude de Empleados, Pérdida de Documentos, Cobertura Propiedad Intelectual y Cobertura Difamación es de \$5,000,000.
 18. La Aseguradora deja expresa constancia de que en la definición de Daños contenida en la Cláusula 26, numeral 26.8 de las condiciones generales de la Póliza, se entiende cubierto el Lucro Cesante que se configure como consecuencia de un Acto Erróneo en la prestación de Servicios Profesionales por parte del Asegurado de conformidad con los restantes términos y exclusiones de la póliza.
 19. La Aseguradora deja expresa constancia de que en la definición de Daños contenida en la Cláusula 26, numeral 26.8 de las condiciones generales de la Póliza, se entiende cubierto la Pérdida de imagen que se configure como consecuencia de un acto erróneo en la prestación de servicios profesionales por parte del Asegurado de conformidad con los restantes términos y exclusiones de la póliza.
 20. Se otorgan GASTOS DE EMERGENCIA según el texto anexo. En caso de que el Asegurado cuente con un término igual o inferior a cinco días hábiles para incurrir en un gasto cubierto por la cobertura 1 y derivado de una Reclamación cubierta por la póliza, y no le sea posible obtener el consentimiento previo y por escrito del Asegurador, este reconocerá tales gastos encaminados o dirigidos a atender únicamente esa actuación de emergencia, siempre y cuando el Asegurado solicite la aprobación de los mismos antes de quince (15) días calendario contados a partir del momento en que incurrió en ellos. Esta extensión de cobertura no excederá COP\$ 10.000.000 para toda y cada Reclamación y operará dentro del límite de responsabilidad indicado en la cláusula 4 de la póliza
 21. En caso de agotamiento del límite de responsabilidad se cotizará, en el momento del agotamiento, el valor de la prima para el restablecimiento de este límite.
 22. Extensión de Cobertura de Responsabilidad por Privacidad con sublímite de \$100,000,000 toda y cada pérdida y en el agregado anual. Según Texto Adjunto



ace seguros

POLIZA No.	ANEXO No.	PAG. No.
12/14837	25917	4
CONFEDERACION COLOMBIANA DE CAMARAS DE COMERCIO		

POLIZA DE SEGURO DE ERRORES Y OMISIONES

EXCLUSIONES

Mediante el presente endoso a las condiciones generales de la presente póliza, el Asegurador agrega las siguientes exclusiones en los siguientes términos:

EL ASEGURADOR NO SERÁ RESPONSABLE DE PAGAR DAÑOS Y/O COSTOS ORIGINADAS EN UNA RECLAMACIÓN:

EXCLUSIÓN DE FALLA MECANICA

ORIGINADA EN, BASADA EN, O ATRIBUIBLE DIRECTA O INDIRECTAMENTE A CUALQUIER INTERRUPCION Y/O FALLAS ELÉCTRICAS O MECÁNICAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITADO A CUALQUIER PERTURBACIÓN ELÉCTRICA, AUMENTO DE VOLTAJE, APAGÓN; E INTERRUPCION DE GAS, AGUA, TELÉFONO, CABLE, SATÉLITE, TELECOMUNICACIONES, FALLA DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET U OTRA INFRAESTRUCTURA

EXCLUSION DE DAÑOS A BIENES BAJO CUIDADO, CUSTODIA O CONTROL DEL ASEGURADO

ORIGINADA EN, BASADA EN, O DE CUALQUIER MANERA ATRIBUIBLE O EN CUALQUIER MANERA RELACIONADA DIRECTAMENTE O INDIRECTAMENTE POR DAÑOS A BIENES BAJO CUIDADO, CUSTODIA O CONTROL DEL ASEGURADO

EXCLUSION DE DAÑO MORAL

ORIGINADA EN, BASADA EN, O DE CUALQUIER MANERA ATRIBUIBLE O EN CUALQUIER MANERA RELACIONADA DIRECTAMENTE O INDIRECTAMENTE POR DAÑO MORAL Y TODO TIPO DE DANOS A CONSECUENCIA DE ESTA

EXCLUSION POR FALTA DE CUMPLIMIENTO CON LOS ESTÁNDARES TÉCNICOS

ORIGINADA EN, BASADA EN, O DE CUALQUIER MANERA ATRIBUIBLE O EN CUALQUIER MANERA RELACIONADA A LA FALTA DE CUMPLIMIENTO CON LOS ESTÁNDARES TÉCNICOS COMÚNMENTE OBSERVADOS EN LA PRÁCTICA PROFESIONAL, REQUERIDO POR LEY, O REGLAMENTADO POR AGENCIAS OFICIALES

EXCLUSION POR INFRACCIONES DE DERECHOS DE AUTOR, PATENTE O MARCA REGISTRADA

ORIGINADA EN, BASADA EN, O DE CUALQUIER MANERA ATRIBUIBLE O EN CUALQUIER MANERA RELACIONADA DIRECTAMENTE O INDIRECTAMENTE POR INFRACCIONES DE DERECHOS DE AUTOR, PATENTE O MARCA REGISTRADA

EXCLUSION POR SEGUROS

ORIGINADA EN, BASADA EN, O DE CUALQUIER MANERA ATRIBUIBLE O EN CUALQUIER MANERA RELACIONADA DIRECTAMENTE O INDIRECTAMENTE POR UNA RECLAMACION DERIVADA DE LA RESPONSABILIDAD DE ASEGURADO POR FALTA DE TENER, CONSEGUIR O OFRECER CUALQUIERA FORMA DE SEGURO O FIANZA O POR FALTA EN NO HABER AVISADO TERCEROS EN MANTENER DICHO SEGURO O FIANZA



ace seguros

POLIZA No.

12/14837

ANEXO No.

25917

PAG. No.

5

CONFEDERACION COLOMBIANA DE CAMARAS DE COMERCIO

POLIZA DE SEGURO DE ERRORES Y OMISIONES

EXCLUSION POR VEHICULOS

ORIGINADA EN, BASADA EN, O ATRIBUIBLE DIRECTA O INDIRECTAMENTE A LA PROPIEDAD, MANTENIMIENTO, OPERACIÓN, USO, CARGA O DESCARGA, POR O EN NOMBRE DE, O BAJO EL CONTROL DEL ASEGURADO, DE EMBARCACIONES, AUTOMÓVILES, VEHÍCULOS MOTORES, AVIONES O VEHÍCULOS MÓVILES DE CUALQUIER TIPO.

MANEJO DE FONDOS

ORIGINADA EN, BASADA EN, O ATRIBUIBLE DIRECTA O INDIRECTAMENTE AL MANEJO O ADMINISTRACIÓN DE FONDOS POR PARTE DEL ASEGURADO, BIEN SEAN AJENOS O PROPIOS, INCLUYENDO EL APROVECHAMIENTO O USO INDEBIDO DE FONDOS DE TERCEROS.

EXCLUSION OFAC

ESTE SEGURO NO SE APLICA EN LA MEDIDA EN QUE LAS SANCIONES ECONÓMICAS O COMERCIALES U OTRAS LEYES O REGULACIONES NOS PROHÍBAN PROPORCIONAR EL SEGURO, INCLUIDO, ENTRE OTROS, EL PAGO DE RECLAMACIONES. TODOS LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PÓLIZA NO SE MODIFICAN

Demás términos y condiciones según clausulado **ACE ELITE MISCELANEOS - SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA SERVICIOS MISCELÁNEOS**

LEY &

JURISDICCION:

Ley aplicable:

Colombia

Jurisdicción:

Colombia

REQUERIMIENTOS

DE INFORMACIÓN:

La siguiente información deberá ser entregada a ACE Seguros S.A. representando esta una garantía de la cobertura otorgada.

30 días después de iniciada la vigencia:

Carta con confirmación de no conocimientos de reclamos y/o circunstancias que puedan llevar a uno.

Carta con confirmación de no cambios a lo declarado en el formulario de solicitud.

Por favor indicar el estado de las circunstancias avisadas por la cámara de Comercio de Palmira.



ace seguros

POLIZA No.

12/14837

ANEXO No.

25917

PAG. No.

6

CONFEDERACION COLOMBIANA DE CAMARAS DE COMERCIO

POLIZA DE SEGURO DE ERRORES Y OMISIONES

TÉRMINOS DE

PAGO DE PRIMA: 60 días calendario desde inicio de vigencia



ace seguros

POLIZA No.

12/14837

ANEXO No.

25917

PAG. No.

7

CONFEDERACIÓN COLOMBIANA DE CAMARAS DE COMERCIO

POLIZA DE SEGURO DE ERRORES Y OMISIONES

ENDOSO A LA POLIZA DE CONFECAMARAS

Mediante el presente endoso a las condiciones generales de la presente póliza, el Asegurador agrega la siguiente condición en los siguientes términos:

1. COBERTURA DIFAMACION

LA COBERTURA SE EXTIENDE A CUBRIR LOS DAÑOS Y/O COSTOS A CARGO DEL ASEGURADO QUE SE GENEREN POR CUALQUIER RECLAMACIÓN BASADA EN UNA CALUMNIA O INJURIA INVOLUNTARIA COMETIDA POR UN ASEGURADO, QUE NO DERIVE RESPONSABILIDAD PENAL PARA EL ASEGURADO. ESTA EXTENSION DE COBERTURA NO EXCEDERA \$25,000,000 TODA Y CADA PERDIDA Y EN EL AGREGADO ANUAL

2. COBERTURA PROPIEDAD INTELECTUAL

LA COBERTURA SE EXTIENDE A CUBRIR LOS DAÑOS Y/O COSTOS A CARGO DEL ASEGURADO QUE SE GENEREN POR CUALQUIER RECLAMACIÓN BASADA EN UNA VIOLACION A LA PROPIEDAD INTELECTUAL POR CAUSA DE UN ACTO ERRÓNEO EN LA PRESTACIÓN DE SUS SERVICIOS PROFESIONALES. ESTA EXTENSION DE COBERTURA NO EXCEDERA \$25,000,000 TODA Y CADA PERDIDA Y EN EL AGREGADO ANUAL.

VIOLACION A LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Significa una infracción involuntaria por propiedad intelectual a un tercero que no sea por patente ni secreto comercial

3. PERDIDA DE DOCUMENTOS

EXTENSIÓN DE COBERTURA PARA DAÑOS Y/O COSTOS ORIGINADAS EN UNA RECLAMACIÓN POR PERDIDA DE DOCUMENTOS, CON SUBLÍMITE DE \$50,000,000 TODA Y CADA PERDIDA Y EN EL AGREGADO ANUAL

4. COBERTURA DE ACTOS ERRÓNEOS POR FRAUDE DE EMPLEADOS

MEDIANTE EL PRESENTE ENDOSO A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PRESENTE PÓLIZA, EL ASEGURADOR AGREGA LA SIGUIENTE CONDICIÓN EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:

EL ASEGURADOR NO APLICARÁ LA EXCLUSIÓN 3.1 MALA FE O DOLO Y RETRIBUCIONES IMPROCEDENTES POR UNA CONDUCTA FRAUDULENTO O DESHONESTA DE UN ASEGURADO INDIVIDUAL, CUANDO DICHA CONDUCTA NO HAYA SIDO APROBADA EN FORMA EXPRESA O IMPLICITA, Y QUE POR CAUSA DE ESTE ACTO SE OCASIONE UN ACTO ERRÓNEO DEL ASEGURADO. NO OBSTANTE LO ANTERIOR, DICHA EXCLUSION SERÁ PLENAMENTE APLICABLE AL ASEGURADO INDIVIDUAL QUE HAYA COMETIDO LA CONDUCTA DOLOSA.

PARA LA PRESENTE CONDICIÓN SE ENTENDERÁ COMO ASEGURADO INDIVIDUAL:

1. LA PERSONA NATURAL EMPLEADO O CONTRATISTA, DE LA FIRMA, PERO SÓLO EN LO REFERENTE A LOS SERVICIOS PROFESIONALES, DESARROLLADOS EN NOMBRE O REPRESENTACIÓN DE LA MISMA.



ace seguros

POLIZA No. 12/14837	ANEXO No. 25917	PAG. No. 8
CONFEDERACION COLOMBIANA DE CAMARAS DE COMERCIO		

POLIZA DE SEGURO DE ERRORES Y OMISIONES

2. LAS PERSONAS NATURALES INDEPENDIENTES CONTRATADOS POR LA FIRMA, PERO ÚNICAMENTE CUANDO DESARROLLEN LABORES DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON LOS SERVICIOS PROFESIONALES QUE PRESTA LA FIRMA Y CUANDO DICHOS SERVICIOS SON REALIZADOS EN NOMBRE Y BAJO LA SUPERVISIÓN DE ESTA.

ESTA EXTENSION DE COBERTURA NO EXCEDERA \$15,000,000 TODA Y CADA PERDIDA Y EN EL AGREGADO ANUAL

5. RESPONSABILIDAD POR LA PRIVACIDAD

Mediante el presente endoso a las condiciones generales de la presente póliza, el Asegurador agrega la siguiente condición en los siguientes términos:

SUJETO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE ESTA PÓLIZA LA SIGUIENTE EXTENSIÓN DE COBERTURA SERÁ APLICABLE:

SUJETO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES ESTABLECIDOS EN LA CARÁTULA DE ESTA PÓLIZA, EL ASEGURADOR INDEMNIZARÁ EN EXCESO DEL DEDUCIBLE Y CON UN SUBLÍMITE DE COP\$ 100,000,000 TODA Y CADA PERDIDA Y EN EL AGREGADO, EL DAÑO Y/O COSTOS Y/O GASTOS, SEGÚN SEA APLICABLE, A CARGO DEL ASEGURADO, PROVENIENTES DE UNA RECLAMACIÓN PRESENTADA POR PRIMERA VEZ EN CONTRA DEL ASEGURADO DURANTE EL PERIODO CONTRACTUAL Y/O DURANTE EL PERIODO ADICIONAL PARA RECIBIR RECLAMACIONES EN CASO EN QUE ESTE ÚLTIMO SEA CONTRATADO, DERIVADA DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EN QUE INCURRA DE ACUERDO CON LA LEY, POR CAUSA DE UN ACTO ERRÓNEO QUE TENGA LUGAR DESPUÉS DE LA FECHA DE RETROACTIVIDAD Y ANTES DE LA TERMINACIÓN DEL PERIODO CONTRACTUAL Y QUE SE ENCUENTRE CUBIERTO POR LA SIGUIENTE EXTENSION DE COBERTURA:

RESPONSABILIDAD POR LA PRIVACIDAD

- a. LA FALLA DEL ASEGURADO RELACIONADA CON MANEJAR, GESTIONAR, ALMACENAR, DESTRUIR O DE OTRA FORMA CONTROLAR ADECUADAMENTE:
 - i. INFORMACIÓN PERSONAL.
 - ii. INFORMACIÓN CORPORATIVA DE TERCEROS EN CUALQUIER FORMATO SUMINISTRADO AL ASEGURADO E IDENTIFICADO ESPECÍFICAMENTE COMO CONFIDENCIAL Y PROTEGIDO BAJO UN ACUERDO DE NO DIVULGACIÓN O CONTRATO SIMILAR CON EL TOMADOR O
- b. ACTO ERRÓNEO QUE VIOLE LAS POLÍTICAS DE PRIVACIDAD DEL ASEGURADO QUE RESULTE EN LA VIOLACIÓN DE LAS NORMAS Y REGULACIONES ASOCIADAS CON EL CONTROL Y USO DE ESTADOS FINANCIEROS PERSONALES IDENTIFICABLES, MÉDICOS Y OTRA INFORMACIÓN SENSIBLE, INCLUYENDO PERO NO LIMITADO A LOS ARTÍCULOS 20 Y 25 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, LA LEY DE HABEAS DATA 1266 DE 2008, LAS NORMAS QUE REGULAN LOS SECRETOS PROFESIONALES DE TODAS LAS PROFESIONES, EL CÓDIGO PENAL, EL CÓDIGO SUSTANTIVO



ace seguros

POLIZA No.	ANEXO No.	PAG. No.
12/14837	25917	9
CONFEDERACION COLOMBIANA DE CAMARAS DE COMERCIO		

POLIZA DE SEGURO DE ERRORES Y OMISIONES

DEL TRABAJO, ASÍ COMO CUALQUIER OTRA PROTECCIÓN LEGAL A DATOS NO FINANCIEROS, NACIONAL O EXTRANJERA QUE PROTEJA LA PRIVACIDAD Y EL ROBO DE IDENTIDAD, QUE REQUIERA QUE LAS ENTIDADES COMERCIALES QUE RECOLECTEN INFORMACIÓN CONFIDENCIAL PUBLIQUEN LAS POLÍTICAS DE PRIVACIDAD, ADOPTEN CONTROLES ESPECÍFICOS DE SEGURIDAD O PRIVACIDAD, O NOTIFIQUEN A LOS INDIVIDUOS EN EL EVENTO DE QUE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL SE VEA POTENCIALMENTE COMPROMETIDA.

Para esta extensión de cobertura **INFORMACIÓN PERSONAL**. Se entenderá lo siguiente:

Información Personal

Significa:

- I. El nombre de un individuo, número de identificación nacional (cédula, tarjeta de identidad o cédula de extranjería), datos médicos o de salud, otra información de salud protegida, número de licencia de conducir, número de identificación tributaria N.I.T., número de tarjeta de crédito, número de tarjeta débito, dirección, número de teléfono, número de cuenta, histórico de cuentas, o claves; y
- II. Otra información personal no pública como se define en las normas y regulaciones asociadas con el control y uso de estados financieros personales identificables, médicos y otra información sensible, incluyendo pero no limitado a los artículos 20 y 25 de la constitución política, la ley de habeas data 1266 de 2008, las normas que regulan los secretos profesionales de todas las profesiones, el código penal, el código sustantivo del trabajo, así como cualquier otra protección legal a datos no financieros, nacional o extranjera que proteja la privacidad y el robo de identidad, que requiera que las entidades comerciales que recolecten información confidencial publiquen las políticas de privacidad, adopten controles específicos de seguridad o privacidad, o notifiquen a los individuos en el evento de que la información confidencial se vea potencialmente comprometida;

En cualquier formato en que se encuentre. No se entiende por Información Personal, la que esté legalmente disponible al público general por cualquier razón, incluyendo pero no limitado a la información de los archivos gubernamentales federales, estatales o locales

Los demás términos, condiciones, límites de responsabilidad y exclusiones de la póliza no modificados por este endoso permanecen iguales.



ace seguros

POLIZA No.

12/14837

ANEXO No.

25917

PAG. No.

10

CONFEDERACION COLOMBIANA DE CAMARAS DE COMERCIO

POLIZA DE SEGURO DE ERRORES Y OMISIONES

CÁMARAS DE COMERCIO GRUPO 2

Mediante el presente endoso a las condiciones generales de la presente póliza, el Asegurador agrega la siguiente condición en los siguientes términos.

Las Cámaras de Comercio a ASEGURAR del GRUPO 2, según los términos, exclusiones y condiciones de la póliza son:

SOGAMOSO

GIRARDOT

QUIBDO

PUTUMAYO

BUGA

CARTAGO

URABA

DUITAMA

FLORENCIA

ESPINAL

TULUA

BUENAVENTURA

GUAJIRA

SINCELEJO

FACATATIVA

BARRANCABERMEJA

VALLEDUPAR

PALMIRA

ORIENTE ANTIOQUEÑO

CASANARE



ace seguros

POLIZA No.	ANEXO No.	PAG. No.
12/14837	25917	11
CONFEDERACION COLOMBIANA DE CAMARAS DE COMERCIO		

POLIZA DE SEGURO DE ERRORES Y OMISIONES

ARMENIA

CAUCA

TUNJA

PASTO

SANTA MARTA

Los demás términos, condiciones, límites de responsabilidad y exclusiones de la póliza no modificados por este endoso permanecen iguales.



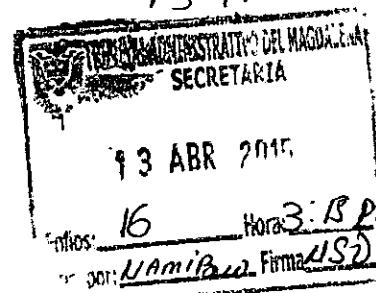
Libertad y Orden

Ministerio de Justicia y del Derecho
República de Colombia

Properidad
en todas
GRABAR



Doctor
EDGAR ALEXI VASQUEZ CONTRERAS
Magistrado Ponente
Tribunal Administrativo del Magdalena
Calle 20 No. 2A- 20, Palacio de Justicia
Santa Marta -Magdalena



Ref: Proceso No. 47001233300320140024100
Acción: Reparación directa
Actor: Unión Temporal Obras Especiales de Santa Marta-
OBRESAN.
Demandado: Nación- Ministerio de Justicia y del Derecho, y otros.

LIGIA PATRICIA AGUIRRE CUBIDES, mayor de edad, domiciliada y residente en la ciudad de Bogotá, D.C., identificada como aparece al pie de mi firma, actuando en calidad de apoderada judicial del **MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO**, entidad pública del orden nacional domiciliada en la ciudad de Bogotá, D.C., lo cual acredito con el poder adjunto que para tal efecto me fue conferido, por medio del presente escrito respetuosamente me permito **CONTESTAR LA DEMANDA** de la referencia de la siguiente manera:

A. PRETENSIONES.

De conformidad con las razones de la defensa que propondré a continuación, el Ministerio de Justicia y del Derecho se **OPONE** a todas y cada una de las pretensiones de la parte demandante.

B. LOS HECHOS.

1. No me consta, me atengo a lo que resulte probado en el decurso del proceso.
2. No me consta, me atengo a lo que resulte probado en el decurso del proceso.
3. No me consta, me atengo a lo que resulte probado en el decurso del proceso.
4. No me consta, me atengo a lo que resulte probado en el decurso del proceso.
5. No me consta, me atengo a lo que resulte probado en el decurso del proceso.
6. No me consta, me atengo a lo que resulte probado en el decurso del proceso.
7. No me consta, me atengo a lo que resulte probado en el decurso del proceso.
8. No me consta, me atengo a lo que resulte probado en el decurso del proceso.
9. No me consta, me atengo a lo que resulte probado en el decurso del proceso.
10. No me consta, me atengo a lo que resulte probado en el decurso del proceso.
11. No me consta, me atengo a lo que resulte probado en el decurso del proceso.
12. No me consta, me atengo a lo que resulte probado en el decurso del proceso.





Libertad y Orden

Ministerio de Justicia y del Derecho
República de Colombia

Prosperidad
para todos



13. No me consta, me atengo a lo que resulte probado en el decurso del proceso.
14. No me consta, me atengo a lo que resulte probado en el decurso del proceso.
15. No me consta, me atengo a lo que resulte probado en el decurso del proceso.
16. No me consta, me atengo a lo que resulte probado en el decurso del proceso.
17. No me consta, me atengo a lo que resulte probado en el decurso del proceso.
18. No me consta, me atengo a lo que resulte probado en el decurso del proceso.
19. No me consta, me atengo a lo que resulte probado en el decurso del proceso.
20. No me consta, me atengo a lo que resulte probado en el decurso del proceso.
21. No me consta, me atengo a lo que resulte probado en el decurso del proceso.
22. No me consta, me atengo a lo que resulte probado en el decurso del proceso.
23. No me consta, me atengo a lo que resulte probado en el decurso del proceso.
24. No me consta, me atengo a lo que resulte probado en el decurso del proceso.
25. No me consta, me atengo a lo que resulte probado en el decurso del proceso.
26. No me consta, me atengo a lo que resulte probado en el decurso del proceso.
27. No me consta, me atengo a lo que resulte probado en el decurso del proceso.
28. No me consta, me atengo a lo que resulte probado en el decurso del proceso.
29. No me consta, me atengo a lo que resulte probado en el decurso del proceso.
30. No me consta, me atengo a lo que resulte probado en el decurso del proceso.
31. No me consta, me atengo a lo que resulte probado en el decurso del proceso.
32. No me consta, me atengo a lo que resulte probado en el decurso del proceso.
33. No me consta, me atengo a lo que resulte probado en el decurso del proceso.
34. No me consta, me atengo a lo que resulte probado en el decurso del proceso.
35. No me consta, me atengo a lo que resulte probado en el decurso del proceso.
36. No me consta, me atengo a lo que resulte probado en el decurso del proceso.
37. No me consta, me atengo a lo que resulte probado en el decurso del proceso.
38. No me consta, me atengo a lo que resulte probado en el decurso del proceso.
39. No me consta, me atengo a lo que resulte probado en el decurso del proceso.
40. No me consta, me atengo a lo que resulte probado en el decurso del proceso.





Libertad y Orden

Ministerio de Justicia y del Derecho
República de Colombia

Prospeeridad
para todos



41. No me consta, me atengo a lo que resulte probado en el decurso del proceso.
42. No me consta, me atengo a lo que resulte probado en el decurso del proceso.
43. No me consta, me atengo a lo que resulte probado en el decurso del proceso.
44. No me consta, me atengo a lo que resulte probado en el decurso del proceso.
45. No me consta, me atengo a lo que resulte probado en el decurso del proceso.
46. No me consta, me atengo a lo que resulte probado en el decurso del proceso.
47. No me consta, me atengo a lo que resulte probado en el decurso del proceso.
48. No me consta, me atengo a lo que resulte probado en el decurso del proceso.
49. No me consta, me atengo a lo que resulte probado en el decurso del proceso.
50. No me consta, me atengo a lo que resulte probado en el decurso del proceso.
51. No me consta, me atengo a lo que resulte probado en el decurso del proceso.
52. No me consta, me atengo a lo que resulte probado en el decurso del proceso.

C. EXCEPCIONES.

A. Falta de legitimación material en la causa por pasiva:

En el asunto objeto de demanda concurren los presupuestos que configuran la causal exceptiva de FALTA DE LEGITIMACIÓN MATERIAL EN LA CAUSA POR PASIVA, por las siguientes razones:

El constituyente del 91 decidió ampliar el ámbito orgánico y funcional administración de justicia del Estado hacia otros ordenes, autorizando a los partidos a solucionar controversias a través de personas revestidas transitoriamente de las funciones de administrar justicia, actuando en la condición de conciliadores o en la de árbitros.

El artículo 116 de la Constitución Nacional, reza:

"... La Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, los Tribunales y los Jueces, administran Justicia. También lo hace la Justicia Penal Militar.

(...).

Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de jurados en las causas criminales, conciliadores o en la de árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad, en los términos que determine la ley".

Por su parte, la Ley 270 de 1996 o ley estatutaria de la administración de justicia, en su artículo 8º consagra:



Libertad y Orden

Ministerio de Justicia y del Derecho
República de Colombia

Prosperidad
para todos



"Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de conciliadores o en la de árbitros debidamente habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad".

Por su parte, el artículo 13º ibídem establece:

"DEL EJERCICIO DE LA FUNCION JURISDICCIONAL POR OTRAS AUTORIDADES Y POR PARTICULARES. Ejercen función jurisdiccional de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política:

(...)

3. Los particulares actuando como conciliadores o árbitros habilitados por las partes, en los términos que señale la ley. Tratándose de arbitraje, en el que no sea parte el estado o alguna de sus Entidades, los particulares podrán acordar las reglas de procedimiento a seguir, directamente o por referencia a la de un Centro de Arbitraje, respetando, en todo caso los principios Constitucionales que integran el debido proceso."

En vigencia del Decreto 1818 de 1998 "Por medio del cual se expide el Estatuto de los mecanismos alternativos de solución de conflictos", el arbitramento estaba regulado del artículo 115 al 222, y se definía de la siguiente manera:

"El arbitraje es un mecanismo por medio del cual las partes involucradas en un conflicto de carácter transigible, defieren su solución a un tribunal arbitral, el cual queda transitoriamente investido de la facultad de administrar justicia, profiriendo una decisión denominada laudo arbitral.

El arbitraje puede ser en derecho, en equidad o técnico. El arbitraje en derecho es aquel en el cual los árbitros fundamentan su decisión en el derecho positivo vigente.

En este evento el árbitro deberá ser abogado inscrito. El arbitraje en equidad es aquel en que los árbitros deciden según el sentido común y la equidad. Cuando los árbitros pronuncian su fallo en razón de sus específicos conocimientos en una determinada ciencia, arte u oficio, el arbitraje es técnico."

Actualmente, la Ley 1563 de 2012 "por medio de la cual se expide el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional y se dictan otras disposiciones", señala, entre otros:

"Artículo 1o. Definición, modalidades y principios. El arbitraje es un mecanismo alternativo de solución de conflictos mediante el cual las partes defieren a árbitros la solución de una controversia relativa a asuntos de libre disposición o aquellos que la ley autorice.

El arbitraje se rige por los principios y reglas de imparcialidad, idoneidad, celeridad, igualdad, oralidad, publicidad y contradicción.

El laudo arbitral es la sentencia que profiere el tribunal de arbitraje. El laudo puede ser en derecho, en equidad o técnico."

A su vez, el artículo 19 de la Ley 270 de 1996, dispone acerca del control disciplinario lo siguiente:



“ En los términos de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, el control disciplinario de los árbitros, los secretarios y los auxiliares de los tribunales arbitrales, se regirá por las normas disciplinarias de los servidores judiciales y auxiliares de la justicia.”.

La Corte Constitucional mediante Sentencia C- 242 de 1997, señaló:

“(…)

... el arbitramento representa un mecanismo para impartir justicia, a través del cual igualmente se hace efectiva la función pública del Estado en ese sentido, y claramente consagrado por el ordenamiento jurídico; es más, dicho instituto goza de autorización constitucional expresa, con determinadas características, ya señaladas anteriormente, en donde **los árbitros quedan investidos transitoriamente, de la función de administrar justicia**, con los mismos deberes, poderes, facultades y responsabilidades, en razón de haber quedado habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad, en los términos que señale la ley.

Adicionalmente, la decisión arbitral concretada en un laudo arbitral, bien sea en derecho o en equidad, es eminentemente jurisdiccional y equivale a una providencia judicial, en cuanto resuelve el litigio suscitado entre las partes, pronunciándose sobre los hechos, resolviendo sobre las pretensiones, valorando las pruebas y declarando el derecho a la luz de los mandatos constitucionales y legales o atendiendo a los principios de equidad. **Claro está, que la ejecución y control de ese laudo corresponde a la jurisdicción ordinaria permanente.**” (Negrillas fuera de texto).

Los artículos 65 y 66 de la Ley 270 de 1996, explican la responsabilidad del Estado y de sus funcionarios y empleados judiciales, de la siguiente manera:

“ARTICULO 65. DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales.

En los términos del inciso anterior el Estado responderá por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad.

ARTICULO 66. ERROR JURISDICCIONAL. Es aquel cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria a la ley.”.

El artículo 74 ibídem, dispuso:

“APLICACION. Las disposiciones del presente capítulo se aplicarán a todos los agentes del Estado pertenecientes a la Rama Judicial así como también a los particulares que excepcional o transitoriamente ejerzan o participen del ejercicio de la función jurisdiccional de acuerdo con lo que sobre el particular dispone la presente Ley Estatutaria.

En consecuencia, en los preceptos que anteceden los términos «funcionario o empleado judicial» comprende a todas las personas señaladas en el inciso anterior.”.

789
6

Al respecto, la H. Corte Constitucional en Sentencia C-037 de 1996 a través de la cual efectuó la revisión constitucional del proyecto de ley número 58/94 Senado y 264/95 Cámara "Estatutaria de la Administración de Justicia", M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, frente a este artículo señaló:

"Esta norma se limita a advertir que la responsabilidad por causas relacionadas con la administración de justicia se aplica a todos aquellos que en forma permanente o transitoria hagan parte de ella. ..."

La disposición, bajo estas condiciones, será declarada exequible."

De otra parte, esta alta corporación en sentencia T-799/11, indicó:

"La justicia arbitral tiene unas características propias pero en todo caso lleva aparejado el ejercicio de la función jurisdiccional por parte de los árbitros, como lo establecen las disposiciones vigentes y lo han reconocido anteriores pronunciamientos de esta Corporación. En esa medida, la jurisprudencia constitucional ha destacado que de conformidad con el ordenamiento legal los árbitros están sujetos a los mismos deberes de los jueces, pero igualmente cuentan con las mismas facultades y poderes procesales de los funcionarios judiciales, entre los que se destacan: (i) el poder de decisión para resolver obligatoriamente la controversia, (ii) el poder de coerción, para procurar el cumplimiento de su decisión, (iii) el poder de documentación o investigación para practicar pruebas ya sea de oficio o a petición de partes, para llegar con la valoración de ellas a una verdad real y de esa forma poder adoptar la decisión que corresponda."

De conformidad con la normativa transcrita y los pronunciamientos de la H. Corte Constitucional mencionados, se advierte que la obligación de indemnizar los daños causados en virtud de la prestación del servicio de administración de justicia, se aplicará a todos los agentes del Estado que pertenecen a la Rama Judicial, incluidos los particulares que de manera excepcional o transitoria ejercen la función jurisdiccional, como es el caso específico de los árbitros, quienes quedan investidos transitoriamente de la función de administrar justicia.

De esta manera, queda claro que cuando el legislador revistió a los particulares de función jurisdiccional, incluyó los yerros en que éstos puedan incurrir como consecuencia de un error generado por un árbitro en la aplicación del derecho, como fuente del error judicial.

Sumado a lo anterior, la Procuraduría Cuarta Delegada ante el H. Consejo de Estado, mediante concepto de auto 045/2011 de veintitrés (23) de mayo de 2011, presentado bajo el expediente 40899 (68001233100020100096701), expuso:

*"... como de la interpretación del libelo se infiere que lo reclamado por la actora es la declaratoria de responsabilidad por **error jurisdiccional**, es la acción de **reparación directa** la vía que la ley consagra para tales efectos y en esa medida la jurisdicción contencioso administrativa es la competente para decidir sobre el presunto daño causado por un fallo judicial del Tribunal Superior de Bucaramanga Sala Civil Familia, y, por fuero de atracción, sobre lo relacionado con la decisión de los particulares investidos de jurisdicción que profieren el laudo."*



Libertad y Orden

Ministerio de Justicia y del Derecho
República de Colombia

Prosperidad
para todos



Como se puede advertir, los árbitros son verdaderos jueces por mandato legal, con las facultades, deberes y responsabilidades propias de éstos, cuya función es la de poner fin al litigio mediante una decisión en derecho, en equidad o técnica, según se haya establecido.

Al Ministerio del Interior y de Justicia (hoy Ministerio de Justicia y del Derecho) frente a los laudos arbitrales que profieren los Tribunales de Arbitramento no le asiste ningún grado de competencia, ni muchos de responsabilidad por las actuaciones desplegadas por sus árbitros en desarrollo de las decisiones que profieren, por cuanto, la actuación relacionada con las funciones de control, inspección y vigilancia sobre los Centros de Conciliación o Arbitraje de este ministerio se centra, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1829 de agosto veintisiete (27) de agosto de 2013 "Por el cual se reglamentan algunas disposiciones de las Leyes 23 de 1991, 446 de 1998, 460 de 2001 y 1563 de 2012.", que anteriormente eran regidas por el Decreto 3626 de 2007.

Así, la Inspección, vigilancia y control del Ministerio de Justicia y del Derecho a los Centros de Conciliación, Arbitraje y la Amigable Composición, la establece el Artículo 54 del Decreto 1829 de 2013, al señalar el Objetivo *"El Ministerio de Justicia y del Derecho podrá solicitar la información que estime pertinente y efectuar visitas a las instalaciones en que funcionan sus vigilados, para **procurar, exigir y verificar el cumplimiento de las obligaciones legales y reglamentarias** a cargo de estos, con el propósito de garantizar el acceso a la justicia a través de los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos."* (Negritas fuera de texto).

Funciones del Ministerio de Justicia y del Derecho establecidas en el Decreto 2897 de 2011

El Decreto 2897 de 2011, por el cual se determinan los objetivos, la estructura orgánica, las funciones del Ministerio de Justicia y del Derecho y se integra el Sector Administrativo de Justicia y del Derecho, en su artículo 13º señala que son funciones de la Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos, las siguientes:

1. Formular, coordinar, divulgar y fomentar políticas públicas para aumentar los niveles de acceso a la Justicia, a través de los mecanismos alternativos de solución de conflictos y de modelos de implementación regional y local.
2. Promover, evaluar y realizar los análisis, estudios e investigaciones necesarios para generar conocimiento y el fortalecimiento de las políticas de acceso a la justicia a través de los mecanismos alternativos de solución de conflictos.
3. Proponer nuevos mecanismos de métodos alternativos de solución de conflictos en coordinación con los demás niveles de oferta de justicia.
4. Proponer proyectos de ley o de actos legislativos en relación con acceso a la justicia en materia de mecanismos alternativos de solución de conflictos, en coordinación con las demás direcciones y oficinas competentes.

(...)

6. Definir los topes tarifarios de los servicios que prestan los Centros de Conciliación y Arbitraje, de conformidad con lo establecido en la ley.

7. Autorizar la creación de centros de conciliación y arbitraje, así como la creación de entidades avaladas para impartir formación en Conciliación Extrajudicial en Derecho, y



Libertad y Orden

Ministerio de Justicia y del Derecho
República de Colombia

Prosperidad
para todos



ejerger funciones de inspección, control y vigilancia de estos centros de conciliación y/o arbitraje, y de las entidades avaladas para impartir formación en conciliación.

(...)

15. Coordinar y articular la oferta de servicios de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos y el modelo de acceso a nivel local y regional.

Tal como puede observarse en la normatividad citada, al Ministerio de Justicia y del Derecho no le está dada la facultad de intervención dentro de los procesos arbitrales, las conductas desplegadas por los miembros de los Tribunales de Arbitramento ni la revisión del procedimiento y menos aún la de impartir aprobación al contenido de los Laudos Arbitrales.

Se tiene que la convocante pretende el reconocimiento y pago de daños y perjuicios acaecidos en desarrollo del contenido de un laudo arbitral que fue declarado nulo por el C. Consejo de Estado.

Por lo anteriormente expuesto, no cabe duda que las funciones de vigilancia y control que ejerce el Ministerio de Justicia y del Derecho sobre los centros de arbitraje, conciliación y amigable composición están limitadas **a exigir y verificar el cumplimiento de las obligaciones legales y reglamentarias** a cargo de dichos centros, lo cual no le otorga facultades para intervenir dentro de los procesos arbitrales, las conductas de los miembros de los Tribunales de Arbitramento y tampoco revisar el procedimiento aplicado o impartir aprobación al contenido de los Laudos Arbitrales, razón por la cual se configura la causal exceptiva de Falta de Legitimación Material en la Causa por Pasiva, pues no representa judicialmente al Tribunal de Arbitramento que emitió el laudo arbitral y tampoco al Centro de Conciliación de la Cámara de Comercio de Santa Marta, no se le puede endilgar responsabilidad alguna como quiera que dicho Ministerio no fue la autoridad que intervino material y sustancialmente en los hechos objeto de la conciliación solicitada.

Así las cosas, en el asunto objeto de solicitud de conciliación concurren los presupuestos que configuran la causal exceptiva de falta de legitimación material en la causa por pasiva, por cuanto para el asunto objeto de litis la representación de la Nación se encuentra radicada en la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, quien por imperativo constitucional y legal dispone de autonomía administrativa y presupuestal, como quiera que los hechos sustento de las pretensiones incoadas tienen como fundamento el presunto error judicial generado por un árbitro en la aplicación del derecho, dentro de un proceso arbitral en ejercicio de la función autónoma por imperativo constitucional de administrar justicia, materia ésta en la que el Ministerio de Justicia y del Derecho, de conformidad con las normas que regulan su accionar de vigilancia y control de los centros de arbitraje, conciliación y amigable composición (artículo 13 del Decreto 2897 de 2011), no le asiste grado alguno de competencia.

Se fundamenta la falta de legitimación material en la causa por pasiva que asiste al Ministerio de Justicia y del Derecho, en el siguiente planteamiento:

NORMAS CONSTITUCIONALES Y LEGALES

.- El artículo 113 de la Constitución Política señala que son ramas del poder público, la legislativa, la ejecutiva y la judicial y que *"Además de los órganos que las integran existen otros, autónomos e independientes, para el cumplimiento de las demás*





Libertad y Orden

Ministerio de Justicia y del Derecho
República de Colombia

Prosperidad
para todos



funciones del Estado. Los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines"

- El artículo 123 ibídem, inciso 2º, dispone: "Los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad; ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento".

- El artículo 228 de la Constitución Política determina "La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes . . . Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo ", en concordancia con el artículo 257 ibídem según el cual la administración de la Rama Judicial le corresponde al Consejo Superior de la Judicatura.

- El artículo 159 del CPA y CA, señala:

"Las entidades públicas, los particulares que cumplen funciones públicas y los demás sujetos de derecho que de acuerdo con la ley tengan capacidad para comparecer al proceso, podrán obrar como demandantes, demandados o intervinientes en los procesos contencioso – administrativos, por medio de sus representantes, debidamente acreditados. (Subrayas fuera de texto)

La entidad, órgano u organismo estatal estará representada, para efectos judiciales, por el Ministro, Director de Departamento Administrativo, Superintendente, Registrador Nacional del Estado Civil, Procurador General de la Nación, Contralor General de la República o Fiscal General de la Nación o por la persona de mayor jerarquía en la entidad que expidió el acto o produjo el hecho. (Subrayas fuera de texto).

..."

- El artículo 162 del CPA y CA, consagra los requisitos que toda demanda debe reunir ante la jurisdicción contencioso administrativa y en su numeral 1o. establece: "La designación de las partes y de sus representantes.

B. Inexistencia de falla del servicio imputable al Ministerio de Justicia y del Derecho (Ausencia de nexo causal)

Uno de los elementos esenciales para que surja la responsabilidad administrativa es la existencia del nexo causal, es decir, el vínculo que debe existir entre hecho y daño antijurídico.

La explicación del vínculo causal en el sentido de determinar dentro de todas las posibles ¿cuál fue la causa eficiente que produjo un daño antijurídico?, ha sido dilucidada reiterativamente por doctrina y jurisprudencia mediante la aplicación de la Teoría de la Causalidad Adecuada, la cual básicamente sostiene que hay que precisar aquellas que sean realmente determinantes en la producción del resultado dañoso porque, solo quienes hayan originado esas causas determinantes, comprometen su responsabilidad.

Sobre la teoría de la causalidad adecuada ha dicho el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Consejera Ponente Dra., María Elena Giraldo Gómez, en sentencia del 17 de junio de 2004, radicación número 44001-23-31-





Libertad y Orden

Ministerio de Justicia y del Derecho
República de Colombia

Prospeeridad
para todos



000-1996-0825-01 (15183), actor Elmer Francisco Vanegas Palmezano y Otros,
demandado Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional:

“... Para que surja el deber de indemnizar con fundamento en el régimen de responsabilidad patrimonial previsto en el artículo 90 constitucional, ... , no es suficiente que el demandante haya sufrido un daño cierto, determinado o determinable y antijurídico y que contra quien se dirige la imputación haya incurrido en alguna conducta de irregularidad constitutiva de falla de aquellas alegadas por el actor, porque es necesario además que se demuestre que el daño se produjo como consecuencia de la falla de la Administración, nexo causal que para efectos de esta declaratoria no debe ser visto desde el punto de vista de la causalidad física perteneciente al mundo de los fenómenos naturales, sino desde el punto de vista jurídico, entendido como el estudio de la eficiencia de la conducta estatal en la causación de un daño desde el deber ser que prevé la norma para el Estado en relación con el administrado...”.

Aterrizando las anteriores ideas al caso en cuestión, podemos observar que en el presente caso no existe relación real entre el Ministerio de Justicia y del Derecho y las causas objetivas determinantes en la producción de los eventuales hechos dañosos que aducen los convocantes, no existiría el suficiente y necesario vínculo causal que derive en su responsabilidad administrativa.

En efecto, las causas determinantes en la producción de cualesquiera hechos dañosos que eventualmente pudieran haber ocasionado perjuicios a los convocantes, objetivamente refieren a conductas que la propia parte actora acredita o endilga a los miembros del Tribunal de Arbitramento que profirió el laudo arbitral de 22-08-2011, señalando que *“Son administrativamente y patrimonialmente responsables de los graves perjuicios causados ... con ocasión de la Falla en el servicio de la Función Jurisdiccional por Particulares acaecida en la expedición del Laudo Arbitral de fecha 22 de agosto de 2011, por el Tribunal de Arbitramento ...”*, razón suficiente para entender que no existe el nexo causal indispensable para atribuirle responsabilidad al Ministerio de Justicia y del Derecho, toda vez que la entidad no participó, contribuyó o realizó, directa ni indirectamente, los hechos eficientes materia del litigio y, por tanto, en cuanto a mi representada respecta, se impone su completa y total absolución.

Con fundamento en las consideraciones precedentemente expuestas queda claro que frente al Ministerio de Justicia y del Derecho existe **Falta de Legitimación Material en la Causa Por Pasiva** toda vez que este Ministerio no participó de forma directa o indirecta, por acción u omisión en los hechos que sirven de fundamento a las pretensiones; la representación de la Nación se encuentra radicada en la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, quien por imperativo constitucional y legal dispone de autonomía administrativa y presupuestal, como quiera que los hechos sustento de las pretensiones incoadas tienen como fundamento el presunto error judicial generado por un árbitro en la aplicación del derecho, dentro de un proceso arbitral en ejercicio de la función autónoma por imperativo constitucional de administrar justicia, materia ésta en la que el Ministerio de Justicia y del Derecho, de conformidad con las normas que regulan su accionar de vigilancia y control de los centros de arbitraje, conciliación y amigable composición (artículo 13 del Decreto 2897 de 2011), no le asiste grado alguno de competencia, no representa judicialmente a la Rama Judicial y tampoco al Centro de Conciliación de la Cámara de Comercio de Santa Marta, no se le puede endilgar responsabilidad alguna porque este Ministerio no fue la autoridad que intervino material y sustancialmente en los hechos objeto de la conciliación solicitada, ni le asiste obligación legal de reparar perjuicios ajenos a sus actuaciones.



D. PETICIÓN

Por lo anteriormente expuesto, respetuosamente me permito solicitar al despacho **declarar probada la excepción de Falta de Legitimación Material en la Causa Por Pasiva** y la consiguiente desvinculación del Ministerio de Justicia y del Derecho en el trámite de la presente demanda.

E. RECONOCIMIENTO DE PERSONERÍA.

Para que se reconozca personería jurídica a fin de actuar en representación del Ministerio de Justicia y del Derecho, me permito anexar los siguientes documentos:

- Fotocopia de la Resolución No. 004 del once (11) de agosto de 2011, proferida por el señor Ministro de Justicia y del Derecho, por medio de la cual delega la representación judicial en el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica.
- Fotocopia de la Resolución No. 521 del catorce (14) de agosto de 2012, a través de la cual se nombra al doctor Pedro Ricardo Torres Baez, como Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Justicia y del Derecho.
- Fotocopia del acta de posesión del doctor Pedro Ricardo Torres Baez, como Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de dieciséis (16) de agosto de 2012.
- Poder para actuar debidamente otorgado a la suscrita por el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Justicia y del Derecho.


F. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

Al respecto debo precisar que el Ministerio de Justicia y del Derecho no tiene en su poder antecedentes administrativos relacionados con el objeto de la demanda y por esta razón no puede allegar copia de los mismos.

G. NOTIFICACIONES.

Tanto el Ministerio de Justicia y del Derecho como la suscrita apoderada recibimos notificaciones personales en la Carrera 9 N° 12C - 10 de la ciudad de Bogotá, D.C. y/o en el correo electrónico: notificaciones.judiciales@minjusticia.gov.co.

Sin otro particular por el momento, me suscribo atentamente.


LIGIA PATRICIA AGUIRRE CUBIDES
C.C. 52.027.521 de Bogotá
T. P. 114.521 del C. S. de la J.

Anexo: Lo enunciado en (5) folios.



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA
SECRETARIA

El presente memorial, en 16 Folios, fue
presentado personalmente por LIGIA PATRICIA
AGUIRRE CUBIDES quien exhibió su
C.C. No. 52.027.521 y tarjeta profesional
de abogado No. 114521-01 hoy 13-ABRIL-15.

EL SECRETARIO: 



Libertad y Orden

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

RESOLUCIÓN NÚMERO 0004 DE 11 AGO 2011

Por la cual se delega la representación judicial del Ministerio de Justicia y del Derecho y se dictan otras disposiciones

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

En uso de sus facultades legales, en especial las que le confiere el artículo 9º de la Ley 489 de 1998 y el decreto 2897 de 2011

CONSIDERANDO:

Que el Decreto 2897 de 2011 "por el cual se determinan los objetivos y la estructura orgánica del Ministerio de Justicia y del Derecho y se integra el Sector Administrativo de Justicia y del Derecho" dispone en su artículo 11, que son funciones de la Oficina Asesora Jurídica: "4. Representar judicial y extrajudicialmente al Ministerio en los procesos y actuaciones que se instauren en su contra o que éste deba promover, mediante poder o delegación, recibidos del Ministro y supervisar el trámite de los mismos" y "5. Dirigir y coordinar las actividades relacionadas con el proceso de jurisdicción coactiva y efectuar el cobro a través de este proceso de las multas impuestas a favor de la nación por parte de las autoridades competentes a quienes sean declarados responsables de infringir el Estatuto Nacional de Estupefacientes o hacer efectivo ante las autoridades competentes, los derechos de crédito que a su favor tienen y velar porque este se desarrolle de acuerdo con la normatividad vigente".

Que en desarrollo de los principios de economía y celeridad, para hacer más ágil la actuación del Ministerio de Justicia y del Derecho ante las instancias judiciales, así como en el cobro de los créditos exigibles a su favor, se hace necesario delegar la facultad de adelantar algunas actividades.

Que por las razones expuestas,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1. Delegar en el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, código 1045, grado 16, de la Planta Global, la representación judicial en los procesos en que deba actuar la Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho.

ARTÍCULO 2. La delegación a que hace referencia el artículo anterior comprende todas las facultades que se requieran para el correcto ejercicio de la representación judicial, como son, entre otras, otorgar poderes a abogados, notificarse, presentar memoriales y/o recursos, conciliar prejudicial y judicialmente en los procesos a que haya lugar, de conformidad con lo establecido en la

Es copia del original

de 17

00007

14
680

Continuación de la Resolución "Por la cual se efectúan unas delegaciones y se dictan otras disposiciones".


conciliación en materia administrativa, especialmente las leyes 23 de 1991, 446 de 1998, 640 de 2000 y 1285 de 2009 y las normas que las reglamenten, modifiquen o sustituyan, y en general todas las actuaciones requeridas para el cabal cumplimiento de las funciones delegadas.



ARTÍCULO 3. Delegar en el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, código 1045, grado 16, de la Planta Global, el ejercicio de la jurisdicción coactiva para hacer efectivos los créditos exigibles a favor de la Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho.

ARTÍCULO 4. VIGENCIA y DEROGATORIAS. La presente resolución rige a partir de su fecha de expedición y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C. a los 11 AGO 2017


JUAN CARLOS ESGUERRA PORTOCARRERO
Ministro de Justicia y del Derecho

Revisaron:  Diana M. Barrera C – Baudilio Peñaranda - Alfonso Cajiao Cabrera
Aprobó: Luis Felipe Henao Cardona 



MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

RESOLUCIÓN NÚMERO

0521

DE 14 AGO 2012

Por la cual se efectúa un nombramiento en la planta de personal del Ministerio

LA MINISTRA DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

en uso de sus facultades legales en especial las conferidas en el artículo 1º del Decreto 1679 de 1991, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 909 de 2004 y el artículo 6º del Decreto 2897 de 2011, y

CONSIDERANDO:

Que con fundamento en la revisión de la documentación de la hoja de vida del doctor Pedro Ricardo Torres Báez, la Secretaria General (e), certificó que reúne los requisitos exigidos para ejercer el cargo de Jefe de Oficina Asesora Jurídica código 145, grado 16, del Despacho de la Ministra de Justicia y del Derecho, de conformidad con las normas legales vigentes y con el Manual Específico de Funciones, Requisitos y Competencias Laborales

Que en mérito de lo expuesto, este Despacho

RESUELVE:

Artículo 1. Nombrar con carácter ordinario al doctor Pedro Ricardo Torres Báez, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.185 705, en el cargo de Jefe de Oficina Asesora Jurídica código 145, grado 16, del Despacho de la Ministra de Justicia y del Derecho.

Artículo 2. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su comunicación

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., a los 14 AGO 2012

RUTH STELLA CORREA PALACIO


Elaboró.
Revisó

Viviana Valencia Ospina
María T. Zúñiga E

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

Es copia del original

Archivos


 Libertad y Orden	ACTA DE POSESION	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO
---	------------------	---

Bogotá D C., 16 AGO 2012

Se presentó en el Despacho de la Ministra de Justicia y del Derecho, el doctor PEDRO RICARDO TORRES BÁEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.185 705, con el fin de tomar posesión del cargo de Jefe de Oficina Asesora Jurídica, código 1045, grado 16, del Despacho de la Ministra de Justicia y del Derecho, con una asignación básica mensual de \$ 6.506 604 00

Acreditó los requisitos para el ejercicio del cargo y prestó el juramento de cumplir y defender la Constitución Política de Colombia y desempeñar los deberes que le incumbe


PEDRO RICARDO TORRES BÁEZ
El Posesionado


RUTH STELLA CORREA PALACIO
Quien da Posesión

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

Es copia del original
de

Archivos



800
683

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA
SISTEMA ORAL

Santa Marta, ocho (8) de mayo de dos mil quince (2015)

MAGISTRADO PONENTE: Dr. EDGAR ALEXI VÁSQUEZ CONTRERAS

Radicación: N° 47-001-2331-003-2014-00241-00
Demandante: UNIÓN TEMPORAL OBRAS ESPECIALES SANTA MARTA
Demandado: NACIÓN – MIN. DEFENSA Y OTROS
Medio de control: Reparación Directa

Decide el Despacho el **recurso de reposición** interpuesto por el apoderado judicial de la entidad demandada Cámara de Comercio de Santa Marta contra el **auto de 23 de septiembre de 2014**, mediante el cual se admitió la demanda de reparación directa presentada, a través de apoderado judicial, por J.PG & CIA S.A, Germán Villanueva Calderón y Ricardo Luis Canabal Guzmán, integrantes de la Unión Temporal Obras Especiales de Santa Marta contra la Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho, Cámara de Comercio de Santa Marta, Centro de Arbitraje y de Amigable Composición – Universidad del Magdalena, Diana Boveá Mendinueta, Miguel Ángel Polo Campo y Juan Alberto Polo Figueroa.

I. Antecedentes

1.- La Sociedad J.PG & CIA S.A y los señores Germán Villanueva Calderón y Ricardo Luis Canabal Guzmán integrantes de la Unión Temporal Obras Especiales de Santa Marta interpusieron demanda de reparación directa contra la Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho, Cámara de Comercio de Santa Marta, Centro de Arbitraje y de Amigable Composición – Universidad del Magdalena, Diana Boveá Mendinueta, Miguel Ángel Polo Campo y Juan Alberto Polo Figueroa, a fin de obtener la indemnización de los perjuicios ocasionados por la presunta falla del servicio configurada con la expedición del laudo arbitral de 22 de agosto de 2011, el cual fue declarado nulo por el Consejo de Estado.

2.- La demanda descrita fue inadmitida mediante providencia de 19 de agosto de 2014, puesto que no cumplía con la totalidad de los requisitos exigidos por la Ley para su admisión. En la providencia aludida, se concedió, de acuerdo con el artículo 170 del C.P.A.C.A, un término de 10 días contados desde la ejecutoria de la misma, para que la parte demandante subsanara las falencias allí anotadas. (fls. 629 – 630).

3.- La parte demandante subsanó los defectos de la demanda, mediante memorial radicado en la Procuraduría No. 155 Judicial II en Asunto Administrativos de Santa Marta el 2 de septiembre de 2014 (fls. 634 – 640), el cual fue remitido por la Procuradora Judicial, mediante oficio radicado en la Secretaría de esta Corporación el 5 de septiembre de 2014 (fl. 633).

4.- Mediante auto de 23 de septiembre de 2014 se admitió la demanda de la referencia por cumplir con los presupuestos y requisitos para su presentación de conformidad con la Ley 1437 de 2011. (fls. 645 – 646); providencia contra la cual la entidad demandada Cámara de Comercio de Santa Marta interpuso recurso de reposición (fls. 674 – 678).

II. El recurso de reposición.

El apoderado judicial de la Cámara de Comercio de Santa Marta considera que el demandante subsanó la demanda por fuera del término legal, teniendo en cuenta que el auto inadmisorio fue notificado por estado electrónico No. 026 de 21 de agosto de 2014, los diez días para subsanar los defectos de la demanda comenzaban a correr el 22 de agosto de 2014 y vencían el 4 de septiembre del mismo año.

Como el memorial de subsanación fue radicado en la Secretaría de esta Corporación el 5 de septiembre de 2014, la demanda se subsanó extemporáneamente debiendo en consecuencia, ser rechazada.

Ahora, si bien el demandante radicó el memorial en la Procuraduría No. 155 Judicial II en Asuntos Administrativos de Santa Marta, el día 2 de septiembre de 2014, no puede tenerse esta como la fecha de presentación del memorial, puesto que en dicha entidad debió ser radicado.

III. Consideraciones

3.1. Procedencia del recurso

De acuerdo con el artículo 242 de la Ley 1437 de 2011 *“el recurso de reposición procede contra los autos que no sean susceptibles de apelación o de súplica”*

Por su parte, el artículo 243 ibídem, establece como autos susceptibles del recurso de apelación los siguientes:

"...Artículo 243. Apelación. Son apelables las sentencias de primera instancia de los Tribunales y de los Jueces. También serán apelables los siguientes autos proferidos en la misma instancia por los jueces administrativos:

- 1. El que rechace la demanda.*
- 2. El que decrete una medida cautelar y el que resuelva los incidentes de responsabilidad y desacato en ese mismo trámite.*
- 3. El que ponga fin al proceso.*
- 4. El que apruebe conciliaciones extrajudiciales o judiciales, recurso que solo podrá ser interpuesto por el Ministerio Público.*
- 5. El que resuelva la liquidación de la condena o de los perjuicios.*
- 6. El que decreta las nulidades procesales.*
- 7. El que niega la intervención de terceros.*
- 8. El que prescinda de la audiencia de pruebas.*
- 9. El que deniegue el decreto o práctica de alguna prueba pedida oportunamente.*

(...)"

En consecuencia, el recurso de reposición estudiado resulta procedente, toda vez que, el auto que admite la demanda no es susceptible del recurso de apelación.

3.2.- Caso concreto

El artículo 170 de la Ley 1437 de 2014 dispone lo siguiente:

"Artículo 170. Inadmisión de la demanda. Se inadmitirá la demanda que carezca de los requisitos señalados en la ley por auto susceptible de reposición, en el que se expondrán sus defectos, para que el demandante los corrija en el plazo de diez (10) días. Si no lo hiciere se rechazará la demanda."

En cumplimiento de la norma transcrita el despacho inadmitió la demanda de la referencia mediante auto de 19 de agosto de 2014 y concedió a la parte demandante un término de diez (10) días para subsanarla; término que empezaría a correr a partir de la ejecutoria de dicha providencia.¹

El Código General del Proceso regula la ejecutoria de las providencias judiciales en los siguientes términos:

¹ Ver numeral primero de la parte resolutive del auto de 19 de agosto de 2014 (fl. 629 reverso)

“Artículo 302. Ejecutoria.

Las providencias proferidas en audiencia adquieren ejecutoria una vez notificadas, cuando no sean impugnadas o no admitan recursos.

No obstante, cuando se pida aclaración o complementación de una providencia, solo quedará ejecutoriada una vez resuelta la solicitud.

Las que sean proferidas por fuera de audiencia quedan ejecutoriadas tres (3) días después de notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelva los interpuestos.”

El auto mediante el cual se inadmitió la demanda fue notificado por estado electrónico No. 026 de 21 de agosto de 2014, por lo cual, de acuerdo con la norma transcrita, quedó ejecutoriado el 26 de agosto de 2014, puesto que los tres (3) días para su ejecutoria comenzaron a correr a partir del 22 del mismo mes y año (viernes 22, lunes 25 y martes 26 de agosto).

De suerte que, el término de 10 días para subsanar la demanda de la referencia se cuentan a partir del 27 de agosto de 2014, día siguiente a la ejecutoria del auto que lo concede.

Siendo esto así, el demandante podía subsanar la demanda hasta el nueve (9) de septiembre de 2014.

Si bien es cierto no hay razón que justifique el hecho de que la parte demandante haya presentado el memorial por medio del cual subsana la demanda de la referencia en una entidad diferente al Tribunal Contencioso Administrativo del Magdalena, también es cierto que dicho memorial fue remitido por la entidad que lo recepcionó dentro del término concedido para presentarlo, puesto que se radicó en la Secretaría de esta Corporación el 5 de septiembre de 2014 y el término para subsanar la demanda fenecía, de acuerdo con todo lo expuesto, el 9 del mismo mes y año.

No sobra agregar que ninguna norma legal exige la presentación personal del escrito de corrección ante el Tribunal, por lo que bien pudo ser remitido por la Procuraduría No. 155 Judicial II en Asuntos Administrativos de Santa Marta donde equivocadamente se presentó.

En consecuencia, no hay lugar a reponer el auto admisorio de la demanda.

Por lo anterior, se

RESUELVE

PRIMERO: No reponer el auto de 23 de septiembre de 2014, mediante el cual este Tribunal admitió la demanda que dio origen al proceso de la referencia.

SEGUNDO: En firme este auto, continúese con el trámite correspondiente.

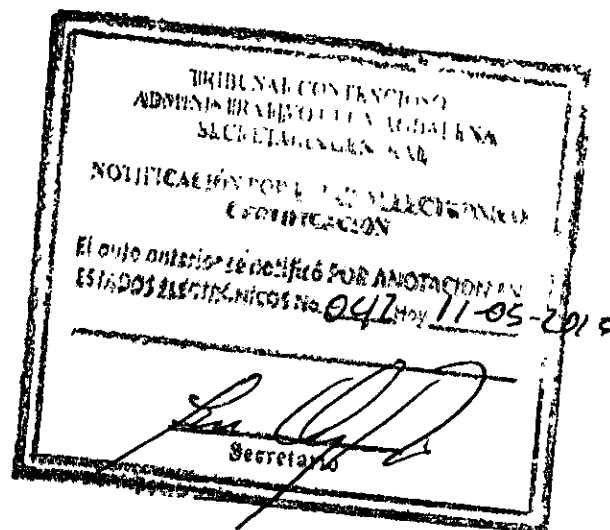
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EDGAR ALEXI VASQUEZ CONTRERAS

Magistrado

01-0

perior
atur



803
186

Notificaciones Tribunal 03 Administrativo del Magdalena

De: Notificaciones Tribunal 03 Administrativo del Magdalena
<tadmin03mgd@notificacionesrj.gov.co>
Enviado el: lunes, 11 de mayo de 2015 07:59 p.m.
Para: 'villanauta@yahoo.com'; ministro de justicia
(notificaciones.judiciales@minjusticia.gov.co); universidad del magdalena
(notificacionjudicial@unimagdalena.edu.co); 'dianaboveamendinueta@hotmail.com';
'jpolofigueroa@gmail.com'; conciliacionesextrajudiciales@defensajuridica.gov.co;
procuraduria (procjudadm155@procuraduria.gov.co); procjudadm43
@procuraduria.gov.co
Asunto: 2014-0241 AUTO NO REPONE - UNION TEMPORAL
Datos adjuntos: 2014-0241 NO REPONE - UNION TEMPORAL.pdf
Importancia: Alta

ADJUNTO AL PRESENTE ENVIO COPIA DE AUTO.

MIGUEL ANGEL PAEZ TOVAR
NOTIFICADOR

AVISO IMPORTANTE: Esta dirección de correo electrónico tadmin03mgd@notificacionesrj.gov.co es de uso único y exclusivo de envío de notificaciones, todo mensaje que se reciba no será leído y automáticamente se eliminará de nuestros servidores, apreciado usuario si tiene alguna solicitud por favor comuníquese a la siguiente línea telefónica: 4213901 o envíenos un correo electrónico a la siguiente dirección: tadtvo03mag@cendoj.ramajudicial.gov.co

804
60X

Notificaciones Tribunal 03 Administrativo del Magdalena

De: Notificaciones Tribunal 03 Administrativo del Magdalena
<tadmin03mgd@notificacionesrj.gov.co>
Enviado el: lunes, 11 de mayo de 2015 07:59 p.m.
Para: 'villanauta@yahoo.com'; ministro de justicia
(notificaciones.judiciales@minjusticia.gov.co); universidad del magdalena
(notificacionjudicial@unimagdalena.edu.co); 'dianaboveamendinueta@hotmail.com';
'jpolofigueroa@gmail.com'; conciliacionesextrajudiciales@defensajuridica.gov.co;
procuraduria (procjudadm155@procuraduria.gov.co); procjudadm43
@procuraduria.gov.co
Asunto: 2014-0241 AUTO NO REPONE - UNION TEMPORAL
Datos adjuntos: 2014-0241 NO REPONE - UNION TEMPORAL.pdf
Importancia: Alta

ADJUNTO AL PRESENTE ENVIO COPIA DE AUTO.

MIGUEL ANGEL PAEZ TOVAR
NOTIFICADOR

AVISO IMPORTANTE: Esta dirección de correo electrónico tadmin03mgd@notificacionesrj.gov.co es de uso único y exclusivo de envío de notificaciones, todo mensaje que se reciba no será leído y automáticamente se eliminará de nuestros servidores, apreciado usuario si tiene alguna solicitud por favor comuníquese a la siguiente línea telefónica: 4213901 o envíenos un correo electrónico a la siguiente dirección: tadtvo03mag@cendoj.ramajudicial.gov.co

carlos becerra varona
abogado

83
600
GRABADO

H. Magistrados
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA
Ciudad

Demandante : UNION TEMPORAL OBRAS ESPECIALES SANTA MARTA "OBRESAN".
Demandados: LA NACIÓN-MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL CAMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA, UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA Y OTROS.
Medio de Control : REPARACIÓN DIRECTA.
Radicación : 47-001-2331-003-2014-00241-00
M. Ponente : Dr. EDGAR A. VASQUEZ CONTRERAS.

CARLOS BECERRA VARONA, mayor y de este vecindario, portador de la cédula de ciudadanía número 2.943.586 expedida en Bogotá y titular de la Tarjeta Profesional de Abogado número 1.785 expedida por el C.S.J., en ejercicio del mandato que me ha otorgado el doctor **CARLOS EDUARDO GAMBOA GARCIA**, mayor y de este vecindario, con cédula de ciudadanía número 12.563.688 expedida en Santa Marta, quien ocupa el cargo de Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del ente autónomo convocado pasivamente a la causa y es actualmente delegatario de algunas funciones rectorales, entre ellas la de representar judicialmente a la **UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA**, ya sea en forma directa en su condición de abogado o mediante apoderado especial, ocurro ante el H. Magistrado Ponente a efecto de manifestarle lo que a continuación expongo en orden a hacer claridad atinentemente con la conducta asumida por la **UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA** de contestar la demanda cuando estuviere en firme el auto admisorio de la misma, lo que

aconteció el día en que se notificó el auto que negó la reposición del proveído de 23 de septiembre de 2014, vale decir, el 11 de mayo de 2015.

En efecto, en providencia de 8 de mayo del año en curso, en Sala Unitaria, el H. Magistrado Ponente profirió ej auto que desató el recurso de reposición que el apoderado de la Cámara de Comercio de Santa Marta interpuso contra el proveído de 23 de septiembre de 2014, mediante el cual se admitió la demanda y se tomaron otras previsiones.

El fundamento de la decisión del H. M. Ponente para no reponer la providencia recurrida consistió en la interpretación del artículo 302 del C. G. P. conforme al cual se requiere que las decisiones judiciales cobren ejecutoria para que surtan efecto. Siendo así el término de diez (10) días para subsanar las deficiencias de la demanda no comenzaba al día siguiente de la notificación del auto que lo ordenaba sino al día siguiente a su ejecutoria con lo cual el escrito subsanador presentado por el apoderado de los actores había sido temporáneo.

Lo curioso es que mientras el H. Magistrado que conduce el proceso sostuvo lo que se deja dicho, con lo que estamos plenamente de acuerdo, la Secretaría del Tribunal Administrativo, por sí y ante sí, procedió a notificar el auto admisorio de la demanda en el mes de enero de 2015, época para la cual tal providencia no había cobrado ejecutoria pues estaba pendiente aun el recurso de reposición que solo fue desatado el 8 de mayo del mismo año.

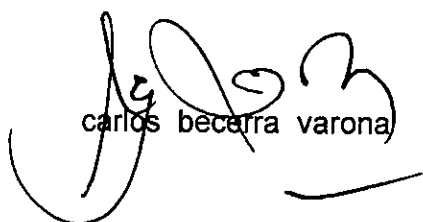
Entonces, puesto que el auto de 23 de septiembre de 2014 quedó en firme con la notificación del proveído de 8 de mayo de 2015, lo que ocurrió el 11 de los mismos mes y año, la UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA asume que el término para contestar la demanda comenzó a contarse el día 12 de mayo de 2015. La otra solución es que el H. M. Ponente ordene que se notifique nuevamente el admisorio de la demanda.

Solo adoptando una medida como las que se plantean se puede restablecer el debido proceso, derecho fundamental que puede resultar vulnerado en caso contrario.

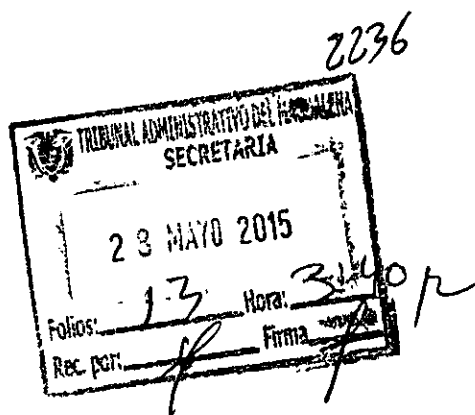
NOTIFICACIONES

Me permito indicarle que recibo notificaciones en la secretaria de su despacho, y/o en la Carrera 4a. con Calle 24, esquina, N° 4 -24, Oficina 706, Torre Empresarial de esta ciudad, Teléfono 3157512438, Mail: carlosbecerravarona@outlook.es

Honorables Magistrados,


carlos becerra varona

Santa Marta, 25 de mayo de 2015.





Santa Marta, D. T. C. H., martes, 03 de febrero de 2015

Señores:
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA
Presente

Ref.: **Acción:** REPARACIÓN DIRECTA
Demandante: UNIÓN TEMPORAL DE OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA - OBRESAN
Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO, CAMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA - CENTRO DE ARBITRAJE, CONCILIACIÓN Y AMIGABLE COMPOSICION, UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA
Radicación: 2014 - 00241

CARLOS EDUARDO GAMBOA GARCÍA mayor de edad, con residencia y domicilio en la ciudad de Santa Marta, identificado con la cédula de ciudadanía N° 12.563.688 expedida en Santa Marta (Magdalena), obrando en mi calidad de Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de **LA UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA "UNIMAGDALENA"** ente universitario autónomo, público, de carácter educativo, creado mediante Ordenanza N° 05 de 1958, con Personería Jurídica reconocida mediante Resolución N° 831 del 3 de diciembre de 1974, identificada con el NIT. 891.780.111-8 y conforme se dispone en la delegación de funciones de que trata la Resolución N° 884 del 26 de septiembre de 2013 proferida por el Despacho del Rector, por medio del presente escrito, manifiesto a usted, que confiero poder especial, amplio y suficiente en cuanto a derecho se refiere al Dr. **CARLOS BECERRA VARONA**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía N° 2.943.586 de Bogotá, portador de la T.P. N° 1.785 del Consejo Superior de la Judicatura, para que en nombre del ente universitario demandado lo represente dentro del trámite del proceso de la acción en referencia y lo lleve hasta su culminación, en primera y en segunda instancia.

Nuestro apoderado queda ampliamente facultado para todos los efectos establecidos en el artículo 70 del Código de Procedimiento Civil, y en general realizar todas las diligencias necesarias en procura de nuestros intereses y de los derechos que represento, sin perjuicio en las limitaciones de que trata el artículo en cita. Además, expresamente se faculta para conciliar previa decisión del Comité de Conciliación de la Universidad.


Para tal fin anexo la siguiente documentación: a) Copia autenticada del Acuerdo Superior N° 026 del 13 de noviembre de 2012 y del Acta de Posesión N° 233 del Rector Ruthber Escorcia Caballero. b) Copia autenticada de la Resolución Rectoral N° 884 de 2013. c) Copia autenticada del acta de posesión N° 082 de 2012 del Dr. Carlos Eduardo Gamboa García. d) Copia autenticada de la Resolución N° 148 del 01 de marzo de 2012 correspondiente al nombramiento del suscrito.

Sírvase reconocerle personería jurídica a nuestro apoderado en los términos concedidos.

Atentamente,


CARLOS EDUARDO GAMBOA GARCÍA
Jefe de la Oficina Asesora Jurídica

Acepto,


CARLOS BECERRA VARONA
C.C. N° 2.943.586 de Bogotá
T.P. N° 1.785 del C. S de la J.

NOTARÍA SEGUNDA DEL CÍRCULO DE SANTA MARTA
DILIGENCIA DE PRESENTACIÓN PERSONAL
El anterior escrito fue presentado personalmente por:
GAMBOA GARCÍA CARLOS EDUARDO
Identificado con: C.C. 12583688
Y Tarjeta Profesional No. 12583688
Santa Marta 04/02/2015
Hora: 05:54:01 p.m.
FABIAN LOPEZ PENALOZA
NOTARIO
RDMOF2LQ10SP8ZKU



La autenticación de la excelencia siempre lo primero
Esta autenticación puede ser
Sancionada mediante el Rector de
Edificio Administrativo Código QR en la página de
Santa Marta - Colombia Ext. 3136
juridica@unimagdalena.edu.co
www.unimagdalena.edu.co



El secretario General de la Universidad del Magdalena de fe de que esta copia corresponde exactamente al original que reposa en los archivos de la Institución

dad en
Santa Marta

29 OCT. 2014



El secretario General de la Universidad del Magdalena de fe de que esta copia

29 OCT. 2014

DESPACHO DEL RECTOR

RESOLUCIÓN No. 884



"Por la cual se delegan unas funciones"

El Rector de la Universidad en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias, en especial la señalada en numeral 22 del Artículo 34 del Estatuto General y,

CONSIDERANDO:

Que el Artículo 9 del Estatuto General, Acuerdo Superior N° 012 de 2011, establece la descentralización y gestión administrativa como principios orientadores de la Universidad en el cumplimiento de sus funciones.

Que el numeral 22 del Artículo 34 del Estatuto General concede la facultad al Rector para delegar las funciones de su competencia en los términos legales y estatutarios.

Que el Acuerdo Superior N° 017 de 2011 definió la estructura interna de la Universidad y determinó las competencias de las diferentes dependencias.

Que es necesario dotar de competencia legal a personal directivo y asesor para que tomen decisiones oportunas, pertinentes y eficientes en la gestión de los asuntos y competencias a cargo de la Universidad.

En mérito de lo anterior,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Comisión de Servicios en el país.- Delegar, en los siguientes funcionarios, las autorizaciones de las comisiones de servicio en el país:

Vicerrector Administrativo.- Servidores públicos de su dependencia y de aquellos que laboren en las dependencias adscritas a la Vicerrectoría Administrativa.

Vicerrectores Académico, de Investigación y, de Extensión y Proyección Social.- Servidores públicos de su dependencia, los que laboren en las dependencias adscritas a la respectiva vicerrectoría y la de aquellos que participen en proyectos y convenios de la Vicerrectoría correspondiente

Director IDEA.- Servidores públicos de su dependencia y de aquellos que laboren en las dependencias adscritas al IDEA.

ARTÍCULO SEGUNDO: Comisión de Servicios en el exterior.- Delegar las autorizaciones de las comisiones de servicio en el exterior, en los mismos términos del artículo anterior, en los siguientes casos:

- Cuando no den lugar al pago de viáticos y gastos de transporte.
- Cuando el pago de viáticos y gastos de transporte sea con cargo a recursos de un proyecto o convenio. Recursos propios de la Vicerrectoría, proyectos del Plan de Acción donde figure como líder.

ARTÍCULO TERCERO: Oportunidad de la solicitud.- Las comisiones de servicio al exterior deberán tramitarse con un mínimo de quince (15) días hábiles anteriores a la fecha del viaje y, las que se cumplan en el país con un tiempo no inferior a cinco (5) días hábiles anteriores a la fecha del viaje.

ARTÍCULO CUARTO: Delegación de funciones en el Vicerrector Académico.- Delegar en el Vicerrector Académico las siguientes funciones:

1. Celebrar contratos de contraprestación de servicios con los docentes que sean beneficiarios de comisión de estudios, suscribir los documentos relacionados con prórrogas, suspensiones y demás novedades relacionadas con la comisión, aprobar garantías y demás formalidades exigidas por las normas legales y los reglamentos de la Universidad.
2. Expedir actos administrativos requeridos para el desarrollo de exámenes de admisión, suficiencia en inglés y convocatorias de programas de desarrollo estudiantil y profesoral.
3. Suscribir procedimientos, guías, instructivos y demás documentos relacionados con los procedimientos del proceso académico, en el marco del Sistema de Gestión Integral de la Calidad 'COGUI'.
4. Suscribir pólizas de responsabilidad civil médica y riesgos biológicos.
5. Presentar y suscribir propuestas y ofertas de servicios en el país que, de acuerdo con sus funciones, sean de su competencia, así como las respectivas pólizas y demás documentos requeridos.
6. Suscribir los convenios de relación docencia - servicio.

ARTÍCULO QUINTO: Delegación de funciones en el Vicerrector de Investigación.- Delegar en el Vicerrector de Investigación las siguientes funciones:

1. Expedir los procedimientos, guías, instructivos y demás documentos relacionados con los procedimientos del proceso de investigación, en el marco del Sistema de Gestión Integral de la Calidad 'COGUI'.
2. Presentar y suscribir propuestas y ofertas de servicios en el país que, de acuerdo con sus funciones, sean de su competencia, así como las respectivas pólizas y demás documentos requeridos.

ARTÍCULO SEXTO: Delegación de funciones en el Vicerrector de Extensión y Proyección Social.- Delegar en el Vicerrector de Extensión y Proyección Social las siguientes funciones:

1. Suscribir procedimientos, guías, instructivos y demás documentos relacionados con los procedimientos del proceso de extensión y proyección social, en el marco del Sistema de Gestión Integral de la Calidad 'COGUI'.
2. Presentar y suscribir propuestas y ofertas de servicios en el país que, de acuerdo con sus funciones, sean de su competencia, así como las respectivas pólizas y demás documentos requeridos.
3. Suscribir convenios de prácticas profesionales.
4. Convenios de prácticas extendidas.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Delegación de funciones en el Vicerrector Administrativo.- Delegase en el Vicerrector Administrativo las siguientes funciones:

1. Expedir procedimientos, guías, instructivos y demás documentos relacionados con los procedimientos de los procesos administrativo y financiero, en el marco del Sistema de Gestión Integral de la Calidad 'COGUI'.
2. Tramitar y suscribir documentos para apertura de cuentas bancarias asociados a proyectos y convenios que así lo exijan.
3. Suscribir informes de ejecución presupuestal de ingresos y egresos para presentar a los organismos de control que así lo requiera.
4. Suscribir autorizaciones en el trámite de nacionalización de bienes importados por la Universidad.
5. Suscribir contratos de arrendamiento, previa autorización Rector.
6. Solicitar y tramitar la actualización y expedición del RUT y RUP.

ARTÍCULO OCTAVO: Delegación de funciones en el Director Administrativo.- Delegase en Director Administrativo las siguientes funciones:

1. Suscribir contratos de servicios públicos y privados previo aval del Rector. De igual manera aquellos requeridos para el desarrollo de proyectos y convenios, según solicitud y autorización del Vicerrector responsable del área correspondiente.
2. Suscribir pólizas de seguros para el amparo del patrimonio de la Universidad.

29 OCT. 2014

Se da fe en Santa Marta

ARTÍCULO NOVENO: Delegación de funciones en el Director Financiero.- Delegase en el Director Financiero las siguientes funciones:

1. Autorizar todos los pagos correspondientes al presupuesto de funcionamiento, inversión y servicio de la deuda de la Universidad así como aquellos relacionados con proyectos y convenios.
2. Efectuar trámites, suscribir declaraciones y certificaciones tributarias y de parafiscales de acuerdo con las obligaciones fiscales de la Institución.
3. Realizar la presentación y cobro de las devoluciones del impuesto del valor agregado - IVA- y demás obligaciones tributarias.
4. Efectuar los trámites correspondientes para la negociación del bono pensional, previo visto bueno del Rector.

ARTÍCULO DÉCIMO: Delegaciones en el Secretario General.- Delegase en el Secretario General la actualización de información que sobre la Universidad deba estar disponible, para quien esté interesado en consultarla, de conformidad con el Artículo 8 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Delegaciones en el Director de Talento Humano.- Delegase en el Director de Talento Humano las siguientes funciones:

1. Expedir los actos relacionados con situaciones administrativas, a excepción de las comisiones de estudio y de servicio, de los servidores públicos previa autorización del Rector o el Vicerrector responsable del área correspondiente. No requerirán autorización previa la expedición de los actos que provengan de situaciones administrativas relacionadas con el Sistema de Seguridad Social Integral.
2. Suscribir documentos exigidos por las autoridades del Sistema de Seguridad Social Integral para el cobro y recobro de deudas a favor de la Universidad.
3. Expedir actos administrativos derivados del reconocimiento de derechos de orden laboral.
4. La ordenación del gasto que implique el ejercicio de las funciones delegadas en los numerales anteriores.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Delegaciones en el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica.- Delegase en el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, bajo la dirección e instrucciones del Rector, la representación legal de la Universidad en los procesos y actuaciones administrativas y judiciales en los cuales la institución deba hacerse parte o intervenir en ellos; además la función de recibir notificación personal de las demandas y/o acciones que se presenten en contra de la entidad y la de otorgar poderes a los abogados que deban representarla en los procesos judiciales, en las acciones de tutela; cumplimiento, populares o de grupo y en los trámites de conciliación judicial o extrajudicial en los cuales aquella deba actuar o participar, en calidad de parte o tercero interviniente.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Unidad de interpretación y gestión normativa.- Los Jefes de las dependencias en el ejercicio de las funciones delegadas actuarán siempre teniendo en cuenta las interpretaciones, criterios y conceptos jurídicos emitidos por el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica y, le solicitarán su apoyo en la exegesis y aplicación de las normas, con el fin de garantizar la unidad de materia normativa en la gestión de los asuntos a su cargo.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Vigencia.- La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deroga las normas que le sean contrarias.

PUBLIQUESE Y CÚPLASE

Dada en Santa Marta, D. T. C. e H., a los 26 SET. 2013



RUTHBER ESCORCIA CABALLERO
Rector

El secretario General de la Universidad del Magdalena de fe de que esta copia corresponde exactamente al original que reposa en los archivos de la Institución

Dada en Santa Marta 29 OCT. 2014



El secretario General de la Universidad del Magdalena da fe de que esta copia corresponde exactamente al original que reposa en los archivos de la Institución

dado en Santa Marta

29 OCT. 2014



DESPACHO DEL RECTOR

RESOLUCIÓN No. 148

"Por la cual se hacen unas incorporaciones con nombramiento ordinario en la Universidad del Magdalena"

El Rector de la Universidad del Magdalena en ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias, en especial las conferidas en el numeral 9 del Artículo 34 del Acuerdo Superior No. 12 de 2011 y Artículo 5 del Acuerdo Superior No. 18 de 2011.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Incorporar con nombramiento ordinario en la Planta de Personal Global de la Universidad del Magdalena a las siguientes personas:

DENOMINACIÓN EMPLEO	CÓDIGO	GRADO	DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	NO. CÉDULA
TESORERO GENERAL	201	17	DIRECCIÓN FINANCIERA -GRUPO INTERNO DE TESORERÍA	BETTY PATRICIA PATIÑO URIELES	36.665.858
DIRECTOR ADMINISTRATIVO	009	19	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	BLADIMIR JOSÉ DE LA HOZ ROSALES	85.152.047
DIRECTOR TÉCNICO	009	16	DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	JULIO ALBERTO YECI BAQUERO	7.633.817
DECANO DE UNIVERSIDAD	008	19	FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y ECONÓMICAS	ALVARO LUIS MERCADO SUÁREZ	12.630.026
DECANO DE UNIVERSIDAD	008	19	FACULTAD DE HUMANIDADES	ALEJANDRA MARÚ MOLINARES	52.692.782
DECANO DE UNIVERSIDAD	008	19	FACULTAD DE INGENIERÍA	JUAN CARLOS DE LA ROSA SERRANO	85.460.625
DIRECTOR TÉCNICO	009	16	DIRECCIÓN DE ODONTOLOGÍA	LUIS FERNANDO BORDA GUZMÁN	79.152.768
DIRECTOR TÉCNICO	009	16	DIRECCIÓN DE ECONOMÍA	ALEXANDER ALFONSO MALDONADO ATENCIO	7.601.124
DIRECTOR TÉCNICO	009	16	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA EN GESTIÓN HOTELERA Y TURÍSTICA	OMAR HERNÁN GARCÍA SILVA	79.506.402
DIRECTOR TÉCNICO	009	16	DIRECCIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES BILINGÜE	CARLOS ALBERTO LABARCES BALLESTAS	7.140.177
DIRECTOR TÉCNICO	009	16	DIRECCIÓN DE DERECHO	ELVIA ESTHER SERRANO MÁRQUEZ	36.563.587
DIRECTOR TÉCNICO	009	16	DIRECCIÓN DE INGENIERÍA PÉSCUERA	SALVO ISABEL GAITÁN IBARRA	45.498.601
DIRECTOR TÉCNICO	009	16	DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE SISTEMAS	INÉS DEL CARMEN MERINO FUENTES	26.670.464
DIRECTOR TÉCNICO	009	16	DIRECCIÓN DE INGENIERÍA CIVIL	JORGE DANIEL ARAGÓN RUSSO	85.452.861
DIRECTOR TÉCNICO	009	16	DIRECCIÓN DE INGENIERÍA INDUSTRIAL	RAFAEL ENRIQUE LINERO MEJÍA	85.452.825



El secretario General de la Universidad del Magdalena de fe de que esta copia corresponde exactamente al original que reposa en los archivos de la Institución.

dado en
Santa Marta

29 OCT. 2014

UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA - RECTORIA - Resolución No. 148

DENOMINACIÓN EMPLEO	CÓDIGO	GRADO	DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	NO. CÉDULA
DIRECTOR TÉCNICO	009	16	DIRECCIÓN DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA	ÁLVARO LEÓN CASTILLO MIRANDA	70.031.350
DIRECTOR TÉCNICO	009	16	DIRECCIÓN DE BIOLOGÍA	CÉSAR TAMARIS TURIZO	7.632.967
DIRECTOR TÉCNICO	009	15	DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES	EDGAR JOSÉ SALAS BALLESTEROS	19.586.984
DIRECTOR TÉCNICO	009	15	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO	NORMA CONSTANZA VERA SALAZAR	36.723.464
JEFE DE OFICINA	006	15	OFICINA DE CONTROL INTERNO	WILFRIDO ENRIQUE GUTIÉRREZ OSPINO	12.562.564
DIRECTOR FINANCIERO	009	19	DIRECCIÓN FINANCIERA	RICARDO ALFONSO CAMPO REDONDO	17.805.803
JEFE DE OFICINA ASESORA DE JURÍDICA	115	16	OFICINA ASESORA JURÍDICA	CARLOS EDUARDO GAMBOA GARCÍA	12.563.688
JEFE DE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	115	13	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	MARÍA FERNANDA REYES SARMIENTO	37.752.645
SECRETARIO GENERAL DE UNIVERSIDAD	052	19	SECRETARÍA GENERAL	MERCEDES CECILIA DE LA TORRE HASBUN	57.400.977
VICERRECTOR DE UNIVERSIDAD	077	23	VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA	JAIMÉ ALFREDO NOGUERA SERRANO	85.455.983
JEFE DE DEPARTAMENTO DE UNIVERSIDAD	027	17	DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS GENERALES E IDIOMAS	WILSON VELÁSQUEZ BASTIDAS	12.560.219
JEFE DE OFICINA	006	15	OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	MARÍA NOHEMÍ DÍAZ CUELLO	56.084.849

ARTÍCULO SEGUNDO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, surte efectos fiscales a partir de la fecha de la posesión y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

COMUNIQUESE Y CÚPLASE

Dado en Santa Marta D. T. C. e. H, a los 01 MAR. 2012

RUTHBER ESCORCIA CABALLERO
Rector



ACTA DE POSESIÓN No. 082

En la Ciudad de Santa Marta D.T.C. e H, a los dos (02) días del mes de marzo de dos mil doce (2012), se presentó al Despacho del Rector de la Universidad del Magdalena, el (la) señor(a) **Carlos Eduardo Gamboa García**, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 12.563.688, con el fin de tomar posesión del empleo de **JEFE DE OFICINA ASESORA DE JURÍDICA**, código 115, grado 16, al cual fue incorporado con nombramiento ordinario por la Resolución No. 148 del 1 de marzo de 2012 de la Universidad del Magdalena, con una asignación básica mensual de SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE. (\$6.196.765,00), con efectos fiscales a partir del 2 de marzo de 2012.

La mencionada persona prestó el juramento ordenado por el artículo 122 de la Constitución Política y el Artículo 23 del Acuerdo Superior 013 de 2011. Manifestó bajo la gravedad de juramento no estar incurso en causal alguna de inhabilidad general o especial, de incompatibilidad o prohibición alguna establecida en la Ley 4 de 1992 y demás disposiciones vigentes para el desempeño de empleos públicos.

En virtud de lo dispuesto en la Resolución No. 148 del 1 de marzo de 2012, Carlos Eduardo Gamboa García se identificó con cédula de ciudadanía No. 12.563.688.


Carlos Eduardo Gamboa García
El Posesionado



El secretario de la Universidad del Magdalena de Santa Marta, esta copia corresponde exactamente al original que reposa en los archivos de la Institución

dado en
Santa Marta 29 OCT. 2014


Ruthber Escorcia Caballero
Rector



El secretario General de la Universidad del Magdalena da fe de que esta copia corresponde exactamente al original que reposa en los archivos de la Institución

dado en Santa Marta

29 OCT. 2014

CONSEJO SUPERIOR

ACUERDO SUPERIOR No. 026

"Por medio del cual se nombra al Rector de la Universidad del Magdalena para el período 2012-2016"

El Consejo Superior de la Universidad, en uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas en la Ley 30 de 1992 y en el Estatuto General, Acuerdo Superior No. 012 de 2011 y,

CONSIDERANDO:

Que la autonomía universitaria consagrada en la Constitución Política de Colombia, artículo 69, y de conformidad con la Ley 30 de 1992, artículos 28 y 57, reconoce a las universidades el derecho a darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y administrativas.

Que conforme lo dispone el Estatuto General en el numeral 6 del artículo 25, es función del Consejo Superior nombrar al Rector para un período de cuatro (4) años de terna seleccionada según reglamentación expedida para tal fin

Que mediante Acuerdo Superior No. 019 de 2012 se reglamentó la consulta de selección de terna para nombramiento del Rector y por Acuerdo Superior No. 020 de 2012 se convocó y fijó calendario de consulta para selección de terna para designación de Rector para el período 2012 - 2016, ajustado mediante Acuerdo Superior No. 025 de 2012.

Que de conformidad con lo establecido en el Acuerdo Superior No. 019 de 2012, se constituyó el Comité de Consulta, para el proceso de designación de Rector período 2012 - 2016.

Que en el proceso de consulta se postularon los siguientes aspirantes:

ASPIRANTE	CEDULA DE CIUDADANÍA
SONJA LILIANA LOZANO SOCARRAS	36.547.341
RUTHBER ANTONIO ESCORCIA CABALLERO	85.448.878
CARLOS ALBERTO GARCÍA RODRÍGUEZ	12.560.896

Que verificado el cumplimiento de requisitos de los aspirantes, el Comité de Consulta mediante Resolución No. 05 de 2012 determinó la lista oficial de candidatos, la cual quedó integrada de la siguiente manera:

CANDIDATO	CÉDULA DE CIUDADANÍA
SONJA LILIANA LOZANO SOCARRAS	36.547.341
RUTHBER ANTONIO ESCORCIA CABALLERO	85.448.878

Que mediante Resolución No. 013 de 2012 el Comité de Consulta determinó la lista de candidatos elegibles para ocupar el cargo de Rector conformada por quienes alcanzaron o superaron la votación mínima requerida del 10% del censo electoral de estudiantes y el 20% del de docentes, conforme lo señala el ARTÍCULO QUINTO del Acuerdo Superior No. 019 de 2012, así:

NOMBRE	CÉDULA DE CIUDADANÍA
RUTHBER ANTONIO CABALLERO ESCORCIA	85.448.878

Que de conformidad con el ARTÍCULO QUINTO del Acuerdo Superior No. 019 de 2012, "En caso de que menos de tres (3) candidatos igualen o superen los porcentajes establecidos en el presente artículo, el Consejo Superior escogerá al Rector entre estos", este órgano procede a estudiar la hoja de vida del candidato elegible a fin de designar Rector para el período 2012 - 2016.

En mérito de lo expuesto,

ACUERDA:

13 NOV. 2012

ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar a RUTHBER ANTONIO ESCORCIA CABALLERO identificado con cédula de ciudadanía No. 85.448.878 expedida en Santa Marta, como Rector de la Universidad del Magdalena para el período comprendido entre el 26 de noviembre de 2012 hasta el 25 noviembre de 2016.

ARTÍCULO SEGUNDO: El nombrado deberá tomar posesión del cargo ante el Consejo Superior de la Universidad de conformidad con el artículo 32 del Estatuto General, Acuerdo Superior No. 012 de 2011.

ARTÍCULO TERCERO: A través de la Secretaría General se comunicará lo aquí acordado al Rector designado, al Ministerio de Educación Nacional, a la Dirección de Talento Humano de la Universidad y a las demás autoridades que así lo requieran.

ARTÍCULO CUARTO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición:

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en Santa Marta D. T. C. e H., a las 13 NOV. 2012

LUIS MIGUEL COTES HABEYCH
Presidente del Consejo Superior

MERCEDES DE LA TORRE HASBUN
Secretaria General



El secretario General de la Universidad del Magdalena da fe de que esta copia corresponde exactamente al original que se encuentra en los archivos de la institución

dad: a
Se: a

29 OCT. 2014



El secretario General de la Universidad del Magdalena da fe de que esta copia corresponde exactamente al original que permanecerá en los archivos de la Institución

dato en Santa Marta

29 OCT. 2014

ACTA DE POSESIÓN No. 233

En la ciudad de Santa Marta D. T. C. e H., en sesión del Consejo Superior de la Universidad del Magdalena, se da posesión al Doctor **RUTHBER ANTONIO ESCORCIA CABALLERO**, identificado con la cédula de ciudadanía N° 85.448.878 expedida en la ciudad de Santa Marta, en el cargo de Rector de la Universidad del Magdalena, Nivel Directivo, Código 067, Grado 25; cargo para el cual fue nombrado a través del Acuerdo Superior N° 026 del 13 de noviembre de 2012.

Para los fines legales pertinentes, el posesionado presenta los siguientes documentos: a) Formato de Hoja de Vida de la Función Pública debidamente diligenciada, con sus respectivos soportes. b) Declaración Juramentada de Bienes y Rentas y Actividad Económica Privada. c) Fotocopia de la cédula de ciudadanía. d) Antecedentes Judiciales vigente, expedido por la Policía Nacional de Colombia. e) Certificado de Antecedentes Disciplinarios vigente expedido por la Procuraduría General de la Nación. f) Certificado de Antecedentes Fiscales vigente expedido por la Contraloría General de la República. g) Fotocopia de la Libreta Militar.

Para tal efecto se toma el juramento de rigor en los términos de ley, manifestando quien se posesiona bajo la gravedad de juramento desempeñar y cumplir bien y fielmente las funciones del cargo encomendado, además, de no estar incurso en causal alguna de inhabilidad general o especial, de incompatibilidad o prohibición establecida en la Constitución y en los Decretos 2400 de 1968, 1950 de 1973, Ley 4ª de 1992, Ley 734 de 2002 y demás disposiciones vigentes para el desempeño de empleo público.

Se firma la presente diligencia, por quienes en ella intervienen en la ciudad de Santa Marta, D. T. C. e H., a los veintiséis (26) días del mes de noviembre de dos mil doce (2012)

LUIS MIGUEL GÓTES HABEYCH
Presidente del Consejo Superior

MERCEDES DE LA TORRE HASBUN
Secretaría General

RUTHBER A. ESCORCIA CABALLERO
Posesionado

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA
SECRETARÍA GENERAL
Ley 1437 de 2011

RADICACIÓN: N° 47-001-2333-003-2014-00241-00.
DEMANDANTE: Obresan
DEMANDADO: Nación- Min Justicia y otros.
MEDIO DE CONTROL: Reparación Directa

P A S O A L D E S P A C H O

Del Magistrado Edgar Vásquez Contreras, hoy 14 de abril de 2015, el presente memorial, informándole que el Ministerio de Justicia y del Derecho contestó la demanda.

Anexo 16 folios.

Sírvase proveer lo que estime pertinente

Atentamente,


MARLIN JARABA VILARDY
Escribiente



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA
SECRETARIA GENERAL-SISTEMA DE ORALIDAD LEY 1437 DE 2011

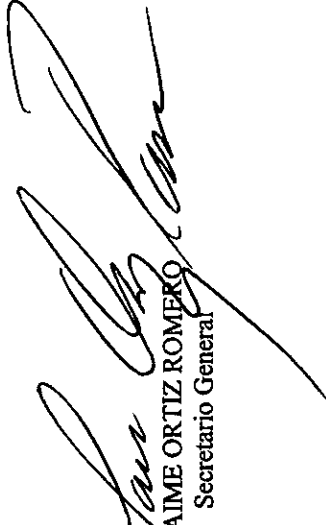
INCLUSION EN LISTA TRASLADO EXCEPCIONES ART. 175 C.P.A.CA.

<i>RAD.</i>	<i>Medio de Control</i>	<i>Demandante</i>	<i>Demandado</i>	<i>Fecha Public.</i>	<i>Vence</i>	<i>MP</i>
2014-0081	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO	ERMES ENRIQUE FUENTES PIÑA	DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA- SECRETARIA DE EDUCACION- DEPAERTAMENTAL	24/6/2015	30/6/2015	MQT
2014-316	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO	MARBEL SUBA ACEVEDO	UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCALES	24/6/2015	30/6/2015	EVC
2014-241	REPARACION DIRECTA	UNION TEMPORAL OBRAS ESPECIALES SANTA MARTA	MINDEFENSA Y OTROS	24/6/2015	30/6/2015	EVC
2014-342	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	EUDES ALFONSO RONDON PEREZ	NACIÓN-MINDEFENSA-POLICIA NACIONAL	24/6/2015	30/6/2015	EVC
2014-228	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	BERTHA BEATRIZ VEGA DE ORTIZ	NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACION-FONDO DE PRESTACIONES DEL MAGISTERIO- SECRETARIA DE EDUCACION	24/6/2015	30/6/2015	EVC

CONSTANCIA: Hoy, veinticuatro (24) de junio de dos mil quince (2015) a las ocho de la mañana (8:00.a.m.), se publica la presente lista en lugar visible de la secretaria de la

1078

Corporación, por el término legal de un día (1), tal como lo disponen los artículos 101 y 110 del C.G.P. El traslado de las excepciones correrá por el término de tres (3) días en concordancia con lo dispuesto en el artículo 175, del C. P.A.CA.


JAIME ORTIZ ROMERO
Secretario General

contexto ninguna o muy poca importancia tiene incluir hechos que figuraron en la parte histórica de la demanda contractual UT OBRESAN y otros contra la UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA.

7o. a 57o. Estos 51 puntos están enderezados a memorar y comprobar documentalmente todas las etapas procesales del arbitraje convocado por UT OBRESAN y sus integrantes desde la instalación del Tribunal de Arbitramento hasta la protocolización del expediente contentivo de la totalidad del trámite en una de las notarías de la ciudad.

Pese a que todos los puntos o hechos son ciertos no vemos la utilidad práctica de esa relación cronológica de la memoria arbitral que a lo único que conduce es a hacer farragoso el libelo de demanda, como en efecto lo hizo.

58o a 61o En estos cuatro hechos, que son ciertos, la demanda se ocupa de relatar lo concerniente a los recursos que tanto los convocantes como la convocada interpusieron contra el laudo arbitral; se transcriben apartes de los considerandos de la providencia del Consejo de Estado que decretó la nulidad del laudo y se hizo lo propio con la parte resolutive de la misma y finalmente se reseña la notificación edictal del proveído de la Sección Segunda del Consejo de Estado afirmándose que ésta cobró ejecutoria el día 7 de mayo de 2012.

62o a 63o Estos dos hechos no les consta a la Universidad del Magdalena, la cual no tuvo injerencia en lo que señalan los mismos. La Universidad ni siquiera se enteró de la ocurrencia de estos hechos.

64o Lo afirmado en este punto es cierto, sin embargo debe anotarse que la UT OBRESAN y sus integrantes no cumplieron a cabalidad la normativa que regula la conciliación extrajudicial, pues ésta prescribe que a la solicitud que se haga ante la Procuraduría Judicial para Asuntos Administrativos se deben acompañar las copias de la mencionada solicitud entregadas a las convocadas (Cámara de Comercio y Universidad del Magdalena) lo cual no pudo ocurrir ya que a esta entidades la solicitud les fue entregada el día 8 de mayo de 2014. No obstante, que las citadas entidades pusieron de

presente ante la mencionada procuraduría judicial esta anomalía, tal como consta en el acta levantada el día 8 de julio de 2014, la funcionaria que presidía la audiencia no tuvo en cuenta estas manifestaciones que juicio de las convocadas Cámara de Comercio y Universidad del Magdalena debieron incidir, al amparo del debido proceso, en el rechazo de la solicitud de conciliación efectuada por la convocante.

65o a 69o Son ciertos.

DECLARACIONES Y CONDENAS

Bajo este título la demanda se encarga de cuantificar los daños materiales (lucro cesante y daño emergente), morales, etc. que en sentir de los actores sufrieron como consecuencia del decaimiento del laudo arbitral.

Se cuantifican unos y otros y se pide que todas las entidades demandadas sean condenadas al pago de los mismos dentro de los términos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Algunos de los rubros por los que se solicita condena coinciden con las condenas que había impuesto el laudo arbitral y otros conceptos, como ocurre con los daños inmateriales, se pide que cada uno de los demandantes sea indemnizado con un monto de dinero equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Como la demanda se dirige a la reparación de los daños presuntamente sufridos por los actores en virtud de la nulidad decretada por el H. Consejo de Estado, consideramos que tales perjuicios se encontrarían justificados pues de no haber mediado la nulidad tales sumas hubieran sido percibidas por los convocantes del Tribunal de Arbitramento.

Respecto de los otros daños, vale decir, aquellos que no están demostrados, deben ser probados por los demandantes.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

La Universidad del Magdalena no entiende la razón que tuvo la UT OBRESAN y sus integrantes para convocarla pasivamente a este proceso, ya que ninguna de las normas señaladas como fundamento de la acción fue vulnerada por el mencionado Ente Autónomo.

Llama la atención que la demanda no haya concretado específicamente las normas violadas por las entidades demandadas y se limite a hacer una enumeración de normas aplicables al proceso y al fundamento de la sentencia.

CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN

La Universidad del Magdalena no abriga ningún temor de ser condenada al pago de perjuicio alguno por la potísima razón de que no originó el perjuicio ni dio lugar a la ocurrencia del mismo. No debe olvidarse que la Universidad fue convocada al Tribunal de Arbitramento y fue al lado de los convocantes la otra parte procesal, de suerte que no se ve de que manera pueda tener comprometida su responsabilidad patrimonial.

Si el H. Tribunal Administrativo revisa la prolija documentación agregada al libelo de demanda podrá observar que el suscrito, actuando como apoderado de la Universidad del Magdalena, llamó la atención de los miembros del tribunal de arbitramento acerca del vencimiento del término para fallar, el cual se encontraba vencido, sin embargo de lo cual el tribunal profirió el laudo.

De otro lado, la Universidad del Magdalena en la escogencia de los árbitros se sometió a una lista de árbitros inscritos ante el Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición de la Cámara de Comercio, lo que de suyo está indicando que pese a la aparente libertad que se tenía para integrar el tribunal no se contaba con la facultad de escogerlos por fuera de esa lista. Todo lo anterior suprime la posibilidad de un error *in eligendo*, pues ambas partes trataron de escoger a aquellas personas que garantizaran transparencia e imparcialidad.

Los razonamientos expuestos en el libelo bajo el título concepto de la violación en ninguna parte señala a la Universidad del Magdalena como incurso en temeridad o violación de normas bajo cuya éjida cursó el trámite del proceso arbitral, por lo que, se repite, no se vislumbra una razón seria y atendible para que la Universidad

del Magdalena haya sido involucrada en esta acción de reparación con que la UT OBRESAN y sus integrantes pretenden obtener el resarcimiento de los perjuicios presuntamente sufridos por ellos.

Si el H. Tribunal se detiene en la lectura del título concepto de la violación arribará a la conclusión de que los cargos están dirigidos contra quienes tuvieron transitoriamente la investidura de jueces y no contra ninguna entidad de derecho público de las convocadas al proceso. En efecto, la demanda hace énfasis en el ejercicio temporal de funciones jurisdiccionales transitorio, las cuales nunca estuvieron a cargo de la Universidad del Magdalena que, se repite, ocupó el lugar de parte convocada del tribunal de arbitramento.

Consideramos que de esta manera hemos hecho un pronunciamiento, así sea breve, del concepto de la violación.

EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN

A juicio de la Universidad del Magdalena la caducidad e la acción, que en procesos de reparación directa es de dos años, se encuentra cumplida en el presente caso.

La UT OBRESAN y sus integrantes tuvieron desde el día 8 de mayo de 2012 hasta el 6 del mismo mes de 2014 casi 2 años para intentar promover la demanda y por cualquier razón no lo hicieron. El día 6 de mayo de 2014 presentaron ante la Procuraduría Judicial para Asuntos Administrativos de Santa Marta una petición incompleta de conciliación a la que debían ser convocadas la Cámara de Comercio, la Universidad del Magdalena y el Ministerio del Interior, dejando por fuera a los árbitros que integraron el tribunal de arbitramento y al Ministerio de Justicia y del Derecho, a los cuales convocaron más tarde.

Decimos que la solicitud de conciliación fue incompleta porque a ella, conforme lo dispone expresamente la Ley han debido acompañarse las copias de la solicitud efectuada a la Cámara de Comercio y a la Universidad del Magdalena, las cuales para esa fecha, 6 de mayo no se habían presentado ya que a la Universidad y creemos que lo mismo ocurrió con la Cámara de Comercio la solicitud fue entregada el día 8 de mayo de la citada anualidad. ¿Qué ha debido ocurrir ? no otra cosa que la devolución por parte de la procuraduría, pues a esa

altura ya no era dable subsanar la ausencia de tales documentos por la caducidad que ya se encontraba consumada.

El propio apoderado de los demandantes tiene conciencia de la ocurrencia de la caducidad pues plantea la posibilidad de que exista duda sobre el fenómeno, lo cual para la Universidad no existe hesitación.

Los actores pretenden crear dudas acerca de la fecha en que se produciría la caducidad de la acción, cuando sobre esto existe claridad, pues si la providencia que declaró la nulidad del laudo cobró ejecutoria el día 7 de mayo de 2012, el término de 2 años de la caducidad debe contarse entre el 8 de mayo de 2014 y el 8 de mayo de 2014.

Lo que la Universidad del Magdalena señala como hecho generador de la caducidad es la falsedad en que incurrió el apoderado de UT OBRESAN y sus integrantes al afirmar el día 6 de mayo de 2014 ante la Procuraduría 155 Judicial II para Asuntos Administrativos de Santa Marta que había entregado, en cumplimiento del deber legal de hacerlo, a las convocadas Cámara de Comercio y Universidad del Magdalena sendas copias de la solicitud de conciliación extrajudicial, cuando respecto de esta última tal entrega tuvo ocurrencia el día 8 de mayo de la mencionada anualidad

Dentro del término para alegar de conclusión volveremos a ocuparnos de este tema, para introducir mayó claridad.

RELACIÓN DE LOS MEDIO DE PRUEBA

Solicito al H. Tribunal decretar y tener como pruebas las siguientes:

1. Que se solicite a la Procuraduría 155 Judicial II para Asuntos Administrativos de Santa Marta copia completa de la solicitud de conciliación extrajudicial elevada por la UT OBRESAN y sus integrantes y la actuación que se surtió en desarrollo de la misma, la cual concluyó el día 31 de julio de 2014.
2. Que se tenga como prueba la copia de la solicitud de conciliación extrajudicial que la UT OBRESAN y sus integrantes entregaron a la Universidad del Magdalena.

La Universidad del Magdalena no tiene otra prueba que aducir y solicita al H. Tribunal examinar las que se han aducido con el escrito de demanda, las cuales poco o muy poco aportan a la finalidad que persigue la demanda

829709

ANEXOS

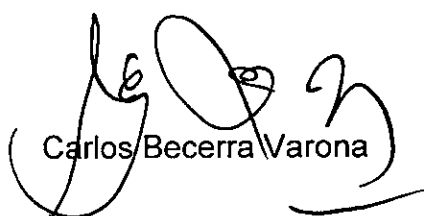
El escrito de poder se encuentra agregado al expediente al haber sido presentado por el suscrito con el memorial de 28 de mayo de 2015.

Documento anunciado en la relación de medios de prueba.

En los anteriores términos se deja contestada la demanda con que se inició el proceso referenciado, no sin antes solicitar al H. Tribunal denegar las pretensiones con respecto a la Universidad del Magdalena y condenar en costas a los accionantes.

NOTIFICACIONES

Me permito indicarle que recibo notificaciones en la secretaria de su despacho, y/o en la Carrera 4a. con Calle 24, esquina, N° 4 -24, Oficina 706, Torre Empresarial de esta ciudad, Teléfono 3157512438, Mail: carlosbecerravarona@outlook.es.
Honorable Magistrados,



Carlos Becerra Varona

Santa Marta, 22 de junio de 2015.

OAJ
08 MAYO 2014

UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA

Cra. 32 N° 22-08 de la Ciudad de Santa Marta

E. S. D.



UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA
GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL

08 MAY 2014

COMUNICACIÓN EXTERNA RECIBIDA


No. RAD # 10812 Hora: 10:01 am

Referencia Traslado de la Solicitud de Conciliación Extrajudicial
Convocantes UT OBRESAN
Convocados Nación – Ministerio del Interior y de Justicia – Cámara de Comercio de Santa – Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición – Universidad del Magdalena.

Luis Alejandro Corzo Mantilla, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con la Cédula de Ciudadanía N° 88.213.988 de Cúcuta, de profesión abogado y portador de la tarjeta profesional N° 101.576 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en calidad de Apoderado de los Convocantes, me permito de manera respetuosa allegar a su Despacho la respectiva Solicitud de Conciliación Extrajudicial como requisito previo para accionar en Reparación Directa.

Agradezco su vocación de servicio en la administración de justicia.

Atentamente.


LUIS ALEJANDRO CORZO MANTILLA
CC 88.213.988 De Cúcuta
T.P 101.576 C. S. De la J.

Anexo. Lo enunciado

622 folios

820 711



PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

1. Ciudad presentación solicitud Santa Marta.	2. Fecha (formato dd/mm/aaaa)	3. Hora
--	-------------------------------	---------

4. No. Documento de identificación 9000659925	5. Nombre del convocante UNION TEMPORAL OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA - OBRESAU
--	---

6. Clase de acción a precaver Reparación Directa	7. Despacho Judicial Competente Tribunal <input checked="" type="checkbox"/> Juzgado <input type="checkbox"/>
8. Fecha caducidad de la acción (formato dd/mm/aaaa) 8 / 5 / 2014	Lugar de los hechos
9. Fecha de los hechos (formato dd/mm/aaaa) 08 / 5 / 2012	9. Departamento de los hechos Magdalena
	10. Municipio de los hechos Santa Marta
	12. Cuantía estimada de la pretensión 593' 559.286,72
	13. No. Folios

14. No. Documento de identificación	15. Nombre del convocado Camara de Comercio Santa Marta
16. Dirección Av del libertador No 13-94	17. Teléfono 4230828
18. Correo electrónico	19. Fax

20. No. Documento de identificación 88213988	21. Nombre apoderado Luis Alejandro Corra M
22. Dirección domicilio C/ 5 No 9-58 Of 305 cuenta	23. Teléfono de contacto 316 466 88 94

Con fundamento en el inciso j) del artículo 5 del Decreto 1716 de 2009, AUTORIZO a la Procuraduría competente para efectuar las NOTIFICACIONES que se produzcan en el trámite de la conciliación prejudicial en la siguiente dirección electrónica y fax:

24. Correo electrónico apoderado del convocante alejocorraman@gmail.com	25. Fax apoderado del convocante
--	----------------------------------

Rui G. Luy
Firma del apoderado del convocante

DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE LA FIRMA ANTERIOR MANTENIDA ES CIERTA
Y EN NADA SUERTE LOS REQUISITOS DEBIDOS DE FORMA DEACORDO CON EL DECRETO 1716 DE 2009

Señores

PROCURADURIA JUDICIAL PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS (Reparto)

E. S. D.

LUIS ALEJANDRO CORZO MANTILLA mayor de edad, con domicilio en esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía N° 88.213.988 expedida en Cúcuta, abogado en ejercicio, portador de la Tarjeta Profesional N° 101.576 del C. S. De la J., obrando en calidad de Apoderado del Sr. **JUAN PABLO GONZALEZ ROSALES**, mayor de edad, identificado con la CC N° 8.708.745 expedida en Barranquilla, quien obra en calidad de Gerente y Representante Legal de **J.P.G. & CIA S.A.**, Sociedad Colombiana, constituida mediante Escritura Pública N° 50 del 28 de Enero de 1993 de la Notaría Única de Santo Tomás, inscrita el 25 de febrero de 1993 bajo el N° 46.547 del libro respectivo de la Cámara de Comercio de Barranquilla; del Sr. **GERMAN VILLANUEVA CALDERON**, igualmente mayor de edad e identificado con la Cédula de Ciudadanía N° 12.547.660 expedida en Santa Marta y del Sr. **RICARDO LUIS CANABAL GUZMAN**, igualmente mayor de edad e identificado con la Cédula de Ciudadanía N° 6.872.383 expedida en Montería; integrantes todos de la **UNION TEMPORAL OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA - OBRESAN**, constituida mediante documento privado del 15 de Noviembre de 2005, con el propósito de agotar el procedimiento previsto en los artículos 70, 80 y 81 de la Ley 446 de 1998, modificatoria de los artículos 59, 60 y 61 de la ley 23 de 1991, igualmente en la ley 640 de 2001, artículos 23, 24, 25 y 26 y la Ley 1285 de 2009, modificatoria de la ley 270 de 1996, comedidamente solicito citar ante su despacho a través de sus respectivos Representantes Legales a la **NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA - CAMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA - CENTRO DE ARBITRAJE, CONCILIACIÓN Y AMIGABLE COMPOSICIÓN - UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA**, para que previa audiencia de conciliación se dirima prejudicialmente el reconocimiento y pago de los perjuicios causados a mis mandantes con ocasión de la Falla en el ejercicio de la Función Jurisdiccional por Particulares, acaecida en la expedición del Laudo Arbitral de fecha 22 de agosto de 2011 por el Tribunal de Arbitramento de **J.P.G. & CIA S.A.**, **GERMAN VILLANUEVA CALDERON** y **RICARDO LUIS CANABAL GUZMAN**, INTEGRANTES DE LA **UNION TEMPORAL OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA -OBRESAN-**, CON **UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA**, del cual fuere declarada la Nulidad mediante providencia por el Consejo de Estado, por haberse proferido el laudo después del vencimiento del término fijado para la duración del Arbitramento.

DECLARACIONES Y CONDENAS

Que la **NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA - CAMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA -CENTRO DE ARBITRAJE, CONCILIACIÓN Y AMIGABLE COMPOSICIÓN - UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA**, Son administrativa y patrimonialmente responsables de los graves perjuicios causados a los Demandantes (**JUAN PABLO GONZALEZ ROSALES**, quien obra en calidad de Gerente y Representante Legal de **J.P.G. & CIA S.A.**, **GERMAN VILLANUEVA CALDERON**, **RICARDO LUIS CANABAL GUZMAN**. integrantes todos de la **UNION TEMPORAL OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA - OBRESAN**) con ocasión de la Falla en el ejercicio de la Función Jurisdiccional por Particulares, acaecida en la expedición del Laudo Arbitral de fecha 22 de agosto de 2011 por el Tribunal de Arbitramento de **J.P.G. & CIA S.A.**, **GERMAN**
Av. 5 N° 9-58 Edificio Mutuo Auxilio, Oficina 305, Teléfono 5718267
Celular 314668894. Email: plcicocorman@gmail.com
Cúcuta - Colombia

VILLANUEVA CALDERON y RICARDO LUIS CANABAL GUZMAN, INTEGRANTES DE LA UNION TEMPORAL OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA -OBRESAN-, CON UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA, del cual fuere declarada la Nulidad mediante providencia por el Consejo de Estado, por haberse proferido el laudo después del vencimiento del término fijado para la duración del Arbitramento.

Como consecuencia de la anterior declaración, condénese a la NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA - CAMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA -CENTRO DE ARBITRAJE, CONCILIACIÓN Y AMIGABLE COMPOSICIÓN - UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA, a pagar:

DAÑOS INMATERIALES

Al Señor JUAN PABLO GONZALEZ ROSALES, quien obra en calidad de Gerente y Representante Legal de J.P.G. & CIA S.A., GERMAN VILLANUEVA CALDERON, RICARDO LUIS CANABAL GUZMAN, integrantes todos de la UNION TEMPORAL OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA - OBRESAN, el valor de los PERJUICIOS MORALES que sufrieron y sufren con ocasión de la Falla en el ejercicio de la Función Jurisdiccional por Particulares, acaecida en la expedición del Laudo Arbitral de fecha 22 de agosto de 2011 por el Tribunal de Arbitramento de J.P.G. & CIA S.A., GERMAN VILLANUEVA CALDERON y RICARDO LUIS CANABAL GUZMAN, INTEGRANTES DE LA UNION TEMPORAL OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA - OBRESAN-, CON UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA, del cual fuere declarada la Nulidad mediante providencia por el Consejo de Estado, por haberse proferido el laudo después del vencimiento del término fijado para la duración del Arbitramento, equivalente a **100 SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTE**, para cada uno de ellos al valor que certifique el Ministerio de Salud y de la Protección Social a la fecha de ejecutoria del Acta de Conciliación.

EL VALOR DE ESTE RUBRO ES DE CIENTO (100)
SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES

DAÑOS MATERIALES

DAÑO EMERGENTE

Al Señor JUAN PABLO GONZALEZ ROSALES, quien obra en calidad de Gerente y Representante Legal de J.P.G. & CIA S.A., GERMAN VILLANUEVA CALDERON, RICARDO LUIS CANABAL GUZMAN, integrantes todos de la UNION TEMPORAL OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA - OBRESAN, el valor del DAÑO EMERGENTE que sufrieron y sufren con ocasión de la Falla en el ejercicio de la Función Jurisdiccional por Particulares, acaecida en la expedición del Laudo Arbitral de fecha 22 de agosto de 2011 por el Tribunal de Arbitramento de J.P.G. & CIA S.A., GERMAN VILLANUEVA CALDERON y RICARDO LUIS CANABAL GUZMAN, INTEGRANTES DE LA UNION TEMPORAL OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA - OBRESAN-, CON UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA, del cual fuere declarada la Nulidad mediante providencia por el Consejo de Estado, por haberse proferido el laudo después del vencimiento del término fijado para la duración del Arbitramento, equivalente a las siguientes sumas:

DESCRIPCION	VALOR
PAGO DE HONORARIOS ABOGADO	\$120.000.000,00
PAGO DE SOLICITUD ARBITRAL	\$ 1.194.800,00
PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL (50%)	\$ 30.957.240,00
PAGO DE HONORARIOS DE ARBITROS (50%)	\$ 12.402.204,00
PAGO DE HONORARIOS DE LOS 2 PERITOS	\$ 4.463.332,00
PROTOCOLIZACION DEL LAUDO ARBITRAL -- NOTARIA CUARTA DEL CIRCULO DE SANTA MARTA	\$ 6.852.389,00
TOTAL	\$ 175.870.001,00

EL VALOR DE ESTE RUBRO CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL PESOS CON UN PESO

Al Señor JUAN PABLO GONZALEZ ROSALES, quien obra en calidad de Gerente y Representante Legal de J.P.G. & CIA S.A., GERMAN VILLANUEVA CALDERON, RICARDO LUIS CANABAL GUZMAN, integrantes todos de la UNION TEMPORAL OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA - OBRESAN, el valor del LUCRO CESANTE que sufrieron y sufren con ocasión de la Falla en el ejercicio de la Función Jurisdiccional por Particulares, acaecida en la expedición del Laudo Arbitral de fecha 22 de agosto de 2011 por el Tribunal de Arbitramento de J.P.G. & CIA S.A., GERMAN VILLANUEVA CALDERON y RICARDO LUIS CANABAL GUZMAN, INTEGRANTES DE LA UNION TEMPORAL OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA - OBRESAN-, CON UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA, del cual fuere declarada la Nulidad mediante providencia por el Consejo de Estado, por haberse proferido el laudo después del vencimiento del término fijado para la duración del Arbitramento, equivalente a las siguientes sumas:

DESCRIPCION	VALOR
Obras pendientes por legalizar, al pago indexado de la suma de SESENTA y SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS (\$67.192.800,00), de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este laudo.	\$67.192.800,00
DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS (\$17.565.510,72), por haber incurrido en mora en el pago de la totalidad del valor del contrato.	\$17.565.510,72
DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVENTA Y CINCO PESOS (\$244.419.095,00), por concepto de mayor permanencia en obra, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este laudo.	\$244.419.095,00
pagadas a la sociedad J.P.G. & CIA S.A., GERMAN VILLANUEVA	

CALDERON y RICARDO LUIS CANABAL GUZMAN, integrantes de la UNION TEMPORAL OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA - OBRESAN-; y causarán intereses comerciales moratorios a partir del día siguiente de la fecha de ejecutoria del laudo DESDE AGOSTO 22 DE 2011(PENDIENTE POR LIQUIDAR EN LA CONCILIACION)	
SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS (\$62.511.880,00), por concepto de costas del proceso.	\$62.511.880,00
VEINTISEIS MILLONES DE PESOS (\$26.000.000,00), por concepto de Agencias en Derecho, a favor de la parte Convocante.	\$26.000.000,00
TOTAL	\$417.689.285.72

EL VALOR DE ESTE RUBRO ES CUATROCIENTOS DÉCISIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS, CON SETENTA Y DOS CENTAVOS

TERCERA. En la regulación de los perjuicios materiales se distinguirán dos periodos de indemnización: la debida hasta la fecha probable de la Decisión y futura. Además se actualizará su valor tomando en consideración el índice de precios al consumidor (IPC), según certifique el Departamento Nacional de Estadística, DANE, para compensar la pérdida del valor adquisitivo de la moneda, conforme al artículo 192 y ss del C.P.A.C.A.

CUARTA. Los intereses moratorios sobre las cantidades que resulten a favor de la citada, desde la fecha en que deba hacerse el pago hasta aquella en que efectivamente se realice (Sentencia C-188/99) de la Corte Constitucional. En lo demás deberá darse cumplimiento a lo que señala el artículo 192 del C.P.A.C.A

QUINTA. Para determinar el valor de los perjuicios morales subjetivos deberá tenerse en cuenta la reiterada jurisprudencia del Honorable Consejo de Estado, relativa a la regulación de dichos perjuicios.

SEXTA. En caso que dentro del proceso no quedare establecido el valor de los perjuicios, se ordenará el trámite incidental autorizado en los artículos 193 del C.P.A.C.A.

SEPTIMA. Que la CAMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA - UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA, debe dar cumplimiento a la Sentencia que se dicte a instancias de la presente demanda dentro del término señalado en el artículo 192 del C.P.A.C.A.

Fundamento las anteriores peticiones en los siguientes:

HECHOS U OMISIONES

1. La UNION TEMPORAL OBRESAN - OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA, fue constituida a través de documento privado del 15 de Noviembre de 2005, la cual se encuentra integrada por la Persona Jurídica denominada J.P.G. & CIA S.A. Representada

Av. 5 N° 9-58 Edificio Mutuo Auxilio, Oficina 305, Teléfono 5718267
Celular 3164668894, Email: alejocorman@gmail.com
Cúcuta - Colombia

Legalmente por el Sr. JUAN PABLO GONZALEZ ROSALES y por las personas naturales Sres. GERMAN VILLANUEVA CALDERON, y RICARDO LUIS CANABAL GUZMAN.

2. La UNION TEMPORAL OBRESAN - OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA, y la UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA, celebraron el "Contrato de Obras No. 146 de fecha 30 de diciembre de 2005, cuyo objeto según lo dispuesto en la Cláusula Tercera del mismo, consistía en: La Construcción del Edificio B de Salones en los términos condiciones plazos y estipulaciones que se prescriben en el presente documento, así como en los términos de referencia) y la propuesta presentada por el contratista el 18 de Noviembre de 2005 y los documentos anexos de acuerdo con las especificaciones técnicas y los valores unitarios expresados en la propuesta presentada, la cual para todos los efectos legales forman parte integral del presente contrato"
3. El 30 de diciembre de 2005, se suscribió el contrato de obras No. 0146, por valor de \$2.622.392.730,00, y cuyo término de duración sería de doscientos cuarenta (240) días calendarios a partir de la entrega del anticipo y de la suscripción del acta de inicio de obra, la cual se suscribió el 6 de marzo de 2006, la obra fue recibida el 30 de Septiembre de 2007 y el Contrato fue liquidado el 30 de enero de 2008.
4. El término del contrato fue adicionado en ciento ochenta y ocho (188) días, así: Mediante Contrato Adicional N° 1 en veintiún (21) días, contrato adicional N° 2 en setenta (70) días, contrato adicional N° 3 en treinta y cinco (35) días, contrato adicional N° 4 en cuarenta y cinco (45) días y contrato adicional N° 5 en diecisiete (17) días. Adicional a estos adicionales, transcurrió desde el cumplimiento del plazo del contrato adicional N° 5 hasta la entrega de la obra, ciento cuarenta y seis (146) días.
5. Debido a los incumplimientos de la Universidad del Magdalena en la entrega de los diseños de algunos aspectos de la obra, como los de las rampas y puentes y la estructura metálica de la cubierta del edificio, fue necesario suspender algunos frentes de obra, lo cual tuvo incidencia en la ejecución del contrato de acuerdo al cronograma aprobado, afectando el plazo contractual. De igual manera mencionan, que la Universidad demoró en las instalaciones de los aires acondicionados, los cuales se habían contratado a otro contratista, hecho que afectó la normal ejecución de los demás trabajos a cargo de los convocantes.
6. Posteriormente la Universidad del Magdalena expidió la Resolución N° 0269 del 27 de abril de 2007 por medio del cual se le impuso unas multas a la Unión Temporal OBRESAN", posteriormente expidió la Resolución N° 0291 del 15 de Mayo de 2007 por medio del cual se declaró la caducidad del contrato y el siniestro de incumplimiento, y finalmente a través de las Resoluciones 621, 622 Y 623 del 17 de Diciembre de 2007, se revocaron los anteriores actos administrativos.
7. Con ocasión de los anteriores hechos, a los 01 días de febrero de 2010, a través de apoderado judicial, la UNION TEMPORAL OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA - OBRESAN, integrada por J.P.G. & CIA S.A. Representada Legalmente por el Sr. JUAN PABLO GONZALEZ ROSALES y por las personas naturales Sres. GERMAN
Av. 5 N° 9-58 Edificio Mutuo Auxilio, Oficina 305, Teléfono 5718267
Celular 3164668894, Email: alejocorman@gmail.com
Cúcuta - Colombia

- VILLANUEVA CALDERON, y RICARDO LUIS CANABAL GUZMAN**, presentaron solicitud de Convocatoria de Tribunal de Arbitramento, ante el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Santa Marta en contra de la **UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA**, por medio del cual solicitaban que: A) Se declarara que entre las partes en mención, se celebró el Contrato N° 0146 del 30 de diciembre de 2005; B) Durante la ejecución del contrato se produjo Desequilibrio económico del mismo, en detrimento de la Unión Temporal OBRESAN; C) Que con el propósito de restablecer el equilibrio económico al Contratista (Unión Temporal OBRESAN), se condene a la **UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA**, a pagar determinadas sumas de dinero, conforme obra en la respectiva solicitud (Ver Anexo).
8. El 8 de Febrero de 2010, la Doctora Bibiana Ovalle Directora del Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Santa Marta, *devolvió* la solicitud de convocatoria al convocante en razón de que" 1. El poder otorgado al doctor Jairo Barros Acosta, no está suscrito por el señor Germán Villanueva Calderón. 2. El doctor Jairo Alberto Barros, no es apoderado de la Unión Temporal OBRESAN- Obras Especiales de Santa Marta, sino de los miembros de la Unión y en consecuencia, el doctor Gabriel Francisco González Barráza, tampoco lo es, aclarar. 3. No aportó el documento en donde consta la conformación de la **UNIÓN TEMPORAL OBRESAN- OBRAS ESPECIALES DE SANTAMARTA**. 4. Debe anexar copia de la demanda para archivo, los árbitros, la procuraduría y el traslado", la cual fue comunicada al apoderado de la UT OBRESAN, mediante oficio N° 24-022458 de fecha 08 de Febrero de 2010 y de recibo a los 10 días de los mismos.
9. Nuevamente a los 09 días de Abril de 2010, ante el Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Santa Marta, se radico solicitud de Convocatoria de Tribunal de Arbitramento, ante el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Santa Marta en contra de la **UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA**, con ocasión del desequilibrio económico del Contrato N° 0146 del 30 de diciembre de 2005.
10. La Directora del Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición de la Cámara de Comercio, mediante comunicación de fecha 14 de abril de 2010, citó a **LA UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA**, a los convocantes y al Procurador No. 43 ante el Tribunal Contencioso Administrativo, para proveer, conjuntamente, a la designación de árbitros en diligencia que debía surtirse el día 27 de abril de 2010.
11. El Vicerrector de Investigación de la Universidad del Magdalena, delegado de las Funciones Rectorales, mediante oficio REC-188-10 de fecha 21 de abril de 2010, aduciendo que los funcionarios responsables de la Oficina Jurídica responsables de los asuntos contractuales se encontraban fuera de la ciudad, solicitó que se señalara nueva fecha, situación que quedó consignado en la Audiencia de Designación de Árbitros de fecha 27 de abril de 2010, en donde se aceptó la solicitud de la Universidad del Magdalena y se señaló como nueva fecha el día 12 de mayo de 2010.

12. El 12 de mayo de 2010, en la hora indicada, se dispuso abrir la Audiencia de Designación de Árbitros, la cual no pudo llevarse a cabo, por cuanto el apoderado judicial de la convocante carecía de facultad expresa para designar árbitros, por lo cual se procedió a fijar el día 24 de mayo de 2010, para adelantar dicha audiencia
13. El día 24 de mayo de 2010, se celebró la Audiencia de Designación de Árbitros, y las partes designaron conjuntamente como árbitros a los doctores **DIANA BOVEA MENDINUETA, ROSA GARCIA DE POLO y MIGUEL ANGEL POLO CAMPO**. Esta designación fue notificada por la Directora del Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Santa Marta por escrito a los árbitros antes mencionados; sin embargo, la doctora **ROSA EUGENIA GARCIA DE POLO**, mediante comunicación del 26 de mayo de 2010, manifestó su imposibilidad de aceptar la designación que se le hizo, motivo por el cual se citó nuevamente a las partes para el día 23 de junio de 2010 con el objeto de designar el tercer árbitro.
14. El 23 de junio de 2010 el apoderado judicial de la **UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA** manifestó a la Directora del Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Santa Marta, que no podría asistir a la audiencia de designación de árbitros programada para esa fecha por quebrantos de salud, y por consiguiente solicitó señalar nueva fecha para dicha audiencia. Fue así como se fijó para ello el día 8 de julio de 2010.
15. La Audiencia de designación de árbitro se celebró el 8 de Julio de 2010, y en ella se eligió al doctor **JUAN ALBERTO POLO FIGUEROA** como árbitro principal, y como suplente al doctor **CAMILO DAVID HOYOS**. El doctor **JUAN ALBERTO POLO FIGUEROA**, aceptó la designación el 14 de Julio de 2010.
16. Mediante Auto N° 01 de fecha 3 de Agosto de 2010, conforme obra en el Acta No. 1 de la misma fecha, los Árbitros designados, Dres. **MIGUEL ANGEL POLO CAMPO, DIANA PATRICIA BOVEA MENDINUETA y JUAN ALBERTO POLO FIGUEROA** declararon legalmente instalado el presente Tribunal de Arbitramento y reconoció Personería a los apoderados de las partes. De igual en desarrollo de esta audiencia, se profirió el Auto No. 02 mediante el cual se inadmitió la demanda presentada por **J.P.G. & CIA S.A., GERMAN VILLANUEVA CALDERON y RICARDO LUIS CANABAL GUZMAN, INTEGRANTES DE LA UNION TEMPORAL OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA -OBRESAN-**, por razón de que la cuantía de las pretensiones no estaba razonablemente determinada y se concedió a los Convocantes el plazo de cinco (5) días para que subsanaran el defecto anotado.
17. El 9 de agosto de 2010, el apoderado de los Convocantes (**J.P.G. & CIA S.A., GERMAN VILLANUEVA CALDERON y RICARDO LUIS CANABAL GUZMAN, INTEGRANTES DE LA UNION TEMPORAL OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA -OBRESAN-**) presentó ante el Secretario del Tribunal de Arbitramento un escrito por medio del cual subsanaba la demanda, de conformidad con lo ordenado mediante Auto N° 02 de fecha 03 de agosto de 2010, contentivo en el Acta N° 01 de la misma fecha.

18. El Tribunal de Arbitramento, mediante Auto N° 1 que obra en el Acta N° 2 de fecha 17 de agosto de 2010, procedió a admitir la demanda, ordenando correr traslado de la misma a la parte Convocada por el término de diez (10) días, la cual se notificó personalmente al apoderado judicial de la UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA.
19. El día 31 de agosto de 2010 la **UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA**, a través de apoderado judicial, contestó la demanda arbitral, se opuso a sus pretensiones, interpuso excepciones de mérito (Caducidad de la Acción y Cobro de lo No Debido), además de ello, aportó pruebas y solicitó el decreto de otras tantas.
20. El Tribunal de Arbitramento por Auto N° 1 de fecha 8 de Septiembre de 2010, contenido del Acta N° 4 de la misma fecha, resolvió por Secretaría correr traslado a la parte Demandante de las excepciones de mérito propuestas por la parte Convocada. De igual forma mediante Auto N° 2 de la misma fecha y Acta, se dispuso fijar los Honorarios y gastos de Funcionamiento del Tribunal.
21. El día 15 de Septiembre de 2010, el apoderado judicial de la parte Convocante, procedió dentro del término legal, a allegar memorial por medio del cual describía el traslado de las excepciones de mérito formuladas por la Universidad del Magdalena (Entidad Convocada).
22. Mediante Acta N° 05 de fecha 30 de Septiembre de 2010, el Tribunal de Arbitramento, procedió a expedir el Auto N° 01 de la misma fecha, por medio del cual habiéndose constatado la consignación de los honorarios y gastos de funcionamiento del Tribunal, se ordena fijar como fecha para celebrar la Audiencia de Conciliación y Primera Audiencia de Trámite el día 14 de octubre de 2010.
23. El 14 de octubre de 2010, previa convocatoria, el Tribunal de Arbitramento elevó el Acta N° 6, mediante la cual y a través del Auto N° 01 resolvió no reconocer personería al Sr. german Villanueva Calderón; de otra parte mediante Auto N° 2, resolvió declarar fracasada por falta de acuerdo de las partes la Audiencia de Conciliación, y finalmente mediante Auto N° 3, resolvió declararse competente para conocer y dirimir el conflicto presentado entre **J.P.G. & CIA S.A., GERMAN VILLANUEVA CALDERON y RICARDO LUIS CANABAL GUZMAN, INTEGRANTES DE LA UNION TEMPORAL OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA -OBRESAN-**, con la **UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA**.
24. Mediante Acta N° 7 de fecha 25 de Octubre de 2010, el Tribunal de Arbitramento, procedió a expedir el Auto N° 01 de la misma fecha, por medio del cual se abre el proceso a pruebas, en consecuencia ordenó tener como tales y con el valor legal las documentales aportadas, de igual forma decreto la práctica de sendos Dictámenes Periciales, Testimonios, Interrogatorios de parte e Inspección Judicial. El Apoderado judicial de la parte Convocante, en desarrollo de la Audiencia en mención, una vez notificada el decreto de pruebas, interpuso Recurso de Reposición en contra del decreto de la recepción de Testimonio e Interrogatorio de Parte solicitado por la Parte Convocada, el cual fue resuelto en desarrollo de la misma audiencia, ordenándose no reponer los numerales 2.2 y 2.3 del Auto N° 1 de fecha 25 de Octubre de 2010.

25. Las partes de mutuo acuerdo solicitaron ante el Tribunal de Arbitramento, la suspensión del proceso arbitral por el término de diez (10) días, lo cual fue concedido en el Auto N° 1 del Acta N° 8 del 12 de noviembre de 2010.
26. El Tribunal de Arbitramento, mediante Acta N° 9 de fecha 02 de Diciembre de 2010, procedió a expedir el Auto N° 01 de la misma fecha, a través de la cual dispuso, que toda vez que se encuentra vencido el término de suspensión del presente proceso arbitral, se resuelve ordenar la reanudación del proceso, y en consecuencia señala el 15 de Diciembre de 2010, para llevar a cabo la posesión de los Peritos e igualmente para adelantar la práctica de la diligencia de Inspección Judicial a las Instalaciones de la Universidad del Magdalena y a su vez para absolver el Interrogatorio de Parte.
27. Mediante Acta N° 10 de fecha 15 de Diciembre de 2010, el Tribunal de Arbitramento, procedió a expedir el Auto N° 01 de la misma fecha, señalando que toda vez que para practicar las pruebas que fueron decretadas en el proceso, se requiere la asistencia de la totalidad de los árbitros, y el árbitro Miguel Polo Campo no se encuentra presente, razón por la cual las diligencias programadas para el día de hoy no se podrán realizar, y conforme a la Vacancia Judicial de la Procuradora N° 43 ante el Tribunal Administrativo, resuelve: "Primero: Suspéndase el presente trámite arbitral por el término de un mes, contado a partir de la fecha. Segundo: Señálese el 19 de Enero de 2011, para la posesión del perito, la práctica de la diligencia de Inspección Judicial a las Instalaciones de la Universidad del Magdalena y a su vez para absolver el Interrogatorio de Parte.
28. El Tribunal de Arbitramento, mediante Acta N° 12 de fecha 19 de Enero de 2011, procedió a expedir el Auto N° 01 de la misma fecha, por medio del cual se resuelve relevar del Cargo de Perito al Ing. Alejandro Bado Gómez y designar en su reemplazo al Ing. Civil Carlos Polo Jiménez, y de igual forma mediante Auto N° 2 dispuso negar la recepción de un testimonio, accedió a la solicitud de renuncia del Interrogatorio de parte, y a su vez concedió el término de días (10) días al perito contable, para que proceda a rendir su dictamen pericial.
29. Mediante auto N° 1 de fecha 07 de febrero de 2011, contentivo del Acta N° 13 de la misma fecha, el Tribunal de Arbitramento, procedió a ampliar a los peritos los términos referidos para presentar los dictámenes periciales.
30. El perito técnico, allego al Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Santa Marta a los 24 días de febrero de 2011, el respectivo Dictamen solicitado, de igual manera el Perito contable, procedió a rendir ante el Tribunal de Arbitramento en mención, el Dictamen pericial a los 28 días de febrero de 2011.
31. Mediante Acta N° 14 de fecha 04 de Marzo de 2011, el Tribunal de Arbitramento, procedió a expedir el Auto N° 01 de la misma fecha, dispuso correr traslado a las partes convocantes y convocada, de los dictámenes periciales rendidos oportunamente por los peritos técnico y contable.

32. A los 10 días de marzo de 2011, el apoderado judicial de la Parte Convocante, formulo solicitud de Aclaración y Complementación del Dictamen Pericial Contable ante el Tribunal de Arbitramento.
33. El Tribunal de Arbitramento, procedió a expedir el Acta N° 15 de fecha 14 de Marzo de 2011, por medio de la cual resolvió a través del Auto N° 1 de la misma fecha, fijar el 17 de marzo de 2011, para definir lo concerniente y lo que en derecho corresponda en relación con el pronunciamiento que hagan las partes en cuanto a la pericia practicada y que reposa en el expediente.
34. El apoderado de la Universidad del Magdalena, mediante sendos oficios de fecha 14 de marzo de 2011, solicitud al Tribunal de Arbitramento, se aclararan los dictámenes pericial y contables rendidos y obrantes dentro del proceso.
35. Mediante Acta N° 16 de fecha 17 de Marzo de 2011, el Tribunal de Arbitramento, procedió a expedir el Auto N° 01 de la misma fecha, resolvió acceder a las solicitudes de complementación y aclaración del dictamen pericial técnico y contable formuladas por las partes, y a su vez señalo los honorarios al perito contable, en 250 SMLMV, que deberán cancelar las partes en proporciones iguales.
36. A los 23 y 24 días de marzo de 2011, los Peritos Contable y Técnico, allegaron a la Secretaria del Tribunal de Arbitramento, las aclaraciones y complementaciones de los dictámenes periciales rendidos, de conformidad con la solicitud elevada por los apoderados de las partes.
37. El Tribunal de Arbitramento, procedió a expedir el Acta N° 17 de fecha 24 de Marzo de 2011, por medio de la cual resolvió a través del Auto N° 1 de la misma fecha, dispuso correr traslado a las partes convocantes y convocada, de la aclaración y complementación de los dictámenes periciales.
38. A los 25 días de marzo de 2011, el apoderado judicial de la Parte Convocante, formulo solicitud de Objeción por Error Grave del Dictamen Pericial Contable ante el Tribunal de Arbitramento.
39. Mediante Acta N° 18 de fecha 30 de Marzo de 2011, el Tribunal de Arbitramento, procedió a expedir el Auto N° 01 de la misma fecha, por medio del cual dispuso correr traslado a la parte convocada, de la Objeción por Error Grave del Dictamen Pericial Contable, y señalo el día 5 de abril de 2011, para continuar con el tramite de la presente audiencia.
40. A los 31 días de marzo de 2011, el apoderado judicial de la Parte Convocante, allego al Tribunal de Arbitramento, memorial por medio del cual anexaba la consignación bancaria correspondiente al pago de los honorarios de los peritos.
41. El Apoderado de la Universidad del Magdalena, dentro de los términos de Ley, procedió allegar al Tribunal de Arbitramento, memorial por medio del cual se describía la solicitud de Objeción por Error grave del Dictamen Pericial Contable.

42. El Tribunal de Arbitramento, procedió a expedir el Acta N° 19 de fecha 05 de Abril de 2011, por medio de la cual resolvió a través del Auto N° 1 de la misma fecha, no dar trámite a la objeción por error grave al dictamen pericial contable presentado por la parte convocante, por cuanto la misma no solicitó la práctica de un nuevo experticio.
43. Mediante Acta N° 20 de fecha 13 de Abril de 2011, el Tribunal de Arbitramento inició la diligencia, con el fin de celebrar la Audiencia de Alegatos y conceder a las partes la oportunidad de presentar sus respectivos alegatos, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2279 de 1989 y el Decreto 1818 de 1998, razón por la cual la parte convocante los allegó en un escrito contentivo de 42 folios, la parte convocada hizo lo mismo en memorial contentivo de 19 folios y la Procuradora N° 43 ante el Tribunal Administrativo del Magdalena, los allegó en memorial contentivo de 7 folios.
44. El Tribunal de Arbitramento, procedió mediante el Auto N° 01 de 13 de Abril de 2011, contentivo en el Acta N° 20, a señalar: *"Teniendo en cuenta que el término de funcionamiento del Tribunal, que es de seis (6) meses, vence el día 24 de abril de 2011, y para esta fecha aún no podría proferir el Laudo, máxime cuando concederá un término adicional para la práctica de pruebas de oficio"* **RESOLVIO: "PRIMERO: Amplíese el término del presente Tribunal de Arbitramento en tres (3) meses, contados a partir del 23 de abril de 2011. SEGUNDO. Decrétese de oficio, la práctica del testimonio del Ing. Gustavo Chang Nieto, Director Unidad Técnica de Interventoría de la Universidad del Magdalena, para recibir su testimonio se fija el día 26 de abril de 2011: TERCERO: Para la práctica de la anterior prueba se señala el término de diez (10) días. CUARTO: Suspéndase los términos del presente proceso arbitral desde el día 18 hasta el 23 de abril de 2011, por las razones expuestas anteriormente.** (negrilla y subrayado fuera del texto original).
45. A los 26 días de abril de 2011, el Tribunal de Arbitramento, se declaró en audiencia, y procedió a recepcionar el Testimonio del Sr. Ing. Gustavo Chang Nieto, Director Unidad Técnica de Interventoría de la Universidad del Magdalena, conforme puede observarse en el Acta N° 21.
46. El Tribunal de Arbitramento, procedió a expedir el Acta N° 22 de fecha 09 de Mayo de 2011, por medio de la cual resolvió a través del Auto N° 1 de la misma fecha, señalar el día 20 de mayo de 2011, para celebrar audiencia en donde se resolverán las peticiones del convocante, concernientes en la tacha del testigo y la presentación de alegatos de conclusión relacionados con el testimonio recepcionado.
47. Mediante Acta N° 23 de fecha 20 de Mayo de 2011, el Tribunal de Arbitramento, procedió a expedir el Auto N° 01 de la misma fecha, por medio del cual ordenó correr traslado a los apoderados de las partes para que manifiesten lo que a bien tengan en relación con el testimonio del Sr. Gustavo Chang Nieto y de las pruebas por él aportadas, y a su vez no accedió a la solicitud de tacha del testigo; de otra parte en la misma diligencia y previo a la formulación del Recurso de Reposición por el apoderado de la parte convocante, el

Tribunal de Arbitramento, procedió a expedir el Auto N° 2, por medio del cual denegó el recurso de reposición interpuesto y adiciono el Auto N° 1.

48. El Tribunal de Arbitramento mediante Acta N° 24 de Julio 19 de 2011, expidió el Auto N° 1 de la misma fecha, a través del cual dispuso fijar el 20 agosto de 2011 para celebrar audiencia en donde se procederá a la lectura del Laudo Arbitral fecha la cual fue modificada con la expedición del Acta N° 25 de 04 de agosto de 2011, la cual a través del auto N° 1, dispuso fijar el día 22 de agosto de 2011, para celebrar audiencia en donde se procederá a la lectura del Laudo Arbitral.

49. A los 22 días de agosto de 2011, el Tribunal de Arbitramento, se declaro en audiencia, y profirió el Auto N° 1, por medio del cual resolvió: PRIMERO: No acceder a declarar el vencimiento del termino fijado para el proceso arbitral y sus prorrogas, presentada por el apoderado de la convocada. SEGUNDO: No acceder a la solicitud presentada por el Dr. Carlos Polo Jiménez sobre el pago del IVA correspondiente al cincuenta por ciento (50%) que no le fue cancelado por las partes, como era su obligación. Acto seguido se realizo la lectura de las partes más relevantes de las consideraciones así como de la parte resolutive del laudo que en esta audiencia se profiere.

50. Aduce el Tribunal de Arbitramento en el respectivo Laudo Arbitral, de fecha 22 de agosto de 2011, en lo pertinente a:

Oportunidad de este Laudo:

De conformidad con el artículo 103 de la Ley 23 de 1991, cuando las partes no señalan el término para la duración del proceso arbitral, éste será de seis (6) meses contados a partir de la primera audiencia de trámite, término al cual *"se adicionarán los días que por causas legales se interrumpa o suspenda el proceso"*.

Por su parte, el inciso 4° del Art. 70 de la Ley 80 de 1993 dispone que, *"Los árbitros podrán ampliar el término de duración del tribunal por la mitad del inicialmente acordado o legalmente establecido, si ello fuere necesario para la producción del laudo respectivo."*

El Tribunal se encuentra dentro de los términos para fallar, atendidas las siguientes circunstancias:

- La primera audiencia de trámite se realizó el día 14 de octubre de 2010.
- Las partes de mutuo acuerdo solicitaron la suspensión del proceso arbitral por el término de diez (10) días, lo cual fue concedido en el Auto No. 1 del Acta No. 8 del 12 de noviembre de 2010. Cumplido el plazo de esta primera suspensión, los árbitros se reunieron y mediante Auto No. 1 que se lee en el Acta No. 9 reanudaron el trámite del proceso arbitral el 2 de diciembre de 2010.
- Posteriormente, el Tribunal atendiendo solicitud de la Procuradora Judicial No. 43, quien entraba a vacaciones judiciales, suspendió nuevamente el trámite arbitral por el término que va del 17 de diciembre de 2010 al 11 de enero de 2011.
- Mediante Auto No. 1 del Acta No. 20 de fecha 13 de Abril de 2011, los árbitros por derecho propio ampliaron el término del tribunal en tres (3) meses contados a partir del 23 de Abril de 2011.
- Estos términos de suspensión pueden descontarse para efectos de contabilizar la prórroga del Tribunal, como lo ha señalado el Honorable Consejo de Estado.

51. De otra parte, alude el Laudo Arbitral, proferido por el Tribunal de Arbitramento, lo del tenor:

3. Vigencia de la acción.

La acción encaminada a la declaratoria del incumplimiento de un contrato y que se condene al responsable a indemnizar los perjuicios a que haya lugar, está supeditada a ser incoada dentro del término de dos (2) años, siguientes contados a partir de la firma del acta de liquidación del contrato, efectuada de común acuerdo, de conformidad con el artículo 136 literal e) del Código Contencioso Administrativo.

Como consta en el expediente, el acta de liquidación del contrato 146 de 30 de diciembre de 2008 celebrado entre la UNION TEMPORAL OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA- OBRESAN- y la

Av. 5 N° 9-55 Edificio Mútuo Auxilio. Oficina 305, Teléfono 5718267
Celular 3164668894, Email: alcjocornan@gmail.com
Cúcuta - Colombia

UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA, se suscribió el día 31 de enero de 2008. Por lo tanto, el plazo para incoar la acción se extendió hasta el 30 de enero de 2010.

Como se expuso antes, el 2 de febrero de 2010 el apoderado de la parte Convocante radicó ante el Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Santa Marta, demanda arbitral contra la Universidad del Magdalena y aportó el recibo de pago de los derechos correspondientes a la solicitud arbitral.

El hecho de que hubiese sido presentada la demanda arbitral el 2 de febrero de 2010 no implica per se exceso en el plazo de presentación, pues los días 30 y 31 de enero de 2010, sábado y domingo, respectivamente fueron días inhábiles, por cuya razón el plazo que vencía el 30 de enero se extendió, por ministerio de la ley, hasta el 2 de febrero de 2010, según lo dispone el artículo 62, in fine, del Código de Régimen Político y Municipal (ley 4a de 1913), conforme al cual "Los (plazos) de meses y años se computan según el calendario; pero si el último día fuere feriado de vacante, se extenderá el plazo hasta el primer día hábil".

52. Finalmente el Tribunal de Arbitramento, bajo las consideraciones expuestas, y Administrando Justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO: DECLÁRESE no probadas las excepciones de caducidad y pago de lo no debido, propuestas por la parte convocada.

SEGUNDO: DECLÁRESE Sin fundamento la objeción por error grave presentada por la parte convocante, contra el dictamen pericial contable de fecha 28 de febrero de 2011, emitido por el Contador Público **ROBERTO ROBLES CASTAÑEDA**.

TERCERO: CONDÉNASE a la Universidad del Magdalena por concepto de obras pendientes por legalizar, al pago indexado de la suma de **SESENTA Y SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS (\$67.192.800,00)**, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este laudo.

CUARTO: CONDÉNASE a la Universidad del Magdalena al pago de la suma de **DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS (\$17.565.510,72)**, por haber incurrido en mora en el pago de la totalidad del valor del contrato.

QUINTO: CONDÉNASE a la Universidad del Magdalena al pago de la suma de **DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVENTA Y CINCO PESOS (\$244.419.095,00)**, por concepto de mayor permanencia en obra, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este laudo.

SEXTO: Las anteriores sumas de dinero serán pagadas a la sociedad **J.P.G. & CIA S.A., GERMAN VILLANUEVA CALDERON y RICARDO LUIS CANABAL GUZMAN**, integrantes de la **UNION TEMPORAL OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA -OBRESAN-**; y causarán intereses comerciales moratorios a partir del día siguiente de la fecha de ejecutoria del laudo.

SEPTIMO: CONDÉNASE a la Universidad del Magdalena al pago de la suma de **SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS (\$62.511.880,00)**, por concepto de costas del proceso.

OCTAVO: CONDÉNASE a la Universidad del Magdalena al pago de la suma de **VEINTISEIS MILLONES DE PESOS (\$26.000.000,00)**, por concepto de Agencias en Derecho, a favor de la parte Convocante.

NOVENO: Niéganse las demás pretensiones de la demanda.

DECIMO: Para el cumplimiento de la sentencia expídanse copias con destino a las partes según las previsiones del artículo 115 del C.P.C. y con la observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del decreto 359 de 22 de febrero de 1995.

DECIMO PRIMERO: En firme este Laudo, protocolícese por el Presidente del Tribunal en una Notaria de esta ciudad, de conformidad con el artículo 159 del decreto 1818 de 1998, con cargo al rubro de protocolizaciones, efecto para el cual se previene a las partes sobre la obligación de cubrir 10 que faltare, si la suma decretada y recibida para este fin resultare insuficiente o si resultare mayor se devolverá lo pertinente.

UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA, se suscribió el día 30 de enero de 2008. Por lo tanto, el plazo para incoar la acción se extendía hasta el 30 de enero de 2010.

Como se expuso antes, ello de febrero de 2010 el apoderado de la parte Convocante radicó ante el Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Santa Marta, demanda arbitral contra la Universidad del Magdalena y aportó el recibo de pago de los derechos correspondientes a la solicitud arbitral.

El hecho de que hubiese sido presentada la demanda arbitral ello de febrero de 2010 no implica per se exceso en el plazo de presentación, pues los días 30 y 31 de enero de 2010, sábado y domingo, respectivamente fueron días inhábiles, por cuya razón el plazo que vencía el 30 de enero se extendió, por ministerio de la ley, hasta ello de febrero de 2010, según lo dispone el artículo 62, in fine, del Código de Régimen Político y Municipal (ley 4a de 1913), conforme al cual "Los (plazos) de meses y años se computan según el calendario; pero si el último día fuere feriado de vacante, se extenderá el plazo hasta el primer día hábil".

52. Finalmente el Tribunal de Arbitramento, bajo las consideraciones expuestas, y Administrando Justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO: DECLÁRESE no probadas las excepciones de caducidad y pago de lo no debido, propuestas por la parte convocada.

SEGUNDO: DECLÁRESE Sin fundamento la objeción por error grave presentada por la parte convocante, contra el dictamen pericial contable de fecha 28 de febrero de 2011, emitido por el Contador Público ROBERTO ROBLES CASTAÑEDA.

TERCERO: CONDÉNASE a la Universidad del Magdalena por concepto de obras pendientes por legalizar, al pago indexado de la suma de **SESENTA Y SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS (\$67.192.800,00)**, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este laudo.

CUARTO: CONDÉNASE a la Universidad del Magdalena al pago de la suma de **DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS (\$17.565.510,72)**, por haber incurrido en mora en el pago de la totalidad del valor del contrato.

QUINTO: CONDÉNASE a la Universidad del Magdalena al pago de la suma de **DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVENTA Y CINCO PESOS (\$244.419.095,00)**, por concepto de mayor permanencia en obra, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este laudo.

SEXTO: Las anteriores sumas de dinero serán pagadas a la sociedad **J.P.G. & CIA S.A., GERMAN VILLANUEVA CALDERON y RICARDO LUIS CANABAL GUZMAN**, integrantes de la **UNION TEMPORAL OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA -OBRESAN-**; y causarán intereses comerciales moratorios a partir del día siguiente de la fecha de ejecutoria del laudo.

SEPTIMO: CONDÉNASE a la Universidad del Magdalena al pago de la suma de **SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS (\$62.511.880,00)**, por concepto de costas del proceso.

OCTAVO: CONDÉNASE a la Universidad del Magdalena al pago de la suma de **VEINTISEIS MILLONES DE PESOS (\$26.000.000,00)**, por concepto de Agencias en Derecho, a favor de la parte Convocante.

NOVENO: Niéganse las demás pretensiones de la demanda.

DECIMO: Para el cumplimiento de la sentencia expídanse copias con destino a las partes según las previsiones del artículo 115 del C.P.C. y con la observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del decreto 359 de 22 de febrero de 1995.

DECIMO PRIMERO: En firme este Laudo, protocolícese por el Presidente del Tribunal en una Notaría de esta ciudad, de conformidad con el artículo 159 del decreto 1818 de 1998, con cargo al rubro de protocolizaciones, efecto para el cual se previene a las partes sobre la obligación de cubrir 10 que faltare, si la suma decretada y recibida para este fin resultare insuficiente o si resultare mayor se devolverá lo pertinente.

53. El apoderado de la Parte Convocante presento ante el Tribunal de Arbitramento, solicitud de Adición o Complementación del Laudo Arbitral, proferido a los 22 días de agosto de 2011.
54. El Tribunal de Arbitramento, mediante Acta N° 27 de Agosto 31 de 2011, expidió el Auto N° 1 de la misma fecha, a través del cual procedió a fijar el día 7 de Septiembre de 2011, para correr traslado a la parte demandada de la solicitud de adición o complementación del Laudo Arbitral proferido el 22 de agosto de 2011.
55. Mediante Acta N° 28 de fecha 07 de Septiembre de 2011, el Tribunal de Arbitramento, procedió a expedir el Auto N° 01 de la misma fecha, resolvió fijar el día 14 de septiembre de 2011, para la decisión que en derecho corresponda en relación a la solicitud de adición o complementación de Laudo Arbitral.
56. A los 14 días de Septiembre de 2011, el Tribunal de Arbitramento, declaro abierta la audiencia, y previas consideraciones, resolvió no adicionar o complementar el Laudo Arbitral de fecha 22 de agosto de 2011, conforme obra en el Acta N° 29.
57. El Presidente del Tribunal de Arbitramento del Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Santa Marta, procedió de conformidad con el Decreto 1818 de 1998 (art. 159), razón por la cual se protocolizo a través de la Escritura Pública N° 850 de septiembre 11 de 2012 de la Notaría Cuarta del Circulo de Santa Marta.
58. La convocada **UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA**, en escrito del 26 de agosto de 2011 y con fundamento en la causal 5ª del artículo 163 del Decreto 1818 de 1993, y de otra parte el 16 de septiembre de 2011 los convocantes, con fundamento en la causal 9ª del artículo 163 del Decreto 1818 de 1993, interpusieron recurso de anulación contra el laudo proferido por el Tribunal de Arbitramento, el cual fue radicado ante el Consejo de Estado, el 7 de octubre de 2011 por el Secretario del Tribunal de Arbitramento, correspondiéndole el Radicado N° 11001-03-26-000-2011-00064-01, del cual por reparto conoció la Sección Tercera Subsección C – Magistrado Ponente Dr. José Orlando Santofimio Gamboa, la cual mediante auto del 21 de noviembre de 2011 avocó el conocimiento del asunto y corrió traslado para que los recurrentes sustentaran el recurso y para que presentaran los correspondientes alegatos
59. La Sección Tercera Subsección C – Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, con ponencia del Magistrado Ponente Dr. José Orlando Santofimio Gamboa, mediante providencia de fecha 25 de abril de 2012, estableció las siguientes consideraciones:

El artículo 116 de la Constitución Política prevé que "los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de conciliadores o en la de árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad, en los términos que determine la ley."

Este precepto constitucional es desarrollado, entre otros, por el artículo 111 de la Ley 446 de 1998 y por el artículo 115 del Decreto 1818 de 1998 al definir que "el arbitraje es un mecanismo por medio del cual las partes involucradas en un conflicto de carácter transigible, defieren su solución a un

tribunal arbitral, el cual queda transitoriamente investido de la facultad de administrar justicia, profiriendo una decisión denominada laudo arbitral."

Como esa función es transitoria la ley ha precisado, entre otros aspectos, la forma de determinar el momento en que ella cesa.

Para este efecto el artículo 43 del Decreto 2279 de 1989, compilado en el artículo 167 del Decreto 1818 de 1998, señala que el tribunal cesará en sus funciones por la expiración del término fijado para el proceso o el de su prórroga.

Lo atinente al término de duración del proceso arbitral y lo concerniente a las prórrogas está reglado con carácter general en el artículo 19 del Decreto 2279 de 1989, en la nueva redacción que le dio el artículo 103 de la Ley 23 de 1991, en donde se expresa:

*"Si en el compromiso o en la cláusula compromisoria no se señalare el término para la duración del proceso, éste será de seis (6) meses, contados desde la primera audiencia de trámite. El término podrá prorrogarse una o varias veces, sin que el total de las prórrogas exceda de seis (6) meses, a solicitud de las partes o de sus apoderados con facultad expresa para ello. En todo caso se adicionarán al término los días en que por causas legales se interrumpa o suspenda el proceso."*¹

En este asunto al proceso arbitral se convocó a la **UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA** y como quiera que ésta es una entidad universitaria estatal se sigue, de acuerdo con lo preceptuado por el inciso 3º del artículo 6º de la Ley 1285 de 2009 y por los artículos 57 y 93 de la Ley 30 de 1992, que el arbitramento no puede ser sino legal y se rige por las disposiciones que sobre arbitramento trae el Decreto 2279 de 1989, la Ley 23 de 1991, la Ley 446 de 1998 y el Decreto 1818 de 1998, sin que sea admisible la aplicación de las normas que sobre arbitraje contempla la Ley 80 de 1993 puesto que el contrato que dio lugar al conflicto es uno de obra.

Como el procedimiento a seguir era exclusivamente el del derecho privado sin que hubiera lugar para las disposiciones arbitrales que prevé la Ley 80 de 1993, se sigue que en cuanto a las prórrogas del término de duración del proceso era aplicable lo consagrado en el artículo 103 de la Ley 23 de 1991, es decir que el término de duración del proceso arbitral podía prorrogarse una o varias veces sin que el total de esas prórrogas excediera de 6 meses pero éstas sólo podían ordenarse a solicitud de las partes o de sus apoderados facultados para ello.

Al examinar el *iter* procesal se encuentra que los convocantes y la convocada solicitaron de común acuerdo la suspensión del proceso por 10 días, petición que se concedió en auto que se profirió en la audiencia celebrada el 12 de noviembre de 2010, tal como se ve al folio 1407 del cuaderno principal.

Luego el Tribunal decidió oficiosamente suspender el proceso por el término de un mes contado, según lo decidió, a partir del 15 de diciembre de 2010, argumentando que uno de los árbitros no se encontraba presente, que el perito no concurrió a tomar posesión del cargo y que la Procuradora salía a vacaciones, tal como se ve a los folios 1419 a 1420 del cuaderno principal.

Posteriormente el Tribunal ordenó de oficio ampliar el término de duración por tres meses, contados a partir del 23 de abril de 2011, tal como se ve al folio 2552 del cuaderno principal.

Finalmente y también de oficio el Tribunal amplió el término en un mes más, contado a partir del 24 de julio de 2011, tal como se ve al folio 2569 del cuaderno principal.

Pues bien, este recuento pone de presente que el Tribunal sin facultad legal alguna y por ende contraviniendo las normas legales sobre la materia, no sólo suspendió el proceso sino que también amplió su término de duración en varias oportunidades.

Por consiguiente, como el Tribunal prorrogó el término de duración del proceso y además suspendió el trámite procesal en varias ocasiones por causas no contempladas en la ley, todo de oficio, sin que pudiera hacerlo de ésta manera y por estos motivos, resulta que esas decisiones fueron ineficaces de pleno derecho y por ende el trámite procesal de todas maneras continuó su curso y con él corrieron los respectivos términos previstos en la ley.

8. En la cláusula compromisoria que pactaron las partes no se fijó ningún término para la duración del arbitramento lo que implica que éste sea el de 6 meses previsto en el artículo 103 de la Ley 23 de 1991, tiempo éste que se cuenta a partir de la primera audiencia de trámite y a él deben adicionarse los días en que por causas legales se hubiere suspendido el proceso.

A la primera audiencia de trámite se le dio comienzo el 14 de octubre de 2010 y por lo tanto los 6 meses de duración del arbitramento vencían el 14 de abril de 2011 y si a este plazo se le adicionan los 10 días que por una causa legal estuvo suspendido el proceso (la pedida por mutuo acuerdo de las partes), se concluye que finalmente el término venció el 24 de abril de 2011.

¹ Esta disposición finalmente no quedó compilada en el Decreto 1818 de 1998 porque éste Decreto al reproducirla en su artículo 126 lo hizo sin la modificación que le había hecho el artículo 103 de la Ley 23 de 1991 al artículo 19 del Decreto 2279 de 1989, razón por la cual el Consejo de Estado, con ponencia precisamente de Alberto Polo Figueroa, declaró la nulidad del citado artículo 126.

Y es que la suspensión oficiosa y por causas no previstas en la ley que ordenó el Tribunal, así como las ampliaciones también oficiosas que decretó, no pueden contabilizarse porque al ser ineficaces de pleno derecho se tienen como si no hubieran ocurrido.

Así que entonces a partir del 25 de abril de 2011 el Tribunal de arbitramento carecía de facultad jurisdiccional y por ende no podía proferir el laudo que habría de dirimir la controversia que se le planteo.

9. El numeral 5° del artículo 163 del Decreto 1818 de 1993 consagra como causal de nulidad el *"haberse proferido el laudo después del vencimiento del término fijado para el proceso arbitral o su prórroga"* y como quiera que esa providencia se proferió el 22 de agosto de 2011, se sigue que el laudo es nulo y por consiguiente así se resolverá.

60. Finalmente la Sección Tercera Subsección C – Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, mediante providencia de fecha 25 de abril de 2012, resolvió:

PRIMERO: DECRETAR LA NULIDAD del laudo arbitral proferido el 22 de agosto de 2011 dentro del proceso arbitral promovido por J. P. G. & CIA S. A., GERMAN VILLANUEVA CALDERON y RICARDO LUIS CANABAL GUZMAN, INTEGRANTES DE LA UNION TEMPORAL OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA "OBRESAN" contra la UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA, por haberse proferido el laudo después del vencimiento del término fijado para la duración del arbitramento.

SEGUNDO: NO SE CONSIDERA el recurso interpuesto por los convocantes porque al haberse encontrado fundada la causal esgrimida por la convocada que determina la nulidad de todo el laudo, resulta improcedente, por sustracción de materia, considerar y decidir sobre la causal 9ª de anulación.

61. La providencia proferida por el Consejo de Estado, fue notificada por Edicto a los 03 días de Mayo de 2012, quedando debidamente ejecutoriada a los 07 días de los mismos.

62. Con ocasión de la decisión proferida por el Consejo de Estado y en consideración de los argumentos motivados en la misma, a los 16 días de agosto de 2012 el apoderado de UT OBRESAN, presento al Director de la Cámara de Comercio de Santa Marta solicitud de una Nueva Convocatoria del Tribunal de Arbitramento, consideración que fue denegada por la Entidad en mención, mediante oficio N° 24-029324 del 22 de agosto de 2012.

63. Nuevamente el apoderado de la UT OBRESAN, reitero a los 03 días de Septiembre de 2012 la solicitud de una Nueva Convocatoria del Tribunal de Arbitramento ante la Directora de la Cámara de Comercio de Santa Marta, solicitud que igualmente fue rechazada mediante oficio N° 24-029507 del 12 de Septiembre de 2012.

CADUCIDAD DE LA ACCIÓN.

Tratándose de la declaración de responsabilidad del Estado por la Falla en el ejercicio de la Función Jurisdiccional por Particulares, acaecida en la expedición del Laudo Arbitral de fecha 22 de agosto de 2011 por el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Santa Marta, el término de caducidad se cuenta a partir del día siguiente al de ejecutoria de la providencia judicial que Decreto la Nulidad del Laudo Arbitral en mención.

De conformidad con lo establecido en el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 Literal i), el cual reza: Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante

del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.

Por tratarse de un error judicial o error jurisdiccional, en el presente caso de particulares investidos de las facultades para Administrar Justicia Transitoriamente, el término de caducidad de la acción es de dos (2) años, conforme lo contempla la norma anteriormente citada, período en el cual se podrá acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en ejercicio del Medio de Control denominado Reparación Directa.

En consecuencia de lo anterior y toda vez que la providencia del Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera- Subsección C, fue proferida a los 25 días de abril de 2012 y notificada por edicto a los 03 días de Mayo de 2012, quedando debidamente ejecutoriada la misma a los 07 días de los mismos, me encuentro dentro de los términos de Ley para formular la presenta solicitud de Conciliación Extrajudicial, como requisito de procedibilidad previo a accionar en el Medio de Control de Reparación Directa ante la Justicia Contencioso Administrativa.

Finalmente y considerando que la caducidad implica la pérdida de oportunidad para reclamar por vía judicial los derechos que se consideren vulnerados por causa de la actividad del Estado, solo se debe proceder a su declaración cuando existan elementos de juicio que generen certeza en el juez respecto de su acaecimiento; por lo que ante la duda se deberá dar trámite al proceso a fin de que en el mismo se determine, sin asomo de dudas, la configuración o no de la caducidad.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Artículos 70, 80 y 81 de la ley 446 de 1998, modificatoria de los artículos 59, 60 y 61 de la ley 23 de 1991, igualmente en la ley 640 de 2001, artículos 23, 24, 25 y 26, y ley 1285 de 2009, modificatoria de la ley 270 de 1996.

Además de las pretensiones indemnizatorias formuladas en esta demanda tienen fundamento en las siguientes normas CONSTITUCIONALES Y LEGALES:

Constitución Política:

Me fundo en los artículos 1, 2, 4, 6, 11, 13, 29, 31, 42 y 90 de la constitución política.

Sobre el principio general del derecho público de la culpa o falla del servicio invoco el artículo 8, ley 153 de 1887.

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 del 2011)

Código Civil: Respecto a la indemnización de perjuicios (daño emergente y lucro cesante) invoco los artículos 1613 a 1615 del Código Civil Colombiano.

De la responsabilidad extracontractual que obliga a las demandadas a indemnizar a los Demandantes, invoco el artículo 2341 y 2356 del Código Civil Colombiano y demás disposiciones del Código Civil.

Código de Procedimiento Civil:

Fundamento mi demanda en los artículos 135, 136, 137, 175, 187, 219, 299, 224, 225, 226, 227, 228 y 248 del Código de Procedimiento Civil.

Ley 446 de 1998: Respecto a la solicitud, aportación y practica de pruebas art. 10 de la ley 446 de 1998.

Sobre el principio de reparación integral invoco el artículo 16 de la ley 446 de 1998.

Ley estatutaria de la administración de justicia (ley 270 de 1996): respecto a la responsabilidad del estado invoco los artículos 65 y ss de la ley 270 de 1996.

Ley 23 de 1991, arts. 90 y ss.

CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN

Como ya se expuso en los hechos de la demanda, conforme a los parámetros establecidos en el artículo 90 de la Constitución Política se establece como elemento esencial para que se haga efectiva la responsabilidad a Cargo de la administración, la existencia de un daño antijurídico y que este sea imputable al estado, circunstancia esta, que se da en el caso sub judice. Así mismo, el caso que nos ocupa tiene respaldo en los artículos 65 y ss de la ley 270 de 1996.

El Artículo 8º de la Ley 270 de 1996, Modificado por el art. 3, Ley 1285 de 2009, establece: *Mecanismos Alternativos*. La ley podrá establecer mecanismos alternativos al proceso judicial para solucionar los conflictos que se presenten entre los asociados y señalará los casos en los cuales habrá lugar al cobro de honorarios por estos servicios. Excepcionalmente la ley podrá atribuir funciones jurisdiccionales a ciertas y determinadas autoridades administrativas para que conozcan de asuntos que por su naturaleza o cuantía puedan ser resueltos por aquellas de manera adecuada y eficaz. En tal caso la ley señalará las competencias, las garantías al debido proceso y las demás condiciones necesarias para proteger en forma apropiada los derechos de las partes. Contra las sentencias o decisiones definitivas que en asuntos judiciales adopten las autoridades administrativas excepcionalmente facultadas para ello, siempre procederán recursos ante los órganos de la Rama Jurisdiccional del Estado, en los términos y con las condiciones que determine la ley. Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de conciliadores o en la de árbitros debidamente habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad.

La Cámara de Comercio de Santa Marta fue constituida en 1931, creada mediante Decreto 421 de la Gobernación del Magdalena y Decreto 2288 de 1943 del Ejecutivo Nacional, posteriormente se implemento el Servicio del Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición, conforme la

Resolución expedida por el Ministerio del Interior y de Justicia, razón por la cual, transitoriamente es investida de la Función de Administrar Justicia, como aconteció en nuestro caso en particular.

El Artículo 13 de la Ley 270 de 1996, establece: DEL EJERCICIO DE LA FUNCION JURISDICCIONAL POR OTRAS AUTORIDADES Y POR PARTICULARES. Modificado por el art. 6, Ley 1285 de 2009.

Ejercen función jurisdiccional de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política:

1. El Congreso de la República, con motivo de las acusaciones y faltas disciplinarias que se formulen contra el Presidente de la República o quien haga sus veces; contra los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, de la Corte Constitucional y del Consejo Superior de la Judicatura y el Fiscal General de la Nación, aunque hubieren cesado en el ejercicio de sus cargos.

2. Las autoridades administrativas respecto de conflictos entre particulares, de acuerdo con las normas sobre competencia y procedimiento previstas en las leyes. Tales autoridades no podrán, en ningún caso, realizar funciones de instrucción o juzgamiento de carácter penal; y

3. Los particulares actuando como concilladores o árbitros habilitados por las partes, en los términos que señale la ley. Tratándose de arbitraje, en el que no sea parte el estado o alguna de sus Entidades, los particulares podrán acordar las reglas de procedimiento a seguir, directamente o por referencia a la de un Centro de Arbitraje, respetando, en todo caso los principios Constitucionales que integran el debido proceso. (Subrayado fuera del texto original).

De otra parte el artículo 65 de la ley estatutaria de la administración de justicia acerca de la Responsabilidad del Estado expone: "el estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción u omisión de sus agentes judiciales.

En los términos del inciso anterior el Estado responderá por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad, por lo cual quienes hayan sufrido un daño, a consecuencia de la función jurisdiccional tendrán derecho a obtener la consiguiente reparación.

De igual forma el Artículo 71 Ibidem, establece la Responsabilidad del Funcionario y del Empleado Judicial. En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial por un daño antijurídico que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste. Para los efectos señalados en este artículo, se presume que constituye culpa grave o dolo cualesquiera de las siguientes conductas: 1). La violación de normas de derecho sustancial o procesal, determinada por error inexcusable. 2). El pronunciamiento de una decisión cualquiera, restrictiva de la libertad física de las personas, por fuera de los casos expresamente previstos en la ley o sin la debida motivación. 3). La negativa arbitraria o el incumplimiento injustificado de los términos previstos por la ley procesal para el ejercicio de la función de administrar justicia o la realización de actos propios de su oficio, salvo que hubiere podido evitarse el perjuicio con el empleo de recurso que la parte dejó de interponer.

A su vez el Artículo 74 Ibid, señala: Aplicación. Las disposiciones del presente capítulo se aplicarán a todos los agentes del Estado pertenecientes a la Rama Judicial así como también a los particulares que excepcional o transitoriamente ejerzan o participen del ejercicio de la función jurisdiccional de acuerdo con lo que sobre el particular dispone la presente Ley Estatutaria. En consecuencia, en los preceptos que anteceden los términos «funcionario o empleado judicial» comprende a todas las personas señaladas en el inciso anterior.

La **UNION TEMPORAL OBRESAN - OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA**, fue constituida a través de documento privado del 15 de Noviembre de 2005, y suscribió con la **UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA**, el Contrato de Obras No.146 de fecha 30 de diciembre de 2005, cuyo objeto según lo dispuesto en la Cláusula Tercera del mismo, consistía en: La Construcción del Edificio B de Salones

Debido a las discrepancias que se presentaron entre la Universidad del Magdalena y la UT OBRESAN, está a través de apoderado judicial presento solicitud de Convocatoria de Tribunal de Arbitramento, ante el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Santa Marta en contra de la UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA, por medio del cual solicitaban que: A) Se declarara que entre las partes en mención, se celebró el Contrato N° 0146 del 30 de diciembre de 2005; B) Durante la ejecución del contrato se produjo Desequilibrio económico del mismo, en detrimento de la Unión Temporal OBRESAN; C) Que con el propósito de restablecer el equilibrio económico al Contratista (Unión Temporal OBRESAN), se condene a la UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA, a pagar determinadas sumas de dinero, conforme obra en la respectiva solicitud.

La Directora del Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición de la Cámara de Comercio, mediante comunicación de fecha 14 de abril de 2010, citó a las Partes y al Procurador No. 43 ante el Tribunal Contencioso Administrativo, para proveer, conjuntamente la designación de árbitros en diligencia que debía surtirse el día 27 de abril de 2010, pero que solo se surtió en debida forma el 24 de mayo de 2010, designándose conjuntamente como árbitros a los doctores **DIANA BOVEA MENDINUETA, ROSA GARCIA DE POLO y MIGUEL ANGEL POLO CAMPO**.

Toda vez que la doctora ROSA EUGENIA GARCIA DE POLO, mediante comunicación del 26 de mayo de 2010, manifestó su imposibilidad de aceptar la designación que se le hizo, se citó nuevamente a las partes para el día 23 de junio de 2010 con el objeto de designar el tercer árbitro, siendo el Dr. **JUAN ALBERTO POLO FIGUEROA** designado el mismo en Audiencia adelantada a los 8 de julio de 2010,

Las actuaciones trascendentales y de las cuales, se origina la Falla en el ejercicio de la Función Jurisdiccional por Particulares, acaecida en la expedición del Laudo Arbitral de fecha 22 de agosto de 2011 por el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Santa marta, se resumen en:

- **El 14 de octubre de 2010, previa convocatoria, el Tribunal de Arbitramento elevó el Acta N° 6, mediante la cual y a través del Auto N° 01 resolvió no reconocer personería al Sr. german Villanueva Calderón; de otra parte mediante Auto N° 2, resolvió declarar fracasada por falta de acuerdo de las partes la Audiencia de Conciliación, y finalmente mediante Auto N° 3, resolvió declararse competente para**

conocer y dirimir el conflicto presentado entre J.P.G. & CIA S.A., GERMAN VILLANUEVA CALDERON y RICARDO LUIS CANABAL GUZMAN, INTEGRANTES DE LA UNION TEMPORAL OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA -OBRESAN-, con la UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA.

- Las partes de mutuo acuerdo solicitaron ante el Tribunal de Arbitramento, la suspensión del proceso arbitral por el término de diez (10) días, lo cual fue concedido en el Auto N° 1 del Acta N° 8 del 12 de noviembre de 2010, situación que conforme a nuestro Ordenamiento Jurídico le estaba permitido a las partes solicitar.
- Mediante Acta N° 10 de fecha 15 de Diciembre de 2010, el Tribunal de Arbitramento, procedió a expedir el Auto N° 01 de la misma fecha, en el cual dispuso que conforme a la Vacancia Judicial de la Procuradora N° 43 ante el Tribunal Administrativo, resuelve: "Primero: Suspéndase el presente trámite arbitral por el término de un mes, contado a partir de la fecha. Segundo: Señálese el 19 de Enero de 2011, para la posesión del perito, la práctica de la diligencia de Inspección Judicial a las Instalaciones de la Universidad del Magdalena y a su vez para absolver el Interrogatorio de Parte.

Es pertinente señalar que de conformidad con lo establecido en el artículo 103 de la Ley 23 de 1991, el término de duración del proceso arbitral puede prorrogarse una o varias veces sin que el total de esas prórrogas excediera de 6 meses (termino inicial del proceso arbitral), pero éstas sólo podían ordenarse a solicitud de las partes o de sus apoderados facultados para ello, por lo cual la actuación adelantada por el Tribunal de Arbitramento a los 15 días de diciembre de 2010 (Acta N° 10), contrariaba nuestro Ordenamiento Jurídico, puesto que la suspensión del proceso no opera de oficio, sino únicamente a solicitud de las partes.

- El Tribunal de Arbitramento, procedió mediante el Auto N° 01 de 13 de Abril de 2011, contentivo en el Acta N° 20, a señalar: "Teniendo en cuenta que el termino de funcionamiento del Tribunal, que es de seis (6) meses, vence el día 24 de abril de 2011, y para esta fecha aún no podría proferir el Laudo, máxime cuando concederá un término adicional para la practica de pruebas de oficio" RESOLVIO:

"PRIMERO: Amplíese el término del presente Tribunal de Arbitramento en tres (3) meses, contados a partir del 23 de abril de 2011.

CUARTO: Suspéndase los términos del presente proceso arbitral desde el día 18 hasta el 23 de abril de 2011, por las razones expuestas anteriormente.

- Finalmente a los 22 días de agosto de 2011, el Tribunal de Arbitramento, se declaro en audiencia, y proferió el Laudo Arbitral, por medio del cual resolvió:

PRIMERO: DECLÁRESE no probadas las excepciones de caducidad y pago de lo no debido, propuestas por la parte convocada.

SEGUNDO: DECLÁRASE Sin fundamento la objeción por error grave presentada por la parte convocante, contra el dictamen pericial contable de fecha 28 de febrero de 2011, emitido por el Contador Público **ROBERTO ROBLES CASTAÑEDA**.

TERCERO: CONDÉNASE a la Universidad del Magdalena por concepto de obras pendientes por legalizar, al pago indexado de la suma de **SESENTA Y SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS (\$67.192.800,00)**, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este laudo.

CUARTO: CONDÉNASE a la Universidad del Magdalena al pago de la suma de **DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS (\$17.565.510,72)**, por haber incurrido en mora en el pago de la totalidad del valor del contrato.

QUINTO: CONDÉNASE a la Universidad del Magdalena al pago de la suma de **DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVENTA Y CINCO PESOS (\$244.419.095,00)**, por concepto de mayor permanencia en obra, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este laudo.

SEXTO: Las anteriores sumas de dinero serán pagadas a la sociedad **J.P.G. & CIA S.A., GERMAN VILLANUEVA CALDERON y RICARDO LUIS CANABAL GUZMAN**, integrantes de la **UNION TEMPORAL OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA -OBRESAN-**; y causarán intereses comerciales moratorios a partir del día siguiente de la fecha de ejecutoria del laudo.

SEPTIMO: CONDÉNASE a la Universidad del Magdalena al pago de la suma de **SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS (\$62.511.880,00)**, por concepto de costas del proceso.

OCTAVO: CONDÉNASE a la Universidad del Magdalena al pago de la suma de **VEINTISEIS MILLONES DE PESOS (\$26.000.000,00)**, por concepto de Agencias en Derecho, a favor de la parte Convocante.

Valga precisar que el Tribunal de Arbitramento, en los considerandos del Laudo Arbitral, hace hincapié a normas de Derecho Privado y de Derecho Público, al extremo que cita el artículo 103 de la Ley 23 de 1991 y a su vez el inciso 4° del Art. 70 de la Ley 80 de 1993, como argumentos para determinar la oportunidad del Laudo, sin concebir que el caso que nos atañe obedecía a la aplicación de normas de carácter netamente privado.

En razón de lo anterior, se entiende que el término de duración del proceso arbitral, era el señalado en el artículo 103 de la Ley 23 de 1991, el cual reza: *"Si en el compromiso o en la cláusula compromisoria no se señalare el término para la duración del proceso, éste será de seis (6) meses, contados desde la primera audiencia de trámite. El término podrá prorrogarse una o varias veces, sin que el total de las prórrogas exceda de seis (6) meses, a solicitud de las partes o de sus apoderados con facultad expresa para ello. En todo caso se adicionarán al término los días en que por causas legales se interrumpa o suspenda el proceso"*.

En nuestro caso en particular la Cláusula Compromisoria establecida en el Contrato N° 146 de 30 de Diciembre de 2005 suscrito por la Universidad del Magdalena y la UT OBRESAN, no hacía referencia al termino de duración del proceso, razón por la cual obligaba a estarse a lo establecido en el Art. 103 de la Ley 23 de 1991, por lo cual las actuaciones de fecha 15 de Diciembre de 2012 (Acta N° 10), y 13 de Abril de 2011 (Acta N° 20), se consolidan en actuaciones abiertamente ilegales, puesto que el Tribunal de Arbitramento, no estaba facultado para proceder a suspender y ampliar posteriormente los términos del proceso arbitral.

Con ocasión de los sendos Recursos de Anulación formulados por las Partes dentro del Proceso Arbitral, conoció el Consejo de Estado del proceso de anulación, y mediante providencia de fecha 25 de abril de 2012, resolvió **DECRETAR LA NULIDAD** del laudo arbitral proferido por el **CENTRO DE ARBITRAJE, CONCILIACIÓN Y AMIGABLE COMPOSICIÓN DE LA CAMARA DE**

Av. 5 N° 9-58 Edificio Mutuo Auxilio, Oficina 305, Teléfono 5718267
Celular 3164668894, Email: alejocorman@gmail.com
Cúcuta - Colombia

COMERCIO DE SANTA MARTA, a los 22 días de agosto de 2011 dentro del proceso arbitral promovido por **J. P. G. & CIA S. A., GERMAN VILLANUEVA CALDERON y RICARDO LUIS CANABAL GUZMAN, INTEGRANTES DE LA UNION TEMPORAL OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA "OBRESAN"** contra la **UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA**, por haberse proferido el laudo después del vencimiento del término fijado para la duración del arbitramento.

Es preciso advertir que el Ordenamiento Jurídico de nuestro Estado Colombiano considera a la Función Jurisdiccional transitoriamente cumplida por particulares en un arbitraje, como identificable con la función jurisdiccional que cumplen los funcionarios que integran la Rama Judicial, por tanto, el ámbito de aplicación de las normas sobre responsabilidad Patrimonial del Estado se extiende *pari passu* a la función Jurisdiccional Transitoriamente ejercida por los árbitros.

De igual forma, es necesario resaltar que la Corte Constitucional, en la Sentencia C-037 de 1996, por medio de la cual se revisó la Constitucionalidad de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, concluyó que la responsabilidad por causas relacionadas con la administración de justicia se aplica a todas aquellas que en forma permanente o transitoria hagan parte de ella.

De conformidad con el artículo 90 de la Constitución Política de 1991 y la Ley 270 de 1996, se conciben el error judicial de una manera objetiva, para su configuración basta que la providencia que lo contenga cause un daño antijurídico y que éste resulte imputable a la administración de justicia, pues la noción de culpa grave o dolo queda diferida a los eventos en los que se pretenda demostrar la responsabilidad personal del funcionario.

ESTIMACIÓN RACIONAL DE LA CUANTÍA

Estimo como cuantía de la presente solicitud de conciliación extrajudicial, las sumas posteriormente determinadas:

DAÑOS MATERIALES

DAÑO EMERGENTE

Al Señor **JUAN PABLO GONZALEZ ROSALES**, quien obra en calidad de Gerente y Representante Legal de **J.P.G. & CIA S.A., GERMAN VILLANUEVA CALDERON, RICARDO LUIS CANABAL GUZMAN**, integrantes todos de la **UNION TEMPORAL OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA - OBRESAN**, el valor del **DAÑO EMERGENTE** que sufrieron y sufren con ocasión de la Falla en el ejercicio de la Función Jurisdiccional por Particulares, acaecida en la expedición del Laudo Arbitral de fecha 22 de agosto de 2011 por el Tribunal de Arbitramento de **J.P.G. & CIA S.A., GERMAN VILLANUEVA CALDERON y RICARDO LUIS CANABAL GUZMAN, INTEGRANTES DE LA UNION TEMPORAL OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA - OBRESAN-**, CON **UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA**, del cual fuere declarada la Nulidad mediante providencia por el Consejo de Estado, por haberse proferido el laudo después del vencimiento del término fijado para la duración del Arbitramento, equivalente a las siguientes sumas:

DESCRIPCION	VALOR
PAGO DE HONORARIOS ABOGADO	\$120.000.000,00
PAGO DE SOLICITUD ARBITRAL	\$ 1.194.800,00
PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL (50%)	\$ 30.957.240,00
PAGO DE HONORARIOS DE ARBITROS (50%)	\$ 12.402.204,00
PAGO DE HONORARIOS DE LOS 2 PERITOS	\$ 4.463.332,00
PROTOCOLIZACION DEL LAUDO ARBITRAL - NOTARIA CUARTA DEL CIRCULO DE SANTA MARTA	\$ 6.852.389,00
TOTAL	\$ 175.870.001,00

EL VALOR DE ESTE RUBRO CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL PESOS CON UN CENTAVO

Al Señor **JUAN PABLO GONZALEZ ROSALES**, quien obra en calidad de Gerente y Representante Legal de **J.P.G. & CIA S.A., GERMAN VILLANUEVA CALDERON, RICARDO LUIS CANABAL GUZMAN**; integrantes todos de la **UNION TEMPORAL OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA - OBRESAN**, el valor del **LUCRO CESANTE** que sufrieron y sufren con ocasión de la Falla en el ejercicio de la Función Jurisdiccional por Particulares, acaecida en la expedición del Laudo Arbitral de fecha 22 de agosto de 2011 por el Tribunal de Arbitramento de **J.P.G. & CIA S.A., GERMAN VILLANUEVA CALDERON y RICARDO LUIS CANABAL GUZMAN, INTEGRANTES DE LA UNION TEMPORAL OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA - OBRESAN-, CON UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA**, del cual fuere declarada la Nulidad mediante providencia por el Consejo de Estado, por haberse proferido el laudo después del vencimiento del término fijado para la duración del Arbitramento, equivalente a las siguientes sumas:

DESCRIPCION	VALOR
Obras pendientes por legalizar, al pago indexado de la suma de SESENTA y SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS (\$67.192.800,00) , de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este laudo.	\$67.192.800,00
DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS (\$17.565.510,72) , por haber incurrido en mora en el pago de la totalidad del valor del contrato.	\$17.565.510,72
DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVENTA Y CINCO PESOS (\$244.419.095,00) , por concepto de mayor permanencia en obra, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este laudo.	\$244.419.095,00
pagadas a la sociedad J.P.G. & CIA S.A., GERMAN VILLANUEVA CALDERON y RICARDO LUIS CANABAL GUZMAN, integrantes de la UNION TEMPORAL OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA -	

OBRESAN-; y causarán intereses comerciales moratorios a partir del día siguiente de la fecha de ejecutoria del laudo DESDE AGOSTO 22 DE 2011(PENDIENTE POR LIQUIDAR EN LA CONCILIACION)	
SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS (\$62.511.880,00), por concepto de costas del proceso.	\$62.511.880,00
VEINTISEIS MILLONES DE PESOS (\$26.000.000,00), por concepto de Agencias en Derecho, a favor de la parte Convocante.	\$26.000.000,00
TOTAL	\$417.689.285.72

EL VALOR DE ESTE RUBRO ES CUATROCIENTOS DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS, CON SETENTA Y DOS CENTAVOS.

PRUEBAS

Pruebas Documentales Aportadas

a) Que demuestran la Existencia de la Unión Temporal OBRESAN

1. Documento privado del 15 de Noviembre de 2005, por medio del cual se constituyo la UNION TEMPORAL OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA - OBRESAN.

b) Documentos que demuestran la Solicitud de Convocatoria de un Tribunal de Arbitramento.

1. Solicitud de Convocatoria de Tribunal de Arbitramento, ante el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Santa Marta.
2. Oficio N° 24-022458 de fecha 08 de Febrero de 2010 elevado por la Directora del Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Santa Marta.
3. Solicitud de Convocatoria de Tribunal de Arbitramento, ante el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Santa Marta, de fecha 08 de abril de 2010.
4. Oficio N° 24-023026 de fecha 14 de Abril de 2010 elevado por la Directora del Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Santa Marta.
5. Oficio N° 24-023131 de fecha 27 de Abril de 2010 elevado por la Directora del Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Santa Marta.
6. Audiencia de Designación de Árbitros, de fecha 12 de mayo de 2010.
7. Audiencia de Designación de Árbitros, de fecha 24 de mayo de 2010.
8. Oficio N° 24-023420 de fecha 31 de Mayo de 2010 elevado por la Directora del Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Santa Marta.

OBRESAN, y causarán intereses comerciales moratorios a partir del día siguiente de la fecha de ejecutoria del laudo DESDE AGOSTO 22 DE 2011 (PENDIENTE POR LIQUIDAR EN LA CONCILIACIÓN).	Corzo Mantilla, Abogado
SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS (\$62.511.880,00), por concepto de costas del proceso.	\$62.511.880,00
VEINTISEIS MILLONES DE PESOS (\$26.000.000,00), por concepto de Agencias en Derecho, a favor de la parte Convocante.	\$26.000.000,00
TOTAL	\$417.689.285.72

EL VALOR DE ESTE RUBRO ES CUATROCIENTOS DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS, CON SETENTA Y DOS CENTAVOS

PRUEBAS

Pruebas Documentales Aportadas

- a) Que demuestran la Existencia de la Unión Temporal OBRESAN
1. Documento privado del 15 de Noviembre de 2005, por medio del cual se constituyo la UNION TEMPORAL OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA - OBRESAN.
- b) Documentos que demuestran la Solicitud de Convocatoria de un Tribunal de Arbitramento.
 1. Solicitud de Convocatoria de Tribunal de Arbitramento, ante el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Santa Marta.
 2. Oficio N° 24-022458 de fecha 08 de Febrero de 2010 elevado por la Directora del Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Santa Marta.
 3. Solicitud de Convocatoria de Tribunal de Arbitramento, ante el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Santa Marta, de fecha 08 de abril de 2010.
 4. Oficio N° 24-023026 de fecha 14 de Abril de 2010 elevado por la Directora del Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Santa Marta.
 5. Oficio N° 24-023131 de fecha 27 de Abril de 2010 elevado por la Directora del Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Santa Marta.
 6. Audiencia de Designación de Árbitros, de fecha 12 de mayo de 2010.
 7. Audiencia de Designación de Árbitros, de fecha 24 de mayo de 2010.
 8. Oficio N° 24-023420 de fecha 31 de Mayo de 2010 elevado por la Directora del Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Santa Marta.

9. Oficio N° 24-023489 de fecha 09 de Junio de 2010 elevado por la Directora del Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Santa Marta.
10. Oficio N° 24-023592 de fecha 25 de Junio de 2010 elevado por la Directora del Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Santa Marta.
11. Audiencia de Designación de Árbitros, de fecha 08 de Julio de 2010.
12. Oficio N° 24-023826 de fecha 25 de Junio de 2010 elevado por la Directora del Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Santa Marta.
13. Acta N° 01 de 03 de Agosto de 2010, correspondiente a la Audiencia de Instalación del Tribunal de Arbitramento, expedido por el Tribunal de Arbitramento.
14. Memorial de fecha de recibo 09 de agosto de 2010, por medio del cual se subsana la Demanda, el cual consta de 20 folios útiles.
15. Acta N° 02 de 17 de Agosto de 2010, correspondiente a la Admisión de la Demanda, expedida por el Tribunal de Arbitramento.
16. Memorial de fecha 31 de agosto de 2010, contenido de la Contestación de la Demanda, presentado por el apoderado judicial de la Universidad del Magdalena.
17. Acta N° 04 de 08 de Septiembre de 2010, correspondiente al traslado de las Excepciones formuladas por la parte Convocada, expedida por el Tribunal de Arbitramento.
18. Acta N° 05 de 30 de Septiembre de 2010, correspondiente a la fijación de la fecha de la Audiencia de Conciliación o Primera de Trámite, expedida por el Tribunal de Arbitramento.
19. Acta N° 06 de 14 de Octubre de 2010, expedida por el Tribunal de Arbitramento.
20. Acta N° 07 de 25 de Octubre de 2010, expedida por el Tribunal de Arbitramento.
21. Memorial contenido del Recurso de Reposición, instaurado por el Apoderado de la Parte Convocante, a los 25 días de octubre de 2010.
22. Acta N° 09 de 2 de Diciembre de 2010, expedida por el Tribunal de Arbitramento.
23. Acta N° 10 de 15 de Diciembre de 2010, expedida por el Tribunal de Arbitramento.
24. Acta de Posesión del Perito Sr. Roberto Robles Castañeda, de fecha 15 de Diciembre de 2010.
25. Acta N° 12 de 19 de Enero de 2011, expedida por el Tribunal de Arbitramento.
26. Dictamen pericial rendido a los 24 días de febrero de 2011 por el Perito Técnico, ante el Tribunal de Arbitramento.
27. Dictamen pericial rendido a los 28 días de febrero de 2011 por el Perito Técnico, ante el Tribunal de Arbitramento.
28. Acta N° 14 de 04 de Marzo de 2011, expedida por el Tribunal de Arbitramento.
29. Solicitud de Aclaración y Complementación del Dictamen Pericial Contable, formulada a los 9 días de Marzo de 2011, por el apoderado de la parte Convocante.
30. Acta N° 15 de fecha 14 de Marzo de 2011, expedida por el Tribunal de Arbitramento del Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Santa Marta.
31. Solicitud de Aclaración formulada a los 14 días de marzo de 2014 por el Apoderado de la Universidad del Magdalena.

32. Acta N° 16 de fecha 17 de Marzo de 2011, expedida por el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Santa Marta.
33. Memorial de fecha 23 de marzo de 2011, contentivo de la aclaración y complementación del dictamen pericial contable.
34. Memorial de fecha 24 de marzo de 2011, contentivo de la aclaración del dictamen pericial contable.
35. Acta N° 17 de fecha 24 de Marzo de 2011, expedida por el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Santa Marta.
36. Memorial de fecha 25 de marzo de 2011, contentivo de la solicitud de Objeción por Error Grave del Dictamen Pericial Contable
37. Acta N° 18 de fecha 30 de Marzo de 2011, expedida por el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Santa Marta.
38. Memorial de fecha 31 de marzo de 2011, contentivo del pago de honorarios de los peritos, allegado por el apoderado de la Parte Convocante.
39. Memorial de fecha 04 de abril de 2011, por medio del cual se descurre la solicitud de objeción por error grave, allegado por el apoderado de la Universidad del Magdalena.
40. Acta N° 19 de fecha 05 de Abril de 2011, expedida por el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Santa Marta.
41. Acta N° 20 de fecha 13 de Abril de 2011, expedida por el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Santa Marta.
42. Memorial de alegatos de conclusión, presentados por el apoderado de la UT OBRESAN, a los 13 días de abril de 2011.
43. Memorial de alegatos de conclusión, presentados por el apoderado de la Universidad del Magdalena, a los 13 días de abril de 2011.
44. Memorial de alegatos de conclusión, presentados por la Procuradora Judicial N° 43 para Asuntos Administrativos, a los 13 días de abril de 2011.
45. Acta N° 21 de fecha 26 de Abril de 2011, expedida por el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Santa Marta.
46. Solicitud de Tacha del Testigo y de los documentos aportados por el mismo, y memorial de alegatos suscrito por el apoderado de la parte convocante.
47. Acta N° 22 de fecha 09 de Mayo de 2011, expedida por el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Santa Marta.
48. Acta N° 23 de fecha 20 de Mayo de 2011, expedida por el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Santa Marta.
49. Acta N° 25 de fecha 04 de Agosto de 2011, expedida por el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Santa Marta.
50. Acta N° 26 de fecha 22 de Agosto de 2011, expedida por el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Santa Marta.
51. Laudo Arbitral de fecha 22 de agosto de 2011, expedida por el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Santa Marta.
52. Solicitud de adición o complementación del laudo arbitral elevada por la parte Convocante.
53. Acta N° 27 del 31 de agosto de 2011, proferida por el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Santa Marta.

54. Acta N° 28 del 07 de Septiembre de 2011, proferida por el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Santa Marta.
55. Acta N° 29 del 14 de Septiembre de 2011, proferida por el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Santa Marta.
56. Sentencia del Consejo de Estado de fecha 25 de abril de 2012, proferida dentro del proceso radicado bajo el N° 11001-03-26-000-2011-00064-01.
57. Solicitud de Nueva Convocatoria del Tribunal de Arbitramento, elevada a los 16 días de agosto de 2012 por el apoderado de UT OBRESAN.
58. Oficio N° 24-029324 del 22 de agosto de 2012, suscrito por la Directora de la Cámara de Comercio de Santa Marta.
59. Reiteración de la solicitud de Nueva Convocatoria del Tribunal de Arbitramento, elevada a los 03 días de Septiembre de 2012 por el apoderado de UT OBRESAN.
60. Oficio N° 24-029507 del 12 de Septiembre de 2012, suscrito por la Directora de la Cámara de Comercio de Santa Marta.

DECLARACION JURAMENTADA

Declaro a su vez bajo la gravedad del juramento que no se ha interpuesto solicitud de Conciliación Extra Judicial el Derecho, para restablecer el derecho vulnerado y este es el único medio que se utiliza.

COMPETENCIA

Es de su Despacho, según lo dispuesto en el artículo 132, Modificado Decreto 597 de 1988, art. 2° modificado por la Ley 446 de 1998 art. 40, numeral 1° del C.C.A., pues se trata de una Solicitud de Conciliación Extrajudicial, como requisito de procedibilidad para accionar en Reparación Directa.

ANEXOS

Los documentos aducidos como pruebas, soporte de notificación a los convocados, copia de la solicitud de conciliación para el archivo del Despacho y poder para actuar.

NOTIFICACIONES

Mis poderdantes recibirán notificaciones en la Carrera 1 No 22 No 58 piso 8 Bodega Edificio Bahía Centro Santa Marta- Magdalena, villanauta@yahoo.com.

La NACION – MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA, en la Giralda Cra. 8 N° 7-83 Bogota DC, o al Correo notificacionesjudiciales@mininterior.gov.co

La CAMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA - CENTRO DE ARBITRAJE, CONCILIACIÓN Y AMIGABLE COMPOSICIÓN, en la Av. Del Libertador N° 13-94 Teléfono 4230828, Santa Marta.

LA UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA, en la Cra. 32 N° 22-08 de la Ciudad de Santa Marta o al Correo notificacionjudicial@unimagdalena.edu.co.


800 742
Luis Alejandro Corzo Mantilla 29
Abogado

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en la Cll. 70 N° 4-60 Bogotá DC,
conciliaciónextrajudicial@defensajuridica.gov.co

Al suscrito en la oficina de abogado, ubicada en la Av. 5 N° 9-58 Edificio Mutuo Auxilio Oficina 305,
de la ciudad de San José de Cúcuta.

Agradezco su vocación de servicio en la Administración de Justicia.

Atentamente.


Luis Alejandro Corzo Mantilla
CC N° 88.2139.988 de Cúcuta.
TP N° 101.576 del C. S de la J

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA
SECRETARÍA GENERAL
Ley 1437 de 2011

RADICACIÓN: N° 47-001-2333-003-2014-00241-00.
DEMANDANTE: UNION TEMPORAL OBRAS ESPECIALES SANTA MARTA.
DEMANDADO: MINDEFENSA.
MEDIO DE CONTROL: REPARACION DIRECTA.

P A S O A L D E S P A C H O

Del Magistrado Edgar Vásquez Contreras, hoy 17 de julio de 2015, el expediente de la referencia, informándole que se encuentra pendiente para fijar fecha de audiencia inicial.

Lo anterior consta de dos (2) cuadernos (1) principal con 743 folios útiles incluyendo el presente y un (1) cuaderno accesorio con 129 folios útiles y siete (7) CD's.

Sírvase proveer lo que estime pertinente.

Atentamente,

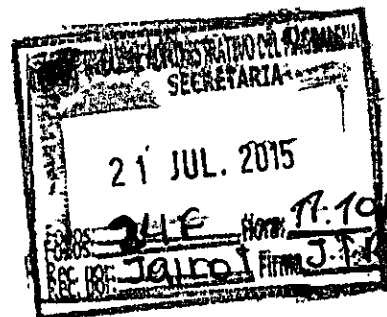


Jaime Ortiz Romero
Secretario

Santa Marta, Julio de 2015.

GRABADO

Doctor
EDGAR ALEXI VASQUEZ CONTRERAS
 Magistrado
 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA
 E. S. D.



Referencia: Llamamiento en Garantía.

Radicado: 47-001-2333-003-2014-000241-00

Accionante: Unión Temporal Obras Especiales de Santa Marta (OBRESAN)

Demandado: Nación – Ministerio de Justicia – Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición de la Cámara de Comercio y Universidad Del Magdalena

Medio de Control: Reparación Directa

MANUEL VIVES NOGUERA, varón, mayor, vecino de esta ciudad, domiciliado en la carrera 1 A # 27 – 46 Apartamento 7, identificado con la cédula de Ciudadanía numero 84.454.719 expedida en Santa Marta y la Tarjeta Profesional número 169.144 del Consejo Superior de la Judicatura, en mi calidad de apoderado especial de la Cámara de Comercio de Santa Marta Para el Magdalena, de conformidad con lo establecido en el artículo 225 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, respetuosamente formulo **LLAMAMIENTO EN GARANTIA** a **ACE SEGUROS S.A.**, identificado con Nit. 860.026.518 - 6, sociedad con domicilio principal en Bogotá; en la Calle 72 Numero 10 – 71 piso 7 y representada por el señor **JAIME ANTONIO LOZANO FLOREZ**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 17.194.167 de Bogotá, domiciliado en Bogotá, quien otorgó poder para actuar en todos los asuntos judiciales y extrajudiciales a **JORGE RODRIGUEZ ROJAS**, identificado con cedula de ciudadanía numero 17.044.874 expedida en Bogotá. Lo anterior de conformidad con los siguientes:

HECHOS

1. Ante el Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Santa Marta, **J.P.G. & CIA S.A., GERMAN VILLANUEVA CALDERÓN Y RICARDO LUIS CANABAL GUZMÁN**, integrantes de la **UNIÓN TEMPORAL OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA – OBRESAN**, solicitaron convocatoria de tribunal de arbitramento, cuyo demandado era la **UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA**, con ocasión a las controversias surgidas entre las partes, derivadas del contrato de obra No. 000146 de fecha treinta (30) de diciembre de dos mil cinco (2005).

2. Mediante Laudo Arbitral de fecha veintidós (22) de agosto de dos mil once (2011), el tribunal de arbitramento conformado por los doctores: **JUAN ALBERTO POLO FIGUEROA, MIGUEL ANGEL POLO CAMPO y DIANA PATRICIA BOVEA MENDINUETA**, resolvió las controversias surgidas entre las partes.

3. El Consejo de Estado mediante providencia proferida el día veinticinco (25) de abril de dos mil doce (2012), decretó la nulidad del mencionado laudo arbitral.

863 2 745-
4. Que J.P.G. & CIA S.A., GERMAN VILLANUEVA CALDERÓN Y RICARDO LUIS CANABAL GUZMÁN, integrantes de la UNIÓN TEMPORAL OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA – OBRESAN con ocasión a los hechos antes descritos, interpuso acción de reparación directa, demandando a la entidad que represento.

5. Que la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio - Confecámaras tomó la póliza No. 12-14837 cuya vigencia era del 2014/04/01 hasta 2015/03/31 y entre los asegurados del grupo 2 se encuentra la Cámara de Comercio de Santa Marta, donde se observa cubierta la prestación de servicios profesionales, relacionados a las labores propias de un centro de conciliación y arbitraje: Arbitraje, trámite arbitral (fase previa, fase arbitral), expedida por la compañía de seguros ACE SEGUROS SA, a quien llamamos en garantía, por cuanto la póliza era aplicable al momento de ocurrencia del hecho que ahora es demandado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Artículo 225 y siguientes de la ley 1437 de 2011
Artículo 64 y siguientes de la ley 1564 de 2012

PETICIONES

Se solicita se vincule en LLAMAMIENTO EN GARANTÍA a la compañía de seguros ACE SEGUROS SA.

PRUEBAS

- 1.- Certificado de existencia y representación de ACE SEGUROS S.A.
- 2.- Copia de la póliza de seguro de responsabilidad número 12-14837 expedida por ACE SEGUROS S.A.

ANEXOS

1. Las pruebas documentales anteriormente relacionadas.

NOTIFICACIONES

ACE SEGUROS S.A., en la Calle 72 Numero 10 – 71 piso 7, Bogotá.

La parte demandada, Camara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena, las recibirá en la dirección de correo electrónico: camarasm@ccsm.org.co y en la Avenida del Libertador 13 - 94 de la ciudad de Santa Marta. Su apoderado en el correo electrónico mvivesnoguera@hotmail.com o en la carrera 1 A Número 27 – 46 apartamento 7 de la ciudad de Santa Marta.

Agradezco de antemano su amable colaboración.

Atentamente,


MANUEL VIVES NOGUERA

Q.C. 84.454.719 de Santa Marta
T.P. 169.144 del Consejo Superior de la Judicatura

CERTIFICACION:

La Suscrita Directora del Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena, certifica el texto del artículo 7 del Reglamento del Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición, así:

ARTICULO 7. aprobado por el Ministerio del Interior y de Justicia el 23 de Abril de 2008: *"El Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Santa Marta, sin perjuicio de la obligación de mantener mecanismos eficaces y seguros para la óptima prestación de sus servicios, no asume responsabilidad por actuaciones personales de los conciliadores, árbitros, secretarios de tribunales de arbitraje y amigables componedores, quienes responderán por hechos o actos suyos cuando haya lugar".*

ARTICULO 7. Modificado y aprobado por el Ministerio de Justicia y del Derecho el 23 de Julio de 2014: *"El Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena, sin perjuicio de la obligación de mantener mecanismos eficaces y seguros para la óptima prestación de sus servicios, no asume responsabilidad por actuaciones personales de los conciliadores en los tramites de conciliación y en los procedimientos de insolvencia de persona natural no comerciante, árbitros, secretarios de tribunales de arbitraje, amigables componedores y peritos, quienes responderán por hechos o actos suyos cuando haya lugar".*

Dado en Santa Marta, a los veinticinco (25) días del mes de marzo de dos mil quince (2015).


BIBIANA M. OVALLE DE ANDREIS

Directora Centro de Arbitraje, Conciliación
Y Amigable Composición

Av. Libertador 13-94 FAX: 4238820
NIT 891780.160-9
C.D. JUAN DE LOS RIOS DE CARABOLLO
C.D. P.M.

1,0
FECHA: 2010-02-01 OPERACION: CANCELACION
CANTIDAD: 0001 RECIBO NO. 01170001
HORA: 18:23:36 PAGINA: 1
USUARIO: ACH-ATA

UNION TEMPORAL OBRESAN
NIT/C.C: 0900065925 RUE.
FORMA DE PAGO: - TA ** INC. PRIVADO **
DESCRIPCION MONED VALOR

SOLICITUD ARBITRA PESOS	**	1,030,000
IVA POR PAGAR (SE PESOS	**	124,000
TOTAL PAGADO..... PESOS	**	1,154,000

--- (Una) Factura ---

NO 130616147 13-04 PM:423052

391, 733, 160-2

ORGANISMO PARA EL DESARROLLO REGIONAL

FILE# 2006-0005 OFFICE : D1C421025039

4001 194000 004001 - RECEIVED NO. 5000883945

Página 1 de 1

REPORT OF CPUSA - CHINA

ROQUE MORALES DIANA PATRICIA - PRESID

00057439974 RUE

00004 01. PABO: CH 43 CML. PRIVADO-88

DEBENTURE	WORLD	VALUER
-----------	-------	--------

PROCEEDING SUPP OF L. REVENUE 98 12, 674, 774

306 104 PAGE 111 01309 \$\$\$ 2,027,964

1. Model Factorial

743 83
18696
30-24-20
24 B

Santa Marta, D. T. C. H., Abril 8 de 2010

SEÑORES
CENTRO DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
CÁMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA
Ciudad.

Asunto: SOLICITUD DE CONVOCATORIA TRIBUNAL DE ARBITRAMIENTO DE JUAN PABLO GONZALEZ, actuando como gerente y representante legal de J.P.G. & CIA S.A., GERMÁN VILLANUEVA CALDERÓN Y RICARDO LUIS CABANAL GUZMÁN miembros de la UNIÓN TEMPORAL OBRESÁN – OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA CONTRA LA UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA.

GABRIEL FRANCISCO GONZÁLEZ BARRAZA, mayor de edad, domiciliado y residenciado en la ciudad de Santa Marta, D. T. C. H., identificado civil y profesionalmente como aparece al pie de mi firma, actuando de conformidad con la sustitución del poder que me hiciera el Dr. **JAIRO ALBERTO BARROS ACOSTA**, en calidad de apoderado de **JUAN PABLO GONZALEZ**, actuando como gerente y representante legal de **J.P.G. & CIA S.A., GERMÁN VILLANUEVA CALDERÓN Y RICARDO LUIS CABANAL GUZMÁN** miembros de la **UNIÓN TEMPORAL OBRESÁN – OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA** constituida mediante documento privado del 15 de noviembre de 2005 suscrito en la ciudad de Barranquilla, Y DE CADA UNO DE SUS MIEMBROS: **J.P.G & CIA S.A.**, sociedad colombiana, constituida mediante Escritura Pública No.50 de la Notaría única de Santo Tomas del 28 de enero de 1993, inscrita el 25 de febrero de 1993 bajo el No. 48.547 del libro respectivo de la Cámara de Comercio de Barranquilla, **GERMÁN VILLANUEVA CALDERÓN**, mayor de edad, domiciliado en Santa Marta, D. T. C. H., identificado con la cédula de ciudadanía No. 12.547.660 expedida en Santa Marta Y **RICARDO LUIS CABANAL GUZMÁN**, mayor de edad, domiciliado en Santa Marta, D. T. C. H., identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.872.383 expedida en Montería, en adelante conjuntamente denominados **LOS CONVOCANTES**; según poder debidamente otorgado por el Representante Legal de la **UNIÓN TEMPORAL OBRESÁN – OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA** y por cada uno de sus miembros, el cual, junto con la respectiva sustitución, acompaña la presente demanda; mediante el presente escrito solicito la convocatoria de un Tribunal de Arbitramento para que conozca y falle la presente demanda que interpongo en contra de la **UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA**, en adelante **LA UNIVERSIDAD** o **LA**

744 84

CONVOCADA, ente autónomo universitario del orden departamental, creado por Ordenanza No. 5 de 1957, con domicilio en la ciudad de Santa Marta, D. T. C. H., representada legalmente por **RUTHBER ANTONIO ESCORCIA CABALLERO** o por quien haga sus veces; para que previo los trámites legales del **PROCESO ARBITRAL** y en ejercicio de lo dispuesto por la cláusula compromisoria del **"CONTRATO DE OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO B DE SALONES SUSCRITO ENTRE UNIÓN TEMPORAL OBRESAN - OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA Y LA UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA"** No. 0146, celebrado entre las partes el día 30 de diciembre del 2005, mediante laudo arbitral que haga tránsito a cosa juzgada, se provean favorablemente las siguientes:

PRETENSIONES:

PRIMERA: Que se declare que entre la **UNIÓN TEMPORAL OBRESAN - OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA** y la **UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA** se celebró el **"CONTRATO DE OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO B DE SALONES SUSCRITO ENTRE UNIÓN TEMPORAL OBRESAN - OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA Y LA UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA"** No. 0146 del 30 de diciembre del 2005.

SEGUNDA: Que se declare que durante la ejecución del contrato se produjo el **DESEQUILIBRIO ECONÓMICO** del mismo, en detrimento de **LOS CONVOCANTES**, por causas atribuibles a **LA CONVOCADA**, tales como la mayor permanencia en obra; la entrega y aprobación tardía de los diseños; la suspensión reiterada de las actividades; las mayores cantidades de obra por las modificaciones extemporáneas realizadas en el diseño del proyecto, que implicaron la adición, supresión y cambios en la obra; los reajustes a los precios del contrato; el atraso en el pago de las facturas por avance de obra y los costos financieros en que incurrió el contratista al asumir con sus propios recursos la solución a las cargas económicas adicionales del contrato.

TERCERA: Que como consecuencia de la anterior declaración y con el propósito de restablecer el equilibrio económico al contratista se condene a **LA CONVOCADA** al pago, a favor de **LOS CONVOCANTES**, de las siguientes sumas de dinero, o las que resulten probadas:

- a) Por concepto de **MAYOR PERMANENCIA EN OBRA** ocasionada por la imposibilidad de ejecutar la obra en las condiciones de modo, tiempo y características inicialmente contratadas, la suma de **SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS (\$688.543.584.00) M./L.**, o la que resulte probada.

- b) Por concepto de **MAYOR VALOR LOS ÍTEM DE CUBIERTA Y PUENTES DE ACERO**, debido a las variaciones de los diseños durante la ejecución de las obras, las cuales superaron las cantidades ofertadas y contratadas, la suma de **CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO VEINTITRES PESOS (\$146.722.123.00) M./L.**, o la que resulte probada.
- c) Por concepto de **REMONTAJE DE LA CUBIERTA DE ACERO** del edificio, la suma de **TREINTA Y SIETE MILLONES DE PESOS (\$37.000.000.00) M./L.**, o la que resulte probada.

CUARTA: Que como consecuencia de la anterior declaración se condene a **LA UNIVERSIDAD** al pago de los intereses moratorios correspondientes a la máxima tasa legal permitida conforme lo establece el Código de Comercio, vigente al momento que se efectúe el pago, contados a partir de la ejecutoria del respectivo Laudo Arbitral.

QUINTA: Que se ordene a **LA CONVOCADA** pagar a favor de **LOS CONVOCANTES** la suma de **CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON 10 CENTAVOS (\$49.842.248,10) M./L.**, por concepto de **"VALOR OBRAS SIN LEGALIZAR A FAVOR DEL CONTRATISTA"**, la cual fue reconocida por **LA UNIVERSIDAD** en el Acta de Liquidación, pero aún no ha sido cancelada.

SEXTA: Que se condene a **LA CONVOCADA** a pagar a **LOS CONVOCANTES** los intereses moratorios por el pago tardío de facturas por concepto de avances de obra, correspondientes a la máxima tasa legal permitida conforme lo establece el Código de Comercio, vigente al momento que se efectúe el pago, contados a partir de la ejecutoria del respectivo Laudo Arbitral.

SÉPTIMA: Que se condene a **LA CONVOCADA** a pagar a **LOS CONVOCANTES** la suma que resulte probada, por concepto de intereses bancarios que **EL CONTRATISTA** debió pagar a los bancos por los préstamos efectuados para poder cubrir los costos ocasionados por la mayor permanencia contractual, al asumir con sus propios recursos la solución a las cargas económicas adicionales del contrato.

OCTAVA: Que se condene a **LA UNIVERSIDAD** a pagar a **LOS CONVOCANTES** la suma de **CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL PESOS (\$41.926.000.00) M./L.**, por concepto de la utilidad contractual dejada de recibir, debido a que por las circunstancias de la ejecución contractual el contratista no solo tuvo pérdidas sino que dejó de recibir la utilidad a que tenía derecho.

NOVENA: Que se condene a **LA UNIVERSIDAD** a pagar a **LOS CONVOCANTES** la suma de **CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS (\$150.000.000.00)**

M./L., por concepto de perjuicios sufridos al atender la vía gubernativa, presentando los recursos correspondientes en contra de las resoluciones No. 269 del 27 de abril del 2007 y 291 del 15 de mayo del 2007, por medio de las cuales se impusieron unas multas y se declaró la caducidad del Contrato de Obras No. 0146 del 30 de diciembre del 2005, respectivamente, las que a la postre fueron revocadas por **LA UNIVERSIDAD**, con fundamento, entre otros, en que "20.18. - Debido a la demora de la Universidad del Magdalena en entregar esos planos, como los de otros motivos atrás señalados, se suscribieron contratos adicionales... En conclusión, se desprende que esos planos, diseños de la estructura metálica de rampa y puentes, necesariamente alteraron el programa de trabajo o cronograma... Observamos aquí que el incumplimiento de la Universidad generó una razonable imposibilidad de cumplir..."; cargas que **EL CONTRATISTA** no estaba obligado a soportar, defendiéndose de medidas que fueron revocadas tardíamente por **LA UNIVERSIDAD**.

DÉCIMA: Que se condene a la parte demandada al pago del **DAÑO EMERGENTE, LUCRO CESANTE** y demás perjuicios causados a **LOS CONVOCANTES**, con ocasión del desequilibrio económico del contrato.

DÉCIMA PRIMERA: Que se actualice el valor de la condena a la fecha del pronunciamiento del respectivo Laudo Arbitral, con base en la variación del índice de precios al consumidor, para el periodo comprendido entre la fecha en que se presentó el desequilibrio y la fecha en que se produzca el pago efectivo de la condena.

DÉCIMA SEGUNDA: Que consecuencia de las anteriores declaraciones y sobre todas ellas se condene a **LA UNIVERSIDAD** a pagar a favor de **LOS CONVOCANTES** los intereses comerciales y moratorios a la máxima tasa legal permitida conforme lo dispuesto en el Código de Comercio, vigente al momento en que se efectúe el pago, sobre el valor histórico actualizado, contados a partir de la ejecutoria del Laudo Arbitral.

DÉCIMA TERCERA: Que en el caso de que **LA UNIVERSIDAD** no diere cumplimiento inmediato al correspondiente Laudo Arbitral, se le condene al pago de los intereses comerciales y moratorios sobre el monto de la cantidad líquida de la condena, hasta su cancelación, de conformidad con el artículo 177 del C. C. A.

DÉCIMA QUINTA: Que se condene a **LA UNIVERSIDAD** a pagar a favor de **LOS CONVOCANTES** las costas y las agencias en derecho que ocasione el presente proceso arbitral.

HECHOS:

1. La **UNIÓN TEMPORAL OBRESÁN – OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA** y la **UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA** celebraron el “**CONTRATO DE OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO B DE SALONES SUSCRITO ENTRE UNIÓN TEMPORAL OBRESÁN – OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA Y LA UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA**” No. 0146 del 30 de diciembre del 2005, cuyo **OBJETO**, según lo dispuesto en la **CLÁUSULA TERCÉRA** del mismo, consistió en: “... la construcción del edificio “B” de salones, en los términos, condiciones, plazos y estipulaciones que se prescriben en el presente documento, así como en los términos de referencia, y la propuesta presentada por el contratista el 18 de Noviembre de 2005 y los documentos anexos de acuerdo con las especificaciones técnicas y los valores unitarios expresados en la propuesta presentada, la cual para todos los efectos legales forman parte integral del presente contrato”.
2. Según lo pactado en la **CLÁUSULA SÉPTIMA** “el **VALOR TOTAL** del presente contrato para todos los efectos legales y fiscales es de **DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES CINTO OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS CON NOVENTA CENTAVOS M/C (\$2'653'182.803.90)**”.
3. De acuerdo con la **CLÁUSULA NOVENA** “el término de duración del presente contrato será de doscientos cuarenta (240) días calendario a partir de la entrega del anticipo y de la suscripción del acta de iniciación de la obra”.
4. El contrato sufrió sucesivas modificaciones, a través de los otrosí No. 1 al 5, para ampliar el plazo contractual, el plazo empezó a correr el día 6 de marzo del 2006 en que se firmó el Acta de Inicio y la obra fue recibida finalmente por **LA UNIVERSIDAD** el día 30 de septiembre de 2007, incluso por fuera de la última modificación realizada a través del Otrosí No. 5, por causas atribuibles (tanto las modificaciones al plazo contractual, como el recibo final tardío de las obras) enteramente a **LA UNIVERSIDAD**, como fehacientemente lo reconocen la **Resolución No. 622 del 17 de diciembre del 2007**, expedida por Rector (e) de **LA UNIVERSIDAD** y “por medio de la cual se desata un recurso de reposición y se revoca una resolución de declaratoria de caducidad del Contrato Nro. 0146 de 2005”; la **Resolución No. 623 del 17 de diciembre del 2007**, de la Rectoría, “por medio de la cual se revoca una resolución que declara la configuración de un siniestro que afecta el amparo de una garantía de cumplimiento” y la **Resolución No. 621 del 17 de diciembre del 2007**, también expedida por el Rector (e), “por medio de la cual se desata un recurso de reposición y se revoca una resolución de imposición de multa a un Contratista”.
5. En el considerando No. 20 de la mencionada **Resolución No. 622 del 17 de diciembre del 2007** **LA UNIVERSIDAD** reconoce que: “20.- Respecto a las obras materia del incumplimiento del contratista originario de la declaratoria de

caducidad del contrato de Obras Nro. 0146-2005, cual es el atraso de la estructura metálica de rampas y puentes y otras obras, tenemos: 20.1).- Hubo demoras en entregar los planos correspondientes a la estructura de rampa y puente, como se verá más adelante en una serie de documentos como actas... 20.2) .- Hubo cambio en la estructura de rampa de concreto reforzado a estructura metálica, tal como se acredita en varios documentos, entre éstos el Oficio UTI-032-07 para Rectoría, de fecha Julio 10 de 2006, donde se desprende demora de la Universidad en entregar esos planos, los cuales habían sido requeridos desde marzo de 2006... 20.3).- Acta de suspensión de frente de obra Nro. 3, de fecha Febrero 23 de 2007, referente al retraso en la instalación del cielo raso, dado que la instalación de la ductería del aire acondicionado y decanaturas no se había iniciado a esa fecha, obra a cargo de otro contratista diferente a la Unión Temporal, y solamente éstas obras relacionadas con el aire acondicionado se contrataron a principios del 2007 y sólo hasta el 24 de abril de 2007 se iniciaron esos trabajos... 20.4.- Acta de suspensión de frente de obra Nro. 1, de fecha Enero 20 de 2007, referente a las actividades de la estructura metálica de cubierta, puentes y rampas. Suspensión que se extendió hasta Febrero 8 de 2007-12-10... 20.11.- El Interventor mediante escrito de fecha 9 de septiembre de 2006., que debido al retardo de la Universidad en entregar los diseños definitivos de la estructura metálica, le ha sido imposible fundir las vigas aéreas como la viga canal y reitera que el atraso no es por causa imputable a él como contratista... 20.15.- Las actividades de cielo raso Dry Wall se suspendieron mediante Acta Nro. 04-2007, por cuanto la instalación de aires acondicionado (contratista diferente a Obresán) fueron iniciados el día 26 de marzo de 2007 y solo hasta el día 24 de abril de 2007 se concluyó el primer salón. Actividad reiniciada en Abril 25 de 2007, según acta de reinicio y ahí se señala que dicha actividad se terminaría el 15 de mayo de 2007, es decir, el mismo día de expedición de la resolución de caducidad, la cual es motivo de impugnación... 20.18.- Debido a la demora de la Universidad del Magdalena en entregar esos planos, diseños, como de los otros motivos atrás señalados, se suscribieron Contratos Adicionales ampliando el plazo de ejecución del contrato inicial, y en lo referente a las estructuras metálicas, éstas se cambiaron de concreto a metálicas, como se lee en los adicionales que los mismos obedecieron a: la necesidad de efectuar el cambio de la estructura de rampas de concreto reforzado a estructuras metalizadas, por lo cual se requería el rediseño. Adición Nro. 01 de fecha Octubre 27 de 2006, plazo que se amplió en 21 días calendario... En conclusión, se desprende que esos planos, diseños de la estructura metálica de rampa y puentes, necesariamente alteraron el programa de trabajo o cronograma donde se tuviera de manera aproximada el plazo dentro del cual el contratista debía ejecutar el frente correspondiente a esas actividades, es decir, construir la estructura metálica de puentes y rampas".

De esta forma, LA UNIVERSIDAD reconoció que la afectación del plazo contractual y, por ende, la mayor permanencia se debió a causas atribuibles a ella, como la entrega tardía de los diseños constructivos, lo cual era su obligación, según el numeral 2 de la CLÁUSULA CUARTA del contrato.

6. En la página 11 de la **Resolución No. 622 del 17 de diciembre del 2007** LA UNIVERSIDAD reconoce su propia culpa en la afectación del plazo contractual, por incumplimientos de sus obligaciones, cuando afirma que: "Observamos aquí que el incumplimiento de la Universidad generó una razonable imposibilidad de cumplir, donde es principio universal de derecho que a lo imposible nadie está obligado. No basta, pues, que se registre un incumplimiento cualquiera, para que el contratista deje de cumplir con sus deberes jurídicos, la Administración debe cumplir primero los suyos, de ahí que si la universidad estaba en la obligación de entregar oportunamente los planos y diseños de las obras objeto del incumplimiento parcial del contratista no lo hizo después de varios meses de haberse iniciado la ejecución del contrato (Marzo 6 de 2006), así como otras circunstancias anotadas en esta parte considerativa como era el cambio de estructuras de concreta a metálicas, cambios de los pisos de adoquines porque los que estaban instalando no tenían las medidas y especificaciones, retraso del contratista diferente a Obresán en la entrega de la instalación de los aires acondicionados, y otras más que se citan en esta resolución, cómo pretender que bajo esas circunstancias reiterativas de incumplimiento de la Universidad, si se le exija cumplimiento al Contratista y se sancione con una declaratoria de caducidad del Contrato de Obras Nro. 0146-2005 A este extremo no se puede llegar, máximo como se dijo atrás, que la Universidad venía incurriendo en una serie de incumplimientos de sus obligaciones contractuales, más aún, demorando injustificadamente la entrega de diseños, de la localización definitiva para la ubicación y distribución de los puntos eléctricos de los auditorios, aulas, torreón, oficinas de decanaturas y direcciones de programas, tan sólo éstos a menos de un mes de declararse la caducidad todavía no se habían entregados y otras conductas que implicaban que el proyecto tal como venía por esos incumplimientos de la Universidad no se iban a cumplir, circunstancia ésta que ya había vislumbrado el mismo Director de Interventoría en el oficio relacionado en el Numeral 20.16 de esta parte considerativa,. Aquí hay que tener presente los principios de buena fe y de justicia y equidad, por cuanto esos incumplimientos de la Universidad antes citados, implicaba necesariamente que el proyecto sufriera retrasos, máxime que la misma Interventoría en documentos escrito ya lo había previsto y de ahí que se suscribieran los Contratos adicionales, donde el plazo de ejecución inicial del contrato 0146-07 se ampliara. Estamos frente a un abuso del derecho de la Universidad que si bien es cierto que tiene por ley el control y dirección de los contratos que suscribe, también es cierto que ella es la que debe dar ejemplo de cumplimiento y mal haría; como lo hizo al proferir la resolución aquí recurrida, aprovecharse de su propia culpa, desconociendo principio del derecho civil que "a nadie le es permitido aprovecharse de su propia culpa".

7. En la parte final de la parte considerativa de la **Resolución No. 622 del 17 de diciembre del 2007** LA UNIVERSIDAD reconoce su incumplimiento cuando afirma que "como consecuencia de lo expuesto en esta parte considerativa, por haberse violado el debido proceso y por consiguiente el derecho de defensa,

además aplicando el principio de equidad (que es uno de los principios generales del derecho), a que hace alusión el Artículo 13 del Acuerdo 019 de Abril 25 de 2002 del Consejo Superior de la Universidad del Magdalena (Estatuto de Contratación), el cual es aceptado por la ciencia del Derecho, precisamente por cuanto en el presente caso, además de que la Universidad hizo abuso de su derecho y de su posición dominante (en su calidad de Administración Contratante) para superar la situación de injusticia en que incurrió al proferir la resolución aquí recurrida, aplicando de manera inflexible y estricta la ley, en el caso de marras la Universidad no obró con justicia frente a sus reiterados incumplimiento que verdaderamente desencadenaron el incumplimiento de Obresán para lo cual es preciso recordar para este caso la famosa frase de Bonnetcasé que "el derecho puede encontrarse en contradicción con la ley", donde precisamente hay que decir que el derecho no es otra cosa que la noción de equidad, debido a que no hay que separar el derecho de la ley, de aquí que tal principio de equidad se tenga como fuente del derecho y sea uno de los principios generales del mismo".

8. Debido a los incumplimientos de LA UNIVERSIDAD en la entrega de los diseños de algunos aspectos de la obra, como los de las rampas y puentes y la estructura metálica de la cubierta del edificio, fue necesario suspender algunos frentes de obra, lo cual tuvo incidencia en la ejecución del contrato de acuerdo con el cronograma aprobado, afectando, en consecuencia, el plazo contractual.

9. LA UNIVERSIDAD realizó variadas y sucesivas modificaciones en los diseños de las estructuras metálicas de las rampas, puentes y cubierta, a pesar de que se demoró en la entrega inicial de estos diseños, los cuales debieron estar listos al momento de iniciar la ejecución de las obras, es decir, el 6 de marzo del 2006.

10. Dados los continuos y reiterados cambios en los diseños de las rampas, puentes y cubierta metálica, fue necesario desmontar una primera cubierta instalada, para luego volver a montar otra cubierta, de acuerdo con los cambios de diseños realizados por LA UNIVERSIDAD.

11. LA UNIVERSIDAD demoró la instalación de los aires acondicionados, los cuales se habían contratado a otro contratista, hecho que afectó la normal ejecución de los demás trabajos a cargo de LOS CONVOCANTES.

12. LA UNIVERSIDAD expidió la Resolución No. 0269 del 27 de abril del 2007, por medio de la cual impuso unas multas a LOS CONVOCANTES.

13. Posteriormente expidió la Resolución No. 0291 del 15 de mayo del 2007, por medio de la cual declaró la caducidad del contrato y el siniestro de incumplimiento.

14. Extemporáneamente, mucho después del plazo legal, LA UNIVERSIDAD resolvió los recursos interpuestos por EL CONTRATISTA en contra las resoluciones mencionadas en los hechos 11 y 12 de la presente demanda,

751 91

decidiendo la revocatoria de las mismas, respectivamente a través de la Resolución No. 622, la Resolución No. 623 y la Resolución No. 621, todas del 17 de diciembre del 2007.

15. La vacilación de LA UNIVERSIDAD en resolver los recursos en contra de las mencionadas resoluciones, originó que se demorara en recibir la obra terminada, pese a los continuos requerimientos del CONTRATISTA, hecho que finalmente se produjo el día 30 de septiembre del 2007.

16. LA UNIVERSIDAD canceló tardíamente facturas por avance parcial de obra, hecho que afectó el flujo de caja de LOS CONVOCANTES para la debida ejecución del contrato, obligándolos a buscar créditos en el sistema financiero.

17. Durante la ejecución de los trabajos LA CONVOCADA ordenó a LOS CONVOCANTES la realización de obras no previstas inicialmente y de mayores cantidades de obras a través del Otrosí No. 3, lo que tuvo incidencia en la afectación del plazo contractual.

18. LA UNIVERSIDAD ordenó al CONTRATISTA la ejecución de nuevas y mayores cantidades de obra, como consta en las comunicaciones UTI-040 del 23 de agosto del 2007 y UTI-043 del 14 de septiembre del 2007, cuando ya había declarado la caducidad del contrato, las cuales no fueron debidamente legalizadas por LA UNIVERSIDAD. De este hecho también se da cuenta en el Acta de Liquidación del contrato.

19. Pese a lo anterior, LA UNIVERSIDAD, aún habiendo reconocido que ordenó tales obras no ha cancelado el valor correspondiente a \$49.842.248,10, pese a haberlo reconocido también en audiencia de conciliación celebrada en la ciudad de Santa Marta.

20. EL CONTRATISTA a más de haber tenido pérdidas durante la ejecución del contrato, no obtuvo la utilidad esperada.

21. El contrato fue liquidado mediante Acta de Liquidación suscrita por las partes el día 30 de enero del 2008, en la cual el CONTRATISTA dejó salvedades, con el fin de no declarar a paz y salvo a LA UNIVERSIDAD y de abrir la posibilidad a demandar a la misma.

FUNDAMENTOS DE DERECHO DE LAS PRETENSIONES:

Artículos 95, numeral 1º del inciso 3º de la Constitución Política; 1496 y 1497 del Código Civil.

Artículos 3º, numeral 3º de DERECHOS DE LA UNIVERSIDAD, numeral 3º de DEBERES DE LA UNIVERSIDAD, 4º, numeral 1º de DERECHOS DEL CONTRATISTA de la Resolución No. 432 del 2004, "por medio de la cual se reglamenta el Estatuto de Contratación de la Universidad del Magdalena", por medio del cual LA UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA en ejercicio de su autonomía, estableció en sus normas internas de contratación la figura y el principio del restablecimiento económico de los contratos que celebre, como un deber y derecho de la Universidad y un derecho de los contratistas.

Además de lo anterior, fundamenta en derecho esta demanda la CLÁUSULA CUARTA del Contrato de Obra No. 0146 del 30 de diciembre del 2005.

PRUEBAS Y ANEXOS:

A. PRUEBAS DOCUMENTALES:

Con el fin de que se hagan valer dentro del proceso aporlo las siguientes pruebas:

1. Original del Certificado de Existencia y Representación Legal de la sociedad J.P.G & CIA S.A. ✓
2. Copia del Contrato de Obra No. 0146 del 30 de diciembre del 2005, celebrado entre LA UNIÓN TEMPORAL OBRESAN - OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA y LA UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA ✓
3. Copia del Pliego de Condiciones
4. Copia de la oferta presentada por LA UNIÓN TEMPORAL OBRESAN
5. Copia del Acta de Conciliación de la Procuraduría
6. Copia de las comunicaciones de fecha 1º de octubre del 2008 - "CONSTANCIA DE ENTREGA FINAL DE OBRA CONTRATO DE OBRAS No. 0146 DE DICIEMBRE 30 DE 2005", mediante el cual el Representante Legal de la UNIÓN TEMPORAL OBRESAN requirió a LA UNIVERSIDAD para que recibiera la obra terminada.
7. Copia del "Acta de Inspección del estado de las obras del Edificio Ciénaga Grande correspondiente al Contrato de Obras Número 0146 de diciembre 30 de 2005" suscrita entre la UNIÓN TEMPORAL OBRESAN y LA UNIVERSIDAD
8. Copia de la Resolución No. 432 del 2004, "por medio de la cual se reglamenta el Estatuto de Contratación de la Universidad del Magdalena", en treinta y siete (37) folios. ✓
9. Copia del Acuerdo No. 19 de 2002, "por medio del cual se adopta el estatuto de contratación de la Universidad del Magdalena" ✓
10. Copia autenticada de la Resolución No. 622 del 17 de diciembre de 2007, "por medio de la cual se desata un recurso de reposición y se revoca una resolución de declaratoria de caducidad del Contrato Nro. 0146 de 2005" ✓

11. Copia autenticada de la Resolución 623 del 17 de diciembre de 2007, "por medio de la cual se revoca una resolución que declara la configuración de un siniestro que afecta el amparo de una garantía de cumplimiento
12. Copia autenticada de la Resolución No. 621 del 17 de diciembre de 2007, "por medio de la cual se desata un recurso de reposición y se revoca una resolución de imposición de multa a un contratista".
13. Copia autenticada de la Comunicación Interna UTI-027-07 del 25 de mayo de 2007 de la Unidad Técnica de Interventoría.
14. Copia autenticada de la Comunicación Interna UTI-020-07 del 26 de abril de 2007.
15. Copia autenticada de la Comunicación Interna UTI-017-07 del 13 de abril de 2007.
16. Copia autenticada de la Comunicación Interna UTI-016-07 del 9 de abril de 2007.
17. Copia autenticada de la Comunicación Interna UTI-014-07 del 27 de marzo de 2007.
18. Copia autenticada de la Comunicación Interna UTI-012-07 del 28 de febrero de 2007.
19. Copia autenticada del Informe No. 4 de la Unidad Técnica de Interventoría - UTI sobre el Contrato de Obras No. 000146 de 2005.
20. Copia autenticada de la Comunicación Interna UTI-010-07 del 23 de febrero de 2007.
21. Copia autenticada de la Comunicación Interna UTI-009-07 del 16 de abril de 2007.
22. Copia autenticada de la Comunicación Interna UTI-007-07 del 1º de febrero de 2007.
23. Copia autenticada de la Comunicación Interna UTI-005-07 del 29 de enero de 2007.
24. Copia autenticada de la Comunicación Interna UTI-004-07 del 29 de enero de 2007.
25. Copia autenticada de la Comunicación Interna UTI-001-07 del 17 de enero de 2007.
26. Copia autenticada de la Comunicación Interna UTI-056-06 del 16 de noviembre de 2006 dirigida al Ing. Isaac Pértuz.
27. Copia autenticada de la Comunicación Interna UTI-056-06 del 10 de noviembre de 2006 dirigida a la Rectora (e) Dra. Carmen Yadira Romero Ávila.
28. Copia autenticada de la Comunicación Interna UTI-055-06 del 12 de octubre de 2006.
29. Copia autenticada de la Comunicación Interna UTI-054-06 del 20 de octubre de 2006.
30. Copia autenticada de la Comunicación Interna UTI-052-06 del 6 de octubre de 2006.
31. Copia autenticada de la Comunicación Interna UTI-050-06 del 25 de septiembre de 2006.

32. Copia autenticada de la Comunicación Interna UTI-049-06 del 18 de septiembre de 2006. ✓
33. Copia autenticada de la Comunicación Interna UTI-048-06 del 15 de septiembre de 2006. ✓
34. Copia autenticada de la Comunicación Interna UTI-046-06 del 11 de septiembre de 2006. ✓
35. Copia autenticada de la Comunicación Interna UTI-045-06 del 8 de septiembre de 2006. ✓
36. Copia autenticada de la Comunicación Interna UTI-044-06 del 8 de septiembre de 2006. ✓
37. Copia autenticada de la Comunicación Interna UTI-043-06 del 13 de septiembre de 2006. ✓
38. Copia autenticada de la Comunicación Interna UTI-042-06 del 1º de septiembre de 2006. ✓
39. Copia autenticada de la Comunicación Interna UTI-040-06 del 23 de agosto de 2006. ✓
40. Copia autenticada de la Comunicación Interna UTI-039-06 del 23 de agosto de 2006. ✓
41. Copia autenticada de la Comunicación Interna UTI-037-06 del 31 de julio de 2006. ✓
42. Copia autenticada de la Comunicación Interna UTI-032-06 del 10 de julio de 2006. ✓
43. Copia autenticada de la Comunicación Interna UTI-027-06 del 2 de junio de 2006. ✓
44. Copia autenticada de la Comunicación Interna UTI-025-06 del 29 de mayo de 2006. ✓
45. Copia autenticada de la Comunicación Interna UTI-023-06 del 15 de mayo de 2006. ✓
46. Copia autenticada de la Comunicación Interna UTI-021-06 del 10 de mayo de 2006. ✓
47. Copia autenticada de la Comunicación CS-IT-032 del 19 de abril de 2006 de la UTI dirigida al Ing. Hans Van Heyl Cleves. ✓
48. Copia autenticada de la Comunicación CS-IT-031 del 19 de abril de 2006 dirigida al Ing. Isaac Pertuz. ✓
49. Copia autenticada de la Comunicación CS-IT-029 del 6 de abril de 2006 dirigida al Ing. Hans Van Heyl. ✓
50. Copia autenticada de la Comunicación CS-IT-028 del 6 de abril de 2006 dirigida al Ing. Isaac Pertuz. ✓
51. Copia autenticada de la Comunicación CS-IT-024 del 28 de marzo de 2006. ✓
52. Copia autenticada de la Comunicación CS-IT-016 del 21 de marzo de 2006. ✓
53. Copia autenticada de la Comunicación CS-IT-015 del 3 de marzo de 2006. ✓
54. Copia autenticada de la Comunicación CS-IT-009 del 23 de febrero de 2006. ✓
55. Copia autenticada de la Comunicación CS-IT-008 del 21 de febrero de 2006 dirigida al Sr. Efraín Olivos. ✓

56. Copia autenticada de la Comunicación CS-IT-006 del 21 de febrero de 2006 dirigida al Ing. Pablo Vera. ✓
57. Copia autenticada del Oficio No. 00002465 del 15 de febrero de 2006 dirigida al Ing. Pablo Vera. ✓
58. Copia autenticada de la Comunicación CS-IT-004 del 20 de febrero de 2006. ✓
59. Copia autenticada de la Comunicación CS-IT-003 del 16 de febrero de 2006. ✓
60. Copia autenticada del Acta del Comité No. 22. ✓
61. Copia autenticada del Acta del Comité No. 21. ✓
62. Copia autenticada del Acta del Comité No. 19. ✓
63. Copia autenticada del Acta del Comité No. 18. ✓
64. Copia autenticada del Acta del Comité No. 17. ✓
65. Copia autenticada del Acta del Comité No. 16. ✓
66. Copia autenticada del Acta del Comité No. 15. ✓
67. Copia autenticada del Acta del Comité No. 2. ✓
68. Copia autenticada del Acta del Comité No. 14. ✓
69. Copia autenticada del Acta de Acuerdo del 17 de febrero de 2006. ✓
70. Copia autenticada del Acta del Comité No. 13. ✓
71. Copia autenticada del Acta del Comité No. 12. ✓
72. Copia autenticada del Acta del Comité No. 11. ✓
73. Copia autenticada del Acta del Comité No. 10. ✓
74. Copia autenticada del Acta del Comité No. 9. ✓
75. Copia autenticada del Acta del Comité No. 8. ✓
76. Copia autenticada del Acta del Comité No. 7. ✓
77. Copia autenticada del Acta del Comité No. 6. ✓
78. Copia autenticada del Acta del Comité No. 5. ✓
79. Copia autenticada del Acta del Comité No. 4. ✓
80. Copia autenticada del Acta del Comité No. 3. ✓
81. Copia autenticada del Acta del Comité No. 1. ✓
82. Copia autenticada del Acta de Inicio de Obra del 6 de marzo de 2006. ✓
83. Copia autenticada del Acta Trazado de Ejes del 1º de marzo de 2006. ✓
84. Copia autenticada del Acta de Obra del 20 de febrero de 2006. ✓
85. Copia autenticada del Acta de Entrega del Lote del 14 de febrero de 2006. ✓
86. Copia autenticada del Acta de Empalme del 9 de febrero de 2006. ✓
87. Copia autenticada de la Carta del 15 de mayo de 2007 de Construagro S. en C. dirigida al Dr. William Reñán como Secretario General. ✓
88. Copia autenticada de la Comunicación de la Oficina Aseñora de Planta Física No. OAF-038-07 del 23 de abril de 2007, dirigida al Rector Juan Carlos Dib Diazgranados. ✓
89. Copia autenticada del Acta de Reinicio de Frente de Obra No. 2 del 16 de febrero de 2007. ✓
90. Copia autenticada del Acta de Suspensión de Frente de Obra No. 2. ✓

- 96
756
91. Copia autenticada de la Comunicación del 6 de febrero del 2007 de estudio y concepto jurídico con respecto al Oficio OAF-010-07 sobre la solicitud de autorización de expedición de CDP. ✓
 92. Copia autenticada del Oficio MC-49-06 del 27 de diciembre de 2006 (originalmente mal fechado, debido a que se se puso 27/12/2007 cuando realmente se expidió en el año 2006) en el que el Ing. Han Van Heyl hizo entrega de la memoria de cálculo y diseño estructural. ✓
 93. Copia autenticada del Oficio del 19 de septiembre de 2006 por el cual el Ing. Hans Van Heyl entregó los diseños de estructura metálica (detalles complementarios). ✓
 94. Copia autenticada del Oficio de la Vicerrectoría de Investigación No. VDI-761-06 del 14 de septiembre de 2006. ✓
 95. Copia autenticada del Oficio VDI-762-06 del 14 de septiembre de 2006. ✓
 96. Copia autenticada del Oficio VDI-505-06 del 8 de agosto de 2006. ✓
 97. Copia autenticada del Oficio OAF-008-06 del 22 de mayo de 2006. ✓
 98. Copia de los Otrosí No. 1 al 5.
 99. Original de la Comunicación del 6 de julio del 2006 del Contratista a la Universidad.
 100. Original de la Comunicación del 9 de septiembre del 2006 del Contratista a la Universidad. ✓
 101. Original de la Comunicación del 7 de noviembre del 2006 del Contratista a la Universidad.
 102. Original de la Comunicación del 7 de febrero del 2007 del Contratista a la Universidad.
 103. Original de la Comunicación del 12 de marzo del 2007 del Contratista a la Universidad.
 104. Original de la Comunicación del 15 de mayo del 2007 del Contratista a la Universidad.
 105. Los soportes contables en TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO (385) folios, contenidos en el Anexo 2.
 106. Original de la modificación en los diseños a la cubierta realizada por LA UNIVERSIDAD el 12 de febrero del 2007.
 107. Original de la carta del 24 de octubre del 2006 enviada a la Unión Temporal por CONSTRUAGRO S. en C., subcontratista de la Unión Temporal para la fabricación y montaje de las estructuras metálicas.
 108. Acta de Entrega Final de Obras suscrita entre el subcontratista CONSTRUAGRO S. en C. y la Unión Temporal el día 22 de junio del 2007.
 109. Copia de la comunicación No. UTI-024- 06 del 15 de septiembre de 2006 de la Unidad Técnica de Interventoría de la Universidad del Magdalena dirigida al Contratista. ✓
 110. Copia de la comunicación No. UTI-029- 06 del 30 de octubre de 2006 de la Unidad Técnica de Interventoría de la Universidad del Magdalena dirigida al Contratista. ✓

- 97
752
111. Copia de la comunicación No. UTI-032- 06 del 11 de diciembre de 2006 de la Unidad Técnica de Interventoría de la Universidad del Magdalena dirigida al Contratista y de sus dos (2) anexos. ✓
 112. Copia de la comunicación No. UTI-033- 07 del 27 de enero de 2007 de la Unidad Técnica de Interventoría de la Universidad del Magdalena dirigida al Contratista. ✓ 22
 113. Copia de la comunicación No. UTI-02- 07 del 12 de febrero de 2007 de la Unidad Técnica de Interventoría de la Universidad del Magdalena dirigida al Contratista. ✓
 114. Copia de la comunicación No. UTI-08- 07 del 29 de marzo de 2007 de la Unidad Técnica de Interventoría de la Universidad del Magdalena dirigida al Contratista y de su anexo. ✓
 115. Copia de la comunicación No. UTI-010- 07 del 31 de marzo de 2007 de la Unidad Técnica de Interventoría de la Universidad del Magdalena dirigida al Contratista. ✓

B. PRUEBAS PERICIALES:

Solicito se ordene la práctica de sendos peritajes técnico y contable, realizados por perito con amplia experiencia en construcción de obras similares y en contaduría, respectivamente, con el fin de que determinen:

- a. La mayor cantidad de acero de la cubierta y las rampas con respecto a lo solicitado en el Pliego de Condiciones y a lo ofertado y lo finalmente construido, de conformidad con los diseños entregados y sus modificaciones.
- b. La corroboración de los valores presentados en las pretensiones de la presente demanda, así como la determinación en los documentos contables de la UNIÓN TEMPORAL OBRESÁN si hubo o no pérdidas y la determinación de su cuantía; así como la de los demás perjuicios sufridos y la cuantificación de la utilidad dejada de percibir.

En su oportunidad se presentarán los respectivos cuestionarios para ser absueltos por los peritos designados.

C. Las que de oficio a bien tenga decretar el Tribunal.

- ANEXOS:

1. Poder debidamente otorgado por los intergrantes de la **UNIÓN TEMPORAL OBRESÁN – OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA** al **Dr. JAIRO ALBERTO BARROS ACOSTA**.
2. Sustitución del poder del **Dr. JAIRO ALBERTO BARROS ACOSTA** en el suscrito.

3. Las pruebas documentales aportadas, en DOS (2) ANEXOS DE PRUEBAS.
4. Las copias de la demanda y sus anexos.

CUANTÍA:

Por reclamarse una suma básica superior a MIL TREINTA Y CINCO MILLONES SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PÉSOES (\$1.035.077.955.00) M./L. más las otras solicitadas por concepto de intereses, actualización correspondiente y perjuicios, se trata de un proceso de mayor cuantía.

COMPETENCIA:

El Tribunal de Arbitramento es competente de conformidad con lo establecido en la Cláusula Compromisoria, contenida en la CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA del contrato, en el que las partes acordaron la solución de diferencias a través de tribunal de arbitramento.

1. El tenor literal de la CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA del señalado contrato es: "cualquier diferencia relacionada con la ejecución de este contrato asociada a aspectos técnicos será resuelta a través de amigables componedores de acuerdo con los procedimientos establecidos en el Decreto 2279 de 1989, la Ley 23 de 1991, el Decreto 2651 de 1991, la Ley 446 de 1998, el Decreto 1818 de 1998, y reglamentación similar, que serán seleccionados de común acuerdo por las partes. La amigable composición tendrá lugar en las instalaciones de la Universidad del Magdalena. Cada parte podrá acudir a este mecanismo, mediante previo aviso a la otra parte. El procedimiento de la amigable composición se regirá por las siguientes reglas: las partes podrán presentar sus alegatos y documentos que los sustenten en términos de diez (10) días hábiles contados desde la fecha de aviso de la contraparte. Los amigables componedores a su vez tendrán plazo máximo de veinte (20) días hábiles para resolver las disputas por escrito, los cuales se contarán a partir del día siguiente del término previsto en la parte anterior. Los alegatos deberán contener: una explicación de los fundamentos técnicos y contractuales que sustenten la posición de la respectiva parte. Las peticiones que haga la respectiva parte a los amigables componedores para resolver las diferencias. Cada parte deberá cooperar en la realización de cualquier investigación que los amigables componedores efectúen relacionada con la disputa en cuestión. Las decisiones adoptadas por los amigables componedores como resultado de la amigable composición tendrán fuerza vinculante para las partes de acuerdo con la ley. Los gastos que ocasionen la intervención de los amigables componedores

serán cubiertos por la parte que resulte vencida. Cualquier divergencia que surja entre las partes como ocasión, celebración, ejecución o liquidación de este contrato, no sea posible solucionar amigablemente, serán dirimidos por un tribunal de arbitramento de conformidad con las disposiciones antes citadas. Las disputas relacionadas con la aplicación y los efectos de las cláusulas de caducidad, terminación unilateral no podrán ser sometidas a arbitramento. La intervención de los amibales componedores o tribunal de arbitramento no suspenderá la ejecución del contrato salvo que aquellos aspectos cuya ejecución dependa necesariamente de la solución de la controversia". (Subrayado fuera de texto).

2. De conformidad con lo acordado por las partes, es claro que la amigable composición se pactó única y exclusivamente para resolver cualquier diferencia **sobre aspectos técnicos** durante o relacionada con la ejecución, mientras que el arbitraje se acordó para resolver "cualquier divergencia que surja entre las partes como ocasión, celebración, ejecución o liquidación de este contrato, no sea posible solucionar amigablemente, serán dirimidos por un tribunal de arbitramento de conformidad con las disposiciones antes citadas". El hecho de que diga que no sea posible resolver amigablemente no implica que antes, y como requisito indispensable, deba agotarse la amigable composición, pues habrá asuntos, como el que nos ocupa, que no se circunscriben a aspectos técnicos de la ejecución del contrato. Más bien quiso decirse que las partes, antes de acudir al arbitraje deberían intentar solucionar amigablemente sus diferencias, fórmula que se utiliza en la mayoría de los contratos, pudiendo acudir a la solución directa o a la conciliación, por ejemplo, pero esta disposición ni expresa, ni implícitamente dice que no se podrá acudir al arbitraje si antes no se busca una solución amigable o si antes no se utiliza la figura de la amigable composición.

3. De la misma forma en que la jurisprudencia abundantemente ha reconocido que las partes renuncian a la cláusula compromisoria cuando una de ellas acude a la jurisdicción estatal, de igual manera debería entenderse que si una de las partes acude al arbitraje, implica que renunció a la posibilidad de buscar acuerdo directo con la contraparte, sin que ello inhiba su derecho de constitucional de acceder a que se le administre justicia, a través de particulares investidos transitoriamente de tan significativa función estatal, en virtud de lo dispuesto en los artículos 116 y 229 de la Constitución Política.

4. En todo caso, en el asunto que nos ocupa las partes agotaron previamente una vía amigable, en la medida en que acudieron en conciliación a buscar solución a parte de sus divergencias, sin que fuere posible, como consta en los hechos y pruebas de la demanda presentada con la solicitud de convocatoria de un tribunal de arbitramento, con lo que se entendería cumplida la parte del pacto, en el sentido de acudir al tribunal de arbitramento cuando no fuere posible solucionar amigablemente sus diferencias.

755100

5. De lo que si estamos conscientes es de las deficiencias de la cláusula compromisoria, pues no se señalan algunos elementos importantes de la misma, como la definición de si el arbitraje será independiente, institucional o legal; de si será en derecho, técnico o en equidad, pero las mismas normas legales (Arts. 115, 116 y 118 del Decreto 1818 de 1998) resuelven el problema, pues, como ustedes saben, a falta de expresión sobre estos aspectos se entiende que el arbitraje será en derecho y legal.

Aún con estas deficiencias, y apelando a la naturaleza de pacto "en virtud del cual los contratantes acuerdan someter las eventuales diferencias que puedan surgir con ocasión del mismo, a la decisión de un tribunal arbitral" y a la autonomía de la cláusula (Art. 118 Decreto 1818 de 1998), reiteramos nuestra solicitud de iniciar y adelantar los trámites del proceso arbitral solicitado, pues las partes tendrán la ocasión, durante el trámite prearbitral, de modificar de común acuerdo la cláusula compromisoria, de ser necesario.

6. Ahora bien, aun cuando en la cláusula compromisoria no se acordó cuál centro de arbitraje asumiría la competencia, como ustedes saben, corresponde al del domicilio del demandado, como lo dispone el Num. 1° del Art. 129 del Decreto 1818 de 1998, que es la ciudad de Santa Marta, D. T. C. H., por lo que hemos acudido a ustedes.

NOTIFICACIONES:

EL DEMANDANTE:

Recibe notificaciones personales en la calle 11 No. 1c-23 Ed. Posihueica, Oficina 309, teléfonos: 421 46 76 – 421 40 70, de esta ciudad.

LA UNIVERSIDAD:

Recibe notificaciones personales en la Carrera 32 No. 22 – 08, Sector San Pedro Alejandrino, en el Edificio Administrativo del Campus Universitario, teléfono: 430 12 92, de esta ciudad.

Atentamente,


GABRIEL FRANCISCO GONZALEZ BARRAZA
C. C. No. 12.609.489
T. P. No. 41.964 Minjusticia

CENTRO DE CONCILIACION Y ASESORIA
CAMARA DE COMERCIO
SANTA MARTA

Este documento fue peritajeado por

por Gabriel Francisco

Gonzalez B.

Se

Re: 12 GOY 485

exp. 12 GOY 485

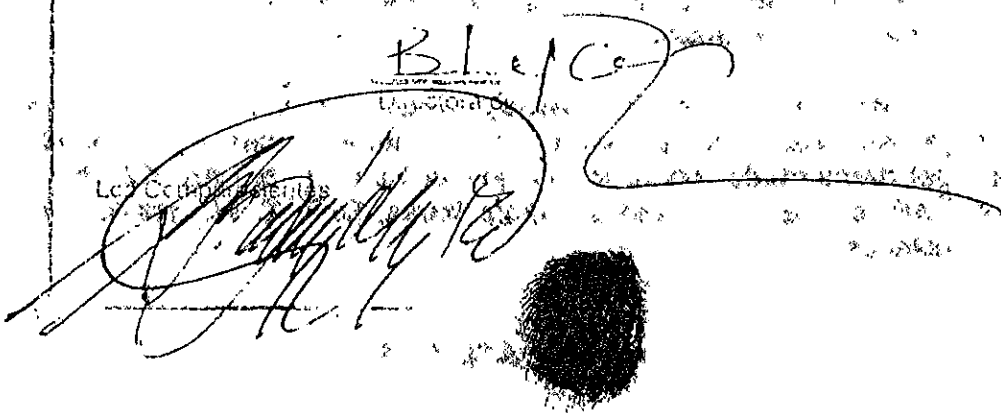
la sup. la pte. del

de Exp. de Goy. de 2010

Bleice

Unidad de

Los Centros



000140 1 70-101

CONTRATO DE OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO B DE SALONES SUSCRITO ENTRE UNIÓN TEMPORAL OBRESAN - OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA Y LA UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA.

000078

Entre los suscritos a saber, **CARLOS EDUARDO CAICEDO OMAR**, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con la cedula de ciudadanía No 85.448.338. Expedida en Santa Marta, quien obra en este acto en su calidad de Rector y Representante Legal de la Universidad del Magdalena, designado por Acuerdo Superior No. 19 de 2004, ente autónomo universitario del orden departamental creado por ordenanza No 5 de 1957 y quien en adelante se denominara **LA UNIVERSIDAD**, y de otra parte **GERMAN VILLANUEVA CALDERON**, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con la cedula de ciudadanía No. 12.547.600 expedida en Santa Marta, quien actúa en nombre y representación de la **UNIÓN TEMPORAL OBRESAN - OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA**, constituido por documento privado de fecha 15 de noviembre de 2005 y que en adelante se llamará **EL CONTRATISTA**, se ha convenido celebrar el presente contrato de obras públicas con la Universidad, el cual se rige por las cláusulas que a continuación se pactan, previas las siguientes consideraciones: A) Que la Universidad del Magdalena suscribió un contrato de consultoría para la elaboración de los diseños arquitectónicos y estructurales de la Ciudadela Universitaria que cumplan con las exigencias de la comunidad universitaria en su pleno cumplimiento. B) Que en el proyecto de la Ciudadela Universitaria se ha concebido el diseño de (3) tres Bloques de Salones destinados todos ellos para aulas y oficinas del área académica. C) Que el año 2002 se adelantó el proceso de contratación y construcción del Bloque "A" de salones. D). Que el Consejo Superior facultó al Rector mediante Acuerdo 028 de 2003 para la contratación de la construcción de edificio "B" de salones hasta por \$3'252'562.000,00. E). Que la capacidad del Bloque "A" de salones "Sierra Nevada" se encuentra copada en su totalidad. F). Que la proyección de crecimiento de la población estudiantil de la universidad se estima en 11.000 estudiantes para el año 2008, para la cual la infraestructura de salones resulta insuficiente. G). Que el proyecto denominado Edificio "B" de salones se encuentra debidamente inscrito y registrado en el banco de proyectos de la Universidad del Magdalena, bajo el código 4010102014. H). Que en el presupuesto de la Universidad del Magdalena vigencia 2005 existen los recursos necesarios para llevar a cabo la construcción del Edificio "B" de salones, según consta en el certificado de responsabilidad No 0002524 por valor de \$ 2'627'648.030,00. I). Que la Curaduría Urbana No 2 de la ciudad de Santa Marta ha expedido la licencia de construcción No 019, con una vigencia de Marzo 17 de 2005 hasta Marzo 17 de 2007 para el edificio "B" de salones. J). Que el artículo 69 de la Carta Política al garantizar la autonomía universitaria, autoriza a las universidades para darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos de acuerdo con la ley. K). Que en desarrollo del artículo supra, el gobierno nacional expidió el régimen jurídico de la educación superior - ley 30 de 1992 - en la cual se señala, que el carácter especial del régimen de las universidades estatales u oficiales comprende el régimen contractual. L). Que así mismo el artículo 93 de la ley 30 de 1992, establece que los contratos que celebren dichas instituciones se regirán por las normas de derecho privado y sus efectos estarán sujetos a la normas civiles y comerciales según la naturaleza del contrato. M). Que con arreglo a los principios de igualdad, moralidad, transparencia, economía, celeridad, eficacia, imparcialidad, responsabilidad y publicidad que rigen a la función administrativa, el Consejo Superior de la Universidad del Magdalena adoptó mediante el Acuerdo 019 de 2002, el Estatuto de Contratación de la Universidad del Magdalena, reglamentado por resolución rectoral No 436 de 2004. N). Que el Rector solo esta facultado para realizar contrataciones hasta por cuantía de quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes, por lo que el Consejo Superior le autorizó para contratar por una cuantía superior la construcción y dotación del edificio "B" de salones mediante Acuerdo Superior 028 de 2003. O). Que el Rector amparado en estas facultades ordenó la

2

1

2

3

000079

apertura de la convocatoria 001 de 2005, cuyo objeto fue la construcción del edificio "B" de salones de la Universidad del Magdalena, previa expedición del certificado de disponibilidad presupuestal, mediante resolución No 431 del 12 de Octubre de 2005 cursando para ello invitaciones a (21) veintiún **proponentes indexados en la base de datos de contratistas y proponentes**, quienes se inscriben libremente a la misma, que lleva la institución al 30 de Octubre de 2005. P). Que la universidad realizó la publicación de la convocatoria, para la inscripción en el registro de proponentes, en el periódico el Heraldo, informativo de amplia circulación regional y nacional, el día Viernes 13 de mayo de 2005, al igual que en el portal Web Institucional www.unimagdalena.edu.co tal y como consta en la certificación anexa al cuaderno de los términos de referencia expedida por el P.U. Asesor de Nuevas Tecnologías. Q). Que la apertura de la convocatoria se realizó el 13 de Octubre de 2005 y determina su cierre el 9 de Noviembre de 2005. R). Que por resolución No 460 de 2005, y por solicitud de varios de los proponentes, Cizalla Ltda. y Ricardo Canabal Guzmán, dado que se requería mayor tiempo para recaudar la información necesaria para la presentación de las propuestas, la Universidad del Magdalena resolvió ampliar el plazo para la recepción de las propuestas hasta el 18 de Noviembre de 2005, como fecha de cierre de la convocatoria. S). Que asistieron a la visita al sitio de la obra, (4) cuatro personas entre las naturales y jurídicas, AVILA LTDA, CIZALLA LTDA Y/O ZABARAIN LTDA, GERMAN VILLANUEVA Y RICARDO LUIS CANABAL. T). Que adquirieron los pliegos y presentaron propuestas, UNION TEMPORAL OBRESAN - Conformada por los proponentes invitados JPG Y CIA S.A, RICARDO LUIS CANABAL GUZMÁN y GERMAN VILLANUEVA CALDERÓN-, AVILA LTDA y CIZALLA LTDA. U). Que con el fin de analizar y evaluar las propuestas presentadas, el Rector de la Universidad para garantizar el cumplimiento de los principios de economía, transparencia y selección objetiva, mediante resolución No 486 de 2005 conformó el comité evaluador integrado por la Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno, Ingeniera Amalia Martínez García, el Jefe de la Sección de Contabilidad, Contador Antonio Cotes Hernández, los docentes de planta Ingeniero Oscar Moreno Torres y el Ingeniero Gustavo Chang Nieto con la asesoría del Abogado externo Oscar Castillo Moscarella. V). Que durante el periodo comprendido del 22 de noviembre al 2 Diciembre de 2005, fue realizada la evaluación de las propuestas presentadas por parte del comité conformado para tal fin. W). Que de conformidad con el numeral 217 de los términos de referencia la Secretaría General de la Universidad del Magdalena procedió a dar traslado a los oferentes por un termino común de (5) cinco días hábiles de los resultados de la evaluaciones para que se hicieran las respectivas observaciones, no recibiendo ninguna por parte de los proponentes. X). Que previos los estudios del caso, efectuado el análisis comparativo de las propuestas con base en los términos de referencia, en atención a los criterios de selección objetiva y de la propuesta técnica y económicamente mas favorable, la comisión eliminó al proponente CIZALLA LTDA al advertir que el capital de trabajo es menor del 20% del presupuesto oficial, además de no cumplir con la liquidez mínima establecida en los términos de referencia y determinó en principio un orden de elegibilidad así: 1). UNION TEMPORAL OBRESAN. 2) AVILA LTDA. Y). Que del resultado de la evaluación final respecto de la totalidad de las propuestas, la presentada por la firma UNION TEMPORAL OBRESAN, obtuvo mayor puntaje y de acuerdo con el orden de elegibilidad determinado por el comité evaluador es la más favorable a los intereses de la institución. Z). que mediante resolución No 546 de 2005 la Universidad del Magdalena adjudicó la convocatoria No 001 de 2005 a la UNION TEMPORAL OBRESAN, realizada hasta por un valor máximo de **DOS MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TREINTA PESOS M/C. (\$ 2'627'648.030.00)**. En consideración a lo anterior las partes proceden a suscribir dentro de los términos previstos al presente contrato, el cual se rige por las siguientes cláusulas; **CLAUSULA PRIMERA:** la Universidad y el Contratista acuerdan celebrar el presente contrato de obras públicas para la construcción del edificio "B" de salones de la Universidad. **CLAUSULA**

258103
000080

SEGUNDA: DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO: Forman parte integrante del Contrato los siguientes documentos: a) los términos de referencia expedidos por la universidad. b) El certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 0002524 de la vigencia 2005. c) la Resolución No 431 de 2005 por la cual se ordena la apertura de la convocatoria 001 de 2005. d) la Resolución No 486 de 2005 mediante el cual se conforma el comité evaluador. e) el acta de evaluación de las propuestas presentadas. f) las comunicaciones a los oferentes dando a conocer los resultados de la evaluación. g) la Resolución No 546 de 2005 por medio de la cual se adjudica la convocatoria 001 de 2005. h) las garantías exigidas por la universidad. i) la resolución de aprobación de garantías. j) los recibos de pagos de impuestos departamentales y de publicación en la gaceta oficial k) el acta de iniciación de actividades. l) los adendos u otrosí que se pacten durante la ejecución del contrato. m) los demás documentos que se produzcan en el desarrollo del Contrato.

CLAUSULA TERCERA: OBJETO: El objeto del presente contrato consiste en la construcción del edificio "B" de salones, en los términos, condiciones, plazos y estipulaciones que se prescriben en el presente documento, así como en los términos de referencia, y la propuesta presentada por el contratista el 18 de Noviembre de 2005 y los documentos anexos de acuerdo con las especificaciones técnicas y los valores unitarios expresados en la propuesta presentada, la cual para todos los efectos legales forman parte integral del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: OBLIGACIONES DE LA UNIVERSIDAD. La Universidad se compromete a:

1) realizar los pagos correspondientes para cubrir el costo del presente contrato en los términos señalados en el mismo. 2) suministrar toda la información necesaria para el cumplimiento de objeto del contrato.

CLAUSULA QUINTA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Además de la obligaciones estipuladas en el capítulo III Numeral 3.4 de los términos de referencia, el contratista se compromete a:

1) ejecutar en forma idónea y oportuna la obra contratada. 2) pagar la publicación en la gaceta departamental y los demás impuestos que se generen en virtud del presente contrato. 3) entregar la obra en los términos y plazos estipulados en este contrato de acuerdo con las especificaciones técnicas y términos de referencia determinados en la convocatoria. 4) Será responsable hasta por culpa leve de todas las actividades que desarrolle en cumplimiento del objeto del presente contrato. 5) suministrar y colocar una valla de información rectangular de 2.5 x 5.0 Mts, la cual contendrá como mínimo, el nombre del contratista, el objeto del contrato, el sitio y valor de la obra, el nombre del interventor, el acto de aprobación de la obra por la Curaduría Urbana, y destacando a la Universidad del Magdalena como entidad contratante. 6) abrir con los fondos provenientes del anticipo una cuenta bancaria exclusiva a nombre de la obra. 7) Las demás consignadas en los términos de referencia y en este contrato, así como en sus documentos anexos.

CLAUSULA SEXTA: INTERVENTORIA TECNICA: Para efectos del presente contrato, la Universidad designará un interventor, quien ejercerá las funciones de interventoría, supervisión y vigilancia de los anticipos, de conformidad con los diseños y términos, para la ejecución de la obra contratada. El nombre del interventor será comunicado por escrito al contratista y podrá contar con la asesoría requerida cuando así lo estime la Universidad. El interventor tendrá las funciones de supervisión y vigilancia de las actividades y obligaciones del contratista, verificando el cumplimiento oportuno y eficaz de las mismas en los aspectos técnicos y operativos y en consecuencia está autorizado para impartir instrucciones y órdenes al contratista así como para exigirle la información que considere necesaria. El interventor deberá elaborar el acta de liquidación y dar su visto bueno antes de las firmas de las partes. Las pruebas técnicas que determine el interventor serán a cargo del contratista.

CLAUSULA SEPTIMA: VALOR: El valor total del presente contrato para todos los efectos legales y fiscales es de DOS MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS M/C (\$2'622'392.730.00).

CLAUSULA OCTAVA: FORMA DE PAGO: La Universidad pagará al contratista el valor del

contrato así: 1) El 50% en calidad de anticipo. Esta suma se entregará dentro

de los cinco (5) días siguientes a la aprobación de la garantía única. El valor entregado como anticipo se amortizará mediante deducciones que aplicarán a las actas parciales de entrega en las que se descontará el porcentaje del anticipo hasta que su valor quede totalmente amortizado. 2) El saldo mediante el pago de cuentas de cobro mensuales de acuerdo con el avance de la obra, previa comprobación por parte del interventor, hasta completar el 80% del valor del contrato. 3) El 20% restante dentro de los diez (10) días siguientes a la terminación y firma del acta de liquidación final, y del recibo a satisfacción del objeto del contrato, previo el otorgamiento por parte del contratista de la póliza para amparar la estabilidad de la obra. **PARAGRAFO UNICO: REAJUSTE DE PRECIOS:** Durante la vigencia del presente contrato los precios unitarios relacionados de la propuesta se mantendrán inmodificables y sobre ellos no se efectuarán ajustes, sin embargo las partes podrán suscribir contratos adicionales en los que se pacten mayores cantidades de obra, las cuales deberán estar previamente autorizadas por la universidad. **CLAUSULA NOVENA: TERMINO DE DURACIÓN:** El término de duración del presente contrato será de doscientos cuarenta (240) días calendario a partir de la entrega del anticipo y de la suscripción del acta de iniciación de obra. **PARAGRAFO UNICO: CUIDADO DE LA OBRA:** Desde la suscripción del acta de iniciación de las obras hasta la entrega final de la misma, el contratista asumirá a entera responsabilidad su cuidado. En caso de que se produzca daño, pérdida o desperfecto de la obra el contratista deberá repararlas a su costa, de manera que a la entrega definitiva a la Universidad las obras estén en buenas condiciones y estado, de conformidad con las condiciones presentes en el contrato y los términos de referencia. Dentro del mismo término, la señalización y el mantenimiento del tránsito en el sector donde se ejecuta la obra, son obligaciones a cargo del contratista, quien será responsable por los perjuicios causados a terceros o a la Universidad por falta de señalización, por deficiencia en ella, o por no tomar las medidas de seguridad industrial y/o de obra, y las restricciones a la circulación requeridas. **CLAUSULA DECIMA: LIQUIDACIÓN:** El presente contrato se liquidará ordinariamente de común acuerdo entre las partes una vez cumplidas por cada una de las mismas las obligaciones nacidas del mismo. **CLAUSULA DECIMO PRIMERA: IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL:** Para garantizar el pago del presente contrato la universidad ha expedido el certificado de disponibilidad No. 0002524 correspondiente a la vigencia fiscal del año 2005. **CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: GARANTIA UNICA:** El contratista se compromete a otorgar garantía única expedida por un banco o una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia la cual deberá amparar los siguientes riesgos: a) **DE CUMPLIMIENTO:** Por un valor equivalente al 20% del valor del contrato, con una vigencia igual a la duración de este y cuatro (4) meses más que incluye el valor de la cláusula penal. b) **DE MANEJO Y BUENA INVERSIÓN DEL ANTICIPO:** por una cuantía igual al cien (100%) por ciento del valor del anticipo, con una vigencia igual al término del contrato y cuatro (4) meses más. c) **GARANTÍA DE ESTABILIDAD DE OBRA:** por una cuantía igual al veinte (20%) por ciento del valor del contrato, con una vigencia igual al término mismo y cinco años más a partir de la fecha del acta de recibido final de la obra. d) **PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES:** por valor equivalente a un cinco (5%) por ciento del valor total del contrato y de una vigencia igual al término de duración del mismo y tres años más a partir del recibo definitivo de la obra. e) **RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL:** por valor equivalente al diez (10%) por ciento del valor total del contrato y con una vigencia igual al término de duración del mismo y dos años más. **CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: PUBLICACIÓN:** el presente contrato deberá ser publicado en la gaceta departamental por cuenta del contratista lo cual se entenderá surtida por la prestación del recibo de pago. **CLÁUSULA DÉCIMO CUARTO: INAHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD:** el contratista declarará bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con su firma, que no se haya incurrido en ninguna incompatibilidad e inhabilidad legal que impida suscribir el presente contrato. **CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: CADUCIDAD:**

la Universidad podrá declarar la caducidad del presente contrato por cualquiera de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones, que afecten de manera grave y directa el objeto del mismo, y/o se evidencia que pueda conducir a su paralización, o cuando se presente alguna de las causales previstas en la Ley 80 de 1993. Ocurrida estas, y mediante resolución motivada, se tendrá como consecuencia a partir de la ejecutoria de la resolución, dar por terminado el presente contrato y proceder a su liquidación.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: MULTAS: en caso de mora o incumplimiento parcial de los plazos y condiciones estipulados en el contrato, la Universidad impondrá al contratista multas diarias a razón del uno (1%) por ciento del contrato, sin que supere el veinte (20) por ciento del valor total del mismo y sin perjuicio de que se haga efectiva la cláusula penal. El valor de las multas podrá ser tomado de la garantía constituida o descontado de las cuentas que por cualquier concepto adeude la Universidad. La imposición de las multas la hará el rector de la Universidad, mediante la resolución motivada que notificará al interesado conforme al Código Contencioso Administrativo y demás normas concordantes.

CLAUSULA DECIMO SEPTIMA: CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: en el presente contrato se estipula como cláusula penal pecuniaria, la suma equivalente al diez por ciento 10% del valor total del contrato, lo cual podrá hacerse efectiva directamente por la Universidad, en caso de incumplimiento total del contrato. El valor de la cláusula penal pecuniaria que se haga efectiva, se considerará como pago parcial de los perjuicios causados a la Universidad del Magdalena, y esta suma podrá ser tomada de la garantía única constituida o descontada de las cuentas, que por cualquier concepto, le adeude la Universidad del Magdalena al contratista. Si esto no fuera posible, se cobrará por jurisdicción coactiva.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: CLAUSULA COMPROMISORIA: cualquier diferencia relacionada con la ejecución de este contrato asociada a aspectos técnicos será resuelta a través de amigables componedores de acuerdo con los procedimientos establecidos en el Decreto 2279 de 1989, la Ley 23 de 1991, el Decreto 2651 de 1991, la Ley 446 de 1998, el Decreto 1818 de 1998, y reglamentación similar, que serán seleccionados de común acuerdo por las partes. La amigable composición tendrá lugar en las instalaciones de la Universidad del Magdalena. Cada parte podrá acudir a este mecanismo, mediante aviso previo a la otra parte. El procedimiento de la amigable composición se regirá por las siguientes reglas: las partes deberán presentar sus alegatos y documentos que los sustenten en términos de diez (10) días hábiles contados desde la fecha de aviso de la contraparte. Los amigables componedores a su vez tendrán plazo máximo de veinte (20) días hábiles para resolver las disputas por escrito, los cuales se contarán a partir del día siguiente del término previsto en la parte anterior. Los alegatos deberán contener: una explicación de los fundamentos técnicos y contractuales que sustenten la posición de la respectiva parte. Las peticiones que haga la respectiva parte a los amigables componedores para resolver las diferencias. Cada parte deberá cooperar en la realización de cualquier investigación que los amigables componedores efectúen relacionada con la disputa en cuestión. Las decisiones adoptadas por los amigables componedores como resultado de la amigable composición tendrán fuerza vinculante para las partes de acuerdo con la ley. Los gastos que ocasionen la intervención de los amigables componedores serán cubiertos por la parte que resulte vencida. Cualquier divergencia que surja entre las partes como ocasión de la celebración, ejecución o liquidación de este contrato, no sea posible solucionar amigablemente, serán dirimidos por un tribunal de arbitramento de conformidad con las disposiciones antes citadas. Las disputas relacionadas con la aplicación y los efectos de las cláusulas de caducidad, terminación unilateral e interpretación unilateral y modificación unilateral no podrán ser sometidas a arbitramento. La intervención de los amigables componedores o tribunal de arbitramento no suspenderá la ejecución del contrato salvo que aquellos aspectos cuya ejecución dependa necesariamente de la solución de la controversia.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERAL. Al presente contrato le son aplicables las

000083

Cláusulas Exorbitantes que pueden ser utilizadas por la administración de conformidad con las normas de carácter general que reglamentan la Contratación Estatal. **PARÁGRAFO ÚNICO.** Las estipulaciones del presente contrato prevalecen sobre las condiciones y términos de los demás documentos que la integran, estos se consideran complementarios de aquel entre los mismos y deberán interpretarse en su conjunto en caso de ambigüedad o discrepancias. **CLAUSULA VIGÉSIMA. GASTOS:** los gastos que se ocasionen en la legalización y perfeccionamiento de este contrato, como la publicidad y demás, corren por cuenta del contratista. **CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: PERFECCIONAMIENTO, VALIDEZ Y EJECUCION:** El presente contrato se entiende perfeccionado con la firma de las partes y requiere para su validez la publicación en la gaceta departamental por parte del **CONTRATISTA**, la certificación de disponibilidad presupuestal por parte de la Universidad del Magdalena; se requiere para su ejecución la aprobación por parte de la Universidad del Magdalena de la garantía única de cumplimiento y el pago de los impuestos a que halla lugar por parte del contratista. **CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA:** El **CONTRATISTA** deberá acreditar a través de cada uno de sus miembros integrantes el cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley 789 de 2002, art. 50, sobre el pago durante los seis meses anteriores a la suscripción del contrato, y durante el término de ejecución, de los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones, ARP, Cajas de Compensación, ICBF y SENA, si aplican. **CLAUSULA VIGÉSIMA TERCERA:** Las exigencias legales para este tipo de contratos, y aplicables a los entes, autónomos universitarios, que no estén contempladas en el presente documento, o que surjan con posterioridad a su firma, dentro del período de ejecución del mismo, se entenderán incorporadas, y harán parte integral del mismo. **CLAUSULA VIGÉSIMA CUARTA:** Para todos los efectos legales y fiscales que se relacionen con este contrato las partes acuerdan como domicilio contractual la ciudad de Santa Marta, para constancia se firma el presente contrato a los

30 DIC. 2005 ✓



CARLOS EDUARDO CAICEDO OMAR
LA UNIVERSIDAD



GERMAN VILLANUEVA CALDERON
EL CONTRATISTA



000011

ACUERDO DE UNION TEMPORAL

En la ciudad de Barranquilla a los Quince (15) días del mes de Noviembre del año 2.005, entre quienes suscriben este documento, de una parte J.P.G & CIA S.A., sociedad legalmente constituida y con domicilio principal en Barranquilla, representada legalmente por JUAN PABLO GONZALEZ ROSALES, mayor, domiciliado en Barranquilla, identificado con la cédula de ciudadanía No. 8.708.745 expedida en Barranquilla, quien obra en su calidad de Gerente y Representante Legal de la misma, de otra parte RICARDO LUIS CANABAL GUZMAN, mayor, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.872.383 expedida en Montería, quien actúa en nombre propio y por la otra parte GERMAN VILLANUEVA CALDERON, mayor, identificado con la cédula de ciudadanía No. 12.547.660 expedida en Santa Marta, quien actúa en nombre propio. Han decidido conformar una UNION TEMPORAL, la cual se denominará UNION TEMPORAL OBRESAN - OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA y se regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA: OBJETO Y ALCANCE: El objeto de la UNION TEMPORAL consiste en la presentación conjunta a la UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA de una propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución del contrato para CONSTRUCCIÓN EDIFICIO "B" DE SALONES PARA LA UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA. La Unión Temporal se compromete en caso de adjudicación a la realización a cabalidad de los trabajos objeto del contrato dentro de las normas exigidas por la Universidad y en general al cumplimiento de las obligaciones que se deriven de su ejecución. Las partes se encargarán de elaborar la Propuesta y se suministrarán el mutuo apoyo técnico, logístico y administrativo que se requiera para dicha presentación.

SEGUNDA: NOMBRE Y DOMICILIO. La UNION TEMPORAL se denominará UNION TEMPORAL OBRESAN - OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA, y su domicilio será la ciudad de Barranquilla con dirección: Calle 77B # 57 - 141 Oficina 301

TERCERA: TERMINOS Y EXTENSIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE ACUERDO CON LA LEY.- La participación de cada una de las partes que conforman el cien por ciento (100%), de la UNION TEMPORAL, no podrá ser modificada sin el consentimiento previo de la UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA y serán distribuidas de la siguiente forma:

000011

000012

INTEGRANTES	PORCENTAJE
J.P.G & CIA S.A.	34%
RICARDO LUIS CANABAL GUZMAN	33%
GERMAN VILLANUEVA CALDERON	33%

CUARTA: OBLIGACIONES Y SANCIONES: Los miembros de la UNION TEMPORAL responderán solidariamente con cada uno de los compromisos que esta celebre con la UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA. Las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los miembros de la UNION TEMPORAL, conforme a lo establecido en la Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios.

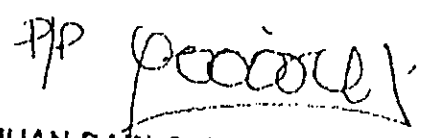
QUINTA: DURACIÓN: La duración de la UNION TEMPORAL en caso de salir favorecida con la adjudicación será igual al término de ejecución y liquidación del contrato y un año más. En todo caso la UNION TEMPORAL durará todo el término necesario para atender las garantías prestadas.

SEXTA: CESION: No se podrá ceder en todo o en parte la participación de alguno de los integrantes de la UNION TEMPORAL a favor de otro integrante de la misma Unión o a favor de terceros, sin la aprobación previa de la UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA quien se reserva la facultad de aprobar dicha cesión.

SÉPTIMA: REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNION TEMPORAL. La UNION TEMPORAL designa como Representante Legal de ésta, al señor **PEDRO GUILLERMO SILVA CLÉMOW**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 73.573.617 de Cartagena, el cual está facultado para contratar, comprometer, negociar, y representar a la UNION TEMPORAL y como Suplente al señor **GERMAN VILLANUEVA CALDERON**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 12.547.660 de Santa Marta, quien podrá actuar con las mismas facultades del principal.

OCTAVA: CLAUSULAS OPCIONALES: El documento podrá contener las cláusulas opcionales que los asociados consideren pertinentes, siempre y cuando no contravengan lo dispuesto en la Ley 80/93

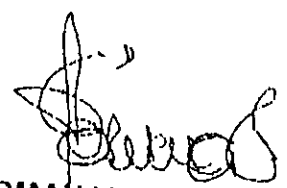
Para constancia y aprobación, el presente documento se firma en la ciudad de Barranquilla, a los Quince (15) días del mes de Noviembre de 2.005 por quienes intervinieron.



JUAN PABLO GONZALEZ ROSALES
C.C. No. 8.708.745 de Barranquilla
Representante Legal
J.P.G & CIA S.A.
NIT. 800.193.032-5



RICARDO LUIS CANABAL GUZMAN
C.C. No. 6.872.383 de Montería



GERMAN VILLANUEVA CALDERON
C.C. No. 12.547.666 de Santa Marta.



Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición

AUDIENCIA DESIGNACION DE ARBITROS

REF: TRIBUNAL DE J.P.G. & CIA S.A., GERMAN VILLANUEVA CALDERÓN y RICARDO LUIS CANABAL GUZMAN MIEMBROS DE LA UNION TEMPORAL OBRESAN- OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA CON LA UNIVERSIAD DEL MAGDALENA

En Santa Marta, siendo las dos y treinta de la tarde (2:30 P.M.) del día veinticuatro (24) de mayo de dos mil diez (2.010), se da inicio a la presente diligencia, en las Instalaciones del Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Santa Marta, por parte de su Directora Doctora **BIBIANA M. OVALLE DE ANDREIS**.

Estuvieron presentes en calidad de invitados:

GERMAN VILLANUEVA CALDERON, mayor de edad, vecino de esta ciudad e identificado con la cedula de ciudadanía No. 12.547.660 de Santa Marta, **GABRIEL FRANCISCO GONZALEZ BARRAZA**, identificado con la cedula de ciudadanía No. 12.609.489 de Ciénaga y T.P. No. 41.964 de Minjusticia, en su condición de apoderado especial de **J.P.G. & CIA S.A.**, **GERMAN VILLANUEVA CALDERON** y **RICARDO LUIS CANABAL GUZMAN** miembros de la unión temporal **OBRESAN- OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA**, conforme al poder, certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Santa Marta (operación nacional), al documento de fecha quince (15) de Noviembre de dos mil cinco (2005) y el Doctor **CARLOS BECERRA VARONA**, identificado con la cedula de ciudadanía No. 2.943.586 de Bogotá y T.P. No. 1785 del C.S. de la J., en su condición de apoderado especial del **LA UNIVERSIAD DEL MAGDALENA**, lo anterior, conforme al poder, la copia autenticada del acuerdo superior No. 019 de 2008 y del acta de posesión.

La Directora del Centro explica a los presentes que de acuerdo con lo estipulado en el contrato de obras No. 000146 de fecha 30 de diciembre de 2005, en la **CLAUSULA DECIMA OCTAVA** que a su letra dice: **"CLAUSULA COMPROMISORIA: Cualquier diferencia relacionada con la ejecución de este contrato asociada a aspectos técnicos será resuelta a través de amigables componedores de acuerdo con los procedimientos establecidos en el Decreto 2279 de 1989, la Ley 23 de 1991, el**

Avenida del Libertador No. 13-94
Tels. 4230828 - 4232652 Ext. 131 y 127 - 4319682
Fax: (095) 4214777
Santa Marta, D.T.C.H. - Colombia



VIGILADO Ministerio del Interior y de Justicia

Decreto 2651 de 1991, la Ley 446 de 1998, el Decreto 1818 de 1998, y reglamentación similar, que serán seleccionados de común acuerdo por las partes. La amigable composición tendrá lugar en las instalaciones de la Universidad del Magdalena. Cada parte podrá acudir a este mecanismo, mediante aviso previo a la otra parte. El procedimiento de la amigable composición se regirá por las siguientes reglas: las partes deberán presentar sus alegatos y documentos que los sustenten en términos de diez (10) días hábiles contados desde la fecha de aviso de la contraparte. Los amigables componedores a su vez tendrán plazo máximo de veinte (20) días hábiles para resolver las disputas por escrito, los cuales se contarán a partir del día siguiente del término previsto en la parte anterior. Los alegatos deberán contener: Una explicación de los fundamentos técnicos y contractuales que sustenten la posición de la respectiva parte. Las peticiones que haga la respectiva parte a los amigables componedores para resolver las diferencias. Cada parte deberá cooperar en la realización de cualquier investigación que los amigables componedores efectúen relacionada con la disputa en cuestión. Las decisiones adoptadas por los amigables componedores como resultado de la amigable composición tendrán fuerza vinculante para las partes de acuerdo con la ley. Los gastos que ocasionen la intervención de los amigables componedores serán cubiertos por la parte que resulte vencida. Cualquier divergencia que surja entre las partes como ocasión de la celebración, ejecución o liquidación de este contrato, no sea posible solucionar amigablemente, serán dirimidos por un tribunal de arbitramento de conformidad con las disposiciones antes citadas. Las disputas relacionadas con la aplicación y los efectos de las cláusulas de caducidad, terminación unilateral e interpretación unilateral y modificación unilateral no podrán ser sometidas a arbitramento. La intervención de los amigables componedores o tribunal de arbitramento no suspenderá la ejecución del contrato salvo que aquellos aspectos cuya ejecución dependa necesariamente de la solución de la controversia".

Revisada la cláusula compromisoria es procedente que las partes designen conjuntamente los tres (3) árbitros que dirimirán dicha controversia, conforme lo establece el artículo 122 del Decreto 1818 de 1998.

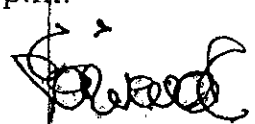
Las partes, con ocasión de la convocatoria efectuada por el Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Santa Marta, designaron conjuntamente los siguientes árbitros:

- 1.- DIANA PATRICIA BOVEA MENDINUETA
- 2.- ROSA GARCIA DE POLO
- 3.- MIGUEL ANGEL POLO CAMPO

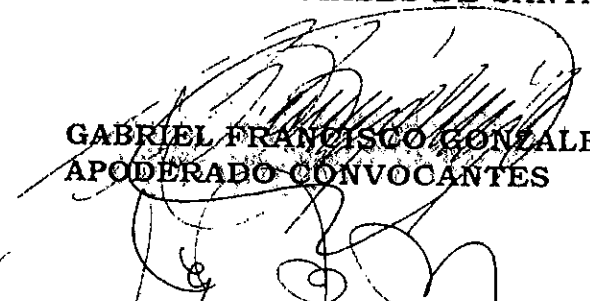
Copia de ésta acta se remitirá al Procurador No. 43 ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Magdalena, para su conocimiento y fines pertinentes.

El Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición comunicará en la oportunidad legal al Ministerio del Interior y de Justicia los nombramientos, en los términos y condiciones establecidos.

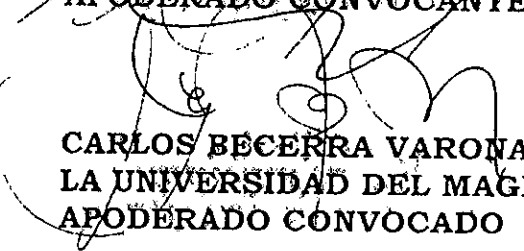
No siendo otro el motivo se suscribe por los intervinientes en la ciudad de Santa Marta, hoy veinticuatro (24) de Mayo de dos mil diez (2010), siendo las 3:00 p.m.




GERMAN VILLANUEVA CALDERON
CONVOCANTE
MIEMBRO DE LA UNION TEMPORAL OBRESAN
-OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA



GABRIEL FRANCISCO GONZALEZ BARRAZA
APODERADO CONVOCANTES



CARLOS BECERRA VARONA
LA UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA
APODERADO CONVOCADO



BIBIANA M. OVALLE DE ANDREIS
DIRECTORA CENTRO DE ARBITRAJE,
CONCILIACION Y AMIGABLE COMPOSICION



Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición

AUDIENCIA DESIGNACION DE ARBITROS

REF: TRIBUNAL DE J.P.G. & CIA S.A., GERMAN VILLANUEVA CALDERÓN y RICARDO LUIS CANABAL GUZMAN MIEMBROS DE LA UNION TEMPORAL OBRESAN- OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA CON LA UNIVERSIAD DEL MAGDALENA

En Santa Marta, siendo las nueve de la mañana (9:00 A.M.) del día ocho (8) de julio de dos mil diez (2.010), se da inicio a la presente diligencia, en las Instalaciones del Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Santa Marta, por parte de su Directora Doctora **BIBIANA M. OVALLE DE ANDREIS**.

Estuvieron presentes en calidad de invitados:

GABRIEL FRANCISCO GONZALEZ BARRAZA, identificado con la cedula de ciudadanía No. 12.609.489 de Ciénaga y T.P. No. 41.964 de Minjusticia, en su condición de apoderado especial de **J.P.G. & CIA S.A., GERMAN VILLANUEVA CALDERON y RICARDO LUIS CANABAL GUZMAN** miembros de la unión temporal **OBRESAN - OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA**, conforme al poder, certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Santa Marta (operación nacional) y al documento de fecha quince (15) de Noviembre de dos mil cinco (2005), denominado: "Acuerdo de Unión Temporal", el Doctor **CARLOS BECERRA VARONA**, identificado con la cedula de ciudadanía No. 2.943.586 de Bogotá y T.P. No. 1785 del C.S. de la J., en su condición de apoderado especial del **LA UNIVERSIAD DEL MAGDALENA**, lo anterior, conforme al poder, la copia autenticada del acuerdo superior No. 019 de 2008 y del acta de posesión y **ALVARO CORREA NOGUERA**, Procurador No. 43 ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Magdalena.

La Directora del Centro explica a los presentes que la doctora **ROSA GARCIA DE POLO**, mediante comunicación radicada en esta entidad el día veintiocho (28) de mayo de dos mil diez (2010), bajo el No. 19047, manifestó la imposibilidad de aceptar la designación que se le hiciera para resolver las controversias del arbitraje de la referencia, dándose lectura en esta audiencia del mencionado escrito.

Avenida del Libertador No. 13194
Tels 4230828 - 4232652 Ext 131 y 127 4319682
Fax (095) 4214777
Santa Marta D.T.C.H. Colombia



VIGILADO Ministerio del Interior y de Justicia

Por lo anterior, se procedió a fijar nueva fecha y hora para la audiencia de designación de árbitro.

La **CLAUSULA DECIMA OCTAVA** del contrato de obras No. 000146 de fecha 30 de diciembre de 2005, señala: "**CLAUSULA COMPROMISORIA:** Cualquier diferencia relacionada con la ejecución de este contrato asociada a aspectos técnicos será resuelta a través de amigables componedores de acuerdo con los procedimientos establecidos en el Decreto 2279 de 1989, la Ley 23 de 1991, el Decreto 2651 de 1991, la Ley 446 de 1998, el Decreto 1818 de 1998, y reglamentación similar, que serán seleccionados de común acuerdo por las partes. La amigable composición tendrá lugar en las instalaciones de la Universidad del Magdalena. Cada parte podrá acudir a este mecanismo, mediante aviso previo a la otra parte. El procedimiento de la amigable composición se regirá por las siguientes reglas: las partes deberán presentar sus alegatos y documentos que los sustenten en términos de diez (10) días hábiles contados desde la fecha de aviso de la contraparte. Los amigables componedores a su vez tendrán plazo máximo de veinte (20) días hábiles para resolver las disputas por escrito, los cuales se contarán a partir del día siguiente del término previsto en la parte anterior. Los alegatos deberán contener: Una explicación de los fundamentos técnicos y contractuales que sustenten la posición de la respectiva parte. Las peticiones que haga la respectiva parte a los amigables componedores para resolver las diferencias. Cada parte deberá cooperar en la realización de cualquier investigación que los amigables componedores efectúen relacionada con la disputa en cuestión. Las decisiones adoptadas por los amigables componedores como resultado de la amigable composición tendrán fuerza vinculante para las partes de acuerdo con la ley. Los gastos que ocasionen la intervención de los amigables componedores serán cubiertos por la parte que resulte vencida. Cualquier divergencia que surja entre las partes como ocasión de la celebración, ejecución o liquidación de este contrato, no sea posible solucionar amigablemente, serán dirimidos por un tribunal de arbitramento de conformidad con las disposiciones antes citadas. Las disputas relacionadas con la aplicación y los efectos de las cláusulas de caducidad, terminación unilateral e interpretación unilateral y modificación unilateral no podrán ser sometidas a arbitramento. La intervención de los amigables componedores o tribunal de arbitramento no suspenderá la ejecución del contrato salvo que aquellos aspectos cuya ejecución dependa necesariamente de la solución de la controversia".

Revisada la cláusula compromisoria es procedente que las partes designen conjuntamente el árbitro que reemplace a la inicialmente designada para dirimir dicha controversia, conforme lo establece el artículo 122 del Decreto 1818 de 1998.

Las partes, con ocasión de la convocatoria efectuada por el Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Santa Marta, designaron conjuntamente el siguiente árbitro:

PRINCIPAL

JUAN ALBERO POLO FIGUEROA

SUPLENTE


CAMILO DAVID HOYOS

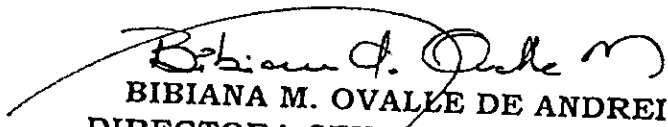
El Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición comunicará en la oportunidad legal al Ministerio del Interior y de Justicia el nombramiento, en los términos y condiciones establecidos.

No siendo otro el motivo se suscribe por los intervinientes en la ciudad de Santa Marta, hoy ocho (8) de Julio de dos mil diez (2010), siendo las 9:30 a.m.


GABRIEL FRANCISCO GONZALEZ BARRAZA
APODERADO CONVOCANTES


CARLOS BECERRA VARONA
LA UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA
APODERADO CONVOCADO


ALVARO CORREA NOGUERA
PROCURADOR No. 43
ANTE EL TRIBUNAL CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA


BIBIANA M. OVALLE DE ANDREIS
DIRECTORA CENTRO DE ARBITRAJE,
CONCILIACION Y AMIGABLE COMPOSICION



Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición

ACTA No. 1
AUDIENCIA DE INSTALACION

REF: TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO DE J.P.G. & CIA S.A., GERMÁN VILLANUEVA CALDERÓN y RICARDO LUIS CANABAL GUZMAN, INTEGRANTES DE LA UNION TEMPORAL OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA -OBRESAN- con la UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA.

En Santa Marta, a los tres (3) días del mes de Agosto del año dos mil diez (2.010), siendo las dos y treinta de la tarde (2:30 p.m.), en el Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Santa Marta, se dio comienzo a la Audiencia de Instalación del Tribunal de Arbitramento que dirimirá las diferencias surgidas entre: J.P.G. & CIA S.A., GERMÁN VILLANUEVA CALDERÓN y RICARDO LUIS CANABAL GUZMAN, INTEGRANTES DE LA UNION TEMPORAL OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA -OBRESAN- con UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA.

Se hicieron presentes los Doctores: DIANA PATRICIA BOVEA MENDINUETA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 57.438.474 de Santa Marta y Tarjeta Profesional N° 90.265 del Consejo Superior de la Judicatura, JUAN ALBERTO POLO FIGUEROA, identificado con la cédula de ciudadanía N° 159526 de Bogotá y Tarjeta Profesional N° 3547 del Consejo Superior de la Judicatura, MIGUEL ANGEL POLO CAMPO, identificado con la cédula de ciudadanía N° 8.663.290 de Barranquilla y Tarjeta Profesional N° 60.369 del Consejo Superior de la Judicatura, designados conjuntamente por las partes, quienes aceptaron las nominaciones, dentro del término legal; el Doctor GABRIEL FRANCISCO GONZÁLEZ BARRAZA, identificado con la cedula de ciudadanía N° 12.609.489

Avance de la audiencia	3:30		
4:30 p.m.	4:30		
5:00 p.m.	5:00		

772 117

de Ciénaga y Tarjeta Profesional N° 41.964 del Ministerio de Justicia, en calidad de apoderado de J.P.G. & CIA S.A., **GERMÁN VILLANUEVA CALDERÓN**, quien se encuentra presente y se identifica con la cédula de ciudadanía número 12547660 de Santa Marta y **RICARDO LUIS CANABAL GUZMAN**, **INTEGRANTES DE LA UNION TEMPORAL OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA -OBRESAN-**, conforme al poder que obra en el expediente y documento de fecha quince (15) de noviembre de dos mil cinco (2005), el cual contiene la conformación de la Unión Temporal; el Doctor **CARLOS EUGENIO BECERRA VARONA**, identificado con la cedula de ciudadanía N°2.943.586 de Bogotá y Tarjeta Profesional N° 1785 del Consejo Superior de la Judicatura, en su condición de apoderado especial de la **UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA**, e **IVETH CASTAÑEDA DUARTE**, Procurador N° 43 ante el Tribunal Administrativo del Magdalena.

Igualmente, se hizo presente la Directora del Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Santa Marta, doctora **BIBIANA M. OVALLE DE ANDREIS**, con el fin de entregar las actuaciones surtidas hasta el momento.

OBJETO:

Instalar el Tribunal de Arbitramento.

Designar Presidente.

Designar Secretario.

Reconocer personería jurídica a los apoderados de las partes.

Decidir sobre la admisión o inadmisión de la demanda

Fijar fecha para la próxima audiencia.

DESARROLLO:

1.- La Directora del Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Santa Marta, hace entrega oficial al Tribunal del expediente contentivo de la solicitud de convocatoria e integración de tribunal de arbitramento.

Luego de recibir el Tribunal de parte de la Directora del Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Santa Marta la documentación contentiva de la solicitud de convocatoria e integración del tribunal de arbitramento, los árbitros lo declararon instalado, prometieron cumplir bien y éticamente con los deberes que su cargo les impone.

2.- El Tribunal designó como presidente a la Doctora **DIANA BOVEA MEDINUETA**, quien aceptó la designación.

3.- El Tribunal designó como Secretario al doctor **GUILLERMO ANTONIS DE LOS RIOS BERMUDEZ**, identificado con cédula de ciudadanía N° 12.562.437 de Santa Marta y Tarjeta Profesional N° 65.137 del Consejo Superior de la Judicatura, quien estando presente aceptó el cargo por esta audiencia.

A continuación, el tribunal profirió el siguiente auto:

AUTO No. 01:

Santa Marta, tres (03) de Agosto de dos mil diez (2010).

PRIMERO: Declarase legalmente instalado el Tribunal de Arbitraje, constituido para dirimir en derecho las controversias surgidas entre: **J.P.G. & CIA S.A., GERMÁN VILLANUEVA CALDERÓN y RICARDO LUIS CANABAL GUZMAN,**

72419

INTEGRANTES DE LA UNION TEMPORAL OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA -OBRESAN- con la UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA.

SEGUNDO: Reconózcase personería al doctor **GABRIEL FRANCISCO GONZÁLEZ BARRAZA**, identificado con la cedula de ciudadanía No. 12.609.489 de Ciénaga y Tarjeta Profesional N° 41 964 del Ministerio de Justicia, para que actúe en su condición de Apoderado de la Sociedad **J.P.G. & CIA S.A., GERMÁN VILLANUEVA CALDERÓN y RICARDO LUIS CANABAL GUZMAN**, **INTEGRANTES DE LA UNION TEMPORAL OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA -OBRESAN-.**

TERCERO: Reconózcase personería al Doctor **CARLOS EUGENIO BECERRA VARONA**, identificado con la cedula de ciudadanía N°2.943.586 de Bogotá y Tarjeta Profesional N° 1785 del Consejo Superior de la Judicatura, para que actúe en su condición de Apoderado de la **UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA.**

CUARTO: Fijar como lugar de funcionamiento del Tribunal y de la Secretaría del mismo las dependencias del Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Santa Marta, situadas en la Avenida del Libertador No. 13-94 Piso 2, teléfono No. (5) 4319682, fax No.4214777 y correo electrónico: conciliacionccsm@dialnet.net.co.

QUINTO: El Tribunal resolverá sobre gastos administrativos del arbitramento, honorarios de los árbitros y de la secretaria del Tribunal, una vez cuente con los suficientes elementos de juicio en relación con las pretensiones de la demanda y los medios de defensa que proponga la parte convocada, es decir, una vez que se trabee la relación jurídica procesal.

NOTIFÍQUESE:

La anterior providencia quedo notificada en estrados a la parte convocante y convocada.

Acto seguido y no habiéndose interpuesto recurso el Tribunal de Arbitramento procedió a desarrollar el trámite inicial del proceso arbitral comenzando por resolver sobre la admisión o inadmisión de la demanda presentada, para lo cual profiere el siguiente auto:

AUTO N° 02:

Santa Marta, tres (03) de Agosto de dos mil diez (2010).

CONSIDERACIONES:

Revisada la demanda presentada, procede el Tribunal a resolver lo concerniente a su admisión o inadmisión y observando que la misma no reúne los requisitos establecidos en el numeral 5 del Artículo 75 y numeral 1 del artículo 85 del Código de Procedimiento Civil, ya que las pretensiones no están debidamente determinadas, además no se especifica de manera detallada la cuantía de la demanda, por lo tanto,

RESUELVE:

PRIMERO: Inadmitase la Demanda presentada por J.P.G. & CIA S.A., GERMÁN VILLANUEVA CALDERÓN y RICARDO LUIS CANABAL GUZMAN, INTEGRANTES DE LA UNION TEMPORAL OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA -OBRESAN-, a fin de que el actor subsane los defectos señalados, en el término de cinco (5) días, so pena de rechazo a la luz del Art. 143 del C.C.A.

SEGUNDO: Señálese como nueva fecha para continuar la audiencia el 17 de agosto de la presente anualidad a las 4:00 p.m.

NOTIFÍQUESE

La anterior providencia quedo notificada en estrados a las partes. El Secretario manifiesta que contra el presente Auto no se interpusieron recursos, por lo cual éste queda ejecutoriado.

No siendo más el objeto de la presente audiencia, se da por terminada, firmándose el acta por quienes en ella intervinieron.

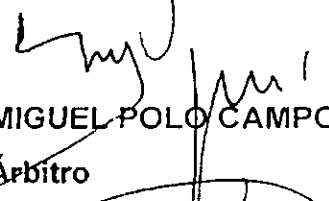
Ejecutoriado el proveído anterior, siendo las 3:10 p.m., cumplido el objeto de la audiencia, se da por terminada y para constancia, se firma por la totalidad de los asistentes.



DIANA BOVEA MENDIÑUETA
Presidente del Tribunal



JUAN POLO FIGUEROA
Árbitro



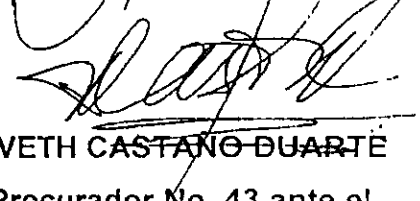
MIGUEL POLO CAMPO
Árbitro



GABRIEL GONZALEZ BARRAZA
Apoderado Convocante



CARLOS BECERRA VARONA
Apoderado Convocada



IVETH CASTAÑO DUARTE
Procurador No. 43 ante el
Tribunal Administrativo del Magdalena

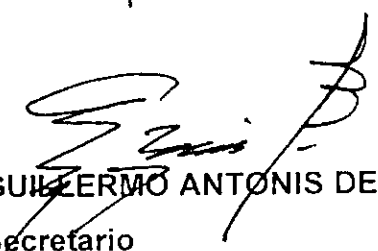


BIBIANA M. OVALLE DE ANDREIS

Directora Centro de Arbitraje, Conciliación
y Amigable Composición



GERMÁN VILLANUEVA CALDERÓN
Convocante.



GUILLERMO ANTONIS DE LOS RÍOS BERMÚDEZ
Secretario



Cámara de Comercio
SANTA MARTA

Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición

ACTA No. 4

REF: TRIBUNAL DE ARBITRAMIENTO DE J.P.G. & CIA S.A., GERMÁN VILLANUEVA CALDERÓN y RICARDO LUIS CANABAL GUZMAN, INTEGRANTES DE LA UNION TEMPORAL OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA -OBRESAN- con la UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA.

En Santa Marta, a los ocho (8) días del mes de Septiembre del año dos mil diez (2.010), siendo las cuatro de la tarde (4:00 p.m.), en el Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Santa Marta, se dio continuación a la Audiencia de Instalación del Tribunal de Arbitramento que dirimirá las diferencias surgidas entre: **J.P.G. & CIA S.A., GERMÁN VILLANUEVA CALDERÓN y RICARDO LUIS CANABAL GUZMAN, INTEGRANTES DE LA UNION TEMPORAL OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA -OBRESAN- con UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA.**

Se hicieron presentes **DIANA PATRICIA BOVEA MENDINUETA**, quien Preside, **JUAN ALBERTO POLO FIGUEROA**, arbitro, **MIGUEL ANGEL POLO CAMPO**, arbitro, **GUILLERMO DE LOS RIOS**, Secretario; y los Doctores **GABRIEL FRANCISCO GONZÁLEZ BARRAZA**, apoderado de **J.P.G. & CIA S.A.**, **GERMÁN VILLANUEVA CALDERÓN y RICARDO LUIS CANABAL GUZMAN, INTEGRANTES DE LA UNION TEMPORAL OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA -OBRESAN-**, y el Doctor **CARLOS EUGENIO BECERRA VARONA**, apoderado especial de la **UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA**.

El Secretario informa que el Dr. **CARLOS EUGENIO BECERRA VARONA**, apoderado de la parte demandada, el día 31 de Agosto de 2010, dentro del término legal conferido para ello, descorrió el traslado, contestando la demanda y presentando excepciones.

Acto seguido, el Tribunal profiere el siguiente Auto.

AUTO No. 1:

Habiendo presentado la parte demandada excepciones de mérito dentro del término legal, este Tribunal,

RESUELVE:

PRIMERO: Por Secretaria córrasele traslado a la parte demandante de las excepciones de mérito propuestas por la parte demandada.

SEGUNDO: El término de traslado es de cinco (5) días, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 399 del Código de Procedimiento Civil.

Avenida del Libertador No 13-94
Tels. 4230828 - 4232652 Ext. 131 y 127 - 4319682
Fax. (095) 4214777
Santa Marta, D.T.C.H. - Colombia



Certificado N° 2261-1

VIGILADO Ministerio del Interior y de Justicia

Notifíquese y Cúmplase.

Se deja constancia que las partes no interpusieron recurso.

El Secretario del Tribunal procede a correrle traslado a la parte convocante de las excepciones de mérito presentadas por la parte convocada, mediante constancia secretarial que se anexa al expediente.

Acto seguido, el suscrito Secretario informa al Tribunal que se surtió el trámite ordenado en el auto que antecede.

En este estado de la diligencia el Tribunal procede a dictar el siguiente auto:

AUTO No. 2:

Por tratarse de un Tribunal Legal, para efectos de determinar los honorarios y gastos de funcionamiento del mismo, debe darse aplicación a lo dispuesto en el artículo 12 de Decreto 4089 de 2007, en consecuencia y dado a que la parte accionante estimó la cuantía del litigio en **MIL OCHOCIENTOS MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS** (\$1.827.303.919.00), el Tribunal:

RESUELVE:

PRIMERO: Fijar los honorarios y gastos de funcionamiento del Tribunal.

SEGUNDO: Se fijan las siguientes sumas por conceptos de: (I) honorarios de los árbitros; (II) honorarios del Secretario; (III) gastos de funcionamiento y administración del Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Santa Marta; (IV) gastos de protocolización del laudo arbitral; y (V) gastos de funcionamiento y administración del Tribunal

Número	Concepto	Valor
I	Honorario por árbitros (Sin IVA)	\$27.409.558,00.
II	Honorarios para el secretario (Sin IVA)	\$13.704.779,00.
III	Gastos de Funcionamiento y Administración del Centro de Arbitraje Cámara de Comercio.	\$13.704.779,00.
IV	Gastos de Protocolización Laudo	\$10.000.000,00
V	Gastos de Funcionamiento y Administración Tribunal de Arbitramento	\$ 1.000.000,00
SUBTOTAL		\$120.638.232,00
	IVA Honorarios Secretario	\$ 2.192.764,00
	IVA Gastos de Funcionamiento y Administración del Centro de Arbitraje Cámara de Comercio	\$ 2.192.764,00
TOTAL IVA		\$ 4.385.528,00
TOTAL:		\$125.023.760,00

TERCERO: La suma decretada **CIENTO VEINTICINCO MILLONES VEINTITRES MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS** (\$125.023.760,00), deberá ser consignada por mitades, por cada una de las partes, dentro de los

términos señalados en el artículo 22 del Decreto 2279 de 1989, modificado por el artículo 105 de la Ley 23 de 1992 (Artículo 144 del Decreto 1818 de 1998), a órdenes de la Presidenta del Tribunal, doctora **DIANA BOVEA MENDINUETA**, en la cuenta de ahorros número 116200095010 del Banco DAVIVIENDA, abierta para tales efectos. No obstante, para efectos de la consignación inicial, las partes podrán dentro de los diez (10) días siguientes a la presente audiencia, entregar el valor correspondiente mediante cheque de gerencia a órdenes de la Presidenta del Tribunal, Dra. Diana Bovea Mendinueta.

CUARTO: Las anteriores sumas deberán ser inicialmente consignadas a título de anticipo ya que su causación tendrá lugar, de conformidad con la ley, el cincuenta por ciento (50%) cuando el Tribunal asuma competencia en la primera audiencia de trámite y, el saldo, cuando se profiera el laudo o por terminación del proceso por cualquier otra causa.

QUINTO: En cuanto a la partida de gastos de Administración del Centro, se advierte que la parte Convocante anticipó la suma de **UN MILLÓN CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS (\$1.194.800)**, incluido IVA al solicitar la integración del Tribunal de Arbitramento, valor que se deducirá de la suma a consignar por la parte convocante. Así mismo, se advierte a las partes que la Cámara de Comercio de Santa Marta, es una entidad responsable del IVA Régimen Común, es retenedora del IVA y es gran contribuyente del impuesto sobre la renta. Es igualmente, una entidad sin ánimo de lucro, por lo cual las partes deben abstenerse de efectuar retenciones.

SEXTO: Los gastos que se generen en la práctica de pruebas y expensas que se ocasionen dentro del proceso, se someterán a lo previsto en el artículo 389 del Código de Procedimiento Civil.

SEPTIMO: Se ordena la expedición de copias de esta providencia con destino a cada una de las partes, para la tramitación de los respectivos pagos.

OCTAVO: Señálase como fecha para la continuación de la audiencia el día treinta (30) de Septiembre de 2010, a la hora de las 4:00 P.M.

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE:

La anterior providencia quedó notificada en estrados.

Se deja constancia que las partes no interpusieron recurso.

No habiendo otro asunto que tratar se finaliza la presente audiencia, para constancia se firma, por quienes asistieron.


DIANA BOVEA MENDINUETA
Presidenta


JUAN POLO FIGUEROA
Árbitro



MIGUEL POLO CAMPO
Arbitro



GABRIEL GONZALEZ BARRERA
Apoderado Convocante



CARLOS BECERRA BARONA
Apoderado Convocada



GUILLERMO ANTONIS DE LOS RIOS BERMUDEZ
Secretaria

78227

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION TERCERA
SECRETARIA

Bogotá D.C., 28 de Mayo de 2012

Oficio No. C-12-413-D

Señor
Secretario Tribunal de Arbitramento
Avenida del Libertador No. 13 -94
Santa Marta – Magdalena

Ref · Expediente No. 110010326000201100064 01
(42218)
Actor: UNION TEMPORAL OBRESAN-OBRAS
ESPECIALES DE SANTA MARTA-, J.P.G. & CIA S.A. Y
OTROS

En cumplimiento de la providencia de 25 de abril de 2012, me permito devolver el expediente de la referencia, enviado a esta Corporación para conocer del recurso de apelación de laudo arbitral de 22/08/2011.

Consta de 9 cuadernos, el principal con 2833 folios útiles.

Con toda atención,


PAOLA ANDREA PEREZ BANGUERA
Secretaria

PAPB/maao

Calle 12 No. 7- 65 piso 2
Palacio de Justicia - Bogotá D.C.
Teléfono: 350 67 00 ext. 2221/22/23

24- 029361

Santa Marta, 27 AGO. 2012

Doctora
DIANA BOVEA MENDINUETA
Presidenta Tribunal de Arbitramento
Calle 10 No. 11 A - 12
Centro Comercial La Coquera
Santa Marta.

Ref: Expediente No. 110010326000201100064 01 - (42218)
Actor: J.P.G. & CIA S. A. y otros - Miembros de la Unión Temporal "Obresan"

Respetada Doctora:

El Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Tercera, a través de su Secretaria, Doctora Paola Andrea Pérez Banguera, mediante oficio No. C-12 - 413 - D., radicado en esta entidad el día primero (1) de agosto del presente año bajo el No. 23823, remitió el expediente de la referencia.

El mencionado expediente consta de nueve (9) cuadernos los cuales contienen un total de 2833 folios útiles.

Por lo anterior esta dirección envía el expediente antes referenciado para lo de su competencia.

Agradezco informe oportunamente la Notaria y el número de la Escritura Pública de protocolización del expediente, para nuestro conocimiento y fines pertinentes.

En el suministro de cualquier información adicional estaré presta a colaborarle gustosamente.

Atentamente,


BIBIANA M. OVALLE DE ANDREIS
Directora Centro de Arbitraje, Conciliación
Y Amigable Composición

Anexo. Lo Anunciado
Bibiana O /32-24-20

*Recibido Diana Bovea
Fecha: Agosto 27 - 2012*